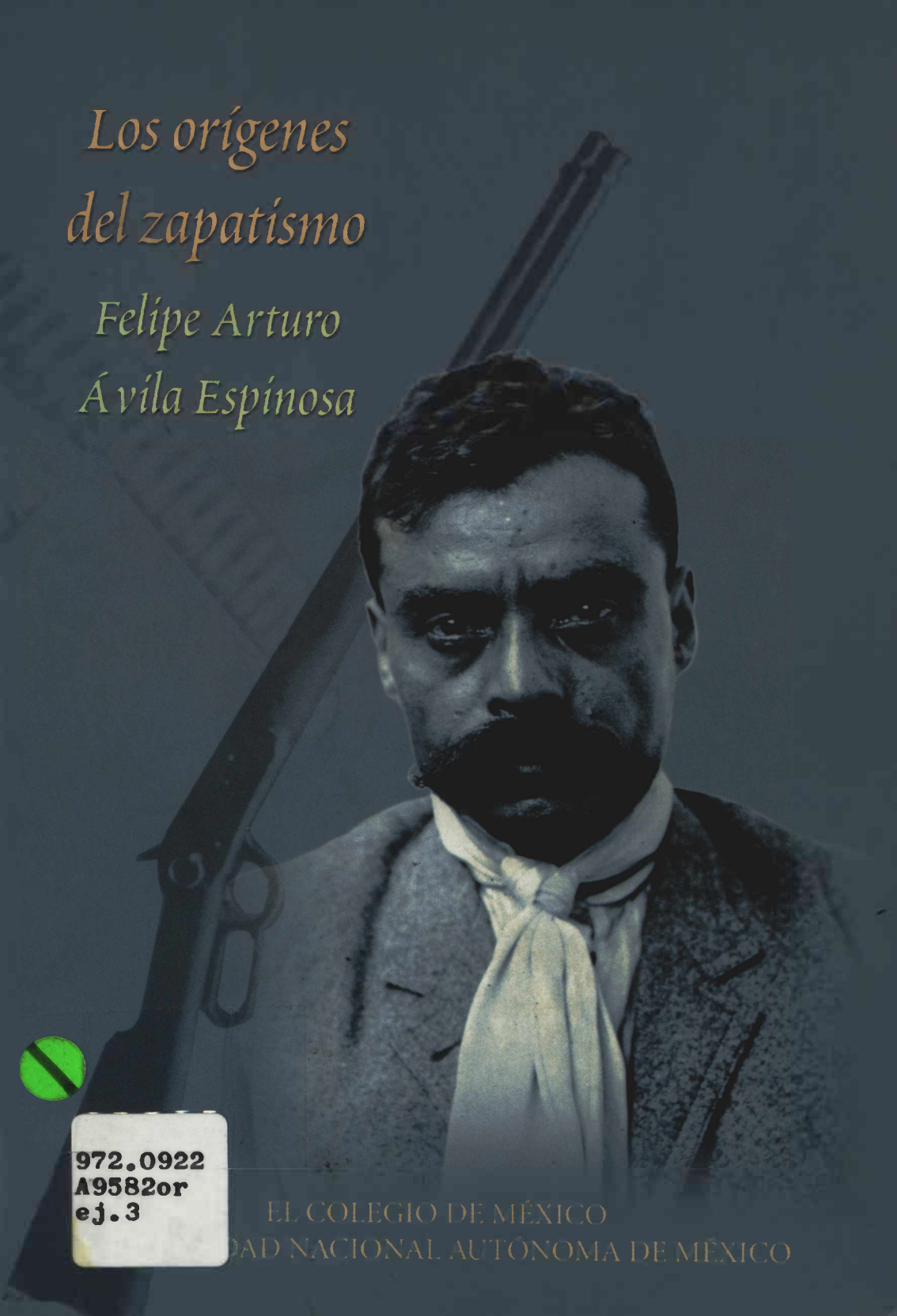
Los orígenes del zapatismo

Felipe Arturo
Ávila Espinosa



972.0922
A9582or
ej.3

EL COLEGIO DE MÉXICO
DAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

LOS ORÍGENES DEL ZAPATISMO

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS

LOS ORÍGENES DEL ZAPATISMO

Felipe Arturo Ávila Espinosa

EL COLEGIO DE MÉXICO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

972.09
A958o

Ávila Espinosa, Felipe Arturo
Los orígenes del zapatismo / Felipe Arturo Ávila Espinosa. -- México : El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos : Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2001.
332 p. ; 22 cm.

ISBN 968-12-1033-6 (El Colegio de México)
ISBN 968-36-9637-6 (UNAM)

1. México -- Historia -- Revolución zapatista, 1911-1919. 2. México -- Historia -- Revolución maderista, 1910-1911. 3. México -- Historia -- Revolución, 1910-1917. 4. México -- Historia República liberal, 1867-1911. 5. México -- Política y gobierno -- 1910-1946. 6. México -- Condiciones rurales. 7. Tierra -- Tenencia, Derecho de -- México. 8. México -- Vida social y costumbres -- Siglo XX.

cc

Portada: Irma Eugenia Alva Valencia

cc by nc sa

Primera edición, 2001

D.R. © El Colegio de México
Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa
10740 México, D.F.

ISBN 968-12-1033-6

D.R. © Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria
04510 México, D.F.

ISBN 968-36-9637-6

Impreso en México

ÍNDICE

Presentación 11
Introducción 19
Composición social 19
El asunto de la tierra y la identidad del Sur 22
Liderazgo 25
Los intelectuales zapatistas 27
El zapatismo visto desde abajo 29
Los motivos de la revuelta 32
Los límites de la rebelión 33
Los resultados 35

CAPÍTULO I. LAS RAÍCES DE LA REBELIÓN 37
Un modelo explicativo 40
La historia agraria de larga duración 42
El medio y los grupos humanos 42
El arribo de la caña 46
El azúcar en la época colonial: el marquesado y el valle de Amilpas 48
Redistribución de los recursos productivos en el siglo XVII 50
Crisis y recuperación en el siglo XVIII 52
Competencia y complementariedad 53
Estratificación, conflicto y cohesión 55
La ruptura del orden colonial 56
Ofensiva liberal y resistencia campesina 59
La identidad del Sur 62
Interludio conservador 65
Efectos de la política liberal 66
El tiempo corto: la modernización productiva, ruptura de los equilibrios 68
El porfiriato: la balanza en favor de las haciendas 68
Eficiencia y racionalidad: la irrigación 71
Revolución en el transporte 73
Desplazamiento de los arrendatarios 74
Trabajo asalariado y economía moral 76
¿Leyenda negra o blanca? 78

Crecimiento demográfico de pueblos y ciudades, decremento en las haciendas 80
Ruptura del equilibrio y agravamiento de las tensiones 82
La esfera de la política 85
La crisis política del porfiriato y la campaña política de 1909 en Morelos 85
Primera batalla: el gobierno del general Leyva 86
La revancha de los hacendados 88
Anquilosamiento del régimen y crisis política regional 90
La escuela del leyvismo 94

CAPÍTULO II. LA REBELIÓN CONTRA DÍAZ 97
La experiencia electoral maderista 98
Morelos, al margen del maderismo electoral 101
La incorporación a la rebelión maderista 102
Los conspiradores 103
Los motivos de los conspiradores 106
Surgimiento y extensión de la revuelta 109
Violencia de clase 111
Centralización del mando rebelde 113
Puebla y Guerrero: motivos similares, liderazgos diferentes 114
Las maniobras de Díaz y Limantour 117
La disputa por la hegemonía regional 121
El colapso del porfiriato 126
Liderazgo e identidad 127
Control del centro sobre la rebelión 129
Los motivos de la rebelión 132

CAPÍTULO III. EL INTERINATO. LA RUPTURA CON EL MADERISMO Y EL SURGIMIENTO DEL ZAPATISMO COMO MOVIMIENTO INDEPENDIENTE 141
La reconstitución de los poderes locales: dos visiones 143
El licenciamiento: la disputa por el poder 150
Fortalecimiento conservador 155
Militarización del estado de Morelos 160
Las condiciones para el desarme: el inicio de una identidad 162
El fracaso de las negociaciones 163
La ruptura 168
Debilidad rebelde 174
Razones de la ruptura: perfil de una identidad 176
Militarización contraproducente 184

Para que la cuña apriete... 189
Rebelión agraria en gestación 193

CAPÍTULO IV. EL ZAPATISMO Y EL RÉGIMEN DE MADERO.
LA CONSOLIDACIÓN DE UN PROYECTO INDEPENDIENTE 199
Madero, presidente 200
El Plan de Ayala 205
Reactivación de la rebelión 210
Preocupación de los conservadores 215
Pugnas en el maderismo 218
La Ley de Suspensión de Garantías 221
La salida de Figueroa 222
Apertura: cambio de gobernador y oferta agraria maderista 224
Represión: la guerra sucia de Juvencio Robles 230
Los ritmos de la revuelta 239
Aires de apertura 246
Otra vez la fuerza 251

CAPÍTULO V. LA POBLACIÓN CIVIL ANTE LA INSURRECCIÓN ZAPATISTA 255
La problemática agraria de los pueblos 256
Los agravios infligidos a la población civil 266
El apoyo de la población a los rebeldes 273
Descontento de la población civil con los rebeldes 279
Oposición a la revuelta: la formación de cuerpos de voluntarios 290

Conclusiones 299
Fuentes 311
Índice onomástico 323

PRESENTACIÓN

Este trabajo intenta explicar dos cuestiones básicas: *por qué* fue posible el surgimiento de una rebelión campesina en una amplia zona de la región centro-sur del país a finales del porfiriato, y *cómo* se conformó ese desafío al poder central por parte de los sectores y grupos dominados —las clases subalternas—* de Morelos y de las regiones aledañas, desafío que tomó cuerpo en el zapatismo. Quiere explicar, entonces, los orígenes, las causas y las formas que tuvo el zapatismo en su etapa inicial, movimiento que comenzó como una rebelión local subordinada al maderismo y que pocos meses después se consolidó y sobrepasó el ámbito regional, desarrolló una ideología y un programa propios. En este proceso se radicalizó, desafió el poder del Estado nacional, rompió con su subordinación a Madero y construyó un proyecto que luchó para alcanzar el gobierno central. En su propuesta política —que se materializa en el Plan de Ayala y en otras disposiciones e iniciativas de carácter básicamente agrario— y en la forma en que ejerció su dominio en la región, el zapatismo expresó una forma de organizar a la sociedad, con una visión en la que se mezclaban el radicalismo agrario, el populismo y una concepción del Estado como entidad benefactora al servicio de las clases subalternas.

El trabajo intenta responder también a otras preguntas que permitan reconstruir el movimiento zapatista y explicar las características de su proyecto. Así, indaga las razones agrarias de largo plazo que hicieron posible una rebelión que reclamó con tanta fuerza el derecho a disponer con autonomía de los recursos naturales de la zona y que convirtiera esta demanda en el eje central de su actividad. A continuación expone la coyuntura política que propició que el descontento, los agravios y los reclamos (seculares, endémicos) de las clases subalternas, en una zona agrícola particularmente rica y fértil, centro de disputas centenarias por la utilización y el usufructo de sus recursos y controlada en su mayor parte, desde tiempos ancestrales, por uno de los grupos económicos más poderosos de la nación —los hacendados azucareros—, pudieran trascender y conformarse en una rebelión de proporciones regionales inéditas, que

* Por clases subalternas se entiende aquí, de manera genérica y en oposición al término "clases dominantes", los grupos y actores sociales que están sometidos a una relación de dominación por parte de la clase hegemónica que detenta el poder estatal, independientemente de la conciencia que tengan de esa situación.

en pocos meses consiguió tomar el control de la mayor parte de la entidad morelense y de zonas aledañas de los estados de Puebla, México, Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal, al compás de la rebelión nacional maderista, que tenía lugar entonces y a la cual se incorporó.

El presente trabajo pretende encontrar también las continuidades en las formas de resistencia de las clases subalternas y, de manera particular, los antecedentes, similitudes y diferencias que la rebelión zapatista presentó respecto de las formas de resistencia desarrolladas por otros grupos agrarios del centro-sur del país durante el siglo XIX. Con ello pretende establecer la relación entre las causas de la rebelión zapatista y las experiencias desarrolladas por los grupos agrarios de esa zona durante los movimientos de Independencia y Reforma, subrayando algunas coincidencias en su discurso, en su práctica y en su liderazgo, en la región conocida como "el Sur".

La historia es siempre la resultante de fuerzas en movimiento, compuestas por clases sociales, grupos, sectores e individuos que empujan en una cierta dirección y sentido con el fin de conseguir ciertos resultados. Las acciones concretas de hombres y mujeres, con sus aspiraciones, proyectos y posibilidades, son las que nutren ese proceso, cuyos resultados casi nunca corresponden a las expectativas de cada uno de los actores, en la medida en que la acción de cada uno de ellos se combina con las de otros, los cuales empujan en trayectorias distintas. Sin embargo, es importante esclarecer los objetivos y las metas, conscientes y ocultos, de los actores que componen y desarrollan cada trama, independientemente del desenlace final.

Es necesario prestar atención, pues, a los motivos, manifiestos y latentes, que tuvieron los actores que construyeron en conjunto ese escenario y esa trama. En el caso de la rebelión zapatista, hay que rastrear las trayectorias de los líderes y organizadores de la revuelta y, en la medida de lo posible, de las gentes que los siguieron, ubicándolos en su situación y en su época, con el fin de desentrañar las razones que tuvieron para aventurarse en esa acción extrema, que ponía en riesgo su vida y la seguridad de sus familias, y para comprender lo que esperaban conseguir con ello.

Estas problemáticas por lo general están relacionadas con las acciones de los individuos, con su psicología y carácter, con su formación, con sus ambiciones y expectativas y, por lo tanto, intentar estudiarlas a través de los testimonios que dejan —los cuales, cuando los hay, son siempre parciales, sesgados, incompletos y prácticamente inexistentes en el caso de las clases subalternas— presenta algunas dificultades. Con todo, el trabajo pretende hacer un análisis de las razones que tuvieron los personajes que organizaron la revuelta en contra de Porfirio Díaz y los que luego se sumaron a ella, para intentar su reconstrucción y los motivos que tuvie-

ron para realizarla, así como las características formales que adquirió su protesta.

La investigación también intenta arrojar más luz sobre el tipo de liderazgo que emergió de la revuelta y que a su vez le dio forma: autónomo, surgido de abajo, no fue reconocido por los representantes del régimen porfiriano ni por los líderes maderistas de la rebelión. Tuvo, por lo tanto, un carácter plebeyo, popular, radical, de tipo tradicional, que desafió a los poderes regionales y al gobierno central, y sus antecedentes fueron las gestas de la Independencia y la Reforma en la región del Sur, en torno de líderes como el cura Morelos, Vicente Guerrero y Juan Álvarez.

Pero, al mismo tiempo, fue un liderazgo nuevo, en el sentido de no contar con la participación y apoyo de las clases altas, de los notables de la zona ni de las figuras carismáticas de los caudillos regionales, por lo que pudieron destacar dirigentes provenientes de los sectores agrarios medios y marginales, sin vínculos con las clases económicamente dominantes ni con las elites políticas regionales o nacionales. Así, pudo conformarse un movimiento radical de gran arraigo local, que fue combatido por las viejas oligarquías y los poderes que sobrevivieron al cataclismo revolucionario y contra el cual cerró filas y se agrupó una vasta coalición interclasista que contó con la activa participación de los restos del Estado porfiriano e, incluso, una parte de los nuevos líderes maderistas.

El combate a la rebelión morelense emprendido por ese amplio frente interclasista, encabezado por el ejército federal, produjo el doble efecto de ayudar a la definición de una identidad en el grupo rebelde morelense y de radicalizarlo hasta romper no sólo con las estructuras de dominación y poder tradicionales del porfiriato, sino también con los nuevos líderes nacionales encabezados por Madero.

En suma, la investigación intenta analizar y explicar el proceso de maduración endógena que tuvo el movimiento zapatista: parte subordinada de la rebelión maderista, planteó, sin embargo, una serie de reivindicaciones agrarias y políticas que no fueron aceptadas por la dirigencia, lo que condujo a un difícil y fallido proceso de negociaciones entre ésta y los líderes rebeldes. Mientras tanto, los surianos maduraron una identidad propia a lo largo de un arduo proceso de desengaño respecto del maderismo y de una progresiva radicalización que finalmente los condujo a romper con Madero, a declararle la guerra y a darse un programa político propio, el Plan de Ayala. En dicho plan plasmaron la experiencia de esos meses y definieron el proyecto que serviría de base para acometer la toma del poder central y realizar una transformación de las relaciones sociales y políticas que tuviera como eje el problema de la tierra.

Otro factor, estrechamente vinculado con el anterior y que permitió ese proceso, fue el grado de violencia que, en algunas zonas, alcanzó la

rebelión en contra de las estructuras y de los personajes más visibles y desprestigiados del sistema de dominación, y que en un primer momento se volcó sobre las autoridades y las elites locales con menos legitimidad y consenso —presidentes municipales, jueces, jefes políticos, policías rurales y comerciantes— y luego incluyó también a los hacendados, al ejército federal y al gobierno central. Fue un proceso de radicalización que culminó con manifestaciones de una violencia de clase, plebeya, de masas, dirigida contra el sistema de dominación local, primero, y regional y nacional, después.

Más que intentar una definición del zapatismo, convendría tal vez distinguir entre los diversos zapatismos regionales existentes, las diferencias y similitudes que los caracterizaron, y las diferentes formas que adquirió esa protesta en virtud de su amplitud geográfica, de su composición social y de la expresión particular que tuvo en las zonas que estuvieron bajo su influencia. El más conocido y estudiado, sin duda, ha sido el movimiento que surgió y se desarrolló en torno de la figura de Emiliano Zapata y de los líderes originales del grupo de Anenecuilco-Villa de Ayala, que creció en los fértiles valles centrales cañeros morelenses de Cuautla y Cuernavaca, en la medida en que ése fue el grupo que inició la exitosa revuelta y el que capitalizó y consolidó su liderazgo en los meses y años posteriores. Sin embargo, como lo han establecido algunas investigaciones, existió también otro zapatismo en las zonas periféricas de los valles morelenses, en las zonas boscosas y frías del Ajusco defeño, en la región poblana, en las montañas del Estado de México, en las regiones cálidas de Guerrero, en la ríspida frontera oaxaqueña y aun en lugares más alejados como Tlaxcala y Michoacán.

En todas esas regiones hubo diferentes problemáticas de carácter agrario, económico, político y cultural, sectores sociales aliados y rivales, prácticas diversas, ascensos y reflujos de la movilización popular con distintos tiempos e intensidades, manifestaciones ideológicas y discursivas con sellos particulares y, también, liderazgos propios relativamente autónomos e independientes.

El zapatismo fue, entonces, un amplio espectro de sectores, grupos, líderes, demandas y aspiraciones, al que los líderes más connotados del zapatismo morelense lograron dar unidad mediante un complejo proceso de instancias, jerarquías, lealtades, redes de apoyo. En la cúspide del movimiento se encontraba Zapata y, más tarde, el Cuartel General, del cual descendían eslabones de información y coordinación que, en ocasiones, no eran muy efectivos. Ésa era tanto su fortaleza como su debilidad. Fortaleza, en la medida en que las fuerzas sociales regionales encontraban forma de canalizar sus aspiraciones mediante prácticas militares y políticas dotadas de gran autonomía respecto del centro dirigente. Debilidad, por-

que generaba una dispersión de energías locales muy difíciles de concentrar y ordenar para una acción unificada, amplia, que pudiera disputar con éxito el control político nacional, al cual aspiraban los líderes e ideólogos zapatistas. Las relaciones del zapatismo morelense con estos movimientos aliados periféricos estuvieron preñadas de conflictos y tensiones.

Finalmente, la investigación trata de explicar la actitud de la gente común de Morelos y de las zonas dominadas por el zapatismo ante la Revolución en general y ante el zapatismo en particular. Es decir, la manera en que la población de ciudades, pueblos, villas, haciendas y ranchos de la zona reaccionó ante la súbita alteración de sus condiciones normales de vida a causa de la guerra, así como la actitud que tuvo ante la actividad de las tropas y de los líderes zapatistas para determinar las expectativas, las demandas, los apoyos, las complicidades, los contratos morales y la legitimidad de la rebelión y de los grupos rebeldes en su relación con la población civil.

Un fenómeno significativo, hasta hoy insuficientemente estudiado, lo constituyen los abusos, los agravios, las sangrías provocadas por las bandas rebeldes en contra de sectores populares a los que pretendían defender, que ocasionaron resistencias y rechazos, latentes y manifiestos, y, en algunas regiones y localidades, la organización de grupos de autodefensa para combatir militarmente a los alzados.

En todo tipo de revolución, rebelión, revuelta o protesta social, la actitud de los distintos sectores nunca es homogénea. Al lado de apoyos, solidaridades y adhesiones se producen también oposiciones y resistencias, determinadas no sólo por la posición social y la ideología de los grupos y líderes que se oponen a esas formas de protesta. En muchas ocasiones, esas reacciones contrarias manifestadas por sectores de población que comparten su condición subalterna con quienes protestan son generadas por el comportamiento y las acciones de los grupos y los líderes que apoyan la revuelta o simpatizan con ella, ya que los perciben como abusivos e injustos.

El estudio de esta relación conflictiva y llena de tensiones entre la rebelión zapatista y una parte importante de la población civil ayuda a vislumbrar los límites que tuvo ese movimiento. Ello no demerita la legitimidad y el apoyo que indudablemente recibió de parte de amplios sectores de la población marginada de Morelos y de otros estados en que enraizó. Simplemente es una constatación de la diversidad de posiciones que a menudo atraviesan las barreras de clase en el contexto de una rebelión como la zapatista.

A partir de ahí es posible construir una imagen más completa y matizada del zapatismo, que se había tratado hasta ahora como un movimiento primordialmente agrario, de gran homogeneidad social y consenso

político interior, y con una relación asombrosamente armónica con las comunidades locales. Se trata, entonces, de reconstruir lo que fue el zapatismo desde abajo, a partir de la práctica de los guerrilleros zapatistas y de la experiencia vivida por la gente de las zonas bajo su influencia ante los cambios provocados por la rebelión, de analizar sus repercusiones y formas de apoyo, así como las contradicciones internas, peleas y rivalidades que fueron parte consustancial de su desarrollo y jugaron un papel importante en la limitación de las posibilidades para imponer su hegemonía en el proceso revolucionario durante su etapa formativa, desde la rebelión contra Díaz hasta el golpe de Estado que trágicamente puso fin al maderismo en febrero de 1913.

El presente libro, con algunos pequeños cambios, fue presentado como tesis para obtener el grado de doctor en historia por El Colegio de México. Como todo trabajo intelectual, es el resultado de un esfuerzo colectivo, directo e indirecto, al que contribuyen lecturas, discusiones en clase, comentarios de los lectores de las fases preliminares, y los materiales de distinta índole que constituyen las fuentes. Este cúmulo de información, ideas y opiniones es entendido, organizado, acomodado de una cierta forma por el autor que firma el trabajo final, pero cuya autoría intelectual en realidad no le corresponde totalmente. Es difícil discernir lo que es verdaderamente una aportación original del autor firmante y la parte que corresponde a quienes contribuyeron, voluntaria o involuntariamente, a la forma final impresa del producto de ese esfuerzo colectivo. Quizás unas cuantas ideas rectoras, muy diferentes de las que dieron inicio a la investigación y modificadas a fuerza de confrontarse con las fuentes y con otras opiniones, una interpretación que trata de ser original, y la forma de organizar el material constituyen lo que podría atribuirse al autor firmante. Por ello, habría que hacer justicia y mencionar a todos los que contribuyeron, conscientemente o no, a dar forma a una obra que tiene una parte que les pertenece. Sin embargo, el autor mismo no sabe bien a bien con quiénes tiene deudas; tendría que remontarse a sus orígenes intelectuales y aun así sólo identificaría a aquellos en quienes reconoce una influencia mayor. Quienes influyen en él, además, no son responsables por cierto de los errores y omisiones cometidos por el autor ni de las interpretaciones vertidas por él.

Ante estas dificultades, y sabiendo de antemano que se trata de una lista incompleta, quiero manifestar mi más profundo reconocimiento a las siguientes personas e instituciones: en primer lugar a Romana Falcón, mi directora de tesis y amiga, quien me acompañó con paciencia en esta aventura que a veces parecía no tener fin; sus agudos, inteligentes, críticos comentarios fueron alentando, moldeando y matizando un trabajo en el

que, en ciertos momentos, me sentí perdido. Sin ella y sin la influencia de mi madre, este trabajo no habría llegado a buen puerto. Mi respeto, admiración y cariño para ambas. Javier Garciadiego es el acreedor de mi otra gran deuda intelectual. Siempre estuvo presente, si no como interlocutor físico, sí de manera virtual, como una especie de voz de alerta o de luz amarilla que me obligaba a poner en tela de juicio mis propias formulaciones, para no caer en apologías y unilateralidades en las que sabía que Javier, como buen y temible gladiador intelectual que es, me haría pedazos. Javier es un personaje que por sus conocimientos, lucidez y actitud crítica da gusto tener como lector, como comentarista y, muchas veces —siendo él carrancista y yo zapatista—, como un adversario de quien se aprende y con quien es sano practicar de vez en cuando la esgrima intelectual. Otro compañero de lides y, éste sí, de "filias", es Salvador Rueda, quien más sabe del zapatismo en México, de quien más he aprendido sobre el tema y quien, aunada a sus conocimientos, tiene una actitud sorprendentemente solidaria y de camaradería que hay que seguir agradeciendo.

Tengo una gran deuda también con El Colegio de México, institución que se convirtió en mi segunda *alma mater*, y particularmente con Pilar Gonzalbo, queridísima profesora y amiga que desde la Secretaría Académica me brindó todas las facilidades administrativas y su inapreciable afecto para terminar la investigación. Agradezco también al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, mi *alma mater*, haberme permitido ingresar a sus filas con este proyecto de investigación y haberme brindado un admirable espacio de trabajo, lleno de respeto y libertad, por el que uno se reconoce afortunado. Personalmente agradezco de manera cumplida la atención, el apoyo y la comprensión que han tenido conmigo y con este trabajo Gisela von Wobeser, la anterior directora del Instituto, y Virginia Guedea, quien ahora lo dirige.

Finalmente, no podría haber terminado este trabajo sin el cariño, la paciencia y el apoyo de mi familia y de mis amistades más cercanas. A todos ellos ofrezco mi sincero agradecimiento.

INTRODUCCIÓN

El zapatismo ha sido identificado, desde los años de su gestación, como el movimiento agrario por antonomasia de la revolución mexicana. El carácter radical con el que enfocó el problema agrario y la práctica que desplegó en la región que estuvo bajo su influencia —en donde desapareció temporalmente de la escena la clase terrateniente y tuvo lugar una importante transformación de la propiedad (durante los años más álgidos de la lucha armada entre las distintas facciones, particularmente entre 1914 y 1916) y donde ocurrió la mayor y más temprana reforma agraria de los regímenes posrevolucionarios— han hecho que el zapatismo sea considerado como uno de los principales fenómenos que justifican que se pueda hablar de revolución y no de una simple revuelta o rebelión, por lo menos en un ámbito regional.

Composición social

Socialmente, el zapatismo estuvo compuesto en su mayor parte por sectores bajos y marginados de la sociedad rural: grupos de campesinos habitantes de las comunidades del campo morelense y zonas aledañas, arrendatarios, medieros y aparceros de las haciendas azucareras, peones residentes de éstas, arrieros, leñadores, algunos sectores medios de las localidades de la región (pequeños propietarios agrícolas, ganaderos y rancheros) y sectores más urbanizados del área (tenderos, artesanos y pequeños comerciantes de los pueblos y localidades mayores), si bien la participación de estos últimos fue menor. Salvo algunos casos aislados, en el zapatismo no participaron ni tuvieron injerencia importante sectores e individuos de las clases altas regionales o nacionales. Por tanto, el zapatismo fue principalmente un movimiento de campesinos y sectores rurales bajos que tuvo alianzas con miembros de las clases altas y medias, y en el que no hubo participación directa de las elites regionales y nacionales. Asimismo pudo efectuar, junto con el villismo, la práctica política más radical, plebeya y de abierto desafío y ataque a las clases dominantes y a las instituciones que garantizaban su dominio.

En virtud de la composición social mayoritaria del zapatismo, conviene hacer algunas precisiones. Aquí se emplea el término campesino en un sentido amplio, para referirse no sólo a un modo de ganarse la vida di-

rectamente de los productos de la tierra y el trabajo con la misma, sino también en un sentido cultural, referido a la percepción que de sí mismos tienen los individuos ligados al campo y dedicados principalmente a las actividades agrícolas. Estos campesinos y sus familias mantienen vínculos productivos, sociales y culturales que los llevan a percibirse con una identidad propia en su relación con el mundo exterior, a pesar de las diferencias, la estratificación, los conflictos internos y las tensiones agudizadas a medida que avanza la economía mercantil.

Comparto la diferenciación que establece Eric Wolf entre campesinos, jornaleros y rancheros, de conformidad con la situación material que los caracteriza y la cual varía de manera sustancial: los campesinos tienen la posibilidad de poseer la tierra y los instrumentos necesarios para obtener productos agrícolas y pecuarios de manera más o menos autosuficiente; los jornaleros están obligados a rentar tierras o a emplearse como mano de obra rural para conseguir sus satisfactores, mientras que los rancheros producen para el mercado y obtienen de éste la mayor parte de las mercancías necesarias para su sustento. Desde luego, todos ellos tienen mayor o menor contacto con el mercado y existe una gran diversidad de situaciones particulares y de combinaciones entre estos tipos básicos.

En su libro sobre Zapata, Samuel F. Brunk emplea el vocablo "campesino" para designar a los individuos que hacen de la agricultura su actividad principal, que están parcialmente ligados al mercado y subordinados políticamente al Estado, definición general —como todas las definiciones— en la que los dos últimos términos son compartidos por otros sectores y clases. Autores como Florencia Mallon y Peter Guardino han dado un nuevo enfoque a la visión tradicional del campesino que ha prevalecido en la historiografía y han puesto de relieve la capacidad de algunos grupos de campesinos latinoamericanos para construir su identidad, plantear proyectos alternativos a los de las otras clases, luchar por llevarlos a cabo con un liderazgo propio y mediante el establecimiento de alianzas, y, finalmente, para influir en la conformación del Estado aunque no hayan triunfado.[1]

En el caso de Morelos, las relaciones agrarias capitalistas constituían la forma predominante de las relaciones sociales de producción, particularmente en la producción y comercialización de caña de azúcar, la

[1] Véase Eric R. Wolf, *Peasants*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1966, pp. 1-17, y, del mismo autor, *Las luchas campesinas del siglo XX*, México, Siglo XXI (7a. ed.), 1982, pp. 3-12; Samuel F. Brunk, *Zapata: Revolution and Betrayal in Mexico*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1994, p. 2; Florencia E. Mallon, *Peasant and Nation. The Making of Postcolonial Mexico and Peru*, Berkeley, University of California Press, 1995; Peter F. Guardino, *Peasants, Politics, and the Formation of Mexico's National State. Guerrero, 1800-1857*, Stanford, Stanford University Press, 1996.

actividad económica más importante de la región desde la época colonial. El predominio de la hacienda azucarera no había terminado con la existencia de pueblos campesinos libres, aunque había subordinado a muchos de ellos y ocupaba una parte de su fuerza de trabajo de manera estacional y asalariada. Había, además, una amplia gama de actividades productivas en cultivos comerciales como frutas tropicales y algunas hortalizas que se vendían en los mercados regionales y llegaban hasta la ciudad de México, actividades que se complementaban tanto para el consumo de las localidades como para el mercado, con pequeñas explotaciones ganaderas y lecheras, venta de carbón, leña y artesanías.

El uso del término "campesino" para caracterizar al zapatismo se refiere entonces, en un sentido amplio, a una composición social que incluye a sectores agrarios, campesinos tradicionales, arrendatarios, aparceros, pequeños propietarios rurales y otros sectores medios del mundo rural, los cuales dieron forma a un movimiento de clase que elaboró un proyecto y realizó una práctica política que tuvieron como eje el mundo agrario. La posesión y el usufructo de los recursos naturales, la estructuración de las relaciones de producción, la distribución de los bienes y el ejercicio del poder debían estar, en ese proyecto, en manos de los campesinos. Así, pues, el término "movimiento campesino" denota un proyecto y una práctica de clase llevados a cabo por el zapatismo.

En la cúspide de su fuerza regional, esto es, entre 1914 y 1916, el zapatismo logró efectuar una sustitución temporal de la clase terrateniente, propietaria de la mayor parte de los recursos productivos de la región morelense, y transferir parcialmente la propiedad y el usufructo de esos recursos a sectores rurales medios y marginales, a comunidades campesinas propietarias de tierra y agua insuficientes, a arrendatarios agrícolas sin posesión, a peones asalariados de las haciendas e ingenios, a diversos artesanos y pequeños comerciantes, así como a otros grupos dispersos en el medio predominantemente rural del paisaje morelense de comienzos del siglo XX.

Sin embargo, aunque ese proceso estableció una distribución más equitativa de la propiedad, no consiguió eliminar las disparidades ni las disputas por tales recursos entre los pueblos y comunidades beneficiados, cuyos conflictos continuaron durante esos años. Además, el proceso duró poco tiempo y sus avances fueron revertidos, en buena medida, cuando el zapatismo resultó derrotado y una parte de los antiguos propietarios recuperó sus propiedades. Con todo, Morelos fue, en las dos décadas siguientes, una de las regiones en que se efectuaron las mayores reformas agrarias llevadas a cabo por los gobiernos posrevolucionarios, convirtiéndose así en base importante de la organización ejidal.

El asunto de la tierra y la identidad del Sur

El problema de la tierra —en su sentido amplio de posesión y usufructo de los recursos naturales para obtener productos destinados a la satisfacción de las necesidades vitales (básica, pero no únicamente de carácter alimenticio) de los grupos humanos marginales de la zona de influencia zapatista—, la organización de las relaciones productivas y las formas de distribución y consumo de sus productos fueron el eje alrededor del cual se articuló la visión del país, la práctica y el proyecto zapatista de transformación social. El problema de la tierra permitió al movimiento zapatista incorporarse a una rebelión nacional en curso, detonada por el llamado maderista contra el régimen de Porfirio Díaz, para luego articular un proyecto y una práctica políticos, militares y económicos propios, de clase, que lo llevaron a hacerse del poder en la región y a convertirse en un serio contendiente en la disputa por la hegemonía entre las distintas facciones rebeldes, la cual tuvo lugar entre 1914 y 1916.[2]

Los zapatistas se convirtieron en la fuerza política predominante en una importante región del centro-sur del país, que va desde la tierra caliente guerrerense hasta las sierras de Puebla y Oaxaca, en una franja situada inmediatamente debajo de la meseta central del valle de México, que tuvo como epicentro los valles centrales morelenses y como principales soportes las tierras contiguas de Puebla, Guerrero y el Estado de México. Parte considerable de esta región corresponde a la zona geográfica conocida desde el siglo XIX como "el Sur", vocablo que denota una identidad regional construida durante las luchas de la Independencia mexicana por caudillos como el cura Morelos y Vicente Guerrero, en un proceso que llevó a su culminación Juan Álvarez, en las jornadas emprendidas por sus seguidores durante las guerras entre liberales y conservadores de mediados del XIX.[3]

En esos territorios, los zapatistas desarrollaron un liderazgo propio y, una vez que rompieron con Madero, tuvieron una relativamente amplia autonomía e independencia política y efectuaron una práctica plebeya que minó una parte de las estructuras de poder político y económico que

[2] Me parece útil la definición que hace Florencia Mallon del concepto de hegemonía; partiendo del significado expuesto por Gramsci en el sentido de la dominación que se ejerce a través de la combinación de coerción y consenso, Mallon le asigna dos distintos significados, en ocasiones relacionados: *1)* como un conjunto de procesos continuos y vinculados, a través de los cuales el poder es impugnado, legitimado y redefinido constantemente en todos los niveles de la sociedad y *2)* como el resultado final de dicho proceso. Véase Mallon, *Peasant and Nation...*, *op. cit.*, p. 6.

[3] Para una muy buena reconstrucción de este proceso de identidad, véase Florencia E. Mallon, "Los campesinos y la formación del Estado en el México del siglo XIX: Morelos, 1848-1858", *Secuencia* (México, Instituto Mora), núm. 15, septiembre-diciembre de 1989, pp. 47-96.

predominaban en la región hacia el final del porfiriato. Subordinado inicialmente al maderismo, pues se concebía a sí mismo como parte de la insurrección maderista tras la aceptación del Plan de San Luis, el zapatismo se distinguió por haber puesto como condición para el desarme el cumplimiento de la oferta de devolver las tierras a los pueblos que hubieran sido despojados de ellas, junto con una serie de demandas políticas y militares para la reorganización del poder local, así como el reclamo de los líderes zapatistas para ocupar un lugar en ese proceso y en los nuevos cargos. Estas peticiones fueron desechadas por Madero y su rechazo fue determinante para que las negociaciones culminaran en la ruptura de ambos grupos. Los jefes zapatistas decidieron definir su propio proyecto político, cuya principal expresión ideológica se manifestó en el Plan de Ayala.

El Plan de Ayala permitió extender la influencia zapatista a otras zonas, atrayendo a grupos e individuos con necesidades agrarias semejantes, los cuales convirtieron el zapatismo en un movimiento regional con influencia más allá de los límites morelenses. En la ampliación de esta influencia tuvo un papel decisivo la actuación del ejército federal que, en el afán de someter y acabar a los rebeldes, cometió prácticas depredatorias que dieron por resultado arraigar y extender la rebelión y fortalecer al liderazgo rebelde. Durante ese proceso, el zapatismo se fue radicalizando. Desde el principio de la rebelión, los actos de violencia de masas estuvieron dirigidos contra las partes más desacreditadas, visibles y débiles del sistema de dominación económica y política del porfiriato, las cuales carecían de legitimidad y aceptación social y eran fuente de agravios y resentimientos —comerciantes, jefes políticos, policías y autoridades locales.

La violencia fue ampliándose hasta convertirse en violencia de clase, es decir, estaba dirigida contra los principales pilares del sistema de dominación: la clase terrateniente hacendada, el gobierno y el ejército federales. La clase terrateniente fue severamente golpeada y obligada a otorgar préstamos forzosos a los jefes zapatistas o, incluso, a pagarles protección. Empero, la desaparición de los poderes públicos y el encono de los enfrentamientos entre los rebeldes y el ejército federal, con ayuda de las guardias rurales —en la medida en que éstos no pudieron acabar con la rebelión y ésta creció—, obligaron a los propietarios a abandonar la entidad y a refugiarse en la capital del país o en el extranjero. Muchos pueblos y comunidades de Morelos y zonas aledañas aprovecharon para recuperar parte de sus recursos naturales y tomar otros. Las haciendas y los ingenios, símbolos dominantes del paisaje morelense desde la Colonia, fueron intervenidos y administrados por los jefes zapatistas.

Los dirigentes zapatistas permitieron la ocupación de tierras por parte de los pueblos que las reivindicaban como suyas y promovieron la dotación

de las mismas desde los primeros meses de 1912. Durante el decenio revolucionario, el estado de Morelos fue la zona en la que tuvo lugar la más amplia reocupación, dotación y redistribución de los recursos productivos por las propias comunidades campesinas. Esta característica dio al zapatismo credibilidad y prestigio entre los pueblos y comunidades de su área de influencia y, al mismo tiempo, le otorgó un arraigo regional que fue fundamental para desafiar al poder central de manera continua entre 1911 y 1919.

El énfasis en la visión agraria, su carga regional y el peso de sus caudillos, aunados a la actitud inflexible e intolerante de algunos de sus dirigentes e ideólogos respecto de los principios y fines que consideraban debía cumplir la revolución, se convirtieron al mismo tiempo en una barrera, a la postre insalvable, que impidió al zapatismo establecer alianzas sólidas con otros movimientos regionales con los que compartía puntos de coincidencia. Esto fue notable en el caso del villismo, movimiento con el que coincidía en parte en el carácter plebeyo de sus ataques contra la propiedad, las clases dominantes y el Estado, pero fue también evidente en el caso de algunos sectores del obregonismo y otros movimientos regionales que, en algunos momentos, se sintieron atraídos por el zapatismo e intentaron establecer vínculos con él.

Estos factores llevaron a los surianos a mantener una actitud intransigente y sectaria en los momentos en que tuvieron mayor fuerza y, por lo tanto, consideraron que podían imponer sus condiciones, o una actitud pragmática en momentos de debilidad en los que sí permitieron la incorporación de individuos que no compartían sus posiciones o no concordaban con los ideales y principios prácticos y morales que fueron siempre el punto fuerte del zapatismo. Las relaciones y alianzas de los líderes zapatistas con otras fuerzas políticas fueron siempre su talón de Aquiles; extremadamente conflictivas, resultaron a la postre, junto con su debilidad militar, efímeras y determinantes para su derrota.

La combinación de la violencia de clase contra las estructuras de poder, la expropiación de parte de los bienes de los terratenientes y empresarios, la redistribución de recursos entre sectores y grupos marginados hicieron que el zapatismo fuera temido y estigmatizado desde un principio por las clases propietarias y por un sector de la opinión pública, acusándolo de ser un movimiento bárbaro y sin principios —aun antes de que se generalizaran y consolidaran tales prácticas y cuando todavía no tenía fuerza suficiente para extenderlas más allá del ámbito local. Esto provocó que, desde el interinato de Francisco León de la Barra, en 1911, fuera enfrentado como un desafío de clase por una vasta coalición que involucró después a oligarquías regionales, a sucesivos gobiernos nacionales, al ejército federal, así como a grupos conservadores y clases medias urbanas y rurales.

También participaron en esta cruzada antizapatista algunos sectores populares de la región. Así, algunos grupos rurales medios y bajos se opusieron a la revuelta y a las reivindicaciones zapatistas. Dichos sectores actuaron por su cuenta o en alianza subordinada con las instancias gubernamentales o con las oligarquías regionales.

El zapatismo y la revolución cambiaron en muchos sentidos la vida en Morelos y en las regiones colindantes desde los años mismos de la gesta armada. Los jefes zapatistas y sus intelectuales tuvieron en sus manos el poder regional en todas sus formas y alcances —militar, político, económico, administrativo, cultural— en dicha zona, y desde ahí lanzaron un desafío para alcanzar el poder del Estado nacional mediante la construcción de un proyecto contrahegemónico que organizara el país generalizando las experiencias que habían construido de manera local. Fueron, pues, el poder regional predominante en su zona de influencia, particularmente entre 1914 y 1917. La transformación de la propiedad agraria que estaba en manos de la oligarquía terrateniente, la salida de ésta y de una parte importante de las elites regionales, y la nueva relación de fuerzas entre las clases y sectores sociales dieron un lugar, que antes no tenían, a los grupos subalternos. Se produjo el ascenso de nuevos líderes y dirigentes venidos de abajo —los cuales ocuparon altos cargos en el ejército, el gobierno y la administración de las haciendas— y también cambios en las rutinas de los habitantes de las distintas localidades.

Las transformaciones ocurridas en la hegemonía regional y el nuevo equilibrio de las relaciones sociales justifican que se considere al zapatismo como un movimiento campesino revolucionario, radical, que tuvo una gran influencia en el curso de la revolución mexicana y que contribuyó a validar el empleo del concepto de "revolución", en el sentido de transformación radical de las estructuras de dominación económica y política de una sociedad mediante una amplia movilización popular. Al margen de los resultados de largo plazo, esto tuvo lugar, con limitaciones, en la región zapatista.

Liderazgo

El tipo de liderazgo que se desarrolló en el zapatismo, en continuidad con lo que fue la tónica en la región desde las guerras de Independencia y Reforma, fue de carácter caudillista, tradicional, con gran arraigo local de sus dirigentes naturales. Éstos fueron personas provenientes de las clases bajas —aunque no de las más pobres— y sectores medios de la sociedad rural, que gozaban de reconocimiento y prestigio previos en sus comunidades y pueblos, en donde algunos de ellos habían desempeñado funciones

en los órganos locales de representación tradicional. Fueron personas que, pese a tener cierta notoriedad y solvencia económica dentro de las condiciones cotidianas locales, no se diferenciaban mayormente del común de la población. Las circunstancias atípicas de la revuelta y la convulsión que provocó permitieron el ascenso de algunos de ellos, los cuales capitalizaron haber promovido e iniciado la rebelión, probando y afirmando su liderazgo.

Así, el don de "conductor de hombres" homérico, la capacidad de imponer su voluntad, la fuerza, malicia, destreza, valentía, el saber infundir confianza o temor, atributos que la gente percibe en todo líder y que favorecen las circunstancias, fueron reconocidos en algunas de esas gentes que, gracias también a sus vínculos de amistad o parentesco, pudieron dar forma, en un lapso relativamente breve, a nuevos liderazgos regionales que gozaron de considerable independencia respecto del centro nacional, de los notables y de las elites regionales.

Desde luego, ese liderazgo no estuvo compuesto solamente de valores universales positivos. Jugaron también un papel, en la ascensión de algunos de los líderes, la habilidad, la ambición, la envidia, la falsedad, el doble juego. El zapatismo se caracterizó, al igual que otros liderazgos de los movimientos sociales que formaron parte de la revolución mexicana, por las constantes y agudas pugnas entre líderes rivales, que estuvieron crónica y enconadamente disputándose el dominio territorial y los puestos de mando del ejército zapatista; tales rivalidades y peleas jugaron un papel importante en la destrucción de sus posibilidades de crecimiento y consolidación como alternativa de poder nacional.

Por el carácter de sus demandas, por su composición social y por las características de su liderazgo, el zapatismo fue una rebelión campesina típica en la que participaron grupos sociales con fuerte arraigo en el medio agrario, organizada y dirigida por representantes tradicionales de las comunidades y fortalecida con el peso de los vínculos, lealtades familiares y vecinales de las poblaciones campesinas que lo nutrieron.[4]

[4] Algunas de estas características generales del zapatismo han sido subrayadas por varios autores: Friedrich Katz, *La guerra secreta en México*, México, ERA (4a. ed.), 1983, t. I, p. 147; Adolfo Gilly, *La revolución interrumpida*, México, El Caballito, 1972, pp. 68-71; del mismo autor, "La guerra de clases en la Revolución mexicana (revolución permanente y autoorganización de las masas)", en Gilly *et al.*, *Interpretaciones de la Revolución mexicana*, México, Nueva Imagen, 1979, pp. 32-33. Desde luego, muchos investigadores han alertado contra la idealización del mundo agrario y contra la sobrevaloración de sus lazos comunitarios, demostrando empíricamente la existencia de una marcada estratificación interna, así como de egoísmos y conflictos cotidianos y permanentes en las comunidades campesinas. Véase Tutino, *De la insurrección a la revolución en México*, México, ERA, 1990, así como el libro de Mallon, *Peasant and Nation...*, *op. cit.* Estos señalamientos son válidos para la región y época que aquí se estudian.

Los intelectuales zapatistas

Junto a la dirección campesina se desarrolló también una dirección ideológica exterior, compuesta al principio por individuos vinculados a las poblaciones locales, que poseían un cierto grado de cultura y eran capaces de leer, escribir y plasmar en documentos las ideas y directrices de los jefes campesinos, y realizar su propia interpretación de las aspiraciones e intereses de los participantes. En su primera etapa, formativa, fue notable la escasa o nula influencia de intelectuales foráneos, tradicionalmente importantes en movimientos similares. La organización y materialización de la revuelta se llevó a cabo prácticamente sin intelectuales, sólo con la influencia de Pablo Torres Burgos, tendero ilustrado que fue el primer líder del grupo rebelde. Sin embargo, Torres Burgos abandonó pronto la revuelta por diferencias con los otros miembros del grupo —condenaba la violencia popular— poco antes de morir trágicamente a manos de las fuerzas del orden. El movimiento rebelde, durante los meses en que combatió a Porfirio Díaz como parte de la insurrección maderista nacional, no contó con la participación de algún intelectual de talla reconocido.

Esto no significa que la acción de quienes conformaron el zapatismo haya sido irreflexiva o espontánea, y ejemplos claros de ello son la elaboración del Plan de Ayala y de las diferentes proclamas, instrucciones y manifiestos con que se comunicaron entre sí y con el exterior y, desde luego, la planeación, discusión y aprobación previa de sus acciones militares y políticas.

Con el triunfo del maderismo, en la medida en que la rebelión amplió su radio de influencia y que Zapata confirmó su liderazgo y comenzó a ser una figura nacional, el zapatismo ejerció influencia en intelectuales urbanos, particularmente de la ciudad de México, y recibió la incorporación de jóvenes profesionistas, como el abogado Abraham Martínez —primo de Luis Cabrera, quien comenzaba a alcanzar notoriedad—, personaje que fungió como jefe del estado mayor de Zapata y fue la única figura intelectual reconocida y buscada en esos meses iniciales por la prensa capitalina. El guerrerense Juan Andrew Almazán, estudiante de medicina que se sumó por esos días a los alzados de Morelos y cuyas andanzas y virajes fueron también conocidos por la prensa de la época. Luego se incorporaron los hermanos Gildardo y Rodolfo Magaña, michoacanos radicados en el Distrito Federal, los cuales sirvieron de enlace entre los zapatistas y las redes de oposición obrera y periodística de la capital.

Empero, ninguno de ellos ejerció una influencia ideológica decisiva para el desarrollo del movimiento en esa primera etapa. Los periódicos nacionales y el poder central mismo intentaron establecer relación con

estos intelectuales para utilizarlos como interlocutores, pues su voz aculturada era más fácilmente reconocida por las elites dominantes. La opinión pública nacional que leía los diarios supo de ellos por entrevistas y, sobre todo, porque varias veces cayeron presos y sus declaraciones y juicios aparecieron profusamente —a menudo como noticias principales— en una prensa que en su mayoría era abiertamente contraria a la lucha de los surianos. Todos ellos eran intelectuales en términos convencionales: de clases medias, con un cierto grado de educación y cultura, con contactos entre las elites gobernantes, es decir, intelectuales orgánicos del tipo clásico, desclasados, fuereños.

Sin embargo, en los meses del interinato de León de la Barra y de las negociaciones con el maderismo que llevaron a la ruptura de los zapatistas con el líder de la rebelión nacional —etapa decisiva en que se consolidó la posición política de los líderes zapatistas como distinta de la del maderismo y durante la cual aquélla comenzó a radicalizarse— no se advierte la influencia directa de esos intelectuales fuereños, quienes incluso estuvieron presos buena parte del periodo y al margen de muchas de las negociaciones. Paradójicamente, un personaje que hasta entonces no había sido conocido y que no venía de fuera fue quien ejerció la mayor influencia ideológica entonces y en los años siguientes, hasta mediados de 1914: el modesto profesor de primaria rural Otilio Montaño, a cuya pluma se debe el Plan de Ayala, quien desde ese momento comenzó su ascendente carrera y se convirtió en la figura intelectual dominante del zapatismo durante los siguientes dos años, conservando una gran influencia hasta su muerte, acaecida en 1916.

Cuando el zapatismo pasó de ser una rebelión campesina local y se convirtió en un movimiento regional con aspiraciones de tomar el poder central, entre 1913 y 1914, se incorporaron a sus filas intelectuales provenientes de las clases medias urbanas que se habían formado en los círculos opositores al régimen de Díaz, que habían estado en el ala izquierda o en la oposición al gobierno constitucional de Madero y que se adhirieron al zapatismo cuando el golpe huertista les cerró todas las opciones de participación política legal. Entre ellos había periodistas y líderes estudiantiles o de los gremios artesanales y fabriles de la ciudad de México y otras ciudades del interior del país. Algunos de los más conocidos, como Antonio Díaz Soto y Gama, Rafael Pérez Taylor y Luis Méndez, fueron parte importante de los asesores de la Casa del Obrero Mundial, organización de trabajadores urbanos que llegó a tener importancia en la ciudad de México durante el maderismo. Otros, como Paulino Martínez y Manuel Mendoza López, habían sido periodistas y abogados comprometidos con la defensa de los movimientos democráticos laborales en la ciudad de México y en Guadalajara. Otros más, como Manuel Palafox y Jenaro

Amezcua, se habían desempeñado en diversas actividades privadas de carácter comercial. En conjunto, estos intelectuales fuereños de tipo tradicional, entre los que descollaron Manuel Palafox y Antonio Díaz Soto y Gama, fueron los que elaboraron las formulaciones programáticas nacionales más importantes del zapatismo y quienes se encargaron de que el zapatismo trascendiera el ámbito regional y alcanzara una dimensión nacional.

A la vez que aprendieron del movimiento zapatista, estos intelectuales le dieron una forma de expresión que, como todas las expresiones intelectuales de movimientos sociales, tenía sus diferentes grados de representatividad. En las reivindicaciones de la tierra y la autonomía local, en los planteamientos de un gobierno que atendiera las demandas de los grupos más necesitados y en la prioridad dada a la población civil por encima de las necesidades militares, los intelectuales fuereños supieron interpretar y generalizar el impulso que venía de abajo y sostenía la actividad de los jefes campesinos zapatistas. En otros problemas más alejados de la problemática cotidiana rural, como el anticlericalismo y el anarcosindicalismo que expresaron particularmente quienes venían de la oposición laboral urbana, los ideólogos fuereños zapatistas expresaron sus propias convicciones e intereses, no compartidos y a veces contrapuestos al sentir de la gente común de las regiones zapatistas. La relación de los intelectuales fuereños con los jefes campesinos y con la base social del movimiento fue compleja y, a veces, conflictiva. Asimismo, el sectarismo y doctrinarismo de varios de ellos llevaron al zapatismo a tener una política de alianzas oscilante e infructuosa, lo que jugó un papel importante en su derrota.[5]

El zapatismo visto desde abajo

La amplia región en que se asentó el zapatismo se había caracterizado, a lo largo de la Colonia y del siglo XIX, por ser una zona de gran conflictividad social y política, plagada de enfrentamientos verticales, de clase, entre las elites dominantes y las clases subalternas y de conflictos horizontales entre las propias elites, grupos o familias dominantes, o entre los grupos de abajo. En la Independencia y la Reforma, líderes como Morelos, Guerrero y Álvarez lograron establecer alianzas entre las clases subalternas, parte de las clases medias y las familias acomodadas para ganar influencia y oponerse al proyecto de las oligarquías regionales conservadoras y al Estado nacional. El enfrentamiento con las oligarquías conservadoras

[5] Véase Samuel F. Brunk, "Zapata and the City Boys: In Search of a Piece of Revolution", *Hispanic American Historical Review*, vol. 73, núm. 1, febrero de 1993, pp. 33-65.

terratenientes fue particularmente agudo y la violencia permeó buena parte de la historia regional durante el siglo XIX.

Al mismo tiempo se desarrollaron enfrentamientos horizontales entre los grupos subalternos, en conflictos por la posesión y el usufructo de tierras y aguas, por rivalidades comerciales, por autonomía municipal, por liderazgos y lazos clientelares enfrentados. Estos viejos conflictos no desaparecieron durante los años de la lucha armada, antes bien sirvieron para alimentar nuevas rivalidades y pugnas entre los nuevos actores con poder de decisión, los grupos armados y los nuevos líderes rebeldes que irrumpieron en la escena con mayor fuerza gracias a la modificación de los equilibrios regionales y locales producidos por las condiciones atípicas de la rebelión.

Así, en esos años, los conflictos verticales terminaron con la derrota de las viejas clases dominantes, particularmente las ligadas a la posesión de grandes extensiones de tierra; la vieja oligarquía regional en buena medida desapareció, al menos temporalmente, de la escena. Los conflictos horizontales continuaron, con disputas entre los distintos grupos agrarios, pueblos, ranchos, villas en competencia crónica por los recursos naturales. Del mismo modo continuaron los conflictos relacionados con cuestiones de jurisdicción y poder entre los pueblos y las cabeceras municipales y las rencillas, los odios y enfrentamientos entre diversas familias, entre individuos, y entre las redes y clientelas de varios de los notables de la región.

Estos conflictos atravesaban barreras de clase, étnicas o de zona geográfica, creando tensiones dentro de los propios pueblos y grupos con características socioeconómicas y culturales semejantes. Algunas de estas disputas eran ancestrales y tenían motivos de larga duración que no menguaron durante la década de la violencia revolucionaria ni tampoco después. Otras rivalidades fueron más recientes. Unas y otras continuaron o aparecieron durante la gestación y desarrollo del zapatismo y determinaron en varios sentidos su curso y su alcance, convirtiéndose a veces en rivalidades y disputas agudas entre distintos pueblos y jefes revolucionarios por el predominio. Estos conflictos a menudo desencadenaron hechos violentos y promovieron un clima en el que abundaron las rivalidades y desconfianzas, en el mejor de los casos, o las venganzas y pleitos, todo lo cual se convirtió en un factor de disgregación, dispersión, falta de eficacia y coordinación en la actividad militar y política del ejército zapatista, situación que era empeorada por la enorme autonomía y capacidad de gestión con que siempre operaron los nuevos jefes rebeldes.

Dos fenómenos importantes, soslayados hasta hace poco por las investigaciones del zapatismo, fueron, precisamente, el de la violencia emprendida en contra de las clases y los poderes dominantes, por una parte, y el relacionado con los conflictos endógenos, por otra; ambos consti-

tuyeron parte intrínseca de su desarrollo y ejercieron una importante influencia, particularmente en las horas decisivas en que los surianos se enfrentaron a los proyectos rivales por la hegemonía del proceso revolucionario.

Por lo que toca a la violencia de clase, ésta tenía su origen en problemas estructurales de larga duración, ligados a la desigualdad en la posesión y el aprovechamiento de los recursos naturales, a la organización tradicional de la explotación del trabajo y a la inequitativa forma de distribuir los bienes y servicios obtenidos. Otra causa tenía que ver con agravios percibidos por grupos o individuos para los cuales las autoridades de los diferentes niveles y los poderosos locales (hacendados y comerciantes) habían violado, en uno u otro momento, un código moral establecido y aceptado implícitamente. Otros nacieron y crecieron durante los meses atípicos de violencia que se produjeron en la región al estallar la rebelión contra el porfiriato.[6]

Esos agravios ayudan a explicar el cambio que se produjo en la apreciación, los valores y las conductas del grueso de la población morelense respecto de las autoridades e instituciones hasta entonces aceptadas y el surgimiento del zapatismo como canalización de esos sentimientos. Y, continuando con la tradición decimonónica de violencia de los grupos subalternos contra las oligarquías regionales y el Estado nacional, el zapatismo desarrolló prácticas similares desde los primeros días de la rebelión contra Díaz y en los años posteriores —saqueos y quema de edificios públicos, tiendas comerciales y campos de las haciendas, ejecuciones de jefes políticos, autoridades municipales, administradores y empleados de hacienda, etc.—, apoyado en un tono discursivo antihacendado y antiespañol que era más que una reminiscencia de lo hecho por Morelos, Guerrero y Álvarez un siglo antes.

Al mismo tiempo fue común la persistencia de diferentes tipos de disputas entre distintos caudillos militares zapatistas por el predominio militar y político, así como los pleitos entre pueblos y comunidades que simpatizaban con los rebeldes pero que estaban enfrentados entre sí y habían dado forma a liderazgos también enfrentados, como el ocurrido entre Francisco Pacheco y Genovevo de la O, por mencionar uno de los más notorios. Estas disputas crónicas a menudo produjeron la eliminación física de los líderes locales, sin que eso terminara con las causas profundas del conflicto, y sólo sirvieron para limitar y desgastar la efectividad y la cohesión del movimiento zapatista.

[6] El mejor estudioso del zapatismo, John Womack, ha subrayado el impacto desequilibrante que tuvieron la modernización y el auge de las haciendas azucareras de la región durante el último tercio del siglo XIX y la reanudación de la ofensiva que esto significó sobre el usufructo de tierras, aguas y trabajo de los pueblos. Este proceso aún estaba en curso en la primera década del XX.

Llama también la atención otro tipo de conflicto interno que ocurrió con grupos sociales presentes en la escena morelense, pero que no se habían incorporado a la causa de los rebeldes. Si bien produjo simpatías y apoyo en la mayor parte de las clases bajas y medias morelenses, lo que le permitió desafiar a los distintos gobiernos centrales y a las otras corrientes que enfrentó durante los años de la guerra, la actividad zapatista generó también reacciones neutrales, y aun adversas, en regiones, localidades y poblaciones que no estuvieron de acuerdo con los intereses y proyectos de los rebeldes o, más a menudo, se opusieron a las prácticas depredatorias y abusivas que cometieron muchos de los jefes zapatistas contra ellas durante esos años. Así, las relaciones del ejército y los jefes zapatistas con las distintas comunidades de la zona fueron extremadamente conflictivas y abarcaron una amplia gama de actitudes, que fueron desde el apoyo y la colaboración decididos hasta el apoyo forzado, en el cual se mezclaban el clientelismo y la conveniencia mutua, así como el rechazo y la oposición, a veces armada, contra el abuso de los jefes militares y los soldados zapatistas.

Los motivos de la revuelta

El fuerte apoyo regional que generó el zapatismo, su persistencia, su capacidad de organizar y dirigir una rebelión agraria indican un alto grado de legitimidad que logró que amplios sectores de la población rural se atrevieran a romper con la subordinación al sistema porfirista y estuvieran dispuestos a desafiar la autoridad de los representantes de las clases dominantes, fueran éstos hacendados, administradores, capataces, jefes políticos, autoridades, militares o rurales. Por ello es importante conocer los motivos que provocaron la decisión de ruptura, así como los códigos morales de la gente común de la región y precisar el tipo de agravios, resentimientos y reclamos que tenían contra las autoridades porfirianas y grupos locales que los dominaban, inconformidades que los líderes zapatistas supieron explotar y canalizar para investirse ellos mismos de una nueva legitimidad y autoridad moral que fue capaz de producir la organización de una revuelta regional masiva.

Así, de manera general, puede señalarse que, dependiendo de la región y el estrato social, lo que estaba detrás del apoyo y la colaboración individual y colectiva brindados al zapatismo fue una mezcla de aspiraciones de carácter agrario, un fuerte sentimiento de agravio moral en contra de las oligarquías e instituciones regionales, una serie de reivindicaciones políticas —por autonomía municipal y libertades y en contra de la injerencia de grupos foráneos— y el deseo de restablecer una situación de justicia que

se concebía perdida, sentimientos todos catalizados y canalizados por los rebeldes con el fin de establecer un nuevo pacto moral que, en la medida en que se cumpliera, daría a éstos legitimidad y autoridad.

Al mismo tiempo es necesario completar el cuadro precisando el tipo de expectativas que la población morelense que apoyó al zapatismo puso en estos nuevos dirigentes, la conducta que esperaban, el código moral y el contrato implícitos que establecieron con ellos, así como la respuesta que obtuvieron en sus demandas y aspiraciones de una mejor situación material, mayor seguridad y una nueva valoración de sí mismos. Esto puso a prueba a los líderes zapatistas. Los intentos realizados por sus dirigentes para conservar el apoyo de la población y mantener la legitimidad de su autoridad estuvieron preñados de dificultades.

Los límites de la rebelión

La satisfacción de las demandas de la gente común para mejorar su situación material y tener mayor protección y seguridad no se consiguió en buena medida debido a las difíciles condiciones provocadas por una intensa guerra civil —con la consiguiente pérdida de vidas humanas y recursos materiales, y el sufrimiento y el dolor involucrados— y por el hecho de que el zapatismo fue derrotado.[7] El zapatismo tuvo una limitada fuerza militar en el ámbito nacional; su ejército difícilmente pudo superar la forma de una federación de bandas guerrilleras locales con gran autonomía; su carencia de armamento, recursos militares, mercancías y dinero fue crónica, lo que ocasionó su derrota militar y política a manos del constitucionalismo. Sin embargo, aunque no sea la causa principal de su fracaso, la conducta de diversos dirigentes y soldados zapatistas que cometieron abusos, extorsiones, vejaciones, intimidaciones, que aprovecharon su condición de fuerza y autoridad para vengar agravios personales o realizaron acciones en beneficio propio limitó o enajenó el apoyo de la población que se identificaba por otras causas con ellos y le restó fuerza para desafiar con éxito a sus adversarios.

La relación del zapatismo con la población que le sirvió de apoyo fue siempre variable y conflictiva. Y lo fue aún más la relación con aquellas localidades que no fueron abiertamente zapatistas, que guardaron cierta

[7] Desde luego, hay que subrayar que la rebelión agraria zapatista generó la más amplia y pronta reforma agraria por parte del nuevo régimen triunfante; logro importante, sin lugar a dudas, pero que, sin embargo, a diferencia de lo que implicaba el proyecto zapatista —que había hecho una reforma agraria radical, desde abajo, defendida con las armas—, la realizada en los años veinte y treinta fue promovida, organizada y controlada por las estructuras del nuevo gobierno central, que se fortaleció y adquirió legitimidad con ello.

distancia respecto del zapatismo o que, incluso, le fueron hostiles. Así, pues, no puede trazarse un cuadro homogéneo de las relaciones entre el zapatismo y las comunidades de la zona, ya que, si bien hubo varias regiones y comunidades en las que el zapatismo tuvo gran arraigo, aceptación, simpatía y apoyo, tácito o manifiesto, estas muestras favorables no fueron nunca incondicionales y estuvieron sujetas a prueba en forma permanente, variando en ocasiones de manera significativa en el curso de esos años atípicos de violencia.

Al mismo tiempo hubo comunidades que permanecieron relativamente al margen de una toma de partido en favor o en contra de los contendientes y que acomodaron sus adhesiones de manera forzada según fueran zapatistas, federales o constitucionalistas quienes ocuparan sus poblaciones. Esta relativa neutralidad a menudo les ocasionó represalias de parte de uno y otro bando y en ocasiones los obligó a buscar el apoyo de alguno de los bandos rivales. Finalmente, en las fuentes que se conservan aparece ampliamente documentada la existencia de comunidades que fueron hostiles al zapatismo y que se organizaron para combatirlo con las armas mediante la formación de los denominados grupos de "voluntarios", organizados en lo fundamental con los recursos de los notables y las clases medias y populares de las localidades. Si bien estos grupos contaron a veces con el apoyo de los gobiernos estatales o de algunos representes del gobierno federal, en términos generales éste los vio con desconfianza y les brindó un apoyo reducido, pues temía el fortalecimiento de cacicazgos autonómos regionales armados. Esta resistencia militante a la revolución y al zapatismo fue un fenómeno más amplio de lo que se ha reconocido hasta ahora y tuvo fuerza particularmente en algunas zonas periféricas de Puebla, Guerrero y el Estado de México, regiones en las que el zapatismo había logrado un alto nivel de penetración, pero en donde, a pesar de que había conseguido la incorporación de liderazgos autóctonos formados endógenamente, era visto como una fuerza de ocupación.

En lo individual, las protestas y los actos de resistencia fueron todavía mayores no sólo en las comunidades sino en el seno del propio ejército y de las bandas zapatistas. Como todos los movimientos sociales, el zapatismo estuvo preñado de tensiones y conflictos, tanto entre sus filas como en sus relaciones con la población civil con la que estableció contacto.

Las características del zapatismo en su relación con los habitantes de los lugares en que tuvo influencia se fueron delineando y precisando particularmente durante su etapa formativa (1911-1913). Es necesario, por lo tanto, seguir la huella de su origen y evolución para tratar de comprender los rasgos básicos que lo definen y que aparecen con nitidez una vez que el zapatismo se deslinda de Madero y lo combate durante su gobierno constitucional.

Los resultados

A lo largo de esos años atípicos de violencia revolucionaria cambió en muchos sentidos la vida y la visión de los habitantes de Morelos y de las zonas aledañas. La población morelense de todos los estratos sociales presenció la organización de un ejército guerrillero campesino con arraigo en los sectores pobres de muchas de las comunidades locales. Los miembros de esas bandas y la población que los apoyaba de diferentes formas se enfrentaron conjuntamente a los diversos gobiernos centrales o grupos dominantes de esos años y sufrieron las consecuencias de su desafío. Muchos pueblos fueron quemados, saqueados y algunos incluso desaparecieron. La mayoría de la población civil de la región en algún momento fue desplazada y buscó refugio en otras localidades o en las montañas. El grueso de la población padeció, en alguna forma, los estragos de la guerra de esos años —escasez crónica de alimentos, bienes y servicios; tensiones, amenazas, persecuciones, abusos, vejaciones, represión y muerte—, ocasionados por la enconada disputa por el poder que tuvo lugar entre el ejército zapatista y el ejército federal y sus aliados. Los campos de cultivo fueron arrasados, los ingenios y las pocas industrias de la zona resultaron inutilizados y se perdieron, las escasas vías de comunicación quedaron parcialmente destruidas.

Éste fue el escenario en que ocurrió una pérdida todavía mayor: la muerte de miles de hombres y mujeres de todas las edades, oriundos de la región o inmigrantes que habían arribado a la zona durante los años de la violencia revolucionaria. Para la mayoría de las familias de esos lugares quizás ésta sea la huella más profunda que le dejaron esos años de violencia. Pero, al mismo tiempo, junto al temor y a la muerte, muchos de ellos participaron del entusiasmo, de las aspiraciones, del fortalecimiento de las solidaridades, complicidades y afectos colectivos que se fueron gestando y plasmando en la actividad de los rebeldes y de la población que los apoyaba. Su actividad no sólo logró dar forma a un proyecto que disputó, con posibilidades de triunfo, la hegemonía nacional a las otras corrientes revolucionarias, sino que pudo establecer un nuevo equilibrio entre las clases regionales, hacerse del poder local y realizar algunas de las aspiraciones y metas de apropiación y distribución de los recursos productivos, de autonomía municipal, de organización de los poderes públicos, de ejercicio de la justicia con base en sus métodos tradicionales.

Asimismo, el zapatismo logró influir en la conformación del nuevo Estado posrevolucionario que incorporó las demandas agrarias como parte de su credo político, así como en la organización política de los grupos de campesinos y ejidatarios y en el contenido político e ideológico de la

lucha por la tierra que ha alimentado la mayoría de las luchas agrarias en los años que siguieron a la desaparición de Zapata. En todos los casos, la situación de los campesinos zapatistas ya no fue la misma. Esos años los cambiaron y ellos mismos hicieron que esos años cambiaran.

CAPÍTULO I. LAS RAÍCES DE LA REBELIÓN

El zapatismo se reconoce como el movimiento agrario por antonomasia de la revolución mexicana. La imagen de esta última como un movimiento esencialmente campesino tiene en el zapatismo su principal ejemplo. Y, en efecto, la historia del zapatismo demuestra que el problema de la tierra fue el eje principal que articuló las aspiraciones, las demandas y las propuestas de los individuos que dieron forma a una rebelión de grupos campesinos locales, primero, y luego, al adquirir una identidad y formular un proyecto propio, al zapatismo propiamente dicho, que fue el movimiento que enarboló y puso en práctica las propuestas agrarias más radicales durante la revolución.

La rebelión agraria de la que surgió el zapatismo estuvo conformada por sectores bajos y medios ligados al campo morelense y tuvo sus orígenes en una problemática de larga duración que se remonta a la época colonial: la disputa secular por los recursos naturales de los fértiles valles de Cuernavaca y Cuautla entre las elites económicas novohispanas y las comunidades indígenas, sus propietarios originales. La disputa favoreció a los grupos dominantes, encabezados por los dueños de las haciendas azucareras, quienes se apoderaron de las mejores tierras y de los recursos acuíferos desde los albores de la Colonia, dando lugar a conflictos y tensiones con los pueblos y las comunidades indígenas. La historia de la región estuvo marcada, desde entonces, por estas disputas agrarias.

El zapatismo se explica en buena medida, aunque no se reduzca a ello, por el problema de la tierra. Pero, ¿cómo y por qué surgió?, ¿por qué en ese tiempo y lugar?, ¿por qué con esas características?, ¿cuáles fueron los individuos y grupos que le dieron forma?, ¿qué motivos tuvieron para rebelarse?, ¿cuáles fueron las razones que explican sus reconocidos rasgos de intransigencia y persistencia? Para responder a estas preguntas es necesario rastrear y explicar los orígenes de la rebelión morelense de 1910, de la que luego saldría el zapatismo. Algunos de los problemas presentes en el campo de Morelos en esa época tenían sus orígenes en un pasado remoto. La implantación de una economía comercial basada en el cultivo de la caña de azúcar había configurado un escenario dominado por la institución hacendaria, la cual había concentrado en manos de los grupos dominantes los recursos productivos —tierra, agua y fuerza de trabajo— y había subordinado —a través de la economía mercantil— la propiedad y el trabajo de los otros grupos sociales: diversos tipos de campesinos (pequeños y

medianos agricultores libres, arrendatarios, aparceros), rancheros, clases medias. El predominio de la economía mercantil azucarera en la región fue el resultado de un proceso secular que alteró y subordinó, durante la Colonia, la economía tradicional de los pueblos y que modificó, en favor de los hacendados, la estructura de la propiedad, proceso no exento de resistencias y conflictos. Estas resistencias, empero, no trascendieron los límites legales establecidos por el régimen colonial hasta después de la Independencia, al mediar el siglo XIX, cuando tuvieron lugar protestas y agitaciones que fueron parte de la resistencia y el rechazo de los grupos campesinos de la zona centro-sur del país ante el avance de las políticas liberales contra la propiedad y los derechos comunales. Esta historia económica de larga duración, que abarca desde el siglo XVI hasta los albores del porfiriato, tiene como hilo conductor el predominio de las relaciones mercantiles impuestas por el cultivo de la caña de azúcar, proceso que, en términos generales, tuvo lugar antes de las reformas liberales del siglo XIX.

El porfiriato significó una transformación importante de este escenario porque realizó una modernización económica que, durante los dos últimos decenios del XIX y el primero del XX, incrementó la productividad azucarera, abarató los costos y el precio de los productos de esta industria y masificó su consumo. Esa modernización se dio sobre la base de una reasignación de los recursos productivos que eran propiedad de las haciendas, de mejoras tecnológicas en el proceso de molienda y transformación de la caña y, particularmente, con el incremento de la superficie de tierras irrigadas mediante la creación de importantes obras de infraestructura hidráulica y la conversión de tierras de temporal —que las haciendas arrendaban a pueblos e individuos para cultivos tradicionales— en cañaverales, así como con mejoras menos espectaculares en transporte, fertilizantes y abonos.

Estas nuevas tierras de temporal incorporadas a la producción comercial de caña y los recursos hidráulicos con los que fueron irrigadas no estaban ya en manos de los pueblos. Éstos habían perdido su propiedad y dominio desde tiempo atrás. Había, en cambio, un sector importante de familias que no poseían tierra y que arrendaban una parte de esas superficies de temporal para cultivar maíz y otros productos para su economía doméstica. Este sector arrendatario fue el más afectado por la modernización productiva, ya que fue desplazado de esas tierras. En los hechos, la privación de ese usufructo significó una desposesión que fue vivida y comprendida por los sectores afectados como una ruptura del pacto moral[1]

[1] En el sentido de una especie de contrato implícito, funcional, entre las clases, sectores e individuos denominados subalternos y las elites económicas y políticas, a partir del cual se establecen reglas de convivencia social que comprenden un reconocimiento mutuo de obligaciones y

con las haciendas y una alteración súbita del equilibrio económico mediante el cual esas familias obtenían su manutención.

La mano de obra desplazada de las tierras arrendadas fue parcialmente absorbida por las necesidades crecientes de fuerza de trabajo de las haciendas e ingenios, así como por las actividades asociadas a la modernización: ferrocarriles, comunicaciones, servicios, urbanización. Una parte considerable fue empleada por la industria azucarera, que utilizó 150% más de mano de obra entre 1899 y 1908. No obstante, esos eran empleos estacionales, por lo que los trabajadores del campo tuvieron que depender de otras formas de ocupación para completar sus ingresos. Muchas familias arrendatarias perdieron seguridad y se hicieron cada vez más dependientes de la economía hacendaria, aumentando, al mismo tiempo, la presión sobre la economía tradicional de los pueblos.

Este proceso, que tuvo lugar entre 1880 y 1910, no produjo muchos ejemplos de resistencia manifiesta. Durante el porfiriato, hay pocos testimonios de violencia agraria. La represión del régimen porfirista y la derrota del movimiento liberal radical en la región después de la revolución de Ayutla, combinadas con la legitimidad que aún conservaba el sistema de dominación, la fuerza de la economía moral y la solidaridad de los vínculos de parentesco entre las clases subalternas, sirvieron para amortiguar el estallido del conflicto, al menos temporalmente. El descontento se expresó por vías subterráneas, aisladas, individuales.

Las tensiones estructurales de largo plazo y los rencores y agravios recientes producidos por la modernización (que en otras circunstancias no hubieran trascendido más allá de protestas aisladas y formas de resistencia individual cotidiana), produjeron la ruptura del pacto moral por parte de algunos grupos rurales que organizaron una rebelión inédita en la zona, al coincidir con una coyuntura política excepcional en el país. El sistema político porfiriano comenzó a entrar en una profunda crisis por la escisión de una parte de las elites y por la incapacidad del régimen para neutralizar, como lo había hecho hasta entonces, el desafío de una vasta coalición interclasista que demandaba mayores espacios de participación.

Esta escisión interna del régimen propició el estallido de una rebelión de grupos agrarios locales que utilizaron las nuevas condiciones y se lanzaron a una aventura que aprovechó las experiencias de la campaña po-

---

derechos. Los sectores subalternos aceptan el dominio de una autoridad, dentro de esos límites, y exigen que se respeten y garanticen derechos básicos, entre ellos, los de la vida, el trabajo, el hogar, la paz, la justicia, etc. Esto no hace a un lado, desde luego, el hecho del predominio de las relaciones capitalistas en la producción y comercialización del azúcar y la repercusión que esto tenía en el conjunto de las relaciones sociales.

lítica de Patricio Leyva para acceder al gobierno del estado en 1909. Así, pues, la combinación de tensiones agrarias estructurales, agravios, reivindicaciones políticas, movilización de clases medias y la debilidad del régimen para mantener el sistema de dominación fueron los elementos que se conjugaron para producir el estallido cataclísmico de la rebelión que daría forma al zapatismo.

Un modelo explicativo

John Tutino, en un espléndido libro,[2] analizó y buscó explicar las razones por las cuales, en condiciones históricas peculiares y únicas, los campesinos de una determinada zona abandonan la rutina, tranquilidad y aparente pasividad de su vida cotidiana[3] y se lanzan a la insurrección, poniendo en juego su existencia, su patrimonio y la relativa seguridad que había conformado su situación hasta esos momentos. En ese libro, Tutino sintetiza y discute los elementos proporcionados por otros autores que han estudiado el mismo problema y ofrece un interesante resumen sobre las condiciones que posibilitan una rebelión campesina:

> [...] un rápido y grave deterioro de las condiciones sociales en el campo, con frecuencia, pero no siempre, ligado a la imposición del capitalismo comercial, es lo que crea las bases del descontento. Para que se agudice ese descontento, es necesario percibir claramente que las dificultades de los campesinos se deben a factores humanos: élites propietarias de tierras, el Estado, o ambos. Ahora bien, aunque esos inicuos atropellos produzcan entre los campesinos un persistente sentimiento de afrenta o injusticia, no los hace recurrir automáticamente a la insurrección por muy humillados que estén; en general, los pobres del campo no corren el riesgo de un levantamiento mientras no tengan pruebas de que los detentadores del poder son débiles o están divididos. A menudo las noticias de esas oportunidades de insurrección les

[2] Tutino, *op. cit.*

[3] James C. Scott, en varios estudios, ha demostrado las múltiples y variadas formas de la resistencia individual y cotidiana de diversas comunidades campesinas ante la opresión y los cambios ocasionados por la modernización comercial. Estas formas diarias de resistencia, presentes la mayor parte del tiempo, por lo regular no alcanzan una gran dimensión y aunque manifiestan el agravio moral, el rechazo y la protesta de los grupos subordinados ante situaciones que consideran injustas y opresivas, rara vez ponen en riesgo la permanencia del sistema de dominación. Véanse *Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance,* New Haven, Connecticut, Yale University Press, 1985, y *Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts,* New Haven, Connecticut, Yale University Press, 1990. Las rebeliones abiertas, violentas, presentes a lo largo de la historia rural, son menos frecuentes e implican la conjunción de varios factores objetivos y subjetivos.

> llega[n] a los campesinos por agitadores extranjeros, renegados de las élites, que llaman a la revuelta contra quienes están en el poder. Aunque tales dirigentes rebeldes no son causantes de las insurrecciones, con frecuencia precipitan las revoluciones del campo. Y una y otra vez se encargan de papeles clave al organizar a los rebeldes agrarios y eslabonarlos con otros grupos.[4]

Así, pues, para Tutino, la aparición de una revuelta campesina depende de una "conjunción crítica de agravios y oportunidades", y concluye que el empeoramiento súbito de los niveles de vida de los diferentes tipos de campesinos es una causa que conduce a la rebelión pero que no es motivo suficiente, salvo cuando el empeoramiento es especialmente doloroso: cuando campesinos acostumbrados a la autonomía y a bastarse a sí mismos para su reproducción son orillados, súbitamente, a una dependencia sin seguridad, o cuando campesinos que para sobrevivir dependen de los hacendados o de otros tipos de propietarios rurales, pero con seguridad, de pronto la pierden junto con las posibilidades de buscar alternativas para mejorar.

Cuando esta transformación ocurre en poco tiempo, de modo que los sujetos de una misma generación pueden percibirla como un hecho que amenaza el valor moral supremo de ganarse la vida, tiene que combinarse con un cúmulo de circunstancias favorables —de "oportunidades"— para que pueda transformarse en una rebelión. Los campesinos descontentos tienen que darse cuenta de que existen signos de división en las clases dominantes, que el descontento que ellos sienten lo comparten otros grupos, que tienen ya o que pueden conseguir apoyo en otros sectores y lugares y que, por lo tanto, existen posibilidades de triunfar en su desafío, antes de decidirse a emprenderlo.[5]

Tutino considera que este modelo explicativo se desarrolló en la zona del Bajío novohispano a fines de la Colonia y tuvo su expresión en la revolución de Independencia. La ausencia de tales circunstancias explicaría la actitud neutral, pasiva o contrainsurgente en las comunidades campesinas de otras regiones de la Nueva España, lo que explicaría también la derrota de los campesinos rebeldes que siguieron a Hidalgo y a Morelos. En ese libro, Tutino compara las situaciones existentes en las diferentes regiones del país, antes y después del movimiento independentista y concluye que sólo en el Bajío se presentaron las condiciones para la gestación de una amplia rebelión campesina que, sin embargo, fue derrotada por su aislamiento y por las diferencias regionales que le impidieron unificarse y

[4] Tutino, *op. cit.*, p. 32.
[5] *Ibid.*, pp. 39-40.

desarrollarse en toda la nación. El modelo expuesto puede servir como herramienta de análisis para estudiar la rebelión zapatista.

Antes, sin embargo, es necesario situar el escenario —el medio—, la historia de larga duración y los actores sociales —individuales y colectivos— que dieron forma al zapatismo, para intentar comprender la problemática y las añejas tensiones existentes, así como las circunstancias coyunturales que permitieron el estallido de la rebelión en 1910-1911. Para ello es preciso remontarse hacia atrás en el tiempo y analizar, sumariamente, las condiciones económicas, sociales y políticas más importantes en las zonas en que surgió el zapatismo.

La historia agraria de larga duración

El medio y los grupos humanos

La zona de lo que hoy es el estado de Morelos es una región natural ubicada en la parte central del país, que comienza inmediatamente al sur del macizo de altas montañas conocido como eje volcánico. Los límites naturales de la región son: al norte, la sierra del Ajusco, que la separa del valle de México; al oriente, la barrera natural es el eje de montañas descendientes que van del Iztaccíhuatl al cerro del Tepozteco, barrera que casi desaparece a medida que se transita hacia el sur; por el occidente marca la división la cadena de montañas que forman la sierra de Taxco, que parte del Nevado de Toluca y llega hasta Xochicalco, separándola, por el noroeste, del valle de Toluca y, por el oeste, de las tierras guerrerenses; por el sur, la conjunción de abruptas cadenas montañosas que empiezan a formar el eje mixteco la separa del sur de Puebla, de Guerrero y de la Baja Mixteca oaxaqueña.

Debido a las diferencias de altitud del terreno y a las características de los sistemas orográficos e hidrológicos de la región, en una porción relativamente reducida de territorio se encuentra una amplia variedad de suelos y climas. Una característica particular del estado de Morelos es que, en un espacio muy pequeño, el terreno desciende de más de 3 000 metros sobre el nivel del mar hasta menos de 1 000 en la parte sur; otra más, que en la parte central existen dos amplias cuencas hidrológicas, la del río Amacuzac, que abarca la mayor parte del territorio, desde Cuautla hacia el oeste, y la del río Nexapa, que ocupa el extremo oriental. Las diferencias de altitud, suelos y recursos acuíferos determinan la existencia de una amplia variedad de subregiones que han sido aprovechadas de manera distinta por los grupos humanos que se han establecido en ellas desde épocas ancestrales. La zona norte del estado es montañosa y fría;

comienza en las faldas que descienden del Ajusco, cuyas tierras habitables tienen una altitud que oscila entre 2250 y 1750 metros sobre el nivel del mar.

A medida que se transita hacia el sur, el terreno tiene menos altura y el clima se hace más caliente y húmedo, dando forma a dos amplios valles centrales templados, con valles de llanos pequeños y discontinuos, fáciles de irrigar, separados por las sierras de Tepoztlán y las Tetillas: el de Cuernavaca, en el centro-occidente, y el de Cuautla-Amilpas, en el centro-oriente, cuyas tierras, entre los 1750 y los 1200 metros de altitud, son irrigadas por cinco corrientes principales que descienden de las altas montañas de la Sierra Nevada y el Ajusco y forman las dos subcuencas mencionadas, que a su vez lo son de la cuenca del Balsas. De oriente a poniente, estas corrientes son: el río Nexapa, el Tepalcingo, el Cuautla, el Yautepec, el Salado, el Tetlama, el Tembembé y, finalmente, el río Chalma, que forman parte de la subcuenca del Amacuzac, el cual se incorpora al Balsas más al poniente, en el estado de Guerrero. Este sistema hidrológico se caracteriza por tener un caudal variable, determinado por las estaciones, con una rápida pendiente que desciende hacia el sur. Así, pues, la zona central, que incluye hasta las planicies más áridas de Tlaquiltenango y Jojutla, en el sur, es una zona irrigada y esto ha determinado que haya sido, desde tiempos prehispánicos, una zona densamente poblada, al igual que la zona boscosa y fría del norte.

La zona sur del estado es llana y de menor altitud, con un clima caluroso y seco. En el extremo sur, el comienzo del macizo montañoso mixteco permitió aprovechar recursos mineros desde épocas ancestrales y, por sus características orográficas, de suelo y clima, fue el lugar de asentamientos ganaderos a partir de la época colonial. En un pequeño espacio geográfico, entonces, se dan las condiciones —determinadas por la altitud— para la existencia de diferentes climas y grados de humedad: frío en el norte boscoso, húmedo y semicálido en los valles centrales, semiseco y cálido en la parte sur. Estas características resultaron determinantes, en buena medida, para la especialización productiva de las subregiones naturales así constituidas: el norte fue básicamente una zona productora de bienes forestales; el centro, de productos subtropicales y, desde el siglo XVI, sobre todo de caña de azúcar, así como de maíz y otros cultivos; el sur fue básicamente ganadero y minero.[6]

[6] La descripción geográfica que antecede está basada principalmente en el libro de Claude Bataillon, *Villes et campagnes dans la région de Mexique*, París, Antropos, 1971, pp. 53-56, 126 y ss. Es muy útil la obra de Peter Gerhard, *Geografía histórica de la Nueva España*, México, IIH-UNAM, 1986, pp. 93-100, y las tesis de maestría y doctorado de Horacio Crespo, "La diferenciación social del campesinado. Una perspectiva teórica", México, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 1981, pp. 120-130, y "La hacienda azucarera del estado de Morelos: modernización y conflicto",

La topografía del estado de Morelos determina la existencia, en la mayor parte de los valles centrales de Cuernavaca y Cuautla-Amilpas, de tierras de buena calidad e irrigadas, aptas para el cultivo de una amplia variedad de cereales, hortalizas, frutas y legumbres. Empero, desde el siglo XVI, con el arribo de Cortés y la colonización española, el cultivo predominante ha sido la caña de azúcar. La zona en conjunto es accesible desde las regiones geográfico-culturales aledañas de los valles de México, Toluca, Puebla, Guerrero y Oaxaca, con las que ha estado conectada desde centurias atrás. Existen pasos naturales sorteables entre las montañas del Ajusco y las otras cadenas montañosas ubicadas al este, oeste y sur, por lo cual existieron, desde tiempos prehispánicos, vasos comunicantes, redes y rutas comerciales que permitieron una relativamente amplia interrelación e influencia económica, política y cultural entre los pueblos establecidos en la zona y los vecinos, así como con culturas más alejadas.[7] Desde la época prehispánica, esta región ha tenido una relación de subordinación y complementariedad productiva con la región dominante históricamente en Mesoamérica, el valle de México, al que desde entonces ha abastecido con productos subtropicales y con cuya evolución económica y política ha estado siempre conectada. Era, además, un paso natural obligado de las tierras del altiplano central hacia las costas del Pacífico y del Golfo y, más específicamente, constituía una ruta importante entre las ciudades de México, Veracruz y Acapulco.[8]

Antes de la conquista hispánica, la zona fría del norte y la central estaban densamente pobladas y eran asiento de varias comunidades tlahuicas y nahoas que cultivaban maíz, algodón y diversos productos alimenticios, y que también elaboraban textiles y otros bienes que entregaban como tributo al imperio azteca. Existieron asentamientos prehispánicos importantes en Cuernavaca, Atlihuayán, Tlayacapan, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Jojutla, Alpuyeca, Zacualpan, Amacuzac, Zacatepec, Tenango, Xochicalco, Hueyapán, Amilcingo, Oaxtepec y otros lugares que han conservado su antigua nomenclatura, todos ellos ubicados en zonas con acceso a tierras de cultivo y agua. Michael Riley calcula una población regional de 725 000 personas en 1521. Tres años después, Peter Gerhard calcula un población de 600 000 habitantes.[9]

México, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 1996, pp. 7-36.

[7] Véanse Bataillon, *op. cit.*, pp. 47-48, y Domingo Díez, *Bosquejo histórico-geográfico del estado de Morelos*, México, Tlahuica, 1938, pp. 1-24.

[8] Crespo, "La diferenciación...", *op. cit.*, pp. 120-123, y "La hacienda...", *op. cit.*, pp. 26-27.

[9] Citados por Cheryl English Martin, *Rural Society in Colonial Morelos*, University of New Mexico Press, 1985, p. 11. Los cálculos relacionados con la población indígena que existía antes de la conquista española han sido objeto de un intenso debate. Las cifras que ofrecen Cook y

La conquista y la colonización españolas significaron un dramático cambio en todos los ámbitos de la vida indígena. Demográficamente, debido sobre todo a las epidemias provocadas por las enfermedades traídas por los europeos, la población indígena mesoamericana tuvo un declive cataclísmico: Gerhard estima que en 1550 sólo quedaban en la zona 158000 habitantes, cantidad que siguió decreciendo abruptamente en la segunda mitad del XVI por las epidemias de matlazáhuatl y cocoliztli, que redujeron la población indígena en más de noventa por ciento.[10]

Una de las zonas que más resintieron este terrible desastre demográfico fue precisamente la región que nos ocupa. La jurisdicción de Cuernavaca, que formaba parte del marquesado de Oaxaca asignado a Cortés y que éste seleccionó por su riqueza natural y posición geográfica estratégica como la capital de sus dominios, comprendía la mayor parte de lo que hoy es el estado de Morelos. Al oeste incluía los pueblos de Cuernavaca, Jiutepec, Tepoztlán, Oaxtepec, Yautepec, Xochitepec, Mazatepec, Tlaltizapán y Tlaquiltenango. Al este, Yecapixtla, Jantetelco, Jonacatepec, Tepalcingo, Atlacagualoya y Teutlalco. En 1551 se registraron en esta zona 32500 tributarios; para 1620 eran apenas 8084 y siguieron disminuyendo considerablemente hasta llegar, en 1643, a sólo 5258. A partir de este año la población se recuperó: 6985 en 1735 y 9333 en 1800. En medio de los dominios del marquesado se encontraban tierras realengas pertenecientes a la jurisdicción de Cuautla-Amilpas y que incluían pueblos como Cuautla, Ocuituco, Jamiltepec, Anenecuilco, Atencingo y Ahuehuepa. Aquí también ocurrió un gran desastre demográfico, pues de 7052 tributarios que se registran en 1570, su número descendió a sólo 849 en 1640, año en que inició una relativa recuperación, hasta alcanzar la cifra de 2130 en 1810.[11]

Junto con la caída poblacional ocurrieron otros cambios significativos. La riqueza de sus tierras y su cercanía a la ciudad de México provocaron el arribo de numerosos colonos españoles, con Cortés a la cabeza, quien

---

Borah, de 25 millones de personas para toda el área mesoamericana, han sido criticadas por otros autores y reducidas a menos de la mitad. De cualquier modo, aun las cifras menores propuestas son magnitudes y densidades de población sumamente elevadas, equiparables, o incluso superiores, a las de las regiones más pobladas de Europa y Asia en la misma época.

[10] Los mejores estudios sobre la población y la despoblación indígena en Mesoamérica siguen siendo los clásicos trabajos de Borah y Cook; véanse *The Aboriginal Population of Central Mexico on the Eve of the Spanish Conquest*, Iberoamerican, 1958; *Ensayos sobre historia de la población*, México, Siglo XXI, 1980, 3 vols., y *El pasado de México: aspectos sociodemográficos*, México, FCE, 1989. Para una crítica de los cálculos realizados por estos autores, véanse Ángel Rosenblat, *La población indígena y el mestizaje en América Latina*, Buenos Aires, Nova, 1954, 2 vols., y William Denevan, *The Native Population of the Americas in 1492*, Chicago, The University of Chicago Press, 1976.

[11] Gerhard, *op. cit.*, pp. 95-99.

obtuvo para sí el dominio de las tierras del valle de Cuernavaca y una amplia zona de tierras al este del valle de Amilpas, así como los derechos de encomienda sobre las cabeceras de Cuernavaca, Yautepec, Oaxtepec, Yecapixtla y Tepoztlán, las más importantes de la región.[12] Otros encomenderos y algunas órdenes religiosas se establecieron en el resto de las fértiles tierras bajas centrales; aprovecharon la despoblación indígena de la segunda mitad del XVI y desplazaron a varias de las comunidades sobrevivientes de una parte del usufructo de tierras y aguas.

El arribo de la caña

Los encomenderos y colonos españoles impusieron también cambios importantes en la economía indígena, el más importante de los cuales fue sin duda la introducción de la caña de azúcar, que desplazó a la producción indígena de maíz, algodón y otros cultivos tradicionales y alteró sustancialmente, a partir del siglo XVI, los usos del suelo y del agua de la zona. Aunque los pueblos indios conservaron buena parte de sus tierras —sobre todo hasta 1580— y continuaron cosechando maíz y otros cultivos, la llegada de los españoles creó nuevos asentamientos, nuevas necesidades y un nuevo mercado en el que la producción de azúcar, carne y trigo fue ganando importancia y monetarizando la economía indígena. La complementariedad y funcionalidad productiva de la zona con el exterior —el valle de México— y su propio interior se modificó también. La organización espacial y la utilización de los recursos se refuncionalizaron en manos de los nuevos colonos españoles, básicamente en beneficio del cultivo de la caña de azúcar en la región central, lo cual fue aprovechado por los nuevos dueños de la tierra, ya fuesen propietarios individuales o comunidades religiosas. La Conquista significó la desintegración de la organización espacial tal y como la habían establecido los asentamientos indígenas, a los cuales les fue sustraído el control de la explotación de sus recursos.[13]

Con la recuperación demográfica indígena y el incremento del mestizaje, ocurridos a partir del siglo XVII, se dio una aguda competencia por el dominio y usufructo de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo entre colonos españoles, órdenes religiosas, funcionarios de la Corona, elites indígenas y comunidades, sobre todo en las tierras bajas centrales,

[12] García Martínez, *El marquesado del Valle. Tres siglos de régimen señorial en Nueva España*, México, El Colegio de México, 1969; Ward Barret, *La hacienda azucarera de los marqueses del Valle, 1533-1910*, México, Siglo XXI, 1977.

[13] Crespo, "La diferenciación...", *op. cit.*, pp. 130-132, y "La hacienda...", *op. cit.*, pp. 41-42.

que fueron las más codiciadas por su riqueza y fertilidad, así como una modificación en los patrones de migración y ocupación del territorio. Las propiedades españolas dominantes, instaladas casi todas ellas en lugares que habían sido asiento de poblamientos prehispánicos que conservaron sus nombres originales, desplazaban y atraían al mismo tiempo a poblaciones indígenas de las tierras bajas del centro y de las tierras altas de la zona periférica.

El dominio político también se modificó. La estructura de dominación azteca fue sustituida por las instituciones españolas. Aunque hubo cambios en la elite indígena local, en términos generales ésta fue respetada y mantenida por la Corona y el marquesado, los cuales establecieron vínculos funcionales de alianza y colaboración con los caciques y gobernadores indios. Estos vínculos aseguraban el predominio español y, al mismo tiempo, reportaban beneficios a la jerarquía indígena que mediaba entre la gente común y las elites e instituciones españolas dominantes, mediante una compleja relación de alianzas y disputas que varió según la región, la época y los intereses en juego.

La conquista y la colonización españolas significaron, en resumidas cuentas, una desestructuración de las relaciones sociales prehispánicas y la imposición de una racionalidad totalmente distinta de la racionalidad indígena. A consecuencia de ello, los pueblos indios conservaron una fuerte identidad racial, cultural, política y económica que a lo largo de la Colonia fue puesta a prueba y desgastada por el creciente contacto con los grupos españoles, el mestizaje y el arribo de esclavos negros africanos traídos para trabajar en las propiedades azucareras. Hubo un gran mestizaje en la zona entre la población indígena y la negra, predominando, en la simbiosis, la cultura india. No obstante, el mestizaje y el contacto cotidiano entre los diferentes grupos y estratos tuvieron un efecto perturbador sobre la vida de las comunidades que, sin embargo, conservaron tradiciones y estructuras políticas propias y un sentido de identidad relativamente fuerte, en el cual jugó un papel central el sincretismo de las creencias prehispánicas con la religión católica y la labor evangelizadora de las órdenes mendicantes que se establecieron desde los primeros años.[14]

Hay que subrayar también los límites de esta identidad. Si bien es posible encontrar fuertes vínculos afectivos, económicos, de parentesco, de amistad y de trabajo, así como una serie de faenas realizadas colectivamente y un sistema de valores, tradiciones y creencias que mantenían la cohesión, una cierta noción de comunidad y de identificación cultural, ya desde antes de la Conquista existía una marcada desigualdad y estratificación en

[14] Robert Ricard, *La conquista espiritual de México*, México, FCE, 1986; Gerhard, *op. cit.*, pp. 95 y 98.

el interior de las sociedades indígenas, derivadas de la asimétrica distribución de la riqueza y de los poderes político y religioso y por la división del trabajo, factores que determinaban la existencia de clases y estratos sociales con papeles perfectamente diferenciados. Como se ha señalado en varios estudios, existían estratificación, diferenciación social y conflicto endémico entre comunidades indígenas, no sólo entre el Estado mexica dominante y sus señoríos tributarios, sino también entre estos mismos y aun en el interior de las propias localidades. Dependiendo del caso, estos conflictos agrupaban a veces en bandos distintos a pueblos enteros o bien enfrentaban a caciques y funcionarios indígenas con sus subordinados o, entre sí, a familias e individuos particulares.[15]

Después de la Conquista, la mezcla racial, de culturas, tradiciones y trabajos, los nuevos asentamientos y flujos migratorios, los nuevos patrones de uso de los recursos, las nuevas instituciones y reglas desarrolladas a lo largo de la época colonial modificaron radicalmente el paisaje de la zona.

El azúcar en la época colonial: el marquesado y el valle de Amilpas

La historia de las tierras bajas centrales, fértiles e irrigadas, está ligada a la introducción, desde 1524, de la caña de azúcar, que se convirtió, a partir del siglo XVII, en el cultivo más importante. La alta productividad y rentabilidad que desde los primeros tiempos demostró este producto, así como las condiciones requeridas para su explotación —que precisa de tierra fértil, abundancia de agua, de fuerza de trabajo y una relativamente alta inversión para irrigar la tierra todo el año y para transformar artesanal o industrialmente la caña en azúcar—, determinaron considerablemente la configuración de las relaciones sociales en dicha zona.

Cortés estableció los primeros campos cañeros en 1524 y, hacia 1530, construyó el primer ingenio, denominado Atlacomulco, en las cercanías de Cuernavaca. Durante más de cincuenta años, la influencia del marquesado impidió que pudieran crearse otros ingenios y monopolizó la comercialización del producto en la ciudad de México. Mediante compras a los principales de Cuernavaca, Cortés y sus descendientes se adjudicaron tierras aledañas al ingenio y, aprovechando la despoblación indígena, ocuparon tierras baldías que luego, al ser reclamadas por los reconstituidos pueblos indios, dieron lugar a disputas seculares. Los pueblos sujetos de Cuernavaca que fueron asignados a Cortés en encomienda, junto con los esclavos negros, proporcionaron la mano de obra que el ingenio necesitaba

[15] Pedro Carrasco *et al.*, *Estratificación social en la Mesoamérica prehispánica*, México, INAH, 1976; English Martin, *op. cit.*, pp. 11-21. Véase también Charles Gibson, *Los aztecas bajo el dominio español*, México, Siglo XXI (5a. ed.), 1980.

para la construcción de las instalaciones y el acueducto, la siembra, la cosecha y la transformación de la caña.[16]

Al monopolizar el marquesado esa región a partir de 1581, los propietarios privados españoles y las órdenes mendicantes tuvieron que establecer cañaverales, trapiches e ingenios en el otro valle fértil de la zona, Amilpas. Comenzó entonces un auge en la producción y comercialización de caña. Entre 1581 y 1620 se establecieron 44 trapiches, cañaverales o ampliaciones en las tierras aledañas a Cuautla y Yautepec. Estas construcciones se hicieron siguiendo el curso de los ríos. Así, en las riberas del Yautepec se asentaron San Diego Atlihuayán, Xochimancas (jesuita), Barreto y Acamilpa. Entre Yautepec y Cuautla se fundaron Oacalco, Oaxtepec, Pantitlán, San José Cocoyoc, Juchiquetzalco y San Carlos Borromeo. Sobre el curso del Cuautla, El Hospital (de los frailes hipólitos), Casasano, San Pedro Mártir Cuahuixtla (de los dominicos), Santa Inés, Santa Bárbara Calderón y Santiago Tenextepango.

Al oriente de este valle, siguiendo el curso del río Amatzinac, se fundaron Chicomocelo (jesuita) y los trapiches de Tlacotepec, Temoac y Zacualpan, todos ellos en la zona fría cercana al Popocatépetl. En el mismo oriente, pero más al sur, en tierras calientes, se establecieron los ingenios de Santa Clara Montefalco, Santa Ana Tenango y San Ignacio.

El monopolio del marquesado en Cuernavaca comenzó resquebrajarse en 1607, con la fundación de la hacienda de Temixco, dos leguas al sur de Cuernavaca; en 1614 se estableció el ingenio de Jiutepec (luego conocido como San Gaspar); en 1618, San Francisco Zacualpan (después llamado San Vicente), y en 1621, Miacatlán. Estas haciendas, todas cercanas a la ciudad de Cuernavaca, aprovechaban los ricos recursos acuíferos del lugar. Posteriormente, en los valles de Jojutla y Tlaquiltenango, ubicados más al sur, se establecieron los ingenios de Santa Rosa Treinta Pesos, San Nicolás Obispo y Santiago Zacatepec.[17]

La mayoría de estos ingenios y trapiches fueron establecidos a fines del XVI y comienzos del XVII. Se instalaron principalmente en tierras baldías, aprovechando la despoblación indígena, mediante mercedes reales, composiciones y censos perpetuos, aunque también, en ocasiones, la ocupación se realizó mediante compras o arriendos de tierras indígenas o, simplemente, mediante la ocupación *de facto*. Esto provocó muchos abusos, despojos y pleitos por la posesión y el uso de tierras y aguas, litigios que crecieron en las tierras bajas centrales durante los siglos XVII y XVIII con la recuperación demográfica indígena. En estos litigios, la corona española

[16] García Martínez, *op. cit.*, pp. 51-72; Barret, *op. cit.*, pp. 47-48, 66-80; Crespo (dir.), *Historia del azúcar*, México, FCE, 1988, vol. I, pp. 34-48.

[17] Crespo (dir.), *op. cit.*, pp. 85-89.

adoptó una posición ambigua, pues, si bien en ocasiones dictaminó en favor de las comunidades despojadas, la mayoría de las veces favoreció a los propietarios particulares y a las órdenes religiosas, particularmente cuando sus necesidades financieras la hicieron recurrir a las composiciones, procedimiento que legitimó *de facto* las ocupaciones y usufructos de los particulares y las órdenes religiosas mediante un pago en efectivo que regularizaba la posesión.

El desarrollo de las explotaciones azucareras fue particularmente tortuoso. En las dos décadas finales del XVI, atractivas condiciones mercantiles derivadas del ascenso de los precios mundiales del azúcar y una política de promoción del cultivo por parte de la Corona, en combinación con la brutal despoblación indígena, facilitaron el auge de nuevos establecimientos y un primer *boom* de la producción y comercialización de este producto. Sin embargo, estos años coincidieron con la curva más baja de población indígena. Las necesidades de uso intensivo de mano de obra por la industria azucarera y su escasez generaron difíciles condiciones que ni el repartimiento ni la compra de esclavos negros pudieron solucionar. Además, la Corona dio un viraje y, en 1599, prohibió el repartimiento de indios en los ingenios y la construcción de otros nuevos; con ello intentaba proteger la declinante mano de obra indígena, fomentar el cultivo de maíz y alimentos tradicionales y dar preferencia nuevamente a la asignación de mano indígena en las minas.

La caña de azúcar ingresó por esos años a la economía indígena al monetarizarse el pago de tributos y diezmos. Varios pueblos y familias comenzaron a sembrar caña en pequeñas parcelas y a venderla comercialmente.[18] Sin embargo, esto no significó la desaparición de los cultivos tradicionales de las comunidades indígenas, con el maíz en primer término, ni de la economía de subsistencia. Para la mayoría de la población india de la zona, la caña de azúcar siguió siendo un producto marginal.

Redistribución de los recursos productivos en el siglo XVII

La política de congregaciones, puesta en práctica por la Corona junto con las órdenes religiosas, reordenó los asentamientos indígenas. Muchos pueblos desaparecieron y otros, al ser reubicados, perdieron sus antiguas tierras y el uso de aguas. En Amilpas, de 6 cabeceras y 6 estancias indias que había en 1570, sólo sobrevivían 4 pueblos en 1603: Cuautla, Ahue-

[18] *Ibid.*, pp. 62, 74-79. Para una visión general de la inhibición de la producción azucarera en la Nueva España, véase Gisela Landázuri Benítez y Verónica Vázquez Mantecón, *Azúcar y Estado (1750-1880)*, México, CFE-SEMIP, 1988, pp. 14-35.

huepa, Anenecuilco y Tetelcingo. Las 10 estancias de Ocuituco, al noreste, fueron congregadas en esa cabecera, y las siete de Jonacatepec, en el este, se redujeron a dos. A su vez, de los 82 pueblos que eran sujetos de Cuernavaca en 1532, sobrevivían apenas 35 en los comienzos del siglo XVII; en Yautepec, de 13 sólo quedaron 4. Paradójicamente, el número de estancias indias sujetas a Tepoztlán, en lugar de disminuir, creció.[19]

Las comunidades no tuvieron un papel pasivo en este proceso. Debido a que las congregaciones tenían como objeto proteger a la población indígena, racionalizar su localización y permitir el pago de los tributos a la Corona y los diezmos a la Iglesia, varias reubicaciones de comunidades se realizaron en buenas tierras. Los pueblos podían además objetar los sitios que se les querían asignar y de hecho lo hicieron en varias ocasiones. Así, unos pudieron quedarse en sus lugares de origen y otros se trasladaron a lugares que les atraían.[20] Más aún, algunos caciques y gobernadores indígenas aprovecharon estos reordenamientos y la legislación española no sólo para defender sus tierras sino también para conseguir más, como ocurrió en Yautepec en 1614; Jiutepec obtuvo en 1630 la confirmación de sus propiedades, y pueblos como Nexpa, Cuentepec y San Jerónimo Mitla pudieron negarse con éxito a ser removidos.[21]

Así, durante el siglo XVII se advierte en la región un proceso general de redistribución y reapropiación de los recursos productivos. Por una parte, hubo un aumento de las propiedades agrarias españolas, cuyos principales beneficiarios fueron las órdenes religiosas. Éstas, debido a su mayor capacidad financiera para sacar adelante una industria que necesitaba de fuertes inversiones y créditos durante el año, y a las donaciones provenientes de la Corona o a los testamentos y deudas de españoles y de indígenas, pudieron quedarse con la mayor parte de las haciendas y los ingenios. Otros propietarios españoles que contaban con recursos financieros y relaciones políticas lograron consolidar y expandir sus empresas. Paralelamente, algunos miembros de la elite indígena también consiguieron incrementar su control sobre tierras y aguas, beneficiándose personalmente y consolidando su poder en sus comunidades. A menudo, estos caciques rentaban parte de las tierras comunales a propietarios españoles y religiosos, obteniendo con ello dinero que se utilizaba en las fiestas religiosas y otros gastos de la comunidad o bien para fines personales.[22]

Durante la mayor parte del siglo XVII tuvo lugar un crecimiento de las haciendas azucareras y de las comunidades indias. Las haciendas atra-

[19] Gerhard, *op. cit.*, pp. 95 y 99.
[20] English Martin, *op. cit.*, pp. 23-28 y 47-50.
[21] *Ibid.*, pp. 51 y 61-62.
[22] *Ibid.*, pp. 52-55.

jeron a la población india que, por residir en ellas, no tenía que pagar tributos y al mismo tiempo se beneficiaba con el acceso a tierras, alimentos y, en ocasiones, salario. Sin embargo, a pesar de la recuperación demográfica india, las necesidades de fuerza de trabajo de las haciendas nunca alcanzaron a ser cubiertas. La mayor parte de las haciendas azucareras no fue capaz de sortear las dificultades financieras causadas por la declinación de los precios del azúcar, la acumulación de deudas, la falta de capital y la pérdida de las cosechas por las heladas. Hacia el final del XVII, la mayor parte de ellas estaba en bancarrota e, incluso, muchas desaparecieron o dejaron de sembrar y procesar caña. Esto disminuyó las presiones sobre la tierra, el agua y la mano de obra de las comunidades, las cuales tuvieron varias décadas de recuperación económica y demográfica, con una relativamente próspera agricultura en pequeña escala que no fue interrumpida hasta la tercera década del siglo XVIII, momento en que ocurrió una nueva y grave epidemia de tifo que diezmó nuevamente a la población india.[23]

Crisis y recuperación en el siglo XVIII

En el siglo XVIII continuaron las dificultades económicas de las explotaciones azucareras. Sólo las más grandes lograron sobrevivir e incluso crecer, absorbiendo a otras que estaban en quiebra, como fue el caso de José de Palacio, que compró Miacatlán, San Gaspar, Temixco y El Puente, o de José García Aranda, quien adquirió Santa Rosa Treinta Pesos, Mitlapán y San Vicente, compras, todas ellas, que tuvieron lugar durante la primera mitad del XVIII y en la zona centro-occidental de lo que actualmente es Morelos, en el valle de Cuernavaca.

A los propietarios del valle de Cuautla-Yautepec les fue peor, pues varios de los más grandes ingenios de esa zona —como Guasapán y Xochiquetzalco, de los padres jerónimos, o Cocoyoc, Pantitlán y Atlihuayán— tuvieron que fragmentar sus propiedades y arrendarlas a españoles y pueblos indios para que sembraran maíz.

Así, durante la primera mitad del XVIII se incrementó la producción de maíz y otros alimentos y cultivos tradicionales. Con la menor presión ejercida sobre los recursos naturales y humanos por parte de los grandes propietarios creció también, en ambos valles, la pequeña y mediana producción agrícola de los ranchos de españoles y mestizos, junto con la de comunidades indias como Oaxtepec y Yautepec. Sin embargo, no todos los pueblos indios tuvieron la misma suerte, pues Jantetelco, Jonacatepec,

[23] *Ibid.*, pp. 65-85.

Miacatlán y Xochitepec enfrentaron graves dificultades para subsistir.[24]

En 1760 comenzó un nuevo auge de la producción azucarera, originado por una reactivación de la economía novohispana, en general, y de la minería, en particular, que hicieron crecer la demanda de productos agrícolas para satisfacer a una población también creciente. Las reformas borbónicas jugaron un papel importante para estimular la producción azucarera con la disminución de los impuestos y la legalización de la elaboración de aguardiente. Además, el arribo de nuevas inversiones y la adquisición de tecnología más moderna permitieron incrementar notablemente la rentabilidad por hectárea.[25]

Competencia y complementariedad

Este auge reanudó la presión de las grandes haciendas para conseguir el control de las tierras, aguas y fuerza de trabajo. Por consiguiente, renacieron las disputas agrarias por concepto de tierras y aguas e incluso es probable que haya sido más agudo el conflicto perenne por el control de los recursos acuíferos. El pueblo de Oaxtepec tuvo que defenderse de los embates del ingenio del mismo nombre y de la hacienda de Cocoyoc por la utilización del agua, en un pleito que duró más de cien años. Disputas semejantes tuvieron lugar en los pueblos de Miacatlán y San Vicente (contra la hacienda de Atlachaloaya, en el valle de Cuernavaca) y en el pueblo de Cuautla (contra las haciendas de Cuahuixtla, Buenavista, Hospital y Santa Inés). Estas últimas disputas fueron particularmente enconadas y significaron la pérdida de los derechos de tierras y aguas de los pueblos en cuestión.[26]

La necesidad creciente de fuerza de trabajo estacional y permanente en las explotaciones azucareras se satisfizo con población masculina proveniente, para el valle de Cuernavaca, de las tierras situadas al noroeste del valle de Tianguistengo y sus alrededores, en lo que hoy es el Estado de México, y para Cuautla-Amilpas, de las tierras montañosas y frías del norte de la región. Estos movimientos migratorios lograron, en cierta medida, superar la dependencia de la mano de obra que necesitaban las haciendas respecto de los pueblos de las tierras de los valles centrales, con muchos de los cuales tenían litigios agrarios.[27] La población indígena de la región creció de manera significativa en la segunda mitad del siglo

[24] *Ibid.*, pp. 88-94.

[25] La producción obtenida por hectárea entre 1790 y 1800 fue de 170 toneladas, el doble que en 1750 y cuatro veces mayor que la de fines del XVI. Véase Crespo (dir.), *op. cit.*, pp. 142-144.

[26] English Martin, *op. cit.*, pp. 110-116.

[27] *Ibid.*, pp. 148-153; Crespo (dir.), *op. cit.*, pp. 361-362.

XVIII, particularmente en las zonas del este y el oeste. Sin embargo, en la zona central del valle de Cuautla-Yautepec no sucedió lo mismo, no sólo por los problemas naturales y la competencia con las haciendas, sino también por la política deliberada de los gobernadores indios de limitar la inmigración indígena y la adjudicación de tierras para nuevas familias y favorecer la renta de terrenos a particulares españoles y mestizos, con quienes establecieron vínculos de compadrazgo, amistad y conveniencia que, a menudo, provocaron protestas y denuncias contra ellos por parte de la población indígena.[28]

Durante la segunda mitad del XVIII, pues, tuvo lugar un proceso de concentración de tierras y recursos productivos en las mayores haciendas azucareras, hecho que afectó de manera desigual a las distintas zonas de la región. Los pueblos del norte, en la zona de monte y bosque frío, conservaron sus tierras, tal vez por ser inadecuadas para la agricultura, y una relativa autonomía respecto de los centros políticos y económicos, y no tuvieron, por lo general, muchos conflictos con las haciendas. Sólo perdieron sitios de agostadero para la ganadería en lugares cercanos a la ciudad de México. Los pueblos alejados de las haciendas también conservaron sus tierras, de mala calidad, y sólo perdieron los lomeríos suaves para el ganado. En cambio, varios de los pueblos que volvieron a tener presencia con la recuperación demográfica y que se encontraban ubicados en la zona cañera de las fértiles tierras centrales se vieron sometidos a una dura competencia con las haciendas por la posesión y el control de tierras y aguas.[29]

La simbiosis que Tutino ha encontrado entre las haciendas y las poblaciones indígenas en algunas regiones del centro de la Nueva España durante la época colonial difícilmente se dio en los valles de Cuautla, Oaxtepec y Yautepec, regiones en las que las haciendas azucareras prosperaron y donde sus propietarios no veían con buenos ojos que algunos pueblos hubieran podido conservar sus tierras y aguas, por lo que ocurrió una fuerte competencia entre ambos. Lo mismo puede afirmarse para el valle de Cuernavaca. En cambio, con las comunidades de las tierras altas del norte tuvieron una relación más funcional y, ahí sí, simbiótica, porque no había tierras fértiles e irrigables en disputa y las haciendas necesitaban de la mano de obra indígena que constantemente era atraída a las explotaciones azucareras. Se había establecido una complementariedad productiva, si bien no exenta de conflictos, entre la caña, por un lado, y el maíz y otros productos necesarios para la supervivencia de la pobla-

[28] English Martin, *op.cit.*, pp. 163-168.

[29] Alicia Hernández Orive, "Haciendas y pueblos en el estado de Morelos, 1535-1810", México, CEH -El Colegio de México (tesis de maestría en historia), 1973, pp. 126-131.

ción, por otro, tanto en las haciendas como en las localidades campesinas aledañas a la zona irrigada, o en aquellas más alejadas y altas cuya mano de obra masculina se empleaba temporalmente en las haciendas durante la zafra o arrendaban tierras a los propietarios azucareros durante el resto de la temporada para cosechar productos agropecuarios tradicionales.[30]

Estratificación, conflicto y cohesión

Hay que subrayar también que en el siglo XVIII ocurrieron diversas disputas entre pueblos motivadas por límites de tierras, el aprovechamiento de recursos naturales y comerciales, y diversas rivalidades de liderazgo y dominio político entre personajes notables de las comunidades. Además de estas fricciones ocurridas entre pueblos vecinos hubo también querellas dentro de las propias comunidades, las cuales provocaban rivalidades entre los habitantes de un mismo poblado o entre los de dos poblaciones y, también, entre familias particulares, produciéndose así una fuente endémica de rivalidades, odios y venganzas que desembocó en importantes brotes de violencia. En este sentido, es significativa la disputa que tuvo lugar en Yautepec, hacia el final del periodo colonial, por la utilización de dos ojos de agua, misma que dividió a los dos barrios de la comunidad en bandos opuestos, unos aliados del párroco y otros de un hacendado.[31] A menudo, estas alianzas atravesaron las barreras de clase y las diferencias étnicas y más bien se definían por los intereses particulares en juego y por la influencia de los líderes y notables locales. En la fría y boscosa zona periférica del norte, relativamente carente de recursos y, por sus mismas características geográficas, región agreste, proliferó además el bandidaje de manera endémica.

En las comunidades indígenas campesinas de toda la región se mantuvo una marcada estratificación, en continuidad con lo que había acontecido en la época prehispánica. La diferenciación social, económica y política se manifestó a través de una notoria desigualdad de riqueza y privilegios a favor de la elite indígena, que conservó su *status* favorecido y que servía de intermediaria entre la población de las comunidades y las autoridades coloniales hispánicas. Con la consolidación de las relaciones coloniales y el avance de una economía que producía un importante artículo para el mercado –el azúcar—, cuyo proceso necesitaba arraigarse y utilizar una cantidad importante de fuerza de trabajo estacional, las diferencias sociales y económicas en las poblaciones indígenas fueron ensanchándose.

[30] English Martin, *op. cit.*, pp. 168-169.
[31] *Ibid.*, pp. 177-192.

El desarrollo interno de la economía indígena y mestiza, cuyos asentamientos conservaban tierras comunales como ejidos, bosques y pastizales y efectuaban algunas labores colectivas, había generado una forma de usufructo de la tierra privada y de producción individual que, a su vez, condujo al fortalecimiento de tendencias individualistas en las comunidades y a una escala de grados diferentes de riqueza en las familias e individuos.

Esta estratificación social estaba determinada por la variable productividad de la tierra, por la posibilidad de utilizar el riego, de obtener crédito, de tener animales e instrumentos de labranza, de vender productos excedentes, de obtener dinero por la venta de la fuerza de trabajo, de heredar o no la tierra familiar o de tener o no acceso a ella, por el crecimiento demográfico y la división del trabajo entre agricultura, artesanía, comercio y arriería, por la cercanía de las autoridades políticas y religiosas, etc., recursos y habilidades utilizados todos ellos en forma diferencial. Había, pues, en las comunidades, diferencias de riqueza y poder y, por lo tanto, divisiones internas, explotación y violencia.

Estos factores actuaban en un sentido centrífugo, opuesto a la integración y cohesión comunitarias, y produjeron una marcada estratificación social con sectores más o menos acomodados, medios y pobres. La estratificación interna y las disputas existentes entre las comunidades y dentro de las mismas representan aspectos importantes para comprender las actitudes y comportamientos políticos que asumieron los pueblos de la región desde la época colonial.

Así, pues, hay que subrayar la existencia de esos dos elementos centrales: la fuerte estratificación y los conflictos internos y externos de las comunidades —con las consiguientes disputas entre sus habitantes y los rasgos de violencia endémica por motivos económicos, de jurisdicción, dominio político y rivalidades personales. No debe dejar de señalarse que persistió, a pesar de todo, una relativamente alta cohesión interna de los pueblos y comunidades en sus relaciones con el exterior —sustentada en una identidad básica de lenguaje, organización, cultura, instituciones, fiestas religiosas, santos patronos, costumbres y tradiciones— que les permitió mantenerse unidos y defenderse de las intromisiones y agresiones exteriores, provenientes de las haciendas de la zona, del gobierno central, de las autoridades locales, de los grupos blancos y mestizos y de otras poblaciones vecinas con las que tuvieran conflictos.[32]

[32] Sobre la estratificación indígena desde la época prehispánica puede consultarse la vasta obra de Pedro Carrasco, particularmente "Social Organization of Ancient Mexico", en *Handbook of Middle American Indians,* Austin, University of Texas Press, 1971, vol. 10, pp. 349-375; "The Peoples of Central Mexico and Their Historical Traditions", en *ibid.*, vol. 11, pp. 459-473; "La sociedad mexicana antes de la Conquista", en *Historia general de México*, México, El Colegio de México, 1987, vol. 1, pp. 165-288; *Estructura político-territorial del imperio tenochca. La*

En las comunidades funcionaba un liderazgo de tipo tradicional, patriarcal, en el que los servicios prestados a la colectividad, el prestigio, el cumplimiento de obligaciones recíprocas, constituían un complejo de prácticas y comportamientos, reconocidos mutuamente, que daba solidez al grupo y le permitía actuar más o menos homogéneamente. El ascenso social y la concentración de poder estaban, por lo general, en manos de la gente de mayor edad, cuya experiencia orientaba las decisiones y decidía lo que debía hacerse en caso de existir intereses particulares contrapuestos.[33]

A fines del periodo colonial, la vida de los habitantes de la región había cambiado en varios aspectos. La recuperación económica y demográfica y el auge de las haciendas azucareras de la zona agravaron las tensiones sociales por el control de los recursos productivos. No obstante, al igual que en el resto del territorio novohispano, no se produjeron rebeliones generales contra el orden colonial a pesar de las disputas existentes.[34] Salvo algunas excepciones en las que hubo rebeliones locales, los pueblos

---

triple alianza de Tenochtitlan, Tezcoco y Tlacopan, México, El Colegio de México/FCE/Fideicomiso para las Américas, 1996; Pedro Carrasco *et al., op. cit.* Catalina Rodríguez Lazcano señala sumariamente las características que mantuvieron los pueblos en la Colonia en "Los pueblos del área de Cuautla en el siglo XVIII", en Horacio Crespo (coord.), *Morelos, cinco siglos de historia regional*, México, CEHAM-Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 1984, pp. 95-105. También puede verse el trabajo de Brígida von Mentz, "La región morelense en la primera mitad del siglo XIX", *ibid.*, pp. 131-147. En su excelente estudio sobre la transición del México tradicional del antiguo régimen, François Xavier Guerra destaca el papel de los pueblos y su cohesión interna, un factor que tampoco debe desdeñarse, con las limitaciones señaladas: "[...] en México el pueblo [...] tenía una importancia fundamental en la identidad de las personas y los grupos. Célula social básica, en la tradición prehispánica del calpulli, la época colonial no menguó su cohesión interna y lo mantuvo como algo separado del exterior". Y señala también su continuidad con la época posterior: "En la época independiente conservaba fuertes vínculos internos: parentesco, santo patrono, fiestas religiosas y civiles, autoridades propias religiosas y civiles, tierras comunales. Desde luego hay conflictos internos y estratificación. Pero hacia afuera actúa siempre como algo homogéneo. En las revueltas y levantamientos de todo tipo que hay son actores colectivos, no individuales los que se mueven"; véase *México, del Antiguo Régimen a la Revolución*, México, FCE, 1988, t. I, pp. 141-142. Desde luego, lo anterior no implica que las comunidades indígenas actuaran siempre homogéneamente ante el exterior, ni que sus diferencias y tensiones internas disminuyeran. Véase también la interesante discusión expuesta por Florencia Mallon en la que alerta sobre la idealización de las comunidades campesinas, frecuente entre muchos académicos, que a menudo olvida las divisiones y conflictos en el interior de las comunidades. Por lo contrario, Mallon asigna un papel determinante al conflicto interno para explicar cómo el consenso comunitario, cuando se alcanza, es el producto de una compleja articulación de intereses, discursos y perspectivas, así como de alianzas entre gente de diferentes edades, género, etnicidad y riqueza (Mallon, *Peasant and Nation..., op. cit.*, pp. 64-65).

[33] Mallon, *Peasant and Nation..., op. cit.*, pp. 72-73.

[34] William Taylor, *Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas*, México, FCE, 1987.

por lo regular confiaron en la solución pacífica de sus reivindicaciones agrarias por medio de la legislación y las instituciones coloniales.[35] El descontento social usualmente asumió formas de protesta aislada, individual y subterránea.

La ruptura del orden colonial

Los rasgos y características descritos se conservaron aun después de la Colonia e influyeron en el comportamiento político diferenciado de las poblaciones indígenas y mestizas de la región cuando surgió la rebelión campesina de Independencia, encabezada por Hidalgo y Morelos. La revuelta tuvo apoyo particularmente en la Costa Grande, Chilapa, Tixtla, Chilpancingo, Taxco, en lo que hoy es el estado de Guerrero y, en menor medida, en el territorio del actual estado de Morelos, en donde hubo hombres —como el párroco de Jantetelco Mariano Matamoros, y Francisco Ayala, propietario de la hacienda de Mapastlán— que lograron la incorporación de gente de sus localidades a la rebelión. Otras comunidades también se sumaron a las filas insurgentes y apoyaron las incursiones del cura Morelos y su campaña en Cuautla. Sin embargo, en contraste, aun en la misma zona algunos pueblos se adhirieron abiertamente a la causa realista. En Guerrero, la Costa Chica siempre apoyó a las tropas coloniales. En lo que hoy es Morelos, el barrio de Santiago Yautepec se organizó para impedir la entrada de las tropas del cura Morelos, al igual que los contingentes de trabajadores residentes en las haciendas, organizados por Gabriel Yermo y otros importantes propietarios que consiguieron apoyos para la causa realista.[36] La actitud ante la lucha independentista varió según las regiones y el grado de legitimidad que tuvieran los propietarios españoles, quienes invariablemente apoyaron y sostuvieron la causa realista.

Como han señalado Tutino y otros autores, el fracaso del movimiento insurgente se debió al escaso o nulo apoyo brindado por las comunidades indígenas y mestizas de la región central novohispana, que no se movilizaron colectivamente —salvo en el Bajío, en la zona de Guadalajara y en partes de la tierra caliente guerrerense— en contra del régimen colonial ni se incorporaron a las huestes independentistas. Tampoco lo hicieron los residentes mestizos o mulatos de las haciendas ni la mayoría desposeída de los gañanes, que eran los habitantes más pobres y carentes de tierra en las comunidades.[37]

[35] Hernández Orive, "Haciendas y pueblos...", *op. cit.*, pp. 132-133.

[36] English Martin, *op. cit.*, pp. 193-194; Guardino, *op. cit.*, pp. 49-54.

[37] Tutino, *op. cit.*, pp. 126-136, y, del mismo autor, "Cambio social agrario y rebelión campesina en el México decimonónico: el caso de Chalco", en Friedrich Katz (comp.), *Revuelta,*

La guerra de Independencia afectó considerablemente la producción económica, el mercado doméstico y las actividades de exportación que se habían desarrollado durante la Colonia en la región que nos ocupa. De manera particular interrumpió el auge de la producción azucarera. Varios de los principales hacendados, ya por dificultades financieras, ya por las represalias que sufrieron debido a su condición de españoles, vieron destruidas sus propiedades. Aunque las haciendas de los valles de Cuernavaca, Amilpas, Yautepec y Jojutla salieron mejor libradas que las asentadas en las regiones costeras, en términos generales se debilitó la industria azucarera y esta debilidad relativa permitió una mayor libertad de maniobra a las poblaciones campesinas, algunas de las cuales, como Nexapa y Tetecala, pudieron recuperar sus tierras en los años posteriores a la Independencia.[38]

Las crisis políticas que se sucedieron en la nueva república, así como la inestabilidad que imperó en la primera mitad del siglo XIX y que se prolongó hasta después de las guerras de Reforma, desestabilizaron de manera particular la producción azucarera y provocaron la recomposición del grupo de los hacendados. Las necesidades de crédito y financiamiento hicieron que algunos de ellos —los que lograron sobrevivir a la vorágine de esas décadas, y otros nuevos— establecieran una estrecha relación con comerciantes ricos que controlaban el mercado de la ciudad de México. La fusión de estos grupos consiguió nuevas inversiones para la actividad azucarera, que, sin embargo, no recuperó los niveles de producción, productividad y eficiencia que había alcanzado en la Colonia hasta la época porfiriana.[39]

Ofensiva liberal y resistencia campesina

En las tres décadas que siguieron a la Independencia, la política de los diferentes gobiernos ante el agro fue ambigua y confusa. La mayoría de los liberales tenía una posición ideológica contraria a la propiedad comunal

---

rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX, México ERA, 1990, vol. 1, pp. 101-106. Para un fino análisis de las condiciones en las cuales se desarrolló la incorporación de la población indígena de la región de Jalisco a la revuelta de Hidalgo y de sus características, véanse, en esta misma obra, los artículos de Eric Van Young, "Hacia la insurrección: orígenes agrarios de la rebelión de Hidalgo en la región de Guadalajara", vol. 1, pp. 164-186, y de William B. Taylor, "Bandolerismo e insurrección: agitación rural en el centro de Jalisco, 1790-1816", vol. 1, pp. 187-222.

[38] Crespo (dir.), *op. cit.*, pp. 94-95; English Martin, *op. cit.*, pp. 195-196.

[39] María Teresa Huerta, "Formación del grupo de hacendados morelenses", en Crespo (coord.), *op. cit.*, pp. 149-163, y "Los hacendados de Morelos y el poder", *Historias* (México, INAH), núm. 14, julio-septiembre de 1986, pp. 83-93.

y anticorporativa —las cuales eran vistas como lastres— que pugnaba por la fragmentación de las tierras en poder de las comunidades indígenas y la Iglesia y proponía su asignación individual. En la visión liberal, esta posesión privada de las tierras permitiría el desarrollo del agro mediante empresas particulares y serviría para que los campesinos indígenas salieran de su estado de marginación y alcanzaran el *status* de ciudadanos iguales ante la ley. Aunque la federación no adoptó una postura precisa al respecto, en la Constitución de 1824 se estableció que, en los estados, los prefectos políticos podían fragmentar la propiedad comunal y transferirla a sujetos particulares. Las legislaciones estatales de la zona central del país establecieron la desaparición de la propiedad comunal. Sin embargo, la notable debilidad del Estado nacional, en el periodo posterior a la Independencia, impidió su aplicación.

A esta debilidad se sumó la presencia, en algunas regiones, de una fuerte tradición de poblaciones campesinas que reivindicaban la propiedad comunal, lo cual se amalgamó con el objetivo de los dirigentes liberales de fortalecer las finanzas de los municipios y de asegurarles un ingreso fijo proveniente de la posesión y renta de las tierras comunales denominadas "propios". Así, la debilidad del Estado central, el pragmatismo de los líderes liberales y la necesidad de contar con el apoyo de algunos caudillos regionales —cuyo poder local conservaba resabios de una tradición de gobierno de tipo patriarcal y tutelar ejercido sobre las comunidades indígenas— dieron por resultado que, en los hechos, pese a la legislación liberal anticomunalista y a las inclinaciones doctrinarias de los ideólogos y políticos liberales, las propiedades comunitarias permanecieran sin gran cambio en la mayoría de las regiones.[40] Estas dificultades y contradicciones se advirtieron con particular énfasis en los debates del Congreso mexiquense que tuvieron lugar entre 1825 y 1828, así como en las recomendaciones y medidas adoptadas por la administración de esa entidad. En resumidas cuentas, la política de los gobiernos liberales en esos primeros años después de la Independencia, a pesar de sus intenciones explícitas, no afectó las grandes propiedades agrarias particulares ni eclesiásticas y

[40] Tutino, "Cambio social agrario y rebelión...", *op. cit.*, pp. 115-116. Este autor señala que el ataque a la propiedad comunal estaba claramente destinado a liberar los territorios mexicanos de la resistencia de los pueblos. Romana Falcón, en una reciente investigación, señala que "no se intentaba privar a los campesinos de tierras, sino de la forma corporativa de la propiedad: el fundamento de la solidaridad de los pueblos. Como consecuencia de ello, estos campesinos e indios, con sus parcelas, habían de enfrentarse solos a los hacendados y a los funcionarios de gobierno y no como grupos comunitarios con derechos de propiedad conjuntos" (Romana Falcón, *Las naciones de una república. La cuestión indígena en las leyes y el Congreso mexicanos, 1867-1876*, México, Cámara de Diputados-Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas, 1999, serie V, vol. 1, t. 1, pp. 58-59).

se vio obligada a tolerar, a regañadientes, la existencia de la propiedad comunal, que en muchas regiones prácticamente no fue fragmentada.[41] Los ataques a las comunidades campesinas y a la Iglesia —que significaron un cambio importante en el patrón de propiedad, golpearon severamente a ambas instituciones y se convirtieron en una fuente endémica de conflictos agrarios— tuvieron lugar en las décadas siguientes.

Charles Hale sostiene que los conservadores de la época consideraban que la anarquía y las rebeliones indígenas que acontecieron en el norte del país, Yucatán, Guerrero, Oaxaca y la Sierra Gorda, durante el decenio 1840-1849, tenían por causa la resistencia indígena a los trastocamientos impuestos por los intentos de modernización liberal y que, por lo tanto, consideraban también que debía regresarse al sistema colonial y a su legislación protectora y tutelar de los indígenas, respetando sus tradiciones, su organización y, de manera particular, su religión.[42] No obstante, la respuesta de las elites conservadoras, del gobierno central e, incluso, de algunos prominentes liberales consistió en sofocar, mediante la represión, las revueltas campesinas que tuvieron lugar en las regiones señaladas durante esos años. Detrás de tales revueltas estaba la oposición campesina al avance de las haciendas, a la modernización agrícola comercial, a los agravios cometidos por algunos administradores y hacendados, y al alza de impuestos; para ello, los campesinos rebeldes aprovecharon la notoria debilidad del Estado y las pugnas entre las elites. Algunos caudillos regionales prominentes, como Juan Álvarez, se hicieron eco de las reivindicaciones agrarias de pueblos de la zona caliente —de los actuales estados de Guerrero y Morelos—, canalizaron sus protestas, afianzaron su liderazgo basado en representar hasta cierto punto las demandas agrarias de los pueblos y, también, sacaron provecho de esta movilización para fortalecer su posición contra el gobierno central. Las convulsiones y la inestabilidad política que tuvieron lugar en esas décadas impidieron que el problema de la tierra y la desaparición de la propiedad comunal pudiera resolverse.[43]

Empero, como señala Romana Falcón, "la lucha por destruir a las corporaciones cimbró de tal manera a la tradición agraria, que el campo acabó siendo escenario de frecuentes levantamientos de pueblos que consideraban agotadas las vías pacíficas para proteger su capacidad de subsistencia, así como lo que desde su punto de vista eran sus recursos naturales y sus derechos legítimos".[44]

[41] Charles Hale, *El liberalismo mexicano en la época de Mora*, México, Siglo XXI (8a. ed.), 1986, pp. 230-240.

[42] *Ibid.*, pp. 248-252.

[43] John M. Hart, "La guerra de los campesinos del suroeste mexicano en los años 1840: conflicto en una sociedad transicional", en Katz (comp.), *op. cit.*, pp. 225-241.

[44] Falcón, *Las naciones...*, *op. cit.*, p. 65.

La identidad del Sur

Durante la Independencia y en las décadas posteriores, en la región conocida como la tierra caliente —lo que hoy es Guerrero y los valles de Cuernavaca y Cuautla— hubo movilizaciones campesinas, de indígenas y mestizos, que lograron, hasta cierto punto, la integración de una identidad regional de carácter histórico, cultural y político, construida alrededor de los liderazgos tradicionales de Vicente Guerrero, primero, y de Juan Álvarez, después. Lo que aglutinaba a los sectores indígenas, campesinos, de pequeños propietarios, ganaderos, comerciantes, arrieros y parte de las clases medias de la zona, entre los que estaban algunos curas rurales, fue la alianza e identidad que dieron a las comunidades de la zona las luchas de Independencia y la resistencia contra los abusos y el poderío de las clases dominantes regionales, en su mayoría identificados como españoles, así como una enconada resistencia de esos caudillos y de sus bases sociales de apoyo a los esfuerzos unificadores y a los avances del centro político nacional.

En la década de 1850, en los valles de Cuernavaca y Cuautla, los pueblos de Tepoztlán, San Francisco Chicolula, Xochitepec y Tlayacapan tuvieron conflictos por tierras y aguas con las haciendas de Oacalco, Miacatlán, Chiconcuac y San Vicente. Estos conflictos derivaron en enfrentamientos violentos. Los campesinos, que exigían su derecho a seguir utilizando las tierras, recibieron ayuda de destacamentos de guardias nacionales de la zona y contaron con el apoyo, abierto o velado, de Juan Álvarez, a pesar de lo cual fueron reprimidos por las fuerzas estatales y federales. Algunos hacendados calificaron el clima de violencia crónico como una verdadera guerra de castas. Los oficiales federales identificaron como socialistas sediciosos a algunos de los líderes locales y los asesinaron. En el curso de esos años, la violencia produjo la muerte de muchos hacendados españoles y sus empleados, y también de decenas de campesinos y líderes locales.[45]

La lucha de las localidades campesinas y la ampliación de la resistencia en una extensa región del centro y sur del país fue capitalizada por algunos políticos federalistas y liberales y estuvo en la base del triunfo de la rebelión de Ayutla, que llevó al poder central a Juan Álvarez en 1854. Sin embargo, las diferencias existentes en el seno del grupo liberal y el aislamiento de Álvarez, a quien temían sus propios correligionarios liberales por sus estrechos vínculos con sus seguidores —a los que catalogaban de hordas semibárbaras—, lo obligaron a abandonar el poder poco tiempo después y a dejarlo en manos de liberales más moderados.[46]

[45] Mallon, *Peasant and Nation...*, *op. cit.*, pp. 137-149.

[46] *Ibid.*, pp. 151-156; Mallon, "Los campesinos...", *op. cit.*, pp. 62-64 y 67-70.

Se reanudó así la ofensiva en contra de las tierras comunales y las corporaciones, la cual tuvo su formulación más completa en la llamada "Ley Lerdo" de 1856. Esta ley y el texto final de la Constitución del 57 privaron a las comunidades de sus tierras comunitarias y despojaron a los municipios de una de sus principales fuentes de recursos: las tierras arrendables. Ocurrió, entonces, en varias regiones del centro del país, un proceso de transferencia de tierras comunales que benefició a hacendados locales, elites indígenas, funcionarios y políticos, entre los cuales estaban algunos de los más prominentes líderes liberales del país. Romana Falcón afirma que "con frecuencia, los beneficiarios de la desamortización y el deslinde no eran tanto los grandes terratenientes, sino los ricos de los propios pueblos: comerciantes, rancheros, prestamistas, profesionales y otros que tenían los conocimientos y los recursos para aprovechar las leyes de desamortización".[47]

Ante este proceso, comunidades campesinas de varias regiones del centro y sur del país se rebelaron, combinando la defensa de sus tierras con la defensa de la religión y de la Iglesia, la cual fue afectada por la nueva Constitución federal. En términos militares, estas revueltas fueron derrotadas; sin embargo, en algunos casos lograron obtener reivindicaciones y modificar algunas de las prácticas injuriosas que habían provocado la revuelta. No obstante, ocurrió un amplio proceso de transferencia masiva de bienes procedente de los pueblos y destinado a los campesinos ricos, especuladores, hacendados y funcionarios. Los pueblos fueron duramente golpeados y perdieron.[48] De cualquier forma, en varias de las regiones afectadas continuaron el clima de tensión y conflicto y los actos de resistencia, manifiesta en ocasiones, soterrada la mayoría de las veces, por parte de las comunidades contra los poderes locales.[49]

En la región dominada por Álvarez, a pesar de la derrota nacional sufrida por éste, ni los liberales moderados ni los conservadores pudieron afianzar su dominio. En su mayoría, los pueblos de la zona combatieron contra los conservadores. Sin embargo, una vez derrotados éstos, los pueblos sufrieron el embate de sus aliados liberales, quienes los reprimieron por la violencia ocurrida en contra de hacendados españoles. Álvarez no pudo defenderlos.[50] En su carácter de hacendado y caudillo regional

[47] Falcón, *Las naciones...*, *op. cit.*, p. 68.

[48] *Ibid.*, pp. 68 y 72.

[49] T.G. Powell, *El liberalismo y el campesinado en el centro de México, 1850-1876*, México, SEP (Sepsetentas), 1974, pp. 71-85; Tutino, "Cambio social...", *op. cit.*, pp. 108-113; Leticia Reina, *Las rebeliones campesinas en México, 1819-1906*, México, Siglo XXI, 1980.

[50] Mallon, *Peasant and Nation...*, *op. cit.*, pp. 157-166, y "Los campesinos...", *op. cit.*, pp. 70-80.

que intentaba conservar su cacicazgo, prefirió no enfrentarse con el centro. Empero, Álvarez logró dar forma y expresar discursivamente lo que significaba la identidad que había unido a los distintos sectores marginados de *el Sur*, desde las gestas de la Independencia hasta la Reforma.

Así, en 1854, al llamar a derrocar a Santa Anna, describió la larga batalla por la justicia que había tenido lugar ahí y señaló que "los habitantes de El Sur quieren que la nación esté representada por Mexicanos de cualquier origen, con la única expectativa de que sean patriotas, honestos y que rechacen la perniciosa influencia de esas clases que se llaman a sí mismas privilegiadas para poder explotar al pueblo, que se alimentan de la sangre del pueblo y lo insultan usando lujosos vestidos".

Posteriormente, cuando la ofensiva en contra de los pueblos estaba en su apogeo, Álvarez escribió un manifiesto que intituló "A los pueblos cultos de Europa y América", en el que el lenguaje contra los hacendados españoles era aún más violento:

> La mayoría de los hacendados y sus subordinados comercian y se vuelven ricos con el miserable sudor del infeliz trabajador; los enganchan como a esclavos, y hay deudas que alcanzan hasta la octava generación [...] la expropiación parece aumentar la codicia de algunos terratenientes; lentamente se apropian de las tierras privadas, lo mismo que las del ejido que las tierras de la comunidad [...] y entonces, con la más increíble falta de vergüenza, alegan que esas tierras son suyas, sin presentar siquiera el título legal de propiedad; éste es suficiente motivo para que los pueblos clamen por justicia, protección y ayuda de la ley; pero las cortes son sordas a sus lamentos y peticiones y lo único que reciben los campesinos por haber reclamado lo que es de ellos, es la cárcel y la desgracia.[51]

Álvarez se hacía eco de la resistencia de los pueblos al avance de los grandes propietarios, con un lenguaje que expresaba el sentimiento de injusticia que venía de abajo y que se había manifestado en movilizaciones y descontento social desde la Independencia. Era un clamor sordo y continuo que, sin embargo, no había podido conseguir más mejoras que una relativa autonomía del centro y una barrera contra el proceso de centralización política impulsado por los distintos gobiernos nacionales, independientemente de su signo ideológico.

[51] Mallon, *Peasant and Nation...*, *op. cit.*, pp. 151-152; "Los campesinos...", *op. cit.*, pp. 87-88.

Interludio conservador

Durante la guerra civil que tuvo lugar en el país entre 1857 y la restauración de la República, los conservadores, que se hicieron temporalmente del poder, no variaron sustancialmente las políticas relacionadas con el agro y los indígenas que sostuvieron los anteriores gobiernos liberales. En 1858 se restituyó la propiedad eclesiástica, pero se mantuvo la prohibición para la comunal. La política agraria del gobierno de Maximiliano fue igualmente ambigua. La creación de la Junta Protectora de las Clases Menesterosas y los débiles intentos que hizo para restituir fundos legales y ejidos a las comunidades desposeídas, así como la reglamentación del trabajo de los peones del campo y de los criados domésticos —que reflejaban, en parte, el paternalismo colonial que reivindicaban los ideólogos conservadores de la época, del que el malogrado emperador dio muestras de ser partidario, a pesar de sus orígenes liberales— chocaron con el respeto a las haciendas, con la no derogación de la Ley Lerdo y con la resistencia de los poderes y cacicazgos locales para alterar la estructura agraria dominada por la gran propiedad. En términos generales, liberales y conservadores no atendieron el problema agrario ni consiguieron el apoyo masivo de la población campesina mayoritaria.[52]

En el Sur, los territorios dominados por Álvarez fueron el teatro en que proliferaron guerrillas que apoyaron a los liberales, lo que permitió que en esos lugares no prosperara el dominio conservador. En estas regiones, empero, el apoyo a los liberales fue condicionado al respeto de las comunidades y al buen trato por parte de los líderes. En los lugares en donde hubo abusos de las tropas, como en Jojutla, Puente de Ixtla y Tlaquiltenango, la población se organizó para rechazarlas. En conjunto, en toda la región se dieron comportamientos diferenciados en los que se reflejaba la desconfianza hacia los liberales y la falta de entusiasmo por los conservadores.

Algunos pueblos aprovecharon la buena disposición del gobierno imperial para tratar de recuperar las tierras que habían perdido a manos de los hacendados y recurrieron a la administración central y al mismo emperador para conseguir estos propósitos. La necesidad de apoyo del gobierno imperial le hizo dar un viraje en su política agraria y emitió resoluciones que buscaban favorecer a las comunidades. Empero, la aplicación local de estos decretos enfrentó la resistencia de las oligarquías regionales y de las autoridades locales coludidas con ellos, por lo cual, en su mayoría,

[52] Powell, *El liberalismo..., op. cit.*, pp. 95-127. Desde luego, una excepción notable es la de Juan Álvarez.

fueron letra muerta.[53] La derrota del gobierno imperial canceló definitivamente esos intentos.

Efectos de la política liberal

La derrota de los caudillos liberales Lorenzo de Zavala, Vicente Guerrero y Juan Álvarez, de quienes fueron partidarios los pueblos de los valles de Cuernavaca y Cuautla, quitó a las comunidades la relativa protección de que habían gozado y permitió el avance de la ofensiva de los liberales moderados contra las tierras comunales. En respuesta, entre 1847 y 1857 hubo una serie de protestas violentas de varias comunidades campesinas que se rebelaron contra los abusos y malos tratos cometidos por varios administradores y dueños de haciendas. Así, durante esos años ocurrieron actos de sabotaje, como incendios provocados contra cañaverales y fincas, así como motines y revueltas dirigidos especialmente contra algunos dueños y administradores españoles, varios de los cuales fueron asesinados por los sublevados. Esto ocurrió sobre todo en las haciendas de San Vicente, Chiconcuac, Dolores y Miacatlán, al sur de Cuernavaca, así como en Cuahuixtla, cerca de Cuautla. El pueblo en donde los campesinos tuvieron un comportamiento más beligerante fue el de Xochitepec, colindante con las tres primeras haciendas. Esta animadversión hacia algunos súbditos de la corona española llegó hasta el extremo de que, en 1856, varios de los miembros de la familia propietaria de dichas haciendas fueron asesinados durante una rebelión de lugareños, lo que se convirtió en un conflicto de política exterior en el que se vio involucrado Juan Álvarez. La rebelión fue aplastada de manera sangrienta y los líderes ejecutados en la ciudad de México.[54] Más tarde, en 1857, el pueblo de Tetecala, en los límites con la tierra caliente de Guerrero, defendió con las armas sus tierras pero fue derrotado, junto con otros pueblos del Estado de México, por las fuerzas federales.[55] La guerra civil entre liberales y conservadores impidió que avanzara más la ofensiva contra las tierras de los pueblos de la zona.

En términos generales, el impacto de las leyes de desamortización sobre las tierras de los pueblos fue menor en la zona de los valles centrales morelenses que en otras regiones del centro-sur del país y que en la propia zona colindante con los valles de Cuernavaca y Cuautla. Empero, esa re-

[53] Mallon, *Peasant and Nation...*, *op. cit.*, pp. 166-174.

[54] Falcón, "Descontento campesino e hispanofobia. La Tierra Caliente a mediados del siglo XIX", *Historia Mexicana* (México), vol. XLIV, núm. 3, 1995, pp. 461-498; Mallon, "Los campesinos...", *op. cit.*, pp. 47-96.

[55] Powell, *El liberalismo...*, *op. cit.*, p. 84.

gión presenció una relativamente alta dosis de movilización, protesta y rebelión en contra de los avances de las haciendas y por la defensa de lo que los pobladores consideraban sus derechos ancestrales. No obstante, varios de los añejos litigios por tierras y aguas eran eco de una batalla que los pueblos habían comenzado a perder desde la Colonia. A mediados del XIX, en las zonas fértiles e irrigadas de los valles centrales, las haciendas y los ingenios habían ganado la batalla por la apropiación de los principales recursos iniciada en el siglo XVIII. Los pueblos de la región boscosa del norte y las tierras de agostadero en el sur, contrariamente, sí sufrieron las consecuencias de la ofensiva liberal y resintieron mayor afectación con los avances realizados por la compañía papelera San Rafael en la explotación de bosques comunales, recurso del que despojó a los pueblos de Ocoxaltepec, Huecahuasco, Tlamimilulpan y Tetela del Volcán, en el primer caso, y de haciendas azucareras que ampliaron su tierras para la ganadería extensiva, como la de Chinameca, en el segundo, procesos que ocurrieron en los años posteriores a la Reforma.[56]

Por su parte, muchos hacendados azucareros apoyaron a los dirigentes conservadores. Cuando la cambiante relación de fuerzas en los contextos nacional y regional los favorecían, ocuparon directamente puestos políticos y militares en la estructura de poder regional.[57]

La tradición de carácter populista y la influencia que Juan Álvarez conservaba en la región permitieron a su grupo obtener el apoyo del centro y constituir, en 1869, el estado de Morelos con los límites que actualmente tiene. El primer gobernador fue Francisco Leyva, partidario de Álvarez, quien derrotó en la elección de aquel mismo año al caudillo oaxaqueño Porfirio Díaz.[58] Ocho años después, sin embargo, la ascensión de Porfirio Díaz a la presidencia del país modificó la relación de fuerzas de los grupos locales y desplazó a Leyva de la gubernatura. El nuevo régimen local se apoyó en los rivales de Leyva, los hacendados azucareros morelenses.

Concluía así un largo ciclo, que había inciado en la Colonia, durante el que se había afianzado el grupo que creó la estructura mercantil basada en el cultivo de la caña de azúcar, el cual se había apropiado de los mejores recursos naturales y había subordinado a las comunidades indígenas y mestizas, en un proceso largo, tortuoso y plagado de resistencias. Éstas, por su parte, habían tenido su mayor expresión durante la guerra de Independencia y habían continuado hasta la Reforma, alimentando los liderazgos populistas y las alianzas verticales interclasistas que habían con-

[56] Crespo, "La diferenciación...", *op. cit.*, p. 160, y "La hacienda...", *op. cit.*, pp. 13-14.
[57] Huerta, "Los hacendados...", *op. cit.*, pp. 83-88.
[58] *Ibid.*, pp. 91-92.

seguido imprimir, hasta cierto punto, un sello radical y popular a los distintos gobiernos nacionales. Aunque habían perdido muchas de sus mejores tierras y aguas y el balance general era desfavorable, los pueblos no habían perdido completamente la batalla. Habían conservado parte de sus recursos, desafiado al poder central y a las elites regionales, y puesto un freno relativo a las políticas agrarias liberales. La guerra no había terminado.

El tiempo corto: la modernización productiva, ruptura de los equilibrios

El porfiriato: la balanza en favor de las haciendas

En la región azucarera morelense tuvo lugar, después de décadas de estancamiento, un nuevo auge de la producción mercantil de azúcar durante la segunda mitad del XIX, ocasionada tanto por factores endógenos como exógenos. De los primeros, el más importante fue una revolución técnica que abarató los costos de producción y elevó la productividad, proceso que se fincó en un intenso desarrollo de la infraestructura hidráulica de riego, en la utilización productiva de tierras marginales de las haciendas, en la mejora del transporte que ocasionó la introducción del ferrocarril, en la modernización tecnológica del proceso de molienda y transformación industrial del azúcar y en el mejoramiento de las técnicas de fertilización y abono de la tierra. Este proceso se combinó con una mayor demanda de azúcar en el mercado nacional e internacional, condiciones a su vez favorecidas por una situación política más estable debida a la consolidación del régimen porfirista a partir de 1880.[59]

Así, durante el porfiriato se incrementó la producción de azúcar, ya que se caudruplicó en relación con lo producido en los mejores tiempos de la Colonia y se duplicó respecto de las cifras obtenidas en 1877. El ascenso permitió que volviera a exportarse, en periodos críticos, una parte de los excedentes del mercado doméstico, para tratar de mantener elevados los precios internos de los productos derivados del azúcar y evitar su caída.[60]

[59] Crespo, "La hacienda...", *op. cit.*, pp. 143-180, 262-263, 325-327, 422-475.

[60] *Ibid.*, pp. 402, 492-550. La exportación, sin embargo, fue excepcional. Los costos de producción de Morelos y las tierras de los valles centrales, comparativamente mayores que los de los grandes productores de las Antillas, los cuales dominaban el mercado mundial, se veían, además, incrementados por los costos de transporte desde el altiplano hasta los puertos de embarque y que, por lo tanto, no eran competitivos; por esta razón, sólo ocasionalmente, como recurso ex-

Las crecientes necesidades influyeron en la disponibilidad de tierras y recursos, lo que condujo a una mayor utilización y control de los mismos por parte de las empresas azucareras. Asimismo, los mayores requerimientos de mano de obra estacional produjeron una mayor presión sobre las comunidades campesinas aledañas, aunque no significaron un crecimiento de la población de trabajadores residentes en las haciendas, dado que la mejora tecnológica actuaba básicamente sobre el proceso de refinación, mientras que la fuerza de trabajo campesina ocupada por los ingenios se continuó empleando temporalmente en la preparación del terreno, en la siembra y en la zafra.[61]

Este crecimiento productivo fue posible gracias a una ampliación de la superficie cultivada, la cual se triplicó: pasó de 3 500 hectáreas en 1869 a 10 000 en 1909, debido a mejoras notables en el manejo de los campos, a la expansión de los sistemas de irrigación y a la modernización tecnológica. En pocos casos se trató de abrir nuevas tierras a la explotación. Lo que sí ocurrió fue un incremento en la utilización de tierras pertenecientes a las haciendas que no contaban con sistemas de riego y que hasta entonces se arrendaban a comunidades y particulares para el cultivo del maíz.

Tradicionalmente se ha dicho que la expansión de las haciendas en el porfiriato se sustentó en el despojo de tierra y agua a las propiedades comunales de los pueblos. Sin embargo, esto sólo ocurrió marginalmente. La expansión productiva se debió a la reasignación de los recursos propios de las haciendas, terrenos de temporal que hasta entonces arrendaban a campesinos particulares y que fueron irrigados y explotados directamente por aquéllas. Lo que ocurrió fue, pues, un proceso de modernización productiva que afectó directamente al sector de campesinos arrendatarios.

A partir de 1880 se produjo un ciclo largo de crecimiento productivo continuo, con base en una ampliación de la superficie irrigada destinada directamente al cultivo de la caña, la cual creció casi 200% entre 1870 y 1908. Estas nuevas tierras de cañaverales fueron sustraídas al sector de terrenos de temporal de las propias haciendas y modernizadas con cuantiosas obras de irrigación.[62]

El proceso de concentración de tierras y aguas en manos de los propietarios azucareros ya había ocurrido con anterioridad, en un proceso secular que, en lo fundamental, estaba concluido a mediados del XIX, antes incluso de la aplicación de las Leyes de Reforma sobre desamortización

---

tremo para aliviar la sobreoferta doméstica, se utilizó este mecanismo, asumiéndolo como pérdida necesaria o aprovechando los subsidios a la exportación pagados por el gobierno.

[61] Crespo, "La hacienda...", *op. cit.*, pp. 492-499, 517-550; Crespo, "El azúcar en el mercado de la ciudad de México, 1885-1910", en Crespo, *Morelos, cinco siglos...*, *op. cit.*, pp. 165-208.

[62] Crespo, "La hacienda...", *op. cit.*, pp. 100-127.

Producción de azúcar en las haciendas de Morelos
(Zafra 1908-1909)

Ingenio	*Propietario*	*Producción (tons)*
Zacatepec y San Nicolás	Juan Pagaza	9069
Cuahuixtla, Treinta y Acamilpa	Manuel Aráoz	6852
Santa Clara, Tenango y San Ignacio	Luis García Pimentel	6194
Hospital, Calderón y Chinameca	Viuda de Vicente Alonso	4951
Tenextepango	Hijos de Antonio Escandón	3206
San Carlos, Cocoyoc y Pantitlán	Testamentaría de Tomás de la Torre	2674
Miacatlán, Acatxingo y Cocoyotla	Romualdo Pasquel	2274
San Vicente, Chiconcuac, Dolores, San Gaspar y Atlacomulco	Testamentaría de Delfín Sánchez	2241
San Gabriel y Actopan	Manuel Amor	1860
Santa Inés, Guadalupe y Buenavista	Viuda de Benito Arena	1695
Oacalco y Michate	Francisco A. Vélez	1660
Temilpa	Manuel Alarcón	1359
Santa Cruz	J. Pliego de Pérez	1298
Casasano	E. Vélez de Goribar	1249
Temixco	Concepción T. de Fernández	1118
Cuauchichinola	Sixto Sarmina	386

FUENTE: Domingo Díez, *op. cit.*, pp. 32-33.

de los terrenos comunales y de la puesta en marcha de las Leyes de Baldíos por la administración porfiriana, medidas que tuvieron pocos efectos en la región central morelense. Para 1910, del total de tierras con sistemas de riego, las haciendas concentraban 86%, los pueblos tenían 13% y menos de 1% era propiedad de los ranchos. Las haciendas controlaban también 62% de las tierras de temporal, en las que se cultivaba principalmente maíz y otros productos tradicionales; los pueblos de la zona poseían 33% y los ranchos 5 por ciento. El resto de las tierras, que correspondían a terrenos de agostadero, monte y erial, también pertenecía mayoritariamente a las haciendas, las cuales poseían 62%, en tanto que los pueblos tenían 29% y los ranchos 9 por ciento.[63] Estas cifras muestran cristalinamente la magnitud de la concentración y centralización de los recursos productivos

[63] *Ibid.*, p. 99, cuadro 12; Carlos González Herrera y Arnulfo Ambriz Osorio, "La reforma agraria y la desaparición del latifundio en el estado de Morelos, 1916-1927", en Crespo (coord.), *op. cit.*, p. 290, cuadro I. Los mapas que se ofrecen como anexo en el libro de Alicia Hernández Chávez, *Anenecuilco, memoria y olvido de un pueblo* (México, El Colegio de México, 1991), muestran palpablemente el predominio que habían alcanzado las haciendas hacia 1910.

en manos de los 23 ingenios azucareros que existían en Morelos a finales del porfiriato.

En este fuerte proceso de concentración y centralización de los recursos productivos sólo permanecieron las haciendas e ingenios que habían podido sortear con mayor o menor éxito las crisis y los problemas económicos, crediticios, de comercialización y de modernización tecnológica para abaratar costos. Pusieron en marcha un modelo de plantación de integración productiva y de constitución de economías de escala que implicó una fuerte concentración y centralización de las unidades productivas. Así, de 47 ingenios que había en 1850, se redujeron a 30 en 1898 y a 23 en 1910. Los ingenios que concentraron más recursos productivos fueron San Vicente, Santa Rosa Treinta Pesos, Atlihuayán y San Carlos Borromeo.[64]

Eficiencia y racionalidad: la irrigación

En 1910 sólo había 31 haciendas azucareras en la región morelense. De ellas, por su extensión territorial, incluidos los tres tipos de tierras (de riego, de temporal y de reserva), 19 eran pequeñas, con superficies de entre 100 y 5 000 hectáreas, 8 medianas, con tierras de entre 5 000 y 25 000 hectáreas, y sólo 4 grandes, con más de 25 000.[65] En el curso de las décadas anteriores, el proceso de adaptación a las condiciones del mercado y la aplicación de criterios de inversión basados en una marcada racionalidad económica condujeron a un desarrollo y una competitividad desiguales entre estas haciendas. Así, las más eficientes no eran las que poseían más tierra —Santa Ana Tenango, Santa Clara Montefalco, San Juan Chinameca y San Gabriel, en el oriente y sur de la entidad—, sino las que tenían más irrigación por unidad de superficie. Por lo tanto, las haciendas más eficientes, en términos de racionalidad económica, eran las 19 haciendas más pequeñas, que en conjunto poseían sólo 16% de la superficie total de tierra de las haciendas, pero que concentraban 43% de las tierras de riego. Las cuatro grandes haciendas mencionadas, en cambio, poseían 52% de la tierra disponible pero tenían apenas 19% de tierras irrigadas.

Las haciendas más dinámicas y con mejores perspectivas de desarrollo eran, pues, las más pequeñas. El acaparamiento de grandes extensiones no determinaba la competitividad si no iba acompañado de obras de irrigación, inversiones para modernizar la estructura tecnológica, la introducción de mejoras para obtener mayores rendimientos y la integración

[64] Crespo, *Historia...*, *op. cit.*, pp. 98-99.

[65] Crespo, "La hacienda...", *op. cit.*, cuadro 13, pp. 104-109.

vertical para controlar el conjunto de la cadena productiva. Podría afirmarse, entonces, que las haciendas más grandes, las que conservaban una mayor extensión de terrenos arrendados y no se habían modernizado, eran las más atrasadas. La mayor extensión territorial se desarrolló en las tierras áridas o montañosas del oriente y sur del estado. En cambio, en los valles centrales, fértiles e irrigados, proliferaron, en aguda competencia, las pequeñas y medianas extensiones.

Durante el régimen de Díaz se promovió el fomento y la ampliación de la infraestructura hidráulica en el país, mediante diversos apoyos estatales, que incluyeron subsidios y concesiones para que los particulares invirtieran en este tipo de obras. En 1888 se expidió la Ley Federal de Aguas, en la que se establecía la jurisdicción del Estado sobre aguas marítimas territoriales, esteros, lagunas, lagos y los ríos que cruzaran más de una entidad. Esa ley garantizaba la utilización gratuita de ellas a las poblaciones ribereñas y a los que tuvieran su concesión. En 1894, una ley complementaria especificó las características de las concesiones para la utilización de esas aguas. La mayoría de estas concesiones fueron para proyectos hidroeléctricos y, en menor medida, para riego.

En la región morelense, ésta fue también la pauta. Durante el porfiriato no hay testimonios que indiquen un proceso generalizado de avance sobre los recursos hidráulicos por parte de las haciendas a costa del despojo del agua de los pueblos. Aunque hubo muchas solicitudes de grandes hacendados para obtener nuevas concesiones del uso de las aguas para fines agrícolas, durante el periodo del gobernador Manuel Alarcón —periodo que Womack ha definido como la edad de oro de las haciendas—, la mayoría de estas solicitudes fue desechada, entre otras, las de grandes propietarios como Juan Pagaza (dueño de Zacatepec y San Nicolás Obispo), Vicente Alonso (de Calderón, Hospital y Chinameca), Pablo Escandón (de Atlihuayán), Fernando Noriega (de San Vicente) y Mauricio de la Arena (de Santa Inés, Guadalupe y Buenavista).[66] Hasta 1908, de 50 solicitudes sólo se autorizaron 16, y, de éstas, los beneficiarios no fueron sólo los grandes hacendados sino también vecinos organizados y pequeños empresarios de pueblos, como en el caso de Xalostoc, cuyos vecinos obtuvieron autorización, en 1897, para construir un canal de 3.5 kilómetros en el río Tembembé, con una inversión de 25 000 pesos, o los de Tlaltizapán, que construyeron un canal de 6 kilómetros sobre el Higuerón con un costó de 22 000 pesos.[67] Estos casos, empero, fueron excepcionales, pues el monto de inversión requerida determinaba que fueran únicamente individuos o compañías particulares con suficientes recursos los que podían

[66] *Ibid.*, pp. 159-160.
[67] *Ibid.*, pp. 160, 175-176.

desarrollarlos y obtener la autorización para hacerlo. Para la mayoría de los pueblos y vecinos comunes, esta condición excedía sus posibilidades.

El crecimiento de la infraestructura de riego no se debió a la ampliación de las concesiones para el uso de aguas por las haciendas ni al despojo que de ese recurso sufrieron los pueblos . Lo que ocurrió fue un proceso de nuevas y grandes inversiones para modernizar, extender y hacer más eficiente la infraestructura de riego en las concesiones que ya tenían las propiedades hacendarias, es decir, una mayor utilización de las aguas sobrantes o subutilizadas. Desde luego, este proceso no estuvo exento de conflictos con algunos pueblos, como en el caso de Yautepec en 1902, pero, en el conjunto, fueron conflictos localizados y, al menos por las fuentes conservadas, escasos. En la entidad, sólo el río Yautepec era de la jurisdicción del gobierno morelense; los demás eran federales, y fue el gobierno central de Porfirio Díaz, precisamente, el que reguló la asignación de concesiones dentro de la pauta descrita. Así, en los quince años finales del porfiriato, las haciendas duplicaron su capacidad de riego mediante la construcción de canales en los ríos Cuautla, Higuerón y, en menor medida, el Tembembé. Este proceso tuvo lugar básicamente en la zona del valle central de Cuautla y, un tanto menos, en el de Cuernavaca. Las zonas oriental, sur y occidental apenas comenzaban a integrarse a este patrón de desarrollo cuando estalló la revolución.[68]

Revolución en el transporte

Otro elemento decisivo en el *boom* azucarero de los años porfirianos fue, desde luego, la introducción de los ferrocarriles. Hasta antes de 1880, el transporte de la caña de las zonas productoras a los ingenios y del azúcar y las mieles a los centros de consumo se hacía a lomo de mula. La cercanía de la región morelense a la ciudad de México había permitido que dominara, desde la época colonial, el principal mercado nacional. Sin embargo, esa misma condición geográfica alejada de las costas, aunada a los altos costos de producción de la zona morelense —comparados con los precios internacionales, debido a la necesidad de riego—, determinó su escasa competitividad en el mercado mundial. Las pocas exportaciones que se realizaron en diferentes épocas sólo dejaron pérdidas. La prioridad de la industria azucarera fue siempre el mercado doméstico, y el crecimiento de éste fue lo que determinó su desarrollo.

La introducción del ferrocarril significó, pues, una revolución que disminuyó considerablemente los costos de flete, aumentó la capacidad de

[68] *Ibid.*, pp. 143-183.

transportar mayores volúmenes y acortó los tiempos de colocación del producto en las zonas de consumo. Varios de los principales hacendados morelenses, junto con las elites políticas regionales, participaron como accionistas en las compañías ferrocarrileras que comunicaron la ciudad de México con las principales zonas productoras de la región. La organización y el poderío económico de los hacendados del valle de Cuautla hicieron que ésta fuera la zona que se privilegiara y la que más se desarrolló con el arribo del ferrocarril. Así, entre 1878 y 1883 se completaron los trabajos que conectaron la ciudad de México con Cuautla y Yautepec. Entre 1888 y 1890 se llevó la vía desde este último punto hasta Jojutla y Puente de Ixtla. No fue hasta 1897 que los hacendados del otro valle, el de Cuernavaca, pudieron construir la línea que, partiendo de la ciudad de México, seguía su curso por Cuernavaca, Puente de Ixtla y llegaba hasta Iguala. El valle de Cuautla, además, quedó conectado desde el principio con la gran vía férrea que comunicaba la ciudad de México con Puebla y Veracruz. Esto determinó que la zona de Cuautla-Amilpas se consolidara como la subregión más desarrollada, que por cierto ya tenía ventaja previa por haber sido la que mayor reconversión y modernización hidráulica y productiva había tenido. El occidente del estado, en comparación, quedó rezagado y nunca se concretó la intención de comunicar esa zona con Toluca y Acapulco.[69] La estación terminal —hasta la fecha— se quedó en el cruce con el río Balsas, al sur de Iguala.

Desplazamiento de los arrendatarios

En lo que respecta a la fuerza de trabajo y la relación de las haciendas y los ingenios con los pueblos aledaños, este proceso de reconversión productiva afectó mayormente a las comunidades arrendatarias de las tierras de temporal. Estas tierras de temporal de las haciendas eran arrendadas a campesinos sin tierra y comunidades de los alrededores que de esta forma obtenían el maíz y los productos alimenticios necesarios para su manutención. Para complementar el ingreso de sus familias, la fuerza de trabajo masculina se empleaba por temporadas en las labores agrícolas de las tierras irrigadas. Como ya se ha visto, la modernización fue mayor en las haciendas más pequeñas y que contaban con una superficie menor de terrenos temporaleros. El impacto económico y social para el sector de campesinos arrendatarios que fueron desplazados, en un lapso breve, de las tierras que arrendaban fue enorme. Las tierras de temporal de los pueblos no bastaban para remediar el desplazamiento de que eran objeto

[69] *Ibid.*, pp. 422-475 y 217-258.

esos grupos, pues representaban sólo la mitad de aquellas de las que habían sido desplazados y eran, por lo tanto, insuficientes. Por otra parte, no todas esas familias desplazadas fueron absorbidas por las necesidades crecientes de mano de obra para la siembra y la cosecha de los cañaverales que, a pesar de todo el adelanto técnico, siguieron siendo estacionales. Así, pues, ese sector desplazado de las haciendas más productivas tuvo que ser absorbido por la economía tradicional de los pueblos, villas y rancherías de las zonas aledañas, en un proceso que significó una carga mayor para esas comunidades en las que estas familias tenían sus raíces. Desde luego, este proceso no fue lineal ni estaba terminado cuando el porfiriato llegó a su fin.

Con todo, la modernización productiva no significó un desplazamiento brutal de la mano de obra asalariada. Un paliativo fue que, en la medida en que se dio una combinación de agricultura extensiva de riego con nuevos equipos industriales y mejores transportes, requirió de más brazos para las labores agrícolas, pues la superficie cultivada creció significativamente. Por ello, la utilización de fuerza de trabajo por parte de las haciendas se incrementó en 150% entre 1899 y 1908. Incluso hay referencias continuas, a lo largo de esos años, al hecho de que la insuficiencia de mano de obra afectaba los ciclos productivos.[70] Aunque no puede hablarse, por lo tanto, de crecimiento de la desocupación sino más bien de lo contrario, cabe incluso afirmar que hubo un incremento de la emigración permanente y temporal de las zonas colindantes del Estado de México y de los montes del Ajusco hacia los valles centrales, pero el problema estribaba en que los empleos en las haciendas eran estacionales y que el salario devengado en esos meses era complementario de los medios de vida que hasta entonces obtenían esas familias del arrendamiento de las tierras temporaleras.

Aunque falta información cuantitativa para tener una visión completa de esta situación, puede establecerse, como hipótesis, que la expansión productiva quitó más recursos de los que proporcionó a la masa de trabajadores y familias dependientes indirectamente de las haciendas cañeras y, de igual modo, que estaba en curso un proceso de desarraigo y de pérdida de seguridad, además de un cúmulo creciente de necesidades materiales más difíciles de ser satisfechas por sectores importantes de población; al mismo tiempo se desarrollaba una mayor subordinación y dependencia de estos sectores respecto de las haciendas que los contrataban, como parte de un proceso de ampliación de las relaciones mercantiles que giraban alrededor de la producción y comercialización de la caña de azúcar.[71]

[70] *Ibid.*, pp. 350-366.

[71] Aunque no haya datos precisos para cuantificar la magnitud de los sectores desplazados

Trabajo asalariado y economía moral

No se conservan muchos datos primarios sobre la forma de organización interna de las haciendas azucareras morelenses y no hay estudios monográficos que describan con detalle las relaciones laborales y la organización del trabajo que imperaba en ellas. En virtud de su elevado grado de modernización y de su inserción como puntales dentro de una esfera de producción mercantil, la forma predominante de utilización de la fuerza de trabajo temporal fue mediante un salario monetario fijo. Ese salario complementaba la adquisición de los satisfactores que obtenían mediante el arriendo de tierras que pertenecían a las haciendas y algunos pagos en especie que recibían de éstas. Por la destrucción de los archivos de las haciendas durante la revolución, no se cuenta con series completas que informen sobre el monto de los salarios que devengaban los trabajadores de las haciendas de la zona y sólo algunos datos sueltos informan sobre ellos.

El nivel de las percepciones dependía del grado de especialización, complejidad y responsabilidad del trabajo. En la cúspide de la pirámide se encontraban los administradores, que a menudo eran extranjeros y contaban con experiencia en la industria por haber trabajado en otras haciendas azucareras modernas; estos empleados de elite frecuentemente representaron la cara visible de la dominación hacendaria ejercida sobre los trabajadores y concentraron en sus personas buena parte de los reclamos, odios y protestas de los trabajadores subordinados a ellos. Les seguían los maestros purgadores, los gañanes, los peones y los adolescentes o niños empleados en los distintos tipos de trabajo, en una escala descendente en la que es difícil establecer con precisión el salario percibido y su evolución durante el siglo XIX.[72] De igual modo, había diferencias entre los ingresos fijos y los obtenidos mediante contratos de trabajo a destajo, así como en los ingresos indirectos obtenidos mediante alimentos, instrumentos de trabajo, alojamiento, ropa, etc., prestaciones que algunas haciendas siguieron proporcionando a sus trabajadores permanentes. De cualquier modo, los salarios y el nivel de ingresos que obtenían los trabajadores de las haciendas e ingenios, ya fueran permanentes o temporales, eran superiores a los que podían obtenerse fuera de ellas y, por los mismo, daban mayor seguridad a quienes los devengaban.

---

ni de las formas alternativas de empleo en actividades secundarias y terciarias, tanto en las principales ciudades y pueblos —dado que también estaba en curso un proceso de urbanización— como en las mismas haciendas, habría que considerar asimismo, entre los sectores afectados por la modernización, a los arrieros que transportaban azúcar hacia la ciudad de México y otras ciudades medianas, los cuales fueron desplazados por el ferrocarril, así como a los artesanos, que vieron incrementada la competencia por el arribo de mercancías provenientes de otras regiones.

[72] Crespo, "La hacienda...", *op. cit.*, pp. 372-382.

Sin embargo, con todo y la existencia de este desarrollo mercantil, es probable que la parte correspondiente a las prestaciones y servicios tradicionales de la "economía moral" entre trabajadores y patrones haya continuado, aunque con un peso menor que en otras regiones más atrasadas, como sugiere Herbert Nickel para el caso de Yucatán.[73] El paternalismo continuó permeando en alto grado las relaciones entre hacendados, administradores y los distintos tipos de asalariados y arrendatarios. Además de la ayuda asistencial que algunos dueños de haciendas proporcionaban de manera regular o esporádica como parte de los mecanismos que ayudaban a dar cohesión y legitimidad a estas desiguales relaciones sociales, se contaba con la cooperación de algunos hacendados para los gastos de las fiestas religiosas de los patronos de los pueblos y haciendas, como en los casos de Pantitlán, San Carlos, Tlayacapan, Atlacomulco, Santa Clara, Hueyapán y Tenango.[74]

Una muestra de estos rasgos de paternalismo, de apoyos adicionales al trabajo y de economía moral que continuaban cuando estalló la revolución contra Díaz, la manifestó Manuel Aráoz, dueño de las haciendas de Cuahuixtla, Treinta y Acamilpa, en el cuestionario que contestó a la Secretaría de Fomento maderista en 1912, cuando expresó lo siguiente:

> Si hemos dado buen trato a todos los trabajadores, ni éstos consentirían lo contrario; les hemos concedido continuamente franquicias y comodidades con las que mejoran su condición, tales como: tierras para siembra, asistencia médica con medicinas expensadas por la hacienda, servicio parroquial de matrimonios, bautismos, etc., cuyos gastos cubre la finca, no olvidando el cuidado moral para los niños de las familias de los reales.

En esta tónica, Romualdo Pasquel, dueño de Acatzingo, Miacatlán y Cocoyotla, indicó:

> Además, se les proporciona a los operarios tierras para sembrar maíz, así como pastos en terrenos de las mismas Haciendas para sus ganados; también tienen el beneficio de médico y medicinas gratuitos para ellos y sus familias, sostenimiento de escuelas para niños de ambos sexos y se les auxilia en sus necesidades.

Por su parte, Luis García Pimentel, el mayor propietario azucarero de la entidad, en su respuesta al mismo cuestionario corroboró estos usos y costumbres:

[73] Herbert Nickel, "Elementos de la economía moral en las relaciones laborales de las haciendas mexicanas", en Herbert Nickel (ed.), *Paternalismo y economía moral en las haciendas mexicanas del Porfiriato*, México, Universidad Iberoamericana, 1989, pp. 15-67.

[74] Crespo, "La hacienda...", *op. cit.*, pp. 336-343.

> [...] creo que se debe hacer una distinción entre el trato que una negociación oficialmente da a los trabajadores del campo, y el trato que los *empleados de la planta alta* dan a sus subordinados: el primero[,] en todos los casos y en todas las haciendas, no ha podido ser mejor, pues además de los magníficos jornales que se pagan tienen los empleados y peones por cuenta de la Hacienda, médico y medicinas, escuela, servicios religiosos (matrimonios, bautismos, entierros), pensiones a los viejos, a los inválidos a los enfermos [...] a los huérfanos, a las viudas de los trabajadores.[75]

Estos elementos de paternalismo y economía moral —que coexistían con la más moderna de las agroindustrias capitalistas de la época— seguían existiendo a comienzos del siglo XX y, aunque desgastados, en algunos lugares demostraron todavía su efectividad durante los comienzos de la rebelión armada de 1910 y en los años posteriores.

¿Leyenda negra o blanca?

El triunfo de la rebelión que inició en 1910 y la necesidad de los regímenes que capitalizaron esa victoria de construir su propio discurso legitimador crearon la leyenda negra del porfiriato y de las haciendas de la época. El caso de las haciendas azucareras morelenses no fue la excepción, y en buena parte de la historiografía de la revolución se continúa, reproduce y subraya la imagen negativa de los hacendados, los administradores de las haciendas, las elites económicas y políticas y las autoridades del antiguo régimen.

Desde luego, en la imagen de la leyenda negra de las haciendas morelenses hay exageración. No fueron la representación de la crueldad y el despotismo opresor contra la indefensa masa de campesinos y peones que ha idealizado la imagen oficial agrarista de la revolución. Pero es igualmente unilateral tratar de construir una leyenda blanca enfatizando solamente la integración y la armonía existentes entre los propietarios de las haciendas y los grupos subordinados cuyas vidas giraban en torno de ellas, así como la legitimidad que tenían dichas instituciones ante esos grupos, elementos que sin duda existían y que persistieron, en mayor o menor grado, en varias de ellas. Como siempre, la realidad consiste en un amplio espectro de matices. Sin embargo, no se puede tampoco negar que los conflictos originados por el crecimiento y desarrollo de la gran propiedad y por la concentración, centralización y control de los recursos productivos

[75] Archivo General de la Nación (AGN), Gobernación, Asuntos Varios, exp. 298, ff. 98, 335, 341, citados en Rueda, *El paraíso de la caña. Historia de una construcción imaginaria*, México, INAH, 1998, pp. 148-149.

en manos de los hacendados, los cuales tuvieron lugar durante toda la época colonial, originaron tensiones que continuaron en la primera mitad del siglo XIX, la Reforma, el porfiriato y aun después. Es necesario, pues, considerar ambos aspectos. Como se ha descrito, las tensiones agrarias fueron una constante a lo largo de la historia secular de la región. Pero también hubo haciendas que contaron con la legitimidad que les otorgaban sus subordinados, así como con el apoyo y las muestras de respaldo que les brindaron durante el porfiriato e, incluso, la revolución. Muchas haciendas pudieron todavía trabajar a ritmos casi normales hasta 1912. De igual modo, hubo también contra ellas —y en mayor proporción que los apoyos, como se vio luego— muestras de rechazo y de cobro de facturas pendientes por agravios, a menudo con mucha violencia, por parte de sectores e individuos que se sumaron a la revuelta.

Lo que parece estar fuera de duda es que el proceso de modernización que tuvo lugar en Morelos en las tres últimas décadas del porfiriato produjo una alteración en las relaciones sociales y en los equilibrios entre los distintos sectores sociales y económicos que ahí actuaban. Es probable que esta modernización haya afectado más a los trabajadores temporales de la hacienda, a las familias de aparceros y arrendatarios que vieron anulado o reducido su acceso a las tierras, de las que hasta entonces se alimentaban, y que no obtuvieron la compensación correspondiente al mayor volumen de trabajo que requería ese proceso de modernización. Aunque no hubieran sido ya propietarios de las tierras que trabajaban, eran usufructuarios de ellas; por lo tanto, el efecto negativo de la privación de este usufructo, que era percibido como un derecho tradicional por esas familias, fue, en los hechos, una desposesión tan devastadora que los afectó como si hubieran sido expropiados. Se convirtieron en campesinos sin tierra, con los riesgos y la inseguridad que esta condición implicaba. Horacio Crespo, que ha estudiado mejor que nadie este proceso modernizador, no alcanza a ver en él una desposesión real ni la privación de un derecho tradicional, los cuales debieron ser interpretados por el sector afectado de arrendatarios —y por los sectores tradicionales con los que estaban vinculados de una u otra forma en las comunidades— como una ruptura del pacto moral con las haciendas.

La mayor presión ejercida sobre los recursos productivos que generó el auge azucarero alteró la relación que se había establecido entre las comunidades campesinas y las haciendas azucareras, así como con los ranchos de la zona. Sin embargo, como apunta Horacio Crespo, aunque la historiografía zapatista a partir de Magaña, Sotelo Inclán y Womack ha insistido en que estaba en curso un proceso de avance de las haciendas a costa de la superficie cultivada y de las aguas utilizadas por los habitantes de los pueblos, aldeas y ranchos, y que incluso estos asentamientos cami-

naban hacia su desaparición, no se advierte este proceso en los datos estadísticos del XIX ni en los años finales del porfiriato.

Crecimiento demográfico de pueblos y ciudades, decremento en las haciendas

La demografía de los pueblos, ranchos y aldeas, al igual que la de todo el estado, indica un incremento moderado y sostenido a lo largo de esos años, aunque con una diversidad en la dinámica regional, con diferentes tasas de crecimiento, con movimientos migratorios en las zonas periféricas, con un comportamiento disímbolo entre las cabeceras municipales y los pueblos, con expansión de las principales ciudades, como Cuernavaca y Cuautla, que conurbaron localidades contiguas, con la creación y desaparición simultáneas de ranchos y rancherías, etc., proceso complejo en términos demográficos. La modernización tantas veces mencionada incidió de manera muy directa en esta diversa dinámica poblacional, pero en un sentido múltiple y que no indicaba el predominio tendencial absoluto de las haciendas sobre los pueblos, ranchos y rancherías.

Horacio Crespo ha demostrado, con base en las fuentes demográficas disponibles, que durante el periodo que va de 1850 a 1910, es decir, durante el auge y modernización de la industria azucarera, tuvo lugar una dinámica poblacional diferenciada por regiones y categorías demográficas. En esos sesenta años, la población de la entidad creció en 57 por ciento. Sin embargo, las cabeceras municipales crecieron solamente 46%, disminuyendo así su importancia relativa en el total de la población en casi 2%, a pesar de lo cual continuaron siendo casi la tercera parte de ese total. Los pueblos que no eran cabeceras crecieron en 54%, es decir, menos que la población total, y redujeron también en casi un punto su importancia relativa, aunque siguieron siendo el tipo de asentamiento predominante en donde se alojaban 36% de los habitantes. En donde ocurrió el mayor crecimiento fue en las ciudades de Cuernavaca y Cuautla, cuya población aumentó en 216%, duplicando así su importancia relativa y concentrando en sus límites 11% del total estatal. En el caso de ranchos y rancherías hubo una gran inestabilidad, muchos de ellos desaparecieron y volvieron a constituirse a lo largo de esos años, aumentando su población marginal; en términos absolutos, su población creció en 112%, pero en términos relativos sólo pasaron de 6 a 8 por ciento. Las haciendas, en cambio, fueron la única categoría cuya población total disminuyó tanto en términos absolutos (-5%) como relativos (-7%).[76]

[76] Crespo, "La diferenciación...", *op. cit.*, pp. 136-146.

Así, pues, los dos fenómenos que principalmente llaman la atención son el considerable urbanismo que se dio alrededor de las dos principales ciudades de la entidad y la involución demográfica de la hacienda. Ambos acontecimientos tienen particular relevancia y son indicativos del proceso de modernización que estaba teniendo lugar en la sociedad morelense. Por lo que toca a las relaciones agrarias, significaron que el costo del crecimiento económico y de la modernización tecnológica y el transporte no descansaran sobre el crecimiento demográfico del principal agente económico del cambio, la hacienda, sino en un crecimiento diferencial de la población rural de los pueblos, villas, aldeas y ranchos, que siguieron siendo el soporte para la mayoría de la población estatal y en cuyos límites vivía 75% del total de habitantes.

Aunque no hay datos pormenorizados sobre las actividades productivas, los salarios, los movimientos migratorios y los precios, con lo cual se podría tener una mejor idea de dónde descansó económicamente este proceso de modernización, es posible suponer que una parte considerable recayó en la economía de los pueblos y localidades rurales, tanto en la economía de subsistencia como en el sector comercial agrícola, el trabajo asalariado en las haciendas, y los oficios y servicios diversos ofrecidos por estos sectores. El crecimiento de Cuernavaca y Cuautla, que implicaba un crecimiento de la actividad en los servicios artesanales y de transporte, podía ser parcialmente la alternativa de vida para un sector de los desplazados rurales y también una mayor demanda para los oferentes de oficios y servicios, aunque el todavía escaso peso relativo de estas urbes no alcanzara para compensar un desplazamiento de gran envergadura en el medio agrario.

Otro fenómeno que también incidió directamente en la situación de algunos pueblos fue el de la conurbación. Horacio Crespo señala que, de acuerdo con el censo de 1910, los pueblos de Acapancingo, Amatitlán y Chapultepec se conurbaron con Cuernavaca, al igual que San Mateo Ixtla con Puente de Ixtla.[77] Es difícil precisar el tipo de conflictos y tensiones provocados por este crecimiento urbano.

Por lo tanto, la apreciación compartida por los historiadores, de Magaña a Womack, acerca de la tendencial desaparición de los pueblos y rancherías del estado como consecuencia del avance de las haciendas que los despojaron de sus tierras ha sido equivocada. De los cinco pueblos que, al decir de Magaña, desaparecieron absorbidos por las haciendas, sólo dos efectivamente lo fueron, Acatlipa y San Pedro, en 1890, el primero por la hacienda de Temixco y el segundo por la de El Hospital. El pueblo de Tequesquitengo, citado también, sufrió ese proceso en 1840, pero se

[77] Crespo, "La hacienda...", *op. cit.*, pp. 71-79.

volvió a constituir después, al igual que la hacienda de Sayula, que se fusionó con otra antes de 1850. Dichos ejemplos, entonces, no bastan para afirmar la existencia de una dinámica regional orientada en esa dirección. Es posible afirmar, entonces, que el avance y predominio de las haciendas en el porfiriato no se produjo sobre la base de un crecimiento físico de la gran propiedad, sino a partir del predominio de las relaciones mercantiles y el mayor control económico y dominio de las haciendas sobre el trabajo, la mano de obra, los recursos productivos y los productos del trabajo, mediante relaciones sociales capitalistas, estructuradas cada vez más alrededor de las necesidades de la producción y comercialización del azúcar y sus derivados.

Ruptura del equilibrio y agravamiento de las tensiones

Está fuera de duda que, en conjunto, el auge azucarero del último tercio del siglo XIX consolidó el proceso de concentración de la tierra y los recursos productivos de la región, afianzó la hegemonía de las haciendas y de las relaciones mercantiles en la economía agroindustrial de la zona, y significó el debilitamiento relativo de las localidades agrarias no hacendarias, ya fueran colectivas o individuales, y que este proceso provocó mayor diferenciación social, movilidad y conflicto entre los diversos actores involucrados.[78]

Así, las relaciones de las haciendas con los pueblos, comunidades y ranchos que contaban con tierra sufrieron una alteración, pues el florecimiento de la producción azucarera y el predominio de las relaciones mercantiles implicó también que esos grupos agrarios con tierra, pero subordinados, en la medida en que tenían que completar su ingreso empleándose temporalmente en las labores agrícolas de la caña, tuvieran que competir ahora con las familias arrendatarias directamente desplazadas por el crecimiento económico descrito y que, al mismo tiempo, tuvieran que colaborar con los recursos de su economía de subsistencia para aliviar las necesidades de estos sectores desplazados y sin posibilidades de acceso a la tierra. Más difícil aún fue la situación con los grupos rurales afectados directamente por la reconversión productiva —arrendatarios, aparceros y peones residentes o asalariados temporales—, los cuales súbitamente perdieron sus condiciones de seguridad y tuvieron que buscar acomodo en las localidades rurales o en los núcleos urbanizados. Con esto se modi-

[78] John Womack Jr., *Zapata and the Mexican Revolution*, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1970, pp. 42-49.

ficaron las relaciones entre las haciendas y los demás grupos agrarios de la región.[79]

Es posible que hacia finales del porfiriato las tensiones sociales, siempre presentes en el campo morelense, se hayan agravado y que éste fuera uno de los factores —o quizás *el factor*— explicativos de la rebelión que tuvo lugar poco después. Sin embargo, en los testimonios que se han conservado de los años finales del porfiriato no se encuentran señales de resistencia abierta de los grupos afectados, aunque, desde luego, esta ausencia de testimonios no demuestra que ese proceso no hubiera generado y agravado tensiones de las cuales no se han conservado huellas y que estas protestas hayan adoptado predominantemente formas individuales, subterráneas, que estuvieran acumulando fuertes rencores por los agravios recibidos, los cuales aparecerían en la superficie meses después. Para tener mayores elementos de análisis acerca de la situación de los distintos sectores y grupos sociales morelenses, hace falta conocer con más precisión la evolución del salario real de las distintas categorías de asalariados, de la inflación y los niveles de vida de los grupos rurales y urbanos y de los trabajadores de las haciendas, así como un derrotero más detallado de lo que aconteció con las familias desplazadas que perdieron el acceso a tierras y aguas en los años anteriores. Con estos datos podría tenerse una idea más clara de la explosividad existente en el campo morelense al final de la dictadura de Díaz, aunque, desde luego, ese deterioro de las condiciones materiales de vida no es causa suficiente para explicar la rebelión que ocurrió después.[80]

Sin embargo, desde el punto de vista de los dueños de las haciendas y los ingenios y de los responsables de la política nacional era difícil vislumbrar que se hubiera llegado o estuviera a punto de llegarse a una situación límite. Podía pensarse que la dinámica de crecimiento económico y modernización descrita era capaz de sostenerse por más tiempo, sometiendo las resistencias y manteniendo un ciclo largo de expansión económica. Los esfuerzos emprendidos por los propietarios apuntaron en esa dirección: se iniciaron obras y realizaron inversiones que esperaban mantener la tendencia de crecimiento comercial con base en los recursos productivos disponibles, para que la posibilidad de un estallido social fuera remota. Pero la relativa autonomía de la esfera política, los estados de ánimo, las

[79] Salvador Rueda, "La dinámica interna del zapatismo. Consideraciones para el estudio de la cotidianeidad campesina en el área zapatista", en Crespo (coord.), *op. cit.*, pp 226-227.

[80] La violencia social que tuvo lugar en Morelos entre 1910 y 1920, mayor y más prolongada que la que ocurrió en el resto del país, es un elemento que explica el hecho de que se hayan conservado pocos testimonios de las haciendas, de las parroquias y, en general, de otras fuentes que proporcionan mucha información valiosa en otras regiones durante esta época, todo ello a pesar de lo voluminoso e importante de los archivos que sí se han conservado de la región morelense.

protestas y la disposición de participación de los grupos subordinados, que eventualmente desembocan en formas de resistencia más activa y, en el extremo, en revueltas y rebeliones a veces impredecibles, les demostraron su error.

Así, pues, a las tensiones agrarias seculares del campo morelense se agregaron otras nuevas, producidas precisamente por el proceso de modernización económica. La población había continuado creciendo con tasas moderadas, la tierra disponible estaba acotada, hubo mayor presión de parte de las familias de los pueblos, localidades y ranchos de la región que no conseguían satisfacer sus necesidades alimenticias mediante las estructuras tradicionales y que sólo parcialmente fueron absorbidas por las haciendas y las ciudades. El grueso de esta población seguía dependiendo, de alguna forma, de la agricultura de subsistencia y comercial de sus lugares de origen, a los cuales siguió arraigada. Las haciendas continuaron aprovechando la producción de las comunidades, las cuales fueron sometidas a un mayor esfuerzo para intentar dar sustento, habitación y servicios a una población cada vez mayor.[81]

En suma, con el desplazamiento de un sector importante de los trabajadores arrendatarios, el crecimiento demográfico diferencial, la modernización productiva y la urbanización, la economía de las comunidades campesinas morelenses y su mayor dependencia respecto de las haciendas y los ingenios —con la consiguiente disminución de su seguridad— alteraron las relaciones y los equilibrios entre los distintos grupos agrarios y urbanos de la región y ésta fue la base objetiva en la que pudo prender el llamado a la rebelión maderista, que vino desde fuera y que aprovechó también las peculiares condiciones políticas que se gestaron en los años finales del porfiriato. Ya en esa etapa del régimen de Díaz hubo protestas en algunas de las localidades y entre los grupos afectados, los cuales no sólo reaccionaron ante el avance de las haciendas, sino también contra la leva, las deportaciones y la represión con la que enfrentó el porfiriato ese descontento.[82] Desde luego, este proceso no fue generalizado pues sólo se

[81] La mayor presión podía ser parcialmente compensada mediante el ofrecimiento de actividades alternativas en la industria y los servicios, o mediante la emigración. Sin embargo, la dependencia histórica de la región respecto de un solo cultivo había llevado a que la única industria desarrollada fuera precisamente la azucarera; el resto de las actividades industriales era prácticamente inexistente. El crecimiento de las comunicaciones y del ferrocarril no podía absorber a la masa de trabajadores desplazados y, como se ha visto, no hubo tampoco un crecimiento urbano de tal magnitud como para convertirse en una alternativa para los grupos agrarios. En estas condiciones, el bandidaje podía encontrar un buen caldo de cultivo para desarrollarse. Hace falta un estudio sobre el comportamiento de estas actividades en esos años.

[82] Womack menciona la resistencia que ofrecieron los pueblos de Yautepec, Santa María, Jantetelco, Coatlán del Río, Tepalcingo y Anenecuilco en los conflictos con las haciendas en los años inmediatamente anteriores a 1910 (*op. cit.*, pp. 50-53).

localizó en zonas y sectores que habían sufrido agravios por parte de autoridades, jefes políticos, hacendados y comerciantes.

Estructuralmente hubo una ruptura del equilibrio funcional del modelo económico entre pueblos, ranchos y haciendas. La modernización productiva posibilitó el agravamiento de las tensiones sociales y el descontento, al menos potencialmente. A las tensiones seculares se añadieron las producidas en los últimos años del régimen porfiriano. La conjunción de factores tales como la modernización productiva, el crecimiento demográfico, el urbanismo, el desplazamiento de sectores agrarios, el agravamiento de las condiciones de vida de sectores rurales y urbanos, la ruptura de pactos de economía moral con las elites regionales, así como las experiencias históricas de resistencia al avance del centralismo que habían producido liderazgos propios y una tradición de autonomía estuvieron en la base de lo que resultó un desafío y una ruptura profunda de las clases subalternas que dieron origen al zapatismo.

La esfera de la política

La crisis política del porfiriato y la campaña política de 1909 en Morelos

Sin embargo, lo que le confirió un carácter novedoso al descontento de principios del siglo XX en el agro morelense fue el hecho de que se combinó con una coyuntura política especialmente significativa, tanto nacional como regional. El sistema porfirista, después de tres décadas de dominación en las que había podido sortear con éxito las protestas y rebeliones locales aisladas, se enfrentó con un desafío inédito: una parte de las elites económicas norteñas, encabezadas por Francisco I. Madero, inconformes y desplazadas del poder político, se escindió del régimen y aglutinó en torno suyo a clases medias urbanas, intelectuales y grupos de trabajadores citadinos que dieron forma al movimiento maderista. Éste fue una vasta coalición interclasista que produjo una movilización política electoral de amplias dimensiones, con la cual desafió al régimen pacíficamente. Al no encontrar solución a sus aspiraciones de mayor participación en la estructura de poder, después de haber recorrido el camino de la organización y movilización política electoral, y ante la cerrazón y la imposición del sistema político, el movimiento maderista hizo un llamado a la insurrección.

El desafío maderista obtuvo, después de un comienzo muy incierto en noviembre y diciembre de 1910, cuando prácticamente nadie lo siguió, un respaldo popular considerable en varias regiones del país que desbordó en los primeros meses de 1911 los canales políticos tradicionales del régi-

men porfirista y demostró el agotamiento de éste. Así, esta coyuntura política nacional permitió que el descontento de los diferentes grupos agrarios y las clases medias morelenses se sumara al de otros sectores de diversas regiones del país.[83] Para ver la manera en que la política regional fue influida por la política nacional en 1910, es necesario detenerse un poco en la situación y evolución de las relaciones de poder entre las distintas clases y los grupos sociales regionales.

Primera batalla: el gobierno del general Leyva

En el estado de Morelos, la esfera de la política local en las décadas del porfiriato había sido un escenario conflictivo. Entre 1869 y 1877, dos de los grupos regionales más importantes, los dueños de haciendas e ingenios, por una parte, y los caudillos militares que se habían apoderado del gobierno estatal, encabezados por Francisco Leyva, por otra, habían tenido serias diferencias. El conflicto era viejo, pues Leyva formaba parte del clan regional de Juan Álvarez y, como éste, mantenía fuertes vínculos con los pueblos y comunidades agrarias e indígenas de la zona caliente del centro-sur del país. Al acceder al cargo de primer gobernador de la entidad —que se constituyó en estado en 1869—, Leyva puso en práctica medidas de carácter populista y afectó a los grupos económicamente poderosos con diversas medidas fiscales.

La pugna entre ambos bandos se hizo más aguda en 1873, con motivo de la renovación de los poderes locales. Leyva, quien buscaba reelegirse, desarrolló una campaña electoral de fuerte contenido nacionalista, xenófobo, antihacendado y antiespañol.[84] Contra Pedro Baranda, el candidato de los hacendados, dirigió un mensaje que tenía continuidad con las luchas de Independencia, es decir, con los esfuerzos de Álvarez y de los liberales:

> ¡¡Alerta, pueblo de Morelos!! Los constantes y declarados enemigos del jornalero, los monopolizadores del trabajo y del sudor de tus hijos, extranjeros todos, han proclamado por medio de la prensa la candidatura del general Pedro Baranda para gobernador del Estado.

[83] Rueda, "La dinámica...", *op. cit.*, p. 233.

[84] Este lenguaje agresivo conservaba reminiscencias de las luchas de Independencia y de los años posteriores a ella y formaba parte —o reflejaba influencias— de una protesta en contra de los grupos dominantes —que eran identificados como españoles— por parte de la cultura indígena y campesina de una amplia zona del centro-sur del país. Manifestaciones similares se harían presentes años después, en las postrimerías del porfiriato y durante la revolución.

El contenido fuertemente antiespañol de sus seguidores llegó al extremo de condenar no sólo a los hacendados hispanos, sino la misma colonización de las tierras americanas: "Ésa fue la bandada de búhos de claustro que se esparció por el continente con el crucifijo en una mano, el puñal en la otra, la perversidad en el corazón y las palabras traidoras en sus labios acostumbrados a mentir".[85]

La campaña de Leyva movilizó a los grupos agrarios, burócratas y fuerzas armadas estatales en contra de los hacendados, a los que se acusó de ser una clase egoísta, parásita, codiciosa y explotadora, que había despojado de sus tierras y aguas a los pueblos. Los hacendados, por su parte, replicaron también fuertemente y trataron de encontrar respaldo en los sectores que podían estar descontentos con el gobierno:

> ¡¡Pueblos de Morelos!! Ha llegado la hora de decidir tu suerte [...] Los que te han oprimido durante cuatro años; los que te cobran sin piedad la contribución de instrucción pública y no te dan escuelas para tus hijos; los que te cobran la guardia nacional y te hacen perder tus jornales para llevarte a cuidar los caminos; los que empobrecen el Estado para hacerse ricos; esos hombres son los que quieren continuar en el poder del que tanto abusan.

También explotaron la animadversión contra el cobro de impuestos y contra el personal del gobierno que lo exigía:

> Acuérdate de que al salir de la hacienda donde te han pagado puntualmente tu trabajo, te has encontrado con el cobrador que te ha quitado una parte de lo que llevabas a tu familia. Acuérdate de que los esbirros nada han respetado; han cercado tus casas como malhechores; han ido a buscarte hasta la cama donde descansabas de las fatigas del día; te han amenazado y maltratado con las armas que debían emplear en tu defensa; te han despojado de tu maíz, de tus animales, hasta de tu ropa; te han reducido a la miseria, porque todo es poco para su insaciable codicia.

Los hacendados hicieron una apología de su labor, amenazaron con irse del estado si se les continuaba atacando y manifestaron su creencia de que la resignación de los pobres y la caridad de los ricos sería la solución a los problemas:

> El delito de esos propietarios a quienes desdeñosamente se llama unos cuantos extranjeros ricos, ha sido el de fomentar con sus capitales e inteligencia, unas negociaciones molestas y arriesgadas, difundiendo el bienestar en las comarcas donde se hallan, alimentando el comercio, ofreciendo trabajo hon-

[85] Hoja suelta de mayo de 1873 y *El Eco de Morelos*, junio de 1873, citados en Rueda, *El paraíso...*, *op. cit.*, pp. 107-108 y 111.

> rado a los pobres, y dando ser al Estado. Si esos ricos despreciados echaran la llave a sus haciendas, Morelos quedaría convertido en un desierto [...] prediquemos mejor a los pobres la resignación, la honradez, el trabajo y la economía, para que así mejoren su suerte; a los ricos, la humanidad, el desprendimiento, la compasión, la caridad con los pobres.

Empero, no se engañaban: consideraban que sus trabajadores eran holgazanes y malvivientes y que el gobierno populista de Leyva era su enemigo por apoyar y azuzar a la plebe en contra de los propietarios:

> ¿Y cómo desempeña el gobierno de Morelos esta parte tan delicada de sus atribuciones? Presentándose como campeón decidido de lo que por un abuso se llama exclusivamente pueblo; hablándole siempre de sus derechos reales o ficticios y nunca de sus deberes; fomentando su inclinación a la vagancia, acogiendo presurosos las infundadas quejas de los díscolos; repitiéndole que es víctima de los que se enriquecen con su sudor y trabajo; azuzándole contra los propietarios que le proporcionan honroso sustento y poniendo, en fin, como si estuviera loco, cuantos medios están en su mano para desencadenar de un extremo a otro del Estado la horrible tempestad de la comuna.[86]

Después de una enconada lucha propagandística, gracias al apoyo del centro y la movilización de los sectores populares, Francisco Leyva pudo reelegirse,[87] pero las pugnas con los hacendados continuaron durante su segundo periodo de gobierno, el cual fue interrumpido por el ascenso de Porfirio Díaz a la presidencia de la República. Éste cumplió plenamente las aspiraciones de los hacendados.

La revancha de los hacendados

A partir de 1877, con el gobierno de Díaz, la política estatal dio un giro considerable: se modificó la relación entre el poder central y los propietarios azucareros y se cumplió el programa que éstos habían adelantado en su conflicto con Leyva. El gobierno porfirista promovió el desarrollo de la industria azucarera mediante apoyos y estímulos que permitieron el crecimiento del sector. El pacto de los hacendados con Díaz abarcó todos los órdenes: económico, político y legislativo; los favoreció disminuyendo

[86] *El Eco de Morelos*, mayo de 1873; *La Voz de Morelos*, 8 de junio, 31 de agosto y 9 de octubre de 1873; citados en Rueda, *El paraíso...*, *op. cit.*, pp. 108, 115, 119 y 124.

[87] Salvador Rueda, "Administración política y utopía hacendada: la lucha por el poder en el estado de Morelos (1869-1913)", *Historias* (México), núm. 13, abril-junio de 1986, pp. 95-103.

los impuestos, excluyó a los demás grupos de la toma de decisiones, etc. Este periodo de bonanza ha sido llamado por Womack "la utopía hacendada". El gobernador porfirista que aplicó esta política a plenitud fue Manuel Alarcón, quien dirigió la administración estatal desde 1894.[88]

Como se ha visto, el sistema de las haciendas pudo crecer y consolidarse como la forma económica dominante y la influencia de este sector en la toma de decisiones del gobierno fue definitiva. La mayoría de las tensiones y protestas, manifiestas o latentes, originadas por este desarrollo económico fue absorbida o neutralizada por los aparatos de control del régimen. Las elites políticas locales desplazadas por Díaz conservaron en todos esos años parte de su influencia. Empero, el aparente equilibrio conseguido por la *pax* porfiriana regional comenzó a mostrar sus límites, cuando protestas inéditas estallaron con la muerte del gobernador Alarcón y la coyuntura originada por su sucesión en 1909.

El proceso de selección del sustituto de Alarcón se realizó de conformidad con el mecanismo que había acostumbrado utilizar el régimen porfirista: el gran elector, Díaz, mantuvo su compromiso con el grupo regional más fuerte y designó como candidato oficial a Pablo Escandón. A nadie sorprendió que el candidato escogido representara fielmente los intereses de los hacendados y que, incluso, perteneciera a una familia prominente de este grupo. Pablo Escandón, propietario de la hacienda de Atlihuayán, era jefe del estado mayor de Díaz y primo del gobernador porfirista del Distrito Federal Guillermo de Landa y Escandón; por lo tanto, miembro distinguido de la elite económica y política porfiriana, con fuertes intereses y compromisos en el estado de Morelos. Impulsados por varios de los principales hacendados de la entidad se fundaron, en los primeros días de enero de 1909, clubes políticos de apoyo a la candidatura de Escandón, quien comenzó su campaña política con banquetes, reuniones y actos organizados por la elite económica y política morelense.[89]

La forma y el contenido de la selección reflejaban el predominio que había ganado en el sistema político porfiriano, desde fines del siglo XIX, el grupo denominado "los científicos", tecnócratas preparados y administradores eficientes que habían ido desplazando paulatinamente a los caudillos militares con los que Díaz había cimentado inicialmente su larga presidencia. De este modo, en los primeros años del nuevo siglo el régimen

[88] *Ibid.*, p. 105.

[89] Womack, *op. cit.*, pp. 10-36. Varios de los principales hacendados morelenses se reunieron con Díaz a fines de 1908 para dar su aval a la candidatura de Escandón y constituyeron, a principios de enero de 1909, un club político en Cuernavaca para respaldarla. Véanse Espejel y Rueda, "El desencanto porfiriano. Las elecciones de 1909 en Morelos", *Desdeldiez*, Boletín del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas (Jiquilpan), noviembre de 1994, pp. 8-9; *El Imparcial*, 2, 5 y 8 de enero de 1909; Rueda, *El paraíso...*, *op. cit.*, p. 182.

realizó un viraje, pues los compromisos y el acercamiento del gobierno central con las elites regionales y los grupos económicos poderosos se hicieron de manera selectiva y con el filtro cada vez mayor del grupo científico, que fortaleció su posición nacional y regionalmente a costa del desplazamiento de algunos caudillos y de una parte de las elites regionales y locales, lo cual generó conflictos e hizo cada vez más difícil resolver, como antaño, las diferentes disputas políticas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Así, pues, en la primera década del siglo XX, el régimen porfirista no pudo conservar su notable capacidad de mediación entre los diferentes sectores económicos y políticos. Con ello provocó una ruptura de los equilibrios regionales y locales —entre ellos mismos y con el poder central—, así como disputas y escisiones entre las elites, que derivaron en conflictos y resentimientos en contra del gobierno central de parte de los grupos de poder desplazados y sus clientelas subordinadas.[90]

El peso de los científicos y su alianza con las elites económicas morelenses se manifestó en la elección para la gubernatura de la entidad, en 1909, ocasión en que se echó a andar la tradicional maquinaria política electoral porfirista en la forma que François Xavier Guerra denomina, con acierto, la "ficción democrática".

Anquilosamiento del régimen y crisis política regional

Sin embargo, en 1909 el país atravesaba por una nueva situación: había una gran efervescencia política derivada de la incertidumbre producida por la avanzada edad de Díaz y la necesidad de definir su sucesión. El riesgo que implicaba la desaparición de la pieza principal del sistema político generó expectativas diversas e incitó la participación de diferentes grupos y sectores que intentaban influir en el relevo presidencial. Paralelamente, las clases medias, los intelectuales y algunos sectores desplazados de las clases altas desarrollaron una inusual actividad política en varias partes del país y, detrás de ellos, algunos sectores populares comenzaban a movilizarse y a manifestar su inconformidad con un proceso que, según podía deducirse de las medidas que estaba tomando Díaz, mantendría el dominio político de los científicos. Adicionalmente, a los efectos de la crisis económica que vivió el país en 1907-1908 se añadieron el resentimiento ante las políticas excluyentes adoptadas por la elite gobernante

[90] Para una descripción muy completa del funcionamiento del sistema político porfiriano, véase el libro de Guerra, ya citado, así como Daniel Cosío Villegas, *Historia moderna de México. El Porfiriato, vida política interior*, vols. 8 y 9, México, Hermes, 1980.

porfirista, el rechazo de grupos regionales a la centralización y numerosas protestas en contra de los efectos de la modernización comercial agrícola.[91]

De manera particular, en Morelos se comenzó a aglutinar una oposición importante a la imposición de Pablo Escandón como gobernador. Esta oposición estuvo formada inicialmente por familias de la elite local desplazadas, por clases medias urbanas (tenderos, pequeños comerciantes, abogados, periodistas, maestros rurales) y por antiguos liberales republicanos. Quien aglutinó esta oposición fue precisamente el viejo general y exgobernador Francisco Leyva, quien, a pesar de su exclusión por Díaz del aparato político estatal, había conservado su prestigio de personaje notable e intermediario importante entre el régimen porfirista y algunos grupos opositores de la zona. El viejo general era respetado y reconocido como la principal figura opositora en el estado. Desde esta posición privilegiada tenía posibilidad de aglutinar a los grupos y sectores resentidos.[92]

Sin embargo, la edad avanzada del militar era un fuerte obstáculo para que pudiera encabezar la campaña política opositora. Respetuoso de las formas y plenamente consciente del poder de Díaz, el viejo general fue a verlo a fines de diciembre de 1909 con el fin de obtener su aval para la candidatura de su hijo, Patricio Leyva. Díaz le contestó con evasivas y le dijo, ambiguamente, que vería con agrado que los morelenses ejercieran sus derechos políticos y que reconocería al triunfador de la contienda.[93] Leyva pensó que si bien Díaz no lo apoyaría, tampoco se opondría a la campaña; ésta pronto aglutinó las lealtades y compromisos de sus seguidores en favor de Patricio. Comenzó así una campaña electoral independiente que para sus principales colaboradores —hombres, todos ellos, formados en las entrañas del sistema— y para el propio Leyva no intentaba representar un serio desafío al régimen porfiriano, sino promover una movilización controlada para obligarlo a negociar y así obtener algunas concesiones.

Para llevar a cabo estos deseos, Leyva y sus colaboradores tenían que alcanzar una posición de fuerza, la cual sólo podrían conseguir generando una movilización popular controlada en torno suyo. La campaña independiente encontró terreno fértil e incorporó a clases medias y a sectores de la población rural del estado. Además, tuvo el apoyo de una fracción

[91] Guerra, *op. cit.*, t. II, pp. 81-119; Hans Werner Tobler, *La revolución mexicana. Transformación social y cambio político, 1876-1940*, México, Alianza Editorial/Editorial Patria, 1994, p. 25.

[92] *Diccionario histórico y biográfico de la Revolución mexicana*, 8 vols., México, INEHRM, 1991, t. IV, pp. 489-492; Rueda, "Administración política...", *op. cit.*, pp. 104-105, y *El paraíso...*, *op. cit.*, p. 185.

[93] Colección Porfirio Díaz (en adelante CPD), Universidad Iberoamericana, legajo 70, f. 497; Espejel y Rueda, "El desencanto...", *op. cit.*, p. 11.

política que se había formado poco tiempo antes en la ciudad de México y que pretendía ser una tercera vía entre las dos principales clientelas políticas porfirianas —científicos y reyistas—: el Partido Democrático. Una fracción de este partido, encabezada por el periodista Juan Sánchez Azcona, el ingeniero Alfredo Robles Domínguez y el periodista Paulino Martínez —destacados políticos opositores de la ciudad de México—, se incorporó a la campaña leyvista y comenzó a hacer llamados a los pueblos del estado para que se sumaran a ella.

Lo novedoso fue que los partidarios de Leyva encontraron una respuesta importante, expresada en la formación de alrededor de 25 clubes leyvistas en las principales poblaciones.[94] La composición de estos clubes era variada: tenderos, comerciantes, maestros, periodistas y grupos rurales, entre ellos algunos representantes tradicionales de los pueblos. En poco tiempo, la movilización electoral se extendió y radicalizó. La campaña leyvista, con la participación de los agitadores de la ciudad de México y de dirigentes estatales que pronto emergieron, retomó el lenguaje agresivo, regionalista, xenófobo, antihacendado y antiespañol que había utilizado el general Leyva años atrás, así como los líderes de la guerra de Independencia y de las luchas posteriores.[95] Sin embargo, las condiciones en las que se expresó esta campaña fueron distintas, pues ahora se hacía desde la oposición y al margen de las instituciones. Las bases de Patricio Leyva no estaban integradas por burócratas, como años atrás las de su padre, sino por clases medias urbanas y sectores rurales descontentos, lo que dio a su campaña un cariz distinto que inquietó al gobierno porfirista.[96] Lo que más desconcertó al régimen fue el grado de radicalización que alcanzó la campaña y que, en la propaganda de algunos dirigentes leyvistas estatales, se prometiera a la gente de los pueblos que podrían recuperar sus tierras en disputa con las haciendas y se les infundiera el temor de que quienes aún tenían sus tierras y aguas, las perderían si Escandón llegaba a la gubernatura.[97]

No acostumbrado a tolerar disidencias fuertes, el sistema porfirista endureció su posición y lanzó una intensa campaña de desprestigio y amenazas contra Leyva y sus seguidores, dando órdenes para que se arrestara

[94] Vecinos de Cuautla y Anenecuilco a Díaz, 11, 12 y 19 de enero de 1909, CPD, leg. 70, ff. 1085, 1101, 1064; Rueda, *El paraíso..., op. cit*, pp. 185-186.

[95] Incluso el propio Patricio Leyva en algunos de sus discursos empleó este lenguaje agresivo, llamando a los hacendados "vampiros, explotadores de los indios y de sus tierras"; véase gobernador Luis Flores a Díaz, Cuernavaca, 11 de enero de 1909, CPD, leg. 70, f. 646. El gobernador interino de Morelos Luis Flores siguió, por instrucciones de Díaz, muy de cerca la campaña leyvista.

[96] Rueda, "Administración política...", *op. cit.*, pp. 105-106.

[97] Luis Flores a Díaz, Cuernavaca, 15 enero 1909, CPD, leg. 70, f. 645; Javier Rojas, jefe político de Cuautla, a Díaz, Cuautla, 23 de enero de 1909, CPD, leg. 70, ff. 943-944; Rueda, *El paraíso..., op. cit.*, p. 187.

a quienes, en las manifestaciones que tuvieron lugar en esos días, gritaran consignas adversas al candidato oficial.[98] A pesar de que el 25 de enero el gobernador morelense prohibió cualquier manifestación leyvista, el 30 de ese mes se realizó una gran concentración de sus seguidores en Cuernavaca, así como el cierre de campaña, efectuado el 3 de febrero en Cuautla, donde se reunieron 4000 personas.[99]

El clímax de la tensión entre ambas campañas se alcanzó ese día en la ciudad de Cuautla, en el cierre de la campaña oficial, cuando ocurrió un enfrentamiento entre partidarios de Leyva y las fuerzas del orden. A partir de ese momento se desató la represión en contra de los dirigentes locales del leyvismo; hubo arrestos, despidos, deportaciones y represalias que provocaron la desarticulación del movimiento leyvista y la imposición de Pablo Escandón como gobernador. El mismo Patricio Leyva, asustado y confundido, al verse a la cabeza de un movimiento contestatario que no esperaba, se deslindó de la violencia y el radicalismo de sus seguidores y aclaró públicamente que no tenía intenciones de crear problemas al régimen ni desestabilizar el estado.[100] Empero, la represión más virulenta no tocó a los principales cuadros dirigentes del leyvismo —es decir, a los políticos opositores de la ciudad de México y a la gente cercana a los Leyva—, solamente a los cuadros medios y a los simpatizantes opositores locales, que no tenían vínculos con las elites y quedaron desprotegidos. Las elecciones se realizaron sin contratiempos y el congreso local proclamó el triunfo de Pablo Escandón, quien asumió la gubernatura constitucional el 15 de marzo de 1909.[101]

[98] El Club Político Morelos, de Cuernavaca, escribió una larga carta a Díaz en donde denunció que los empleados y funcionarios públicos cometían faltas al sostener la candidatura de Escandón y al impedir a los miembros del club pegar y hacer propaganda en favor de Leyva; asimismo, que les habían impedido llegar a una manifestación leyvista realizada en Cuernavaca el 12 de enero. Denunciaban también que en algunas haciendas se ofrecía dinero a los jornaleros para que firmaran en apoyo a Escandón. Véase Antonio Sedano a Díaz, 31 de enero de 1909, APD, leg. 34, ff. 81-82. Los clubes de Tlaltizapán y Tlaquiltenango denunciaron también las presiones estatales en favor de Escandón. En Zacatepec y San Nicolás se retuvo el pago a los peones hasta que firmaran un acta de apoyo a Escandón y se amenazó con enviar a la cárcel a quienes no asistieran a las manifestaciones del candidato oficial. Miembros del Club Democrático Tlaltizapán a Díaz, 28 de enero de 1909, leg. 34, ff. 95-98 y 108-112.

[99] Espejel y Rueda, "El desencanto...", *op. cit.*, pp. 22-23; Rueda, *El paraíso...*, *op. cit*, pp. 188-195.

[100] Patricio Leyva fue despedido de su puesto en la Secretaría de Fomento; su hermano Alfredo también fue cesado de la policía poco después. Véase "Declaraciones de Francisco Leyva al periódico *México Nuevo*", *México Nuevo*, 7 de febrero de 1909.

[101] *Semanario Oficial del Estado de Morelos*, vol. XVIII, núm. 12, 20 de marzo de 1909.

La escuela del leyvismo

Después de muchos años, otra vez se habían movilizado conjuntamente varios sectores de la población morelense, en una alianza interclasista que traspasó los límites estatales. Aunque fue derrotado, el movimiento leyvista sirvió para poner en contacto y aglutinar el descontento social de diversos sectores urbanos y rurales de la región; dejó, además, en grupos e individuos, valiosas experiencias políticas y organizativas y se convirtió en el antecedente inmediato de la rebelión que estalló dos años después.[102]

Cabe subrayar el hecho de que, detrás del clan de los Leyva y posiblemente atraídos por el tono antihacendado de algunos de los líderes leyvistas y por sus llamados a recuperar y proteger las tierras y aguas de los pueblos, se hayan incorporado a la campaña opositora algunos sectores de clases medias y bajas de los pueblos y localidades rurales de la entidad, movilizados por líderes naturales locales; poco después, algunos de ellos encabezarían el movimiento zapatista. Así, Emiliano Zapata, Pablo Torres Burgos, Otilio Montaño, Genovevo de la O, Gabriel Tepepa, Francisco Franco, Rafael Merino y otros líderes del zapatismo original tuvieron participación, en un plano secundario, en el movimiento leyvista. No es desdeñable la escuela que el leyvismo dejó a estos personajes, circunscritos hasta entonces a la problemática local de sus comunidades. El leyvismo les enseñó los rudimentos organizativos de una campaña electoral, los puso en contacto con grupos políticos nacionales y les permitió establecer vínculos entre ellos mismos, así como con otros grupos y cuadros políticos opositores, tanto del estado como del exterior. Les mostró también los límites estrechos que permitía el régimen porfirista a las oposiciones y les dio la certeza de que la elite estaba debilitada, dividida y era muy dependiente del centro. La represión selectiva ejercida en contra de estos dirigentes locales, que no contaban con cobertura alguna, contactos políticos ni protectores encumbrados, fue el punto de partida para su radicalización defensiva. Así, pues, la campaña leyvista fue para todos ellos su primer contacto formativo con la política estatal y nacional.

Por su parte, el gobierno de Pablo Escandón, una vez pasada la agitación electoral y sus secuelas, hizo muy poco por atraerse a los sectores

[102] El desarrollo de la campaña leyvista puede verse en Guerra, *op. cit.*, t. II, pp. 105-117; Womack, *op. cit.*, pp. 10-36; Jesús Sotelo Inclán, *Raíz y razón de Zapata*, México, CFE (2a. versión), 1970, pp. 470-488; Alan Knight (en *The Mexican Revolution*, Lincoln y Londres, University of Nebraska Press, vol. I, 1986, pp. 71-73) subraya que la campaña política de 1909 en Morelos no fue la única en la que hubo una importante movilización opositora; también ocurrieron otras similares ese mismo año en Coahuila, Sinaloa y Yucatán, lo cual ilustra que los controles políticos tradicionales del régimen se estaban desgastando y que había un gran descontento en la región por sus políticas excluyentes.

descontentos que habían apoyado el leyvismo; todo lo contrario, su administración se caracterizó por la falta de actividad y de proyectos y entre lo poco que hizo se encontraron modificaciones fiscales que aligeraban el pago de los grandes propietarios y gravaban todavía más a los comerciantes y tenderos, muchos de los cuales habían simpatizado con el leyvismo. Además, con muy poco tacto, realizó imposiciones de jefes políticos mal vistos por las localidades y se escudó en una burocracia traída de fuera del estado, ineficaz y corrupta, exacerbando las tensiones que ya se habían manifestado.[103] A los viejos agravios se sumaron nuevos, derivados de la represión desatada en contra de los dirigentes leyvistas locales y de la ineficaz política de Escandón.

El largo predominio de las relaciones mercantiles que giraban en torno de la economía azucarera regional parecía haber ganado la batalla. Sin embargo, la modernización productiva había alterado la relación entre los grupos agrarios y se había producido una importante coyuntura política local, que demostró la existencia de diferencias y fracturas en las elites, tanto en el contexto nacional como en el regional. La campaña leyvista mostró con claridad esta fractura y las posibilidades de una alianza entre los sectores excluidos por el régimen. Con la derrota del leyvismo, no obstante, en el panorama inmediato la situación parecía controlada. Tanto el régimen nacional como las elites locales podían dedicarse sin mayores preocupaciones a atender sus actividades cotidianas. Los lazos de la dominación porfiriana parecían haberse reforzado y no se veían dificultades en el horizonte. Sin embargo, esta calma era sólo aparente. Se habían producido las condiciones que harían posible el surgimiento de una revuelta que se inscribiría en el contexto de una rebelión nacional más amplia. En el ámbito local estallaría como una revuelta de los grupos agrarios más afectados por la modernización azucarera, principalmente los arrendatarios desplazados, a los que pronto se sumarían otros sectores que le darían el carácter de una amplia rebelión agraria. Sin embargo, en los meses finales de 1910 se inició un compás de espera que pronto terminaría de manera abrupta.

En resumen, se habían producido condiciones que posibilitaban el estallido que sucedió poco después: conflictos agrarios seculares, ruptura de los equilibrios sociales, movilización popular, liderazgo autónomo, agravios acumulados, problemas económicos, fractura de las elites nacionales y regionales, represión, factores todos que por sí mismos no bastaban, pero que sí eran necesarios para explicar el estallido revolucionario.

[103] *Semanario Oficial del Estado de Morelos*, vol. XVIII, núm. 16, 17 de abril de 1909. y vol. XVIII, núm. 26, 26 de junio de 1909; Womack, *op. cit.*, pp. 37-40, 53.

CAPÍTULO II. LA REBELIÓN CONTRA DÍAZ

La rebelión que tuvo lugar en Morelos a principios de 1911 se debió a la confluencia excepcional de por lo menos los siguientes cuatro factores: *1)* la existencia de un descontento extendido entre sectores medios y bajos de la población rural morelense con una parte de las elites económicas y políticas regionales, palpable después de la derrota del leyvismo y de la campaña represiva en contra de algunos de los dirigentes y simpatizantes de ese movimiento; *2)* la organización de la revuelta por un grupo de individuos surgidos de las clases medias y bajas rurales, los cuales habían participado en el leyvismo y en distintas luchas de sus comunidades por motivos agrarios; carentes de vínculos con las elites regionales o nacionales, estos individuos sufrieron persecución política por su participación en el leyvismo y por su relativo aislamiento y falta de protección de las elites locales; contaban además con prestigio y reconocimiento locales y se encontraban proscritos y perseguidos por el régimen porfiriano; *3)* la difícil situación de estos nuevos personajes en algunos de los pueblos, ante la falta de tierras propias o arrendadas para sembrar; *4)* el estallido de la rebelión maderista, que se propagó a principios de 1911 a distintas regiones del territorio nacional y demostró la debilidad del sistema de dominación porfiriano y la fractura existente entre las elites gobernantes de la nación, brindó a los conspiradores locales la oportunidad de incorporarse a un movimiento que estaba tomando grandes dimensiones, al tiempo que les ofrecía legitimidad y perspectivas para resolver la situación en que se encontraban, tanto en lo que respecta a la problemática agraria de sus comunidades como en lo referente a su situación personal de perseguidos.

Al encontrar apoyo en los sectores bajos rurales morelenses, la revuelta local pronto se extendió y en tres meses consiguió hacerse del poder local, contribuyendo así a la caída del régimen porfiriano. En este rápido ascenso de la insurrección jugaron un papel preponderante los agravios cometidos en contra de amplios sectores de las clases subordinadas agrarias de la región, los cuales, con el crecimiento de las fuerzas de los grupos rebeldes y, en forma inversa, la disminución del poder de control y disuasión estatal, ejercieron gran violencia en contra de los símbolos (individuos e instituciones) más débiles y desacreditados del sistema de dominación: autoridades locales, policía rural, así como una parte de las elites económicas, principalmente los comerciantes y, de manera incipiente, los hacen-

dados. La rebelión creció pronto, con fuertes rasgos de violencia de clase de carácter reivindicatorio y justiciero, aunque sin demandas positivas claras. Se crearon bandas guerrilleras aglutinadas en torno de dirigentes con fuerte arraigo local, surgidos de las clases bajas rurales, sin vínculos con las elites económicas y políticas regionales o nacionales. Un factor decisivo para la creación de un vínculo de identidad del nuevo liderazgo regional lo constituyó la disputa por la hegemonía rebelde entre el grupo original que organizó la revuelta en Morelos, en el que Emiliano Zapata destacó desde los primeros días como su cabeza principal, y el de los rebeldes de Guerrero, comandados por los hermanos Figueroa. La mayor afinidad de estos últimos con las posiciones conservadoras que se impusieron en el grupo maderista triunfante inclinó el fiel de la balanza hacia el grupo de los Figueroa, relegando a un segundo plano a los alzados morelenses, que entonces comenzaron a ser identificados como zapatistas. Empero, esa situación sólo fue transitoria. En los siguientes meses continuaría la lucha por la hegemonía rebelde, con mayor identidad e identificación entre los zapatistas.

La experiencia electoral maderista

La situación política nacional también mostraba signos de cambio. En 1909, después de varios conflictos políticos regionales similares al de Morelos que ocurrieron tras los cambios sucedidos en los gobiernos estatales de Coahuila, Sinaloa y Yucatán, comenzó a formarse un amplio movimiento en varias partes del territorio nacional en torno del general Bernardo Reyes, figura central de la elite gobernante porfirista, representante de los viejos caudillos militares y cabeza indiscutible de un amplio sector que se oponía, desde el interior del Estado, a la modernización tecnocrática impuesta por los científicos. La movilización popular que se aglutinó alrededor de este personaje —promovida por opositores urbanos a Díaz, entre los que había periodistas, abogados, líderes de trabajadores, etc.— tenía por objeto influir en la sucesión presidencial de don Porfirio —quien, se pensaba, conseguiría su última reelección— y llevar a Reyes a la vicepresidencia. Quienes lo apoyaban formaron una coalición interclasista que abarcaba a elites regionales desplazadas, clases medias urbanas, intelectuales, periodistas, profesionistas, burócratas, comerciantes, estudiantes y obreros. El reyismo se extendió por varias de las principales ciudades del país, como Monterrey, Guadalajara, Puebla y el Distrito Federal.[1]

[1] Para el ascenso del reyismo en 1908 y 1909, véase Víctor Niemeyer, *El general Bernardo Reyes*, México, Gobierno del Estado de Nuevo León/Universidad Autónoma de Nuevo León, 1966. Véanse también: Guerra, *op. cit.*, t. II, pp. 152-177, y Santiago Portilla, *Una sociedad en*

A medida que se fue extendiendo, el movimiento reyista enfrentó el rechazo del régimen y se radicalizó, exigiendo cambios políticos y una mayor participación de los sectores excluidos. En virtud de su amplitud, amenazaba con convertirse en un peligro para la estabilidad del sistema político porfiriano, el cual consiguió frenarlo mediante la defección del propio Reyes, para quien era inconcebible e indeseable enfrentarse al gran caudillo y aceptó sumisamente el exilio que éste le impuso. Con la salida de Reyes, Díaz pudo despejar el panorama nacional y maniobrar con holgura en favor de Ramón Corral como su compañero de fórmula para ocupar la vicepresidencia del país. El reyismo quedó acéfalo y se eclipsó rápidamente el mismo año de su nacimiento. Sin embargo, no desapareció del todo de la escena política nacional. Las demandas, aspiraciones y planteamientos de los grupos e ideólogos que estaban detrás de él siguieron presentes en varios núcleos de simpatizantes que continuaron organizados, de seguidores que habían cobrado mayor conciencia y no se conformaron con volver a la situación anterior y de líderes que buscaron nuevos canales de expresión y se manifestaron en los meses posteriores.[2]

La defección de Bernardo Reyes provocó que el movimiento antirreeleccionista encabezado por Madero, que se había iniciado en ese mismo año de 1909 con escaso éxito, engrosara sus filas y se fortaleciera con muchos de los dirigentes del reyismo y con la experiencia acumulada por dicho movimiento. Existió, por lo tanto, una relación de continuidad muy importante entre el movimiento reyista y el antirreeleccionismo maderista en cuanto a los sectores y grupos sociales que aglutinaron, así como en los objetivos, planteamientos y aspiraciones de sus dirigentes. El reyismo y el maderismo fueron también semejantes en los límites que se fijaron sus promotores: obligar al régimen porfirista a abrir espacios políticos dentro de la legalidad, mediante la presión de una movilización popular controlada por las elites.

Sin embargo, difirieron en un aspecto central, pues, ante la negativa y la actitud amenazante del grupo hegemónico porfirista, Reyes, general y hombre arquetípico del sistema, conocedor de las lealtades y compromisos de los cuales él mismo formaba parte, desertó de inmediato cuando Díaz le mostró claramente que su preferencia iba en otra dirección. Ma-

---

armas: insurrección antirreeleccionista en México, 1910-1911, México, El Colegio de México, 1995, pp. 35-45.

[2] Entre las personalidades que participaron en el reyismo o estuvieron cerca de él y que luego tendrían un papel muy importante en la política nacional dentro del movimiento antirreeleccionista maderista, durante la revolución y el régimen de Madero, se encontraban Juan Sánchez Azcona, Manuel Calero, Rafael Zubarán, Benito Juárez Maza, Alfredo y Gabriel Robles Domínguez, Francisco Cosío Robelo, Toribio Esquivel Obregón y Francisco Vázquez Gómez.

dero, quien no había formado parte del sistema político y, por lo tanto, no se sentía atado por esa misma red de compromisos y lealtades, sino, contrariamente, portador de una misión para abrir el sistema político porfiriano, por su parte no lo hizo. Su actitud de intransigencia legal dio a su movilización electoral una dimensión de desafío real, que hizo que se convirtiera en la impugnación y cuestionamiento más grande que hubiera enfrentado hasta entonces el sistema político porfiriano. La campaña electoral fue muy exitosa y despertó expectativas de cambio en vastos sectores del territorio nacional. Fue también un amplio movimiento interclasista, pero de una dimensión superior a la que habían alcanzado oposiciones anteriores, razón por la cual el régimen porfiriano, una vez más, reprimió el movimiento, encarceló a Madero y consumó la que sería su última reelección, a pesar de la impugnación del proceso por los líderes maderistas. Tras el fraude electoral, Madero dio el paso que los movimientos de oposición anteriores —salvo el magonismo— no habían querido dar: la ruptura violenta,[3] la cual ocurrió con el llamado a la insurrección para derrocar al régimen de Díaz.[4]

[3] Desde luego, la notable excepción la constituye el grupo magonista del Partido Liberal Mexicano, cuyos integrantes habían evolucionado desde posturas democráticas liberales hasta el anarquismo, la declaración de guerra contra el régimen porfiriano y la insurrección, que intentaron sin éxito en varias ocasiones durante la etapa final del porfiriato y en 1911. Sin abandonar esta postura extrema, los líderes magonistas en el exilio tuvieron escasa influencia directa en el desarrollo de los acontecimientos nacionales durante el decenio revolucionario.

[4] No se han aclarado aún las razones y motivos que llevaron a Madero y a sus principales colaboradores a tomar esta trascendental decisión. Desde luego, la campaña electoral había sido exitosa en la creación, en varios estados, de una estructura política organizada en la que destacaron cuadros políticos capaces; contribuyó así a sensibilizar a un amplio sector de la población sobre la necesidad de un cambio político democrático. Madero pudo comprobar que había receptividad y disposición entre gente de las regiones que visitó en su campaña para participar activamente en la política, lo cual pudo haber influido en la consideración de que su llamado a la rebelión podría tener eco, una vez demostrada la cerrazón del régimen y la improcedencia de los recursos legales de impugnación de la elección. Empero, tal llamado sigue pareciendo una aventura, pues, no obstante la capacidad política que habían demostrado varios de los dirigentes maderistas y de la preparación de la insurrección que intentaron hacer en algunos lugares considerados estratégicos, en términos generales el movimiento no contaba con los cuadros, la organización, la capacidad, la experiencia ni los recursos necesarios para una acción de tal envergadura. Había un abismo entre la respuesta observada en los amplios sectores —principalmente urbanos— que se movilizaron durante la campaña electoral y su participación, limitada al ejercicio del voto, por un lado, y el grado de compromiso, valor y riesgo que implicaba sumarse a una rebelión, por otro. Ésta fue más bien rural, con otros actores y demandas. Hace falta un estudio más profundo sobre la formación, la personalidad y la percepción que tuvo Madero de los acontecimientos que tuvieron lugar en esos días, para comprender la razones que lo llevaron a tomar esa importante decisión. Quizás haya que dar mucho más peso a la personalidad de Madero y a su inclinación por la práctica del espiritismo, tal como lo ha hecho Krauze, para atribuir su comportamiento público a la conciencia que tenía de ser el portador de una misión trascendental que cumplía al meterse en la política nacional y desafiar al régimen porfiriano. Quizá se encuentren más razones explicativas

Morelos, al margen del maderismo electoral

Paradójicamente, en el estado de Morelos, a pesar de la movilización leyvista, ni el reyismo ni el maderismo electoral antirreeleccionista tuvieron alguna repercusión importante. Llama la atención el hecho de que movimientos tan similares por sus características de composición social, formas de liderazgo y tipo de demandas, como el leyvismo, el reyismo y el maderismo electoral, no hubieran podido establecer vínculos. Esto ocurrió a pesar de la existencia de dirigentes con presencia nacional —como Juan Sánchez Azcona, Paulino Martínez y los hermanos Alfredo y Gabriel Robles Domínguez—, los cuales tuvieron participación destacada en los tres movimientos y, por lo mismo, podían haber dado continuidad y articulación regional a los sectores que habían emergido en el leyvismo y establecer puentes con los movimientos aglutinados en torno de Reyes y Madero. Sin embargo, esto no sucedió así y en ello influyeron varios factores: en primer lugar, Patricio Leyva, atemorizado, se negó a establecer vínculo alguno con el movimiento reyista y con el maderismo; en segundo lugar, la represión porfirista emprendida en contra de algunos dirigentes leyvistas morelenses había desarticulado la organización desde meses atrás. En febrero de 1909, Antonio Sedano y Pablo Torres Burgos fueron apresados y permanecieron varios meses en prisión. Algunos líderes menores también desaparecieron de la escena política y tuvieron que esconderse temporalmente, como Emiliano Zapata y Genovevo de la O, o exiliarse, como Bernabé y Ezequiel Labastida.[5]

Así, pues, en el ámbito estatal, la alianza que había podido establecerse en el leyvismo entre clases medias, sectores populares, elites locales desplazadas y dirigentes políticos opositores de la ciudad de México no fue posible realizarla con el reyismo ni con el maderismo electoral de 1909-1910,[6] lo que aisló relativamente al estado morelense de esos importantes episodios políticos nacionales.

Al carácter foráneo del maderismo y a la incapacidad de los dirigentes maderistas para crear nuevos vínculos con los sectores morelenses que se movilizaron en el leyvismo, se sumó la fuerte tradición de liderazgos autónomos con gran arraigo regional de los pueblos morelenses, factores todos que se conjugaron para que prácticamente no hubiera existido participación morelense en la etapa electoral maderista. Además, es una de las

---

en esta condición mística que en la racionalidad de una decisión que, por dondequiera que se le vea, parece una acción irreflexiva y aventurera.

[5] Womack, *op. cit.*, pp. 55 y 74; Guerra, *op. cit.*, t. II, pp. 213-217.

[6] Womack (*op. cit.*, p. 38 y pp. 55-56) señala la existencia de sólo dos clubes maderistas en el estado formados por antiguos leyvistas, en Cuernavaca y Jojutla, y con simpatizantes en Yautepec y Cuautla.

causas que posibilitaron que, meses después, se desarrollara otro tipo de liderazgo local, autónomo, compuesto por individuos que estaban más bien vinculados al campo que a las clases medias urbanas ilustradas; ellos fueron los que promovieron la incorporación al maderismo nacional, pero ya no en su etapa pacífica electoral sino en su fase de rebelión armada.

La incorporación a la rebelión maderista

En la preparación de la insurrección maderista, ni Madero ni sus principales colaboradores dieron importancia estratégica al estado de Morelos, como sí lo hicieron con la ciudad de México, Pachuca y Puebla, lugares en los que había tenido lugar una importante movilización durante la campaña electoral y en donde se contaba con clubes organizados y líderes con arraigo local que se encargaron de preparar la revuelta.[7] Morelos estuvo al margen de este proceso.

Para complicar el asunto, los líderes maderistas encargados de organizar la insurrección en las ciudades de México y Puebla y en las zonas aledañas al centro del país —Alfredo Robles Domínguez, Aquiles Serdán, y otros— fueron descubiertos y apresados o asesinados por el régimen porfirista antes de que tuviera lugar el estallido anunciado por Madero.[8] Por lo demás, el llamado a las armas no prendió prácticamente en ningún lugar de la República. Madero mismo, que se encontraba en los Estados Unidos de América desde octubre, no pudo entrar al territorio nacional el 20 de noviembre, fecha programada para el estallido, ni en los días siguientes, y tuvo que regresar, frustrado, a esconderse en San Antonio, Texas. Sólo unos pocos y desarticulados grupos norteños, particularmente chihuahuenses, hicieron suya la revuelta y comenzaron los hostigamientos armados contra el ejército porfiriano. Pero en noviembre y diciembre de 1910, si se mira el conjunto del país, la rebelión maderista era un rotundo fracaso.

A pesar de este desalentador comienzo, poco después, en enero de 1911, la rebelión armada maderista tomó fuerza en Chihuahua y se ex-

[7] David G. La France, *The Mexican Revolution in Puebla. The Maderista Movement and the Failure of Liberal Reform*, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources Imprint, 1989, pp. 31-50 y ss.

[8] En el estado de Puebla, donde el maderismo había tenido fuerte repercusión entre las clases medias moderadas y sectores radicalizados de trabajadores de la importante industria textil, la represión y el desmantelamiento de esta red había comenzado aun antes de las elecciones presidenciales, a pesar de lo cual, un grupo radical encabezado por Aquiles Serdán pudo continuar con los preparativos de la insurrección; finalmente, la organización fue abortada de manera sangrienta por el régimen, descabezando a uno de los núcleos opositores con mejor organización y arraigo local, lo cual incidiría después en el desarrollo del movimiento zapatista. Véase *ibid.*, pp. 31-50.

tendió a otras regiones, dando forma en unos pocos meses a un movimiento insurreccional, de dimensión casi nacional, al que no pueden atribuirse una causa ni un objetivo únicos, sino que aparece formado por una compleja trama de actores regionales —elites, clases medias, grupos de trabajadores urbanos, grupos agrarios, sectores marginales de las ciudades, etc.— y alentado por múltiples motivos que combinaban viejos y nuevos agravios, ambiciones y oportunismo, todo lo cual hizo crecer la rebelión y que ésta llegara a muchas localidades, sobre todo del norte del país.

En el estado de Morelos, entre tanto, las elites desplazadas, la clase media intelectual y los grupos medios urbanos y rurales, en su gran mayoría, permanecieron ajenos a la aventura maderista insurreccional, aunque sí se interesaron en la política local. En las elecciones municipales que tuvieron lugar en noviembre de 1910, el gobierno de Pablo Escandón, confiado, no prestó atención a la contienda y en ocho municipios resultaron electos antiguos leyvistas, lo cual demostraba que la influencia de estos grupos no había desaparecido de la vida política del estado pese a la represión, y que podían seguir activos como oposición legalmente constituida.[9]

En cambio, los escasos y pequeños grupos morelenses que hicieron suya la revuelta maderista tuvieron características muy diferentes. Sus líderes procedían casi todos del movimiento leyvista anterior pero, a diferencia de los principales cuadros leyvistas estatales, estos nuevos dirigentes provenían del campo y de sectores de modestos recursos económicos. Además, dadas las condiciones restrictivas para la participación política impuestas por el porfiriato, y debido a su extracción popular, no habían figurado —ni podían hacerlo— en el escenario político, reservado, salvo contadas excepciones, para las elites: familias notables, clases propietarias y sectores medios ilustrados. Por ello, los dirigentes estatales de la rebelión maderista no habían intervenido antes en las contiendas políticas locales ni habían intentado ocupar puestos de representación; su participación en la campaña leyvista había sido muy secundaria, más como simpatizantes que como encargados de tareas políticas de mayor responsabilidad.

Los conspiradores

Los organizadores de la revuelta que dio origen al zapatismo, Emiliano Zapata, Pablo Torres Burgos, Otilio Montaño, Gabriel Tepepa, Genovevo de la O, Francisco Franco, Rafael Merino, Amador Salazar, Lorenzo Vázquez, Catarino Perdomo, Próculo Capistrán y Emigdio Marmolejo, quienes

[9] Womack, *op. cit.*, p. 60.

hicieron suyo el llamado a la insurrección de Madero, tuvieron varias cosas en común. En primer lugar, todos ellos eran parte de las clases medias y bajas de la sociedad agrícola morelense. Tenían una situación económica relativamente desahogada, aunque modesta. No contaban con grandes recursos y se ganaban el sustento con su trabajo en el campo o en actividades relacionadas con el medio rural: arrendatarios, jornaleros temporales en las haciendas, leñadores, cuidadores de ganado. Algunos de ellos, como Zapata, eran pequeños propietarios y contaban con tierras y animales de los que sacaban el sustento; otros eran pequeños comerciantes, tenderos o arrieros; unos más eran peones jornaleros que trabajaban en las haciendas del valle de Cuautla o carboneros, como Genovevo de la O, que se ganaba la vida acarreando leña y haciendo carbón que vendía en las localidades cercanas a Cuernavaca, o maestros rurales, como Torres Burgos y Montaño, que eran profesores de enseñanza primaria establecidos en la región desde tiempo atrás. Todos ellos eran individuos que habían llegado ya a la madurez de sus vidas, pues salvo el caso de Gabriel Tepepa, que era ya un anciano de 69 años, veterano de la guerra contra los franceses, los demás tenían entre 31 y 42 años.[10]

Eran hombres maduros, con responsabilidades como jefes de familia, con hijos algunos de ellos, y tenían, hasta cierto punto, resueltas sus necesidades materiales. Ninguno de ellos padecía necesidades apremiantes y su perspectiva de vida no parecía ser particularmente mala, dentro de la medianía y la modestia de su condición económica rural. Compartían también el hecho de ser personajes notables, reconocidos en sus localidades. Varios de ellos se destacaban por tener una posición de cierto prestigio local y habían demostrado, además, su condición de líderes al ser nombrados representantes de algunos de los órganos de gobierno y representación locales o al encabezar movimientos de protesta agraria; tenían, entonces, una cierta ascendencia y se habían ganado un relativo respeto entre la gente común de sus localidades.

También eran individuos de nivel cultural —con la excepción de Pablo Torres Burgos y Otilio Montaño, quienes más bien pueden catalogarse como intelectuales urbanos— e inquietudes políticas similares: habían cursado formalmente las primeras letras y sabían leer y escribir. Todos habían demostrado ser individuos inquietos, activos, dispuestos a actuar en defensa de intereses individuales, familiares y colectivos en sus localidades. Habían participado en la política regional, como un medio para plantear y resolver los problemas de sus localidades, y se habían incorporado a la campaña leyvista. Formaron parte de los clubes políticos que se fun-

[10] Emiliano Zapata, Lorenzo Vázquez, Emigdio Marmolejo y Jesús Capistrán tenían, en 1910, 31 años; los mayores eran Amador Salazar, de 42 años, y Francisco Mendoza, de 40.

daron en torno de Leyva en varias ciudades y participaron, en diverso grado, en la organización de su campaña, en los mítines y actos de proselitismo, aunque en un plan secundario. Una vez que el movimiento fue derrotado, la represión selectiva que el régimen porfirista aplicó contra los dirigentes del leyvismo les tocó también a ellos, no por haber ocupado una posición preponderante dentro del movimiento, sino porque no tenían cobertura más allá de sus lugares de origen y carecían de los contactos y apoyos de la clase media ilustrada y de los sectores pudientes del leyvismo. Compartieron, pues, la experiencia de la participación política en la campaña por la gubernatura desde la oposición y las consiguientes represalias del régimen. Fue un aprendizaje aleccionador que los puso en contacto con líderes locales y nacionales y les mostró una perspectiva mucho más amplia que la que les brindaba la problemática local, así como la necesidad de establecer alianzas con otros sectores, pero también de los límites de éstas, como cuando el control y las decisiones descansaban solamente en sus aliados de las clases medias y las elites políticas opositoras.

Varios de estos líderes originales del zapatismo tenían además vínculos de parentesco y amistad entre ellos, lo que facilitó, al principio de su aventura, su coordinación y proporcionó vínculos de confianza, lealtad y solidaridad entre ellos.

El grupo conspirador de Villa de Ayala-Anenecuilco estuvo compuesto inicialmente por el tendero ilustrado y profesor Pablo Torres Burgos, originario de Villa de Ayala; por el presidente del concejo de Anenecuilco y del comité conjunto de defensa de Anenecuilco-Villa de Ayala-Moyotepec, Emiliano Zapata, quien, por su condición de pequeño propietario, tenía una posición económica relativamente desahogada, había trabajado como arriero y cuidador de caballos en algunas haciendas de Morelos y Puebla y gozaba de prestigio y reconocimiento local por haber encabezado una reivindicación agraria de su pueblo, Anenecuilco, en 1909; por Rafael Merino, también de Anenecuilco, integrante de las autoridades tradicionales de ese pueblo; por Francisco Franco, tesorero del mismo concejo y primo de Zapata; por Amador Salazar, peón de la hacienda de Atlihuayán y primo también de Zapata; poco después se les unieron Otilio Montaño, de Villa de Ayala, profesor rural de la zona, que había sido director de la escuela de Villa de Ayala y en 1910 era profesor en Yautepec; y por Francisco Mendoza, carbonero de Chietla, Puebla. Aunque Montaño y Mendoza no participaron en la etapa conspirativa, se sumaron al grupo en marzo de 1911, una vez que se iniciaron las hostilidades.

El segundo grupo se organizó en la zona de Jojutla-Tlaquiltenango-Tlaltizapán, ubicada en el centro-sur del estado. Se aglutinó en torno a la figura de Gabriel Tepepa, un anciano de Tlaquiltenango, veterano de la guerra contra los franceses, seguidor de Porfirio Díaz en su juventud y per-

teneciente al clan del fallecido gobernador porfirista Manuel Alarcón. También participaron en el grupo Jesús Capistrán, Emigdio Marmolejo y Lorenzo Vázquez, los tres jornaleros agrícolas de la zona. Este grupo y el de Villa de Ayala-Anenecuilco tenían vínculos familiares entre varios de sus miembros y relaciones de amistad cercanas. Cabe subrayar que casi todos ellos participaron en la campaña leyvista.

Finalmente, el tercer grupo, que se rebeló en la zona noroccidental montañosa del estado, al norte de Cuernavaca y sur del Ajusco, fue el de Santa María Ahuacatitán-Huitzilac, aglutinado alrededor de Genovevo de la O, carbonero de Santa María, quien se había distinguido previamente por encabezar las reivindicaciones agrarias de su pueblo contra la hacienda de Temixco y se encontraba por esos meses prófugo, perseguido por la justicia porfiriana. Pocas semanas después de estallar la rebelión y de haberse extendido hacia zonas contiguas, se destacaron otros líderes naturales con fuerte arraigo local y pertenecientes a las clases bajas rurales; fue el caso de Jesús *el Tuerto* Morales, Eufemio Zapata (hermano mayor de Emiliano), Federico Morales, Felipe Neri, Francisco Pacheco y Fortino Ayaquica, hombres que demostraron también capacidad de organización y convocatoria y que le dieron solidez y arraigo local al zapatismo.[11]

Los motivos de los conspiradores

De los organizadores iniciales de la revuelta zapatista se conocen varias de sus aptitudes y valores personales, así como algunas de las razones y motivos que influyeron en su decisión de sumarse a la rebelión maderista. Desde luego, el problema de la tierra era un reclamo fuerte en algunas de sus comunidades de origen, particularmente para el núcleo que inició la revuelta y que luego confirmó su liderazgo del movimiento zapatista. Como es sabido, fue precisamente del pueblo de Anenecuilco de donde provino el grupo que organizó y dirigió la rebelión, pueblo que tenía conflicto por las tierras que arrendaba a la hacienda de El Hospital. El conflicto agrario de Anenecuilco, la cuna del zapatismo, es, por esta misma razón, el mejor documentado. Ese pueblo vivió una situación extrema en 1910, ante la imposibilidad de sembrar en las tierras que les había arre-

[11] Para las biografías de estos personajes, consúltese el *Diccionario histórico y biográfico* ya citado, así como la parte biográfica de *Así fue la Revolución mexicana*, México, Consejo Nacional de Fomento Educativo, 1985, t. 8, y Womack, *op. cit.*, pp. 70-74. Para Genovevo de la O, véase Martha Rodríguez García, "Genovevo de la O, un general zapatista", México, Universidad Iberoamericana (tesis de licenciatura en historia), 1978, pp. 22-31. Familiares de De la O habían sido detenidos en 1909 por la policía rural; Genovevo pudo escapar a la detención y estuvo escondido la mayor parte de 1909 y 1910.

batado y les rentaba la hacienda de El Hospital, lo cual lo orilló a ocuparlas por la fuerza y a negarse, ante el retraso de las lluvias y la mala cosecha, a pagar la renta acostumbrada, obteniendo el apoyo del prefecto del lugar y del presidente municipal de Villa de Ayala.[12]

Otro pueblo que se convirtió en pilar de la insurrección fue el de Santa María, que tenía pleitos añejos por límites con la hacienda de Temixco, la cual había arrebatado tierras al pueblo desde 1876, que desde entonces estaban en litigio. En 1904, después de sobornar al representante legal y al síndico del ayuntamiento, la hacienda compró legalmente las tierras en disputa; sin embargo, el pueblo desconoció la compra y protestó airadamente. En 1905, varios de sus líderes fueron deportados a Quintana Roo. Empero, el pueblo no renunció a la defensa de esas tierras que consideraba suyas y en los años siguientes continuaron las secuelas de esta disputa. Ambos conflictos se habían agudizado en los meses anteriores.[13] En la medida en que los rebeldes estaban vinculados con sus comunidades y que, incluso, varios eran representantes y líderes de ellas, se sintieron atraídos por la posibilidad de defender sus tierras, defensa que creyeron entender detrás de la oferta maderista, cuyo programa incluía, como uno de los puntos centrales, en el artículo 3º del Plan de San Luis, la devolución de las tierras de que habían sido despojadas las comunidades campesinas del país. Zapata incluso había encabezado la ocupación armada de las tierras que el pueblo de Anenecuilco reclamaba como suyas, así como su derecho a trabajarlas. La defensa armada de este derecho por la gente de Anenecuilco en los meses anteriores y las condiciones de hostigamiento en que quedaron sus dirigentes posiblemente jugaron un papel decisivo en su búsqueda de aliados externos y en la decisión de incorporarse a la revuelta maderista.

A esta problemática social de carácter agrario, que sin duda influyó en estos individuos que tenían condición de líderes y arraigo local, se sumó la persecución de que fueron objeto por parte del régimen porfiriano. Algunos de ellos habían sido detenidos en años anteriores y enrolados en el ejército federal. Esta condición de señalamiento y de proscripción se había intensificado en los meses finales del porfiriato, por lo que su seguridad personal y la de sus familias se encontraba amenazada.

La forma en que los líderes leyvistas abandonaron el movimiento, así como la desorganización y frustración que ocurrieron entre sus simpatizantes cuando vieron que las cosas no cambiaban, posiblemente los haya llevado a cuestionar los límites de la política electoral en el cerrado sistema porfiriano y a considerar seriamente la idea de que una solución de fuerza

[12] Jesús Sotelo Inclán, *op. cit.*, pp. 526-536.

[13] Womack, *op. cit.*, pp. 62-65; Rodríguez García, *op. cit.*, pp. 13-21.

era necesaria para tratar de resolver sus expectativas; la iniciativa finalmente les llegaría de fuera y con su aliento iniciaron un proceso similar al que se dio entre los dirigentes maderistas.[14] Adicionalmente, como varios de ellos habían sufrido persecuciones por parte del régimen porfirista, habían estado en la cárcel, habían sido enrolados en el ejército o habían tenido que esconderse y emigrar para no ser aprehendidos, no tenían muchas alternativas dentro del sistema y, por ello, formar parte de una revuelta nacional como la que estaba pregonando Madero podía tener sentido. De cualquier forma, no puede afirmarse que no tuvieran nada que perder en la aventura y, a pesar de ello, decidieron emprenderla.

El llamado maderista a la insurrección apareció, pues, en un momento en que para estos individuos era necesario establecer una alianza con un movimiento de oposición nacional que ofrecía resolver de raíz la conflictiva situación agraria en que se hallaban inmersas sus localidades y que les permitiría mejorar su amenazada situación personal y familiar. La convocatoria insurreccional maderista los convenció aún más de la notoria división entre la clase dominante porfiriana, que se manifestó localmente durante el leyvismo y demostró tener una dimensión nacional con el maderismo durante su etapa electoral y, particularmente, en la armada. Decidieron empuñar las armas sólo cuando tuvieron elementos suficientes para percatarse de que la rebelión estaba en marcha y que otros grupos la habían emprendido en varias regiones del país. En esto, puede señalarse que la rebelión se desarrolló de acuerdo con el modelo explicativo de Tutino comentado más arriba.

Empero, lo que la distinguió fue el hecho de ser una rebelión planeada, organizada y ejecutada por líderes locales naturales, con sus propios recursos, sin que otros dirigentes hubieran venido de fuera a organizarlos. Esa dirección original se sostuvo y afianzó después, cuando el movimiento adquirió identidad propia y se separó del maderismo. Con todo, conviene subrayarlo, en la decisiva etapa inicial decidieron establecer vínculos, incorporarse y ser reconocidos expresamente por Madero y los líderes maderistas, como parte subordinada de esa rebelión. Bajo estas condiciones, el grupo de Genovevo de la O inició la rebelión en Santa María Ahuacatitán

[14] No puede concluirse que se hayan decepcionado de la política ni de los políticos y organizaciones políticas nacionales, y menos que lo hubieran hecho en una fecha tan temprana como 1909. Su confianza en las instancias políticas tradicionales y en las alianzas con líderes y organizaciones nacionales se demuestra en su incorporación subordinada al maderismo, en el reconocimiento y apoyo a Madero una vez que volvió a contender por la presidencia de la República en 1911 y en sus varios intentos de alianza con fuerzas nacionales como el orozquismo, el villismo, la Convención en 1914 y el obregonismo en 1919. De igual modo, en diferentes ocasiones lucharon por llevar a Zapata o a alguno de sus otros líderes a diferentes cargos de gobierno local y nacional y consiguieron, en 1914, ejercer el gobierno y administración estatales en Morelos y Guerrero y colocar a varios miembros de sus filas en los sucesivos gobiernos de la Convención, en 1915.

en febrero de 1911, al igual que el de Tepepa en Tlaquiltenango. El grupo de Anenecuilco-Villa de Ayala, a su vez, esperó un poco más y lo hizo en marzo de ese año.

En resumen, fueron varios los factores que ayudaron a estos pequeños grupos a realizar la organización de la rebelión armada maderista en el estado de Morelos: viejos y localizados problemas agrarios; agravios recientes contra las localidades por parte de hacendados, jefes políticos y autoridades locales; represión, persecución y amenazas contra algunos de los conspiradores locales; desencanto respecto del régimen central de Díaz; nuevos líderes con cierto grado de reconocimiento y prestigio, vínculos de parentesco entre varios de ellos, redes y relaciones de solidaridad entre sí y con sus comunidades, identificación con la problemática de éstas; experiencia política compartida en la campaña leyvista; frustración de sus expectativas legales ante la represión oficial; desengaño respecto de los líderes leyvistas; nuevas expectativas ante un llamado a la insurrección contra el régimen porfiriano, encabezada por el principal líder opositor del país; confianza en las promesas agrarias de Madero; ambición personal, simpatía, contagio y espíritu de aventura inspirados por un llamado exterior a la rebelión que había encontrado eco y se estaba desarrollando ya en el norte del país. Todos ellos fueron elementos importantes que se conjugaron simultáneamente y tuvieron un papel en la determinación que tomaron estos individuos de sumarse con las armas a la revuelta maderista.

Surgimiento y extensión de la revuelta

La determinación tomada por el grupo de Anenecuilco-Villa de Ayala de vincularse al movimiento maderista y de ser reconocido por su dirección nacional fue un paso muy significativo. Tal reconocimiento implicaba su subordinación a Madero y a sus directrices, daba legitimidad a la revuelta —en la medida en que el maderismo reclamaba la violación del orden constitucional durante el proceso electoral y denunciaba el fraude y la cerrazón de los canales legales del régimen porfiriano— y le permitía una alianza con un movimiento nacional opositor. Una vez conseguida ésta, dicho grupo se levantó en armas, aprovechando la feria de Cuautla, el segundo viernes de cuaresma, 10 de marzo de 1910; entró a Villa de Ayala el 11, en donde dio a conocer el Plan de San Luis, y salió del lugar, después de haber reclutado a cerca de setenta personas, para dirigirse luego hacia el sur, por la ribera del río Cuautla.

El grupo de Jojutla —con Tepepa, Margarito Martínez, Emigdio Marmolejo, Lorenzo Vázquez, Jesús Capistrán, Francisco Alarcón, Timoteo

Sánchez, Pioquinto Galis y otros seguidores— se había levantado en armas un mes antes, el 7 de febrero de 1911, cuando entró a Tlaquiltenango. Después de un mes de inactividad, el 7 de marzo atacó Jojutla, ocultándose luego en las montañas del sur del estado, en la frontera con Puebla y Guerrero. Poco después, el 11 de marzo, mientras los de Anenecuilco entraban a Villa de Ayala, Tepepa atacó Axochiapan.[15] En estas primeras acciones, las escasas fuerzas defensoras de las localidades ocupadas por los rebeldes no habían ofrecido resistencia y la revuelta misma era todavía muy reducida, por lo que no había aparecido aún la violencia que caracterizaría buena parte de los acontecimientos posteriores.

Después de pequeñas acciones en las que atacaron poblaciones en la frontera sur con Puebla, los dos grupos se unieron en Metepec, Puebla.[16] El 20 de marzo regresaron a Morelos y dividieron temporalmente sus fuerzas. Zapata, al frente de un contingente, atacó Axochiapan, al sureste de la entidad, incendiando el archivo de la localidad. Otra parte del grupo tomó Villa de Ayala el 23 y salió rumbo a Tlaquiltenango, al sur.[17] Luego, habiendo aumentado sus filas, se juntaron otra vez para atacar Jojutla, en la acción de mayor envergadura hasta entonces, el 22 de marzo de 1911; esta acción representó para ellos un importante éxito, pues se trataba de la tercera ciudad en importancia del estado. Los rebeldes se estaban convirtiendo en un desafío para el gobierno estatal y, debido a la cercanía de la región con el Distrito Federal, comenzaron a preocupar al gobierno federal, que estaba dedicando crecientes esfuerzos para contener la rebelión maderista en el norte del país. Durante la toma de Jojutla ocurrieron destrozos y venganzas personales de las fuerzas rebeldes contra varios de los comerciantes y propietarios ricos del lugar; destruyeron, además, las líneas telegráficas y liberaron a los presos, patrón de conducta que se repetiría en la mayor parte de los ataques subsecuentes.[18]

En los siguientes días ocuparon otras poblaciones del estado: Jolalpan, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Amacuzac, así como Atencingo, Huehuetlán y Chietla en el estado de Puebla.[19] En todas estas ocupaciones se repitió

[15] Pablo Escandón, gobernador de Morelos, a Díaz, Cuernavaca, 7, 8, 9 11 y 12 de marzo de 1911, CPD, leg. 70, ff. 5381, 5471, 5555, 5775.

[16] Luis Valle a Díaz, Puebla, 16 de marzo de 1911, CPD, leg. 70, f. 6133. Este jefe político informaba a Díaz que la fuerza rebelde ascendía a 300 hombres; sin embargo, según el veterano zapatista Amador Acevedo, eran sólo 50. Entrevista al general Amador Acevedo, efectuada el 23 de junio de 1970 (*Testimonios del proceso revolucionario de México*, México, INEHRM, 1985, p. 145).

[17] Pablo Escandón a Díaz, Cuernavaca, 20, 21 y 23 de marzo de 1911, CPD, leg. 70, ff. 6481-6482, 6315-6316, 6742.

[18] Escandón a Díaz, 24 de marzo de 1911, CPD, leg. 70, ff. 6481-6482; Brunk, *Zapata: Revolution...*, *op. cit.*, pp. 30-32.

[19] Andonegui a Díaz, 31 de marzo de 1911, CPD, leg. 70, f. 7450.

un patrón similar de violencia: quema de oficinas públicas y archivos, saqueo de comercios, destrucción de puentes, vías de ferrocarril, líneas de teléfono y telégrafo, liberación de presos, imposición de préstamos forzosos a comerciantes, confiscación de armas y caballos, y, en ocasiones, fusilamiento de jefes políticos, prefectos y jefes de policía. Según informaron diarios de la época, en los saqueos de los comercios intervino "el populacho".[20]

Violencia de clase

Así, la revuelta inicial fue tomando la forma de una rebelión de mayor envergadura; las filas de los insurrectos crecieron en pocas semanas, demostrando con ello que algunos sectores de la población civil de la entidad veían con buenos ojos y apoyaban de diversas formas el levantamiento. De manera significativa, desde las primeras acciones resultó evidente que la violencia de los grupos rebeldes estaba dirigida contra las autoridades políticas e instituciones públicas y, en gran medida, contra varios de los principales comerciantes de los lugares ocupados. Esto último puede significar que había motivos específicos para intentar desquitarse de prácticas especulativas, encarecimiento de productos básicos o deudas, pero también que tal sector era el blanco más vulnerable de los sectores propietarios y constituía una presa relativamente fácil para el saqueo, no sólo por parte de los jefes y soldados rebeldes, sino de la gente común de los lugares, la cual aprovechaba la protección y la fuerza temporal que le brindaba la ocupación de las tropas insurrectas; inversamente, también puede significar la desaparición o el debilitamiento de las fuerzas del orden en cada una de las localidades. La violencia desatada en esos días no tenía un carácter delictivo, aunque en la vorágine pudieran desfogarse venganzas y agravios personales. Tales acciones de masas, al estar dirigidas en contra de instituciones y personas que identificaban con el régimen de dominación y desigualdad y que, además, eran la parte más visible y más débil de éste —en la medida en que no contaban con la legitimidad ni con la fuerza de las haciendas—, adquirieron un carácter reivindicativo y justiciero. En esos actos había una toma de conciencia de la opresión y, ante la oportunidad de vengar afrentas, comenzó a desarrollarse una embrionaria violencia de clase de los grupos subalternos en contra de los símbolos visibles y alcanzables del sistema de dominación.[21]

[20] *El País*, 23, 24 y 25 de marzo de 1911.

[21] Aquí se utiliza la expresión "violencia de clase" para referirse al cúmulo de acciones de masas emprendidas por las clases subalternas en contra de los símbolos visibles de la dominación: las autoridades de los distintos niveles, las elites económicas, la fuerza represiva estatal.

Antes de que transcurriera un mes desde el estallido de la rebelión, el 30 de marzo de 1911 ocurrió el primer ataque de los rebeldes a las haciendas. El grupo comandado por Zapata atacó la hacienda de Chinameca, cerca de Villa de Ayala, llevándose 3 000 pesos, caballos, rifles y cajas de vino. Luego tomaron la hacienda de Rancho Nuevo y, el 3 de abril, la de Tenango, en el noreste de Morelos, una de las más grandes y simbólicas del estado, propiedad de Luis García Pimentel, en donde quemaron los cañaverales, algunas casas de empleados y dinamitaron la tienda de raya. En la región poblana, a donde se extendió la revuelta morelense, el primer ataque que está documentado fue el que se perpetró en contra de la hacienda de Atencingo, al suroeste de Izúcar y cerca de Chietla, en la frontera con Morelos. La hacienda, que era propiedad del español Ángel Díaz y tenía disputas por límites con los pueblos de Chietla y Jaltepec, fue asaltada varias veces en el mes de abril de 1911. En el segundo ataque, realizado el día 24, los rebeldes mataron a seis empleados e hirieron a cuatro más.[22] Así, pues, en fechas muy tempranas de la revuelta, la principal institución económica de la región no se salvó de la furia y el descontento de los grupos rebeldes, mostrando con ello que el viejo control patriarcal, la influencia que había ejercido la hacienda sobre los grupos rurales de la zona y la dependencia de muchos pueblos e individuos respecto de ella, si bien no habían desaparecido, comenzaban a ser cuestionados e impugnados. Con ello, la violencia que venía de abajo arremetió prácticamente en contra de todas las instituciones del viejo orden rural en la región.

Ante estos actos, los hacendados y el gobierno estatal comenzaron a preocuparse por la rebelión y organizaron la defensa de algunas ciudades —Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, Yautepec— y de varias haciendas con la ayuda de los cuerpos de rurales y de algunos grupos de voluntarios de las localidades, a cuyos miembros el gobierno estatal pagaba un peso diario por alistarse y a cuyo financiamiento contribuyeron los hacendados. Lo mismo ocurrió en algunas localidades de Puebla, como Atlixco, en donde el peso del financiamiento de estas fuerzas recayó en las familias pudientes. Estos cuerpos comenzaron a operar a fines de marzo de 1911. Además, se destinó mayor presupuesto a la policía local y se incrementó su personal.[23] No obstante, el gobernador Pablo Escandón consideró que estas medidas eran insuficientes

[22] CPD: Escandón a Díaz, Cuernavaca, 25, 27, 29 y 31 de marzo, 3 de abril de 1911, leg. 70, ff. 6945-6949, 7616-7618, 7297-7298; P. Díaz hijo a Escandón, México, 26 de marzo de 1911, leg. 70, f. 7015; jefe político de Chiautla J. Andonegui a Díaz, 29 y 31 de marzo de 1911, ff. 7293, 7450-7451. *El Diario*, 31 de marzo de 1911; *El País*, 27 de abril de 1911.

[23] CPD: Díaz a gobernadores, 12 de abril de 1911; Isunza a Díaz, 10 y 15 de abril de 1911, leg. 70, ff. 7142, 7169. "*Memorandum* sobre la situación política en el estado de Morelos", redactado probablemente por Gabriel Robles Domínguez, agente maderista que jugaría un papel

porque [en] cada lugar que no puede sustraerse a los rebeldes, por falta de fuerza, los vecinos fácilmente se pasan a los revoltosos y además las fincas azucareras van paralizando sus zafras, lo que deja sin trabajo a mucha gente, dando ocasión a que esa gente se levante también, tanto más que no puede exigirse que los propietarios continúen sus zafras porque las haciendas están indefensas y una buena parte en poder de los revoltosos.[24]

Centralización del mando rebelde

Después de la toma de Jojutla surgieron las primeras diferencias graves entre los líderes rebeldes: Pablo Torres Burgos, jefe principal hasta entonces, se separó del grupo por no estar de acuerdo con la violencia y los saqueos cometidos en la toma de Jojutla y en las demás poblaciones cercanas y en protesta por la actitud tolerante de algunos jefes que permitieron los desmanes ocurridos en contra de comerciantes y hacendados locales, durante los cuales hubo manifestaciones de odio racial y antihispanismo. Pocos días después, Torres Burgos fue apresado por las tropas federales y fusilado junto con dos de sus hijos.[25]

El 5 de abril, Tepepa derrotó a una fuerza federal en Jonacatepec, en la zona oriental del estado, después de un combate que duró toda la noche, obligando al ejército a retirarse a Cuautla. El gobernador Escandón volvió a escribir a Díaz para pedir más apoyo militar, pues los rebeldes —que

---

clave en las negociaciones entre el maderismo y el zapatismo en los meses de julio-octubre de ese mismo año, en Fondo Alfredo Robles Domínguez (en adelante AGN, FARD), t. 7, exp. 37, ff. 12-13. *El País*, 25 y 26 de marzo de 1911. No se cuenta con información más precisa sobre estos cuerpos de voluntarios, cuántos y quiénes se incorporaron a ellos en esta época, si bien hay más información en los meses posteriores. En algunos casos, la población se negó a formar parte de tales cuerpos, como en Jonacatepec, por lo que el jefe político del lugar tuvo que abandonarla antes de la entrada de los rebeldes; véase *El País*, 3 de abril de 1911. D. Flores informó a Díaz que tenía dificultades para organizar a los 200 voluntarios que le autorizaron en Chilpancingo y sólo logró juntar a 130, cantidad considerable en el ámbito local, pero que, sin embargo, no fue impedimento para que pidiera refuerzos de la Federación, por lo cual posiblemente su número esté inflado; véase CPD: D. Flores a Díaz, Chilpancingo, 13 de abril de 1911, leg. 70, f. 8760; J. Izunza a Díaz, Puebla, 14 de abril de 1911, leg. 70, ff. 8760-8761. A la solicitud de Popoca, jefe político de Izúcar que le pedía 500 hombres para reforzar la seguridad en su distrito, Díaz le respondió que era preciso formar cuerpos de voluntarios en Puebla, pues no podían mandar armas desde el centro porque corrían el riesgo de ser asaltados en el camino; véase Popoca a Díaz, Izúcar, 14 de abril de 1911, leg. 70, f. 8777; Luis Valle, jefe político de Puebla, el 17 de abril pidió autorización para mandar jefes leales, que estaban enrolados en el ejército, a sus pueblos a reclutar voluntarios, sobre todo en Oaxaca (f. 9154).

[24] Escandón a Díaz, Cuernavaca, 1 de abril de 1911, CPD, leg. 70, ff. 7557-7559.

[25] Escandón a Díaz, Cuernavaca, 25 de marzo de 1911, CPD, leg. 70, ff. 6945-6948; *El Diario*, 1 de abril de 1911.

eran más de mil, decía— estaban organizándose mejor y comenzando a atacar las principales poblaciones de la entidad.[26] Los rebeldes, que habían demostrado capacidad para derrotar a las tropas federales y rurales cuando éstas eran poco numerosas y habían podido ocupar con ello algunas importantes poblaciones del estado, no tenían, sin embargo, fuerza para sostener esas ocupaciones. Los insurrectos, con el objeto de reorganizar a sus fuerzas, reclutar a más gente y reabastecerse, se dirigieron a las montañas de Puebla. Ahí, el día 4 tomaron Huehuetlán y Huaquechula; el 5, Chiautla, y el 7, Chietla, matando en la acción al jefe político J. Andonegui, antes de desalojarla al siguiente día, ante la llegada de los federales.[27]

Después de seis semanas de actividad, las fuerzas habían crecido y necesitaban mayor coordinación y unificación del mando. Reunidas en su mayor parte, decidieron elegir a Emiliano Zapata como su jefe. Hasta entonces, las incursiones del grupo levantado se habían efectuado principalmente en los territorios donde Tepepa era más conocido y podía encontrar más apoyo; sin embargo, los rebeldes eligieron a Zapata, quizá por la avanzada edad de Tepepa y por el prestigio que Zapata se había ganado ya dentro del grupo. El liderazgo de éste —según ha sido descrito admirablemente por Womack— tuvo que ser ganado, reconocido, afirmado, probado y fortalecido paulatinamente en el proceso mismo de la rebelión y, desde luego, no fue automático ni definitivo.[28]

Puebla y Guerrero: motivos similares, liderazgos diferentes

El movimiento armado, limitado inicialmente a unos pocos individuos con escaso equipamiento, se fortaleció y logró ocupar, en la segunda mitad de abril de 1911, varias poblaciones de una amplia zona: Tepoztlán, Tepalcingo, Yautepec, Jonacatepec, Atlacholoaya y Tlayacapan, en Morelos; Tzicatlán, Alpuyeca, Izúcar, Huaquechula, Chiautla, en Puebla; Olinalá y Huamuxtitlán, en Guerrero, así como las haciendas de San José y San Gabriel, en Puebla; es decir, un perímetro que abarcaba el centro y el

[26] Escandón a Díaz, Cuernavaca, 6 de abril de 1911, en *Últimos días de Porfirio Díaz en el poder. Antología documental*, México, INEHRM, s.f., pp. 193-195.

[27] CPD: Valle a Díaz, 2, 5, 6 de abril de 1911, leg. 70, ff. 7605, 7835, 7932; Valle a secretario de Guerra, 11 de abril, leg. 70, f. 8395; Popoca a Díaz, 12, 13 de abril, f. 8433, 8523; jefe político de Chietla a Díaz, 6 de abril de 1911, leg. 70, ff. 7912-7921; Valle a Díaz, 6 de abril, leg. 70, ff. 7932-7933.

[28] Womack, *op. cit.*, p. 79. Brunk (*op. cit.*, pp. 14-17 y 29-33) enfatiza que la elección y el liderazgo de Zapata no fueron gratuitos, que no podía haber sido de otra forma, pues era una persona con *status* y carisma, con atributos y cualidades personales muy apreciadas en la vida rural y de las cuales había hecho demostración desde años atrás.

oriente de Morelos, así como los distritos limítrofes de Atlixco e Izúcar, en Puebla, y los de Alarcón, Hidalgo, Guerrero, Álvarez, Zaragoza y Morelos, en la entidad guerrerense. En la ocupación de estas plazas se repitieron las escenas de violencia, liberación de presos, destrucción de vías férreas, líneas de telégrafo y teléfonos, y oficinas de gobierno, saqueo de propiedades y fusilamiento de algunos jefes políticos. Entre estos últimos está el caso de Chiautla, Puebla, donde la población aprovechó para vengarse del jefe político J. Andonegui, con el permiso de los jefes zapatistas, quienes le hicieron un juicio sumario y lo fusilaron; también el de Jonacatepec, Morelos, donde los rebeldes ejecutaron al jefe político y a dos oficiales federales. Zapata y los jefes que lo seguían exigieron contribuciones forzosas a algunos hacendados, amenazándolos con quemar sus propiedades si se negaban.[29]

En las filas de los alzados surianos, que habían reconocido la autoridad de Zapata, a menudo la violencia de sus hombres se desbordaba y éstos aprovechaban la situación excepcional de la revuelta para vengar antiguos agravios, como ocurrió el 24 de abril, fecha en que Francisco Mendoza, antiguo peón de la hacienda de Atencingo, encabezó el ataque en contra de sus viejos patrones y fusiló, sin juicio, a diez empleados españoles, incluido el administrador de la hacienda, lo que ocasionó un conflicto grave con la colonia española.[30] La repetición del patrón de violencia popular ejercida en contra de instituciones y autoridades regionales era una muestra de que había odios, agravios y resentimientos similares en las zonas de Puebla y Guerrero, sitios en los que se extendió la revuelta y donde, por contagio, ante el debilitamiento de los controles estatales y de la legitimidad del viejo orden, los grupos rebeldes y la población de las localidades aprovecharon para desfogar los resentimientos acumulados.

El debilitamiento del régimen de Díaz ante el avance de la insurrección maderista en el norte lo obligó a enviar hacia allá más tropas federales del centro lo que, junto con la consolidación de la rebelión en Morelos y zonas aledañas, permitió que en otras regiones más aisladas se multiplicaran las bandas insurgentes, como ocurrió en la Costa Chica de Guerrero,

[29] CPD: J. Izunza a Díaz, Puebla, 7, 8 y 12 de abril de 1911, leg. 70, ff. 8030, 8146-8147, 8510-8511; Vicente Popoca, jefe político de Izúcar, a Díaz, 12 de abril de 1911, leg. 70, ff. 8433-8434; general Luis Valle a Díaz, Puebla, 8 de abril, leg. 70, ff. 8184, 8195; Escandón a Díaz, Cuernavaca, 12, 13, 15, 18 de abril, leg. 70, ff. 8453, 8460, 8618-8619, 8797, 9204-9219, donde le informó de los saqueos y la destrucción de oficinas públicas y aparatos de comunicación. Véase también *El Diario*, 15 de abril de 1911. Juan Pagaza, propietario de la hacienda de San Nicolás Obispo en 1903 y luego administrador de las haciendas de Calderón, Hospital y Chinameca, se quejaba de que Zapata le exigía 500 rifles y 1 500 cartuchos a cambio de no quemar sus fábricas de azúcar; véase Juan Pagaza a Madero, México, 19 de mayo de 1911, Archivo Francisco I. Madero, Biblioteca Nacional de México (en adelante AFIM), ms. 1099.

[30] *El Diario*, 3 de mayo de 1911.

en los municipios de Allende, Aldama y Zapotitlán, en el distrito de Álvarez, y en partes de los distritos de Hidalgo y Zaragoza. Estas bandas rebeldes surgieron por motivos endógenos relacionados con liderazgos locales, propios, que no estaban subordinados a los dirigentes maderistas guerrerenses, como los hermanos Figueroa, ni a los rebeldes zapatistas morelenses. Eran pequeñas bandas aglutinadas en torno de líderes locales poco conocidos fuera de su pequeña región. Sólo más tarde, estas bandas de revoltosos locales buscaron relacionarse con los líderes principales, en alianzas que a menudo fueron muy conflictivas, a causa de las rivalidades y las ambiciones.[31]

El alzamiento, particularmente en las zonas periféricas de los valles centrales morelenses, era el resultado de las acciones emprendidas por un cúmulo de bandas guerrilleras que seguían a sus propios líderes y procedían con una dinámica independiente. En Puebla, por ejemplo, a principios de abril, rebeldes locales que no formaban parte de las fuerzas de Zapata ni de los principales jefes morelenses se levantaron en armas y atacaron la población de Huaquechula, quemando los archivos y persiguiendo a las autoridades; luego atacaron la guarnición de Atlixco, antes de sumarse a las fuerzas de Zapata. La influencia zapatista en Puebla se concentró particularmente en el suroeste, zona que colinda con Morelos y en donde asentaron sus reales los jefes zapatistas Fortino Ayaquica, Francisco Mendoza y, sobre todo, Jesús *el Tuerto* Morales, pero también líderes autóctonos como Benigno Centeno y Camerino Mendoza.[32]

Un proceso similar, pero aún más extendido, con una enorme proliferación de bandas guerrilleras y caudillos locales, a menudo enfrentados entre sí, tuvo lugar en las tierras de Guerrero. La diferencia más notable fue que, en la parte de Puebla colindante con Morelos, los jefes zapatistas, como Eufemio Zapata y *el Tuerto* Morales, lograron imponer su hegemonía y subordinar al resto de líderes autóctonos desde el principio, en tanto que en Guerrero fue mucho más fuerte el liderazgo local, aunque muy atomizado y con grandes divisiones y enfrentamientos internos. En los municipios del Estado de México que colindan con Morelos y Guerrero, en cambio, el liderazgo autóctono fue más débil, lo cual los convirtió, sobre todo en el sur de la entidad, en territorios que a menudo fueron aprovechados y disputados por líderes morelenses y guerrerenses, quienes entraron en ellos en diversas ocasiones como fuerzas de ocupación externas. La supremacía y el control de Zapata sobre la extendida rebelión no es-

[31] D. Flores a Díaz, Chilpancingo, 8, 10, 11 y 12 de abril de 1911, CPD, leg. 70, ff. 8178-8183, 8271-8276, 8384-8385, 8446. Este jefe político informó que, ante la insuficiencia de sus fuerzas, había procedido a formar cuerpos de voluntarios.

[32] Luis Valle a Díaz, Puebla, 8 de abril de 1911, CPD, leg. 70, ff. 8182-8183.

taban aún consolidados; sería éste un proceso que tendría lugar en los siguientes meses y que nunca llegó a controlar ni pudo poner fin a las numerosas disputas internas entre los dirigentes.

La dinámica de la rebelión continuó. El 17 de abril, las fuerzas de Zapata tomaron Izúcar de Matamoros, realizando los mismos actos de violencia contra propietarios ricos, oficinas públicas y vías de comunicación y liberando también a los presos de la ciudad. Sin embargo, una parte de sus fuerzas, comandada por *el Tuerto* Morales, fue emboscada al día siguiente en el pueblo de Tepeojuma; esta acción se convirtió en la más fuerte derrota sufrida hasta entonces por los alzados morelenses, los cuales fueron desalojados después de perder a un centenar de hombres, entre ellos Rafael Merino, uno de los organizadores de la revuelta inicial en Anenecuilco. A pesar de esta derrota, la presencia de los guerrilleros en la zona no sufrió merma importante y pudieron ocupar Acatlán el 26 y volver a entrar a Izúcar el 27, al igual que a Tecamachalco. Para fines de ese mes, los rebeldes controlaban siete de los veintiún distritos del estado y ocupaban partes de otros doce. El gobierno estatal de Isunza, con el jefe militar Valle, decidió concentrar a las escasas fuerzas federales y rurales en las afueras de la capital poblana.[33]

Las maniobras de Díaz y Limantour

Los insurrectos del sur y los rebeldes del norte se volvieron un problema serio para el régimen porfirista, cuya administración comenzó a maniobrar políticamente para tratar de desactivar la rebelión mediante cambios políticos en el gabinete y ofertas de paz a Madero y sus colaboradores cercanos que incluían la renuncia del vicepresidente Ramón Corral, algunas carteras en el nuevo gabinete a representantes maderistas y cambios en más de la mitad de las gubernaturas del país.[34] En las negociaciones que tuvieron lugar entre representantes de Madero y Limantour a fines de abril en Washington, D.C., y que continuaron con el regreso de Limantour a México para hacerse cargo, de hecho, de la administración del país, los líderes

[33] CPD: Isunza a Díaz, 15 de abril de 1911, leg. 70, f. 7169; Popoca a Díaz, 28 de abril, leg. 70, f. 7972; Heinz Argumedo a Díaz, 1 de mayo de 1911, leg. 70, f. 8874; Luis Valle a Díaz, Puebla, 19 de abril de 1911, leg. 70, ff. 9387-9390, donde le informó de la victoria en Tepeojuma y Santiago contra más de 2000 rebeldes, a los que, según dijo, les hizo más de 120 muertos y les quitó 210 caballos. Jefe político de Izúcar a Díaz, 21 de abril de 1911, CPD, leg. 70, f. 9599. Desde luego, había exageración en esas cifras, como es una constante en las informaciones militares. *El Imparcial* y *El Diario*, 21 de abril de 1911; Brunk, *op. cit.*, pp. 33-34.

[34] Francisco Vázquez Gómez, *Memorias políticas, 1909-1913*, México, Universidad Iberoamericana/El Caballito, 1982, pp. 127-159.

maderistas, cuya carta mayor parecía ser la inminente ocupación de Ciudad Juárez, exigieron como condición para pactar la paz la renuncia de Ramón Corral a la vicepresidencia, la mitad de los puestos del gabinete para representantes maderistas y el nombramiento de catorce gobernadores interinos maderistas que convocarían a elecciones inmediatas en esas entidades —es decir, lo mismo que ofrecía Díaz. Entre esos catorce estados que reclamaban para sí los maderistas no figuraba Morelos, aunque sí los vecinos Puebla, Guerrero, Oaxaca y México.

A pesar de ello, por su cercanía geográfica a la capital del país, los alzados surianos comenzaron a ser conocidos por la población citadina a través de la prensa nacional, que dedicó un espacio cada vez mayor a sus actividades. Por esas fechas se incorporaron al movimiento personas que pronto jugarían un papel importante en el mismo: los hermanos Gildardo y Octavio Magaña, michoacanos de clase media radicados en el D.F. que se convertirían en intelectuales orgánicos del zapatismo; Felipe Neri, trabajador agrícola de la hacienda de Chinameca; Fortino Ayaquica, obrero textil de Atlixco; José Trinidad Ruiz, predicador protestante de Tlaltizapán, así como Juan Andrew Almazán, joven guerrerense estudiante de medicina, encargado de los servicios médicos de la prisión de Puebla, quien muy pronto demostró enorme iniciativa, ambición y oportunismo que lo llevaron a jugar un papel importante en las fases tempranas de la rebelión, pero cuyas oscilaciones políticas acarrearon un sinnúmero de dificultades a sus aliados.[35]

Un balance de la actividad de los rebeldes liderados por Zapata en esos dos meses mostraba que contaban ya con un cuerpo armado de entre mil y dos mil hombres, habían ocupado varias de las más importantes poblaciones de la entidad y se habían convertido en la fuerza rebelde más importante en el estado.

Aunque los jefes maderistas nacionales no le dieran mucha importancia al movimiento rebelde en Morelos, Díaz y Limantour sí lo hicieron y, al igual que en otras entidades, aplicaron varias medidas importantes para tratar de desactivarlo: trasladaron al general Aureliano Blanquet, quien se encontraba en la campaña contra las fuerzas maderistas en Chihuahua, para que se hiciera cargo de las operaciones en Morelos; intensificaron el reclutamiento militar y, el 17 de abril, el ministro de Hacienda y jefe de los científicos Limantour, quien fungía como el operador político del régimen y maniobraba para tratar de salvar al sistema de la debacle y mantener su influencia, se reunió con el viejo caudillo Francisco Leyva para ofrecerle la gubernatura de Morelos. De entrada, el régimen consiguió que

[35] Brunk, *op. cit.*, pp. 32-33; Womack, *op. cit.*, p. 81; *El País*, 3, 6, 8, 17, 23 de abril y 6 de mayo de 1911.

Leyva aceptara la jefatura de armas en el estado, al tiempo que el gobernador Escandón pedía una licencia de cuatro meses. Por instrucciones de Díaz, el congreso local decidió nombrar como gobernador provisional a Leyva, quien puso condiciones y finalmente no aceptó, por lo cual la entidad quedó políticamente acéfala durante las semanas siguientes.[36]

En ocasiones anteriores, medidas similares habían permitido a Díaz desactivar las protestas locales y retomar el control político del centro. La concesión que ahora ofrecía no era menor: poner al frente del gobierno del estado a su viejo rival de la región y principal figura opositora, un año después de que había desactivado la campaña electoral de su hijo, Patricio Leyva. Sin embargo, estas medidas, en las nuevas condiciones, no fueron suficientes para aplacar la rebelión local, que contaba con un liderazgo nuevo y plebeyo, sobre el que no tenían influencia ni el viejo caudillo nacional ni el viejo caudillo regional. Como jefe de armas, Francisco Leyva se entrevistó con Zapata para tratar de conseguir un armisticio y el respeto de los rebeldes a las propiedades y vidas de la población.[37]

La rebelión en el campo morelense y en una vasta zona contigua estaba tomando visos de una ruptura violenta contra el régimen porfiriano, contra las instituciones y autoridades en que se acumulaba mayor resentimiento y contra las casas comerciales y haciendas. Todo esto se convirtió, junto con las vías de comunicación, en el blanco principal de los ataques rebeldes. En varias haciendas, esta actividad ocasionó la pérdida de la zafra y parte de las cosechas en la primavera de 1911, lo que provocó a su vez nuevas rupturas y deserciones de peones, arrendatarios y trabajadores

[36] Por ironías del destino, el viejo Leyva, que había jugado un papel de primera magnitud como caudillo regional y había basado su fuerza en políticas populistas, regresaba a la palestra estatal, en el ocaso de su vida, a defender los intereses de su antiguo rival Díaz y de sus enemigos los hacendados. Vázquez Gómez, *op. cit.*, p. 205; *El Diario*, 18 de abril de 1911; Francisco Leyva a Díaz, Cuernavaca, 6, 7 de mayo de 1911, CPD, leg. 70, ff. 10822, 10859. El viejo caudillo puso por condición que Escandón presentara su renuncia definitiva al cargo de gobernador y no que pidiera licencia. Después de un breve regateo, Díaz finalmente aceptó, pero al enfermarse y precipitarse los acontecimientos en el norte, con la toma de Ciudad Juárez por Orozco y Villa y los acuerdos de Ciudad Juárez, no hubo tiempo para consumar el relevo. Véase también CPD: Patricio Leyva a Díaz, Cuernavaca, 10 de mayo de 1911, leg. 70, ff. 11110-11115 y Francisco Leyva a Díaz, Cuernavaca, 18 de mayo de 1911, leg. 70, f. 11652.

[37] "*Memorandum*...", citado, AGN, FARD, t. 7, exp. 37, ff. 12-13. Leyva también emitió un "Manifiesto al pueblo de Morelos", en donde conminaba a dejar a un lado los resentimientos en bien de la patria y de su estado y evitar así un conflicto internacional. Ahí mismo criticaba a los rebeldes "mal aconsejados y sugestionados por individuos de perversas intenciones, que no persiguen fines nobles y levantados se han entregado a verdaderos actos de pillaje y devastación, destruyendo el ferrocarril, atacando las haciendas y saqueando las tiendas en las poblaciones, propiedades en su mayor parte de extranjeros" (*El Diario*, 18 de abril de 1911). Como representante militar del régimen porfiriano, el lenguaje de Leyva había cambiado y condenaba la violencia ejercida contra las instituciones porfirianas y las haciendas.

de las haciendas, que se enfrentaron a la necesidad de buscar el sustento para sus familias en otra parte. Lo que había sido hasta entonces el orden tradicional estaba siendo seriamente cuestionado.

Mientras tanto, en el norte y en otras regiones del país, la consolidación de la rebelión maderista había rebasado la capacidad de respuesta política y militar del régimen porfiriano. Éste comenzó a negociar una salida pacífica que permitiera el establecimiento de un periodo de transición en el que se conservara una parte del viejo sistema y, al mismo tiempo, se le pusieran límites precisos a la revuelta. El desplazamiento del ejército federal hacia el norte, su dispersión por el vasto territorio nacional y las señales de debilidad del sistema porfiriano hicieron que las fuerzas del orden que permanecieron en Morelos se concentraran sólo en las ciudades y plazas más importantes y dedicaran sus mayores recursos logísticos a proteger las haciendas y las ciudades de Cuernavaca y Cuautla. Los rebeldes surianos sacaron partido de esta situación y ocuparon las ciudades medianas y un sinfín de poblaciones pequeñas de sus respectivas entidades. Las últimas y desesperadas medidas emprendidas por Díaz y Limantour resultaron infructuosas.

La fábrica textil era, además de la hacienda, la otra gran institución económica importante en la zona zapatista. Se localizaban en la región poblana y se contaban entre las más importantes del país. El descontento de los trabajadores textiles había sido endémico durante el porfiriato. Ese sector, sin duda el mejor organizado y combativo, había sido duramente reprimido, particularmente en Río Blanco, en 1906, represión que había dejado secuelas y que, sin embargo, no había conseguido desarticular su resistencia.[38] Hacia el final del porfiriato, los obreros textiles continuaban movilizados y demandando aumentos salariales, mejores condiciones laborales y protestando contra las reglamentaciones impuestas por los patrones y sostenidas por la fuerza del sistema político porfiriano. Para capitalizar ese descontento, los zapatistas atacaron la zona fabril de Metepec, en Puebla, y asaltaron la fábrica textil, que fue saqueada por los obreros y las mujeres del lugar. Según los dueños de la empresa, las pérdidas ascendieron a 800 000 pesos y en el ataque murió un empleado francés. Los diarios capitalinos informaron de una numerosa incorporación de obreros a las filas rebeldes.[39]

[38] Rodney Anderson, *Outcasts in Their Own Land. Mexican Industrial Workers, 1906-1911*, Dekalb, Illinois, Northern Illinois University Press, 1976.

[39] *El País*, 8 y 10 de mayo de 1911. Entretanto, rebeldes encabezados por Bernabé Labastida y Lucio Moreno ocuparon Yautepec; véase Leyva a Díaz, Cuernavaca, 2 y 3 de mayo de 1911, CPD, leg. 70, ff. 10448-10452, 10549.

La disputa por la hegemonía regional

Las fuerzas rebeldes morelenses crecieron considerablemente en esas semanas. Y, aunque la autoridad de Zapata y de los líderes locales no estaba aún consolidada, en Morelos no hubo la proliferación de bandas y caudillos independientes ni la sorda disputa por la hegemonía que caracterizó a la insurrección en otras regiones del país por esos días.

Sin embargo, grupos foráneos procedentes de Guerrero, encabezados por los hermanos Figueroa, familia de rancheros de clase media y cabezas de un clan opositor al porfiriato asentado en la zona de Huitzuco, pronto empezaron a ocupar un papel central en los asuntos de la entidad. Los miembros más importantes del clan fueron: Rómulo Figueroa, ranchero y pequeño ganadero que había sido síndico de ese lugar; Ambrosio Figueroa, comerciante y arriero que había trabajado como encargado del molino de una hacienda en Jojutla, Morelos, y Francisco Figueroa, quien era maestro rural en Huitzuco. Esta familia participó durante la etapa maderista electoral en su estado natal; sus miembros decidieron levantarse en armas por las mismas fechas en que lo hicieron los rebeldes morelenses. Los tres hermanos habían vivido en Jojutla y tenían vínculos con los habitantes de la región colindante entre los dos estados.

Esos vínculos, en un contexto más general, no eran algo nuevo. La vecindad, los lazos étnicos, de parentesco, trabajo y amistad, así como los flujos económicos y los nexos culturales que existían a ambos lados de los límites fronterizos de Morelos y Guerrero habían creado, desde tiempo atrás, una estrecha relación entre las poblaciones de uno y otro estado. Este factor hizo que, de manera natural, al incorporarse a la revuelta la población indígena y campesina morelense, comenzara a propagarse dicha revuelta en el estado vecino. De este modo, un jefe como Tepepa contaba entre sus huestes con hombres originarios de Guerrero y con ellos realizó incursiones en localidades de aquel estado. Asimismo, los Figueroa pudieron hacer lo propio en poblaciones de Morelos. Esto mismo pudo hacer Zapata, en varias ocasiones, en la frontera con Puebla y en el territorio poblano, así como en el Estado de México. Así, pues, la situación similar, los vínculos establecidos, el contagio, la colaboración y los agravios sufridos por la población en las diversas zonas, aunados al debilitamiento del sistema porfiriano, propiciaron la expansión del movimiento zapatista a dichas zonas. La diferencia de la revuelta en el estado de Guerrero estribó en el hecho de que ahí sí hubo, desde el principio, numerosos y fuertes grupos rebeldes locales, con intereses, composición social, motivos y proyectos propios y, por lo tanto, se desarrolló una marcada rivalidad entre los líderes de Morelos y los de Guerrero.

Eso no ocurrió en el Estado de México ni en Puebla, donde el za-

patismo creció sin rivales de consideración, como una extensión natural de su creciente influencia, aprovechando que también con las regiones fronterizas de esos dos estados había estrechos vínculos culturales, históricos y comerciales. En el Estado de México, jefes zapatistas morelenses como Genovevo de la O y Francisco Pacheco no encontraron grandes dificultades para ampliar su radio de influencia en Tenango y Tenancingo, aprovechando tales vínculos. Lo mismo ocurrió en el otro lado mexiquense, en la zona de los volcanes, en Chalco y Amecameca, donde, además, existía una fuerte tradición de lucha agraria. En regiones más alejadas de la frontera, hacia el valle de Toluca, las incursiones de los rebeldes de Morelos o de Guerrero tenían visos de ser fuerzas de ocupación. En los municipios poblanos colindantes con Morelos, como Atlixco, Izúcar, Chiautla y Chietla, Eufemio Zapata y *el Tuerto* Morales encontraron terreno propicio para hacer crecer la revuelta y ganar apoyo local. En ambas entidades, los liderazgos autóctonos locales fueron relativamente débiles y estuvieron subordinados a los jefes morelenses.[40]

A los grupos que se habían formado en el estado de Guerrero durante el antirreeleccionismo, y que luego se incorporaron a la rebelión maderista, les interesó ganar presencia en el vecino Morelos. Además de los Figueroa, también trataron de influir en Morelos algunos políticos de Guerrero que habían participado en el maderismo electoral: Matías Chávez, de Iguala, que había sido gobernador interino en dos ocasiones; José Inocente Lugo, influyente abogado de Coyuca; Juan Andrew Almazán, nativo de Olinalá, inquieto estudiante de medicina que se había establecido en Puebla; Enrique Añorve, médico de Abasolo; Jesús H. Salgado, ranchero acomodado de la Tierra Caliente, y Miguel Asúnsulo, minero chihuahuense que se había arraigado en Guerrero.[41]

Todos estos individuos se levantaron en armas en Guerrero, en donde ocurrió también un notable crecimiento de la revuelta durante los meses de marzo y abril de 1911, en un proceso muy parecido al que estaba teniendo lugar en Morelos. Empero, a diferencia de sus similares de Morelos, los principales dirigentes guerrerenses levantados en armas, y particular-

[40] Este conflictivo factor de las relaciones entre los rebeldes de Morelos y Guerrero constituye —como después sería la relación con el centro del país—, un elemento decisivo que debe tomarse muy en cuenta para analizar y comprender las particularidades que tuvo el origen y desarrollo del movimiento zapatista en la zona morelense.

[41] Renato Ravelo Lecuona, *La revolución zapatista en Guerrero. De la insurrección a la toma de Chilpancingo, 1910-1914* (tomo I), México, UAG, 1990, pp. 23-31; Ian Jacobs, "Rancheros de Guerrero. Los hermanos Figueroa y la Revolución", en David A. Brading (comp.), *Caudillos y campesinos en la Revolución mexicana*, México, FCE, 1985, pp. 106-124; también de Jacobs, *La revolución mexicana en Guerrero. Una revuelta de los rancheros*, México, ERA, 1990, pp. 105-119; Womack, *op. cit.*, pp. 83-84.

mente el clan de los Figueroa, tuvieron una relación más estrecha desde el principio con los dirigentes nacionales maderistas y un mayor entendimiento con los grandes propietarios, tanto de Guerrero como de Morelos. Las excepciones fueron Jesús H. Salgado y Juan Andrew Almazán, quienes se unieron más tarde al zapatismo morelense, en una alianza que buscaba fortalecer su posición debido a las serias diferencias y disputas por la hegemonía estatal que tuvieron con el clan de los Figueroa, con José Inocente Lugo y con los demás líderes de Guerrero.

Como movimiento de masas, la rebelión guerrerense tuvo características similares a la de Morelos en varios sentidos. También hubo ahí una incorporación importante de la población rural y se presentaron actos de violencia popular en contra de los grandes propietarios, hacendados y caciques, tenderos mayores, comerciantes de las localidades y jefes políticos identificados con el régimen porfirista. De igual modo, jefes y soldados de las bandas guerrilleras aprovecharon la revuelta para cometer abusos contra parte de la población y para camuflar venganzas y buscar provecho personal. En Guerrero, además, una parte importante de la dirección de los numerosos grupos rebeldes recayó en nuevos líderes ligados fuertemente a sus comunidades de origen.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Morelos, donde estuvieron ausentes del movimiento dirigentes de dimensión estatal o nacional y tampoco participaron personajes prominentes de las clases dominantes, en Guerrero una parte de la dirección de la revuelta estuvo compuesta por personajes notables de la elite política opositora, originarios de las clases medias rurales y urbanas, con una posición más moderada, cuya formación era típica de los sectores que había reclutado el maderismo electoral y que habían tenido participación en éste. Así, no fue casual que contaran con vínculos mucho más estrechos con la dirección nacional maderista, con la que compartían buena parte de su visión y sus planteamientos acerca de los problemas nacionales, particularmente del agrario. Por ello, estos líderes guerrerenses no veían con buenos ojos los ataques que las bandas guerrilleras emprendían en contra de las grandes propiedades agrarias, los comerciantes y las autoridades, ni avalaron los actos de sabotaje contra edificios públicos y vías de comunicación. La consecuencia natural fue la convergencia y afinidad de parte de esa dirección maderista local con algunos de los grandes propietarios y, por consiguiente, explica en parte sus diferencias crecientes con la más plebeya y radical revuelta agraria morelense.[42]

[42] Ian Jacobs (*La revolución..., op. cit.*, pp. 106-108) llama la atención acerca de la ideología liberal de los hermanos Figueroa y la similitud de sus planteamientos con los de Madero; para unos y otro, el principal problema nacional era el político.

Como ha mostrado convincentemente Alan Knight, al extenderse la rebelión maderista y vislumbrarse cercano el triunfo, se acentuó la división en sus filas entre una fracción moderada, compuesta por personas y clanes de las elites y las clases medias ilustradas, que no querían atacar ni menos modificar la estructura de la propiedad existente, por una parte, y, por otra, una fracción más radical, integrada por líderes agraristas y populistas, que abarcaba un amplio espectro, desde algunos dirigentes maderistas que trataban de empujar hacia la realización de reformas sociales y económicas, como el ala proveniente de las escisiones del Partido Liberal Mexicano, en la que figuraban Antonio I. Villarreal, Juan Sarabia y Antonio Díaz Soto y Gama y gente cercana a ellos, como Luis Cabrera, hasta los nuevos líderes arraigados a sus localidades, en los que había una ideología menos precisa de transformación social, pero una práctica más radical contra las instituciones del viejo régimen.

Sobre todo estos últimos aceptaban y promovían los ataques a la propiedad, a las personas y a las instituciones que la gente común consideraba especialmente odiosas, como era el caso de muchos de los jefes políticos, así como de las cárceles y los archivos municipales, instituciones que representaban los símbolos del dominio y la represión ejercidos por el sistema porfiriano. Los líderes maderistas moderados se empeñaron desde el principio —y aún más a medida que avanzaba la revuelta— por controlar y subordinar a los radicales, estableciendo en muchos lugares alianzas con las clases altas que se oponían a la revolución.[43] En Morelos y en Guerrero, los líderes nacionales maderistas intentaron hacer lo mismo y buscaron la colaboración, para tales propósitos, de los dirigentes regionales más importantes de la rebelión.

En Guerrero, los moderados líderes locales consolidaron sus vínculos con Madero y fortalecieron su posición regional. Por el contrario, en Morelos, el control lo tuvieron desde el principio los líderes radicales autóctonos, los cuales estaban relativamente alejados de los dirigentes maderistas nacionales; por ello, las relaciones de los líderes zapatistas con el centro nacional y con los grupos económicos dominantes de la entidad fueron siempre más ríspidas. Desde los meses de marzo y abril de 1911, las clases altas morelenses actuaron de manera decidida para defender sus intereses y frenar la violencia popular que se había manifestado en las tomas de las localidades. Sobre todo, les preocupaba el hecho de que la violencia parecía ser tolerada y promovida por los propios jefes zapatistas, con los cuales no habían podido establecer canales de comunicación para llegar a acuerdos y compromisos. Por consiguiente, hicieron una alianza con los Figueroa que intentó convertirse en una cuña para controlar el zapatismo.

[43] Knight, *The Mexican Revolution, op. cit.*, t. I, pp. 208-215.

Esta alianza, bien vista por los dirigentes maderistas de la ciudad de México, permitió que, en abril, una parte de las fuerzas rebeldes de los Figueroa tomara pacíficamente la ciudad de Jojutla, pactando un armisticio con el jefe militar federal en el que se comprometía a guardar el orden e impedir que otras fuerzas rebeldes atacaran posiciones defendidas por el régimen.[44] Poco después asesinaron al viejo Tepepa,[45] y cerraron el paso a los zapatistas, tomando antes que ellos la capital del estado. Como la de Jojutla, la ocupación de Cuernavaca por las fuerzas de Figueroa fue pacífica y contó con el apoyo de los propietarios locales y de las autoridades políticas y militares porfirianas. La prensa oficial y católica de la ciudad de México destacaba "los magníficos antecedentes de los jefes guerrerenses, los cuales respetan y garantizan vidas e intereses y castigan a quienes cometen desórdenes". A pesar de ello, cuando las tropas figueroístas entraron a Cuernavaca hubo desórdenes populares y liberación de presos, desmanes que tuvo que controlar Manuel Asúnsolo, lo cual demuestra que el comportamiento violento de las bandas rebeldes rebasaba a menudo las intenciones de control de sus jefes.[46]

Ante la renuncia inminente de Díaz y el avance de las negociaciones entre el maderismo y el régimen porfirista, los zapatistas vieron amenazados sus intereses por la mayor influencia de los Figueroa, quienes habían asentado sus reales en Cuernavaca. En un esfuerzo para no ser desplazados, incrementaron sus acciones. El 29 de abril, encabezados por Zapata, atacaron otra vez Jonacatepec, tomándola después de dos días de combates. En ese lugar liberaron a los presos, fusilaron al jefe político y a dos jefes de las fuerzas rurales y nombraron nuevas autoridades locales.[47]

[44] CPD: Francisco Leyva a González Cosío, secretario de Guerra, Cuernavaca, 28 de abril de 1911, leg. 70, ff. 10251-10252; Leyva a Díaz, Cuernavaca, 1 de mayo de 1911, leg. 70, ff. 10423-10424. En esta última carta, Leyva decía: "[...] las fuerzas de Figueroa son las más bien armadas, disciplinadas y respetadas. Quedaron obligadas en el armisticio a evitar que otras gavillas ataquen las plazas ocupadas por fuerzas del gobierno". La firma de este acuerdo se convirtió en uno de los factores que más dificultaron el entendimiento entre las fuerzas de Zapata y las de los Figueroa. Zapata interpretó esa actitud como una debilidad de los Figueroa y casi como una traición: pactar unilateralmente el armisticio, sin autorización de Madero ni de las otras fuerzas rebeldes. Los acontecimientos posteriores reforzaron esa desconfianza inicial de Zapata.

[45] El asesinato de Tepepa, perpetrado por Federico Morales, lugarteniente de los Figueroa, con quien el viejo caudillo tenía rivalidades añejas en Jojutla, no hizo sino inaugurar un procedimiento que luego sería muy utilizado para resolver disputas y liderazgos dentro del movimiento zapatista, tanto en la entidad morelense como en las zonas aledañas.

[46] *El País*, 21 de mayo de 1911.

[47] Leyva a Díaz, Cuernavaca, 3 de mayo de 1911, CPD, leg. 70, ff. 10549-10550. La sustitución de los funcionarios locales, a los que se identificaba como parte del régimen porfiriano, mostraba congruencia con el Plan de San Luis maderista y sirvió para dar legitimidad al movimiento rebelde, al hacerse eco de esas demandas muy sentidas de algunas poblaciones en contra de tales funcionarios.

La disputa por la hegemonía regional entre los zapatistas y los figueroístas no se resolvió definitivamente. Para ello hubiera sido necesario que uno de los dos sometiera al otro, imponiéndole condiciones que aseguraran su dominio y evitaran que el poder alcanzado fuera desafiado. Eso no ocurrió. Transitoriamente, empero, los de Guerrero habían logrado desplazar a los rebeldes de Morelos y ocuparon, gracias al apoyo maderista, la primacía regional. Sin embargo, era una superioridad que, para consolidarse, necesitaba hacerse del poder político regional y obtener el monopolio de las armas, desmovilizando y desarmando a los grupos rivales. Por lo tanto, la disputa por el dominio regional rebelde quedó en suspenso.

El colapso del porfiriato

La acción culminante de la rebelión morelense tuvo lugar el 12 de mayo de 1911, cuando Zapata, al frente del más numeroso contingente que había podido aglutinar, puso sitio a Cuautla, la segunda ciudad en importancia del estado, tomándola el 21 de mayo, después de un cerco en el que el encono de los enfrentamientos produjo escenas de violencia y destrucción en un grado mayor del que había ocurrido en los combates y ocupaciones anteriores.[48] Con ello, los grupos rebeldes habían logrado el control de las principales ciudades de la entidad, desbandando al ejército federal y a los poderes públicos locales. La rebelión se había extendido a una amplia zona del centro-sur del país, contribuyendo así —junto con la rebelión norteña que acababa de tomar Ciudad Juárez— a minar las bases del régimen porfiriano y precipitar su caída.[49]

En Guerrero y algunas zonas de los estados de México y Puebla se había desarrollado una situación similar. El jefe de la tienda de raya de la hacienda de Teloloapan resumió así la situación en Guerrero, que, por lo demás, podía aplicarse a otras regiones:

[48] Leyva a Díaz, Cuernavaca, 13 y 14 de mayo de 1911, CPD, leg. 70, ff. 11370, 11443-11444; Womack, *op. cit.*, pp. 85-86; Brunk, *op. cit.*, pp. 37-38; Ravelo, *op. cit.*, pp. 104-154; Gildardo Magaña, *Emiliano Zapata y el agrarismo en México*, México, INEHRM, 1979, vol. 1, pp. 113-114; *El Diario*, 20 y 24 de mayo de 1911; *Diario del Hogar*, 19 de mayo y 3 de junio de 1911. Aunque debe haber exageración, los diarios y los testimonios hablaban de una fuerza rebelde cercana a los cuatro mil hombres.

[49] Incluso para muchos de los principales dirigentes maderistas que estaban por esos días en Estados Unidos, como los hermanos Vázquez Gómez, Federico González Garza, Juan Sánchez Azcona y otros, el avance del movimiento insurgente en el sur fue considerado como un factor decisivo y, en algunos momentos, más importante que lo que estaba ocurriendo principalmente en Chihuahua.

> [...] la mayor parte del estado de Guerrero ha caído y permanece bajo el dominio de los revolucionarios, con excepción de Chilpancingo, Iguala, Acapulco [...] ¡Y circunstancia extraordinaria! Para obtener ese resultado no ha sido forzoso que se derramen torrentes de sangre ni que se entablen batallas serias, sino que el movimiento ha sido tan espontáneo y formidable que los rebeldes sólo han tenido que presentarse en algunos pueblos para que en masa los secunden los habitantes y se depongan en el acto a los funcionarios públicos que no son bien vistos.[50]

Sin embargo, como ya se ha visto, en muchos otros lugares no fue tan sencillo el asunto y predominó una alta dosis de violencia de uno y otro lado de las partes enfrentadas. Ante la inutilidad de la resistencia, el gobernador poblano entregó pacíficamente la ciudad de Tehuacán a los rebeldes Prisciliano Martínez y Camerino Mendoza, cuyas tropas saquearon los comercios de la ciudad. Sólo la ciudad capital permaneció en manos de las fuerzas del régimen.[51]

Liderazgo e identidad

Las disputas por el liderazgo entre las fuerzas zapatistas y los Figueroa se hicieron más agudas. Al igual que quiso hacerlo con Zapata, el régimen porfiriano estableció contacto con los Figueroa y obtuvo de éstos la suspensión de actividades bélicas, en un acto que disgustó a líderes maderistas como José Vasconcelos, quien opinó que con eso se debilitaba el frente insurreccional y se daba un respiro al agonizante régimen porfiriano. La toma de Ciudad Juárez definió la capitulación del gobierno de Díaz[52] y afianzó las posiciones que habían conquistado los distintos grupos rebeldes. Luego de la firma, el 21 de mayo de 1911, de los tratados de Ciudad Juárez, en los que las fuerzas maderistas se comprometieron a terminar las hostilidades, a restablecer el orden público y la tranquilidad en la República y a licenciar a las fuerzas rebeldes, los líderes maderistas procedieron a tomar o reforzar el control de los grupos maderistas regionales. En el escenario morelense, Madero y sus asesores tomaron partido por el clan de

[50] *El Diario*, 12 de mayo de 1911.

[51] CPD: Valle a Díaz, 29 de abril de 1911, c. 371, f. 10205; Isunza a secretario de Guerra, 29 de abril de 1911, c. 371, f. 10245. E. Vázquez Gómez a F. Vázquez Gómez, San Antonio, Texas, 11 de mayo de 1911, en Vázquez Gómez, *op. cit.*, pp. 177-178; *El País*, 16 de mayo de 1911.

[52] Santiago Portilla (*op. cit.*) tiene razón al enfatizar la amplitud de la revuelta y el desbordamiento que hizo ésta de la capacidad de respuesta del régimen porfirista, sin lo cual no puede entenderse su capitulación ni los acuerdos de transición con el maderismo. Paul Vanderwood también tiene razón al señalar que la derrota del régimen porfiriano se debió a que la estructura militar del ejército, su excesiva centralización y la pequeñez de sus fuerzas no pudieron contrarrestar la rebelión. Véase Paul Vanderwood, *Los rurales mexicanos*, México, FCE, 1982, pp. 174-175.

Guerrero, con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad en el estado de Morelos, calmar a los hacendados y subordinar a los radicales zapatistas.[53]

Estas tensiones, rupturas y alianzas entre los distintos grupos que se disputaban la hegemonía del proceso insurreccional de la región tuvieron el efecto de definir a dos bandos claramente diferenciados: por un lado, una alianza entre las clases propietarias locales, el grupo capitaneado por los hermanos Figueroa y los líderes maderistas nacionales; por otro, los revolucionarios morelenses encabezados por Zapata, que, si bien carecían de apoyos entre las elites regionales y nacionales, habían conseguido arraigo en sectores populares y contaban con una fuerza que no podía hacerse a un lado en la recomposición del orden y las instituciones que tuvo lugar a la caída del régimen porfirista. Al mismo tiempo, estas diferencias sirvieron para agrupar a los rebeldes zapatistas, mediante un proceso de identificación y de defensa de intereses comunes que se desarrolló, en buena medida, contraponiéndose a la injerencia de los grupos foráneos y del centro nacional maderista. Este proceso de rivalidad con los de Guerrero sirvió como punto de partida para la identidad de los rebeldes morelenses.

Entre los rebeldes morelenses se fue afirmando la supremacía del grupo originario de Anenecuilco-Villa de Ayala-Jojutla por varias razones. En primer lugar, porque fue el único que intentó vincularse formalmente con la dirigencia maderista nacional y obtener de ella reconocimiento y legitimidad para su revuelta, así como una dimensión extrarregional. Fue también el grupo regional más fuerte y cohesionado, que supo sacar partido de las circunstancias que se presentaron en la entidad, que se fortaleció con la incorporación de jefes locales con arraigo y de intelectuales de clase media foráneos que resultaron ser de gran utilidad, como los hermanos Gildardo y Rodolfo Magaña, Juan Andrew Almazán y Abraham Martínez —primo de Luis Cabrera, quien fue la figura intelectual más conocida por la opinión pública, a través de la prensa, durante los meses de gestación del zapatismo—, lo que les permitió obtener alianzas exteriores y recursos. Logró también reconocimientos que retroalimentaron su liderazgo inter-

[53] Vasconcelos a Vázquez Gómez, 10 de mayo de 1911, en Vanderwood, *op. cit.*, p. 178. Los propietarios morelenses pidieron a Madero en esos días, en repetidas ocasiones, que nombrara a Ambrosio Figueroa jefe de armas en Morelos "para evitar las depredaciones de Emiliano Zapata"; véase Aristeo Calderón y otros a Madero, México, 20 de mayo de 1911, AFIM, ms. 1116. Varios investigadores han señalado el papel —a la larga contraproducente para el maderismo— que desempeñaron los Figueroa al obligar a los zapatistas a unirse y radicalizar su postura contra los intentos de injerencia foránea. Véanse Magaña, *op. cit.*, vol. I, pp. 111-112; Womack, *op. cit.*, pp. 83-84; Jacobs, *op. cit.*, p. 111. Las negociaciones de Díaz con los Figueroa se vinieron abajo con la ruptura de hostilidades en el norte del país y la toma de Ciudad Juárez; véanse *El Diario*, 5 de mayo de 1911, y Francisco Figueroa a Díaz, Chilpancingo, 25 de mayo, CPD, leg. 70, f. 11836, en donde aquél informa a éste que los jefes guerrerenses rebeldes lo han nombrado gobernador del estado y pregunta si se le reconoce y aceptan sus servicios.

no, como fue el caso del pacto que tuvieron con los Figueroa de Guerrero y los intentos de negociación de un armisticio emprendidos por el viejo Francisco Leyva con Zapata en mayo de 1911. Todo esto fortaleció al grupo rebelde y consolidó la dirección de Emiliano Zapata, quien alcanzó reconocimiento extrarregional. Como resultado de este proceso, en mayo de 1911, los zapatistas eran la fuerza rebelde más importante de Morelos y controlaban militarmente las principales poblaciones de la parte centro-oriental del estado y de la zona fronteriza poblana.[54]

Por otro lado, en el extremo noroccidental del estado de Morelos operaba por su cuenta el grupo de Genovevo de la O, con una gran independencia. Hasta esos momentos, este grupo no había tenido relación ni había participado en las disputas ocurridas en la parte central del estado y, aunque formalmente había reconocido la jefatura de Zapata, en los hechos operaba con una dinámica muy autónoma.[55]

Las características de la rebelión, la violencia de masas de los grupos rurales marginados contra las instituciones del viejo régimen, el debilitamiento del estado porfirista y la disputa por el liderazgo rebelde con el grupo figueroísta hicieron que el grupo de Zapata, que se consideraba a sí mismo como parte subordinada de la rebelión maderista, que aceptaba el liderazgo de Madero y que encontraba en el Plan de San Luis su justificación ideológica y sus banderas programáticas, se fuera cohesionando como un grupo con intereses propios, desarrollados en el proceso mismo de la insurrección, en la identificación con las acciones de masas, fuertemente ligado a la problemática rural de sus comunidades, y que fuera distanciándose tanto de los líderes maderistas más moderados como de sus rivales guerrerenses. Si bien de manera todavía incipiente, comenzaron a diferenciarse de la tendencia conservadora que se estaba imponiendo en el maderismo triunfante, y este proceso se facilitó porque la insurrección en Morelos había dado lugar, en esos meses, a la formación de una dirección propia, cuyos líderes, además, creían merecer un lugar en la reorganización de los poderes locales.

Control del centro sobre la rebelión

La visión conservadora de Madero, de sus familiares y de sus principales asesores, junto con los compromisos de respeto a la propiedad y a los intereses de las elites y las instituciones, llevaron a los líderes maderistas a

[54] Magaña, *op. cit.*, t. I, pp. 103-133; Womack, *op. cit.*, pp. 60-82.

[55] Véase el diario de campaña de De la O, que se encuentra en el AGN, Fondo Genovevo de la O (FGO), c. 12, exp. 1.

tratar de afianzar el control sobre la actividad de las numerosas bandas guerrilleras que habían proliferado en el país. Para Madero y sus principales colaboradores se volvió imprescindible mantener el control y la disciplina de los grupos armados diseminados por el territorio nacional, para evitar actos violentos y expropiaciones en contra de las clases propietarias y las fuerzas del orden. Necesitaban demostrar que los hilos de la rebelión estaban en sus manos para dar tranquilidad a los diversos sectores de la sociedad —los cuales estaban seriamente preocupados por la violencia desatada durante esos meses— y poder establecer una transición pacífica con los representantes del régimen porfiriano. Adicionalmente, Madero y la elite más cercana a él necesitaban acotar los límites de la revuelta, tanto en el terreno militar como en relación con las demandas de reforma social. Extendieron así órdenes a los distintos jefes militares que operaban en las diferentes regiones para contener los desmanes, concentrar y vigilar a sus fuerzas y comenzar la desmovilización.

En Morelos, la dirigencia nacional maderista reconoció a Zapata como el representante de las fuerzas armadas revolucionarias en la entidad y, días antes de la firma de los tratados de Ciudad Juárez, Alfredo Robles Domínguez —que había recuperado su libertad y su cargo como coordinador de la revolución maderista en el centro y sur de la república— hizo llamados a Zapata y a sus principales jefes subordinados para que respetaran las haciendas y no permitieran desórdenes en sus filas, prohibiéndoles avanzar hacia nuevas poblaciones y ordenándoles que, o bien permanecieran en las posiciones en que se encontraban o que regresaran a sus lugares de origen, en virtud de que se había consumado el triunfo y no era necesaria su presencia armada en las principales poblaciones ocupadas.[56]

En el territorio suriano, donde había habido una elevada dosis de violencia en contra de las clases propietarias y donde se había producido una ruptura entre los jefes zapatistas con los rebeldes de Guerrero, los dirigentes maderistas y sus aliados locales se vieron en la necesidad de restablecer el orden, garantizar el *statu quo* y conseguir un pronto arreglo entre el grupo zapatista y los Figueroa. Madero comisionó a Alfredo Robles Domínguez para este fin y para que se encargara del licenciamiento de los rebeldes surianos.[57] Las negociaciones no fueron fáciles, pues tanto Zapata como los Figueroa querían el liderazgo y el reconocimiento como triunfadores.

[56] AGN, FARD, t. 4, exp. 17: Alfredo Robles Domínguez a Manuel Asúnsolo, México, 22 de mayo de 1911, f. 2; Alfredo Robles Domínguez a Zapata, México, 22 de mayo, f. 5; J.I. Lugo a A. Robles Domínguez, Amecameca, 24 de mayo, f. 6; Matías Chávez a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 24 y 25 de mayo, ff. 8, 14; Francisco Figueroa a A. Robles Domínguez, Iguala, 24 de mayo, ff. 10, 11; Alfredo Robles Domínguez a Asúnsolo, Cuernavaca, 25 de mayo, ff. 15-22.

[57] *Diario del Hogar*, 11 de junio de 1911.

Sin embargo, Robles Domínguez consiguió tres importantes concesiones de los zapatistas. En primer lugar, que Zapata y su grupo —que se empeñaban en nombrar gobernador del estado, de acuerdo con lo establecido en el Plan de San Luis— aceptaran como gobernador al banquero Juan Carreón, candidato propuesto por el guerrerense Asúnsolo, quien controlaba militarmente Cuernavaca. En segundo lugar, la aceptación de los zapatistas de iniciar el desarme de sus fuerzas y regresar a sus lugares de origen en cuanto el licenciamiento concluyera. Finalmente, que Zapata no intentara vengar la muerte de Tepepa, asesinado por el figueroísta Federico Morales. Aunque las negociaciones no lograron eliminar las diferencias existentes entre ambos grupos, establecieron, al menos temporalmente, otra relación de fuerzas, al favorecer al bando de los de Guerrero e inclinarse por ofrecer garantías y seguridades a las clases propietarias de la entidad, al grado de poner a un representante de éstas como gobernador y legitimar la ocupación militar del estado por los guerrerenses, que conservaron sus posiciones, todo ello en detrimento de la fuerza y los espacios de Zapata y los suyos.

Al mismo tiempo, estos acuerdos demostraron, por un lado, la debilidad de la postura zapatista ante la dirigencia maderista. A pesar de la toma de Cuautla y de tener el control de la mayoría de las poblaciones de la entidad, su fuerza no fue condición suficiente para que los maderistas reconocieran y tomaran en cuenta las demandas y propuestas de los zapatistas. De igual modo, la aceptación de tales acuerdos por parte de Zapata y sus seguidores era reflejo, sin duda alguna, de la confianza, lealtad y subordinación que los zapatistas depositaban en Madero, quien gozaba de gran legitimidad ante sus ojos. Esperaban —y éste así se lo aseguró reiteradamente— que, una vez que accediera al poder, daría solución a las exigencias de los zapatistas: la recuperación de las tierras por los pueblos, el cese a la injerencia de los políticos y militares guerrerenses, la salida de los jefes políticos y autoridades locales repudiadas por la población y su sustitución por otros elegidos por los propios pobladores y, finalmente, la participación de los jefes zapatistas en la reorganización de los poderes del estado y la incorporación de parte de sus tropas a las nuevas fuerzas rurales locales.[58]

Las reivindicaciones agrarias de los morelenses tenían todavía un carácter incipiente y se localizaban en unos cuantos pueblos que habían te-

[58] AGN, FARD, t. 4, exp. 17: Asúnsolo a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 25 de mayo de 1911, f. 23; Abraham Martínez a A. Robles Domínguez, Yautepec, 26 de mayo, ff. 24, 27-28, 29; A. Robles Domínguez a Zapata, México, 26 de mayo, f. 30; J.I. Lugo a Alfredo Robles Domínguez, Cuernavaca, 26 de mayo, f. 31; Abraham Martínez a Alfredo Robles Domínguez, Cuernavaca, 27 de mayo, f. 36. Tomás Ruiz de Velasco a Robles Domínguez, 26 de mayo, AGN, FARD, t. 1, exp. 6, ff. 44 y ss.

nido disputas recientes con haciendas colindantes. La generalización de las reivindicaciones agrarias en el movimiento zapatista fue posterior. Hasta esos momentos, los ataques a las haciendas que habían tenido lugar fueron motivados por la venganza de afrentas y el acopio de dinero, armamento, caballos y víveres, pero no se habían convertido todavía en recuperaciones de tierras y aguas, en expropiaciones, ni en demandas generales para solucionar el problema agrario, aspectos que madurarían en los meses siguientes.

Los motivos de la rebelión

Con el triunfo de la insurrección maderista, la renuncia de Díaz, la instauración de un gobierno de transición, la convocatoria a elecciones nacionales, la desaparición de los poderes locales, la disputa por la hegemonía entre las fuerzas de Zapata y las de los Figueroa y el inicio de las negociaciones para la reorganización de las instituciones y la administración pública local concluía la primera fase del movimiento zapatista en el estado de Morelos.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los motivos de los individuos que encabezaron la revuelta y, más importante aún, los de los morelenses que los secundaron para incorporarse a la rebelión maderista?; ¿cuál fue la extensión de su participación? Sobre la primera cuestión sólo pueden plantearse algunas ideas hipotéticas.

Además de los testimonios que existen sobre Zapata y los principales dirigentes de Morelos, no hay muchos más, que hayan llegado hasta nosotros, de la gente común que se incorporó a la revuelta ni de quienes la apoyaron por diversos medios. Ésta es una ausencia estructural, característica de todos los movimientos sociales: los testimonios escritos que de éstas perduran son producto, la mayoría de las veces, de personas pertenecientes a las clases medias o altas y que pueden caracterizarse, a riesgo de simplificar en exceso, como intelectuales. Varios investigadores han subrayado la casi ausencia de fuentes directas, en las que se encuentren plasmados los puntos de vista, las aspiraciones y los proyectos de las denominadas clases subalternas. Adolfo Gilly ha escrito que

> para hacer oír la voz de los dominados, hay que escucharla. Y éstos no hablan en la historia, sino sólo entre ellos, y eso no queda escrito. Y aun cuando llegan a hacerlo, es sólo su capa superior la que habla y escribe por todos: sus dirigentes, sus intelectuales [...] los de abajo [...] hablan con sus actos y explican sus parcas palabras por sus hechos y sus obras [...] Entonces hay que leer en sus acciones, colectivas e individuales, y comprender(las) o intuir(las).

Alan Knight ha expresado también que si se pone el énfasis explicativo en los motivos manifiestos expresados por los participantes y se cae en el extremo de hacer una historia casuística, se termina por tener una serie de relatos caóticos y "un conjunto fortuito de motivos personales difíciles de generalizar". Por ello, oponiéndose a "abrazar el azar y el individuo y negar toda forma o patrón", ha señalado que "hay patrones históricos que los mismos sujetos históricos desconocen; o, razonando de otra forma, los historiadores, tanto como los economistas, sociólogos o psicólogos, deben incorporar en su análisis motivos y funciones, no sólo manifiestos, sino también latentes".

Con las reservas señaladas, cabe mencionar que existen, sin embargo, algunos testimonios contemporáneos sobre el fenómeno que nos ocupa que, si bien no escapan a las limitaciones mencionadas, indican algunas de las razones y los motivos concretos de localidades, grupos e individuos para sumarse a la rebelión. Están, además, como propone Gilly, las acciones de los que se incorporaron a la rebelión y que dan material suficiente para reconstruir y —aunque sólo sea parcialmente— explicar esa actividad.[59]

Con estos materiales se puede establecer, desde luego, que los motivos de los individuos que concibieron, organizaron y ejecutaron la revuelta jugaron un papel decisivo. Como se ha visto, los principales dirigentes rebeldes morelenses habían sufrido agravios personales por su incorporación en las luchas agrarias recientes de sus comunidades y por su participación política en el movimiento leyvista de 1909. Habían padecido también represión, persecución y proscripción por parte del régimen porfirista por tales actividades. Su participación en el leyvismo les sirvió para adquirir una mayor politización mediante el contacto con líderes y corrientes políticas nacionales. El fracaso del leyvismo, a pesar de la represión que significó, no los hizo desencantarse de la oposición política ni abandonar

[59] Adolfo Gilly, "La historia como crítica o como discurso del poder", en Gilly *et al.*, *Historia para qué*, México, Siglo XXI (2a. ed.), 1981, p. 219. La gran cantidad de testimonios orales recuperados en entrevistas con veteranos zapatistas por investigadores mexicanos del zapatismo —como Alicia Olivera, Salvador Rueda, Laura Espejel y otros—, que conforman el muy importante Archivo de la Palabra, son muy útiles para dar una idea general del contexto, de la época, de la visión y de los valores de los participantes y, con todas las reservas del caso para este tipo de testimonios, ayudan a comprender la explicación racional posterior que se formaron ellos mismos acerca de su participación juvenil en esos acontecimientos. Véase el artículo de Alan Knight "Interpretaciones recientes de la revolución mexicana", *Secuencias* (México), núm. 13, enero-abril de 1989, p. 29. Es sugerente, aunque no resuelva la cuestión ni mucho menos, la obra de Carlo Ginzburg y su propuesta del "método indiciario" para tratar de reconstruir la voz de lo que denomina "clases subalternas", a partir de ciertos testimonios excepcionales y fragmentarios —"indicios"— que considera especialmente significativos. Véanse los interesantes comentarios que hace Adolfo Gilly a esta propuesta en el libro *Discusión sobre la historia*, México, Taurus, 1995, pp. 25-74.

sus aspiraciones; antes bien, los radicalizó. Siguieron confiando en la política como vía para resolver sus problemas. Su condición de proscritos y la agudización de los conflictos agrarios de sus comunidades los llevaron a sentirse atraídos por el movimiento electoral maderista, en el que depositaron esperanzas para mejorar su situación mediante un cambio político nacional que resolvería, entre otras cuestiones, el problema agrario.

Empero, más tarde, cerradas las vías legales para el movimiento maderista y tras el llamado de Madero a la rebelión, habiéndose percatado asimismo del crecimiento que tenía la insurrección maderista, quienes serían los líderes de la revuelta en Morelos concluyeron que podía existir una oportunidad para lograr por ese camino sus aspiraciones. Eso los decidió a dar el salto a la insurrección, incorporándose a la amplia revuelta que estaba en curso en el país. Aunque fue una decisión personal, también influyó en ella la condición de inseguridad que padecían sus familias y el acicate que significó la futura solución de los problemas de sus comunidades, en las que tenían arraigo y prestigio y con las cuales habían adquirido un fuerte compromiso. En los casos conocidos de Anenecuilco y Santa María, la necesidad de sembrar y las dificultades para hacerlo los llevaron a una situación límite que explotó cuando decidieron sumarse a la rebelión maderista.

El movimiento rebelde se organizó en torno de gente representativa de las localidades, dando forma a un nuevo tipo de liderazgo, de carácter local, asumido por gente notable de recursos económicos más bien modestos y con escasos vínculos con las elites regionales y nacionales. Dirigentes locales subordinados a un movimiento y a un liderazgo nacional, pero con escasos vínculos con ambos y, por lo tanto —en razón de las decisiones estratégicas y las acciones militares efectuadas en esos meses—, con una gran autonomía. Los nuevos dirigentes aprovecharon tanto la debilidad del sistema de dominación porfirista como la ausencia de líderes maderistas en su región, para irrumpir en los primeros planos y convertirse en un factor importante de poder en su entidad. Como se ha visto, el modelo explicativo de Tutino puede ser aplicado para comprender el surgimiento de la rebelión morelense, aunque con este importante matiz: si bien el llamado a la rebelión provino de fuera, la organización e instrumentación de la rebelión se realizaron con recursos locales que permitieron el surgimiento de un liderazgo autóctono; por lo demás, la debilidad de las elites locales había sido probada, en 1909, con el leyvismo.

La decisión de la revuelta tuvo éxito al propagarse en la zona y extenderse al territorio colindante con Morelos, gracias a lo cual se multiplicaron y extendieron las bandas rebeldes y llegaron a constituir una fuerza militar de cerca de 4000 activos que pudo ocupar y controlar las principales poblaciones de la entidad. Estas bandas se caracterizaron por

su acendrado localismo, ya que estaban agrupadas en torno de líderes naturales de las poblaciones que consiguieron imponer su autoridad gracias a vínculos de parentesco, amistad y clientelismo, aunados a fuertes sentimientos de identidad regional y a una gran autonomía en el accionar de sus dirigentes. Este alto grado de autonomía y localismo, como ha señalado Friedrich Katz, daba gran movilidad a las bandas rebeldes, pero constituía una enrome debilidad a la hora de conformar una fuerza disciplinada y emprender objetivos militares de mayor envergadura más allá de su zona de procedencia.

De cualquier manera, la revuelta no provocó una incorporación masiva de la población morelense a ella. A pesar de la alteración del orden, de la virtual desaparición del poder estatal, del temor que se generó en muchos sectores ante la violencia desatada, la rebelión que puso fin al régimen porfiriano tuvo una participación minoritaria de la población de Morelos, sin grandes combates y sin un alto grado de violencia destructiva en esa primera fase.

¿Por qué se incorporó la gente a la revuelta? Los rebeldes consiguieron sumar, primero, a familiares, amigos y conocidos de sus localidades y, luego, a gente de las poblaciones aledañas, en bandas que oscilaban entre unas decenas y algunos cientos para las acciones de mayor envergadura. Conforme sus ataques tuvieron éxito, los rebeldes pudieron ofrecer a sus seguidores y al grueso de la población de los lugares atacados la posibilidad de resarcirse de ciertos agravios cometidos por las figuras visibles y más desacreditadas de la autoridad o la obtención de una parte de la riqueza de algunas de las familias más acaudaladas mediante el saqueo masivo. Ambos beneficios y la aspiración de conseguir tierras y resolver los conflictos agrarios y políticos que ofrecían los nuevos líderes lograron la incorporación de un mayor número de seguidores hasta llegar a movilizar en una sola acción, hacia el final del régimen porfiriano, a más de 3 000 hombres armados, cifra notable para la época y para el tamaño de la región. Estos elementos muestran que la revuelta, si bien en función del total de la población seguía siendo minoritaria, había logrado generar un considerable apoyo en tres meses, sobre todo entre la población de los sectores bajos de la entidad.

El crecimiento de las bandas rebeldes, su actuación en los enfrentamientos militares contra las fuerzas del orden y en las ocupaciones de diversas localidades, y la participación de la gente común en los motines que tuvieron lugar cuando ocurría un triunfo sobre las guarniciones federales o rurales o, incluso, cuando ocupaban sin mucho esfuerzo distintas poblaciones, son los mejores indicadores del descontento que sentían quienes se incorporaron a la revuelta. El patrón de conducta que incluía la quema de edificios y archivos gubernamentales, la liberación de los presos

comunes, el saqueo de tiendas y propiedades de los comerciantes acaudalados, el fusilamiento de algunos jefes políticos, militares y rurales, y el ataque a las haciendas y sus empleados hablan crudamente de la extensión y profundidad que habían alcanzado los odios y los resentimientos generados entre la población común, cuya causa principal eran los agravios cometidos por algunos comerciantes, hacendados, funcionarios y policías del régimen porfiriano. El ajuste de cuentas que ahora podía hacer la población resentida, cuya acción, al expresar de manera violenta los odios y rencores latentes, contribuyó a debilitar la capacidad de consenso y represión del sistema de dominación y permitió, a su vez, el ataque, aunque fuera parcial y localizado, de los sectores de abajo contra parte de las elites, aprovechando la situación excepcionalmente débil de los mecanismos de dominación y la pérdida, al menos temporal, del monopolio de la violencia.

En las ocupaciones, motines, asaltos y ejecuciones parecía conformarse la expresión de una violencia de clase, todavía amorfa y sin programa. De igual modo, el comportamiento abusivo de las tropas federales y rurales en contra de la población civil comenzó a convertirse en un factor de simpatía, solidaridad y apoyo a los rebeldes. Desde luego, esto no significa que, aprovechando el debilitamiento de la autoridad y del orden establecido, es decir, la desaparición del poder estatal normal, no haya habido numerosos casos de ambición, venganzas, ajustes de cuentas personales y familiares que no tenían tintes de violencia de clase, ya que se trataba de disputas internas entre las propias clases medias y bajas, simpatizantes o no de los rebeldes, así como actos de bandidaje y delincuencia común, amparados en la desaparición de los controles tradicionales y la pérdida de legitimidad de las instituciones del viejo régimen.

Ocurrieron, asimismo, fenómenos de oportunismo, de incorporación a las filas vencedoras sin convicción alguna, por el simple deseo de sacar provecho personal de una situación de anarquía, etc., motivos todos que estaban lejos de ser una protesta legítima por los agravios recibidos y lejos también de estar inspirados por un ideal de justicia socialmente compartida. Es decir, hubo también violencia que no tenía motivaciones justicieras, éticas o políticas, ya que simplemente era la expresión de ambiciones y venganzas personales. De igual modo, debe considerarse que, en condiciones como las que anormalmente se estaban presentando en el Morelos de esos días, la violencia tumultuaria tendía a propagarse por contagio, imitación e histeria colectiva y se salía de cualquier control.

Sin embargo, la violencia ejercida en contra de las instituciones y parte de las elites económicas y políticas, elemento dominante en esta primera etapa de la insurrección, mostraba signos de ser una violencia de clase en su fase primaria, reivindicativa, con un incipiente programa de justicia y

reforma social y política, que se expresaba en la lucha por la tierra, por la autonomía respecto del centro y en la sustitución de autoridades locales. Ese cúmulo de acciones que dieron forma a la revuelta reflejó una serie de agravios acumulados y la posibilidad de resarcirlos, lo que se encontraba entre las mayores motivaciones de la gente que engrosó las filas rebeldes, al lado del contagio y la solidaridad inspirados por una insurrección que estaba en marcha en muchas regiones del país y que arremetía en contra de un sistema que parecía estar cuarteándose.

Otro rasgo que llama la atención, en esta primera etapa de la revuelta morelense, es que la violencia popular dirigida en contra de las haciendas no se transformaba todavía en ocupaciones permanentes de tierras y reclamos generalizados de modificación de las relaciones agrarias ni, mucho menos, en una transformación del sistema social. Fue una fase de violencia destructiva —cuyos principales objetivos eran las grandes propiedades agrarias y las casas comerciales de las diversas poblaciones— en la que las ocupaciones y reivindicaciones agrarias, aunque presentes de manera incipiente, no tenían aún el papel central que alcanzarían pocos meses después. Esto no impedía que varias comunidades campesinas de la zona confiaran todavía en que Madero, una vez que llegara al poder, cumpliría las promesas agrarias que había hecho ya desde el Plan de San Luis y los ayudaría a recuperar sus tierras y aguas o a tener acceso a otras. De igual modo, muchos de estos sectores confiaban, refugiándose en una ideología paternalista, en que el nuevo régimen castigaría los agravios e injusticias de que se sentían víctimas, los cuales habían sido causados por malos funcionarios y autoridades, y establecería un orden más justo.

Cabe mencionar también que, en algunos lugares, los hacendados lograron un mayor éxito relativo en la defensa de sus propiedades que el que tuvieron los jefes políticos en la defensa de las ciudades y poblaciones mayores. En estos casos, la relación de autoridad tradicional en las haciendas, la protección paternalista que ejercían los hacendados con sus trabajadores, la mayor seguridad que tenían éstos en relación con los campesinos libres y la legitimidad que algunos de los hacendados todavía conservaban ante los ojos de los peones residentes, trabajadores temporales, aparceros y arrendatarios tuvieron gran peso para inhibir las protestas de los diversos tipos de trabajadores que ahí residían o laboraban; así, fue notoria —por lo menos en la superficie— la pasividad de éstos ante los sucesos ocurridos durante esos meses de revuelta o bien su alineamiento detrás de sus patrones.[60] En otros lugares, por el contrario, la autoridad tradicional de los

[60] Alan Knight, "Land and Society in Revolutionary Mexico: The Destruction of the Great Haciendas", *Mexican Studies* (University of California Press), vol. 7, núm. 1, 1991, pp. 85-86; Herbert Nickel, *op. cit.*, cap. "Elementos de la economía moral...", pp. 59-60. Este comportamiento de pasividad o de apoyo de los trabajadores de las haciendas respecto a sus patrones ha si-

hacendados y administradores no era tan fuerte o se desgastó pronto y éstos fueron el centro de numerosos ataques y venganzas por parte de los peones y trabajadores residentes que aprovecharon la oleada de violencia y las incursiones periódicas de las bandas rebeldes para desquitarse de los agravios y resentimientos acumulados. Hacen falta más elementos para precisar por qué algunas haciendas conservaron una cierta legitimidad ante sus trabajadores y vecinos y por qué muchas otras no.

De manera incipiente, el movimiento rebelde y el nuevo liderazgo regional que lo encabezó mostraron su rechazo al sistema político porfiriano y su deseo de cambios políticos mediante la destitución de viejas autoridades locales y la elección de nuevas, en forma inmediata y directa, con la participación y el concurso de la población de los lugares y la presencia y el aval de los jefes rebeldes, quienes reconocieron como legítimos estos nombramientos. Esto tenía sus antecedentes en el leyvismo y en el maderismo electoral y encontraba su legitimidad en el propio Plan de San Luis, en el cual los rebeldes se apoyaron para cambiar a las autoridades locales y para reclamar el derecho de elegir a un nuevo gobernador de la entidad.

En esta primera etapa, la revuelta regional contra el sistema porfiriano se localizó en algunas partes de los valles centrales y en el norte boscoso morelenses, así como en las zonas fronterizas con Puebla y Guerrero. En las acciones reivindicativas que llevaron a cabo se expresaban los múltiples motivos de la revuelta, los cuales se inscribían en el contexto más general de muchos otros levantamientos en una vasta zona del país. La incapacidad política y militar del régimen porfiriano para contener esta ola de levantamientos no hizo más que alentarlos.

La rebelión que se produjo en dicha zona contribuyó al derrumbe del régimen porfiriano. Con el triunfo de Madero y la salida de los principales funcionarios nacionales, estatales y locales del gobierno encabezado por Díaz, el país entraba súbitamente en una nueva situación. Los líderes morelenses vieron culminar con éxito, sólo tres meses después, su decisión de sublevarse. Habían contribuido al triunfo más general de la rebelión maderista y confiaban que con ese triunfo cambiarían las cosas, para bien de ellos mismos, de sus familias y de sus seguidores. No había motivos para continuar en lucha, aunque, sin duda, muchos de los que se habían incorporado a la revuelta y conseguido posiciones de mando comenzaban a tener intereses y esperaban encontrar recompensa y reconocimiento a sus esfuerzos. Sólo restaba esperar que los nuevos gobernantes, con Madero

---

do un fenómeno más generalizado en las revueltas y rebeliones que han tenido lugar en América Latina desde el siglo XVI, como asienta John Coatsworth en su artículo "Patrones de rebelión rural en América Latina: México en una perspectiva comparativa", en Katz (comp.), *op. cit.*, t. 1, pp. 51-52.

a la cabeza, cumplieran sus promesas de hacer justicia a las comunidades despojadas de sus recursos y castigaran los abusos y malos comportamientos de las autoridades locales que las habían lastimado, sustituyendo a estos funcionarios por otros nuevos que ofrecieran mejores garantías. Para ello podían confiar, como lo habían hecho hasta entonces, en que el nuevo gobierno de Madero fuera en efecto un buen gobierno, que los atendiera, protegiera y resolviera sus problemas. No se planteaba ninguna situación más allá de eso.

Sin embargo, el saldo de los tres meses que había durado la insurrección era que, en cierta medida, las cosas ya habían comenzado a cambiar. Los rebeldes y la población que los secundó habían empezado a hacerse justicia por su propia mano: habían liberado a presos de muchas cárceles municipales, ya porque consideraban que muchos de ellos habían sido castigados injustamente, ya para obtener el apoyo de tales individuos; habían quemado documentos de los archivos, papeles en los que se encontraban las pruebas con que la justicia porfiriana los había condenado a prisión o en los que constaba el despojo legal de sus tierras y aguas. En el extremo de la violencia desatada, los fusilamientos, vejaciones y castigos corporales practicados a jefes políticos, policías, autoridades municipales, comerciantes, hacendados y empleados de hacienda, aunque fueron casos aislados y todavía no alcanzaban las proporciones que tendrían meses después, representaron la venganza de afrentas y la justicia por propia mano, ejercidas bajo la protección y el anonimato que brinda una revuelta de masas.

Todas estas acciones intentaban restablecer un equilibrio y un concepto de justicia, quizás idealizado, pero que sentían se había modificado, perdido o ignorado. Lo que ya había comenzado a cambiar tenía un peso que hacía difícil dar marcha atrás. Con el triunfo de Madero, los rebeldes esperaban que el gobierno central, junto con gobernantes y autoridades locales, restablecieran el orden, la justicia y las condiciones que impidieran la realización de esos abusos. Y, de manera muy importante, que las nuevas autoridades maderistas garantizaran que las elites económicas y políticas, a las que las acciones de los grupos rebeldes habían golpeado en esos tres meses, no quisieran desquitarse y volver a la situación anterior. Para que esto no ocurriera, los líderes morelenses quisieron ver garantías, compromisos y acciones concretas que les demostraran que nada tenían que temer, como tampoco sus subordinados ni las familias de las localidades de donde provenían. Tenía que haber nuevos y buenos gobernantes y, de manera muy importante, un espacio, dentro de la reorganización de los poderes locales y de las fuerzas de seguridad, para Zapata y para algunos de los principales dirigentes morelenses. La insurrección suriana entró así en una fase de espera y definición durante el gobierno nacional interino encabezado por Francisco León de la Barra.

CAPÍTULO III. EL INTERINATO. LA RUPTURA CON EL MADERISMO Y EL SURGIMIENTO DEL ZAPATISMO COMO MOVIMIENTO INDEPENDIENTE

Hacia fines de mayo de 1911, cuando Díaz había salido ya del país y las fuerzas maderistas y los representantes del régimen porfiriano habían negociado la formación de un gobierno de transición encabezado por Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Díaz, y acordado, al mismo tiempo, la convocatoria a elecciones nacionales para la constitución de los poderes federales, en el estado de Morelos se vivía una situación tensa.

El ejército federal se había retirado del estado en los días postreros del porfiriato. Las principales ciudades —Cuernavaca, Cuautla y Jojutla— estaban ocupadas militarmente por las fuerzas rebeldes: los hombres de Zapata controlaban Cuautla; los Figueroa, Jojutla; ambas fuerzas, una vez pactado el armisticio con el ejército federal, se habían instalado por igual en Cuernavaca. En la entidad, desde semanas atrás, no existían los poderes públicos constituidos ni las fuerzas estatales del orden; este vacío de poder institucional no había sido llenado, no se habían sustituido las viejas instituciones por otras. En la escena morelense aparecieron nuevos actores —los rebeldes zapatistas, los guerrerenses, los líderes maderistas— y continuaban los viejos —los representantes de las oligarquías regionales. Se habían retirado la alta burocracia de la administración porfirista, la mayoría de las autoridades locales, el ejército federal y parte de las fuerzas rurales, pero aún no se había definido cómo quedarían las cosas entre estos nuevos y viejos actores. El clima de incertidumbre se agudizaba con la notoria división existente en las filas de los seguidores de Zapata y las de los hermanos Figueroa, quienes controlaban sus respectivas posiciones.

Había problemas políticos y económicos que requerían urgente solución: la paz, el orden y la seguridad pública, la constitución de los poderes locales, el destino de los hombres levantados en armas, las diferencias existentes entre los principales jefes rebeldes, la relación de los grupos alzados con el poder central y con los grupos de poder regional, la normalización y buena marcha de las actividades productivas y comerciales, el abasto de la zona, el apaciguamiento de la violencia y las disputas en algunas localidades, la reparación de los destrozos cometidos en los enfrentamientos entre rebeldes y fuerzas del orden, la seguridad y las prerrogativas que reclamaban los que se habían levantado en armas, la manera

en que podrían resolverse pacíficamente las diferencias entre pueblos y haciendas, la elección de nuevas autoridades locales, etc. Todos ellos eran asuntos apremiantes que tenían que ser debatidos y definidos por los nuevos actores con capacidad de decisión: los grupos rebeldes involucrados y los líderes maderistas, quienes debían negociar entre sí y ponerse de acuerdo con las elites regionales, que, a pesar de haber sido golpeadas en la revuelta, conservaban todavía buena parte de su poder. En este complicado panorama se movieron los diferentes personajes centrales, grupos y sectores, con sus propias visiones e intereses, coincidentes o contrapuestos.

Los dirigentes maderistas, en coalición con representantes de las elites porfirianas, decidieron poner freno al carácter plebeyo que había tomado la revuelta en algunos lugares y emprendieron la desmovilización de las fuerzas insurgentes para dar garantías a las clases propietarias y a la población en general de que se retornaba al orden legal. Empero, en la entidad morelense, el desarme de los rebeldes zapatistas fue particularmente difícil pues sus líderes pusieron como condición para entregar las armas el cumplimiento de las promesas agrarias establecidas en el Plan de San Luis y una cuota de poder dentro de las instituciones y fuerzas de seguridad locales. Esas demandas agrarias y políticas implicaban una redefinición del poder regional y fueron rechazadas por una vasta coalición interclasista, compuesta por los dirigentes moderados maderistas, las elites regionales y un grupo foráneo, el clan de los Figueroa.

Al insistir en el cumplimiento de sus condiciones, los zapatistas provocaron la exasperación del gobierno interino y el temor de las clases altas de la región, los cuales recurrieron a la intervención del ejército federal en la zona; sobra decir que dicha irrupción radicalizó a los rebeldes y los puso a la defensiva. Así, en condiciones de debilidad, luego de haber sido desarmadas sus fuerzas en casi dos terceras partes, los líderes zapatistas rompieron endógenamente con Madero, después de un difícil proceso de negociaciones fallidas. Esto trajo como resultado que los zapatistas comenzaran a delinear los perfiles de su identidad como un movimiento campesino, con demandas propias y en vías de radicalización. Una nueva fase de la rebelión había iniciado, ya no contra el viejo sistema porfiriano, sino contra el nuevo régimen encabezado por Madero. Entre los factores que explican ese proceso estaban la necesidad de tierras por parte de sectores rurales marginados, el rechazo de los abusos cometidos por el ejército federal y, particularmente, el desencanto y la desilusión generados por la actitud excluyente del nuevo régimen que, lejos de reconocerlos e incorporarlos, los hizo a un lado, eligiendo una nueva alianza con las elites regionales y con los rivales de los zapatistas, proceso que sin duda catalizó la debilidad del Estado en la región. El rompimiento con Madero fue un

proceso difícil que dio continuidad a las acciones y demandas que habían tenido lugar en la rebelión contra Díaz. Ese proceso sería un paso adelante en la constitución de una identidad de clase del movimiento zapatista, desde la caída de Díaz hasta la ruptura con Madero y la formulación del Plan de Ayala en noviembre de 1911.

La reconstitución de los poderes locales: dos visiones

Los jefes maderistas continuaron sus esfuerzos para tratar de limar las asperezas entre los rebeldes de Morelos y Guerrero y para ello comisionaron a Matías Chávez y a José I. Lugo, guerrerenses ambos, como mediadores. Alfredo Robles Domínguez, principal dirigente maderista encargado de coordinar a las fuerzas rebeldes en la zona central del país, se entrevistó con ambos bandos y logró establecer un acuerdo que estipulaba la ocupación conjunta de la capital morelense y el reconocimiento mutuo de sus respectivas tropas y jurisdicciones.[1]

El ingeniero Alfredo Robles Domínguez había sido una de las personas más cercanas a Madero desde 1909. Proveniente de una familia acomodada y profesionista exitoso, se hizo partidario de la oposición democrática que trataba de impedir, hacia 1908-1909, la reelección de Díaz y el predominio de los científicos. Amigo de Rodolfo Reyes —quien era hijo del general Bernardo Reyes—, tuvo simpatías por el reyismo. Más tarde, se adhirió a la causa maderista y colaboró con Madero y sus hombres más cercanos —Francisco Cosío Robelo, Roque Estrada y Juan Sánchez Azcona— en las tareas propagandísticas y organizativas de la campaña. Robles Domínguez tuvo un papel destacado en varios de los principales documentos programáticos elaborados tanto por el Centro Antirreeleccionista Nacional como por el Partido Nacional Democrático y el Partido Nacional Antirreeleccionista, agrupaciones maderistas formadas en esos meses. Más tarde, en su calidad de hombre de toda su confianza, Madero lo nombró coordinador de la revolución en el centro y sur del país, en noviembre de 1910, pero fue aprehendido por la policía porfirista poco después. Pasó los últimos meses del porfiriato en la cárcel. Liberado

[1] AGN, FARD, t. 4, exp. 17: Manuel Asúnsolo a Alfredo Robles Domínguez, Cuernavaca, 27 de mayo de 1911, f. 33; Asúnsolo y Zapata a Alfredo Robles Domínguez, Cuernavaca, 27 de mayo, f. 35; A. Robles Domínguez a Asúnsolo, México, 28 de mayo, f. 39; J. González a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 28 de mayo, f. 42; Miranda, Asúnsolo y Zapata a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 29 de mayo, f. 56. M. Chávez a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 28 y 29 de mayo, AGN, FARD, t. 1, exp. 6, f. 74 y t. 4, exp. 17, ff. 57-58. Ramón Estrada a De la Barra, Cuernavaca, 27 de mayo, Archivo Histórico de la Universidad (CESU-UNAM), Fondo Gildardo Magaña (FGM), c. 18, exp. 4, f. 33.

por los tratados de Ciudad Juárez, volvió a desempeñar un papel relevante. Valiéndose de este ascendiente, trató de hacer las paces entre las fuerzas zapatistas y figueroistas.[2]

Sin embargo, lograr la concordia entre los dos bandos enfrentados no era tarea sencilla, pues unos y otros sentían que se habían ganado el derecho de decidir en algunos de los aspectos medulares del poder local, tales como el nombramiento del gobernador provisional y el de las autoridades políticas y militares de las principales poblaciones. Ambos grupos querían, además, ocupar la jefatura militar del estado y que sus respectivas fuerzas tuvieran el resguardo permanente de las más importantes plazas. Lo que enfrentaba a los Figueroa y a Zapata era, a final de cuentas, una disputa por el poder regional. A los dirigentes maderistas, por su parte, les resultaba apremiante imponer su autoridad, que las diferencias locales no causaran más conflictos y, sobre todo, que la pacificación y reorganización de los poderes en la entidad garantizaran el *statu quo*. Para ello era fundamental controlar y licenciar a los grupos rebeldes que habían emergido en los meses inmediatos anteriores.

Los resultados de las negociaciones emprendidas por Robles Domínguez favorecieron otra vez a los de Guerrero, pues se les dio preeminencia para resguardar las principales plazas morelenses. Las fuerzas de Zapata fueron hechas a un lado. Zapata, que se consideraba el principal jefe rebelde local, había insistido, sin éxito, en que se le permitiera nombrar gobernador. No obstante, Zapata se subordinó a la conducción maderista y estuvo presente en la junta de jefes revolucionarios que nombró como gobernador al banquero local Juan Carreón, avalando con ello dicho acuerdo.[3]

Las decisiones tomadas confirmaban la afinidad de los rebeldes de Guerrero con la dirección nacional maderista sobre la política, la economía y la pacificación del estado, el desarme de las fuerzas insurrectas y el control de la administración estatal. La dirección maderista determinó en-

[2] Véase el libro de Diego Arenas Guzmán, *Alfredo Robles Domínguez en las jornadas culminantes de la revolución*, México, INEHRM, 1974.

[3] AGN, FARD: Madero a A. Robles Domínguez, México, 27 de mayo de 1911, t. 1, exp. 5, f. 40; Abraham Martínez [jefe del estado mayor de Zapata] a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 28 de mayo, t. 4, exp., 17, f. 40; Zapata a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 28 de mayo, t. 4, exp. 17, f. 45; Juan Carreón a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 31 de mayo, t. 4, exp. 17, f. 63, carta en donde Carreón señaló que Asúnsolo, general de las tropas figueroístas, fue quien lo propuso para gobernador, y que estaba dispuesto a aceptar por patriotismo y para dar garantías a los vecinos, que estaban alarmados por los rumores de la salida de las tropas de Asúnsolo y por el temor que le tenían a las de Zapata, las cuales hicieron destrozos en varios comercios y casas de Cuernavaca; Asúnsolo a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 1 de junio, t. 4, exp. 17, f. 80; A. Martínez a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 29 de mayo, t. 1, exp. 6, f. 92; A. Robles Domínguez a A. Figueroa, México, 1 de junio, t. 4, exp. 17, f. 74.

comendar la responsabilidad política, administrativa y militar en el estado a personajes y grupos que no significaran una ruptura tan fuerte con el régimen porfiriano y que garantizaran la reanudación de las actividades productivas y comerciales con el esquema que había imperado hasta entonces.

Al nombrar al banquero Carreón como gobernador de la entidad, Madero y los Figueroa estaban cumpliendo, a su manera, con el Plan de San Luis, que establecía la sustitución de los gobernadores porfiristas; era ésta una elección significativa, ya que se hacía en consonancia con las oligarquías regionales y haciendo a un lado, en los hechos, al principal grupo rebelde local. Reflejaba una elección de clase por la nueva coalición que estaba tomando en sus manos el poder político nacional y en cada una de las regiones. Los Figueroa y sus seguidores resultaron favorecidos con esta alianza, pues se les reconocía no sólo su liderazgo en Guerrero —donde por esos días Francisco Figueroa fue nombrado gobernador y Ambrosio Figueroa, jefe militar—, sino que se les asignó un papel igualmente importante en el territorio morelense.[4] Aunque acotados, estos nombramientos significaban un cambio respecto de tiempos anteriores, cuando las oligarquías dominaban la política.

Las clases propietarias de Morelos, por su parte, hicieron sentir su peso al denunciar, oponerse y vetar que se designara jefe de armas a Zapata, a cuyas fuerzas identificaban con los ataques a la propiedad y a las vidas de las familias pudientes del estado que habían tenido lugar en las semanas anteriores. Era un veto también significativo, señal de un antagonismo que después se profundizaría mucho más. Algunas familias con recursos abandonaron la entidad en esos días y se refugiaron en la ciudad de México, pidiendo protección a los políticos maderistas.[5] La actitud de esas familias para con las fuerzas zapatistas hizo que las reservas que el maderismo abrigaba respecto de los zapatistas se acrecentaran, y que su acercamiento con los Figueroa se fortaleciera. Los zapatistas, por su parte, comenzaron a sorprenderse de que Madero y sus colaboradores prestaran oídos a esas denuncias.

Carreón tomó posesión como gobernador provisional de la entidad el 2 de junio de 1911. Se entregó a la tarea de implantar el orden y la

[4] Jacobs, *La revolución mexicana...*, *op. cit.*, pp. 113-114. La visión de los hermanos Figueroa acerca de lo que ocurría en el estado de Morelos fue sintomática. Para ellos no existía el problema agrario en la entidad, por lo que su actuación estaría enfocada a solucionar el problema político y dar garantías a los propietarios, según escribió Francisco Figueroa a Madero el 11 de noviembre de 1911. Véase Isidro Fabela (ed.), *Documentos históricos de la Revolución mexicana*, vol. XXI: *Emiliano Zapata, el Plan de Ayala y su política agraria*, México, Jus, 1970, pp. 29-30.

[5] Alfonso Díaz Marquí a A. Robles Domínguez, México, 31 de mayo de 1911, AGN, FARD, t. 4, exp. 17, ff. 65-66.

seguridad en el estado y dio garantías al sector privado de que cesarían los ataques a la propiedad. En un manifiesto al pueblo de Morelos, publicado el 3 de junio, hizo un llamado a las personas que se ausentaron del estado o retiraron sus capitales del mismo para que regresaran unos y otros, "en la inteligencia de que el gobierno de mi cargo cuenta con la fuerza militar suficiente [...] que cuidará de la vida y bienes de todos los habitantes de esta entidad federativa". Poco después, dándose cuenta del nivel de impugnación que habían provocado durante la insurrección, suprimió las jefaturas políticas, cuyas funciones serían asumidas por los presidentes municipales de los ayuntamientos. Con esta medida satisfacía una demanda muy sentida entre la gente que había apoyado la revuelta.[6]

El tercer paso, necesario y más importante aún para restituir el orden, era desarmar y desmovilizar a los rebeldes. Esta tarea no era fácil, no sólo por la resistencia de los jefes rebeldes a dejar sus armas y regresar a sus hogares, sino por la naturaleza misma de tales grupos, compuestos por una multitud de jefes locales y con una gran autonomía y dispersión. Ante los rumores que circularon acerca de desmanes de las fuerzas zapatistas, Robles Domínguez llamó la atención a Zapata para que controlara a su gente y castigara a los responsables. Zapata negaba que sus seguidores hubieran cometido tales tropelías. Sin embargo, el general Francisco Leyva, a la sazón jefe de armas de la entidad, escribió un largo informe al secretario de Guerra y Marina sobre las actividades de las bandas zapatistas durante los meses de abril y mayo de ese año, en donde las acusaba de tener un comportamiento "salvaje, inmoral, de perfidia y crueldad sanguinaria". En dicho informe detallaba la toma zapatista de Jonacatepec y Cuautla, destacando los destrozos de oficinas públicas y comercios, los ajusticiamientos, quemas de archivos y demás desórdenes realizados por dichas fuerzas.[7]

Propietarios afectados acusaron también a los zapatistas de haber cometido atropellos en la fábrica de papel San Rafael, así como en las haciendas de Santa Catalina y San Vicente, por lo cual pidieron protección a las autoridades maderistas. Las autoridades locales informaron que fuerzas

[6] AGN, FARD, t. 4, exp. 17: Zapata, Asúnsolo y Almazán a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 2 de junio de 1911, f. 90; Asúnsolo a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 2 de junio, f. 92; Abraham Martínez a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 10 de junio, f. 135; "Manifiesto del gobernador provisional del estado de Morelos" y "Decreto de supresión de las jefaturas políticas", en *Semanario Oficial del Gobierno del Estado de Morelos*, año XX, núm. 22, 10 de junio de 1911, y año XX, núm 25, 1 de julio de 1911, respectivamente.

[7] AGN, FARD, t. 4, exp. 17: A. Robles Domínguez a Zapata, México, 1 de junio de 1911, ff. 73, 76; A. Martínez a Gabriel Robles Domínguez, Cuernavaca, 1 de junio, ff. 77-78; Zapata a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 2 de junio, f. 94. El informe de Leyva se encuentra en Francisco Leyva a secretario de Guerra y Marina, 3 de junio de 1911, CESU-UNAM, FGM, c. 12, exp. 1, f. 4.

zapatistas habían asaltado Xochicalco y causado destrozos en la casa destinada a los turistas. En Puebla, varios hacendados se quejaron de las depredaciones que hacían los rebeldes, así como de los préstamos forzosos que exigían. Las fábricas textiles de Atlixco tuvieron que suspender las labores a causa de los ataques, asaltos y amenazas ocurridos en los días anteriores.[8]

Aunque es posible que las denuncias sobre el comportamiento de las fuerzas zapatistas pecaran de exageración —como después pudo comprobarse en la prensa de la época—, no se puede negar que hubo excesos y que era difícil controlar a las tropas, aunque los jefes zapatistas se lo hubieran propuesto. Existen suficientes testimonios de la violencia ejercida en contra de autoridades, funcionarios y propietarios, especialmente odiados por algunos sectores rurales marginados, que, ante la desaparición de los poderes tradicionales, explican el surgimiento de las condiciones que facilitaron la venganza de los agravios recibidos y la solución, por la fuerza, de diferencias y rencillas. Por las condiciones en que se produjeron, estos desquites en ocasiones afectaron injustamente a terceros. Por ello, es indudable que existieron temor y alarma verdaderos y fundados entre las clases pudientes, la vieja clase política, las autoridades de las estructuras militares y burocráticas, muchos de los líderes maderistas, y aun entre la población civil morelense, ante los abusos y desórdenes cometidos por las fuerzas identificadas con Zapata. De igual modo, hay evidencias del apoyo y la simpatía que despertaron los zapatistas entre amplios sectores de las clases marginadas, lo cual cristalizó en el crecimiento de las bandas rebeldes, en la extensión de su influencia y en la presión ejercida por esos sectores para que se mejorara su situación, factores que también pesaban en la reconstitución de las estructuras políticas de dominación que estaba teniendo lugar.

Así, pues, los líderes maderistas decidieron acelerar el proceso para licenciar a las fuerzas zapatistas. Alfredo Robles Domínguez giró órdenes en la primera semana de junio para que las tropas de Zapata no avanzaran

[8] AGN, FARD, t. 2, exp. 7: A. Olvera, empleado de San Rafael, a directores de la fábrica, México, 4 y 7 de junio de 1911, ff. 77, 80; José de la Macorra, gerente de San Rafael, a F. Cosío Robelo, 8 de junio, f. 90; José de la Macorra a A. Robles Domínguez, 17 de junio, f. 154; ayudante municipal de Apasco a presidente municipal de Ocuituco, Morelos, 8 de junio, f. 94; A. Robles Domínguez a José de la Macorra, 18 de junio, f. 161. AGN, FARD, t. 4, exp. 17: A. Robles Domínguez a Zapata, México, 5 de junio, f. 113; J. Paredes a R. Corona, hacienda de San Vicente, 5 de junio, f. 114; Felipe Ruiz de Velasco a A. Robles Domínguez, México, 5 de junio, f. 115. También véanse Madero a Juan Carreón, Cuernavaca, 15 de junio, AFIM, ms. 2170; AGN, Fondo Francisco I. Madero (FFM): Agustín del Pozo a Emilio Vázquez Gómez, Puebla, 2 de junio de 1912, c. 77; F. Toscano, presidente de la Cámara Agrícola Nacional, a Emilio Vázquez Gómez, Puebla, 14 de junio, c. 77; J. Díaz y otros a Emilio Vázquez Gómez, Puebla, 8 de junio, c. 77.

hacia Yautepec ni hacia Puebla, así como para impedirles su traslado a la ciudad de México y, con ello, su participación en el recibimiento multitudinario que se preparaba a Madero. Éste dio instrucciones a Robles Domínguez de que sólo se permitiera el arribo de Zapata, con su estado mayor, a la capital de la República.[9] Había entonces dos visiones y dos lógicas que fueron diferenciándose: por un lado la de Madero y los dirigentes maderistas victoriosos que, en vísperas de hacerse del poder nacional, tenían como uno de sus principales objetivos frenar la revolución y detener las energías populares reivindicatorias que habían desatado; por otro, la de los grupos de abajo, que querían seguir adelante con lo que nebulosamente comenzó a designarse como "la revolución", dando curso a reformas sociales y políticas en beneficio de sectores hasta entonces excluidos. Los jefes zapatistas querían festejar junto con Madero su entrada triunfal a la capital del país. Los líderes maderistas no los querían ahí; le tenían miedo a una parte de sus propios seguidores.

Sin embargo, las diferencias no eran todavía insalvables. Los jefes surianos no se distanciaban aún de Madero ni se veían a sí mismos como fundamentalmente diferentes del líder norteño. Zapata se trasladó entonces a la ciudad de México. Confiaba en que una entrevista directa con Madero podría solucionar favorablemente sus diferencias con los Figueroa y satisfacer las expectativas de sus seguidores. Esperaba obtener el respaldo para que Madero, sin intermediarios, reconociera la legitimidad de su movimiento y su aspiración de ser tratado como la fuerza principal en la entidad. Del mismo modo, quería poner fin a los rumores que circulaban en la prensa y en algunos sectores de la opinión pública capitalina de que sus tropas no tenían control y representaban un peligro para la seguridad y el orden en la región. Así, en los días de euforia que se vivían, se entrevistó con el líder el 7 de junio de 1911. Según Gildardo Magaña, en la reunión aparecieron por primera vez explícitamente los problemas agrarios como una de las demandas que las fuerzas zapatistas consideraban que el régimen de Madero debía atender y resolver. Éste definió su postura: ante todo debía iniciarse el desarme; la satisfacción de las demandas agrarias se haría cuando asumiera legalmente el poder.[10] Madero tenía claras las cosas: la

[9] AGN, FARD, t. 4, exp. 17: A. Robles Domínguez a Zapata, México, 2 de junio de 1911,ff. 99; Zapata a Madero, Cuernavaca, 3 de junio, ff. 103-104; Zapata a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 4 de junio, f. 110, 5 de junio, ff. 106-109; A. Robles Domínguez a Zapata, México, 5 de junio, ff. 117-118. Ernesto Madero a A. Robles Domínguez, México, 5 de junio, AGN, FARD, t. 2, exp. 7, f. 56. Zapata, su hermano Eufemio y otros jefes estaban ansiosos porque se les encomendaran responsabilidades en otros estados en donde no había fuerzas revolucionarias y así poder trasladar su ejército a la capital, cosa que alarmó a varios líderes maderistas que veían en ello una segura fuente de desmanes.

[10] Magaña, *op. cit.*, t. 1, pp. 155-161; Brunk, *op. cit.*, pp. 41-42. No se tiene información de primera mano sobre la entrevista entre Zapata y Madero y la única fuente conocida es el libro

revolución, tal como la concebía, no iba a llegar hasta allá. Las reformas políticas que creía necesarias se harían desde el poder. Zapata y los suyos lo aceptaron, por el momento.

Mientras tanto, en el estado de Morelos continuaba la incertidumbre de los propietarios por las dificultades para someter al orden a parte de las fuerzas zapatistas. Al menos en uno de los lugares ocupados por éstas se dieron conflictos agrarios, pues el coronel zapatista Francisco Mendoza dio órdenes a la población de Axochiapan para que ocuparan los terrenos de la compañía Clemente Jacques y amenazó con sus fuerzas las propiedades del rancho de Acapatzingo. Los propietarios de varios lugares se quejaron con Robles Domínguez y éste instruyó a Zapata para que no permitiera tales acciones.[11] Zapata giró órdenes en tal sentido.

A pesar de las contrariedades que había tenido con las decisiones tomadas por el centro maderista, el líder suriano siguió comportándose como un subordinado leal de Madero y continuó confiando en las promesas que reiteradamente éste le había hecho, en el sentido de que sus peticiones serían consideradas una vez que fuera restablecido el régimen constitucional. Como muestra de su subordinación y a pesar de su deseo de vengar el asesinato de Gabriel Tepepa cometido por las fuerzas de Figueroa, Zapata procedió con cautela, explicando a Robles Domínguez que si no había actuado punitivamente contra Federico Morales —el responsable directo de tal acción—, era por respeto a la autoridad de Robles Domínguez y por no haber recibido instrucciones para castigarlo.[12]

Después de la plática que Zapata sostuvo con Madero en la ciudad de México, éste decidió ir a Morelos para escuchar los puntos de vista de los personajes y grupos involucrados. Se reunió con Zapata y sus jefes, con los hacendados morelenses, con Carreón y las autoridades locales, con los Figueroa y, más tarde, fue también a Guerrero. Al parecer, las narraciones que escuchó sobre el comportamiento de los zapatistas reafirmaron su convicción de que era urgente desmovilizarlos. Los principales ha-

---

de Magaña. Por la problemática presente en esos días, es posible que el énfasis de la entrevista haya girado en torno de los problemas políticos de Zapata con los Figueroa y los reclamos de reconocimiento para sus fuerzas.

[11] AGN, FARD, t. 4, exp. 17: A. Robles Domínguez a Zapata, México, 8 de junio de 1911, f. 126, 9 de junio, f. 130; Zapata a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 9 de junio, f. 129; Lamberto Marín a Clemente Jacques y Cía., Axochiapan, 9 de junio, f. 131; para consultar, en el mismo fondo, sobre protestas de particulares contra abusos de tropas que eran o decían ser zapatistas, véase Manuel Lavín a Narciso Salazar, México, 28 de mayo de 1911, f. 37 y A. Robles Domínguez a Zapata, 28 de mayo, f. 41; y denuncia de abusos de las tropas de Almazán, jefe guerrerense y aliado de Zapata en esos momentos, contra dependientes de las fábricas de Contreras, en A. Robles Domínguez a Almazán, México, 8 de junio, f. 125.

[12] Zapata a A. Robles Domínguez, Cuernavaca, 9 de junio de 1911, AGN, FARD, t. 4, exp. 17, ff. 132-133.

cendados de la entidad, encabezados por Joaquín Aráoz y Luis García Pimentel, dueños de las haciendas de Acamilpa, Cuahuixtla y Santa Rosa Treinta Pesos, el primero, y de Santa Clara, Tenango y San Ignacio, el segundo, se reunieron con Madero para quejarse de los graves perjuicios ocasionados por los rebeldes a la industria y al comercio, "que se encontraban completamente paralizados"; todos los ingenios, según su decir, habían suspendido la zafra y varios propietarios habían tenido que abandonar el estado. Ante tal panorama, solicitaban se reprimieran los desórdenes y se les dieran seguridades.[13] Los dirigentes maderistas compartían el temor de los propietarios y de los partidarios del orden y comenzaron la desmovilización de los grupos rebeldes en diferentes partes del territorio nacional.

El licenciamiento: la disputa por el poder

El desarme de los zapatistas llevaría tiempo. Había que convencer a los jefes surianos de que no tenía caso seguir armados puesto que serían cumplidas las demandas a las que habían ido dando forma en esos meses: mayor autonomía estatal, participación de sus jefes en las fuerzas de seguridad estatales, nombramiento de un gobernador comprometido con los intereses de los rebeldes, rechazo a la injerencia y hegemonía de los fuereños en los asuntos locales, un creciente sentimiento de reivindicación agraria y una reorganización de los poderes públicos favorable para la gente común de las localidades.

Los rebeldes surianos se habían percatado de que una presión decisiva para que se cumplieran sus demandas era la posesión de sus armas y la conservación de sus milicias organizadas como tropas irregulares. Para el mando maderista, empero, tal condición era inaceptable y, previamente a cualquier arreglo, consideraban necesario el desarme. Empeñados como estaban en consolidar un poder nacional, no tenía cabida el permitir la existencia de un grupo armado regional con autonomía y con intereses y reivindicaciones propios; de ahí su vehemencia en conseguir un pronto desarme y de reinstaurar cuanto antes la institucionalidad.

Un grupo como el que seguía a Zapata representaba un serio obstáculo para la reconstitución del poder estatal y era visto como un peligro y fuente de inestabilidad para las elites económicas y políticas locales, en la medida en que se iba convirtiendo en una estructura militar y política al margen no sólo del control del Estado y de las estructuras de poder tradi-

[13] Magaña, *op. cit.*, pp. 162-166; Brunk, *Zapata...*, *op. cit.*, pp. 42-46; Aráoz, Pimentel y otros hacendados al secretario de Gobernación, *El País*, 12 de junio de 1911.

cionales, sino también del régimen de Madero. Además, ni el mismo Zapata ni los líderes rebeldes más conocidos tenían control total sobre ella. El grupo zapatista, al armarse, había roto con el monopolio estatal de la fuerza. Los nuevos dirigentes maderistas, con la lógica de todo poder, intentaban imponer su dominio y restablecer el orden jurídico y las instituciones. Había, pues, que quitarles las armas. Sin embargo, para complicar el panorama, el grupo zapatista esgrimió como condición una serie de reivindicaciones de carácter político y agrario que, al ser rechazadas por el centro maderista, volvieron muy difíciles las negociaciones. La cercanía con el Distrito Federal se convirtió en un factor adicional que actuó como caja de resonancia para los habitantes de la ciudad, los cuales se enteraron de los detalles de las negociaciones y del curso sinuoso que tomaron. Así, el desarme de los rebeldes morelenses se convirtió en un tema de discusión nacional a través de la prensa capitalina y de los grupos y líderes maderistas y opositores que debatieron ampliamente el asunto en esos días.[14]

Gabriel Robles Domínguez, persona que gozaba, como su hermano Alfredo, de la confianza de Madero, fue comisionado el 14 de junio de 1911 para llevar a cabo el licenciamiento. Se iniciaron en esos días las negociaciones y pronto se toparon con diversos obstáculos. En las semanas siguientes metieron las manos en el conflicto los sectores pudientes locales —hacendados y comerciantes—, la prensa nacional, el gobierno interino encabezado por León de la Barra, el ejército federal, el grupo figueroísta y diversos sectores de la población civil morelense, los cuales hicieron oír sus voces y participaron, en mayor o menor medida, defendiendo sus puntos de vista e intereses y afectando el curso de las negociaciones.[15]

Aunque los zapatistas veían con creciente desconfianza la coalición de intereses que se estaba fraguando en su contra, seguían confiando en que Madero los ayudaría. Éste prometió nuevamente a Zapata que, si se iniciaba el desarme, lo haría jefe de la policía rural del estado y que podría conservar a algunos de sus hombres en ella. El ofrecimiento formaba parte de una estrategia diseñada para incorporar, subordinadamente, a los cabecillas rebeldes surgidos en la etapa insurreccional en varios estados,

[14] En el estado de Puebla comenzó también por esos días el licenciamiento de los grupos rebeldes y, aunque también hubo resistencia de algunos de los líderes, como Camerino Mendoza, quien se opuso a las nuevas autoridades propuestas por los maderistas y el gobernador de esa entidad, esas resistencias no tuvieron la resonancia de las de los morelenses. Véase AGN, FFM: Rafael Cañete a Emilio Vázquez Gómez, Puebla, 16 de junio de 1912, c. 77, y Camerino Mendoza a Emilio Vázquez Gómez, Tehuacán, 16 de junio, c. 77.

[15] AGN, FARD: María Galicia a Filomena G. de Mújica, 8 de junio de 1911, t. 4, exp. 17, f. 123; Asociación de Productores de Azúcar y Alcohol al gobernador de Morelos, Cuernavaca, 12 de junio, t. 4, exp. 17, ff. 142-147; Emilio Vázquez Gómez a Madero, México, 14 de junio de 1911, t. 1, exp. 5, f. 81; Juan Pagaza a A. Robles Domínguez, México, 28 de junio, t. 1, exp. 8, f. 22. *El Imparcial*, 19 de junio de 1911.

a condición de desmovilizar al grueso de esas tropas. Sin embargo, a pesar de que a mediados de junio comenzó el licenciamiento y alcanzó pronto la cifra de 1 500 hombres desarmados, el nombramiento de Zapata como jefe de rurales nunca se concretó por presiones de los hacendados y de la prensa de la ciudad de México.[16]

A fines de ese mes, Zapata visitó otra vez la ciudad de México para hablar con Madero y desmentir los rumores de que preparaba un levantamiento. Madero le ofreció elecciones para renovar los poderes y autoridades locales y que la nueva legislatura resolviera el problema agrario. Zapata, que se iba convirtiendo en una figura nacional y en tema de ocho columnas en la prensa capitalina, en entrevista concedida al *Diario del Hogar* expresó que los hacendados de Morelos no toleraban que hubiera suprimido la esclavitud y denunció que en la entidad existían grandes propiedades que habían crecido "gracias a los despojos que han cometido y seguían cometiendo hasta hace un año con los dueños de pequeños predios". Y de manera inequívoca manifestó los términos en que él mismo y sus principales colaboradores entendían el desarme: "Vamos a dejar algunos soldados que se encarguen de vigilar el estado, seguramente serán unos trescientos; naturalmente, he querido que esos soldados estén bien armados y he cambiado las armas malas o viejas que tenían por las mejores y más modernas". Como él mismo lo percibió, dijo a su entrevistador: "Esto es lo que ha alarmado a esos señores". Zapata y sus subalternos se mantuvieron férreamente en esta actitud.[17]

Los jefes zapatistas no tenían, pues, un control riguroso del comportamiento de sus hombres. Sin tomar en cuenta el impacto negativo que tendría sobre el licenciamiento de las tropas y la opinión pública capitalina, algunos grupos rebeldes cometieron desmanes en varias haciendas y poblaciones, en acciones que luego fueron utilizadas en su contra por sus adversarios. Así, durante el mes de julio, hubo protestas de propietarios por las incursiones de tropas zapatistas en la hacienda de Chinameca, en

[16] También es posible que Madero no haya pensado cumplir esa oferta y que sólo haya tendido un señuelo para avanzar en el licenciamiento, en correspondencia con la posición que ya había tomado y de la que había dado muestras: deslindarse de las acciones zapatistas por considerarlas un obstáculo para su proyecto.

[17] Gabriel Robles Domínguez a Madero, Cuernavaca, 16 de junio de 1911, AFIM, ms. 2173, en donde le informaba que, en el primer día de licenciamiento, 730 hombres habían entregado sus armas y recibido, en promedio, veinte pesos por persona. AGN, FARD, t. 4, exp. 17: Gabriel Robles Domínguez a A. Robles Domínguez, México, 16 de junio de 1911, f. 157, y Gabriel Robles Domínguez a Zapata, México, 19 de junio, f. 160. Abraham Martínez al director de *El País*, México, 19 de junio de 1911, CESU-UNAM, FGM, c. 22, exp. 1, f. 14. El administrador de haciendas Felipe Ruiz de Velasco reconoció que, en la visita de Madero a Morelos, vetó el nombramiento de Zapata como jefe de armas (*El Imparcial*, 19 de junio de 1911; *El País*, 22 de junio de 1911; *Diario del Hogar*, 21 de junio de 1911).

el rancho Los Hornos y en el pueblo de Axochiapan. El presidente interino León de la Barra instruyó al gobernador Carreón para que reprimiera tales abusos y diera protección a las familias y los bienes de los quejosos y alertó también sobre los abusos cometidos en contra de españoles en las haciendas del estado.[18] Ante estos hechos, la desconfianza de las partes negociadoras se acrecentó y el desarme tuvo que ser suspendido.

El poder estatal, en sus diferentes instancias, no acababa aún de afirmarse. La población campesina y los grupos rebeldes continuaban parcialmente armados; las elites económicas y políticas, nacionales y locales, no habían podido aún reconstituir un verdadero poder estatal que ejerciera el monopolio de la violencia e impusiera el acatamiento de la legalidad y el respeto por las instituciones. En algunas zonas se había alterado la marcha normal de las actividades productivas. Esto creaba condiciones propicias para que, en la disputa por la reconstitución del poder estatal y la obtención de la hegemonía, en ese proceso se desarrollaran también pugnas, rencillas, rivalidades, revanchas y enfrentamientos entre jefes y bandas rebeldes, así como abusos de éstos contra la población civil; sin embargo, la tensión principal estribaba en las diferencias y dificultades que comenzaron a desarrollarse entre las instituciones del régimen porfiriano y los grupos rebeldes. Tampoco debe descartarse la actitud, a menudo provocadora, de jefes militares y autoridades del régimen porfiriano que seguían ocupando cargos importantes en el ejército y en la administración, en connivencia con familias de las elites económicas, quienes trataron de socavar la popularidad de Madero y exacerbar sus diferencias con los jefes revolucionarios locales.[19]

[18] Santos Ramos a De la Barra, Axochiapan, 10 de julio de 1911, CESU-UNAM, FGM, c. 1, exp. 2-R, doc. 70, ff. 111-113; al denunciar la violación y el secuestro de su esposa, el remitente se quejaba de los atropellos de los maderistas, que se valían de la ausencia de seguridad pública; De la Barra a Carreón, México, 20 de julio, CESU-UNAM, FGM, c. 16, exp. 3, f. 109; Carreón negó que fueran verdad las amenazas contra los empleados españoles, Carreón a De la Barra, Cuernavaca, 21 de julio, CESU-UNAM, FGM, c. 17, exp. 1, f. 8.

[19] Es ilustrativa, en este tenor, la provocación ocurrida con motivo de la visita de Madero a Puebla a mediados de julio de 1911, visita llena de rumores y confusión, que ciertos medios manejaron como un complot para asesinarlo y que dio por resultado, además de varios simpatizantes maderistas asesinados o encarcelados, que se desgastara la relación entre Madero y varios de los jefes rebeldes que lo seguían, entre ellos Zapata, cuyo secretario particular, Abraham Martínez, fue designado por las autoridades maderistas para averiguar acerca del complot; como resultado de sus pesquisas, Martínez encarceló a familiares del anterior gobernador porfirista en Puebla, así como a varios diputados locales y miembros de la elite económica y política, provocando que el ejército federal y los grupos poderosos locales respondieran violentamente y masacraran a una multitud maderista en la plaza de toros de Puebla, en una acción en la que murieron ochenta civiles. De manera significativa, Madero, a pesar de las evidencias del complot y de la matanza de sus seguidores, exculpó a los jefes del ejército federal, promovió el ascenso de los responsables de la acción —como el coronel Aureliano Blanquet, que fue nombrado general— y encarceló a los

En el ámbito nacional, además, la disputa por el poder se estaba agudizando entre los grupos maderistas partidarios del cambio y las elites porfiristas, que eran todavía poderosas y estaban representadas, tanto por el presidente interino León de la Barra y varios de sus principales ministros y gobernadores como por los altos mandos del ejército federal, quienes acrecentaron sus ataques contra Madero y sabotearon la consolidación de su poder, valiéndose para ello de la posición estratégica que tenían en la alta burocracia y la cúpula militar, así como de su influencia en parte de la prensa nacional. Como consecuencia de ello, también las elites económicas locales se organizaron y adoptaron una actitud más beligerante, al constatar que el gobierno local de Carreón era incapaz de garantizar el orden y de someter a los jefes rebeldes. La actividad de las elites del gobierno y el ejército combinó una fuerte campaña en la opinión pública nacional contra los zapatistas, con intentos de cooptar a Zapata mismo y a Patricio Leyva, ofreciéndoles la gubernatura y puestos públicos a cambio de su apoyo. Estos últimos intentos, empero, fueron en vano.[20]

En este contexto, una de las medidas que el gobierno estatal promovió para reforzar la seguridad y acelerar el desarme de los rebeldes —iniciativa que encontró eco inmediato en el centro maderista y en el gobierno provisional— fue el traslado de tropas federales a la entidad, hecho que complicó el panorama y ocasionó airadas protestas de parte de Zapata y sus seguidores, así como de poblaciones rurales; todos ellos consideraban que más que ayudar a resolver los problemas de la paz y el orden públicos, la medida los ponía en riesgo.[21]

La irrupción del ejército federal alteró el equilibrio de fuerzas regional y puso a la defensiva a los rebeldes, quienes vieron que se reanudaba la lucha en contra de las mismas instituciones y, en buena medida, en contra de las mismas personas a las que se habían enfrentado al final del porfiriato, apenas dos meses antes, sólo que ahora sus enemigos actuaban en nombre del nuevo gobierno y con el aval y el prestigio del maderismo triunfante.

---

maderistas que habían actuado contra el complot, comenzando por el mencionado Abraham Martínez. Véanse Rafael Cañete a E. Vázquez Gómez, Puebla, 9 y 18 de julio de 1911, AGN, FFM, c. 77; *Diario del Hogar*, 9-13 de julio de 1911; Vázquez Gómez, *op. cit.*, pp. 311-347 y Magaña, *op. cit.*, t. 1, pp. 209-221. Después de los sangrientos sucesos de Puebla, Madero estuvo más convencido todavía de la urgencia de acelerar el desarme de los grupos rebeldes.

[20] "Memorándum sobre la situación política...", citado, AGN, FARD, t. 7, exp. 37, f. 13.

[21] Carreón a Gabriel Robles Domínguez, Cuernavaca, 14 de julio de 1911, AGN, FARD, t. 2, exp. 8, f. 53.

Fortalecimiento conservador

Por esos días, la cúpula dirigente del maderismo sufrió una dolorosa escisión, al romper Madero, sus familiares y colaboradores más cercanos con los hermanos Emilio Vázquez Gómez, ministro de Gobernación del gobierno provisional, y Francisco Vázquez Gómez, quien había sido el compañero de fórmula de Madero en la campaña antirreeleccionista de 1910. La ruptura se vislumbraba semanas antes. Madero optó por disolver el Partido Antirreeleccionista que lo había encumbrado nacionalmente y crear uno nuevo, el Partido Constitucionalista Progresista, con el que contendería como candidato presidencial en la próxima elección de los poderes federales.[22] Aunque no puede catalogarse a los Vázquez Gómez como reformadores sociales, sostenían una línea política oportunista que pretendía hacer a un lado a los sectores porfiristas y abrir más espacios para los seguidores de Madero. Entre los simpatizantes de los Vázquez Gómez se encontraban varios líderes rebeldes e intelectuales comprometidos con las reformas sociales, por lo cual este rompimiento confirmó el predominio de la línea conservadora en las filas maderistas y fue un paso más en la subordinación del ala radical, que pugnaba por una ruptura con las elites porfirianas.[23]

En Morelos, estas disputas de la cúpula maderista no tuvieron mayor repercusión. El nombre de Zapata —sin su autorización, como aclaró poco después— apareció en un manifiesto —firmado por algunos jefes maderistas— de apoyo a los hermanos Vázquez Gómez que criticaba a

[22] Charles Cumberland, *Madero y la Revolución Mexicana*, México, Siglo XXI (3a. ed.), 1984, pp. 185-190.

[23] El ala izquierda del maderismo se expresaba en el periódico capitalino *Diario del Hogar*, cuyo fundador, Filomeno Mata, viejo luchador antiporfirista, había fallecido poco antes. En las páginas de ese diario confluyeron los antiguos exmagonistas Juan Sarabia —quien se hizo cargo de la dirección del periódico—, Antonio Díaz Soto y Gama, Antonio I. Villarreal y Jesús Flores Magón, así como Luis Cabrera, quien aprovechó esa tribuna para criticar a Madero por los compromisos que adquiría con las elites porfirianas, en artículos que desde entonces se hicieron famosos ("la revolución es la revolución"). La ideología de ese diario la expresó Juan Sarabia, quien, en polémica confrontación con Ricardo Flores Magón, escribió: "Esta revolución fue preparada por el trabajo de los viejos luchadores liberales que combatimos a la dictadura cuando Madero todavía no nacía a la vida política [...] yo no soy maderista, y los lectores del *Diario del Hogar* podrán ver que se critica a Madero por su reyismo inesperado y se censura lo que hay de censurable en el actual gobierno [...] pero no por esto niego a Madero todo mérito". En relación con la expulsión de Emilio Vázquez Gómez del gabinete, el *Diario del Hogar* protestó, argumentando que, si bien no eran partidarios de él y desconfiaban de su pasado, su actuación posterior le había valido el título de representante de la revolución en el gobierno y que había sido excluido "por los que representan la vinculación, la miedosa complacencia con el antiguo régimen y la miopía lastimosa para apreciar la actual situación política". Véase *Diario del Hogar*, 20 de julio y 3 de agosto de 1911, así como la versión de los Vázquez Gómez de esta ruptura, en Vázquez Gómez, *op. cit.*, pp. 289-310 y 349-357.

Madero por la ruptura.[24] Madero desautorizó tales protestas y alertó al presidente provisional León de la Barra para que reprimiera cualquier brote de rebeldía proveniente de los inconformes.[25] Tales protestas, empero, no pasaron a mayores. Las diferencias y los rencores que se produjeron en el seno del grupo maderista por el enfrentamiento entre la línea más conservadora y la más reformista, de los cuales era síntoma esta ruptura, permanecieron latentes, sin embargo, en varios personajes cercanos al maderismo y poco después reaparecerían en pugnas políticas y enfrentamientos que continuaron desgajando la coalición maderista inicial.

El reacomodo interno debilitó esa coalición y esto fue aprovechado por las elites políticas y económicas vinculadas con el porfiriato para ganar posiciones, endurecer sus planteamientos y conservar sus privilegios. De este modo, los sectores porfiristas, encabezados por el presidente provisional León de la Barra y varios ministros conservadores, y un sector del ejército consiguieron acelerar el desarme de las fuerzas rebeldes en varias entidades del país. Madero comenzó a hacer una constante de sus pronunciamientos y compromisos con los representantes del gobierno porfiriano y a distanciarse cada vez más de sus simpatizantes radicales.[26]

[24] En dicha comunicación, firmada por los generales Gabriel Hernández y Cándido Navarro, en donde, por poder, aparecieron las firmas de Juan Andrew Almazán, Emiliano Zapata, A.M. Azueta, Guillermo García Aragón, Camerino Mendoza, P.A. Martínez, Jesús H. Salgado y Francisco J. Múgica, exigían a León de la Barra el cumplimiento del Plan de San Luis, la expulsión de los científicos de la administración, el nombramiento de un general revolucionario como inspector de las fuerzas insurgentes y el sostenimiento de Emilio Vázquez Gómez "por ser el representante genuino de la revolución". Véase Archivo Histórico de Condumex (AHC), Fondo Jenaro Amezcua (FJA), fondo VIII-2, carpeta 1, leg. 29. Zapata envió una protesta a varios diarios capitalinos en la que denunció que su nombre había sido utilizado arbitrariamente por Manuel Linares y que él no conoció ni suscribió tal documento, reiterando que era fiel a Madero. Véase Zapata a ministro de Gobernación, Ayala, 5 de agosto de 1911, en Fabela, *op. cit.*, p. 13.

[25] CESU-UNAM, FGM: De la Barra a Madero, México, 19 y 21 de julio de 1911, c. 13, exp. 4, ff. 79, 186; Madero a De la Barra, San Lorenzo, 25 de julio, c. 17, exp. 7, f. 4, 27 de julio, f. 11; Madero a Emilio Vázquez Gómez, San Lorenzo, 25 de julio, c. 17, exp. 5-6, ff. 8, 11; Madero a De la Barra, San Lorenzo, 2 de agosto de 1911, c. 17, exps. 5-6, f. 18. Los Figueroa también se sumaron a las protestas por la salida de los Vázquez Gómez del gabinete; véase Rómulo Figueroa y varios más a De la Barra, Iguala, 3 de agosto, CESU-UNAM, FGM, c. 15, exp. 3, f. 1.

[26] Madero se reunió con Bernardo Reyes, a quien consideraba su principal rival, y llegaron al acuerdo de respetarse y realizar cada quien una campaña democrática para la presidencia; ambos se comprometieron a que el que saliera derrotado colaboraría con el ganador. Madero incluso ofreció a Reyes un ministerio que éste rechazó; de igual modo, Ernesto Madero rechazó la oferta de Reyes de hacerlo vicepresidente si ganaba la elección; véase Madero y Reyes a De la Barra, San Lorenzo, 2 de agosto de 1911, CESU-UNAM, FGM, c. 18, exp. 2, f. 11. El papel de Reyes y, más que de él mismo, del reyismo había cambiado significativamente en un año, pues de haber sido un movimiento opositor democrático de clases medias urbanas se había convertido en la bandera de aglutinamiento de un sector de las elites porfirianas más conservadoras que querían desactivar lo más pronto posible la revolución maderista y volver al estado de cosas anterior. Los intentos

En el caso de Morelos, las elites porfirianas avanzaron más en la imposición de sus condiciones.

Con el fin de reanudar el desarme y a la vez mostrar a Madero que debía emplearse una mano más firme para someter a los inconformes, el gobierno provisional decidió la incursión en Morelos de una fuerte columna federal, al mando de Victoriano Huerta, quien comenzó su marcha el 9 de agosto de 1911.[27] La decisión de enviar tropas federales al mando de uno de los principales jefes del ejército porfiriano y seguidor de Bernardo Reyes contó con la aquiescencia de Madero. Esa medida calentó el ambiente político y, no bien había ingresado en Morelos la columna federal, se produjo un enfrentamiento adelante de Tres Marías. Para calmar los ánimos que esa maniobra a todas luces ofensiva pudiera causar, Madero decidió trasladarse a Morelos, junto con su hermano Raúl, Eduardo Hay y los hermanos Robles Domínguez, con el fin de entablar negociaciones directas con los jefes zapatistas. El gobernador Carreón se vio obligado a suspender las elecciones locales que debían realizarse a mediados de ese mes.[28]

Desde diferentes perspectivas, León de la Barra, Madero y los jefes del ejército federal coincidieron en la necesidad de defender el *statu quo* por los medios que fueran necesarios. Desde el punto de vista de los representantes del viejo orden porfiriano, encabezados por León de la Barra, era una cuestión vital reafirmar el poder del Estado nacional. La simple existencia de fuerzas rebeldes irregulares era una anormalidad inaceptable, máxime si tal fuerza estaba localizada en una zona geográfica estratégica, por su cercanía al Distrito Federal, y por la importancia económica que tenía la industria azucarera. En tal virtud, el gobierno provisional comprendió el problema desde el principio y diseñó una decidida estrategia de presión militar, mediante avances y ocupaciones del ejército sobre el territorio morelense que obligaran a los rebeldes a aceptar una rendición incondicional o a insubordinarse.[29]

---

de Madero por llegar a un acuerdo con Reyes no sólo muestran el afán de tenerlo cerca para controlarlo, también ilustran el interés netamente conservador de un sector importante del maderismo que tenía confluencia de intereses con lo que significaba social y políticamente el reyismo.

[27] La incursión federal sorprendió a los jefes zapatistas y a Zapata mismo, quien acababa de contraer matrimonio y tenía intenciones, como lo había expresado en ocasiones anteriores, de retirarse a la vida privada.

[28] *Diario del Hogar*, 10-15 de agosto de 1911. Madero declaró que la incursión de la columna federal tenía como objetivo mantener y vigilar el orden en la entidad, una vez que terminara el licenciamiento de los zapatistas, y dijo también que carecían de fundamento las noticias de que Zapata se había insurreccionado. Después del enfrentamiento en Tres Marías, empero, la prensa capitalina publicó que era intención de las tropas federales atacar a los zapatistas si no efectuaban el desarme. Véase la suspensión del proceso electoral en CESU-UNAM, FGM, c. 6, e. v-2, f. 52.

[29] Desde sus primeras instrucciones, León de la Barra ordenó a Huerta no detenerse hasta

El ejército porfiriano, por conducto de Huerta, intentaba ocupar un primer plano en la escena política nacional. Lo fortalecía intervenir en el amago a uno de los principales grupos rebeldes armados y en la desmovilización del mismo, pues lo consideraba un enemigo irreconciliable y en él esperaba vengar la afrenta que había significado la salida del gobierno porfiriano; los surianos, además, estaban inquietando a la opinión pública capitalina y reducirlos al orden significaba debilitar aún más la fuerza del maderismo y prestigiarse ante las elites. La institución castrense se fortalecería con hombres, armas y presupuesto e incrementaría su capital político mediante el establecimiento de alianzas con las clases altas y medias, apareciendo ante ellas como la única garantía del orden y la seguridad y demostrando, al mismo tiempo, la incapacidad de Madero y sus colaboradores. Paralelamente, el ejército minaba conscientemente uno de los principales sostenes populares del maderismo, pues los rebeldes morelenses eran un grupo surgido de abajo y con una importante base popular. Una situación de guerra como la que entonces parecía gestarse, en condiciones de desigualdad favorables al ejército federal, sólo podía convenir a los sectores civiles más reaccionarios del país y al ejército.

Para Madero y los líderes maderistas era imprescindible desactivar la movilización popular que tuvo lugar en los meses finales del porfiriato. Esa movilización, encabezada por líderes locales sobre los que sólo tenían control formal, y la existencia de fuerzas irregulares rebeldes representaban un obstáculo para la realización de su proyecto de transición democrática y de desarrollo económico sobre relaciones políticas más modernas, respetando muchos de los privilegios y desigualdades que habían imperado hasta entonces, de los cuales eran parte y con los que se sentían identificados Madero mismo, su familia y varios de sus más cercanos colaboradores.[30]

Los aliados potenciales de Madero para llevar a cabo ese proyecto, es decir, las clases medias urbanas, una burguesía industrial, comercial y financiera progresista y los sectores modernos de trabajadores asalariados —que se habían movilizado ampliamente durante la etapa antirreeleccionista del maderismo y habían participado también, aunque en mucho menor medida, en la lucha armada—, estaban desmovilizados y se encontraban, por el momento, fuera de la escena política. Por otra parte, los líderes maderistas ignoraban de manera consciente a los campesinos, sector cuya movilización había sido el soporte real y decisivo de la rebelión maderista y la causa directa de la caída de Díaz. Para reforzar el control

---

lograr la rendición incondicional de Zapata; véase De la Barra a Huerta, México, 10 de agosto de 1911, CESU-UNAM, FGM, c. 15, exp. 1, f. 34.

[30] Knight, *The Mexican Revolution*, *op. cit.*, t. 1, pp. 221, 231-233.

de la nación y desactivar las características plebeyas de la rebelión, el maderismo estaba desarmando al grueso de esas tropas, cooptando a algunos de sus dirigentes, recurriendo al ejército federal para obligarlos a pacificarse y prometiendo que cumpliría algunas de sus demandas una vez que se restableciera el orden constitucional. Lo significativo, sin embargo, era que Madero había debilitado conscientemente los vínculos con las clases, sectores, grupos y líderes que lo habían llevado al poder y que deberían haber sido la principal base de apoyo para su gobierno.

Con la división en sus propias filas, el enfoque exclusivamente político de Madero sobre los problemas nacionales, su negativa para encauzar la solución de las demandas populares sobre la tierra, el trabajo y los salarios, y su afán de dar garantías a las clases propietarias y desmovilizar a las bandas rebeldes, los principales soportes reales del maderismo y de su proyecto modernizador reformista eran, paradójicamente, las clases conservadoras y las instituciones más sólidas del porfiriato que, desde luego, no lo veían con buenos ojos ni confiaban en él: el ejército, la burocracia, la prensa, las elites económicas y políticas. El apoyo de estos sectores era, en el mejor de los casos, limitado, condicionado y temporal, en tanto Madero les sirviera.[31]

La postura centrista y conservadora de Madero y sus principales colaboradores, los compromisos adquiridos por éstos con las elites porfirianas y la actuación del gobierno provisional fueron enajenando rápidamente el apoyo del ala radical de su movimiento. En el ámbito local, los conflictos por la centralización, la subordinación y el desarme de las tropas irregulares estatales que se habían formado durante la insurrección y los pronunciamientos de Madero en contra de esas fuerzas y en favor de las elites regionales minaron también el apoyo que había recibido de los sectores de clases medias y populares más radicales semanas atrás. Así, la coalición maderista que había derrotado a Díaz mostró desde el comienzo su debilidad, al estar entre dos fuegos, sin capacidad de maniobra, más desconfiada de los sectores radicales que de los conservadores e inclinándose aceleradamente hacia éstos. Los conservadores aprovecharon estas condiciones para reorganizarse y pasar a la ofensiva. Los líderes maderistas, a su vez partidarios convencidos del civilismo y la institucionalidad, en su

[31] Knight tiene razón al enfatizar que, si bien familias enteras de las elites económicas y políticas porfirianas se pasaron de manera oportunista a última hora del lado de los revolucionarios maderistas, las clases propietarias, en su mayoría, permanecieron fieles al viejo orden e hicieron lo posible por sostenerlo y oponerse a los cambios. El apoyo parcial y la alianza que hicieron estas elites con Madero eran indicativos del carácter moderado del movimiento y de los líderes maderistas; véase *ibid.*, pp. 234-237. Hace falta un estudio sobre el papel de la Iglesia, institución fundamental para entender el tejido social de la época y su actuación en el contexto regional ante todos estos acontecimientos.

defensa de la razón de Estado fueron atrapados por una inercia guerrerista que provocó una redefinición de los equilibrios entre las clases y los grupos organizados que estaban en la escena y que terminarían por volverse en su contra.

Militarización del estado de Morelos

Este juego de fuerzas e intereses repercutió directamente en el estado de Morelos, donde se formó una fuerte coalición de intereses —integrada por los propietarios azucareros, los grandes comerciantes, la clase política local,[32] el ejército federal, sectores de la clase media maderista y la clase política porfirista— que presionó al maderismo y lo orilló a adoptar una posición de fuerza ante los rebeldes.

Empero, el desarme de las tropas zapatistas se complicó. Las reservas que habían mostrado ante los intentos del centro maderista para subordinarlos y hacerlos a un lado se agudizaron con la presencia de las tropas federales. Zapata acusó al gobernador Carreón de ser el responsable de la anarquía que reinaba en el estado y de atropellar la soberanía de la entidad al pedir la intervención del ejército federal.[33]

Huerta, quien contaba con el apoyo incondicional del gobierno provisional y del ejército, pronto consiguió la subordinación de Carreón y éste procedió a entregarle todas las armas y la logística que poseía el gobierno estatal.[34] Con el objeto de aislar a los zapatistas, Huerta y el gobierno provisional trataron de comprometer a los Figueroa en la campaña del ejército federal. Sin embargo, los Figueroa tomaron distancia en el asunto, rehusaron obedecer a Huerta e, incluso, iniciaron un acercamiento con Zapata para tratar de sumar fuerzas y sacar al ejército federal de la entidad.[35]

[32] En la cual estaban incluidos no sólo los caciques y notables tradicionales que habían formado parte de la clase política porfirista local, sino, incluso, también políticos reformistas como la familia Leyva, que se encontraba ahora aliada a Madero, así como figuras locales que se habían destacado en el leyvismo, como Antonio Sedano y otros más, quienes aplaudieron la incursión del ejército federal para someter a los zapatistas.

[33] Huerta a De la Barra, 11 de agosto de 1911, CESU-UNAM, FGM, c. 15, exp. 1, f. 33.

[34] CESU-UNAM, FGM: Huerta a De la Barra, Cuernavaca, 11 de agosto de 1911, c. 15, exp. 1, f. 25; De la Barra a Huerta, México, 11 de agosto, c. 19, exp. 6, ff. 1-2.

[35] Cuando Madero estuvo de acuerdo con el avance del ejército federal sobre Morelos, al mismo tiempo ofreció la gubernatura a Ambrosio Figueroa, encomendándole que pusiera en orden a Zapata, quien le estaba causando demasiadas dificultades. Sin embargo, Figueroa, que conocía la situación local mejor que Madero, rechazó la oferta, argumentando que causaría más problemas y que no era el momento de dividir a los revolucionarios, sino de hacer frente común contra los reyistas —en directa alusión a Huerta—, pues, de lo contrario, los maderistas se es-

A pesar de las diferencias y pugnas por el poder local con los zapatistas y de sus alianzas con las clases pudientes morelenses, a los Figueroa no les convenía el fortalecimiento del ejército federal en Morelos porque alteraba los equilibrios entre los grupos regionales y los hacía a un lado de la escena; esta irrupción, además, en caso de una situación de guerra, tendría repercusiones nacionales y pondría en riesgo el proyecto maderista, que compartían en lo general. Sin embargo, los Figueroa tampoco podían aliarse abiertamente con Zapata, ni siquiera ante la amenaza de un agente externo poderoso y enemigo común como lo era el ejército federal. Prefirieron, pues, esperar y que el tiempo fuera despejando el panorama o que se definiera el enfrentamiento entre federales y zapatistas. Huerta consiguió que el gobierno federal destinara más recursos para emprender una campaña en toda forma contra los zapatistas, sin la participación de los Figueroa. En la segunda semana de agosto de 1911, el territorio morelense se encontraba completamente militarizado.[36]

La presencia del ejército federal puso en guardia a los zapatistas y éstos suspendieron el desarme; la ruptura de hostilidades parecía inminente. Madero se percató de la gravedad del asunto y decidió trasladarse al territorio morelense y utilizar el prestigio que aún conservaba como jefe de la revolución para lograr la pacificación del estado y el desarme de las tropas rebeldes. El 13 de agosto arribó a Morelos y habló por teléfono con Zapata, sin llegar a acuerdo alguno. Zapata había endurecido su postura, por lo que Madero decidió regresar a la capital para tratar de convencer a León de la Barra que impidiera el avance de las tropas federales. Madero, empero, no era tan ingenuo para creer que no había diferencias fuertes entre él y los surianos, ni que sería fácil convencerlos del licenciamiento. Ya en esos días pensaba que, de no fructificar las negociaciones con Zapata para el desarme de sus tropas, convenía tenerlas reunidas para acabar con ellas más fácilmente.

---

tarían suicidando. De manera significativa cuestionó a Madero por permitir la invasión de Morelos por el ejército federal e indicó que Huerta podría convertirse en un peligro mayor que Zapata. Véase A. Figueroa a Madero, Chilpancingo, 18 de agosto de 1911, AHC, FJA, VIII-2, carp. 1, leg. 37; también CESU-UNAM, FGM, Carreón a De la Barra, Cuernavaca, 11 de agosto de 1911, c. 15, exp. 1, f. 29; Huerta a De la Barra, Cuernavaca, 13 de agosto, c. 15, exp. 1, ff. 52-53 y c. 17, exp. 11, f. 2. Huerta, que supo de esta postura, señaló a León de la Barra que debían desconfiar de los Figueroa. Otra de las posibilidades en las que había pensado Madero era ofrecer a Pascual Orozco la gubernatura de Morelos, por el ascendiente que éste tenía sobre aquél por ser uno de los principales jefes revolucionarios norteños y, al mismo tiempo, para alejarlo de su terruño.

[36] Arturo Langle Ramírez, *Huerta contra Zapata: una campaña desigual*, México, IIH-UNAM (2a. ed.), 1984, p. 20.

Las condiciones para el desarme: el inicio de una identidad

Los zapatistas hicieron públicas sus demandas: respeto a la soberanía estatal; separación del gobernador Carreón ("por ser incapaz de gobernar, por pertenecer al partido científico, por haber sido nombrado por personas que no son del estado, por no haberse consultado con la voluntad del pueblo para ese encargo, ni siquiera la opinión de los principales jefes revolucionarios de este estado, y ser este funcionario enteramente impopular"); nombramiento de un gobernador de acuerdo con las aspiraciones del pueblo y de los jefes zapatistas; salida del ejército federal del estado, y nombramiento de autoridades y empleados por la voluntad de los pueblos para hacer a un lado a los porfiristas, científicos y caciques que hasta entonces los habían gobernado ("que las autoridades y empleados con quienes no estén conformes los pueblos, sean designados conforme a la voluntad de los mismos pueblos, porque muchos de ellos protestan contra la imposición forzosa de autoridades que pertenecen a la administración porfirista y a los científicos y, naturalmente, compuestas su mayor parte por caciques, hombres déspotas y crueles, ejercen represalias que los exasperan y provocan su malestar"). Sólo en esas condiciones aceptarían el licenciamiento de sus tropas, de las cuales, no obstante, deberían salir las fuerzas de seguridad pública estatal; la nueva legislatura local debería dedicarse a resolver el problema agrario.[37]

Los surianos pusieron el acento en la cuestión política: el gobierno estatal y las autoridades locales deberían ser electos no sólo por los jefes revolucionarios, como establecía el Plan de San Luis, sino por los pueblos. Con ello daban un paso más allá de lo que planteaba el maderismo. Todavía más; con el énfasis en la solución del problema agrario para aceptar el desarme, los zapatistas reivindicaban el famoso artículo 3º del Plan de San Luis, tal como ellos lo entendían y por lo cual se diferenciaban notoriamente de los otros grupos rebeldes maderistas que por esos días también estaban deponiendo las armas. La satisfacción de esta demanda estaba estrechamente vinculada con el problema del poder. Los alzados exigían que el ejercicio de éste satisficiera, en primera instancia, las aspiraciones de los pueblos. Los rebeldes, que se reconocían a sí mismos como revolucionarios, deberían participar, junto con los pueblos, en la designación del gobernador y demás autoridades locales; este gobierno, a su vez, debería cumplir con las "aspiraciones revolucionarias", que hasta esos momentos se expresaban en una serie de reivindicaciones agrarias y en la

[37] "Condiciones de Zapata para el licenciamiento", *Nueva Era*, 16 de agosto de 1911, en donde los zapatistas reafirmaron su reconocimiento a Madero y al gobierno provisional. CESU-UNAM, FGM: Madero a De la Barra, Cuernavaca, 11 de agosto de 1911, c. 15, exp. 1, f. 27; Madero a De la Barra, Cuernavaca, 13 de agosto, ff. 63-65 y c. 17, exp. 8, f. 14.

exigencia de un gobierno que garantizara condiciones de vida dignas y de mayor justicia y equidad para los sectores excluidos. Desde su perspectiva, el poder público debería satisfacer las necesidades de las clases marginadas.

Los zapatistas eran conscientes de la fuerza que les daba la posesión de sus armas para conseguir sus propósitos, y deponerlas no estaba entre sus planes. Así lo había expresado Zapata. Sólo se desarmarían si una parte de sus fuerzas conservaba las armas y era incorporada a las fuerzas de seguridad estatales, si el jefe de las mismas era una persona de probados principios revolucionarios, si el ejército federal salía de la entidad y si se cumplían sus demandas políticas.

El fracaso de las negociaciones

Madero no podía dar cumplimiento a estas peticiones sin modificar la estructura de poder regional y las relaciones entre el centro y esa entidad y, en el fondo, el *statu quo* prevaleciente. Repartir la tierra entre las comunidades de Morelos que la reclamaban significaba despojar a los grandes propietarios del control que tenían sobre la mayor parte de las tierras fértiles e irrigadas. Abrir espacios en las estructuras del poder público a los grupos excluidos hasta entonces ponía en riesgo el sistema de privilegios económicos alcanzados por las elites al amparo de las políticas estatales. Madero no sólo no podía ver con simpatía esas peticiones, sino que comprendía que apuntaban en una dirección distinta de las reformas políticas con las que pretendía remozar el sistema y las instituciones nacionales, en un proceso controlado por las elites económicas, políticas y culturales y que, por lo mismo, no se planteaba alterar la estructura de la propiedad y la dominación prevalecientes, tanto en el contexto nacional como en las distintas regiones.

Al margen de sus intenciones y de las promesas que pudiera hacer, Madero no quería ni podía satisfacerlas. Pero tampoco podía combatirlas todavía. Menos aún cuando en el seno del maderismo la postura zapatista estaba provocando más divisiones entre conservadores y radicales, pues en esos días comenzó a expresarse una opinión favorable a la causa zapatista no sólo en el *Diario del Hogar*, sino también en el principal periódico maderista, *Nueva Era,* dirigido por Juan Sánchez Azcona, cuyo editorial del 17 de agosto de ese año expresó: "Zapata no pide imposibles ni se extralimita en sus anhelos de revolucionario sincero. Zapata entró a la revolución por ideales y si Zapata no cree que debe deponer las armas todavía es porque Zapata palpa que aún no han cesado las causas que motivaron la revolución". El periódico coincidía con los zapatistas cuando afirmaba que en Morelos existía un grave problema agrario y que Zapata

tenía razón en protestar por ello, "porque cree que la Revolución tiene que modificar el estado social y no sólo cambiar gobierno".[38]

Como se observa, el zapatismo empezaba a convertirse en un polo de atracción para sectores de las clases medias urbanas y de la intelectualidad progresista del maderismo, los cuales aspiraban a que la remoción de Díaz se tradujera en mejoras para las clases desposeídas y no fuera solamente un cambio de fachada. A estos sectores, el zapatismo les servía como elemento de justificación para presionar a Madero en el cumplimiento de las reformas sociales y para deslindarse de los compromisos con las viejas clases propietarias. El zapatismo era un aliado para ellos en tanto les proporcionaba una justificación ideológica y un ejemplo en la medida en que constituía un movimiento de masas campesinas que demandaba la restitución de sus tierras, siempre y cuando no estallara las hostilidades ni se radicalizara, pues en tal caso el miedo inspirado por su carácter plebeyo haría que buena parte de los sectores medios se alineara con Madero, con

[38] *Nueva Era*, 17 de agosto de 1911. El corresponsal del *Diario del Hogar* en Morelos Enrique Bonilla dio en varias ocasiones testimonio de la simpatía y el respaldo que tenía Zapata en la mayoría de la población morelense y denunció igualmente las maniobras de Huerta que estaban dando al traste con la negociación. Antonio Díaz Soto y Gama, pionero del movimiento liberal de principios de siglo y viejo compañero de Sarabia, Villarreal y los Flores Magón, quien también jugaría un papel muy importante en la oposición de izquierda en el maderismo y el huertismo y que, a partir de 1914, se convertiría en uno de los principales ideólogos del zapatismo, escribió un editorial en el *Diario del Hogar*, el 22 de agosto de ese año, en el que criticaba la designación de Huerta y de Blanquet como jefes de la campaña en Morelos, por su reyismo y sus vínculos con el antiguo régimen, y sostuvo que revelaban la imprudencia y parcialidad del presidente interino para impedir una negociación pacífica. La simpatía de Bonilla y de Soto y Gama por el zapatismo se convirtió en compromiso militante poco después. La postura de Sánchez Azcona, persona cercana a Madero que no compartía las posiciones conservadoras del maderismo, era muy significativa, pues Madero había asignado al periódico *Nueva Era* un papel preponderante. El 22 de julio de ese año, en plena tormenta política entre los Vázquez Gómez y el gobierno provisional, Madero había escrito a Francisco Vázquez Gómez, a propósito de los ataques cada vez más abiertos que recibía en la prensa, que consideraba conveniente que tal cosa ocurriera porque de ese modo conocía el modo de pensar y los nombres de sus enemigos. Para contrarrestar esas opiniones, confiaba en que el periódico *Nueva Era* sería suficiente "para encauzar perfectamente la opinión" (véase Vázquez Gómez, *op. cit.*, pp. 353-355). Ese periódico reflejaba, empero, la postura de las gentes más cercanas a Madero que no estaban comprometidas con sus familiares ni con las elites políticas y económicas y reflejaba a veces la conciencia crítica de esta ala del maderismo. Las incipientes simpatías de Sánchez Azcona por el zapatismo, además de servirle para presionar a Madero y contener los compromisos de éste con el gobierno provisional y el ejército, en los que veía un serio peligro, fueron enfriándose en las semanas siguientes, a medida que las diferencias entre el maderismo y el zapatismo se fueron agudizando y, sobre todo, por la radicalización zapatista y algunos actos terroristas que definitivamente le enajenaron el apoyo de este sector encabezado por Azcona. El maderismo, además, logró cerrar filas y contuvo las voces disidentes con el argumento de no hacerle el juego a la reacción conservadora que se estaba orquestando de manera visible. Los editoriales de *Nueva Era* se fueron haciendo más neutrales y, poco después, abiertamente antizapatistas.

quien tenía afinidad de clase. Los más radicales se fueron separando de Madero y algunos de ellos, incluso, después del golpe militar que puso fin al maderismo, se incorporaron a las fuerzas de Zapata.

Por razones de Estado, para León de la Barra y los altos mandos del ejército, la postura zapatista era una rebelión y debían aniquilarla. Todas sus acciones y maniobras fueron en esa dirección. Por ello, las negociaciones que entabló Madero con los zapatistas estaban condenadas desde el principio a no ser otra cosa que un paréntesis de promesas, tanteos y acuerdos formales, sin que, en el fondo, ninguno de los participantes tuviera que renunciar a sus respectivas pretensiones, todo lo cual sólo postergaría el momento de la definición y el estallido final. No obstante, los negociadores maderistas y zapatistas se reunieron con disposición y deseos de encontrar un arreglo. Pero el problema de fondo era la disputa por el poder, por ver quién imponía sus condiciones. Así, el curso de los acontecimientos, los intereses de las fuerzas que estaban en disputa y las propias visiones y posturas de ambos terminaron por enfrentarlos. A pesar de todo, tanto Madero como Zapata y los suyos confiaban en que podían llegar a un arreglo. A ambos les convenía, además, establecer una alianza, aunque fuera temporal, y quizás éste era el verdadero motivo de las negociaciones acerca del desarme.

Tal eventualidad, desde luego, contravenía los intereses del gobierno federal, de los altos mandos del ejército y de las elites morelenses. Por ello, el presidente interino León de la Barra y Victoriano Huerta realizaron conscientemente una campaña de obstrucción y sabotaje que dio al traste con los acuerdos alcanzados por Madero y Zapata. Este sabotaje ha sido ampliamente documentado y comentado por diferentes investigadores de la revolución y aparece claramente en las fuentes primarias. En esas comunicaciones, León de la Barra expresó claramente que no confiaba en que las negociaciones pudieran dar resultados favorables para el gobierno. Consideraba que eran concesiones sin sentido, que sólo darían más tiempo a los alzados para crecer y que el prestigio del gobierno estaría en entredicho. Huerta, igualmente, era partidario de una solución de fuerza desde el primer momento.[39]

A mediados de agosto, León de la Barra sugirió a Madero que hiciera un ofrecimiento a Zapata: una vez concluido el desarme, se tomaría en cuenta su opinión para la designación del gobernador de la entidad. El

[39] CESU-UNAM, FGM: Huerta a De la Barra, Cuernavaca, 15 de agosto de 1911, c. 14, exp. 3, ff. 3, 4; Carreón a De la Barra, Cuernavaca, 15 de agosto, c. 14, exp. 3, f. 10; De la Barra a Huerta, México, 15 de agosto, c. 14, exp. 4, f. 21; Huerta a De la Barra, Cuernavaca, 15 de agosto, c. 16, exp. 1, f. 24; De la Barra a Madero, México, 15 de agosto, c. 17, exp. 8, f. 13. Todo el expediente 11 de la caja 17 contiene la mayor parte de los telegramas y comunicaciones cruzados entre los actores centrales de este episodio.

gobernador Carreón presentó su renuncia —que no le fue aceptada—, argumentando que su misión pacificadora había fracasado y que se rehusaba a ser utilizado como pretexto para continuar con la anarquía. Mientras Madero, León de la Barra y Zapata sostenían comunicaciones telegráficas sobre el desarme, se ordenó a Huerta que suspendiera su avance; sin embargo, éste, haciendo caso omiso de las instrucciones, continuó la marcha de su columna sobre Yautepec.[40]

Ante el avance federal, Zapata tenía motivos suficientes para sentirse engañado, por lo cual, el 17 de agosto, escribió a León de la Barra que si había derramamiento de sangre no sería responsabilidad suya, sino de la gente que trataba de asesinar los principios proclamados por el mismo Madero. En telegrama a Madero acusó a los hacendados de ser los causantes de todos los problemas, para seguir teniendo al pueblo esclavizado; con ese fin, dijo, intrigaban con el gobierno para asesinar a los zapatistas. Confiaba todavía en Madero y en que éste usaría su influencia para satisfacer las peticiones que le habían hecho, entre las cuales la salida de las tropas federales del estado se había vuelto una demanda central.[41]

El agravamiento de las tensiones hizo que Madero decidiera salir otra vez para Morelos e intentara reunirse con Zapata. Éste le comunicó que lo recibiría en Cuautla. Sin embargo, la escolta que envió Zapata a recoger a Madero fue interceptada por Huerta, quien no los dejó pasar y los persiguió hasta Yautepec. Ahí se libró un fuerte combate entre ambas fuerzas, en el que perdieron la vida siete zapatistas y tres soldados federales.[42] Madero finalmente pudo reunirse con Zapata y los principales jefes surianos en Cuautla el 18 de agosto. En esa reunión volvió a ofrecer seguridades a los zapatistas de que serían cumplidas sus demandas y que nombraría de común acuerdo con ellos al gobernador y al jefe de armas de la entidad. Igualmente, ofreció respetar la integración de una parte de las fuerzas zapatistas como fuerzas rurales locales. Madero creía que si se efectuaba el desarme y se garantizaba el orden y la pacificación del estado, no sería necesaria la presencia del ejército federal en el territorio morelense. En un mitin efectuado en el zócalo de Cuautla, ante 5 000 personas, Madero expresó que las falsas noticias que circulaban en la prensa de la ciudad de México acerca de la insubordinación zapatista eran obra de los

[40] CESU-UNAM, FGM, Madero a Zapata, México, 16 de agosto de 1911, c. 14, exp. 3, f. 43; Carreón a De la Barra, Cuernavaca, 16 de agosto, c. 14, exp. 3, f. 49; Huerta a De la Barra, Cuernavaca, 16 de agosto, c. 14, exp. 3, ff. 25, 52, 54, 59; Huerta a De la Barra, Cuernavaca, 15 y 16 de agosto, c. 17, exp. 8, ff. 5, 12, 13.

[41] Zapata a De la Barra, Cuautla, 17 de agosto de 1911, CESU-UNAM, FGM, c. 14, exp. 4, f. 23; Zapata a Madero, Cuautla, 17 de agosto, AHC, FJA, VIII-2, carp. 1, leg. 34.

[42] *Diario del Hogar*, 16-18 de agosto de 1911.

científicos y de Reyes, quienes intentaban provocar un clima de inestabilidad para demostrar que Madero era incapaz de controlar el orden en el país y, de este modo, restaurar la dictadura. Pretendían también que no se escuchara a Zapata y, mejor aún, que se le asesinara, con lo cual Madero no estaba de acuerdo, pues reconocía en Zapata a uno de los soldados más valientes del ejército libertador. Por todo ello, los conminó a aceptar el desarme.[43]

Madero les ofreció también que el gobernador sería Eduardo Hay, a quien los zapatistas aceptaron, aunque preferían a Miguel Salinas, director de Instrucción Pública del estado de Morelos. Los rebeldes aceptaron también que Raúl Madero se hiciera cargo de las fuerzas rurales y de la seguridad del estado. Con ello, las fuerzas zapatistas se desarmarían a partir del día 19 de agosto. Madero prometió hacer gestiones para la salida de las tropas federales.[44] Una vez más parecía que los acuerdos entre Madero y Zapata serían definitivos y que la paz se encontraba al alcance de la mano. El desarme había sido en buena medida efectivo y sólo quedaban en posesión de sus armas 500 zapatistas.

No es posible saber si los ofrecimientos de Madero eran sinceros o sólo una maniobra para conseguir el desarme. En cualquier caso, representaban la solución a varias de las principales demandas zapatistas y un importante puente para la negociación, por lo cual León de la Barra y Huerta decidieron jugársela y acabar con esa posibilidad. Con la movilización de las fuerzas federales en diversos poblados —a los que amagaron y ocuparon—, echaron abajo los acuerdos e intentaron demostrar la incapacidad de Madero y minar su prestigio. Ese día, León de la Barra informó a Madero que primero era necesario garantizar la paz, ya que sólo conseguida ésta saldrían las tropas federales de Morelos.

Al mismo tiempo, el gobernador Carreón y varios hacendados informaron de diversos desmanes cometidos por zapatistas en Jojutla, Tetecala, Tlaltizapán, Puente de Ixtla y las haciendas de San Vicente y Chiconcuac.

[43] Discurso de Madero en Cuautla, 18 de agosto de 1911, AHC, FJA, VIII-2, carp. 1, leg. 36; *Nueva Era*, 19 de agosto de 1911; *Diario del Hogar*, 20 de agosto de 1911.

[44] Madero a De la Barra, Cuautla, 18 de agosto de 1911, CESU-UNAM, FGM, c.17, exp. 8, f. 17 y AHC, FJA, VIII-2, carp. 1, leg. 38. Gildardo Magaña, que entonces era pagador del ejército zapatista, señaló que de los 6 500 hombres armados que tenían las fuerzas de Zapata, sólo restaban 500 que no habían sido licenciados (*Nueva Era*, 10 de agosto). El desarme se había reanudado y varios oficiales zapatistas, junto con sus hombres, se presentaron en esos días a entregar sus armas; véase R. Zaleta a De la Barra, Cuernavaca, 17 de agosto, CESU-UNAM, FGM, c. 14, exp. 4, ff. 35-36. Aunque marginalmente, la campaña federal provocó algunas deserciones en las filas zapatistas, como fue el caso del coronel zapatista Francisco García, quien se licenció con sus cien hombres "por no estar de acuerdo con Zapata"; o como el coronel zapatista Páez, de antecedentes negativos según el diario *Nueva Era*, quien fue a ofrecerse a Huerta como guía en la campaña contra Zapata (*Nueva Era*, 17 de agosto; *Diario del Hogar*, 19 de agosto de 1911).

El tenso clima prevaleciente causaba alarma entre la población de las localidades y polarizó su actitud ante los acontecimientos: algunas familias pidieron la protección del ejército federal en Jojutla y Jonacatepec; otros individuos pidieron el retiro de las fuerzas federales "en bien de la patria", como expresaron comerciantes de Cuautla a León de la Barra. Así, pues, no todas las familias pudientes eran partidarias de la intervención del ejército federal ni todas las familias marginadas veían con simpatía a los rebeldes.[45]

La ruptura

A pesar de todo, el 19 de agosto se reanudó por enésima vez el licenciamiento de los zapatistas en Cuautla. Madero conminó a León de la Barra para que no permitiera movimientos de tropas federales ordenados por Huerta o Blanquet, señalando que ambos jefes eran muy odiados en la zona y su presencia alteraría la actitud cooperativa de los zapatistas. Le informó que las noticias sobre los desmanes zapatistas eran exageradas y en muchos casos meras sospechas. En relación con el problema agrario había dado instrucciones a Eduardo Hay para que, una vez a cargo del gobierno estatal, formara una comisión agraria local.[46] Todavía más; al día siguiente justificó la actitud y destacó la legitimidad de la postura de Zapata: "Me he informado sobre todo lo que dicen de Zapata en México y no es cierto, lo que pasa es que los infelices sirvientes de las haciendas, por tantos años esclavizados, han encontrado en él un brazo fuerte que los proteja, por cuyos motivos es el ídolo del pueblo, a la vez que los hacendados lo odian porque es un obstáculo para seguir cometiendo abusos

[45] CESU-UNAM, FGM: De la Barra a Madero, México, 18 de agosto de 1911, c. 17, exps. 8-9, f. 21; Carreón a De la Barra, Cuernavaca, 18 de agosto, c. 14, exp. 4, ff. 46-47, 19 de agosto, c. 14, exp. 4, ff. 87, 92; Felipe Ruiz de Velasco a De la Barra, México, 19 de agosto, c. 14, exp. 4, f. 88; De la Barra a Carreón, México, 19 de agosto, c. 14, exp. 4, f. 93; vecinos de Jojutla a De la Barra, 15 de agosto, c. 14, exp. 3, f. 27. Antonio Barrios, administrador de las haciendas de San Vicente y Chiconcuac, denunció el asalto de dichas haciendas por bandoleros, aunque no pensaba que fuera gente de Zapata, pues éste tenía concentradas sus fuerzas en Cuautla y Yautepec; véase A. Barrios a De la Barra, 19 de agosto, CESU-UNAM, FGM, c. 18, exp. 8, f. 43. Familias de Morelos se refugiaron en Iguala, huyendo, según decían, de las depredaciones y los incendios cometidos por los zapatistas en Jojutla, Tlaquiltenango, Ixtla y Zacatepec; Cándido Ruiz y otros a De la Barra, 20 de agosto, CESU-UNAM, FGM, c. 18, exp. 8, f. 22. Vecinos de Jonacatepec pidieron la protección del ejército federal el 24 de agosto, CESU-UNAM, FGM, c. 18, exp. 1, f. 73; también véanse comerciantes de Cuautla a De la Barra, 14 de agosto, CESU-UNAM, FGM, c. 15, exp. 1, f. 63; miembros del club antirreeleccionista de Puebla a De la Barra, 20 de agosto, CESU-UNAM, FGM, c. 18, exp. 8, f. 23.

[46] Madero a De la Barra, Cuautla, 19 de agosto de 1911, AHC, FJA, VIII-2, carp. 1, leg. 41.

y una amenaza para los privilegios indebidos". Madero confiaba en haber alcanzado por fin la solución al conflicto.[47]

No obstante, la alegría de Madero duró poco, pues ese mismo día en la tarde, a pesar de las advertencias mencionadas, pretextando supuestos desmanes de zapatistas en Jojutla, Huerta hizo avanzar sus fuerzas sobre Yautepec, rompiéndose las hostilidades en el cerro de las Tetillas, cerca de Yautepec.[48]

El mismo día 19 por la mañana, León de la Barra había celebrado una reunión con el Consejo de Ministros, en la que se decidió unánimemente ordenar a Zapata que sacara a sus hombres de Yautepec y procediera al desarme, dándole un plazo de 48 horas para hacerlo. Concluido éste y normalizada la situación en el estado, el gobierno federal trataría de resolver la cuestión agraria en la entidad.[49] Mientras esto ocurría, Huerta aprovechó para reparar caminos y trasladar su artillería. Sin embargo, minutos más tarde informó a León de la Barra que era imposible detener el avance sobre Yautepec y que reemprendía la marcha, esperando tomar la plaza. Este movimiento premeditado fue la gota que derramó el vaso de las tensiones acumuladas, el que interrumpió el desarme y aceleró la ruptura que se había venido perfilando. Mientras tanto, Carreón, Francisco Leyva y Federico Morales continuaban informando al presidente de la República de supuestas incursiones de zapatistas en Miacatlán y Jojutla.[50]

La suspensión de las negociaciones y el avance del ejército federal sobre las posiciones zapatistas tuvieron honda repercusión en el Distrito Federal, donde tuvo lugar una manifestación de 25 000 personas —según

[47] CESU-UNAM, FGM: Madero a De la Barra, Cuautla, 19 de agosto de 1911, c. 17, exp. 8, ff. 26, 27 y exps. 8-9, ff. 23, 24, 25, 27; Madero a De la Barra, Cuautla, 20 de agosto, c. 16, exp. 1, f. 26 y c. 17 y exp. 8, f. 21. Miguel Díaz Lombardo, Heriberto Frías, Roque González Garza y otros dirigentes maderistas escribieron el 19 de agosto a De la Barra solicitándole que suspendiera el avance de tropas federales, ya que ponía en riesgo la vida de Madero; véase, en el mismo archivo, c. 18, exp. 8, f. 44. La actitud de Madero seguía caracterizándose por sus constantes oscilaciones.

[48] Madero a De la Barra, Cuautla, 19 y 20 de agosto de 1911, AHC, FJA, carp. 1, legs. 42 y 43; *Diario del Hogar*, 20 y 21 de agosto. Ese periódico informó que en el cerro de las Tetillas estaban desde antes, frente a frente, las fuerzas federales y rebeldes y se había ordenado avanzar a la columna federal de Casso López desde Puebla, intentando atacar a los zapatistas por la retaguardia. Zapata había girado instrucciones a sus tropas de no dejarlos pasar, de reforzar con gente de Cuautla sus posiciones en Yautepec y de hacer frente a las dos columnas federales si continuaban sus movimientos. Al parecer hubo 30 muertos en total, sumados los de ambos bandos.

[49] CESU-UNAM, FGM: Madero a De la Barra, Cuautla, 19 de agosto de 1911, c. 17, exp. 8, ff. 15, 19, 28; De la Barra a Madero, México, 19 de agosto, c. 17, exp. 8, f. 33.

[50] CESU-UNAM, FGM, c. 16, exp. 1: Huerta a De la Barra, Yautepec, 20 de agosto de 1911, f. 2; Carreón a De la Barra, Cuernavaca, 20 de agosto, f. 28; Francisco Leyva a De la Barra, México, 20 de agosto, f. 32.

informes de la prensa—, compuesta en su mayor parte por estudiantes, clubes políticos y organizaciones de trabajadores de la ciudad de México, sectores que habían estado siguiendo el derrotero de las negociaciones por la abundante información aparecida en los diarios y veían con temor el inicio de la conflagración en un lugar tan cercano al D.F. Estos grupos no querían permanecer pasivos ante tal eventualidad y protestaron contra las acciones del ejército federal en Morelos, demandaron su salida inmediata y responsabilizaron a Reyes, Huerta y Blanquet de ser los causantes del inicio de las hostilidades. Una comisión de los manifestantes se entrevistó con León de la Barra y le hizo saber sus exigencias, pero éste les contestó que no podía sacar al ejército de Morelos hasta que las fuerzas de Figueroa tomaran el control del estado. En Cuautla, a su vez, se realizó otra manifestación en la que se calificó de traición la actitud de Madero.

Era significativa la percepción tan variada que de los acontecimientos tenían algunos de los sectores más sensibilizados de la población urbana de ambas entidades: los manifestantes capitalinos, por ejemplo, identificaban al ejército y al gobierno provisional, es decir, a los grupos más vinculados con el porfiriato, como los desestabilizadores, y veían como malentendidos superables las diferencias entre Madero y los zapatistas; los grupos asentados en Cuautla, más radicalizados, comenzaron por su parte a deslindarse de Madero, pues consideraban que, consciente o inconscientemente, estaba haciendo el juego a los conservadores.[51] Muchos de los manifestantes de la ciudad de México constituían la base social del maderismo y con su actitud mostraban que, para ellos, la entrada en acción del ejército ponía en riesgo las promesas de la revolución. Se movilizaban, en su mayoría, no porque fueran simpatizantes del zapatismo, sino porque, de ocurrir la guerra, tanto Madero y las promesas revolucionarias como su propia seguridad estarían en peligro. La campaña de desprestigio emprendida por la prensa nacional contra el *Atila del Sur* no había hecho mella en la opinión de estos sectores más politizados.

Suspendido el desarme y tras el fracaso de sus intentos de mediación, Madero se atrevió a responsabilizar a Huerta por haberlo engañado y

[51] *Nueva Era* y *Diario del Hogar*, 21 de agosto de 1911. Días antes, Jesús *el Tuerto* Morales, jefe de la columna zapatista en Yautepec, había manifestado al *Diario del Hogar* que los jefes zapatistas se encontraban en una difícil posición, pues si aceptaban el desarme en las condiciones que exigía el gobierno, sus hombres los catalogarían de traidores y de haberse vendido a los federales y, si no lo aceptaban y conservaban sus armas, el gobierno los perseguiría por sediciosos (*Diario del Hogar*, 23 de agosto de 1911). *El Tuerto* previó el dilema que estaban viviendo los rebeldes zapatistas por las presiones de la gente, los compromisos que habían adquirido con sus seguidores y el arrinconamiento en que los había colocado la militarización del estado emprendida por el ejército. Esa encrucijada se resolvería poco después por el último camino: el sostenimiento de las promesas agrarias y políticas del Plan de San Luis y la ruptura con Madero.

por obrar de acuerdo con Bernardo Reyes de quien, acusaba, era partidario. En su misiva enviada a León de la Barra, Madero reconocía que el principal motivo por el cual se habían levantado los zapatistas era el problema agrario, y confiaba en que el gobernador propuesto por él en las negociaciones, Eduardo Hay, sabría solucionarlo diligentemente. León de la Barra, por su parte, justificó las instrucciones que había girado para el avance del ejército federal, por las "urgentísimas y alarmantes noticias" que había recibido sobre supuestos desórdenes zapatistas ocurridos en varias poblaciones del estado.[52]

Impotente, Madero insistió en que el derramamiento de sangre no tenía razón de ser, puesto que los zapatistas habían aceptado ya todas las condiciones para el desarme, si bien éste había sido frustrado por las provocaciones de Huerta. Denunció también nuevos abusos cometidos por Huerta: entre otros, había balaceado al presidente municipal de Yautepec, quien, con bandera blanca en mano, se disponía a hablar con los federales. Por ello, señaló que tenía que permanecer en el estado, pues temía que, en caso de abandonarlo, los zapatistas muy probablemente se irían a la guerrilla en la sierra. León de la Barra, quien se daba cuenta de que era dueño de la situación, le indicó mordazmente que consideraba a Huerta un militar pundonoroso y leal y pidió a Madero pruebas de sus acusaciones sobre la relación entre Huerta y Reyes.[53]

El día 20, Madero se dirigió a Yautepec y se reunió con Zapata, logrando, por última vez, calmar temporalmente los ánimos y una tregua de 48 horas para reanudar el licenciamiento.[54] Al día siguiente, León de la Barra, antes de que expirara la tregua, ordenó movimientos de tropas federales sobre Cuernavaca, pues, según informes de Carreón, se esperaba un ataque de Eufemio Zapata. Desde Cuautla, Madero le contestó que Eufemio se encontraba ahí con él, sumiso y obediente. Consideraba oportuno suspender todo avance federal, pues el desarme se había reanudado y no quería que volviera a suspenderse por los avances de Huerta y Blanquet; insistía en que era urgente nombrar gobernador y que los zapatistas habían reiterado su aceptación de que fuera Eduardo Hay.

Nuevamente las peticiones de Madero no fueron tomadas en cuenta por León de la Barra ni por el gabinete. Horas más tarde, Huerta insistió

[52] CESU-UNAM, FGM: Madero a De la Barra, Cuautla, 19 de agosto de 1911, c. 17, exp. 8, ff. 19, 25, 26, 29; De la Barra a Madero, México, 19 de agosto, c. 17, exp. 8, f. 28; Madero a De la Barra, Cuautla, 19 de agosto, exps. 8-9, ff. 23, 25, 27. El *Diario del Hogar* de 23 de agosto de 1911 informó que, en efecto, en Cuautla hubo desórdenes y tres casas de españoles fueron quemadas.

[53] CESU-UNAM, FGM: Madero a De la Barra, Cuautla, 20 de agosto de 1911, c. 16, exp. 1, ff. 3, 26; Madero a De la Barra, Cuautla, 20 de agosto de 1911, c. 17, exp. 8, ff. 21, 29.

[54] Madero a De la Barra, Cuautla y Yautepec, 20 de agosto de 1911, AHC, FJA, VIII-2, carp. 1, legs. 43 y 44.

en mantener una posición firme y no hacer caso de los consejos "mal intencionados" de Madero y Robles Domínguez.[55] Ante la reanudación del desarme comunicó a León de la Barra que esta operación era una farsa, que los zapatistas estaban entregando armas viejas, inservibles y cuchillos, conservando sus armas buenas, y que era necesario atacar a Zapata para tomarlo preso y, después, ahorcarlo o expatriarlo; al mismo tiempo, calificaba las opiniones de Madero de tontas y faltas de juicio. Dijo a León de la Barra que estaba urdiendo la manera de seguir sus instrucciones sin romper con Madero. La contestación de León de la Barra fue escueta: aprobaba su conducta y le solicitaba que lo mantuviera informado. A su vez, éste explicó a Madero: "[...] el único propósito del gobierno es dar garantías de orden a vidas y propiedades en ese estado".[56]

Las maniobras del presidente interino y de Huerta eran evidentes para muchos de los colaboradores de Madero. Juan Sánchez Azcona, que formaba parte prominente del ala progresista del maderismo y era a la sazón presidente del recién formado Partido Constitucional Progresista y director del periódico *Nueva Era*, escribió un editorial en donde pidió al presidente interino que aclarara públicamente su postura, pues él o Huerta mentían y habían engañado a Madero con el avance de las tropas federales y provocado con ello el enfrentamiento con los zapatistas. Sin embargo, Madero, en otra de sus múltiples vacilaciones, al conocer el contenido del editorial y el enojo que le había causado a León de la Barra, escribió una carta a Sánchez Azcona en la que defendía sin reparos la política del presidente interino, señalando que la contradicción en algunas de las órdenes se debía a la actitud intransigente del ministro de Gobernación Alberto García Granados, y que la conducta de Huerta era la que estaba en cuestión, por haber malinterpretado las instrucciones que se le habían dado.[57]

[55] Madero a De la Barra, Cuautla, 21 de agosto de 1911, AHC, FJA, VIII-2, carp. 1. leg. 50. CESU-UNAM, FGM, c. 17: Madero a De la Barra, Cuautla, 21 de agosto de 1911, c. 17, exp. 8, ff. 34, 35, 37, 38, 40, 41, 45; De la Barra a Madero, México, 21 de agosto, exp. 8, ff. 39, 40; Huerta a De la Barra, cerro Acolapan, 21 de agosto, exps. 8-9, f. 16, en donde Huerta le decía: "[...] creo en la necesidad, como hombre, como caballero y como soldado, de imponerse a toda esta gente".

[56] CESU-UNAM, FGM: Huerta a De la Barra, Yautepec, 22 de agosto de 1911, c. 17, exp. 8-9, ff. 18, 19, 23 de agosto, c. 17, exp. 8, f. 49; De la Barra a Madero, México, 22 de agosto, c. 17, exp. 8, f. 42. En ese último intento de licenciamiento que tuvo lugar en Cuautla, el 21 y 22 de agosto, luego del combate en Yautepec, Madero mismo reprochó a Zapata que hubiera tan pocos hombres entregando sus armas, en contraste con los días anteriores. El corresponsal del *Diario del Hogar* manifestó su escepticismo acerca del asunto y dijo que no creía que se desarmara ni la cuarta parte de los hombres de Zapata (*Diario del Hogar*, 23 de agosto de 1911).

[57] *Nueva Era*, 22 y 24 de agosto de 1911; CESU-UNAM, FGM: De la Barra a Madero, México, 22 de agosto, c. 17, exp. 8, f. 44; Madero a De la Barra, Cuautla, 22 de agosto, c. 17, exp. 8, f. 46. Madero a Juan Sánchez Azcona, Cuautla, 22 de agosto de 1911, AHC, FJA, VIII-2, carp. 1, leg. 54.

No obstante, las acciones de Huerta de los dos días siguientes desmintieron enteramente la opinión de Madero: por instrucciones del gobierno federal, las tropas de Huerta ocuparon, en un movimiento envolvente, las plazas de Yautepec, Jonacatepec, Acatlán, Jojutla y la hacienda de San Carlos, mientras una fuerte columna avanzaba sobre Cuautla. Por decisión de Madero y del gobierno provisional, las tropas de Ambrosio Figueroa se movilizaron para reforzar las partes sur y oeste del estado —haciendo pinza con las tropas federales que estaban en el centro, norte y noreste—, y para que Ambrosio se hiciera cargo de la jefatura militar de la entidad. Estos movimientos provocaron la suspensión definitiva del desarme zapatista y la ruptura con Madero, que se encontraba en Cuautla supervisando personalmente el licenciamiento. Incluso se manejó la versión de que Eufemio Zapata había propuesto a Emiliano fusilar a Madero por traidor. Éste regresó a la ciudad de México, habiendo fracasado totalmente en su misión pacificadora. Las tropas federales, al mando de Huerta y Casso López, ocuparon las principales plazas y recibieron instrucciones para que, una vez establecido el control, dejaran en manos de Ambrosio Figueroa la jefatura militar.[58]

Desde la ciudad de México, Madero escribió una extensa carta a León de la Barra, en la que le reprochaba su actitud por no haber actuado para detener el complot, que suponía orquestado directamente por Reyes, contra su gestión pacificadora. En ella acusaba a Huerta de haber actuado en contubernio con Reyes y provocado deliberadamente la ruptura de hostilidades, evidenciándolo ante los zapatistas y ante el pueblo como un embaucador que no respetó los compromisos contraídos.[59]

[58] Magaña, *op. cit.*, vol. 1, pp. 311-313. CESU-UNAM, FGM: Madero a De la Barra, Cuautla, 22 de agosto de 1911, c. 17, exp. 8, f. 56; Huerta a De la Barra, Yautepec, 24 de agosto, c. 17, exp. 8, ff. 51, 53; secretario de Guerra a Huerta, México, 25 de agosto, c. 17, exp. 11, f. 23; Carreón a De la Barra, Cuernavaca, 25 de agosto, c. 17, exp. 11, f. 21 y c. 16, exp. 1, ff. 78-79. El general huertista Gabriel Hernández comunicó a León de la Barra, el 23 de agosto, que publicó un bando en Jojutla en el que advertía que se realizarían cateos generales a toda la población y se pasaría por las armas a cualquier persona que se le encontraran objetos robados; añadió que había hecho ya varias ejecuciones (mismo archivo, c. 19, exp. 3, f. 46). Por esos días, Ambrosio Figueroa tuvo que dejar Puente de Ixtla, en Morelos, para marchar a Iguala, lugar en donde las actividades de Jesús Salgado estaban causando inquietud y eran motivo de preocupación para los Figueroa; véanse c. 17, exp. 8, ff. 48, 52, 54, y *Diario del Hogar*, 24 y 25 de agosto de 1911.

[59] Madero a De la Barra, México, 25 de agosto de 1911, AHC, FJA, VIII-2, carp. 1, leg. 58. Esta carta es sintomática de la forma en que Madero veía a León de la Barra y cómo entendía la situación que había en el país en ese momento. Trataba a León de la Barra como miembro sincero de su partido y por ello le reprochaba su ceguera y su falta de firmeza para enfrentar el avance que los partidarios del régimen porfirista estaban haciendo en muchas regiones del país y en el propio gobierno federal. En todo ello, Madero veía la mano de Reyes y proponía a León de la Barra actuar unidos para enfrentarlo con éxito e impedir la guerra civil que veía venir; por lo mismo le pedía que respetara el compromiso de no licenciar más tropas insurgentes, pues en esos

Empero, la carta no impidió el curso de la decisión tomada por León de la Barra, García Granados y Huerta de intentar la aniquilación del zapatismo. El consejo de ministros resolvió perseguir a Zapata hasta acabar con él. En los días finales de agosto, las tropas federales ocuparon más plazas —Cocoyoc, Cuautla, Jonacatepec, Villa de Ayala, Tlaltizapán, Yautepec—, estrechando así el cerco levantado en torno de los zapatistas.[60]

El desenlace previsto por las fuerzas conservadoras había ocurrido. Las negociaciones habían fracasado. Había quedado demostrada la incapacidad mediadora de Madero. El fallido proceso había desgastado su capital político y había contribuido a acelerar la división de sus filas. El ejército federal había tomado por completo el control de la entidad. Los rebeldes zapatistas habían sido desarmados en su mayoría y sólo unos pocos, arrinconados, habían tenido un proceso de maduración política que los había llevado a romper con Madero. Desde una perspectiva inmediata, el balance para la coalición conservadora era altamente positivo.

Debilidad rebelde

Las tropas zapatistas y sus jefes se vieron obligados a defenderse y a huir, debiendo salir del estado para refugiarse en la frontera poblana. Antes de esconderse en las montañas para reorganizarse y meditar los pasos que

---

momentos sólo quedaban 4 000 activos en el país. En virtud de los reproches que le dirigía y de las denuncias contra el complot reyista y contra Huerta, Madero amenazaba con hacer pública la carta si no se cumplían los compromisos a los que había llegado con los zapatistas. Al parecer, pues, Madero era consciente de las maniobras hechas por los representantes del régimen porfiriano. Sin embargo, su debilidad política lo obligaba a buscar aliarse con León de la Barra, infructuosamente, por ser éste una de las puntas de lanza de la reacción que estaba organizando la vieja elite para actuar contra Madero. Posteriormente, el 31 de octubre, Madero escribió a Huerta para recriminarle su actitud en el conflicto morelense, que había dado al traste con las negociaciones y cuestionar su pericia y efectividad al frente de la campaña, pues el zapatismo no había podido ser reducido (Madero a Huerta, Chihuahua, 31 de octubre de 1911, en Fabela, *op. cit.*, pp. 21-23). Uno de los puntos más oscuros en las decisiones tomadas por Madero en esos y en los siguientes meses fue la dependencia que estableció con respecto a Huerta, a quien, no obstante haberlo identificado claramente como contrario a sus intereses y a su proyecto, siguió recurriendo a él para combatir a Orozco y, en el colmo del absurdo, para que lo defendiera contra el golpe de Estado de Reyes y Félix Díaz, que finalmente sería su vía crucis. ¿No había otro general más capaz y más confiable para tales tareas? O, ante las presiones, ¿fue para quedar bien con el ejército?

[60] CESU-UNAM, FGM: Huerta a De la Barra, Yautepec, 28 de agosto de 1911, c. 16, exp. 1, f. 9; Federico Morales a De la Barra, Tlaltizapán, 28 de agosto, c. 16, exp. 2, f. 43; Huerta a De la Barra, Campamento de San Carlos, 29 de agosto, c, 16, exp. 1, ff. 57, 58; secretario de Guerra a Huerta, México, 29 de agosto, c. 16, exp. 11, f. 24; De la Barra a Felipe Ruiz de Velasco, México, 31 de agosto, c. 14, exp. 2, f. 20; De la Barra a Huerta, México, 31 de agosto, c. 14, exp. 2, f. 2. Magaña, *op. cit.* vol. 1, pp. 327-330; *Diario del Hogar*, 30 de agosto de 1911.

habría de dar, el zapatismo emitió el 27 de agosto un "Manifiesto al pueblo de Morelos", en el cual hicieron un último intento para evitar que se les persiguiera, reiteraron su lealtad a Madero y su confianza en él y en los acuerdos a los que habían llegado: el licenciamiento del ejército alzado; el retiro de las fuerzas federales; que la seguridad en el estado quedara en manos de las tropas insurgentes de Veracruz e Hidalgo; la aceptación de Eduardo Hay como gobernador; la designación de Raúl Madero como jefe de las fuerzas rurales; el respeto al sufragio efectivo y garantías para todos los jefes surianos.[61]

Es significativo que este primer pronunciamiento público del zapatismo pusiera el énfasis en su lealtad y subordinación a Madero, en su compromiso de desarmarse, y que sólo planteara algunas de sus demandas políticas de manera muy tenue, aceptando las propuestas de Madero. La debilidad política y militar de los zapatistas los llevaba, en una actitud defensiva, a no reclamar, como en los días anteriores, su participación en el nombramiento de las autoridades locales, que se les dejara formar parte de las fuerzas rurales estatales ni la atención al problema agrario. A cambio del retiro del ejército federal aceptaban deponer las armas y cedían en los puntos que habían provocado el estancamiento de las negociaciones. Con tal de evitar la ruptura y detener la persecución en su contra, los líderes zapatistas estaban dispuestos a dar un paso atrás.

Esto se explica porque, en términos militares y políticos, el zapatismo estaba muy débil. Con todos sus bemoles, el desarme había sido efectivo en buena medida y por lo menos habían entregado 3 500 armas, aunque éstas hubieran sido de las más viejas y menos efectivas. En esos momentos sólo podían contar con unos cuantos cientos de seguidores, organizados en pequeñas bandas precariamente armadas.[62] La presencia de las grandes

[61] AHC, FJA, VIII-2, c. 1, leg. 62. Por el estilo característicamente rebuscado de su prosa, por las figuras retóricas y el manejo patriotero de héroes y épocas de la historia nacional, este primer manifiesto probablemente fue redactado por Otilio Montaño, el profesor rural morelense que se había incorporado a los rebeldes en las primeras semanas de la revuelta y que después jugaría un papel central entre los ideólogos zapatistas. Hasta esos momentos, sin embargo, el único intelectual que había aparecido en la prensa capitalina como parte de las fuerzas zapatistas era el poblano Abraham Martínez —primo de Luis Cabrera, formado en la escuela militar de aspirantes—, figura contradictoria que tenía vínculos con algunos de los jefes maderistas radicales y sirvió de puente en esos meses formativos del zapatismo con el maderismo. Sin embargo, Martínez pronto se eclipsó, con el crecimiento y la radicalización del movimiento rebelde y fue desplazado por otros ideólogos como Montaño, Manuel Palafox y Antonio Díaz Soto y Gama. Martínez tuvo además un final trágico prematuro, pues murió en 1913, en Tlaxcala, durante la lucha contra Huerta.

[62] Raúl Madero llegó a la ciudad de México el 2 de septiembre y declaró al *Diario del Hogar* que, una vez suspendido el desarme por el avance de Huerta sobre Cuautla, algunos jefes zapatistas le pidieron que les regresara sus armas, a lo que se negó rotundamente. Consideraba que a Zapata le quedaban 500 hombres "bien armados".

columnas federales en la mayor parte del territorio los puso en desbandada y a la defensiva. Además, aun para los seguidores más cercanos del zapatismo, era muy difícil fundamentar la razón de una actitud beligerante ante Madero, quien todavía no asumía la presidencia y, a pesar de lo ocurrido, aún conservaba parte de su prestigio ante amplios sectores de la población del país y de Morelos. Sin embargo, la actitud provocadora del ejército federal, el cerco y la persecución a que estaban siendo sometidas sus fuerzas, y el desdén mostrado por el gobierno central hacia sus peticiones ofendieron la dignidad de Zapata y sus seguidores, los arrinconaron y justificaron su negativa a aceptar el desarme incondicional. La ofensiva del ejército federal hizo que se precipitaran los acontecimientos y los obligó a defenderse, con muy pocas fuerzas, en una actitud que sólo unos cuantos de sus más convencidos seguidores comprendían.

Cuando iniciaron las hostilidades, Zapata denunció los asesinatos de sus seguidores recientemente cometidos, así como la represión emprendida en contra de los clubes políticos de Jojutla, Tlaquiltenango, Xochitepec y Cuernavaca, los cuales estaban proponiendo a Zapata para gobernar el estado. El 31 de agosto escribió a León de la Barra para desmentir las noticias publicadas en los periódicos de la capital, donde se informaba que se había levantado en armas. Si corría sangre, no sería responsabilidad de los surianos, quienes, para defender sus vidas, desalojaron el estado y se refugiaron en la sierra poblana.[63]

Razones de la ruptura: perfil de una identidad

¿Qué explicaba la ruptura? Sin duda, el presidente provisional y el jefe de la campaña federal en Morelos tuvieron éxito en su plan de provocar la ruptura con los surianos y poner en evidencia la incapacidad de Madero para resolver pacíficamente el conflicto. Madero, cuyas oscilaciones se explican por su temor y rechazo a las acciones radicales, sus compromisos e identificación con las elites y su deseo de intentar una conciliación irrealizable entre unos y otros, sólo al final, y parcialmente, se dio cuenta de que se había prestado a una maniobra que, desde el punto de vista de los más conservadores defensores del sistema, León de la Barra y Huerta tenían más clara que él. Madero mismo había contribuido a ello con su defensa de la razón de Estado y el *statu quo* contra la insubordinación za-

[63] CESU-UNAM, FGM: Zapata a Alfredo Quesnil, Morelos, 29 de agosto de 1911, c. 14, exp. 4, f. 13; Zapata a De la Barra, Cuernavaca, 31 de agosto, c. 15, exp. 5, f. 4. Desde luego, la afirmación zapatista de que no se habían levantado en armas era hecha en un sentido propagandístico, pues, al negarse a completar el desarme incondicional y defenderse, en los hechos se estaban rebelando, aunque ésa fuera una actitud defensiva y, desde su punto de vista, legítima.

patista. Sin embargo, una vez admitido lo anterior y a la luz de quiénes fueron los actores centrales, de sus formaciones y trayectorias, de sus valores, de los intereses que representaban y de sus aspiraciones, es necesario tratar de explicar sus motivos y el resultado de sus acciones.

León de la Barra, alto funcionario porfiriano proveniente de una de las principales familias aristocráticas de la elite, culto, refinado, católico, conservador, desde su posición de máxima autoridad del país no podía aceptar la formación y el desarrollo de un movimiento rebelde que, a sus ojos, era a todas luces reprobable: desordenado, violento y que representaba una amenaza para los intereses no solo de las familias pudientes, sino de la población en general. Las circunstancias lo habían llevado a la primera magistratura de la nación y entre sus prioridades estaba la defensa del orden jurídico, de las instituciones y de los intereses de las elites porfirianas, de las cuales era el principal representante, contra el desorden provocado por la revuelta maderista; los rebeldes surianos eran un claro ejemplo del riesgo al que se encaminaría el país si no se les reducía. Confió la tarea de amedrentar y desarmar a los zapatistas a un competente general del ejército porfiriano, quien posiblemente tenía la mejor experiencia contrainsurgente dentro de la institución castrense. Como no contaba enteramente con la aquiescencia de Madero para emplear una solución de fuerza y el prestigio del jefe de la revolución aún era grande, León de la Barra encubrió, solapó y animó la actuación independiente de las fuerzas militares comandadas por Huerta. Si bien aceptó la mediación de Madero en las negociaciones, en los momentos decisivos pasó por encima de su voluntad y acordó directamente, junto con su ministro de Gobernación, las acciones decisivas de movilización, cerco y provocación militar que pusieron a Zapata entre la espada y la pared y lo obligaron a la ruptura de las negociaciones. León de la Barra hacía su juego para debilitar a Madero, aislarlo de sus bases sociales más radicales y fortalecer, al mismo tiempo, sus propias posibilidades para continuar en el poder, preparando el terreno de su postulación a la vicepresidencia del país.

Huerta, por su parte, era un prestigiado militar de alto rango del ejército porfiriano, con amplia experiencia adquirida en la guerra contra los yaquis y los mayas, y en el combate contra el movimiento opositor a Díaz que se desarrolló en Guerrero a fines del siglo XIX. Sin duda, Huerta era uno de los militares más capaces y experimentados en el combate a las rebeliones. Estaba profundamente convencido del papel central del ejército en el mantenimiento del orden nacional y la defensa de las instituciones. Era colaborador y simpatizante del arquetípico militar porfiriano Bernardo Reyes y defensor de la disciplina y los valores de casta que habían permeado la formación del ejército porfiriano. En su lealtad al gobierno provisional de León de la Barra y a los intereses de las elites e

instituciones del antiguo régimen, veía la oportunidad de convertirse en la única salvación para la sociedad, los valores y el mundo jerárquico al que pertenecía. Le desagradaba la inestabilidad del país provocada por Madero, quien, a sus ojos, era un renegado y un advenedizo, un personaje débil y falto de carácter que no sabía cómo amarrar al tigre que había desatado y por el que sentía un profundo desprecio. La lealtad de Huerta estaba ante todo con Bernardo Reyes, con el ejército y con el presidente León de la Barra, representante legal del orden constitucional; ambicioso como era, veía, en el curso que habían tomado los acontecimientos y en la responsabilidad que se le había asignado, la oportunidad para debilitar a Madero y volverse indispensable, allanándole el camino a su jefe Reyes. A éste y a sus seguidores les convenía que Madero, en vísperas de las elecciones pactadas, no fuera capaz de controlar un movimiento regional cercano al corazón político nacional y que resultara necesaria la presencia del ejército federal para someterlo. Así, la actuación de Huerta fue del todo congruente con su situación, su visión, sus aspiraciones personales y las del grupo al que pertenecía.

Desde su postura, León de la Barra y Huerta no podían aceptar la actuación mediadora de Madero ni juzgar de otro modo la insubordinación y las peticiones de los zapatistas, porque no compartían sus puntos de vista ni sus intereses. La lógica del poder, la razón de Estado, el principio de autoridad, la salvaguarda de las instituciones y del orden, sus valores y ambiciones los imposibilitaban para ceder espacios a un movimiento local que, desde su punto de vista, no era representativo ni tenía la fuerza suficiente para obligarlos a reconocerlo y asignarle el papel importante que quería tener en la organización de los asuntos locales.

Madero, por su parte, quería recomponer el sistema de alianzas y equilibrios entre las elites y las clases medias que Díaz había alterado, restablecer el orden y la seguridad, mantener el *statu quo*, ofrecer libertades políticas a todos los sectores dentro de la ley, y crear un clima en el que pudieran desenvolverse las elecciones que darían paso a un gobierno constitucional, para lo cual debía controlar a los grupos sociales que se habían puesto en movimiento con la lucha armada y encauzarlos para que pudiera fortalecerse la autoridad del gobierno central y, con ello, consolidar sus propias fuerzas. Madero se daba cuenta de que su capital político y su prestigio estaban siendo minados por los grupos conservadores y la prensa —los cuales explotaban su incapacidad para meter en cintura a los grupos radicales— y se enfrentaba al desafío de neutralizarlos, procurando, al mismo tiempo, mantener la coalición de sectores y personalidades que había aglutinado y que se estaba desgajando.

El problema de Morelos había ocupado las primeras planas de los diarios, por lo que Madero puso en juego su prestigio para desarmar a los

zapatistas y evitar que se recurriera a la solución de fuerza que deseaban los conservadores. Aunque no entendía a los rebeldes zapatistas, tampoco los consideraba aún sus enemigos, porque no creía que sus demandas no pudieran cumplirse en el marco de la ley; temía, eso sí, que con sus posturas intransigentes hicieran el juego a los sectores duros que buscaban el enfrentamiento. Los surianos eran, en todo caso, impacientes y desconfiados y había que convencerlos de la buena voluntad del gobierno y de las instituciones a los cuales tenían que subordinarse, ofreciéndoles el cumplimiento de algunas de sus demandas a cambio del desarme, aunque, desde luego, no podía ofrecerles una redistribución de la tierra ni una influencia decisiva en el gobierno y en las fuerzas de seguridad local. Les pedía tiempo, paciencia y confianza. No había razón, desde su punto de vista, para que permanecieran armados. Si lo hacían, ponían en peligro el avance y cumplimiento de los logros de una revolución civilizada, de la cual él era el principal responsable, y se corría el riesgo de regresar a lo más negativo y excluyente del antiguo régimen. No era partidario de la fuerza.

Para Madero, León de la Barra era un hombre de buena fe; lo consideraba su aliado y le molestaba que influyera en él, de manera perniciosa, Bernardo Reyes, a quien sí consideraba su enemigo desde mucho antes de que estallara la revolución y en quien veía a su principal oponente. Sin embargo, la mediación que Madero intentaba realizar entre Zapata y León de la Barra-Huerta era una tarea imposible de cumplir si se quería satisfacer a ambas partes. Por lo tanto, los acontecimientos se desarrollaron, naturalmente, hasta el endurecimiento de las posturas de ambos extremos, ante lo cual Madero, enmedio, tuvo que elegir; desde luego, se inclinó por el orden constitucional y las instituciones. Su postura, intermedia entre dos fuerzas con visiones e intereses encontrados, era incómoda y le reducía cualquier margen de acción.

Aunque Madero no compartía totalmente la visión jerárquica y autoritaria de León de la Barra y Huerta, coincidía con ellos en el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones y la conservación del *statu quo*; la suya era una afinidad de clase, pues pertenecía a las mismas elites. La diferencia consistía en su intento de abrir canales de participación política para todos los sectores, con el objeto de modernizar las leyes y las instituciones y crear condiciones que permitieran el libre desarrollo de las iniciativas individuales. Su proyecto era una reforma política del sistema, para lo que necesitaba el impulso y la participación de las nuevas fuerzas que habían logrado el derrocamiento de Díaz. Pero le incomodaban y sentía temor por las soluciones radicales y, en el caso de Morelos, le disgustaba la existencia de un movimiento popular sin organización ni control, según él, con planteamientos y reivindicaciones que no compartía, impaciente, intransigente, que no aceptaba desarmarse

incondicionalmente y que reclamaba autonomía regional. El problema de Madero fue que quiso mantener la unidad —con base en su persona y su condición de líder de una insurrección triunfante— entre dos bloques de fuerzas que tenían proyectos encontrados y que representaban intereses sociales diferentes. La contradicción resultó irresoluble y Madero no quedó bien ni con unos ni con otros, debilitando al mismo tiempo su propia base de apoyo.

Por su parte, Zapata y sus seguidores, debido a su extracción de clase, formación, visión del mundo, valores, lazos con sus localidades y experiencias previas, tenían pocos vínculos con los otros actores centrales de la escena morelense. Se habían incorporado subordinadamente al movimiento maderista nacional. Sin embargo, se sentían con derechos para participar en la organización del poder estatal y de las fuerzas de seguridad locales, como reconocimiento al papel que habían tenido en la insurrección. Sentían que los trataban como si fueran parte secundaria de la trama y reclamaban que se les diera su lugar en el acomodo de fuerzas que estaba teniendo lugar en el estado; también esperaban que se reorganizara el poder con una mayor participación de los pueblos para así realizar, desde el gobierno, las reivindicaciones agrarias y de justicia, principales reclamos de las comunidades.

Conforme se desarrollaron los acontecimientos, la confianza que le tenían a Madero y su subordinación al maderismo se debilitaron paulatinamente, en un proceso que no fue fácil para los dirigentes zapatistas. La contradicción entre los compromisos acordados con Madero y el avance de las tropas federales les hizo pensar que éste los engañaba o que no tenía control sobre el ejército. En cualquier caso, la militarización del territorio y el hostigamiento del ejército federal les infundió el temor suficiente para tomar la decisión de interrumpir la deposición de las armas e insistir en la satisfacción de sus peticiones, entre las cuales la principal pasó a ser la salida de las tropas federales, lo cual tensó aún más la situación y endureció las posiciones de ambos bandos. La ocupación militar y la preferencia de los maderistas por sus rivales figueroístas acentuaron el regionalismo y la autonomía de los zapatistas, quienes se negaron a que el centro y los fuereños decidieran en Morelos. La colaboración del gobierno estatal con el ejército hizo que se volviera una necesidad para los jefes rebeldes tener mayor injerencia en el gobierno y la administración locales, como lo establecía, según su leal entender, el Plan de San Luis. A medida que avanzaron las negociaciones, las demandas zapatistas fueron adquiriendo un perfil cada vez más netamente político.

Esos acontecimientos fueron decisivos para agrupar y comenzar a dar forma más definida y mayor identidad al zapatismo. Cuando se pactaron los acuerdos de Ciudad Juárez era un movimiento guerrillero dis-

perso, compuesto por bandas agrupadas alrededor de caudillos locales, a los cuales Zapata difícilmente podía controlar y que combinaban motivos personales de diverso tipo con lo que entendían que prometía el Plan de San Luis: el derecho de recuperar o poseer la tierra y de nombrar a sus autoridades. El éxito conseguido tras la rebelión —su contribución al derrocamiento del gobierno porfirista y la derrota infligida al gobierno estatal— los hizo conscientes de su fuerza y los llevó a reclamar posiciones para sus jefes y tropas. El arraigo de los jefes guerrilleros zapatistas, y su consiguiente regionalismo, los llevó a oponerse a la intromisión de los rebeldes guerrerenses y a disputar con ellos la hegemonía en el estado. Este rechazo a la injerencia externa y su aspiración de reconocimiento, por parte del poder central, como fuerza local representativa con derecho de participación en los poderes e instituciones locales constituyeron el meollo de las negociaciones con el centro y el comienzo de sus disputas.

Por lo tanto, el problema esencial, el que originó la ruptura, fue de carácter político: la reivindicación de poder del grupo zapatista y la exigencia de que se resolvieran positivamente las demandas agrarias y de justicia de sus seguidores.[64] Lo novedoso del zapatismo en esa etapa fue su oposición a que se le relegara y su negativa a entregar las armas incondicionalmente, defendiéndolas como la única garantía para poder alcanzar sus objetivos. Obligó con ello al maderismo y a las instituciones porfirianas sobrevivientes a negociar el desarme y la organización de la entidad. En el transcurso de esta negociación, Zapata y sus seguidores, que no tenían fuerza suficiente para imponer condiciones pero sí para obtener algunas concesiones, aceptaron desarmarse a cambio del establecimiento de compromisos relacionados con la gubernatura del estado y la jefatura de las fuerzas armadas; es decir, acordaron, junto con Madero, que la conducción política y la seguridad de la entidad no estuvieran en manos de los líderes zapatistas ni en las de sus enemigos, sino en las de dos dirigentes del maderismo en los que tenían confianza: Eduardo Hay y Raúl Madero.

Con este arreglo se abrían posibilidades para que nuevos sectores de

[64] Aunque éstas fueron las líneas resultantes, debe señalarse que las posiciones asumidas por los actores centrales no fueron homogéneas. En la dirigencia maderista había líderes que, como Gabriel Robles Domínguez, no estuvieron de acuerdo con la alianza y el papel que se asignó a los Figueroa, a quienes consideraba empleados de los hacendados de Morelos y que, además, tenían el inconveniente de ser fuereños, sin base local de apoyo, y cuyas medidas represivas contra los pueblos habían dado por resultado el incremento de las fuerzas zapatistas. "Si se ha recrudecido el zapatismo en Morelos es por las condiciones en que ha colocado al estado el gobierno federal, al tomar las medidas antipolíticas que adoptó, lo que ha provocado que mucha gente de los pueblos que se había retirado a trabajar, haya vuelto a engrosar las filas de Zapata", afirmó Gabriel Robles Domínguez en el citado "Memorándum...", AGN, FARD, t. 7, exp. 31, ff. 14-15. De igual modo, no se debe descartar que los zapatistas hubieran podido desarmarse y disolverse realmente si el ejército y el gobierno federal no hubieran adoptado una postura tan rígida.

Morelos, como los que se habían movilizado dos años atrás con el leyvismo, reaparecieran e intentaran una reorganización de las relaciones sociales y políticas en la entidad, diferente de la que había existido durante el porfiriato. Esto se habría acercado más a lo que un sector del maderismo intentaba hacer en todo el país: una transformación política que permitiera mayor participación de las clases medias y de los sectores populares, ignorados por el sistema porfiriano. Los zapatistas, y los sectores rurales medios y pobres a los que representaban, quizá no hubieran chocado frontalmente con este proyecto que no los excluía tajantemente, como el modelo porfirista. En lo inmediato, de haberse cumplido los compromisos acordados, hubieran conseguido eliminar a los representantes de los hacendados y a los Figueroa del poder estatal. Madero hubiera logrado legitimar su liderazgo y reafirmar su autoridad evitando el conflicto armado, y debilitar con ello las pretensiones del ejército federal y del gobierno interino de León de la Barra. Estos resultados, que convenían a maderistas y zapatistas, fueron inaceptables para las elites locales y para los jefes de las instituciones porfiristas, los cuales endurecieron su postura y, con la invasión del ejército federal, montaron una provocación y una trampa tanto para Madero como para el zapatismo.

Para los rebeldes, lo único que podía garantizar que las cosas no quedaran igual que antes era el cumplimiento de lo que identificaban como ideales revolucionarios, ideales que hasta esos momentos se habían expresado en el reclamo para la elección de nuevas autoridades por los pueblos, en reivindicaciones de carácter agrario, y en una abigarrada cantidad de acciones emprendidas por los grupos rebeldes y los sectores populares. Con estas acciones intentaban hacer una defensa de los códigos de "economía moral" que beneficiara a individuos y sectores agraviados por autoridades políticas y militares, comerciantes y hacendados. El deseo de la gente común era que la reconstitución de la autoridad y del poder estatal, en todos los niveles, partiera de esas nociones de justicia para que no volvieran a cometerse abusos y para que las nuevas autoridades respetaran ese compromiso y no se aliaran nuevamente con la oligarquía local y el centro político nacional, elementos considerados hostiles por los grupos rebeldes y la gente de las localidades que los respaldaba.

La forma en que se desarrollaron las negociaciones, las definiciones que ante ellas adoptaron el maderismo, las instituciones porfirianas, las elites locales y los líderes zapatistas, y el fracaso de la mediación, catalizado por la irrupción del ejército federal, fueron los factores que agruparon defensivamente al zapatismo y lo obligaron a delinear su identidad, su autonomía y su proyecto. La traición que interpretaron en la actitud de Madero los hizo defenderse, radicalizarse y volverse independientes, no sólo respecto de las estructuras políticas porfirianas contra las que ya se

habían rebelado, sino también respecto del maderismo. Las reivindicaciones agrarias y las relacionadas con reformas sociales, económicas y políticas radicales, que después los caracterizarían, apenas comenzaron a esbozarse en las complicadas negociaciones en torno a la reorganización del poder político y militar y la entrega de las armas.

En esta etapa formativa del zapatismo, la definición de su identidad y la responsabilidad de sus decisiones recayó en los jefes naturales campesinos y en Zapata. Fueron estos dirigentes campesinos los que se negaron a desarmar a sus fuerzas sin condiciones y los que rompieron con el gobierno provisional y con Madero, sin influencia notable de los intelectuales fuereños. No se ha conservado documentación directa que informe de las discusiones internas de los zapatistas en esas semanas, por lo cual es difícil precisar qué figuras tenían más peso en la toma de decisiones. En la prensa capitalina, las figuras externas al zapatismo que aparecieron muy vinculadas a dicho movimiento fueron Abraham Martínez, jefe del estado mayor de Zapata, quien tuvo una actuación confusa y contradictoria, así como el todavía más oscilante y contradictorio Juan Andrew Almazán. No hay evidencia de influencias directas en el zapatismo inicial, ni de los intelectuales simpatizantes de los Vázquez Gómez, como Paulino Martínez —quien había tenido contacto con Zapata y algunos líderes zapatistas desde 1909, como asesor jurídico en disputas agrarias, y luego se incorporaría como ideólogo del zapatismo— ni del ala izquierda maderista que se expresaba en el *Diario del Hogar*. Por ello y por lo que se notó después, el peso de los dirigentes naturales, como Zapata, su hermano Eufemio, Amador Salazar, *el Tuerto* Morales, Lorenzo Vázquez y otros, parece haber sido decisivo y la ruptura, por lo tanto, fue una ruptura política que maduró endógenamente en el grupo rebelde y que se expresaría en términos ideológicos poco después, con el Plan de Ayala. Desde luego, pueden señalarse diversas influencias exteriores, pero hay que subrayar que la radicalización y el agrupamiento zapatistas fueron procesos llevados a cabo básicamente por sus propios líderes.

Todo indica que lo que aglutinó al zapatismo y le dio identidad propia fueron sus reclamos agrarios, de reconocimiento, de autonomía, de participación en el poder local y de rechazo a la intromisión del centro y de los fuereños, reclamos hechos por parte de un grupo campesino con fuerte arraigo regional que no fue tolerado por las estructuras porfirianas —inertes y poco permeables, a las que Madero no había tocado y que seguían predominando— ni por el propio maderismo. Al resistir, los zapatistas se independizaron, se identificaron, se radicalizaron y rompieron con el régimen e, incluso, con Madero, que se encontraba en medio. Fue una ruptura que trajo consigó una segunda rebelión, en menos de un año, ahora contra el jefe nacional de la revolución triunfadora.

Este proceso de ruptura con la figura de Madero fue extremadamente difícil para los dirigentes campesinos que hasta entonces habían confiado en él. Durante las negociaciones se percataron de sus diferencias con Madero, vieron los compromisos que éste tenía con el antiguo régimen, sus vacilaciones y la contradicción entre su palabra y las acciones emprendidas por el ejército y el gobierno federales, por lo que se desengañaron poco a poco, se volvieron recelosos y, al final, se sintieron traicionados. En adelante sería su enemigo. El encono con el cual lo enfrentaron desde entonces —e incluso a sus seguidores después de su muerte— sólo se explica por la magnitud del agravio que sintieron cuando, a sus ojos, los traicionó.

Con todo, apenas unos cuantos jefes campesinos y algunos de sus seguidores fueron los que asumieron esta actitud, esencialmente defensiva. El grueso de la población de la entidad permaneció al margen de este proceso; sin embargo, quizás hubiera preferido que las partes hubiesen llegado a un acuerdo que hiciera regresar la tranquilidad a los hogares y designado un nuevo gobierno que las escuchara y atendiera.

Los jefes zapatistas, por su parte, tuvieron que percibir, racionalizar y dar forma coherente a la identidad que los había llevado a separarse del maderismo y enfrentarse a él. Eso lo harían en los meses inmediatamente posteriores, una vez que se sintieran a salvo.

Militarización contraproducente

Las fuerzas al mando de Huerta iniciaron la persecución y estrecharon el cerco en torno de los hombres de Zapata, atacando los puntos más importantes en donde tenían presencia. Así, en los primeros días de septiembre de 1911 ocuparon militarmente las poblaciones de Villa de Ayala, Chinameca, Chietla, Tlaltizapán, Huautla, Jojutla, Jonacatepec y Axochiapan. Como consecuencia de este amplio movimiento, los zapatistas, con sus fuerzas muy reducidas, se vieron obligados a dispersarse y refugiarse en las zonas aledañas de Puebla y Guerrero, lo que provocó alarma entre las autoridades locales y los jefes militares encargados de vigilar esas plazas. Las tropas federales intentaron, infructuosamente, acorralarlos y aniquilarlos. En las zonas de refugio, los zapatistas encontraron el apoyo de la población para esconderse, alimentarse y realizar acciones de hostigamiento en contra de las tropas federales y rurales. No sólo eso; la represión provocó que las fuerzas de Zapata crecieran con la incorporación de los habitantes de los lugares a donde llegaba el ejército federal, cuyas amenazas y abusos generaron el rechazo de la población y provocaron que parte de esa gente, atemorizada, se sumara a los zapatistas. Sin embargo, otros sectores de esas localidades se alarmaron por el ingreso y las

actividades de las bandas rebeldes y pidieron la protección de las autoridades y aun del ejército federal. En la segunda semana de ese mes, Zapata, al frente de una partida de sus seguidores, consiguió tomar temporalmente, a pesar de la persecución en su contra, la población guerrerense de Huamuxtitlán.[65]

La movilización del ejército federal militarizó completamente el estado de Morelos y las zonas aledañas de Puebla, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México mediante las incursiones y la ocupación permanente de las principales poblaciones y haciendas. En la persecución de los zapatistas estaban comprometidos los diversos intereses de una vasta coalición que involucraba no solamente al gobierno central y al ejército federal, sino también a las fuerzas figueroístas, a los gobernadores de Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México, a los jefes políticos y presidentes municipales de las cabeceras afectadas y, socialmente, a diversos sectores —hacendados, comerciantes y propietarios de la zona— y a las clases medias, influidas por el pensamiento conservador o temerosas de ver afectados sus intereses. Había también un componente popular en esa alianza, formado por sectores marginados que no se diferenciaban socialmente de los rebeldes.

La parte más activa de los sectores populares contrarios a la insurrección logró, en algunas localidades, la formación de cuerpos de voluntarios organizados para resistir los ataques de los alzados. Estos actores, con

[65] CESU-UNAM, FGM: Casso López a De la Barra, Cuautla, 1 de septiembre de 1911, c. 15, exp. 5, f. 14; De la Barra a Huerta, México, 19 de septiembre, c. 15, exp. 5, f. 19; Federico Morales a De la Barra, Cuautla, 2 de septiembre, c. 15, exp. 5, f. 32; presidente municipal de Chietla, administradores de las haciendas de Jaltepec y Atencingo, empleados de correos, timbres y teléfonos y principales vecinos y comerciantes de Chietla a De la Barra, 2 de septiembre, c. 15, exp. 5, f. 37, en donde le pedían que enviara una fuerza federal que los protegiera y diera garantías contra los "bandidos de Morelos"; Huerta a De la Barra, Tlaltizapán, 3 y 5 de septiembre, c. 15, exp. 5, ff. 58, 59; Huerta a De la Barra, Chinameca, 7 y 8 de septiembre, c. 17, exp. 8, ff. 62, 63; F. Figueroa a De la Barra, Chilpancingo, 8 de septiembre, c. 17, exp. 8, f. 64; Huerta a De la Barra, Jojutla, 12 de septiembre, c. 17, exp. 8, f. 65; A. Figueroa a De la Barra, Iguala, c. 17, exp. 8, f. 66; Huerta a De la Barra, Huautla, 10 de septiembre, c. 13, exp. 1, f. 1, exp. 2, f. 1; Federico Morales a De la Barra, Huautla, 11 de septiembre, c. 13, exp. 2, f. 11; gobernador de Puebla Raúl Cañete a De la Barra, 12 de septiembre, c. 13, exp. 2, f. 22, donde le indicó que había 600 zapatistas en Acatlán y pidió que Huerta marchara a proteger la zona, pues el gobierno estatal no podía hacerlo. Es posible que los números de las fuerzas rebeldes que aparecen en los informes de los gobernadores y jefes militares —como siempre ocurre en este tipo de fuentes— estén sobreestimados, con el objeto de presionar y obtener una ayuda mayor y más expedita del centro o dar la idea de un mérito mayor de las fuerzas oficiales al enfrentarse a un enemigo invariablemente superior; De la Barra a F. Figueroa, México, 12 de septiembre, c. 13, exp. 2, f. 26; F. Morales a De la Barra, Cuautla, 13 de septiembre, c. 13, exp. 2, f. 30; Martín Vicario a De la Barra, Iguala, 11 de septiembre, c. 13, exp. 2, f. 32; A. de la Fuente y Cía. a De la Barra, Tlapa, 12 de septiembre, c. 13, exp. 3, f. 31.

gran falta de coordinación, intentaron articular una estrategia contrainsurgente, para lo cual intercambiaban información sobre los movimientos y la localización de los alzados y se brindaban apoyo con víveres, dinero y recursos de guerra. Los gobernadores y caudillos de esas entidades, a pesar de su celo regionalista, aceptaron la coordinación con el ejército federal para extirpar los brotes de rebeldía y el contagio zapatista de sus áreas, en un proceso de militarización que no estuvo exento de dificultades.

La militarización trastocó la vida cotidiana de la región. La economía de guerra afectó a la población de manera diferencial, pero invariablemente tocó a todos los sectores. Los de mayores recursos económicos financiaron una parte de los gastos del ejército y de los rurales y sufrieron la mayoría de los ataques, la destrucción, la imposición de préstamos y las depredaciones de los rebeldes. Los sectores medios y bajos también padecieron, directa o indirectamente, la violencia destructiva causada por venganzas, abusos, etc.; sufrieron también, en términos generales, la interrupción o alteración de las condiciones en que se ganaban la vida y repartieron, voluntaria o forzadamente, parte de sus recursos en los gastos de campaña de los bandos enfrentados.

El 13 de septiembre, desde Jojutla, Huerta le escribió una extensa misiva a León de la Barra en la que hacía un balance de más de un mes de acciones del ejército federal en Morelos: controlaba militarmente la totalidad del estado, con fuerzas regulares apostadas en cada una de las cabeceras de los seis distritos para su resguardo; las mayores haciendas estaban custodiadas; las principales poblaciones estaban también ocupadas por las fuerzas federales, las cuales controlaban los entronques de las dos vías de ferrocarril que cruzaban la entidad –el Interoceánico y el Mexicano— y la comunicaban con el D.F., Puebla, Guerrero y Oaxaca, y podían, por lo tanto, hacer desplazamientos por esas vías en caso necesario.

Huerta evaluaba también la repercusión que había tenido la actividad del ejército en Morelos; señaló que había sembrado ahí la confianza "con la palabra, con los fusiles y con los cañones del gobierno", y declaró explícitamente que había tenido que imponerse por la fuerza y vencer la resistencia en varias de las poblaciones ocupadas: "[...] en los lugares donde nos han recibido con seriedad hemos sido serios y en aquellos donde nos han recibido con dinamita y fuego [...] hemos contestado en la misma forma, dejando siempre bien puesto el honor del ejército y sosteniendo incondicionalmente el poder del gobierno de la República". Decía que, después de todo eso, la presencia de los militares era aceptada: "En todo el estado hemos sido recibidos mal, mal, muy mal, pero al despedirnos de las diversas rancherías y poblaciones que hemos tocado, he tenido el gusto

de oír palabras que indican el deseo de que la fuerza federal no se separe del estado".[66] Sin embargo, el crecimiento de las fuerzas zapatistas y su diseminación más allá de Morelos, en parte explicados por el rechazo y el temor de la población al ejército federal, contradecían las opiniones externadas por Huerta.

Con la autorización del centro, las tropas federales iniciaron su incursión sobre las posiciones zapatistas en Guerrero. De esta forma, en coordinación con los Figueroa, la columna de Huerta marchó hacia Tlapa y Chilpancingo a mediados de septiembre y, posteriormente, marcharon hacia Zapotitlán y Tlaxiaco, en donde corrían noticias de que se encontraba una partida de 700 zapatistas. Huerta recibió instrucciones del Ministerio de Guerra en el sentido de ocupar y guarecer también Acatlán, Puebla y Huajuapan de León, donde se habían presentado desórdenes. En ninguna de estas dos entidades pudieron cercar a los rebeldes ni entablar combate formal con ellos. Los zapatistas se escabulleron y establecieron un radio de operaciones de sobrevivencia, pequeñas, típicamente guerrilleras, en las zonas fronterizas de Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Estado de México.[67] La inquietud y el temor que asaltaban a la población civil de esa extensa área no disminuyeron, a pesar de la imponente presencia federal y militarización desplegadas. Impotentes, las autoridades locales y los hacendados siguieron quejándose y reclamando el incremento y la permanencia de las fuerzas federales. El gobernador de Tlaxcala, alarmado, escribió a León de la Barra que había rumores de levantamientos

[66] Huerta a De la Barra, Jojutla, 13 de septiembre de 1911, CESU-UNAM, FGM, c. 12, exp. 1, f. 28.

[67] CESU-UNAM, FGM: Huerta a De la Barra, Jojutla, 14 de septiembre de 1911, c. 13, exp. 2, f. 37; gobernador de Oaxaca Heliodoro Díaz a De la Barra, 14, 15 y 19 de septiembre, c. 13, exp. 2, ff. 38, 63, 88, 89, donde expresaba su alarma porque una partida de 700 zapatistas se aproximaba a Zapotitlán y pedía ayuda de Guerrero y Puebla; el mismo gobernador informó, el 18 de septiembre, que fuerzas zapatistas se dirigían a Huajuapan, Silacayoapan y Ozumba, y que otras estaban cerca de Tlachilco (c. 21, exp. 2, f. 95); coronel Ernesto Castrejón a De la Barra, Tlaltizapán, 15 de septiembre, c. 21, exp. 2, f. 60; M. Vicario a De la Barra, Iguala, 15 de septiembre, c. 21, exp. 1, f. 7; A. Figueroa a De la Barra, Iguala, 17, 18, 19 y 20 de septiembre, c. 20, exp. 1, ff. 60, 68, 85, 135; F. Figueroa a De la Barra, Chilpancingo, 19 de septiembre, c. 20, exp. 1, f. 80; secretario de Guerra a Huerta, México, 19 de septiembre, c. 17, exp. 11, f. 27; Huerta a De la Barra, Chila, 2 de octubre, c. 17, exp. 11, f. 28. Vecinos de Guerrero a De la Barra, 22 de septiembre, AGN, FARD, t. 3, exp. 12, f. 35. Entre las tácticas que empleaban Huerta y León de la Barra para conseguir informes sobre los movimientos zapatistas se encontraba la otorgación de indultos a pobladores acusados de ayudar a los rebeldes para usarlos como informantes, como ocurrió en Chietla, el 20 de septiembre (CESU-UNAM, FGM, c. 20, exp. 2, f. 116). Sin embargo, es difícil evaluar el éxito de estas medidas, que en ocasiones eran sólo señuelos para atraer a rebeldes y sus colaboradores y apresarlos, como denunciaban quince zapatistas presos en el penal de Guadalajara que, al acogerse al indulto, fueron encarcelados; véase Rafael Pimienta y otros a De la Barra, Penal de Guadalajara, 23 de septiembre, CESU-UNAM, FGM, c. 23, exp. 8, f. 64.

de pueblos y agitación en las fábricas textiles de su entidad, por lo cual pedía refuerzos para calmar los ánimos.[68]

Hacia mediados de septiembre, las fuerzas zapatistas, aunque habían podido reagruparse y extenderse más allá de Morelos, se encontraban a la defensiva, desperdigadas y perseguidas en una amplia zona. Quienes los acosaban no habían podido darles caza y sólo consiguieron aumentar sus efectivos. A partir de ese momento, el zapatismo trascendió el estado de Morelos, pues su influencia militar y política comenzó a sentirse crecientemente en los estados aledaños, particularmente en Puebla. Tropas zapatistas comandadas por Zapata y Almazán se enfrentaron con fuerzas del orden entre Axochiapan e Iztacala, en el sureste morelense fronterizo con Puebla, entidad donde también tomaron el pueblo de Guadalupe y la hacienda de Villahermosa, amenazando con entrar en el poblado mayor de Acatlán; otras ocuparon los pueblos de Igualtepec, Rayón, Cieneguilla, Zapotitlán y realizaron combates cerca de Chiautla, Zacatepec y Cuicatlán (éstos dos últimos en el estado de Oaxaca). Los gobernadores y personas afectadas de estas entidades acusaron a los rebeldes de cometer depredaciones y solicitaron ayuda urgente de tropas federales.[69]

A pesar de la persecución, o quizá precisamente a consecuencia de ella, los rebeldes no habían cerrado totalmente las puertas a una posible reapertura de las negociaciones que impulsaban, sobre todo, algunos jefes foráneos recién incorporados. Esa posibilidad también convenía al gobierno. Así, en los últimos días de septiembre hubo nuevos intentos de negociación y se realizaron pláticas entre enviados gubernamentales, Almazán y otros jefes zapatistas, como Jesús Jáuregui y José Trinidad Ruiz. Estos últimos incluso fueron a la ciudad de México a entrevistarse con León de la Barra, quien rechazó sus posiciones y sostuvo que no aceptaría "imposiciones de Zapata y su gente".[70] Los jefes surianos de nuevo hicieron pública su postura: reconocían a León de la Barra como presidente provisional, pedían la destitución de los gobernadores provisionales nombrados tras el pacto de Ciudad Juárez y la elección de los nuevos por medio

[68] Gobernador Rubén Maldonado a De la Barra, Tlaxcala, 15 de septiembre de 1911, CESU-UNAM, FGM, c. 13, exp. 2, f. 71.

[69] CESU-UNAM, FGM: Federico Morales a De la Barra, Jonacatepec, 23 de septiembre de 1911, c. 21, exp. 5, f. 41; Benito Juárez [quien había asumido el gobierno de Oaxaca] a De la Barra, Oaxaca, 24 de septiembre, c. 21, exp. 5, f. 61, 26 de septiembre, c. 21, exp. 2, f. 38, 27 de septiembre, c. 21, exp. 2, ff. 58 y 59, 29 de septiembre, c. 21, exp. 6, f. 2; general Gabriel Hernández a De la Barra, Chiautla, 24 de septiembre, c. 21, exp. 6, f. 69; Rafael Cañete a De la Barra, Puebla, 25 de septiembre, c. 21, exp. 2, f. 22; Ezequiel Domínguez a De la Barra, Mapastepec, 25 de septiembre, c. 21, exp. 2, f. 18; A. Figueroa a De la Barra, Cuernavaca, 23 de septiembre, c. 21, exp. 5, f. 22; Martín Vicario a De la Barra, Iguala, 23 de septiembre, c. 21, exp. 5, f. 52.

[70] CESU-UNAM, FGM, c. 21, exp. 2: Huerta a De la Barra, Chiautla, Guerrero, 26 de septiembre de 1911, f. 29; De la Barra a Huerta, México, 29 de septiembre, f. 94.

de la voluntad popular o a través del acuerdo entre los jefes rebeldes levantados en armas; pedían también el retiro de las fuerzas federales de Morelos, Guerrero, Puebla y Oaxaca, la suspensión de las próximas elecciones federales, la abolición de las jefaturas políticas y la libertad de los presos políticos. Reiteraron, además, el contenido agrario de su lucha, al que atribuían el origen del movimiento armado: "Que se dé a los pueblos lo que en justicia merecen, en cuanto a tierras, montes y aguas, que ha sido el origen de la presente contrarrevolución".[71]

Aunque estas peticiones no iban más allá de lo que había prometido el Plan de San Luis, su cumplimiento implicaba una modificación importante de la organización política que trascendía el territorio morelense y que, de nueva cuenta, sólo podía plantearse junto con la cuestión del poder nacional. Ni el gobierno provisional ni la dirigencia conservadora dominante del maderismo estaban dispuestos a regresar las tierras a los pueblos o a dotarlos de ellas y, desde luego, era difícil concebir que el ejército federal fuera a renunciar al papel predominante que había alcanzado. Las elites económicas y los sectores conservadores no aceptarían tampoco la desmilitarización si antes no se les garantizaba la desaparición del peligro sedicioso. El gobierno federal no podía cumplir las demandas zapatistas. Si querían verlas realizadas, los zapatistas tendrían que ganárselas.

Por lo demás, las reivindicaciones agrarias del zapatismo que aparecían en un primer plano, aunque incipientes, ya no eran sólo reclamos particulares de algunas comunidades, sino reivindicaciones generales que pretendían abarcar todo el país. Tales demandas, sin duda, estaban en el origen del apoyo que encontraron los rebeldes en la zona centro-sur del país. Las nuevas formulaciones reflejaban la gestación de una mayor conciencia agraria y política del zapatismo. El gobierno central desde luego rechazó esas peticiones y continuó los movimientos militares en su contra.[72]

Para que la cuña apriete...

Madero había ganado las nuevas elecciones y preparaba el camino para tomar posesión en las mejores condiciones. Así, la coalición gobernante modificó su estrategia para controlar Morelos. La decisión de nombrar

[71] "Memorial" zapatista, San Juan del Río, 26 de septiembre de 1911, AHC, FJA, VIII-2, c. 1, leg. 64.

[72] CESU-UNAM, FGM: A. del Pozo a De la Barra, Acatlán, 20 de septiembre de 1911, c. 20, exp. 1, f. 28; Huerta a De la Barra, Chietla, 20 de septiembre, c. 21, exp. 1, f. 116, 26 de septiembre, c. 21, exp. 2, ff. 29 y 111; Huerta a De la Barra, Chila, 30 de septiembre, c. 21, exp. 4, f. 1; Gabriel Hernández a De la Barra, Ixcamilpa, 30 de septiembre, c. 21, exp. 4, f. 2; Rafael Cañete a De la Barra, Puebla, 2 de octubre de 1911, c. 21, exp 3, f. 11.

gobernador al banquero Carreón y de colocar al reyista Huerta al frente de la campaña del ejército no sólo no había acabado con la insurrección, sino que la había radicalizado y extendido. Así, pues, el maderismo decidió dar un viraje: nombrar a Ambrosio Figueroa como gobernador y sustituir a Huerta por el general Casso López. De esta manera, Madero recurría a un jefe revolucionario moderado, con fuerte arraigo en Guerrero y bien visto por las elites morelenses, para tratar de acabar con un movimiento que se estaba radicalizando. La campaña militar, entretanto, seguiría el curso que había tomado. Este cambio modificaba la relación existente entre los factores de poder regional, afianzando al clan de los Figueroa en Guerrero y Morelos. La consolidación de su poder, empero, dependería de las buenas cuentas que entregara de su encomienda: acabar con el zapatismo.

A pesar de la obligada fragmentación de sus efectivos, los jefes zapatistas pudieron regresar a Morelos y juntar una fuerza considerable, cercana a los 1500 hombres y dividida en varias partidas, que otra vez causó dolores de cabeza al nuevo gobernador de la entidad, quien tomó posesión el 25 de septiembre de 1911 y que, ante los apremiantes llamados de los hacendados, ocupó la mayor parte de su tiempo organizando partidas para batirla.[73] Al tomar posesión, Figueroa emitió un manifiesto en el que invitaba a los morelenses a volver a sus campos de labranza y a sus hogares, dado que se había conseguido derrocar a la dictadura e instaurar un gobierno democrático. Llamaba a la reorganización, la paz, la unión y el progreso de la entidad y decía:

> [...] no me pidáis programa de gobierno, porque el que yo seguiré será más o menos el mismo que he empleado como guerrillero: el orden y la honradez como medio y la libertad como fin [...] me propongo atender a todos, sin distinción, lo mismo a los fuertes que a los débiles. La propiedad, que hasta como revolucionario supe respetar será garantizada, lo mismo la pequeña que la grande [...] no me pidáis la resolución del problema agrario, porque ni mi competencia, ni el tiempo de que dispongo me bastarían para resolverlo [...].[74]

De manera transparente, Figueroa reconocía que su encomienda sólo tenía por objeto utilizar su prestigio para acabar con los rebeldes y dar seguridades a los propietarios, y que no tenía programa alguno. Los zapa-

[73] CESU-UNAM, FGM: Carreón a De la Barra, Cuernavaca, 26 de septiembre de 1911, c. 21, exp. 2, f. 23, y 28 de septiembre, c. 21, exp. 2, f. 24; A. Figueroa a De la Barra, Iguala, 26 de septiembre, c. 21, exp. 2, f. 43, y A. Figueroa a De la Barra, 4 de octubre de 1911, Cuernavaca, c. 21, exp. 3, f. 28.

[74] *Semanario Oficial del Gobierno del Estado de Morelos*, año XX, núm. 42, 28 de octubre de 1911.

tistas, ante el relevo, que significaba para ellos un nuevo agravio, continuaron con sus actividades. Francisco Pacheco, al frente de 500 hombres, pudo tomar Axochiapan el 7 de octubre de 1911. El día 20, tropas zapatistas ocuparon Yecapixtla, sin resistencia.[75]

En Puebla, mientras tanto, continuaron los enfrentamientos entre fuerzas zapatistas y las tropas federales al mando de Huerta, en las poblaciones de Chinantla y Tehuizingo; en Tepeji de Rodríguez también se efectuaron incursiones de los rebeldes. El 20 de octubre, con 500 hombres, J.T. Ruiz ocupó Apapaxco y marchó sobre Atlixco, antes de internarse en el Estado de México.[76] En Oaxaca siguieron los ataques y amagos contra localidades del distrito de Huajuapan; las tropas federales consiguieron dispersar a las partidas de alzados y apresaron a más de una decena de ellos; empero, el jefe político de Silacayoapan y el gobernador de la entidad reportaron que una fuerza de 500 zapatistas operaba en ese distrito, entre Santa Ana y Cienaguilla, y contaba con una pieza de artillería en su armamento; las fuerzas zapatistas atacaron el poblado de Ihualtepec, en dicho distrito, el 17 de octubre y, más tarde, el día 23, enfrentaron a federales en Tepetlapa, en el distrito de Huajuapan. Ante esta situación, el gobernador y los jefes políticos pidieron más tropas de refuerzo.[77] En Chilapa, Guerrero, también hubo actividad rebelde que las autoridades identificaron como zapatista.[78]

[75] CESU-UNAM, FGM: A. del Pozo a De la Barra, Acatlán, 2 de octubre de 1911, c. 21, exp. 3, f. 19; Felipe Ruiz de Velasco a De la Barra, México, 2 de octubre, c. 21, exp. 4, f. 3, 3 de octubre, c. 21, exp. 3, f. 59; vecinos de Jojutla a De la Barra, 2 de octubre, c. 21, exp. 3, f. 17; Carlos Ruiz y otros a De la Barra, Jojutla, 2 de octubre, c. 21, exp. 3, f. 17; Braulio Rodríguez a De la Barra, Jojutla, 2 de octubre, c. 21, exp. 6, f. 3; Gabriel Hernández a De la Barra, Acatlán, 5 de octubre de 1911, c. 18, exp. 2, f. 8; A. Figueroa a De la Barra, Cuernavaca, 2, 7, 10 y 12 de octubre, c. 18, exp. 2, ff. 14, 15, 16, 27, 28 y c. 19, exp. 6, ff. 9-10. Figueroa informó que Axochiapan fue atacada por más de mil zapatistas, quienes volaron el puente del ferrocarril Interoceánico y que no alcanzaron a llegar las tropas federales de Casso López desde Cuautla ni las suyas propias que estaban acantonadas en Guerrero (Figueroa a De la Barra, Cuernavaca, 8 de octubre, c. 21, exp. 4, ff. 54 y 55). Crescencio Díaz, ranchero de Jonacatepec, denunciaba asesinatos cometidos por los zapatistas contra oficiales federales y se quejaba de la situación desesperada "para la población honrada y trabajadora", en carta a De la Barra del 10 de octubre (c. 21, exp. 6, f. 47). Comerciantes de Jonacatepec informaron que evacuaron el poblado por temor a los zapatistas, pidiendo refuerzos federales y garantías para sus propiedades (c. 20, exp. 2, f. 45). G. García Aragón a De la Barra, Jonacatepec, 12 de octubre, c. 6, exp. 6, f. 13. *Diario del Hogar*, 21 de octubre de 1911.

[76] CESU-UNAM, FGM: Huerta a De la Barra, Chinantla, 4 de octubre de 1911, c. 21, exp. 3, f. 63, Acatlán, 5 de octubre, c. 21, exp. 4, f. 6; Gabriel Hernández a De la Barra, Acatlán, 5 de octubre, c. 21, exp. 4, f. 4; Eustaquio Rodríguez a De la Barra, Tepeji, Puebla, 14 de octubre, c. 22, exp. 4, f. 74. *Diario del Hogar*, 21 de octubre de 1911.

[77] CESU-UNAM, FGM: Benito Juárez a De la Barra, Oaxaca, 3, 7, 11, 13, 14, 17, 20, 23 y 26 de octubre de 1911, c. 21, exp. 3, f. 33, exp. 4, ff. 41, 53, exp. 6, ff. 41, 38, c. 22, exp. 6, ff. 10, 12, 15, 16, 20, 21, 23.

[78] A. Figueroa a De la Barra, Cuernavaca, 5 de octubre de 1911, CESU-UNAM, FGM, c. 21, exp. 4, f. 11.

Aunque a mediados de ese mes pudieron celebrarse las elecciones federales en Morelos, el estado se encontraba en efervescencia por la actividad creciente de los zapatistas, que se había multiplicado.[79] A pesar del relevo de Huerta por Casso López, la incapacidad federal para aniquilar a los rebeldes continuó siendo manifiesta; los reclamos de Figueroa al presidente de la República, en los que manifestaba su impotencia para proteger a todos los pueblos y haciendas que eran hostigados por los zapatistas, fueron cada vez más apremiantes. Una partida mayor incluso amenazó la ciudad de Cuautla, la cual tuvo que ser protegida por las propias fuerzas estatales de Figueroa, aunque para ello tuviera que dejar indefensa la ciudad de Cuernavaca. Entre las causas que explican esta incapacidad estaban la rivalidad y las dificultades que surgieron entre Figueroa y el general Casso López. Figueroa se quejó en repetidas ocasiones de que carecía de mando sobre las fuerzas federales y a eso atribuía en parte los fracasos de sus intentos y algunos de los éxitos zapatistas.[80]

En los estados aledaños también continuó la presencia de bandas rebeldes zapatistas. Jesús *el Tuerto* Morales, al frente de 600 hombres, incursionó en Oaxaca y sostuvo combates en Huajuapan, trasladándose luego a Puebla. En esa entidad, un grupo de 700 zapatistas tomó Tochimilco, en las faldas del Popo, el 18 de octubre. Las acciones de los rebeldes encontraron condiciones propicias para extenderse, gracias al apoyo y la simpatía de varias poblaciones y al contagio que se desarrolló con la protesta de algunas localidades por agravios cometidos en su contra, como el pueblo de Axocopan, Oaxaca, en donde la población se levantó en armas y se lanzó contra los caciques locales, incorporándose a los zapatistas.[81]

En el Estado de México hubo también incursiones de partidas zapatistas al mando de José Trinidad Ruiz, que ocuparon Tenango, Tianguistengo, Temascaltepec, Jaquitzingo, San Francisco, San Simón y Sultepec,

[79] *El País*, 4 de noviembre de 1911. En Puebla, las elecciones se habían efectuado dos semanas antes. El gobernador Cañete informó que se realizaron sin dificultades en la mayor parte de su entidad, excepto en el distrito de Acatlán, en donde la presencia zapatista ocasionó que se interrumpieran las comunicaciones y que no se tuviera noticia sobre la jornada electoral; Rafael Cañete a De la Barra, Puebla, 2 de octubre de 1911, CESU-UNAM, FGM, c. 21, exp. 2, f. 13; Huerta a De la Barra, Acatlán, 5 de octubre de 1911, CESU-UNAM, FGM, c. 21, exp. 23, f. 64.

[80] CESU-UNAM, FGM: A. Figueroa a De la Barra, Cuernavaca, 16, 17, 20 y 29 de octubre de 1911, c. 19, exp. 6, ff. 24, 31, 38, 39, 113, 114, exp. 1, ff. 6, 7. Hubo en esos días enfrentamientos y escaramuzas entre federales, rurales y zapatistas en las localidades de Tecalitla, San Vicente, San Gaspar, Santa Cruz, Huichila y La Presa, en el estado de Morelos; véase G. Hernández a De la Barra, San Gaspar, 20 de octubre de 1911, c. 18, exp. 2, f. 47, Tlaltizapán, 20 de octubre, c. 19, exp. 6, f. 112 y exp. 7, f. 2.

[81] CESU-UNAM, FGM: Benito Juárez a De la Barra, Oaxaca, 16 y 21 de octubre de 1911, c. 18, exp. 2, ff. 37, 48; Manuel Vital, jefe político de Atlixco, a De la Barra, 17 y 18 de octubre, c. 18, exp. 2, f. 43, c. 19, exp. 6, ff. 50, 51, 56.

en la zona montañosa occidental colindante con los estados de Morelos y México.[82] Luego atacaron poblaciones más cercanas al Distrito Federal como Ozumba, Chalco y Amecameca, y ocuparon Milpa Alta, en las afueras de la capital, el 24 de octubre; durante la ocupación realizaron saqueos en varias casas, quemaron la prefectura y los archivos municipales y liberaron a los presos. Estas incursiones, que llegaron hasta Chalco, causaron alarma entre la opinión pública de la ciudad de México.[83] Algunas de estas acciones atribuidas a fuerzas zapatistas en el Estado de México eran originadas por problemas locales de tierras, como en el caso de los pobladores de Cuentepec, que invadieron los terrenos que les habían quitado años atrás los hermanos Orihuela de Tenango del Aire.[84] El gobernador de Tlaxcala reportó que en su entidad también hacían falta refuerzos para combatir a tropas zapatistas que tenían el apoyo de varios pueblos.[85]

Rebelión agraria en gestación

La extensión de las protestas de la población marginal campesina en la zona centro-sur del país indicaba un amplio descontento en contra de autoridades, caciques, ejército federal, fuerzas rurales, comerciantes y hacendados locales, así como una problemática agraria semejante. La rebelión alentó el contagio y la ampliación del descontento, al mostrar las limita-

[82] CESU-UNAM, FGM: vecinos de Tenango a De la Barra, 25 de octubre de 1911, c. 22, exp. 1, f. 57; presidente municipal de Tenango Joaquín García Aragón a De la Barra, 28 de octubre, c. 22, exp. 5, f. 97. *Diario del Hogar*, 25 de octubre de 1911; *El País*, 2 y 3 de noviembre de 1911. En los ataques a poblaciones del Estado de México, parte de las fuerzas rebeldes pertenecía a las fuerzas de Jesús Salgado, quien se había vuelto a levantar en armas y se había declarado seguidor de Zapata.

[83] CESU-UNAM, FGM: Adalberto Tirado y otros a De la Barra, Chalco, 23 de octubre de 1911, c. 19, exp. 7, f. 14; Joaquín Hernández, jefe político de Tenango, a De la Barra, 29 de octubre, c. 19, exp. 7, f. 20; vecinos de Amecameca a De la Barra, s/f., c. 19, exp. 7, f. 15; memorándum de compañía maderera La Esperanza, pie de Popocatépetl, 19 de octubre, donde informaba que sus instalaciones habían sido asaltadas por fuerzas zapatistas el 11 de octubre, y Manuel Salvador Garay a De la Barra, Ozumba, 28 de octubre, c. 22, exp. 1, f. 36 y c. 22, exp. 6, f. 50; Manuel Medina, gobernador del Estado de México, a De la Barra, Toluca, 29 de octubre, c. 22, exp. 2, ff. 3, 5; De la Barra a Manuel Medina, México, 28 octubre, c. 22, exp. 5, ff. 8, 28. Joaquín Hernández, jefe político de Ozumba, informó el día 29 de ese mes que zapatistas tomaron e incendiaron Papalotla, c. 22, exp. 2, ff. 4, 5. José Sánchez al director del periódico *El País*, 2 de noviembre de 1911. *Diario del Hogar*, 25 y 26 de octubre de 1911.

[84] A. Figueroa a De la Barra, Cuernavaca, 19 de octubre de 1911, y Manuel Medina a De la Barra, Toluca, 21 de octubre, CESU-UNAM, FGM, c. 19, exp. 6, ff. 104 y 126.

[85] Ramón Maldonado a De la Barra, Tlaxcala, 28 de octubre de 1911, CESU-UNAM, FGM, c. 19, exp. 2, ff. 2, 13.

ciones de las fuerzas del orden para contenerla.[86] Muchas de estas acciones no eran realizadas, organizadas ni coordinadas por fuerzas zapatistas y tenían motivos locales diversos en su origen. La actitud de los alzados sirvió para catalizar un descontento que se expresó en muchas ocasiones de manera espontánea, aprovechando las incursiones de los rebeldes y la debilidad de las fuerzas del orden. La magnitud de las protestas, la extensión de las acciones y de las redes de los jefes efectivamente zapatistas se conjugaron con la incapacidad, el temor y la actitud de los gobernadores, jefes políticos, militares y periodistas que invariablemente etiquetaban de zapatistas las protestas y los movimientos que surgían en sus entidades; esta actitud hizo crecer la fama del zapatismo y contribuyó a su consolidación y desarrollo, merced a las adhesiones de diferentes movimientos de protesta y de nuevos jefes. Así, el zapatismo fue creciendo y ganando legitimidad, aglutinando los distintos brotes de descontento local en Morelos y en las zonas aledañas.

La impotencia del ejército y el gobierno federales para derrotarlos militarmente demostró que lo que estaba tomando forma en el estado de Morelos y zonas colindantes era una rebelión de diferentes grupos campesinos, incrementada por el rechazo de los pueblos a las incursiones y la violencia del ejército federal. Esas protestas, como luego reconocieron diputados conservadores y funcionarios de alto nivel del gobierno provisional, tenían fuerte arraigo local y estaban adquiriendo el carácter de una rebelión agraria. Lo que daba fuerza al zapatismo y a su líder era precisamente su identificación con las aspiraciones de pueblos agraviados por los caciques y las oligarquías locales, aunada al temor de las poblaciones por las acciones contrainsurgentes emprendidas por el ejército federal; tales simpatías, miedos y aspiraciones dieron sentido a la resistencia, las demandas y los llamados a no entregar las armas por parte de Zapata y sus seguidores, a la vez que sirvieron como polo aglutinador de su movimiento.

La propagación de la revuelta y de la influencia de las actividades rebeldes a las zonas colindantes con Morelos y el apoyo que encontraron los alzados se explican, en primer término, por el rechazo que suscitó la

[86] Varios comerciantes de Cuautla reconocieron que los habitantes de la ciudad eran completamente partidarios de Zapata y, desde los primeros días de noviembre de 1911, el gobernador de Morelos Figueroa destituyó a varias autoridades locales que simpatizaban abiertamente con el zapatismo (*El País*, 3 y 18 de noviembre de 1911). El corresponsal del *Diario del Hogar* señaló reiteradamente que el zapatismo tenía el apoyo de la población porque la defendía de los abusos que cometían tanto el ejército como las fuerzas de Figueroa. En un editorial, este periódico señaló que la política de León de la Barra, del ministro de Gobernación García Granados y de Figueroa sólo había conseguido aumentar la fuerza del zapatismo en todo el estado de Morelos; véase *Diario del Hogar*, 25 y 27 de octubre de 1911.

intervención del ejército federal en la región y la oposición a sus abusos, los cuales llevaron a la población ofendida a identificarse o refugiarse con los rebeldes. A la protesta se sumaron también los agravios cometidos por las autoridades locales contra la población: en Zacatlán, Puebla, el jefe político, que había había abandonado el cargo en los últimos días del régimen de Díaz, regresó para cometer atropellos contra la población, e incluso asesinó a varios habitantes opositores; en Tequisquiac, Estado de México, varios vecinos se quejaron de las persecuciones emprendidas en su contra por el jefe político y exigían el reconocimiento de las nuevas autoridades que habían elegido recientemente; en Huajuapan, Oaxaca, los habitantes protestaron por el impuesto de capitación que les exigía el jefe político; en Zautla y Tepeyahualco, Puebla, el presidente y el tesorero municipales se apoderaron de los pocos recursos del municipio y obligaban a los indígenas a pagarles sus servicios con animales, los que cotizaban a precios muy bajos.[87]

Odios más recientes se habían desatado contra el ejército federal, como ocurrió en Tláhuac, en el Distrito Federal, en donde, a fines de octubre, un batallón de soldados, so pretexto de perseguir a una partida zapatista, asesinó a varios peones y milperos que estaban laborando; el llanto y las súplicas de las mujeres para que no mataran a sus maridos no sólo fueron inútiles, sino que la tropa las violó y luego emprendió una redada que terminó en el asesinato de jóvenes y viejos desarmados. En el Estado de México, el jefe del 28º regimiento fusiló a cuatro campesinos de Totolapan por considerarlos zapatistas y apresó a varios niños para que le dieran informes de los rebeldes.[88]

Empero, el factor que más influyó en la adhesión que suscitó la revuelta y que hizo que su influencia se extendiera más allá de las zonas en las que actuaba el ejército fue el problema de la tierra. El zapatismo comenzó a ser visto y a ganar fama como adalid de la causa agraria y una infinidad de testimonios contemporáneos dan cuenta de ello. Así, pues, fue la conjunción de estos cuatro factores —el rechazo de la ocupación militar, la necesidad de tierras, la pérdida de legitimidad de las autoridades y de los mecanismos locales de autoridad y control tradicionales ante el vacío de

[87] Pedro González y otros vecinos a De la Barra, Huajuapan, 8 de octubre de 1911, CESU-UNAM, FGM, c. 21, exp. 6, f. 15; *Diario del Hogar*, 15 de junio y 18 de julio de 1911; *El País*, 3 de noviembre de 1911.

[88] C. Munguía a Trinidad Sánchez, director de *El País*, *El País*, 3 de noviembre de 1911. Dicho ataque había sido instigado por el propietario de la hacienda de Xico, quien además había organizado por la fuerza una banda de voluntarios entre los peones de su hacienda. Este personaje acusaba a varios de sus peones de haber dado información a los zapatistas sobre quiénes eran los más ricos del lugar, facilitando con ello el saqueo (*El País*, 8 de noviembre de 1911; *Diario del Hogar*, 24 de octubre de 1911).

poder, y la incapacidad de la coalición maderista parar encauzar la satisfacción de reformas sociales y económicas— lo que llevó a que, en pleno régimen de transición, ocurriera el deslinde y la radicalización de un movimiento campesino que había estado hasta entonces subordinado al maderismo.

Después de dos meses, los esfuerzos del ejército federal para desarmar a los zapatistas habían sido infructuosos y las elites estaban alarmadas. En la Cámara de Diputados, varios de sus miembros reconocieron que en Morelos se estaba desarrollando una rebelión agraria que, una vez desatada, ni siquiera la desaparición de Zapata podría contenerla. Algunos diputados conservadores achacaron a Madero la responsabilidad directa de la rebelión zapatista por haber ofrecido la devolución de tierras a los pueblos, y lo acusaron de obstaculizar los esfuerzos del ejército federal y de proteger a Zapata. Los diputados exigieron la comparecencia de los funcionarios responsables de la campaña. Ante el Congreso, el subsecretario de Guerra González Salas reconoció que no se había podido reducir a los zapatistas debido al apoyo que encontraban en los pueblos, y que su influencia se había extendido hasta Oaxaca. El secretario de Gobernación García Granados tuvo que reconocer que el fondo del problema era agrario y que por tal motivo el gobierno había decidido la creación de una comisión que se dedicara a resolverlo. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores expresó que el gobierno era consciente de la imposibilidad de acabar con un movimiento guerrillero de gran movilidad mediante un ejército de línea como el federal y que, por ello, se había optado por utilizar a las fuerzas rurales de los Figueroa; sin embargo, no se había conseguido aún la eliminación de los rebeldes por el apoyo que éstos recibían de la población rural de las localidades.[89] Todos estos testimonios confirmaban la percepción que una parte de las elites políticas tenía de la situación del país: una creciente rebelión agraria en el centro-sur del país, que se convertiría en el principal problema político del nuevo gobierno constitucional encabezado por Madero.

El 4 de noviembre de 1911 concluyó el interinato. El presidente provisional leyó su informe final ante la Cámara de Diputados. En él se refirió al problema de la pacificación del país como el asunto central de su gobierno y refirió con detalle lo acontecido en Morelos:

> En Morelos el problema del desarme y dispersión de las fuerzas revolucionarias encontró, desde un principio, más serias y graves dificultades [...] pues aunque en apariencia aquellos hombres se manifestaban dispuestos a

[89] Magaña, *op. cit.*, t. 2, pp. 28-48.

> regresar pacíficamente a sus labores, primero de una manera oculta, y más tarde en forma descubierta, adoptaron una actitud insumisa, que bien pronto degeneró en un manifiesto movimiento de bandolerismo. Ante este movimiento, y teniendo en cuenta las apremiantes solicitudes de un grupo muy considerable y caracterizado de vecinos de Morelos, el Ejecutivo resolvió el envío de un Cuerpo de tropas, con instrucciones precisas y terminantes de perseguir tenazmente a los malhechores.

Ante el fracaso de los buenos oficios que interpuso Madero, dijo León de la Barra, el gobierno provisional decidió que se les persiguiera hasta someterlos. Explicaba la incapacidad del ejército para cumplir este cometido por la dispersión y movilidad de las partidas zapatistas y su conocimiento del terreno, que hacía muchas veces estériles los empeños federales. Sin embargo, la principal dificultad para someter a los rebeldes obedeció al hecho de que

> el jefe del movimiento sedicioso se hizo popular entre las clases incultas del estado por ofrecimientos de repartición de tierras, sin tener en cuenta los derechos de propiedad y halagando por este y otros medios semejantes las pasiones de los individuos de la clase más humilde, que no se dan cuenta de que la situación económica de ese estado no se modifica por actos violentos y contrarios a las leyes.

En ese discurso, León de la Barra reconoció el trasfondo agrario de la revuelta y aprovechó para obligar a Madero a definirse sobre ese tema y ponerle límites, al declarar:

> Las promesas hechas en nombre de la Revolución respecto a la cuestión agraria, han despertado esperanzas entre aquellas gentes, que suponen que al inaugurarse el gobierno que sustituirá al interino, lograrán ver realizados sus deseos de entrar en posesión de tierras prometidas, sin pensar que este problema debe ser resuelto dentro de la ley, y conforme a un plan cuidadosamente meditado.[90]

Así, pues, el propio gobierno federal, por voz del presidente interino, reconocía que la difusión del zapatismo se debía a una reivindicación agraria que había encontrado simpatías entre la gente de escasos recursos de una amplia zona que incluía cinco estados colindantes. Esas reivindicaciones agrarias habían tomado la forma de una rebelión que había

[90] *El País*, 5 de noviembre de 1911. Ese mismo día, Huerta entregó formalmente su informe final como jefe de la campaña y en él ofreció un balance muy optimista: el estado se encontraba pacificado; se había logrado expulsar a los zapatistas de él; tropas federales guarnecían las principales ciudades y haciendas; la vigilancia y persecución de las partidas rebeldes que quedaban sería labor de las fuerzas rurales de la entidad *(ibid)*.

crecido, a pesar de los grandes esfuerzos del gobierno provisional y de Madero para contenerla.

Era una rebelión campesina endógena que aprovechó el impulso dado por Madero a las energías y reivindicaciones sociales, económicas y políticas contenidas durante el porfiriato. Se había desprendido del maderismo como una reacción de sus líderes ante la exclusión de que fueron objeto por la dirigencia maderista y como rechazo a la injerencia foránea de los Figueroa y del centro; luego se extendió al catalizar y despertar la necesidad de tierras de sectores rurales marginales, creando condiciones para que aflorara la indignación por el cúmulo de agravios recibidos. Estos factores se conjugaron con la debilidad del poder político, la cual era el producto de la indefinición y la falta de consolidación de una hegemonía nacional que no terminaba de crearse.

Con la conclusión del gobierno provisional y la extensión del zapatismo como parte de una rebelión agraria que comenzaba a desarrollarse en el centro-sur del país, se cerraba esta etapa decisiva del movimiento de los rebeldes morelenses. Durante el interinato se vivió intensamente un periodo de acercamiento, de reconocimiento, de puesta en juego de diversas iniciativas que implicaban concesiones y posiciones de poder entre los actores; muy pronto, tales iniciativas resultaron estériles. Sin embargo, fueron cinco meses de intensa vida política en toda la nación y en ese lapso los distintos sectores y clases sociales pusieron en juego sus intereses y visiones en una complicada trama que comenzó a definir la transición del país. También durante ese periodo, los actores involucrados en la escena morelense se reconocieron y probaron. La inercia de los intereses y fuerzas puestos en tensión y la actitud asumida por los principales actores determinaron el rompimiento de los rebeldes con el centro político nacional y su enfrentamiento con el ejército y la oligarquía regional. A principios de noviembre de 1911, el ejército federal controlaba la mayor parte de un amplio territorio; se habían iniciado las hostilidades y se extendía la guerra a cinco entidades del centro-sur, en vísperas de la asunción de Madero a la primera magistratura.

CAPÍTULO IV. EL ZAPATISMO Y EL RÉGIMEN DE MADERO. LA CONSOLIDACIÓN DE UN PROYECTO INDEPENDIENTE

La identidad que el movimiento zapatista había perfilado durante el interinato adquirió forma precisa con el Plan de Ayala, documento generado endógenamente por los líderes zapatistas, en el que expresaban las demandas agrarias de los sectores rurales marginados del campo morelense, así como una vía de solución radical: los pueblos debían recuperar sus tierras y aguas y defenderlas con las armas en la mano. El Plan de Ayala dio legitimidad a la causa zapatista y tuvo el efecto de incrementar las fuerzas de los rebeldes al convertirse en una bandera que atrajo a poblaciones con necesidades agrarias semejantes de la región centro-sur del país.

El desarrollo de una insurrección de marcado carácter agrario y con una alta dosis de violencia de clase fue condenado y enfrentado por el nuevo régimen maderista con la misma violencia que sus predecesores, lo que provocó fuertes polémicas y divisiones en el seno de la conflictiva coalición maderista. Un sector progresista, de procedencia magonista, que constituía el ala izquierda del nuevo régimen, comenzó a ser atraído por la rebelión campesina y se convirtió en un núcleo crecientemente crítico de la política empleada por Madero para desactivar la insurrección. El régimen maderista ensayó varias medidas para acabar con la insurgencia, tras el fracaso de los Figueroa: intentó cooptar a líderes y sectores progresistas con una política de apertura; emprendió una táctica de contrainsurgencia que combinó la aplicación de una legislación draconiana en contra de los rebeldes con una táctica de guerra sin cuartel que incluía la quema de poblados y la reconcentración de la población civil en lugares controlados por el ejército. Tales medidas fueron insuficientes y dieron por resultado que la rebelión se enraizara y extendiera aún más, adquiriendo una dinámica que la convirtió en el desafío político regional más serio al maderismo, que minó la base social, el prestigio y la legitimidad de Madero, en un proceso que polarizó a los distintos sectores y grupos de la política nacional. A mediados del gobierno constitucional de Madero, en una importante zona del centro-sur del país estaba en marcha una insurrección agraria con programa y liderazgo propios y en vías de radicalización.

Madero, presidente

Las visitas a Morelos y el hecho de haberse involucrado personalmente en las negociaciones con los surianos permitieron a Madero formarse una idea muy completa de los motivos y las razones que había detrás de la rebelión zapatista. El conflicto de Morelos produjo una intensa discusión y escisiones entre la elite política maderista. La legitimidad de la rebelión zapatista, sus características, su fortaleza y su debilidad habían sido reconocidas no sólo por progresistas políticos y funcionarios maderistas, sino también por personas vinculadas al porfirismo y aun por Madero mismo, quien confiaba que, una vez que asumiera la presidencia, podría obtener la rendición de los rebeldes.[1] Madero tomó posesión como presidente constitucional de la República el 6 de noviembre de 1911.[2]

A pesar de estar huyendo y a la defensiva, Zapata y sus hombres quisieron comprobar si el trato que Madero les dispensaba cambiaría al asumir éste la presidencia. Por lo pronto celebraron el acontecimiento y volvieron a recibir a Gabriel Robles Domínguez, con el cual acordaron, el 8 de noviembre, nuevas bases para la rendición de sus fuerzas, tras reiterar las condiciones que habían sostenido tres meses atrás. Pedían el retiro de Figueroa; la salida de las tropas rurales al mando de Federico Morales; el indulto para todos los rebeldes; una ley agraria para mejorar la condición de los trabajadores del campo; la salida del ejército federal en 45 días; la incorporación de 500 zapatistas a las fuerzas rurales de la Federación, cuya jefatura recaería en Raúl Madero o en Eufemio Zapata. Para allanar las dificultades, Zapata se retiraría a la vida privada y abandonaría Morelos; además, solicitaron al gobierno la entrega de 10000 pesos por el gobierno para pagar préstamos hechos por la revolución, y el nombramiento del gobernador del estado por los jefes rebeldes en acuerdo con Madero. Es decir, las mismas peticiones que habían sostenido reiteradamente y que no habían sido aceptadas. ¿Por qué?[3]

Resulta difícil pensar que creyeran que Madero podía cumplir peticiones tales como la de sacar al ejército, a los rurales y a Figueroa de Morelos a cambio del retiro de Zapata a la vida privada; tampoco que esperaran la promulgación de una ley agraria. Ya habían tenido oportunidad de verificar que Madero no compartía esas posturas. Pero quizá

[1] Madero a De la Barra, Parras, Coahuila, y Madero a Huerta, Parras, 31 de octubre, AHC, FJA, VIII-2, carp. 1, leg. 66; Magaña, *op. cit.*, t. 2, pp. 49-51 y 57-59.

[2] *El País*, 7 de noviembre de 1911.

[3] Zapata a Madero, Villa de Ayala, 6 de noviembre de 1911, en Fabela, *op. cit.*, p. 27. Condiciones para la rendición de las tropas zapatistas, Villa de Ayala, 11 de noviembre de 1911, AHC, FJA, VIII-2, carp. 1, leg. 67; *Diario del Hogar*, 9 y 10 de noviembre de 1911. La prensa capitalina vio con esperanza un posible y definitivo arreglo, ilusión que pronto se vino abajo.

conservaban todavía una remota esperanza de que Madero cumpliría lo que, por diversas circunstancias, no había hecho antes. Existía también un sector del maderismo que no quería romper las hostilidades y masacrar a los alzados y que veía en éstos un medio de presión para que el nuevo régimen realizara las reformas sociales que aquél consideraba indispensables. Y, para los propios rebeldes, la ruptura y profundización de los enfrentamientos no eran deseables, máxime cuando tenían al ejército detrás de ellos y comenzando a atacar a la población civil.

En todo caso, si la negociación no rendía frutos, no sería por su falta de interés. Si Madero no aceptaba, la responsabilidad sería suya. Es posible que buscaran tener elementos para responsabilizarlo ante la opinión pública. También podía ser que pidieran mucho de entrada para, al negociar, ceder y obtener una parte. Sin embargo, los zapatistas no estaban en condiciones de exigir ni tenían la fuerza suficiente para imponerse, por lo que tales peticiones podían reflejar más bien una declaración de objetivos que justificaba su decisión de rebelarse, ante la probable negativa de Madero. Era difícil también que Robles Domínguez fuera representativo de la línea dominante en el maderismo al acordar tales bases con los rebeldes. Por lo tanto, el grado de compromiso real de cada una de las partes ante estas propuestas era reducido, sobre todo después de la ruptura de hostilidades, de la presión ejercida por las elites regionales, de una parte de la opinión pública capitalina y de la fuerza que había adquirido el ejército federal en la zona. Estaba también el empuje de los sectores populares que constituían la base social del maderismo y del zapatismo y que pretendían conseguir una salida negociada. Finalmente, la posición ideológica y la claridad política de los líderes zapatistas no estaba consolidada, ni el desengaño de Madero era un hecho establecido. Seguían alimentando ilusiones de que las cosas podían cambiar, por lo que abrigaban una última esperanza: con el gobierno en sus manos, Madero podría sacar al ejército, atemperar la beligerancia de los hacendados y aceptar la legitimidad de sus demandas.

Algunos pueblos habían recuperado sus tierras, como en el caso de Amacuzac, Morelos, donde varios indígenas escribieron a Madero pidiéndole apoyo para no volver a perderlas, pues las habían recuperado al amparo del Plan de San Luis. Para pueblos como éste, el que hubiera guerra, más que una garantía, era un riesgo de perder lo recuperado. ¿Hacia dónde empujarían? ¿Qué debían hacer sus líderes?[4]

El zapatismo había comenzado a polarizar las opiniones, por lo menos de una parte de la sociedad más participativa de la época. Los más conservadores eran rabiosos partidarios de acabar con él. Otros, progresistas,

[4] Véase Remigio Ocampo a Madero, Amacuzac, 15 de noviembre de 1911, AFIM, c. 64, f. 2764.

consideraban que sus demandas eran legítimas y que había que atenderlas, aunque discreparan de los métodos violentos que usaban para conseguirlas. La mayoría no quería que corriera la sangre. Madero se enfrentó al mismo dilema de los meses anteriores: ¿debía llevar la revolución hacia adelante o ponerle freno? Y, en el primer caso, ¿hasta dónde?

El problema de Morelos incidía directamente en esta decisión. En el seno del maderismo volvió a ocurrir una fuerte polarización entre partidarios de la línea dura, conservadora, representada por Gustavo y Ernesto Madero, Rafael Hernández, Manuel Calero y otros colaboradores, por una parte, y otra ala negociadora, más tolerante, representada por Juan Sánchez Azcona y los hermanos Robles Domínguez. A la izquierda de éstos estaba el sector de liberales radicales que se aglutinaba en las páginas del *Diario del Hogar*.[5] Madero, que tenía afinidad de intereses e ideología con los conservadores y compartía con ellos una identidad de clase, asumió una actitud que, en esencia, era la misma que la adoptada por León de la Barra: la razón de Estado y su posición de clase lo obligaban a aceptar únicamente la rendición incondicional de Zapata y el desarme de las tropas rebeldes, a cambio de lo cual daría a éstas el indulto y a aquél el exilio. El

[5] *El País*, 12, 13 y 14 de noviembre y 2 de diciembre de 1911. Este periódico católico, conservador, publicó varios editoriales en los que negaba que en Morelos existiera problema agrario. Presentaba una visión muy favorable de las condiciones laborales que ofrecían los hacendados a sus trabajadores, los altos salarios que pagaban, los servicios médicos que proporcionaban, etc., y emitió juicios virulentos contra Zapata y sus seguidores, a los que no bajaba de delincuentes sanguinarios; véanse los editoriales de los días 16, 20 y 25 de noviembre y del 2 de diciembre de 1911. La misma línea conservadora y los juicios mordaces en contra del zapatismo se expresaron en *El Imparcial*, periódico que desde junio había popularizado el epíteto de *Atila del Sur* para Zapata y exigía mano dura para acabar con él. Esta postura contrastaba notablemente con lo que publicaba en esos mismos días *Nueva Era*, periódico que representaba a una parte del ala reformista maderista, en cuyas páginas se insistía en reconocer que en Morelos había un grave problema agrario, que estaba en el origen de la revuelta zapatista, y que el gobierno debía dedicarse a resolverlo. El *Diario del Hogar*, por su parte, tomó abierto partido por los zapatistas y por la causa agraria que consideraba era el origen de la revolución y de los problemas en Morelos. Antonio I. Villarreal expresó que era necesaria la devolución de las tierras que les habían arrebatado a los pueblos. El editorial del 19 de noviembre declaró enfáticamente que Zapata había "encarnado el anhelo de reivindicación de los oprimidos de la gleba, que lo siguen porque con él esperan llegar a la realización de sus esperanzas, al término de su esclavitud y su miseria [...] llamar bandolerismo a un levantamiento de millares de gentes, extendido por vastas regiones y sostenido por las simpatías populares es sencillamente estúpido [...] si esto es ser zapatista, somos zapatistas, y si esto es defender el bandolerismo, defendemos el bandolerismo". A. Ruiz Estrada, médico de Jonacatepec, quien había sido médico de las haciendas de la familia García Pimentel hasta 1907, envió una carta al *Diario del Hogar* en la que negó lo asentado por *El País*: los hacendados no tenían una actitud paternal, despojaron de sus tierras a los habitantes, lo que les quedaba a los que arrendaban tierras no les alcanzaba para vivir y urgía para que se expropiaran los terrenos que necesitaran los pueblos. Véase *Diario del Hogar*, 10, 14, 19, 24, 28 y 30 de noviembre y 14 de diciembre de 1911.

Estado, como instrumento de dominación y control de clase, no había cambiado. La posición de Madero con los zapatistas era la misma que la de Díaz y León de la Barra.

Sin embargo, Gabriel Robles Domínguez consideró aceptables los puntos acordados y trató de convencer de ello a Madero. Las elites locales y nacionales, por el contrario, endurecieron su postura y presionaron a Madero para que no aceptara las condiciones zapatistas. Viendo perdida su causa, Gabriel Robles Domínguez quiso ayudar a Zapata y en una carta se ofreció a acompañarlo —junto con los hombres que él determinara y al lugar que él escogiera— y a permanecer a su lado. También le dio su palabra de honor de que en tres meses se repartiría la tierra a los agricultores pobres. Zapata no contestó la misiva y fracasó así el último intento de negociación entre el régimen de Madero y los rebeldes.[6]

La negociación fue desechada por Madero, que actuaba como jefe de Estado y quería acallar las críticas de las elites y los sectores de la opinión pública que lo acusaban de debilidad o de solapar la rebelión. Para hacer efectiva su postura giró instrucciones a las fuerzas federales, al mando de Casso López, para que rodearan Villa de Ayala, donde se encontraba Zapata. El 13 de noviembre estallaron las hostilidades; durante la noche, las tropas de Zapata rompieron el cerco.[7]

En los días siguientes hubo combates entre fuerzas de Zapata y tropas rurales en las inmediaciones de Villa de Ayala;[8] los zapatistas tuvieron que abandonar el estado y refugiarse en las vecinas tierras poblanas.[9] En esa región fronteriza, los zapatistas encontraron el apoyo de la población, la cual los proveía de víveres, los protegía de los federales y rurales e, incluso, se sumaba a sus fuerzas. En Jacalpan fueron recibidos con júbilo por la población, que organizó una corrida de toros en la cual Zapata tu-

[6] Madero a G. Robles Domínguez, Chapultepec, 12 de noviembre, G. Robles Domínguez a Zapata, Cuautla, 13 de noviembre, Gabriel Robles Domínguez a Madero, México, 20 de noviembre de 1911, AHC, FJA, carp. 1, legs. 68, 69 y 70.

[7] Magaña, *op. cit.*, t. 2, pp. 85-103; *Diario del Hogar*, 15 de noviembre de 1911. El 20 de noviembre de ese año, Gabriel Robles Domínguez, dolido, escribió a Madero que no entendía su actitud y lo conminaba a rectificar y suspender los ataques. De lo contrario, auguraba una larga guerra fratricida, pues los zapatistas eran tan numerosos como los habitantes de Morelos y de "muchos de los distritos colindantes de Guerrero [...] Puebla y todo el sur del Distrito Federal" (Magaña, *op. cit.*, t. 2, pp. 103-106).

[8] *El País*, 15 y 16 de noviembre de 1911.

[9] Guillermo García Aragón, jefe de rurales cercano a Figueroa y comandante de uno de los destacamentos que perseguían a las partidas zapatistas, informó de un combate que libró el 24 de noviembre cerca de Santa Ana, en Puebla, contra 800 alzados —encabezados por el jefe zapatista más importante de esa zona de Puebla, Jesús *el Tuerto* Morales—, a los que, según dijo, les causó 62 bajas (*El País*, 25 de noviembre de 1911). Antes, *el Tuerto*, al mando de 300 hombres, se había apoderado de Tochimilco, plaza que abandonó después de sostener un combate con los rurales (*El País*, 23 y 24 de noviembre).

vo que dar unos capotazos. En el poblado de Apanotla, cerca de Atlixco, el jefe político prohibió el grito de "¡Viva Zapata!" porque, según informó, en ocasiones anteriores había sido el preludio para que la gente se congregara, causara alborotos, desmanes e, incluso, algunas muertes.[10] El arribo de los rebeldes de Morelos a tierras poblanas causó alarma entre diversos sectores. Algunos grupos de comerciantes, profesionales, agricultores e industriales se organizaron para defenderse de posibles ataques emprendidos por los alzados y pidieron ayuda al gobierno central para proveerse de armas y municiones.[11] La actividad de los rebeldes continuó, particularmente en Puebla, donde José Trinidad Ruiz tomó San Lucas Matlala y el pueblo de Huaquechula en el distrito de Atlixco; otra partida, formada por indígenas de la localidad, saqueó la hacienda de Jalatlaco, en ese mismo distrito. En esos ataques, los rebeldes contaron con la colaboración de la población local, como había ocurrido antes en el caso de Milpa Alta y en la hacienda de San Vicente, en Morelos.[12]

Comenzó entonces la guerra frontal entre Madero y los surianos. En los días que siguieron, para dar legitimidad nacional a su rebelión y contrarrestar la opinión que habían propagado los periódicos capitalinos de que eran bandidos que no tenían bandera, los jefes zapatistas maduraron y dieron forma programática a las demandas y peticiones que habían realizado en los meses anteriores. De manera inédita y diferenciada del resto de las fracciones y movimientos regionales que tomaron parte en la revolución mexicana,[13] los jefes zapatistas, a fines de noviembre de 1911, elaboraron un acabado plan político, económico y social, con el que intentaban incidir, en todo el país, en el curso de los acontecimientos. Plasmaron en él la visión de un movimiento campesino radical que aspiraba a tomar el poder político nacional y a solucionar los que consideraban problemas medulares del país. El zapatismo dio así un salto cualitativo con el que inauguraba una nueva etapa que tendría amplias repercusiones en el curso de la revolución mexicana.

[10] *El País*, 18 y 21 de noviembre de 1911.

[11] Albino Ibarra, Juan Córdoba y otros treinta comerciantes, profesionales, agricultores e industriales de Villa de Juárez a Madero, Huachinango, Puebla, 16 de noviembre de 1911, AGN, FFM, c. 2, exp. 38-1, ff. 1415-1417.

[12] *El País*, 8 y 12 de noviembre de 1911; *Diario del Hogar*, 19 de noviembre de 1911.

[13] Inédito en el sentido de los nuevos grupos y corrientes que se formaron y movilizaron a partir de la rebelión maderista. El Plan de Tacubaya, por ejemplo, no dio pie a la constitución de un movimiento político organizado y no pasó de ser una influencia ideológica entre los grupos ubicados a la izquierda de Madero. El programa del PLM tampoco pudo continuar como una corriente propia, con fuerza en el país, durante la década revolucionaria. El Plan de Guadalupe carrancista estuvo lejos de tener el alcance y la radicalidad del Plan de Ayala.

El Plan de Ayala

El Plan de Ayala es el documento básico y la clave para entender el movimiento zapatista que, con él, definió su identidad y el cuerpo de ideas que constituirían el eje de su programa y de su actividad durante los siguientes años. Como texto fundador del zapatismo, el Plan de Ayala constituye un documento sumamente acabado y original; en el terreno de las ideas y de la concepción general representa la culminación de la experiencia de los zapatistas, desde que decidieron levantarse en armas contra Díaz hasta su ruptura con Madero.

Como ha señalado Womack, en el plano de las influencias ideológicas, el Plan de Ayala es heredero de una buena parte de la tradición liberal mexicana, desde Juárez y los hombres de la Reforma hasta los magonistas del Partido Liberal Mexicano, de la identidad nacional emanada de la historia patria en su versión liberal, así como de influencias, entonces recientes, como el vazquista Plan de Tacubaya, en cuya elaboración y difusión participaron, entre otros, los hermanos Magaña y Paulino Martínez, quienes poco después se unieron al zapatismo.[14] Sin embargo, lo que distingue al Plan de Ayala es su énfasis en plantear el origen agrario de la revolución de 1910 y la necesidad de resolver de raíz el problema del campo; llega incluso a proponer la ocupación y la defensa, con las armas en la mano, de las tierras que necesitaran los pueblos, así como la toma del poder del Estado por los ejércitos revolucionarios para efectuar estas reformas. Finalmente, plantea la adecuación del orden jurídico y político nacional a esta transformación agraria.

En esas formulaciones, los jefes zapatistas recogieron y radicalizaron la postura que habían defendido durante las negociaciones con el maderismo. Esa experiencia fue determinante para tomar la decisión, para ellos

[14] El Plan de Tacubaya, pronunciamiento hecho por una corriente opositora a Madero y firmado por Paulino Martínez, Policarpo Rueda y Francisco I. Guzmán, apareció públicamente el 31 de octubre de 1911. En él se reivindicaba la revolución estallada el 20 de noviembre de 1910, se le calificaba de gloriosa y se acusaba a Madero de traidor a los ideales que había enarbolado, en provecho propio, de su familia y de otros líderes que traicionaron igualmente la revolución. Declaraba nulas las elecciones que habían dado la presidencia constitucional a Madero, declaraba disuelto el Congreso y ponía énfasis en señalar que dicho plan tenía por objeto llevar a Emilio Vázquez Gómez a la presidencia para el cumplimiento de los ideales revolucionarios. Acerca de éstos, señalaba que el problema agrario era el principal mal que aquejaba al país y del cual se derivaban todos los demás, por lo cual debía resolverse de inmediato, sin esperar a alcanzar el triunfo de la revolución. Véase Manuel González Ramírez, *Planes políticos y otros documentos*, s.p.i., pp. 55-60. Ángel Barrios, personaje notable de Oaxaca que formó parte del maderismo electoral, luego se rebeló contra lo que consideraba una traición de Madero a las promesas del Plan de San Luis y finalmente se adhirió al zapatismo, también apoyó el Plan de Tacubaya; véase *Diario del Hogar*, 3 de enero de 1912.

difícil y dolorosa, de romper con Madero, identificarlo como traidor y llamar a derrocarlo. El Plan de Ayala, a la vez que mantenía las demandas de autonomía política y militar de los rebeldes morelenses y su rechazo a toda clase de injerencias, representaba una superación de la problemática local, al plantear como factor decisivo la toma del poder central y la reorganización de todos los niveles de la autoridad política, desde el presidente de la República hasta los gobernadores y los funcionarios municipales. En esa reorganización política, los actores centrales debían ser los revolucionarios de todo el país. Los enemigos, claramente identificados, eran los científicos, los representantes e instituciones del antiguo régimen y las personas que, como Madero, habían traicionado la revolución y habían pactado con los enemigos.

El Plan de Ayala se consideraba a sí mismo como heredero —continuación y complemento— del Plan de San Luis; reclamaba para sí la legitimidad del manifiesto maderista y se presentaba a sí mismo como el programa que reflejaba las aspiraciones de la nación que se había levantado en armas contra el régimen porfirista.

Inscribiéndose en esa legitimidad, declaraba traidor a Madero por incumplimiento del compromiso y el programa que había elaborado. El Plan de Ayala era una declaratoria de guerra contra Madero y, al mismo tiempo, la formulación más acabada de su proyecto de revolución. Comenzaba detallando la traición de Madero, su alianza con los sectores porfiristas, su defensa de los privilegios de las clases propietarias y su combate a los verdaderos revolucionarios. En consecuencia, lo desconocía como jefe de la revolución y llamaba a derrocarlo. Para encabezar la insurrección, el plan proponía a Pascual Orozco, el jefe rebelde más destacado de la etapa maderista insurreccional; de esa manera pretendía sumar la legitimidad y el prestigio de Orozco a una alianza que vincularía a los rebeldes morelenses con los rebeldes norteños. Si Orozco no aceptaba, la jefatura del proceso recaería en Zapata. Los surianos, en contraste explícito con Madero, asumían el compromiso de no "hacer transacciones ni componendas políticas" con los enemigos de la revolución y luchar hasta conseguir el triunfo de sus principios.

En los cinco primeros artículos del Plan de Ayala, Zapata y Montaño hacían un ajuste de cuentas con Madero, quien había dejado la revolución a medias y se había convertido en un obstáculo para su desarrollo. Sin embargo, la originalidad del Plan de Ayala estriba precisamente en los postulados que iban más allá de esta continuidad con el proyecto maderista original. El artículo sexto, el más importante, establecía que los pueblos y los individuos que habían sido despojados de sus tierras, aguas y montes por hacendados, caciques y científicos entrarían en posesión inmediata de ellos y los defenderían con las armas en la mano. Después del triunfo

de la revolución, tribunales especiales recibirían y resolverían las reclamaciones de los hacendados y terratenientes que se consideraran con derechos sobre ellos. Expresaba, pues, el derecho de los pueblos despojados de sus recursos para restablecer la justicia rota. La función del Estado y de los distintos niveles de autoridad consistiría en sancionar esos derechos y esa justicia restablecida por la vía de los hechos y con la fuerza de las armas.

El artículo séptimo establecía las bases para una reforma agraria mediante la dotación de terrenos. Los pueblos e individuos que no hubieran sido despojados, pero que carecieran de tierra, debían obtenerla del Estado mediante la expropiación —previa indemnización— de la tercera parte de los latifundios, con cuyas tierras se dotaría a los ejidos, colonias e individuos que carecieran de ellas. A continuación, el artículo octavo establecía que los bienes de los enemigos de la revolución y de los que se opusieran al Plan de Ayala ("los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente plan") serían nacionalizados; las dos terceras partes de esas propiedades confiscadas se destinarían a pagar pensiones para las viudas y huérfanos de la revolución.

El noveno reivindicaba la Reforma, la figura de Juárez y las leyes de desamortización, elementos significativos en la ideología liberal de Otilio Montaño y que formaban parte del horizonte cultural y político compartido por la tradición liberal mexicana, por la mayoría de los grupos políticos e intelectuales laicos y por la oposición laica del país desde décadas atrás.[15]

Finalmente, los últimos artículos trataban el asunto del poder y establecían que los poderes públicos locales, estatales y nacionales se nombrarían por las juntas de jefes revolucionarios de cada entidad, quienes asumirían las facultades para llevar a cabo las transformaciones especificadas por el plan; hecho esto, se convocaría a la elección constitucional de las autoridades en todo el país.

El Plan de Ayala —dado a conocer en la capital de la República por el *Diario del Hogar* el 15 de diciembre de 1911— fue un documento ejemplar y se convirtió, desde entonces, en el texto esencial para los zapatistas y para el amplio espectro de grupos e individuos que recibieron su influencia. Fue también la base que orientó la profunda transformación agraria que tuvo lugar en Morelos y en las zonas de mayor influencia zapatista durante

[15] Desde luego, no se puede concluir que el laicismo fuera asumido por los demás jefes zapatistas que firmaron el Plan, quienes eran particularmente creyentes, ni mucho menos por la población de las comunidades que se habían sumado a las filas zapatistas o que las apoyaban, conocido el catolicismo de que dio muestras el zapatismo. También merece destacarse que Montaño no identificara el ataque y la amenaza que habían significado las leyes de desamortización liberales contra los pueblos y que reivindicara sólo su aspecto contrario a las corporaciones eclesiásticas.

la década revolucionaria. El plan sirvió además para profundizar la propuesta agraria que hicieron los ideólogos zapatistas en 1916, como parte de la legislación que, en esta materia, fue discutida y aprobada en el seno de la Convención de Aguascalientes.

El rasgo que diferenció al Plan de Ayala de las anteriores propuestas zapatistas fue haber superado la problemática local. Así, las demandas de reconocimiento político para su grupo y sus reclamos para que el ejército y sus rivales políticos guerrerenses abandonaran Morelos fueron mantenidas en un plano secundario. En el plan no se pedía al gobierno nacional que sólo resolviera las demandas particulares de tierra, agua y los derechos comunales de uso de bosques y pastizales de diversas comunidades de Morelos; se llamaba a hacer una reforma agraria nacional que implicaba una reestructuración profunda de las formas prevalecientes de propiedad. Tampoco se demandaban cuestiones políticas particulares, como la sustitución de un jefe político, el cambio de alguna autoridad especialmente cuestionada, o el castigo de algún comerciante especulador; se hacía un llamado a tomar el poder central y elegir a los nuevos depositarios de un poder ejercido por y para los revolucionarios.

Desde luego, la característica definitoria del Plan de Ayala era su contenido agrario, pues constituía una demostración paradigmática de la extracción social, la filiación y las aspiraciones agrarias radicales de quienes habían engrosado y seguirían engrosando las filas del zapatismo. También en este aspecto los zapatistas dieron un salto importante respecto de sus anteriores formulaciones, en las cuales pedían que el gobierno atendiera, mediante sus instituciones, los reclamos de tierras de las comunidades desposeídas. El plan remontaba claramente esta situación, pues definía de manera radical la forma de resolver el problema: los pueblos despojados debían ocupar de inmediato las tierras que les pertenecían y defenderlas con las armas en la mano en caso necesario. Las instituciones emanadas del triunfo de la revolución sancionarían como válidas esas recuperaciones y dictaminarían sobre los reclamos que hicieran los individuos que se consideraran con derechos sobre ellas. Adolfo Gilly ha subrayado este rasgo como decisivo, pues implicaba el trastocamiento del régimen de propiedad agraria por la vía violenta, invirtiendo así la juridicidad vigente.[16]

El llamado a trastocar la estructura de la propiedad agraria que era fruto de la usurpación, la decisión de respaldar esta medida por medios violentos si fuera necesario y de tomar el poder central para constituir el gobierno nacional, las instituciones y el orden jurídico de conformidad

[16] Gilly, *La revolución...*, *op. cit.*, pp. 63-64, y, del mismo autor, "La guerra de clases...", *op. cit.*, pp. 33-34.

con sus planteamientos eran los factores que definían al Plan de Ayala como un programa agrario radical, independientemente de sus limitaciones, tales como el respeto a la propiedad individual y, en cierto sentido, al régimen hacendario que no fuera producto de depredaciones y abusos ejercidos en contra de los pueblos y las comunidades campesinas.

Por otra parte, el plan no definía con claridad el problema de los arrendatarios ni el de los campesinos sin tierra que no hubieran sido despojados; tampoco se refería al problema de los salarios y la organización de los peones ni establecía los límites del latifundio. Esto último era importante si se piensa que la expropiación de la tercera parte de las grandes propiedades era insuficiente para satisfacer la necesidad de tierra en las zonas densamente pobladas del centro de la República, región en la que, además, la gran propiedad no era tan extensa como en el norte del país. Son también notorias, por su ausencia, las referencias a la problemática de los sectores sociales no agrarios y el intento de establecer una alianza, así fuera efímera y pragmática, con los revolucionarios del norte encabezados por Orozco, quien en ese tiempo gozaba de gran prestigio. Otra debilidad del plan zapatista estribaba en que renunciaban a encabezar ellos mismos, en todo el país, la lucha contra Madero, asumiendo voluntariamente una posición subordinada, antes de cualquier contacto con las otras fuerzas opositoras a Madero con las que creían tener coincidencias.[17] El Plan de Ayala respondía, en primera instancia, a la visión y la problemática regional de los grupos de campesinos medios y pobres de las zonas en que se había afianzado el dominio de la hacienda.

Con la formulación del Plan de Ayala, el zapatismo se convirtió en un movimiento político con una identidad definida y un proyecto político propio. Con él se inició una nueva etapa que estaría caracterizada por la lucha que emprendieran los rebeldes zapatistas para conseguir los objetivos establecidos en el plan. La lucha contra Madero adquirió así un nuevo sentido.

Zapata y sus hombres comprendieron el sentido de esta nueva etapa. La carta de instrucciones que el líder suriano envió a Gildardo Magaña, su agente en la ciudad de México, el 6 de diciembre de ese año, es ilustrativa de esta percepción:

> Tengo el gusto de enviarle el Plan de Ayala que nos servirá de bandera en la lucha contra el nuevo dictador Madero. Por lo tanto, suspenda usted ya toda gestión con el maderismo y procure que se imprima dicho importante

[17] La práctica zapatista, han señalado varios autores, fue más allá de los límites definidos en el Plan de Ayala, pues, en la zona bajo su influencia, en los años siguientes, se expropió, sin indemnización, a una buena parte de la clase terrateniente y se repartió esta propiedad entre sectores campesinos pobres y medios.

documento y darlo a conocer a todo el mundo. Por su lectura verá usted que mis hombres y yo estamos dispuestos a continuar la obra que Madero castró en Ciudad Juárez y que no transaremos con nada ni con nadie, sino hasta ver consolidada la obra de la revolución [...][18]

Entrevistado a mediados de diciembre por el enviado del *Diario del Hogar* en las montañas de Puebla, Zapata declaró que Madero había violado todas sus promesas y adoptado una actitud tiránica, por lo que lanzaba la siguiente arenga: "[...] todos los buenos mexicanos debemos unirnos para derrocarlo [...] porque ha traicionado a la Revolución y a la Patria".[19]

Reactivación de la rebelión

Después de dar a conocer el Plan de Ayala, los zapatistas continuaron con sus ataques a las poblaciones con escasa o nula guarnición y el hostigamiento a las fuerzas federales y rurales. En Morelos, durante el mes de diciembre de 1911, tuvieron lugar doce acciones de armas de los alzados. Atacaron Tepalcingo, Jumiltepec, Tres Marías y Los Hornos. Zapata instruyó a Genovevo de la O para que juntara a las partidas pequeñas que se encontraban en la zona boscosa del norte de Cuernavaca y obtuviera el dinero necesario pidiendo préstamos a las casas comerciales y a las haciendas de Santa Catarina, Santa Cruz y Miacatlán. Los combates más intensos los libraron en Cuautla el día 8 de ese mes, sitio donde 300 zapatistas se enfrentaron a los federales y destruyeron la línea del ferrocarril Interoceánico, y el 23, cuando emboscaron al ejército, para después, el 29, tomar Tepoztlán.[20]

Aunque en algunos lugares los hacendados intentaron, con sus propios recursos, organizar fuerzas armadas locales que se opusieran a las incursiones y reforzaran las guarniciones rurales, como hizo Luis García Pimen-

[18] En la misiva, Zapata hacía un recuento pormenorizado de todo lo que los zapatistas habían cedido de buena fe en las negociaciones con Madero y los engaños de que habían sido víctimas, por lo que ya no tenían ninguna confianza en él ni iban a cejar en su lucha para recuperar las tierras que les habían sido usurpadas a los pueblos; decía, a manera de reproche, a Madero: "Yo, como no soy político, no entiendo de esos triunfos a medias; de esos triunfos en que los derrotados son los que ganan [...]"; véase Zapata a Magaña, campamento en Morelos, 6 de diciembre de 1911, en Fabela, *op. cit.*, pp. 43-45.

[19] *Diario del Hogar*, 18 de diciembre de 1911.

[20] *El País*, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 20, 23, 24 y 28 de diciembre de 1911; *Diario del Hogar*, 6, 9, 13 y 19 de diciembre de 1911, 6 de enero de 1912; Zapata a Genovevo de la O, campamento revolucionario, 22 de diciembre de 1911, AGN, Fondo Genovevo de la O (FGO), c. 11, exp. 10, f. 1.

tel en sus propiedades, en la mayoría de los lugares continuó la impotencia de las fuerzas del orden para contener a los alzados.[21]

Al comenzar el año de 1912, la actividad de los diversos grupos rebeldes, que tenía por epicentro a Morelos y que se había extendido a Puebla, Estado de México y Guerrero, se incrementó notablemente. En el territorio morelense se registraron 37 acciones de armas de los insurrectos durante enero. Los combates más fuertes tuvieron lugar en Yautepec el 2 de ese mes, en Santa María, el 26, y en Jojutla, el 28, lugares donde Encarnación Rangel, Genovevo de la O y Lorenzo Vázquez lograron derrotar a las fuerzas federales, tomar las poblaciones, incendiar archivos, oficinas públicas y saquear casas comerciales. Otras fuerzas atacaron Tepoztlán, Zacualpan, Tizapotla, Jalalpa, Jiutepec, Santa Catarina, Acamilpa, Pueblo Nuevo, Tetecalitla, Tlaltizapán, Tlacotepec, Jalpan, Techuixtla y Ticumán.

Con la extensión que había alcanzado la revuelta, se volvió necesario asegurar el financiamiento de la guerra, darle una base económica que no descansara solamente en la ayuda de los pueblos, sino, sobre todo, que extrajera recursos de las instituciones económicas más sólidas: las haciendas y los comercios. Así, durante febrero comenzó a generalizarse el asalto a las haciendas morelenses. Fueron atacadas las de Temixco, Tetecala, Miacatlán, San Gaspar, Cocoyotla, San Carlos, Santa Clara, Mazatepec y Cuauchichinola. El patrón que siguieron esas tomas consistió en imponer préstamos, llevarse armas, caballos, víveres y dinero, elementos necesarios para sostener la rebelión y abastecer a las crecientes fuerzas que estaban incorporándose. Significativamente, sucedieron también ataques a algunas fincas, no con el objetivo de abastecerse en ellas, sino para destruirlas, quemando incluso las zafras, como sucedió en Santa Clara y Cocoyotla. Este comportamiento destructivo, aunque todavía marginal, introdujo un nuevo elemento que indicaba un grado mayor de desprestigio de las haciendas y un notable incremento del odio y el rechazo en contra de ellas, así como la necesidad de destruir las fuentes de abastecimiento y poder de los enemigos de la rebelión.

Los rebeldes establecieron una estrategia militar que combinó la táctica guerrillera de ataques sorpresivos, emboscadas y acciones de desgaste con asaltos mayores a poblaciones fuertemente guarnecidas y la inmovilización del ejército mediante el sabotaje sistemático a la red ferroviaria, que era el medio principal por el cual éste se desplazaba y obtenía armas de la ciudad de México. Los rebeldes cortaron la comunicación en puntos estratégicos, como puentes y estaciones, y provocaron la interrupción del ser-

[21] Agustín del Pozo, jefe de armas maderista en Puebla, informó a Madero que había hecho una campaña en varios distritos de la sierra contra los rebeldes y había encontrado apoyo entre la población para rechazarlos. A. Meléndez a Madero, Puebla, 27 de diciembre de 1911, AGN, FFM, c. 7, exp. 179, ff. 5102-5103; *El País*, 17 de diciembre de 1911.

vicio militar, civil y de carga del ferrocarril al norte de Cuernavaca, en Tres Marías y la estación Ramón, y, más al sur, en el entronque de los ferrocarriles Mexicano e Interoceánico.

Hacia fines de enero de 1911, la entidad suriana se encontraba nuevamente en ebullición por la actividad de los insurrectos.[22] Esto llevó al gobierno a reforzar la campaña militar. Según cálculos publicados en la prensa, en esta campaña contra los zapatistas había ya 8 000 hombres, entre federales y rurales, en tanto que el número de zapatistas alcanzaba los 3 000. El trastocamiento del orden público en buena parte de las municipalidades y la interrupción de las comunicaciones obligaron al gobierno estatal a suspender las elecciones locales, que iban a tener efecto en la segunda quincena de ese mes.[23]

En Puebla ocurrieron tres acciones de armas en diciembre. El día 2, José Trinidad Ruiz entró al pueblo de Tochimilco y luego a San Felipe Hidalgo, en Atlixco. El gobernador Nicolás Meléndez informó a Madero que diez distritos del estado no producían un solo centavo y adeudaban más de 300 000 pesos en contribuciones. A la ola de huelgas que tuvo lugar en las fábricas textiles se sumó la actividad de los grupos insurrectos, los cuales, según admitió, controlaban todas las fincas agropecuarias de la tierra caliente poblana.[24] Varios hacendados abandonaron la región de Acatlán y se refugiaron en la ciudad de Puebla; vecinos del lugar se quejaron de que las fuerzas rurales eran las primeras en maltratar y robar a la población. Lo abrupto del terreno y el apoyo que los rebeldes encontraron en la población propiciaron la multiplicación de los ataques zapatistas a las haciendas de la zona. El 17 y 18 de diciembre atacaron la de Chacuac y luego la de Quecholac, cerca de Huexotzingo.

En enero de 1912, las fuerzas del *Tuerto* Morales incrementaron espectacularmente su actividad y asolaron los distritos poblanos de Atlixco, Izúcar y Acatlán. Tuvieron lugar veintiún acciones de armas, de las cuales trece fueron ataques a diversas haciendas: Piaxtla, Chinantla, San Martinito, San José Buenavista, San José Atotonilco, Santa Elena, Contla, San Miguel Molino, Tetela, Chiautzingo y Echeverría. El grado de la violencia ejercida en contra de las instituciones hacendarias fue mayor que en Morelos, pues, a los saqueos e imposición de préstamos, se sumaron, en ocasiones, la quema de campos y archivos, y la ejecución de hacendados, co-

[22] *El País*, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de enero de 1912; *Diario del Hogar*, 30 de enero de 1912.

[23] *El País*, 12, 13, 14 y 17 de enero de 1912; *Diario del Hogar*, 17 de enero de 1912. Decreto de A. Figueroa, 11 de enero de 1912, *Semanario Oficial del Gobierno del Estado de Morelos*, año XX, núm. 2, 13 de enero de 1912.

[24] Nicolás Meléndez a Madero, Puebla, 12 de diciembre de 1911, AGN, FFM, c. 3, exp. 77, f. 2207.

mo en Atotonilco y San José Buenavista. Aunque los hacendados lograron a veces ofrecer resistencia armando a sus trabajadores, como en San Martín Texmelucan, por lo regular fueron totalmente impotentes y aun ocurrió que los peones se unieran a los alzados, como en Santa Elena, Contla y San Miguel. Por ser económicamente menos importantes que las morelenses, las haciendas de Puebla fueron menos defendidas por el poder central, que se concentró en las ciudades y dejó la defensa de aquéllas a los rurales, los cuales fueron notoriamente incapaces de salvaguardarlas. Así, las haciendas poblanas fueron una presa relativamente más fácil para los ataques rebeldes.[25]

Las fuerzas del *Tuerto* Morales adquirieron fama por la violencia de sus incursiones. Sin embargo, no tenían el mismo comportamiento cuando no encontraban resistencia en las poblaciones atacadas o cuando la población local no se amotinaba para vengar afrentas, como sucedió en la ocupación pacífica de la hacienda de Echeverría. En la zona poblana, además, la situación se combinaba con una amplia agitación y movilización en las fábricas textiles y en algunas haciendas; en las de San Marcos y San Cosme, los peones se fueron a la huelga para exigir aumento salarial y asesinaron a dos de ellos que no quisieron secundarlos.[26]

De nueva cuenta, fuerzas rebeldes se aproximaron a las orillas de la capital del país y atacaron los poblados de Tláhuac y Parrés; por el rumbo del Ajusco, los encargados del orden estaban temerosos de que se produjeran un asalto y una sublevación indígena en la zona, en donde había descontento a causa de despojos recientes de tierras realizados por caciques del lugar.[27]

En el Estado de México, en diciembre, los rebeldes atacaron la hacienda de San Alejo, en Tenancingo y, el 26, la de Los Arcos, cerca de Sultepec; luego tomaron el poblado de Almoloya de Alquiciras, donde quemaron el archivo de la presidencia en la plaza pública.[28] En enero tomaron otra vez la hacienda de Jalmolonga, en Tenancingo, e hirieron al administrador. En Tlaxcala, el 16 de enero, los rebeldes entraron al distrito de Zaragoza, saqueando tiendas, hiriendo a sus dueños, quemando archivos y sacando a los presos de la cárcel.[29]

[25] Agustín del Pozo a Madero, Puebla, 11 de enero de 1912, AGN-FFM, c. 7, exp. 179, ff. 5104-5108; *El País*, 9, 10, 17 y 18 de enero de 1912. La prensa consignó que en el combate de Tejalpa los zapatistas sufrieron treinta bajas y perdieron un cañón.

[26] *El País*, 14, 19, 21, 22, 23 y 29 de enero de 1912; Benito Juárez a Madero, Oaxaca, 20 y 23 de enero de 1912, AGN, FFM, c. 9, exp. 221-1, ff. 6438, 6439, 6440 y 6442.

[27] *El País*, 27 de diciembre de 1911.

[28] *El País*, 29 de diciembre de 1911 y 7 de enero de 1912.

[29] *El País*, 13 y 15 de enero de 1912; Antonio Carrasco a Madero, Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, 17 de enero de 1912, AGN, FFM, c. 3, exp. 49, ff. 1719-1720.

En Guerrero, el gobernador José I. Lugo pidió ayuda urgente al gobierno central, pues fuerzas del *Tuerto* Morales habían ocupado Huamuxtitlán y amenazaban con tomar Tlapa. Se quejaba de que los grupos rurales de la entidad eran indisciplinados, incompetentes e insuficientes y de que la mayor parte de las mejores fuerzas se la había llevado Figueroa a Morelos. Ante la insuficiencia de fondos y la falta de ayuda federal, Lugo anunció que tendría que recurrir a préstamos y recomendó condonar los impuestos atrasados a los pueblos que estaban siendo "flagelados por el salgadismo y [el] zapatismo". Para agravar las dificultades del gobierno estatal, la rivalidad entre Lugo y el clan de los Figueroa se incrementó con la oposición del primero al reclutamiento de rurales que hacía Figueroa y su intento de controlar las actividades de Silvestre Mariscal y otros jefes figueroístas. Dada la extensión del zapatismo, recomendaba suspender las garantías individuales en el estado para combatir con mayor eficacia a los rebeldes. El propio Ambrosio Figueroa reconoció que el zapatismo se había instalado en Guerrero y empezaba "a manifestarse con síntomas un tanto serios en algunas partes de dicho estado" y reportó las correrías de Jesús Salgado, que se había levantado otra vez en armas.[30]

La causa de que Salgado, quien se había licenciado, volviera a tomar

[30] AGN, FFM: Lugo a Madero, Chilpancingo, 1, 5, 6, 12 y 17 de enero, c. 32, exp. 864, ff. 24811-24817, 24822-24826. Sánchez Azcona escribió a Lugo el 12 de febrero que Madero había decidido continuar apoyando a los Figueroa (c. 53-4, exps. 376-377); A. Figueroa a Madero, Cuernavaca, 13 de enero de 1912, c. 31, exp. 862, ff. 23870-23872. Salgado era, según su propio testimonio, un hombre de recursos que se había incorporado a la rebelión maderista y había participado en la toma de Coyuca y de Iguala, junto con los Figueroa. El 27 de marzo de 1912, Jesús Salgado escribió una carta al periódico *El Imparcial*, de la ciudad de México, en donde explicó por qué se había incorporado a la revolución y por qué se había deslindado de Madero. Decía: "Desde el mes de diciembre de 1910 yo comencé a hacer mis preparativos para levantarme y apoyar el Plan de San Luis lanzado por el señor Madero. Me acerqué a varias personas honorables para su ayuda moral y empecé a reunir gente y a echarme compromisos de dinero para hacerme de material, pues aún cuando siempre he sacado productos de mi hacienda junto con mis hermanos, o ya como contratista o comisionista, abandoné mis negocios, a mis hermanos y a mi bienestar y me lancé a la Revolución antes de que lo hiciera el famoso General Figueroa. Me lancé a la Revolución persiguiendo los ideales que prometía el Plan de San Luis, e imbuido por esas ideas y con la fe ciega en el caudillo de la revolución abandoné mi hogar". La rivalidad con los Figueroa apareció desde los primeros días y se acrecentó particularmente con Federico Morales, el segundo hombre de los Figueroa, quien incluso asaltó y quemó la casa de Salgado en Iguala en agosto de 1911, episodio que marcó la ruptura definitiva de Salgado con ese clan, lo que lo hizo coincidir y aliarse, más adelante, con Zapata. Véase *Diario del Hogar*, 26 y 31 de agosto de 1911. Después de que se le concedió la amnistía, Salgado siguió teniendo problemas con gentes de los Figueroa, que trataron de detenerlo, mataron a varios de sus hombres y ultrajaron a sus hermanas. A pesar de que intentó hablar con Madero, no lo pudo hacer y tuvo que refugiarse en la sierra para salvar su vida. "En vista de esto reúno gente y sigo la revolución proclamando que todas las promesas de justicia proclamadas por el Plan de San Luis eran mentiras." Véase *El Imparcial*, 6 de mayo de 1912.

las armas fue la siguiente: el hacendado Antonio Lagunas, en Ajuchitán, junto con otros propietarios y las autoridades locales, apresaron a dieciséis de sus antiguos seguidores, fusilaron a dos en plena plaza pública y el propio hacendado dio el tiro de gracia a uno de ellos, en represalia por los asaltos a las haciendas de San Pedro, El Cubo y el Aguaje. Una vez reanudadas sus actvividades rebeldes, Salgado se enfrentó en Tenanguillo con las fuerzas federales de Blanquet.[31]

En Tlaxcala, aunque con menos fuerza, había cundido también la influencia de la rebelión. El 24 de enero fue asaltada por segunda vez la hacienda de San Diego Atzopan. El rebelde Francisco Cortés encabezó, junto con seguidores de Santa Catarina Ayometla, el ataque a Zacatelco, población en la que volvió a repetirse el patrón de quema de oficinas públicas, saqueo de casas comerciales y amotinamiento por parte de los lugareños.[32]

En Oaxaca, el 18 de enero una partida intentó tomar, sin éxito, el pueblo de Hueyapán, pues voluntarios del lugar consiguieron repelerla. Lo mismo ocurrió el 25 de enero en Ayuquililla, distrito de Huajuapan, donde el combate tuvo lugar mientras marchaba una procesión; la prensa reportó que los atacantes gritaban "¡Viva Zapata!", mientras que los defensores respondían "¡Viva Huajuapan!"[33]

Preocupación de los conservadores

El fracaso de la campaña militar emprendida en contra de los zapatistas hizo que arreciara la crítica que algunos hacendados hacían a Casso López, jefe de la campaña federal en Morelos y Puebla. Los irritaron particularmente las declaraciones que hizo al diario *El Imparcial,* en las que afirmaba que toda la población de Morelos era zapatista y que la rebelión se explicaba porque algunos hacendados se habían apoderado del agua en la región de Cuautla, dejando sin el preciado líquido al resto de la población de la ciudad y los alrededores. Atribuían a su impericia el hecho de que el zapatismo no hubiera sido reducido y que la población no cooperara con el ejército federal.[34]

Ante las presiones ejercidas por la elite local y los sectores más intransigentes del régimen, Madero endureció su postura y dispuso que se reforzara la campaña militar en Morelos. A las críticas de la Junta Reorganizadora del Partido Liberal, Madero contestó que, con su postura, el

[31] *El País*, 13, 16 y 18 de enero de 1912.
[32] *El País*, 25 de enero de 1912; *Diario del Hogar*, 28 de enero de 1912.
[33] *El País*, 19, 23 y 26 de enero de 1912; *Diario del Hogar*, 23 y 29 de enero de 1912.
[34] *El País*, 22 de diciembre de 1911.

Diario del Hogar había contribuido a envalentonar a los zapatistas. El gobierno del estado, por su parte, comunicó a los presidentes municipales que para acabar con la plaga social del zapatismo se tomarían enérgicas medidas contra aquellos que lo apoyaran directa o indirectamente.[35]

El crecimiento de la actividad insurgente llevó a algunos hacendados a reconocer que había sentimientos de simpatía y apoyo hacia los rebeldes, que les permitían sostener la lucha a pesar de los esfuerzos desplegados en su contra. Incluso reconocían que el problema agrario era el origen del crecimiento de la revuelta y comenzaron a acusar los estragos de ésta en sus actividades productivas. En entrevista, el hacendado de origen español Lorenzo Cárcoba aseveró que Zapata obtenía apoyo porque liberaba a los presos de los poblados que ocupaba, los cuales engrosaban sus filas. Además, prometía a sus seguidores que les daría tierras, dinero y honores. Comentó que el daño ocasionado hasta entonces a las haciendas no se debía a los ataques y préstamos forzosos, sino al hecho de que los jornaleros se iban con Zapata o bien, por temor, abandonaban la hacienda; en resumidas cuentas, la falta de brazos era el principal problema que asolaba a la región.[36]

Algunas autoridades municipales colaboraban de manera más o menos abierta con los alzados o demostraban simpatía por ellos, como en Acatlán, Puebla, donde, según denuncias de la prensa conservadora, incitaban a la población a atacar a los principales propietarios, entre los que se encontraba el español Antonio Pandal, dueño de la hacienda La Trinidad. Quizá por este temor fue que los llamados del gobernador poblano Rafael Cañete dirigidos a Madero, en el sentido de que reforzara la guarnición de Acatlán e hiciera llegar parque a la misma para que los vecinos se defendieran, no encontraron eco. Juan Sánchez Azcona explicó a Cañete: "[veo] un peligro en entregar armas a los vecinos de las poblaciones que así lo soliciten porque después se hace muy difícil recuperarlas".[37]

El propio gobernador Figueroa tuvo que reconocer que, en Morelos, el zapatismo tenía amplio apoyo, por lo que no se había podido acabar con él; enumeró, además, las causas de su propagación: "el odio entre las clases sociales, el aliciente del saqueo, el estímulo por la prensa periódica, la simpatía por las promesas de repartirse los terrenos del estado como botín de guerra". Consideraba también que habían sido determinantes

[35] *El País*, 23 y 31 de diciembre de 1911; *Diario del Hogar*, 25 y 31 de diciembre de 1911.

[36] *El País*, 24 de diciembre de 1911 y 15 de enero de 1912. En esta última señaló el contraste entre la zafra de ese año que comenzaba y la del año anterior, cuando, pese a la revuelta maderista, no hicieron falta trabajadores para las faenas, por lo que estimaba que la producción caería alrededor de 15 por ciento.

[37] Azcona a Cañete, México, 29 de noviembre de 1911, AGN, FFM, c. 53-1, exp. 176; *El País*, 29 de diciembre de 1911.

las diferencias y rivalidades existentes entre las fuerzas federales y las de los rurales bajo su mando y responsabilizaba al ejército de la escasa eficiencia de los operativos. Esto provocó que

> los pueblos de Morelos se hayan estado levantando casi en masa y proclamado el zapatismo sin que nadie sea capaz de contenerlos [...] yo les he prometido hasta la saciedad a las clases humildes de esos pueblos que ocurran a los tribunales a exponer las quejas que tengan contra los propietarios de tierras, que justifiquen los despojos de que se dicen víctimas y que se les impartirá cumplida justicia [...] pero nada de eso da resultados prácticos.[38]

Figueroa enunció con toda precisión la causa por la cual se había extendido la rebelión: era una guerra de clases en la que los de abajo, reclamando tierras, se habían incorporado al zapatismo y no hacían caso de los canales legales, a los que habían desbordado.

La magnitud de los ataques mostraba que los surianos tenían fuerza suficiente para tomar ciudades importantes y haciendas protegidas. Al mismo tiempo, hacía evidente que los controles tradicionales y la legitimidad del aparato de dominación habían sido rebasados por la insurrección, que se estaba convirtiendo, así, en un efectivo desafío al poder estatal y regional. El crecimiento de la insurrección y del poder rebelde se nutrió también del acopio de simpatías generado en el seno de las instituciones a las que combatía, minando así el control de las autoridades. Numerosos testimonios dan fe del apoyo brindado a la causa por los trabajadores de las haciendas y de la escasez aguda de mano de obra que provocó la revuelta. Así, hubo trabajadores de las haciendas que colaboraron abierta o disimuladamente con los zapatistas, como reconocieron varios empleados entrevistados por *El País*, quienes afirmaron que los trabajadores avisaban a los zapatistas en qué momentos las haciendas estarían sin vigilancia, a la vez que les servían de vigías, correos y guías e, incluso, les entregaban las armas que los dueños les daban para la defensa de los establecimientos.[39] Un particular escribió a Madero que evidentemente el zapatismo no era sólo bandidaje, sino un movimiento político que destruía archivos y nombraba autoridades, por lo cual suponía que era algo orquestado y quizás influido por el vazquismo.[40]

En su informe final, Casso López afirmó que durante su jefatura, entre el 5 de octubre y el 31 de enero, los 3 500 hombres de las tres armas a su cargo habían ocupado 34 poblaciones de Morelos y el Estado de Méxi-

[38] A. Figueroa a Madero, Cuernavaca, 13, 15 y 27 de diciembre de 1911, en Fabela, *op. cit.*, pp. 47-52 y 56-57.

[39] *El País*, 20 de enero de 1912.

[40] Tomás Berlanga a Madero, México, 26 de enero de 1912, AGN, FFM, c. 9, exp. 181-2, ff. 6352-6354.

co, habían sostenido 51 combates en los que lograron infligir 377 bajas a los rebeldes, y todo ello sin que sus fuerzas hubieran sufrido una sola derrota.[41] Empero, las críticas que varios hacendados y autoridades políticas hicieron a la forma en que condujo la campaña y el hecho inobjetable de que la rebelión no había podido ser controlada desmintieron su triunfalismo y llevaron al gobierno federal a optar por su sustitución.

Así, pues, a tres meses de ejercer el mando constitucional, Madero encaraba una rebelión de carácter agrario que, una vez en marcha, sería difícil desactivar si no se resolvían de raíz sus demandas. Por ello, ni las medidas políticas —el nombramiento de Figueroa como gobernador— ni las maniobras militares —el redoblamiento de la campaña del ejército y los rurales y la militarización de la región— sirvieron para contener la inercia creciente que paulatinamente iba adquiriendo la rebelión. El Plan de Ayala sirvió, además, como guía para que la actividad de los guerrilleros tuviera sentido, consiguiera legitimidad y se orientara hacia la consecución de una reforma agraria. Tanto los grupos zapatistas como los pueblos que los seguían intensificaron sus ataques a las haciendas, las cuales perdieron, en los dos meses que siguieron a la aparición del Plan de Ayala, buena parte de su legitimidad y fueron presas de ataques cada vez mayores. Los ataques se recrudecían conforme la institución hacendaria demostraba su impotencia para contener el desafío. Los ataques armados, la quema de cosechas y zafras, la imposición forzosa de préstamos, el secuestro de hacendados y empleados se convirtieron en una constante de la que sólo unas pocas haciendas —aquellas que mantenían vínculos con algunos de los nuevos jefes rebeldes, las que compraron protección o las que mantuvieron un apoyo relativo de sus trabajadores— pudieron escapar.

Pugnas en el maderismo

La campaña militar contra los zapatistas arreció la pugna entre el ala radical y los sectores conservadores del maderismo. El *Diario del Hogar* continuó criticando duramente la política represiva de Madero y, al mismo tiempo, manifestando su simpatía por la rebelión zapatista y justificándola. Así, el 3 de enero de 1912, en un editorial, el diario contestó a Madero respecto de las acusaciones vertidas contra el memorial de la Junta Reorganizadora del Partido Liberal —organismo en el que participaban Juan Sarabia, Antonio Díaz Soto y Gama, Antonio I. Villarreal, Jesús Flores Magón y otros antiguos magonistas convertidos al maderismo—,[42] en el

[41] *El Imparcial*, 9 de marzo de 1912.

[42] Por esos días, los miembros del Partido Liberal se reunieron para discutir y definir el pro-

sentido de que en sus páginas se hacía una defensa inmoderada de Zapata y se contribuía a envalentonarlo con noticias falsas sobre las proporciones de la rebelión.

El periódico sostuvo que se hacía eco de la actitud asumida por Madero cuando éste, después de su visita a Morelos, consideró que lo que había en esa entidad no era una aventura de facinerosos, sino un problema social que debería atenderse. El diario reiteró que no defendía a la persona de Zapata, pero que de ningún modo todos sus seguidores podían ser considerados unos bandidos:

> En Morelos ha habido un problema agrario, dejado sin solución; la masa popular de aquel estado anhelaba justicia que no se ha hecho y esperaba de la revolución bienes que no se han cumplido; Zapata no ha hecho más que ser el "cualquiera" que ha traducido el sentir de muchas almas y levantado la bandera por muchos esperada [...] el hecho es que en Morelos —y esto lo confiesan hasta los hombres del gobierno— Zapata y sus gentes son por dondequiera bien recibidos y apoyados y rodeados de simpatía que se transforma en hostilidad y en odio para los federales de Figueroa [...] Zapata y los suyos representan una causa distinta al vandalismo, que cuenta con partidarios honrados y sinceros.

El *Diario del Hogar* consideraba que no se habían cumplido los acuerdos ofrecidos a Zapata en agosto de 1911 y que por ello éste tenía razón de sentirse engañado; y concluía:

> Éste es el zapatismo del *Diario del Hogar*: querer que terminen las orgías de sangre y que se sequen las lágrimas de tantos seres inocentes que padecen; anhelar que se haga justicia a las demandas fundadas de todo un pueblo víctima de opresiones inicuas y de despojos infames; soñar con que llegue la redención de los humildes, de los pobres, de los ingenuos que tanto esperan de la revolución que triunfó con sus trabajos y sus esfuerzos [...][43]

---

grama de su partido; en la versión final se proponían los siguientes puntos: la supresión de los jefes políticos, la libertad municipal, la destrucción de los monopolios, la eliminación de la leva, la elección popular de los funcionarios judiciales, la jornada laboral de ocho horas, el establecimiento de salarios mínimos, la formación de sociedades cooperativas, una legislación sobre huelgas y sindicatos que incluyera la indemnización por accidentes de trabajo, el descanso dominical obligatorio y otras peticiones que habían sido enarboladas por los sectores progresistas y por las organizaciones de trabajadores durante los últimos años del porfiriato. Sobre la cuestión agraria, empero, el Partido Liberal, en el que participaban también moderados como Fernando Iglesias Calderón, no pudo ponerse de acuerdo, revelando la polarización de opiniones en su seno. La estrecha relación del tema con la insurrección zapatista lo volvía aún más espinoso. Al respecto, el partido sólo acordó que debían corregirse los abusos cometidos en contra de los peones de las haciendas de los estados del Sur, mediante la formación de una comisión que debía estudiar el problema agrario y presentar luego una propuesta. Véase *Diario del Hogar*, 18 de enero de 1912.

[43] Editorial "El *Diario del Hogar* zapatista", *Diario del Hogar*, 3 de enero de 1912.

Poco después publicó otro editorial sobre el mismo asunto. En él, polemizando con el periódico *Nueva Era* —el diario que más fielmente representaba la postura de Madero—, el *Diario del Hogar* afirmó que en la conciliación que intentó Madero en sus visitas a Morelos no se habían agotado los esfuerzos negociadores y que, posteriormente, no se habían cumplido las ofertas hechas a Zapata. Alababa la constatación de *Nueva Era* de que todo el estado de Morelos era zapatista y, precisamente por eso, conminaba a resolver el problema agrario en el que *Nueva Era* reconocía el origen del zapatismo. Señalaba que esa cuestión no se resolvería repartiendo las ricas haciendas de la zona, pero acotaba que no era eso lo que pretendía Zapata, "sino que se restituyan a los pueblos los ejidos que se han robado los ricos terratenientes para que sean poseídos en común por los habitantes pobres".[44] Días después, polemizando ahora con el diario conservador *El Imparcial*, argumentó que no era mediante la violencia como se resolvería el problema de Morelos, sino resolviendo el problema agrario y las injusticias cometidas contra los pueblos. Si el zapatismo se había extendido, era porque reflejaba un problema nacional y mientras éste no se resolviera de raíz, persistiría la necesidad de que los despojados siguieran "con las armas en la mano reclamando sus derechos".[45]

El sector progresista de la intelectualidad urbana se fue convirtiendo así en un crítico acervo de la política de conciliación de Madero con las elites conservadoras y también de su política represiva hacia la insurrección suriana. Para este sector, el zapatismo representaba un aliado y una causa que había que atender, pues se identificaban con los ideales de justicia social que reivindicaban en el programa del PLM y veían en la revolución la oportunidad de cumplir con esos anhelos. Una rebelión campesina que desafiaba a la clase terrateniente y al nuevo régimen aliado con ésta no podía encontrar sino su simpatía y adhesión. En el medio capitalino, el *Diario del Hogar* se convirtió en el principal aliado y propagandista de la causa rebelde.

Al mismo tiempo, esa adhesión tuvo el efecto de debilitar al régimen maderista. Sus diferencias internas se fueron convirtiendo en divisiones y finalmente restaron eficacia, base social y legitimidad a la coalición maderista; con respecto a ésta, el ala más progresista y radical fue distanciándose de manera creciente, al tiempo que se fortalecían las posturas más conservadoras en el seno del régimen. Esta pugna tuvo efectos directos en los acontecimientos morelenses. En la medida en que el problema de Morelos no se resolvía, se fortaleció la postura de las clases más conservadoras y esta situación sirvió de ensayo para la salida castrense con que esos sectores

[44] *Ibid.*, 10 de enero de 1912.
[45] *Ibid.*, 27 de enero de 1912.

ultimaron al régimen maderista meses después, en su intento de detener, con la solución extrema del magnicidio, el avance de la revolución.

La Ley de Suspensión de Garantías

Presionado por el ala dura de su gobierno y tras considerar que no tenía otra salida, Madero se inclinó por el endurecimiento. El 10 de enero de 1912 envió al Congreso una iniciativa de ley en la que establecía la suspensión de garantías constitucionales en los estados de Morelos y Guerrero, así como en los distritos de Acatlán, Izúcar, Atlixco, Cholula y Huexotzingo, en Puebla, y los de Chalco y Tenancingo, en el Estado de México; es decir, en la zona donde había cobrado mayor fuerza la rebelión. Dicha iniciativa establecía la pena de muerte para los individuos que cometieran los delitos de rebelión, plagio, robo con violencia y ataque a las vías férreas y a las líneas telegráficas y telefónicas. Quienes fueran sorprendidos *in fraganti* serían ejecutados *in situ*, tras el levantamiento de un acta; los que no fueran sorprendidos así, tenían derecho a un juicio que habrían de resolver, en un lapso no menor de ocho días, las autoridades políticas o los jefes militares, federales o estatales. El presidente de la República tenía la facultad de conceder el indulto o conmutar la pena.[46]

Esta iniciativa levantó amplio revuelo y provocó acres discusiones. La mayoría de los sectores conservadores, católicos, militares, y la clase política, la consideraron apropiada, un remedio amargo pero necesario para acabar con la rebelión. Madero logró cerrar filas con todos estos sectores para combatir frontalmente el alzamiento zapatista. El problema para él era que no encabezaba ni tenía el control de la dinámica de guerra que ponía en marcha. Tampoco unificaba a las fuerzas y aliados bajo su mando con esta táctica; más bien se ponía a la zaga de las posturas más conservadoras y entraba en un terreno pantanoso del que no saldría bien librado. Sólo algunos sectores, como el representado por el *Diario del Hogar*, se opusieron a esa medida, pues consideraban que lejos de acabar con el problema, lo iba a exacerbar. En realidad, la ley, en vez de poner en operación un mecanismo novedoso para combatir la insurrección, daba legalidad a muchas de las prácticas prevalecientes. El corresponsal en Morelos del diario católico *El País* afirmó que el estado se encontraba ya militarizado, no existían las garantías individuales y el gobernador Figueroa fusilaba sin formación de causa a la gente, por lo que la nueva ley no haría ninguna diferencia.[47]

[46] *El País*, 11 de enero de 1912.
[47] *Ibid.*, 11 de enero de 1912.

El 15 de enero de 1912, las comisiones de la Cámara de Diputados federal presentaron un dictamen en el que aceptaban la suspensión de garantías solicitada por el ejecutivo. La justificación fue: "[...] porque el zapatismo cunde cada día más con grave trastorno de la paz pública" y porque "el vandalismo, que bajo la forma de comunismo agrario, devasta los estados de Morelos y Guerrero y distritos del estado de México y Puebla, exige de parte de las autoridades federales medidas enérgicas, breves y sumarias que puedan por su ejemplaridad, devolver a los estados que están en pleno trastorno, una absoluta tranquilidad".[48] Esta argumentación era significativa: la coalición conservadora cerraba filas ante la rebelión campesina, a la que consideraba un vándalico "comunismo agrario" que debía ser combatido por todos los medios. En realidad, la medida consistía en dar apariencia de legalidad a la guerra sin cuartel que ya se practicaba. Madero combatió así, del mismo modo que su antecesor, una insurrección agraria cuyos integrantes otrora habían sido sus aliados, defendiendo una posición de clase, un proyecto y una razón de Estado que sentía amenazados y que terminarían por apresarlo y hundirlo.

El gobernador del Estado de México consideró que la iniciativa y el dictamen no eran suficientes por lo que tocaba a su entidad, y solicitó que se incluyeran en ella los distritos de Tenango, Sultepec, Temascatepec y Lerma. Las comisiones legislativas incluyeron estos distritos y todo el estado de Tlaxcala, así como la pena capital para quienes vendieran armas a los zapatistas. Con estas adiciones fue aprobada la iniciativa el 18 de enero de 1912 y entró inmediatamente en vigor.[49] Esta ley draconiana no solamente colocaba en la ilegalidad a los zapatistas y legalizaba la represión, sino que, entre otros objetivos, intentaba aislarlos de las poblaciones con la implantación de la pena de muerte para los que les ayudaran en sus acciones o les vendieran armas.[50]

La salida de Figueroa

La ineficacia de las medidas puestas en práctica hasta entonces por el régimen maderista para contener la rebelión condujo a éste a tomar la decisión de separar a Figueroa del gobierno de Morelos. Figueroa mismo se

[48] *Ibid.*, 16 de enero de 1912.

[49] *Ibid.*, 17, 18 y 19 de enero de 1912.

[50] La prensa capitalina consignó en varias ocasiones el tráfico de armas de la ciudad de México a las montañas del Ajusco y el territorio de Morelos, *Diario del Hogar*, 7 de enero de 1912. Véase también A. Figueroa a Madero, Cuernavaca, 29 de diciembre de 1911, AGN, FFM, c. 31, exp. 862, f. 23860

había dado cuenta de la impotencia de sus esfuerzos. El 7 de enero describió a Madero, amargamente, la situación que imperaba en el estado:

> [...] los hombres que tengo a mis órdenes en Guerrero son 1680. Los que tengo en Morelos suman 1276 [...] vinieron últimamente 500 hombres de Guerrero [...] pero no pueden considerarse como aumento de mi efectivo en Morelos, ya que ni siquiera bastaron a cubrir las vacantes que ocasionó el paludismo, que va haciendo grandes estragos en mis filas [...] Muchos de los soldados enfermos han regresado a Guerrero, otros ingresaron a los hospitales y no pocos se curan en domicilios particulares. Campea en la respetable carta de usted un palpable descontento por mi labor, que probablemente se presenta deficiente a los ojos de usted. Mucho siento no haber podido dejar hasta ahora complacidos los justos deseos que usted tiene y yo mismo abrigo respecto a la pacificación de este estado; pero tengo la satisfacción del deber cumplido, del deber llevado quizá más allá del límite natural y justo, pues mis hombres han hecho con buena voluntad más de lo que racionalmente pudiera exigírseles. A la vez que guarnecen las plazas más interesantes, caminan de día y de noche para socorrer los puntos amagados o atacados por los rebeldes, recorren los caminos en persecución de las gavillas, sufriendo los rigores de un clima insalubre para ellos y sufriendo no pocas veces hasta penurias y escaseces, a causa de la hostilidad de las clases bajas de la población, cuya inmensa mayoría es en todas partes del estado zapatista recalcitrante [...]
>
> Ha llegado pues, a su máximo, la efectividad del servicio de mis hombres [...] si se considera su grande inferioridad numérica respecto de los alzados, que éstos conocen palmo a palmo el terreno que operan, que los favorece mucho por sus condiciones especiales, y que cuentan con la ayuda que en mil formas les imparten los pueblos, ya proveyéndolos de víveres, ya de caballos y de armas, ya dándoles cuenta de los movimientos del enemigo. Y si se hubiera seguido mi consejo de guarecer cada hacienda y cada pueblo con tropas federales para evitar que los bandoleros se pertrecharan, dedicándose mis hombres a la persecución propiamente del bandidaje, seguramente ya se hubiera dado buena cuenta de esa plaga que ha venido asolando a este desventurado estado.

Finalizaba la carta criticando a la prensa "mercenaria", que lo acusaba de robos, violencia, incendios e infamia, y decía que pronto se retiraría a la vida privada.[51] Esta misiva resumía la incapacidad del principal rival de Zapata para acabar con la revuelta, a pesar de que había iniciado su

[51] A. Figueroa a Madero, Cuernavaca, 7 de enero de 1912, AGN, FFM, c. 81, exp. 862, ff. 23864-23868. El 3 de ése mes, Madero le había reclamado la desorganización de sus tropas en Guerrero, por lo cual quería que las trasladara a Morelos, las incorporase a la campaña contra los zapatistas y dejara, mientras tanto, la seguridad de Guerrero en manos de Blanquet. Véase Madero a Figueroa, Chapultepec, 3 de enero de 1912, en Fabela, *op. cit.*, vol. VII, pp. 12-13.

gestión con todo el apoyo federal y contaba con la simpatía de la oligarquía azucarera morelense. Ni los 8 000 hombres federales y rurales, ni las milicias privadas organizadas por las elites, ni el prestigio regional del clan Figueroa bastaron para desactivar la rebelión.

Madero le recriminó la falta de eficacia en la campaña y la total inseguridad que reinaba en Guerrero, donde Figueroa también era comandante militar. Los 1 680 hombres que tenía ahí, a los que la federación había armado, no fueron capaces de contener la revuelta de Salgado.[52] Ante estas críticas, el 19 de enero, Figueroa pidió licencia definitiva y dejó la gubernatura. Las justificaciones que dio fueron que renunciaba con el fin de lograr la pacificación de Guerrero, en donde perseguiría a Salgado, y para facilitar que al gobierno de Morelos llegara alguien que tuviera las simpatías del pueblo.[53]

Apertura: cambio de gobernador y oferta agraria maderista

Al darse cuenta de que la represión había extendido la rebelión, Madero reconoció que el asunto de Morelos era el problema político más importante de su régimen y, para resolverlo, decidió dar un viraje. Sin renunciar al uso de la fuerza, mantuvo la ocupación militar y, al mismo tiempo, escogió para suceder a Figueroa a Francisco Naranjo, personaje vinculado al Partido Liberal, cuya designación fue vista con simpatía por los sectores progresistas del régimen, que la consideraban una medida adecuada para intentar resolver los problemas que habían originado la insurrección. El *Diario del Hogar* consideró que con ese nombramiento la política gubernamental finalmente se encaminaría hacia la solución del problema agrario en Morelos. Naranjo tomó posesión del gobierno el 19 de enero de 1912.[54] El cambio de gobernador fortaleció a los presidentes municipales que habían sido electos, varios de los cuales, como en los casos de Cuernavaca, Cuautla, Yautepec y Jonacatepec, tenían fuerte arraigo local, no eran representantes de poderosos hacendados o comerciantes morelenses ni tenían vínculos con ellos, y pretendían llevar adelante un programa de reformas que beneficiara a la mayoría de la población. Estas autoridades habían sido perseguidas por Figueroa, quien las había acusado de simpatizar con el zapatismo. La apertura incluyó también al viejo Francisco Leyva, quien fue comisionado para entablar negociaciones con Genovevo de la O, con

[52] Madero a Figueroa, Chapultepec, 10 de enero de 1912, en Fabela, *op. cit.*, vol. VII, pp. 29-30.

[53] *El País*, 19 de enero de 1912.

[54] *Diario del Hogar*, 20 de enero de 1912; *El País*, 20 de enero de 1912.

la encomienda de escuchar las peticiones agrarias de los lugareños y tratar de llegar a un acuerdo.[55]

Así, pues, en la búsqueda de alternativas, el régimen echó mano de individuos ligados a los sectores progresistas, partidarios de las reformas sociales y de la negociación. Con el nuevo gobernador, quien contaba con simpatizantes críticos del régimen en la capital, y con los nuevos presidentes municipales, el maderismo intentaba canalizar una parte de las energías y aspiraciones sociales que alimentaban a los rebeldes. Eran los "revolucionarios legales", como los llama Womack, cuyo proyecto, para realizarse, debía captar para sí los apoyos de la rebelión por la vía institucional o bien acabar con aquélla.

Por lo que respecta a la política de atracción y búsqueda de consenso, el régimen maderista trató de encontrar solución a la que consideraba la causa de la rebelión: el problema de la tierra. Para ello nombró una comisión nacional agraria compuesta por Roberto Gayol, Carlos Robles, Óscar Braniff, Manuel Marroquín, Leopoldo Palacios, Antonio Hernández y Manuel Aráoz, todos ellos personas vinculadas a los grandes terratenientes o terratenientes ellos mismos. Esta comisión elaboró un proyecto en el que se proponía lo siguiente: las grandes propiedades que estuvieran trabajándose no debían fraccionarse, sólo las ociosas; éstas, por otra parte, no debían otorgarse gratuitamente a los labradores pobres, sino ofrecerse en venta al mejor postor, sin que la superficie excediera las 200 hectáreas por persona. Los lotes se pagarían en veinte años, con una tasa de interés de 6% anual, la tasa corriente en ese entonces.

Ese proyecto tenía similitudes con la famosa ley de baldíos porfiriana: sólo tendrían acceso a ellas quienes pudieran pagarlas, en condiciones normales de mercado. Si sus creadores pensaban favorecer a los labradores pobres, no señalaban ningún mecanismo para que tal cosa ocurriera. Si pensaban que con una propuesta tan vaga se podía acabar con la gran propiedad y con el problema agrario, denotaban una gran ingenuidad, en el mejor de los casos. En realidad, atados a sus intereses de clase, pretendían dejar las cosas como estaban, sin cambios significativos en la estructura económica. Ésa era la principal limitación del régimen maderista y la que a la postre significó su derrota.

Días más tarde, mediante un decreto, Madero estableció la formación de comisiones oficiales para delimitar los baldíos que hubiera en los estados y territorios y rectificar el deslinde de los terrenos nacionales. Se notificaría a los gobernadores y jefes políticos acerca de la situación de esos terrenos, cuidando de no afectar los bienes de particulares legítimamente adquiridos. Los terrenos baldíos se fraccionarían en lotes de hasta 200 hectáreas y

[55] *El País*, 21, 22, 24 y 26 de febrero de 1912.

posteriormente se venderían al contado o en plazos de diez años con un interés anual de cinco por ciento. La superficie de diez millones de hectáreas que el gobierno ofrecía para hacer tales deslindes, sin embargo, correspondía en su gran mayoría a los estados norteños y a regiones despobladas, pero no consideraba los estados del centro-sur densamente poblados ni tampoco la zona donde tenía lugar la insurrección agraria, con la excepción de Guerrero.[56]

El régimen maderista, demasiado comprometido ya con las oligarquías y reacio a efectuar una reforma agraria, ofreció una tibia propuesta que dejaba incólume, en lo fundamental, la gran propiedad terrateniente, con una propuesta de reparto mediante compra, lo que obviamente no satisfacía las enormes expectativas que se habían generado en el país. Con la cuestión agraria, a Madero le pasó lo mismo que con la cuestión laboral. El fuerte movimiento textil que se desarrolló en esos meses y que efectuó varias huelgas nacionales, constituyendo un frente único, encontró un tibio apoyo de parte de algunos funcionarios maderistas que no pudieron —ni quisieron— vencer la resistencia de los patrones. Con el apoyo de los sectores progresistas, el maderismo dio a conocer una supuesta ley obrera que prácticamente no satisfacía ninguna de las demandas laborales relacionadas con un incremento salarial, una tarifa única nacional y una serie de reivindicaciones que exigían la eliminación de los malos tratos patronales. Con el campo le pasó algo similar. A pesar de reconocer la importancia y la vigencia del problema agrario, su limitada propuesta no alteraba la gran concentración e injusta distribución de la tierra, no representaba mejoras para las clases agrarias marginadas y, paradójicamente, tampoco encontraba el respaldo de las oligarquías terratenientes. Ambos problemas revelan la esencia de clase del maderismo y la fuerza de sus compromisos con las elites para sostener el sistema de dominación, así como su creciente contención y divorcio de las aspiraciones populares, muchas de las cuales, a su pesar, había puesto en movimiento.

[56] *Ibid.*, 9 y 25 de febrero de 1912. Aunque el decreto señalaba que dotaría de ejidos a los indígenas de los pueblos que carecieran de ellos, imponía la severa restricción de que estuvieran asentados en tierras aledañas a los baldíos señalados en esas diez millones de hectáreas y que se distribuían así: Coahuila, 105 000 has; Chiapas, 67 000; Chihuahua, 2 300 000; Durango, 750 000; Guerrero, 650 000; San Luis Potosí, 60 000; Sonora, 400 000; Tabasco, 75 000; Veracruz, 9 000; Yucatán, 75 000; Zacatecas, 100 000; Baja California, 1 000 000, y Tepic, 800 000 hectáreas. Los grupos conservadores, no obstante la moderación del decreto, se opusieron a él. Un editorial de *El País* expresó que el denuncio de baldíos podía servir para cometer muchas injusticias y que ese procedimiento había sido nefasto en épocas pasadas y aprovechado para despojar de sus propiedades a sus legítimos dueños. Consideraba que muchos de los propietarios no tenían ya sus títulos porque la revolución había quemado muchos archivos y eliminado esos documentos y que la población pobre no contaba con los recursos para comprar los terrenos que se pusieran en venta ni para realizar obras de infraestructura y riego (*El País*, 29 de febrero de 1912).

Poco después, a principios de marzo de 1912, tras el estallido de la rebelión orozquista en el norte del país, Madero hizo un llamado a la población a defender su gobierno por medio de un manifiesto a la nación, documento en el que señalaba que los rebeldes de Morelos, Chihuahua y Durango no tenían ningún plan político ni militar, que proclamaban en general el Plan de San Luis ("pretextando que no lo he cumplido"), engañando a "las clases ignorantes [...] respecto a las promesas que en lo relativo a la pequeña propiedad hizo el Plan de San Luis". Y, enfáticamente, expresó:

> Pretender que el gobierno que presido pueda solucionar el problema agrario de la república, bajo la presión de movimientos anárquicos, y sin que la paz se haya previamente restablecido, es sencillamente insensato. Nótese que los zapatistas estaban en armas desde antes que yo fuera elevado a la Presidencia y que después no han querido someterse a mi gobierno [...] los autores de esos movimientos no han esperado a ver si mi programa político era o no fielmente desarrollado [...] Y que el pueblo humilde no se deje engañar por agitadores ni ambiciosos. Su condición no podrá mejorar bruscamente [...][57]

La posición de Madero respecto del problema agrario no varió, a pesar de los desafíos de Zapata y Orozco. En diversas ocasiones sostuvo que, en el Plan de San Luis, no había prometido dotar de tierra ni destruir los latifundios. Todavía en junio, en carta a *El País*, señaló:

> [...] siempre he abogado por crear la pequeña propiedad, pero eso no quiere decir que se vaya a despojar de sus propiedades a ningún terrateniente [...] una cosa es crear la pequeña propiedad por medio de un esfuerzo constante, y otra es repartir las grandes propiedades, lo cual nunca he pensado ni ofrecido en ninguno de mis discursos y proclamas. Sería completamente absurdo pretender que el gobierno fuese a adquirir todas las grandes propiedades para repartirlas gratis entre todos los pequeños propietarios, que es como se concibe generalmente el reparto de tierras.[58]

La postura de Madero no dejaba lugar a dudas y fue siempre consistente. El problema era que, para desactivar una rebelión agraria como la que encaraba, esa posición no le ayudaba. Por lo tanto, tendría que derrotarla militarmente. En relación con el estado de Morelos, el gobierno in-

[57] *Semanario Oficial del Gobierno del Estado de Morelos*, año XX, núm. 10, 9 de marzo de 1912.

[58] *El Imparcial*, 28 de junio de 1912. Santiago Gómez, pequeño propietario de Coyuca de Benítez, le escribió que estaba totalmente de acuerdo con esas declaraciones y le pidió que las reprodujera y enviara copias a las regiones "para restablecer el respeto a la propiedad" (Gómez a Madero, 8 de julio de 1912, AGN, FFM, c. 2, exp. 35-2, ff. 1361-1362). La respuesta de Madero a Azcona fue que lo reprodujeran los propios particulares.

formó que saldría una comisión para analizar y resolver acerca del deslinde de ejidos y de los terrenos en disputa. Patricio Leyva fue comisionado para trasladarse a Santa María y otros poblados con el fin de investigar lo relativo a sus reclamos agrarios y ofrecer una amnistía a los rebeldes que no fueran dirigentes.[59]

Al mismo tiempo, el gobernador Naranjo intentó legitimar el desempeño de su administración ante sectores liberales y democráticos. Para ello invitó a Antonio Díaz Soto y Gama —antiguo miembro del Partido Liberal magonista e influyente abogado y periodista representativo del ala izquierda del maderismo— para que colaborara en su administración como secretario de gobierno del estado. Sin embargo, Soto y Gama se negó a aceptar el encargo, aduciendo que Madero se había equivocado al querer resolver con sangre y fuego el problema social que había en Morelos. En entrevista señaló que entendía que los burgueses y conservadores intentaran exterminar al zapatismo, pero los liberales como él no, pues veía con simpatía las reivindicaciones de los jornaleros morelenses y consideraba que su lucha era justa. Acotaba que los liberales no pretendían imponer el comunismo agrario ni la igualdad absoluta, y que se debía estudiar una reforma agraria que no significara el despojo para los propietarios, aunque establecía que éstos eran los principales culpables por haber despojado a los pueblos de todos sus ejidos y aun del fundo legal. Concluía diciendo que, siendo simpatizante de la causa de los jornaleros morelenses y sintiendo odio por la actitud inhumana de los hacendados, no podía aceptar un cargo donde no iba a poder poner en práctica sus ideales, pues, aunque compartía el punto de vista de Naranjo, la actitud del gobierno federal era totalmente favorable a los hacendados.[60]

Soto y Gama veía con claridad el dilema que enfrentaba el ala izquierda del régimen: en la disputa por el poder, Madero, al margen de sus inclinaciones, tendría que reprimir y aplastar al zapatismo. Tal era la esencia de la política a la que lo empujaban la razón de Estado y su posición de clase. Los liberales que, de buena fe, quisieran participar en las estructuras políticas del sistema, limando las aristas antipopulares de esa estrategia, no serían sino cómplices de ella.

Días más tarde, Soto y Gama escribió en el *Diario del Hogar* que Madero debía cumplir con las promesas revolucionarias y restituir a los pue-

[59] *El País*, 22 y 26 de febrero de 1912. Zapata, empero, dio instrucciones a sus jefes para que no hicieran caso de las ofertas de Leyva ni de los representantes del gobierno, a quienes calificaba de mentirosos y traidores, y les recomendó: "[...] ustedes mismos pueden tomar posesión de los terrenos que les pertenecen de acuerdo con los títulos y planos del pueblo; y para hacerse respetar en caso de que el gobierno no quede conforme, ustedes lo arreglarán con las armas en la mano" (Zapata a De la O, cuartel revolucionario, 17 de marzo de 1912, AGN, FGO, c. 11, exp. 10, f. 3.

[60] *Diario del Hogar*, 25 de enero de 1912.

blos los ejidos, montes y aguas que les habían sido arrebatados. Si era necesario, el gobierno debía comprar propiedades, aumentar el salario de los jornaleros y disminuir las rentas de los arrendatarios. Se pronunciaba por el retiro gradual del ejército, "en forma tal que [no] padezca la seguridad pública y se logre el fin ansiado de la pacificación inmediata". Manifestaba también su temor por lo que sucedería si no se atendían esos reclamos:

> Qué será de nosotros el día en que todos los trabajadores del campo, desesperados de sufrir y viendo en el comunismo un remedio y en Zapata un salvador, se levanten como un solo hombre pidiendo tierras, exigiendo justicia, saciando sus odios con la ferocidad de la incultura [...] que se desprenda como una avalancha la irrupción formidable de la raza oprimida y entonces ¡adiós nacionalidad y adiós Patria![61]

Alfredo Robles Domínguez rompió por esos días con Madero, señalando que se había desilusionado de él por no haber aceptado la reorganización del ejército federal y de los cuerpos rurales ni tampoco la necesidad de hacer reformas sociales que mejoraran la situación de los obreros, hombres del campo y pueblo en general; coincidió, además, con otros liberales ubicados a la izquierda de Madero en que el gobierno de éste, con la política que estaba aplicando, caminaba hacia su caída.[62]

La influencia de los zapatistas en los sectores progresistas del maderismo, que llevó a éstos a distanciarse cada vez más de Madero, o incluso a romper con él, se manifestó también en gente como Jenaro Amezcua, comerciante poblano de filiación maderista, cercano al Partido Liberal, quien se postuló como candidato a diputado por el distrito de Tehuacán, Puebla, en junio de 1912. En su programa, sostuvo la "inmediata restitución de los fundos y ejidos de los pueblos, así como de sus montes y aguas, por todos los medios posibles, rápidos y violentos", formulación que se acercaba mucho al zapatismo, al que se incorporaría meses después. El reconocimiento de las reivindicaciones agrarias llevó a que incluso el viejo y confeso porfirista G. Maza dijera a Madero que el gobierno tenía que repartir tierras, dotando con parcelas de regadío a quienes las nece-

[61] *Ibid.*, 7 de febrero de 1912. Dos meses después, cuando se había recrudecido el enfrentamiento entre los rebeldes surianos y el ejército, en el Congreso del Partido Liberal, Soto y Gama encabezó la postura de que se debía expedir una ley que facultara al Ejecutivo para expropiar por causa de utilidad pública y dotar de tierras a los pueblos que carecieran de ellas, acercándose con ello al Plan de Ayala zapatista. Sin embargo, su posición fue derrotada por la mayoritaria corriente moderada del partido, encabezada por Lerdo de Tejada y Antonio Villarreal (*El País*, 3, 5 y 6 de abril de 1912). Felipe Santibáñez, miembro de la Comisión Agraria del Partido Liberal, consideraba que la única manera de acabar con el zapatismo era repartir la tierra (Santibáñez a Madero, México, 6 de febrero de 1912, AGN, FFM, c. 52, exp. 1476, f. 39458).

[62] *El País*, 7 y 8 de febrero de 1912.

sitaran; el Estado debía obtenerlas mediante deuda pública, para crear la pequeña propiedad agrícola y acabar con los motivos de la rebelión. Tomás Ruiz de Velasco propuso la realización de una convención estatal en la que participarían todos los sectores de la entidad para dar solución a los distintos problemas y señaló que sí, que en Morelos había tierras y aguas qué repartir, tierras ociosas que debían entregarse a los alzados, pero no regaladas, sino vendidas.[63]

Represión: la guerra sucia de Juvencio Robles

Sin embargo, estos signos de apertura, encaminados a tratar de ganar consenso en los sectores de la clase media y en la opinión pública de las ciudades, eran sólo una cara de la moneda con la que Madero encaraba la insurrección que tenía por centro el estado de Morelos. Al mismo tiempo, cediendo a las presiones del ejército y de los sectores conservadores más intransigentes, que clamaban por una solución de fuerza, removió pocos días después al jefe de la campaña militar contra los insurrectos Casso López y lo sustituyó por Juvencio Robles, general que aplicó, desde el primer momento, una política de represión masiva a gran escala, mucho más sangrienta que la de sus antecesores. La política de la guerra era otra vez la que se imponía.

Al margen de las pugnas internas del maderismo y de los enfrentamientos entre grupos e instituciones que se disputaban la hegemonía política nacional, la insurrección agraria había alcanzado ya una dinámica de ascenso difícil de detener. La rebelión morelense había generado simpatías, solidaridades, contagios y su ejemplo sirvió como un catalizador que puso en marcha demandas, aspiraciones y energías de los sectores rurales, una vez que el Estado dio muestras de debilitamiento y falta de control de las instituciones. Al ponerse en movimiento, estos mecanismos contribuyeron a su vez al debilitamiento del poder hegemónico.

En estas condiciones, la Ley de Suspensión de Garantías demostró poca eficacia para contener la revuelta, por lo menos en las semanas posteriores a su entrada en vigencia.[64] Lo mismo ocurría con el cambio de

[63] AGN, FFM: manifiesto de Jenaro Amezcua y Eduardo Fuentes, Tehuacán, junio de 1912, c. 2, exp. 26, f. 898; Benjamín Balderas a Madero, Tehuacán, 11 de junio de 1912, c. 2, exp. 26, f. 894; G. Maza a Madero, México, 23 de julio de 1912, c. 42, exp. 1154-1, ff. 32313-32317; Tomás Ruiz de Velasco a Madero, México, 23 de junio de 1912, c. 49, exp. 1377, ff. 37369-37375.

[64] La Ley de Suspensión de Garantías, aunque tenía como propósito legalizar la acción contrainsurgente del ejército y castigar a los insurrectos capturados, servía más efectivamente como instrumento de presión contra la población civil para alejarla de los rebeldes y, desde luego, se prestó a muchos abusos por parte de la tropa. Campesinos de Ocotepec y Chamilpa, en Morelos,

gobernador, a pesar de que éste parecía querer aplicar una línea política más conciliadora. La incapacidad del régimen para controlar la rebelión colocó a Madero nuevamente en una situación de debilidad ante los sectores duros del ejército y de las elites, que preferían una solución de fuerza. Las presiones de los sectores más intransigentes lo convencieron, una vez más, de que la solución debía basarse en el aumento de la represión. Juvencio Robles incrementó las acciones de guerra en contra de la insurrección. Con esto dio comienzo una nueva etapa de la rebelión, caracterizada por el recrudecimiento de la violencia y la utilización de una táctica de guerra sucia, de contrainsurgencia, incendio de poblados y reconcentración masiva de poblaciones por parte de las fuerzas federales.

En febrero de 1912, la táctica empleada por el ejército y las fuerzas rurales en la guerra contra los zapatistas dio un vuelco. La resistencia y organización de las bandas guerrilleras había crecido; ya podían disputar al ejército territorios, poblados y haciendas en batallas mayores que las libradas hasta entonces, en lo que comenzaba a ser una guerra de posiciones, con avances y retrocesos de ambas partes durante semanas enteras. Esto ocurrió en la disputa por Santa María, el pequeño y estratégico poblado situado en las faldas de las montañas del Ajusco, pocos kilómetros al noroeste de Cuernavaca, asiento del grupo de Genovevo de la O, el que se caracterizó por ser una de las bandas guerrilleras mejor organizadas y que más dolores de cabeza dieron a las fuerzas gubernamentales, mediante una enorme cantidad de acciones de hostigamiento, sabotaje y descarrilamiento de trenes, así como de emboscadas a dichas fuerzas.

Desde fines de enero de 1912 y durante la mayor parte de febrero de ese año tuvieron lugar sangrientas batallas entre más de mil zapatistas y los federales, por ocupar y controlar el estratégico descenso del Ajusco hacia Cuernavaca, donde se encontraban dos fuertes enclaves rebeldes, en Santa María y Huitzilac. El control de éste, principal acceso del ferrocarril Mexicano al territorio de Morelos, llevó a los hermanos Ruiz de Velasco a proponer que se construyera un fuerte para proteger el paso de los trenes y no solo se les escoltara como se había hecho hasta entonces. En febrero, federales y rebeldes disputaron encarnizadamente esos lugares; unos y otros, alternativamente, lograron ocupar esa población. El ejército, varias veces derrotado, tuvo que recurrir a una táctica que hasta entonces no había empleado sistemáticamente: el bombardeo y la quema de todas

---

se quejaron de que no podían salir a cortar leña a los bosques ni dar de beber a sus animales en el río porque los soldados les disparaban y los apresaban con el pretexto de dicha ley, habiéndoles hecho ya algunos muertos. Véase *Diario del Hogar*, 28 y 30 de enero de 1912. A partir de febrero, con el recrudecimiento de la represión por parte del nuevo jefe de la campaña federal Juvencio Robles, la Ley de Suspensión de Garantías fue aplicada en mayor escala.

las casas del pueblo, para acabar de raíz con el apoyo civil que recibían los rebeldes. De este modo, el 9 de febrero el vecindario había sido reducido a cenizas y la población había huido a los bosques aledaños, los cuales también fueron incendiados por los federales. A pesar de ello, los rebeldes lograron recuperar la población y desalojar al ejército días más tarde; los federales extendieron entonces la zona quemada hasta las orillas de los pueblos de Tetela del Monte y Huitzilac. Las tropas de De la O, reorganizadas en los bosques, continuaron hostigando y emboscando a las patrullas federales y consiguieron desalojar al ejército de sus posiciones.[65] La actividad de los alzados en el Ajusco llegó otra vez hasta el Distrito Federal, cuando, el 21 de febrero, intentaron tomar el pueblo de Coyoacán.[66]

Los rebeldes continuaron con la táctica de emboscar unidades federales y rurales en condiciones de superioridad numérica, al mismo tiempo que atacaban poblaciones y haciendas para aprovisionarse de víveres y armas, imponer préstamos forzosos, castigar a autoridades repudiadas por la población y secuestrar a comerciantes, hacendados o familiares de ambos para obtener rescate. También se volvieron prácticas comunes el ataque a trenes militares y de carga, la destrucción de las vías del ferrocarril, la voladura de puentes y la inutilización de las estaciones y líneas telegráficas.

Durante el mes de febrero tuvieron lugar 52 acciones zapatistas en Morelos; las más importantes, además de la disputa por Santa María y sus alrededores, fueron los enfrentamientos entre los 600 hombres de Lorenzo Vázquez y los rurales para tomar el control de Tlaquiltenango, los días 8, 9 y 14, cuando los alzados incendiaron los cañaverales, y el día 18, mismo en que tuvo lugar un fuerte combate en Temixco, donde descarrilaron un tren. Uno de los blancos preferidos fueron las estaciones de trenes, las cuales sufrieron siete ataques: en Tres Marías, Ramón, Treinta, El Mango, Chamilpa, Temixco y Alarcón. Los alzados consiguieron descarrilar tres trenes en el mes e inutilizar temporalmente las vías. El otro blanco fueron las haciendas. Tomaron las de El Puente, Zacatepec, San Carlos, San Vicente, San Pedro, Guadalupe, Atlacomulco, Temixco, Chinameca, Xochimancas, Temitzingo, Ahuatepec y Santa Cruz.[67] En esos ataques, los alzados saquearon fincas y comercios y secuestraron frecuentemente a dueños y administradores de haciendas y a comerciantes para hacerse de fondos. Durante ese mes ocurrieron cinco secuestros en las poblaciones de Alpuyeca, Achichipilco, Chalco y Yecapixtla. En marzo, en el ataque a Tlaquiltenango, secuestraron al administrador de la hacien-

[65] *El País*, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 25 de febrero de 1912.

[66] *Ibid.*, 22 de febrero de 1912.

[67] Informe de Juvencio Robles, 28 de marzo de 1912, AGN, FFM, c. 47, exp. 1292, f. 35551; *El País*, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 21, 22 y 25 de febrero de 1912.

da Santa Cruz, y asesinaron a un empleado de la familia Ruiz de Velasco; en Jalatengo secuestraron también al administrador.[68] Estos secuestros eran, además de un medio para conseguir recursos, una muestra del poder de los alzados para capturar y castigar a personas de las elites.

Ante este incremento de la actividad subversiva, la mano dura de Juvencio Robles pronto se hizo notar. En la primera quincena de febrero, a unos días de hacerse cargo de la campaña, otros pueblos habían sido quemados y arrasados, siguiendo el destino de Santa María: Nexpa, Tetela del Monte, Los Hornos, Los Elotes y la colonia San Rafael, cerca de Cuautla.[69] En Nexpa, donde los hombres habían abandonado el lugar para incorporarse a las partidas zapatistas, los habitantes que permanecieron en el lugar suplicaron inútilmente que no lo quemaran. Los 5 ancianos y las 131 mujeres que quedaban fueron aprehendidos junto con sus hijos y trasladados a Jojutla.[70] En marzo, los federales quemaron los pueblos de Amatepec, Santa Catarina, Cuentepec, Huitzilac, Santo Domingo y Huautla, reconcentrando a la población en Cuernavaca, Jojutla, Yautepec y Cuautla, lugares en donde estaban estacionadas fuertes guarniciones federales.[71] Robles incrementó también los fusilamientos y ahorcamientos de los rebeldes capturados. En febrero, la prensa capitalina reportó más de setenta de ellos y en marzo más de treinta.[72] La guerra sucia alcanzó así su

[68] *El País*, 2, 7, 9 11, 22 de febrero y 14 de junio de 1912; *El Imparcial*, 1, 3, 20 de marzo y 11 y 19 de junio de 1912. Los secuestros continuaron en los meses siguientes, aunque fueron más esporádicos. A mediados de junio, en la hacienda de Tehuixtla, secuestraron al dueño Rafael Almanza. En el Estado de México, en Tenango, el 13 de junio secuestraron a un empleado de la Compañía Singer y lo mismo hicieron en Texcalyacac.

[69] *El Imparcial*, 18 de febrero de 1912. Madero mismo, pocos días antes, había dado instrucciones al gobernador Naranjo para que persiguiera tenazmente a los rebeldes zapatistas, a los que consideraba "chusmas indisciplinadas y sin armamento" que no debían ser más de 700 en el estado. Véase Madero a Naranjo, Chapultepec, 5 de febrero de 1912, AGN, FFM, c. 31, exp. 862, ff. 23900-23901.

[70] *El Imparcial*, 17 de febrero de 1912.

[71] *Ibid.*, 1, 2, 3, 11, 20 y 24 de marzo de 1912.

[72] La Ley de Suspensión de Garantías sirvió no solamente para legitimar el fusilamiento de los prisioneros capturados después de un enfrentamiento, también se hizo efectiva contra sujetos capturados por actos de sabotaje a trenes, estaciones y vías de comunicación, así como en asaltos a mano armada en contra de civiles. En el *Semanario Oficial del Estado de Morelos* aparecieron actas de ejecución: el 13 de febrero fue fusilado Camilo Vázquez, campesino de Dolores, Hidalgo, avecindado en Morelos, que se había incorporado quince días antes a los rebeldes en Atlatlahuaca, luego de haber sido rural. Fue capturado cuando rompía la puerta de la estación del tren de ese lugar, después del asalto al convoy. El 5 de ese mes se ejecutó a dos individuos aprehendidos por robo *in fraganti* en Tetecala, uno de ellos, Paulino Vázquez, de 52 años, originario y vecino de Chalmita; véase *Semanario Oficial del Estado de Morelos*, año XX, núm. 9, 2 de marzo de 1912, núms. 8 y 11, 24 de febrero y 16 de marzo de 1912; *El País*, 8 y 22 de febrero de 1912; *El Imparcial*, 5, 13 y 22 de marzo de 1912. Las arbitrariedades para eliminar a opositores continuaron, a menudo sin guardar las formas de la Ley de Suspensión de Garantías. El 14 de febrero de ese año,

máxima expresión. Al mismo tiempo, en su afán por cortar de tajo con la revuelta, las fuerzas federales capturaron y tomaron represalias contra familiares de algunos de los rebeldes más conocidos como Zapata y Lorenzo Vázquez.[73] A mediados de ese mes, el gobierno decidió además establecer la censura militar a la prensa, prohibiendo que ésta difundiera noticias que perjudicaran a las autoridades militares y civiles.[74] La mano dura alcanzó así a la prensa. El gobierno pensaba que una parte del apoyo que los sectores urbanos de las clases medias brindaban a los rebeldes tenía por origen la difusión de las noticias de Morelos y por eso intentó ocultar la información de las acciones militares. Varios de los periódicos nacionales no tenían corresponsales propios y dependían de los partes de la Secretaría de Guerra o de versiones de segunda mano, generalmente de entrevistas realizadas a personas que se trasladaban de Morelos a la capital del país.

Durante el mes de marzo, la dinámica que había alcanzado la rebelión en la entidad morelense resintió los estragos de la represión, la quema de pueblos y la reconcentración, procesos que hicieron disminuir notablemente el número y la intensidad de los enfrentamientos. Además, se sumó un elemento externo de gran importancia: la rebelión del prestigiado general exmaderista Pascual Orozco en Chihuahua alcanzó grandes dimensiones y se convirtió, dada la fuerza que tenía ese caudillo, en el principal problema militar y político del régimen maderista. La insurrección suriana, aunque pasó a un segundo plano en el país, continuó con su inercia propia y se benefició del traslado de tropas y recursos federales hacia el norte para enfrentar la rebelión orozquista. Ésta se presentó como una ame-

---

A. Figueroa fusiló en Iguala a Salustio Carrasco porque hacía propaganda en público contra el gobierno y en favor de los zapatistas, fusilamiento que causó indignación en la prensa capitalina y protestas de ciudadanos. Véase A. Figueroa a Madero, Iguala, 17 y 27 de febrero de 1912, en Fabela, *op. cit.*, vol. VII, pp. 107-108 y 149-150. En contraste, seis prisioneros federales de las fuerzas de Casso López que fueron rescatados dieron su testimonio a la prensa de que, estando heridos, fueron curados y tratados muy bien por las fuerzas de Zapata (*El Imparcial*, 16 de febrero de 1912). Un testigo presencial del enfrentamiento entre 150 hombres de Zapata y 200 rurales, sucedido cerca de Los Hornos, escribió al *Diario del Hogar* que Zapata derrotó completamente a los rurales, haciéndoles 40 muertos, 30 heridos y 20 prisioneros y capturando armamento. Zapata perdonó la vida a los prisioneros, para dejar constancia de que su movimiento no era de asesinos. El testigo mencionó que ésa era la conducta habitual de las fuerzas de Zapata porque éste consideraba que los soldados, al igual que los "voluntarios" que se le enfrentaban, eran enrolados por la fuerza. El testigo consideraba que los prisioneros liberados a menudo se unían a Zapata por gratitud. El mismo diario publicó ese día una carta escrita por varios de esos soldados en la que éstos exponían: "[...] hemos sido tratados con muchas consideraciones, se nos ha perdonado la vida y se nos ha puesto en absoluta libertad, bajo nuestra palabra de honor de no volver a tomar las armas contra la revolución" (*Diario del Hogar*, 23 de febrero de 1912).

[73] *Diario del Hogar*, 14 y 17 de febrero de 1912.

[74] *Ibid.*, 17 de febrero de 1912.

naza adicional para el régimen con la posibilidad de una alianza entre los revolucionarios del sur y del norte, que finalmente no fructificó. Orozco parecía dispuesto a un compromiso con Zapata y prometió enviarle armas. Zapata, quien, desde la proclamación del Plan de Ayala, había ofrecido la jefatura de su movimiento a Orozco, contempló la posibilidad de unir esfuerzos. Sin embargo, tal alianza nunca cristalizó y no pasó de las comunicaciones escritas. Las dos rebeliones regionales siguieron cada una su propio curso.[75]

En marzo, el ejército estableció su dominio en la mayor parte del estado, con un amplio movimiento envolvente, luego de quemar los pueblos del noroeste, en las faldas del Ajusco. Cuatro fuertes columnas se desplazaron hacia el sur y el sureste del estado, hasta Huautla y la frontera con Puebla y Oaxaca, logrando desbandar a las fuerzas rebeldes. Robles continuó con su práctica de quemar las poblaciones y reconcentrar a la población. Los rebeldes retrocedieron y sólo pudieron presentar resistencia mediante emboscadas, asaltos a haciendas y ataques al ferrocarril. A fines de marzo, Robles informó que la mayoría de los zapatistas se había refugiado en Puebla y hacia allá dirigió su columna.[76] Los resultados más importantes, sin embargo, fueron contra la población civil, que fue removida de sus lugares y sometida a mayor vigilancia.

En abril, el ejército consolidó su control sobre Morelos. En la primera semana, 475 efectivos federales y rurales recuperaron la ciudad de Jojutla, después de dos días de fuertes combates en los que la población apoyó ampliamente a los alzados; el ejército reconoció haber tenido 34 muertos y 41 heridos. Las tropas de De la O, a mediados de abril, tendieron un cerco en torno de Huitzilac y lograron ocuparlo cinco días después; durante la toma, que destacó por la violencia, descarrilaron un tren en Tres Marías, Santa María terminó de ser quemada y las familias que se encontraban todavía en el lugar fueron reconcentradas en Xochimilco.[77]

Los ataques a los trenes y vías de comunicación fueron un recurso táctico de gran importancia para los rebeldes que, de este modo, difi-

[75] Brunk, *Zapata...*, *op. cit.*, pp. 77-78.

[76] Robles a Madero, Puebla, 28 de marzo de 1912, AGN, FFM, c. 47, exp. 1292, ff. 35553-35555.

[77] *El País*, 2, 4, 6, 11 y 24 de marzo, 9, 14, 15, 19 y 21 de abril de 1912; *El Imparcial*, 13 y 22 de marzo de 1912. AGN-FFM: Francisco Naranjo, gobernador de Morelos, a Madero, Cuernavaca, 12 de abril de 1912, c. 31, exp. 862, ff. 23889-23890; Robles a Madero, Puebla, 18 de abril de 1912, c. 47, exp. 1292, ff. 35560-35561; en esa misiva, Robles se quejó del comportamiento de los rurales comandados por Gabriel Hernández en la toma de Jojutla y los acusó, además de ineficientes, de cometer depredaciones contra los habitantes. Después de la ocupación de Jojutla por el ejército, Madero pensó que podía haber condiciones para realizar elecciones locales. Véase Madero a Carreón, Chapultepec, 10 y 20 de abril de 1912, en Fabela, *op. cit.*, vol. VII, pp. 298-299 y 326.

cultaban o impedían el tránsito regular del ejército y conseguían hacerse de pertrechos militares. Aunque sus objetivos principales fueron los trenes militares y de carga, en ocasiones también atacaron convoyes de civiles y ésta fue quizás una de los acciones que causaron mayor irritación entre la opinión pública capitalina —y el consecuente rechazo por parte de la misma—, que no sólo se veía afectada por la interrupción del tránsito de personas y bienes, sino verdaderamente molesta por los actos de violencia que, al cobrar víctimas civiles inocentes, adquirían el carácter de terrorismo. Así, a fines de marzo los rebeldes detuvieron y asaltaron, en Tres Marías, el tren militar que iba a Cuernavaca, infligiendo 40 bajas al ejército. El 10 de abril detuvieron y asaltaron el tren de carga del ferrocarril Mexicano que iba de Cuernavaca a Balsas, antes de la estación de Treinta, y provocaron el choque de esta máquina contra un tren de pasajeros que estaba estacionado. El 16 de ese mes descarrilaron, otra vez en Tres Marías, el tren militar que iba a dar auxilio a Huitzilac. Ante esta cadena de sabotajes, la compañía de ferrocarriles decidió suspender indefinidamente el tráfico de pasajeros y de carga por territorio morelense hasta que hubiera seguridad en los caminos.[78]

Con ascensos y reflujos, la revuelta había echado raíces en territorio morelense; se extendió y consolidó también por contagio, ampliación de sus dominios y convergencia con movimientos autóctonos, en la periferia de la entidad. La segunda zona de importancia para la rebelión zapatista fueron los distritos del suroeste de Puebla: Atlixco, Izúcar y Acatlán. La rebelión maderista arraigó también en esta región, pero no pudo pasar más allá de la sierra, hacia el este, y de las montañas de Huajuapan, ya en territorio oaxaqueño, hacia el sur.

Los distritos poblanos fronterizos con Morelos se convirtieron en la segunda zona en importancia para la rebelión zapatista, pues en ella se combinaron varios factores: por una parte, era el refugio natural de las huestes morelenses, el sitio al cual se trasladaban cuando los avances del ejército federal las obligaban a replegarse; a la vez era una región en la que los conflictos endógenos, agrarios y políticos entre las elites, las autoridades y las clases dominadas locales produjeron un agudo conflicto de clase, cuya violencia rebasó a menudo la intensidad de los enfrentamientos que tuvieron lugar en Morelos y otras regiones.

Durante febrero de 1912 tuvieron lugar 28 hechos de armas en esa entidad. Los más importantes fueron los ataques rebeldes a Tepeaca, Acatlán y Chietla a fines de mes, los cuales se combinaron con acciones sorpresivas en la toma de trece poblados y ocho haciendas; en ellos se realizaron saqueos, quemas de oficinas públicas y liberación de presos. Varias

[78] *El País*, 31 de marzo, 13, 14, 17 y 19 de abril de 1912.

de estas acciones fueron llevadas a cabo por *el Tuerto* Morales. Aunque la actividad insurrecta se concentró en la zona colindante con Morelos y es posible que parte de ella la hayan efectuado grupos zapatistas que huían de la ofensiva del ejército federal en Morelos, también hubo un crecimiento interno de la rebelión que fue más allá de los distritos del suroeste poblano y llegó incluso hasta los de Tepeji, Tecamachalco y Tepeaca, más al centro.[79] En Puebla, las haciendas azucareras y cerealeras de los valles de Puebla, Atlixco e Izúcar fueron el blanco preferido de los rebeldes, con un grado de violencia superior al mostrado hasta entonces en Morelos.[80]

Los saqueos, la destrucción y los incendios de haciendas y propiedades se volvieron una constante en la zona poblana, donde asentaron sus reales las huestes del *Tuerto* Morales, Francisco Mendoza y Eufemio Zapata. En marzo ocurrieron 42 acciones de armas, entre ellas la toma de 9 poblados y 26 haciendas, de las cuales 5 fueron incendiadas. La batalla principal tuvo lugar en Acatlán, donde *el Tuerto* Morales y Eufemio Zapata, después de atacarla, sitiaron durante varios días la población; posteriormente fueron rechazados por federales, rurales y voluntarios, entre los que se encontraban los hombres de la colonia española del lugar. El jefe político de Acatlán informó que habían infligido 117 bajas a los atacantes, y éstos, al retirarse, incendiaron las haciendas aledañas; las bajas de los defensores sumaron 37. Las acciones rebeldes llegaron incluso al sabotaje a la planta eléctrica de Necaxa, ocasionando temporalmente la interrupción del tránsito de tranvías en la ciudad de México. Entre las localidades importantes que pudieron tomar los alzados estuvieron Tochimilco, Huejotzingo, Tepeaca y la estación de San Marcos.[81]

[79] *Ibid.*, 7, 16, 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 1912; *Diario del Hogar*, 10, 21, 23 y 28 de febrero de 1912; *El Imparcial*, 1 y 10 de marzo de 1912; B. Balderas a Madero, Tehuacán, 1 de marzo de 1912, AGN, FFM, c. 2, exp. 26, f. 915. La incorporación de presos a las huestes zapatistas fue un fenómeno complejo. Si bien reflejó el poder de atracción que la rebelión ejercía sobre los detenidos —casi siempre gente de los estratos sociales más necesitados—, en ocasiones resultó ser la vía para que se adhirieran al movimiento bandidos o delincuentes cuya actividad se convirtió en un problema para la misma población civil que alimentaba la revuelta.

[80] A. del Pozo a Madero, Puebla, 21 de febrero de 1912, AGN, FFM, c. 7, exp. 179, ff. 5123-5124; *El País*, 22 y 26 de febrero y 1 de marzo de 1912; *Diario del Hogar*, 24 de febrero de 1912. El 21 de febrero, en el ataque a la hacienda de Balvanera, mataron y colgaron de un árbol al administrador de la misma. Las haciendas asaltadas fueron quemadas.

[81] AGN, FFM: Baraquiel Alatriste a Madero, Puebla, 5, 8 y 9 de marzo de 1912, c. 6, exp. 140-1, ff. 4107-4109, 4112, 4113-4115, 4126, 4118-4120, 4124-4125; parte de guerra del coronel Luis García Naranjo, jefe político de Acatlán, 8 de marzo de 1912, c. 6, exp. 140-1, f. 4110 y c. 3, exp. 77, f. 2276; Luis García Naranjo a B. Alatriste, Acatlán, 9 de marzo de 1912, c. 6, exp. 140-1, ff. 4104-4106. La violencia alcanzó también a representantes de la Iglesia: el 2 de marzo, en el asalto al pueblo de Chapulco, entre las víctimas que perdieron sus propiedades estuvo el párroco;

Después de esa intensa ola de ataques, la mayor parte de las haciendas de esos distritos quedaron devastadas. La legitimidad de la principal institución agraria había sido hecha pedazos por la rebelión, que le asestó un golpe del que ya no se levantaría.

La fuerte actividad de los sublevados y la amenaza que se cernía sobre la capital poblana obligaron a Juvencio Robles a trasladar allá la principal columna federal bajo su mando a fines de marzo, la cual tardó varios días en llegar a causa del sabotaje de los alzados a las vías de ferrocarril.[82]

La presencia del ejército federal provocó la disminución de la actividad rebelde. *El Tuerto* Morales volvió a lanzar un fuerte ataque sobre Acatlán a principios de abril, y el día 9 fueron asaltadas las haciendas del Rincón y San José Teruel.[83] La violencia ocurrida en esos meses hizo afirmar a un notable de Tehuacán que la revuelta no era ya solamente zapatista o vazquista, sino "una revolución agraria socialista en toda la forma".[84]

Nuevamente, bandas zapatistas asolaron los alrededores de la ciudad de México y penetraron en varios pueblos de Cuajimalpa, a mediados de marzo, obligando al gobierno capitalino a concentrar tropas en las prefecturas de Mixcoac, San Ángel, La Magdalena y Coyoacán. El gobierno citadino, preventivamente, cambió a los prefectos de esos lugares; sin embargo, el día 21 los sublevados volvieron a incursionar en San Ángel.

En Oaxaca, la región afectada por la rebelión zapatista fue principalmente Huajuapan y sus alrededores, adonde llegó la influencia del *Tuerto* Morales y Eufemio Zapata. En marzo, luego de la fuerte batalla librada en Acatlán, el grupo de Eufemio Zapata se dirigió hacia allá; tomaron siete poblados y destruyeron el puente del ferrocarril en Teotitlán. Temerosos, los vecinos de Pinotepa y Jamiltepec abandonaron sus hogares. El gobernador Juárez pidió ayuda para defender Huajuapan. El jefe político de Putla informó que la mayor parte de esa zona montañosa se había levantado en armas y pidió auxilio.[85]

---

a fines de mes, cuando Eufemio Zapata tomó Tepeaca intentó fusilar al cura por haber colaborado activamente en la defensa.

[82] *El Imparcial*, 27 y 28 de marzo de 1912.

[83] *El País*, 8, 10, 11, 15, 22 y 27 de marzo, 3 y 7 de abril de 1912; *El Imparcial*, 4, 5, 6, 20, 21, 26 y 29 de marzo de 1912.

[84] *El País*, 5, 8, 11, 21, 22 y 26 de marzo, 6, 10 y 11 de abril de 1912; *El Imparcial*, 7, 13, 21, 24 y 29 de marzo de 1912; B. Balderas a Madero, Tehuacán, 1 de marzo de 1912, AGN, FFM, c. 2, exp. 26, f. 915.

[85] *El País*, 19 de febrero, 2 de abril y 17 de mayo de 1912; B. Juárez a Madero, 18 de marzo de 1912, AGN, FFM, c. 9, exp. 121-1, ff. 6469-6473. El 20 de marzo, el gobernador Juárez escribió a Madero que consideraba injustas las críticas que éste le había hecho acerca de que él y su secretario de gobierno obstruían la campaña contra los zapatistas y que lo podía demostrar con hechos, documentos y gastos (ff. 6476-6477); B. Juárez a Madero, Oaxaca, 11 y 13 de abril de 1912, AGN, FFM, c. 9, exp. 121-1, ff. 6483, 6488, 6489, 6490. Benito Juárez falleció el 21 de abril y fue

En Guerrero, en esos meses, la revuelta tuvo fuerza en la región del Balsas y al sur de la sierra de Taxco, capitaneada por Salgado, y en el oriente, en la frontera con Puebla y Oaxaca, región en la que incursionaron en repetidas ocasiones las fuerzas del *Tuerto* Morales y Eufemio Zapata. Ambrosio Figueroa notificó a Madero que la campaña contra los rebeldes había tenido éxitos importantes, habiéndolos desalojado de Chilapa y Balsas. El gobierno estatal había hecho reconcentraciones de varios pueblos y ranchos.[86]

En el Estado de México, la revuelta zapatista tuvo influencia en el distrito de Tenancingo, zona montañosa en la que incursionaron Genovevo de la O, Francisco Pacheco y rebeldes guerrerenses provenientes de la zona de Taxco.[87]

La revuelta suriana se había consolidado. Aunque Morelos, el epicentro original, se había fortalecido y el liderazgo de los jefes zapatistas se había legitimado, la rebelión se había extendido y convertido en un movimiento con múltiples actores y un gran número de dirigentes locales que gozaban de gran autonomía. La rebelión iba adquiriendo el carácter de una guerra de clases de los sectores rurales bajos contra el gobierno central, contra las estructuras de dominación y contra las elites económicas y políticas; era un movimiento de considerable violencia que, en los seis primeros meses del gobierno constitucional de Madero, modificó la correlación de fuerzas en la región, y que ahora aspiraba a tomar el poder central y se convertía en un serio desafío para el régimen maderista.

Los ritmos de la revuelta

La cercanía de las lluvias, el arraigo a las faenas agrarias de buena parte de los jóvenes que se habían incorporado a las bandas rebeldes y, en mayor medida aún, la dureza de las acciones emprendidas por el ejército contra los alzados y la población civil, junto con la necesidad de las localidades de sembrar sus tierras, hicieron que, conforme avanzaba la primavera, las acciones militares de los alzados bajaran de intensidad. Empero, aunque

---

sustituido por Alberto Montiel al siguiente día; véase Heliodoro Quintas a Madero, 22 de abril de 1912, AGN, FFM, c. 9, exp. 121-1, f. 6501.

[86] *Diario del Hogar*, 1 de febrero de 1912; *El País*, 7, 8, 10, 15, 17, 21 y 23 de febrero, 9 y 17 de abril, 5 de mayo de 1912; A. Figueroa a Madero, Huitzuco, 21 de febrero de 1912, en Fabela, *op. cit.*, vol. VII, pp. 123-124; Madero a A. Figueroa, Chapultepec, 3 y 10 de marzo de 1912, *ibid.*, pp. 160, 201-202.

[87] *El País*, 1 y 24 de febrero de 1912. En el ataque a Zumpahuacán, a principios de febrero de 1912, los zapatistas fusilaron al jefe de armas y quemaron el archivo municipal (R. Cárdenas a Madero, 10 de febrero de 1912, AGN, FFM, c.2, exp. 34, ff. 1305-1306).

con menos gente, los líderes de la revuelta continuaron realizando numerosas acciones bélicas y siguieron siendo una amenaza constante para las fuerzas del orden.

En Morelos, durante el mes de mayo de 1912 se realizaron 16 enfrentamientos. La acción de mayor envergadura fue la serie de combates que tuvo lugar en la estratégica zona fría y boscosa de Tres Marías, Huitzilac y Santa Catarina, en la que más de mil rebeldes, encabezados por De la O, Felipe Neri y Amador Salazar, consiguieron apoderarse del lugar y defenderlo de las tropas federales y rurales; también interrumpieron el tránsito del ferrocarril antes de que las tropas federales recuperaran el control de esa inestable zona, la cual fue nuevamente ocupada por De la O a fines de ese mes. Otros combates importantes se desarrollaron en Yautepec, donde Zapata intentó infructuosamente tomar la población.[88]

El arribo de fuertes lluvias en junio favoreció la acción de los rebeldes, que conocían mejor el terreno y estaban mejor adaptados que las fuerzas de ocupación, federales y rurales, las cuales, en su mayoría, estaban compuestas por gente de otras regiones. Recuperado el control del norte boscoso, el ejército y los rurales emprendieron una fuerte ofensiva en el sur de Morelos y volvieron a tener el control de las principales ciudades. Ante este avance, los alzados, que efectuaron 22 acciones en el mes, optaron por ocupar poblaciones pequeñas, desperdigadas en una amplia área que dificultaba la labor de las fuerzas del orden. La columna federal de Robles salió de Yautepec el 29 de mayo, dirigiéndose hacia el centro-sur del estado. Ocupó Atlihuayán y Xochimancas sin resistencia, luego derrotó a Amador Salazar y Lorenzo Vázquez en Ticumán y más tarde los desalojó de Tlaltizapán.

[88] *El Imparcial*, 1, 6, 13 y 17 de mayo de 1912; *El País*, 3, 10, 11, 17, 22, 23, 26 y 27 de mayo de 1912; gobernador Naranjo a Madero, Cuernavaca, 25 de mayo de 1912, AGN, FFM, c. 31, exp. 862, ff. 23896-23897. En una misiva, Madero reconoció que habían sufrido un fuerte descalabro en Tres Marías porque la guarnición de Cuernavaca no había prestado auxilio, temía que la prolongación de la campaña estuviera relajando la disciplina de las tropas de Robles y externaba su sorpresa: "En verdad no me explico que puedan reunirse hordas tan numerosas de zapatistas y tan cerca de Cuernavaca donde hay una fuerte guarnición" (Madero a Robles, México, 22 y 23 de mayo de 1912, AGN, FFM, c. 47, exp. 1292, ff. 35578-35582). Sólo se registró un ataque contra haciendas en ese mes, a Miacatlán, donde se secuestró al español Manuel Sordo. La ofensiva estratégica contra el ferrocarril continuó con el incendio de la estación Cima. Los rebeldes anunciaron que tomarían la ciudad de México y escribieron a la Cámara de Diputados federal y a los cónsules extranjeros para notificar que de un momento a otro se realizaría el ataque, por lo que pedían se avisara a los extranjeros para evitar problemas, ofreciendo que las tropas de la revolución darían garantías a sus vidas e intereses. Aunque estuvieron lejos de cumplir ese propósito, volvieron a acercarse a la capital del país y a ponerla en alarma al incursionar en Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, a fines de junio. Véanse carta de la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos al cónsul de los Estados Unidos de América, 21 de mayo de 1912, AGN, FFM, c. 2, exp. 31-2, f. 1171; *El Imparcial* y *El País*, 27 de junio de 1912.

Robles regresó a Cuernavaca con su gente en la segunda semana de junio. Con mil hombres recuperó Huitzilac, Tepeyte y Coajomulco, luego de combates en los que, según informó, causaron 200 bajas a los rebeldes y capturaron a 53. Las tropas de Robles quemaron lo que quedaba del pueblo de Coajomulco y sólo dejaron en pie la iglesia. Sin embargo, en un balance que hizo de la campaña, Robles admitió: "En el extenso territorio [en] que los rebeldes han operado ha sido muy difícil conseguir extirpar las ideas zapatistas y hacer que reconozcan al gobierno constituido masas serviles e ignaras como las que se trata". Poblaciones enteras, agregó, "sabían que no había más gobierno que el de Zapata"; y luego se quejó: "[...] todos los presidentes municipales han resultado zapatistas".[89]

Los surianos, aunque no podían todavía conservar zonas libres, habían impuesto condiciones y habían modificado ya la política, la economía y la cultura regionales. Constituidos en Junta Revolucionaria del Estado de Morelos, comenzaron a tener formas regulares de financiamiento y a sustituir a autoridades locales, con lo que fueron sentando las bases para la organización de un poder regional paralelo.

Las lluvias, el mejor conocimiento del terreno y el apoyo de la población civil sirvieron para fortalecer directamente la posición de los grupos rebeldes. A esto se sumó también la rivalidad y la falta de coordinación entre las fuerzas federales y las rurales, de la que dio testimonio el propio Juvencio Robles, quien se quejó de las diferencias existentes entre el ejército y los jefes de rurales, como Gabriel Hernández, y manifestó que también había fuertes conflictos en Guerrero entre las fuerzas de los Figueroa y las del gobernador Lugo, todo lo cual redundaba en demérito de la campaña. De igual modo, Alfonso Zaragoza, capitán de caballería del 51º regimiento rural, expresó las difíciles condiciones en que se encontraban esas fuerzas:

> [...] lejos de encontrar un cuerpo rural ya formado, con elementos suficientes para desempeñar su misión, encontré una fuerza sin cohesión, sin disciplina, considerablemente reducida e incapaz de prestar eficaces servicios por la falta absoluta de recursos materiales [...] el sentimiento de aversión de los federales a nosotros, que nada ni nadie podrá borrar se manifiesta a cada paso. Se exige de nosotros una labor igual o superior a la de los cuerpos de línea que de nada carecen, pero en cambio se nos niega hasta el derecho de que por cuenta de la nación se haga el gasto de ataúd para los rurales que mueren.[90]

[89] Juvencio Robles a Madero, Cuernavaca, 20 y 21 de junio de 1912, AGN, FFM, c. 47, exp. 1292, ff. 35572-35577; *El Imparcial*, 2, 9, 13, 16, 17, 19, 20 y 22 de junio de 1912; *El País*, 8 y 18 de junio de 1912.

[90] AGN, FFM: Róbles a Madero, Puebla, 18 de abril de 1912 y Cuernavaca, 19 de junio de

Las diferencias y rivalidades existentes entre los clanes regionales, entre el ejército y los rurales, y entre los distintos jefes militares de estas dos instituciones facilitaban la actividad de los alzados. Las características de las bandas rebeldes, su expansión y persistencia llevaron a Juvencio Robles a declarar que el zapatismo era muy semejante al movimiento de los yaquis, puesto que los hombres escondían las armas, iban a trabajar, juntaban dinero, compraban parque y regresaban a combatir. La fuerte presencia y actividad de los alzados impidieron que se instalara la XXII legislatura local —en la que figuraban individuos como Patricio Leyva y Eugenio Morales— por falta de quórum, ya que los diputados electos por Tepoztlán, Yautepec y Tlayacapan no pudieron llegar a Cuernavaca, debido a la inseguridad de los caminos.[91]

El arribo pleno de la temporada de lluvias y la liberación temporal de las faenas agrícolas facilitaron el reagrupamiento de los alzados y la reanudación de su actividad. En Morelos, durante el mes de julio, tuvieron lugar 32 acciones: enfrentamientos con fuerzas del orden, tomas de pueblos y haciendas, y sabotajes. La zona que registró mayor actividad fue la nororiental, en las faldas de los volcanes y la frontera con Puebla. Líderes poco conocidos, como Joaquín Miranda, Antonio Simón, Daniel Andrade y Apolinar Adorno, tomaron las localidades de Totolapan, Tlalnepantla, Ocuituco y Hueyapán con una alta dosis de violencia, donde quemaron los palacios municipales, los archivos y las oficinas públicas y saquearon los comercios. En la región central atacaron Tlaquiltenango, incluida la estación del tren, y Jojutla, donde volaron el puente que iba a Puente de Ixtla.[92]

El 20 de julio, en la estación La Cima, ubicada en el Ajusco, tuvo lugar una de las acciones de Genovevo de la O más cuestionadas por la prensa y la opinión pública capitalinas y que motivó numerosas críticas, condenas y rechazos por parte de muchos sectores civiles que se manifestaron contra lo que era a todas luces una actividad terrorista: el desca-

---

1912, c. 47, exp. 1292, ff. 35560-35564; Alfonso Zaragoza a Madero, Cuernavaca, 14 de junio de 1912, c. 5, exp. 123-1, ff. 3593-3597. Las fuertes disputas entre los Figueroa y Lugo se agudizaron después de que Madero desplazó a aquéllos y buscó otras opciones. No obstante, los Figueroa conservaron casi intacto su poder regional, pues contaban con una milicia de varios cientos de hombres y no se resignaron a perder el importante lugar que tenían. Sus pugnas con Lugo, incluso, dieron la impresión de intentar un golpe de Estado contra el gobernador guerrerense, sin éxito. Estas pugnas beneficiaban directamente a sus rivales en la entidad, como Salgado y, desde luego, a los jefes zapatistas. Véase Eucaria Apreza a Madero, Iguala, 16 de junio de 1912, AGN, FFM, c. 47, exp. 1312-2, ff. 35973-35976.

[91] *El Imparcial*, 8, 22, 25, 26 y 28 de junio de 1912; *El País*, 25, 28, 29 y 30 de junio y 3 de julio de 1912.

[92] *El País*, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13 de julio de 1912; *El Imparcial*, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14 y 15 de julio de 1912.

rrilamiento, voladura y quema de un tren de pasajeros. Todos los soldados que escoltaban el convoy perecieron, así como seis pasajeros civiles. Según testigos, en el tren iba el párroco de Tepoztlán, quien logró que Genovevo respetara a los pasajeros civiles. Esta acción se convirtió en la noticia principal durante varios días y unificó a muchas voces en su contra. Sin duda, en términos de imagen y de apoyo, dicha acción fue totalmente contraproducente para los alzados, pues les enajenó la simpatía de toda la prensa, hizo más iracundas las críticas de sus opositores y brindó al régimen la oportunidad de justificar las acciones punitivas del ejército.[93]

En Puebla ocurrió la misma relación entre la actividad de los guerrilleros, las cosechas y la temporada de lluvias. Se registró, entonces, poca actividad en el mes de mayo antes de las lluvias y se incrementó en junio cuando éstas llegaron. Los rebeldes tomaron Tochimilco el 10 de mayo, así como los pueblos de San Juan Epalan y Chiloc, en Chietla; la única hacienda atacada en mayo fue la de Vista Hermosa, si bien quemaron la estación del tren en Atlautla. En junio efectuaron trece ataques, entre los que destacaron los intentos de Francisco Mendoza y Felipe Vaquero para tomar Tochimilco, la toma de Huaquechula y las incursiones del *Tuerto* Morales en seis haciendas de los alrededores de Chietla e Izúcar; en Tehuixtla y Mazapán asesinaron a los dueños de las haciendas. En julio se registraron doce acciones de armas —en los distritos de Atlixco, Izúcar y Tehuacán— que se caracterizaron por el alto grado de violencia: seis pueblos fueron tomados, con saqueo de comercios y encarcelamiento de autoridades locales por parte de los rebeldes.[94]

En el Estado de México, la rebelión volvió a afectar a los distritos de Tenancingo, Tenango y Sultepec, en la región suroeste del estado que colinda con Morelos y Guerrero, donde incursionaron fuerzas de Pacheco, De la O y los guerrerenses, y también, en el otro extremo, en las faldas de los volcanes. Hubo tres acciones en mayo, en Almoloya y Texcaliyacac, y veinte en junio, cuando los alzados asolaron dichas regiones y se acercaron hasta los límites del Distrito Federal y tomaron Chalco, donde quemaron el palacio municipal y liberaron a los presos.[95]

[93] *El Imparcial*, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29 y 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 1912; *Nueva Era*, 21 y 22 de julio de 1912. Este periódico maderista, después de la voladura del tren, publicó lo siguiente: "[...] el zapatismo [...] es una afrenta para nuestra civilización y una calamidad social, tan espantosa y terrible como la misma peste, y que es necesario restringir, combatir y extirpar". Lejos estaban las muestras de simpatía de los meses anteriores.

[94] *El País*, 13, 15, 29 de mayo y 4 de julio de 1912; *El Imparcial*, 30 de mayo, 12, 13, 23 y 28 de junio, 3, 6, 11, 26, 30 y 31 de julio, 2 de agosto de 1912; *Nueva Era*, 26 de julio de 1912; Miguel Sala a Madero, Tehuacán, 29 de julio de 1912, AGN, FFM, c. 38, exp. 1042-1, ff. 29369-29370. En el asalto a la hacienda La Reata asesinaron al administrador porque se negó a darles dinero.

[95] *El País*, 9, 10 y 22 de mayo, 14, 25 y 29 de junio, 9 de julio de 1912; *El Imparcial*, 4, 9 y

En Guerrero, Salgado volvió a ser un fuerte peligro para las fuerzas del orden. En mayo, en Teloloapan tuvo lugar el mayor de cinco combates; ahí las fuerzas de Salgado destrozaron la guarnición, defendida por 150 rurales, y fusilaron a los sobrevivientes. Zapatistas de Morelos y Puebla incursionaron en la entidad y se apoderaron de Olinalá y Huamuxtitlán. En junio ocurrieron cuatro enfrentamientos en la región del Balsas, la zona de influencia de Salgado. En julio, Salgado derrotó a las fuerzas de Figueroa en la estación de Balsas. Otros combates ocurrieron en San Marcos, Polutla y Palmar del Grande.[96]

En Oaxaca, la acción de los alzados se concentró durante el mes de mayo en contra de algunas haciendas. Ese mes saquearon La Pradera, en Huajuapan, Zorita y Mantecón. Indígenas tomaron la población de Ixtlán y asesinaron al presidente municipal y a otras autoridades del lugar. En junio sólo se registró el ataque a Joluxtla.[97]

Las haciendas continuaron siendo el blanco preferido de los rebeldes para obtener recursos. En julio volvieron a ser fuertemente atacadas. Así, zapatistas asaltaron la hacienda El Puente, cerca de Xochitepec, propiedad de españoles; la de Aculco, en Chalco, de donde se llevaron todo el ganado; El Volante, en Acatlán, propiedad de un hijo de Mucio Martínez, gobernador porfirista de Puebla, que corrió con la misma suerte. El predicador protestante Benigno Centeno tomó las haciendas San Bartolo Granillo y San Diego, cerca de San Martín Texmelucan, y se apropió de los caballos que ahí había. De la O entró a la de San Carlos, en la que obtuvo dinero, armas, caballos y parque. En la incursión de Francisco Pacheco y José T. Ruiz a Tenancingo, en agosto, los rebeldes incendiaron la hacienda de Jalmolonga. Otra partida tomó la de Cuauchichinola, en Tetecala, y apresó al administrador de la misma.[98]

Continuó también el secuestro de dueños y administradores de haciendas, comerciantes y personas notables de las localidades. En julio, esto ocurrió en las de Nepantla, Ixtlahuacan y Tenextepango. En Calpan, Puebla, secuestraron al párroco, soltándolo luego de que la población pagó rescate. En Huehuetlán secuestraron a un rico comerciante. En Atencingo secuestraron al administrador, que era de origen español.[99]

Al finalizar la temporada de lluvias en el altiplano, la rebelión se ha-

---

26 de junio, 7, 13, 17, 21, 27, 28, 29 de julio y 1 de agosto de 1912; *Diario del Hogar*, 7 de junio de 1912; *Nueva Era*, 12 de julio de 1912.

[96] *El País*, 9 y 21 de mayo, 1 y 22 de junio, 11 de julio de 1912; *El Imparcial*, 1, 6 y 14 de junio, 7 y 17 de julio de 1912; *Nueva Era*, 23 de julio de 1912.

[97] *El País*, 24, 26 y 27 de mayo de 1912; *El Imparcial*, 14 de junio de 1912.

[98] *El País*, 8, 10 y 13 de julio de 1912; *El Imparcial*, 8, 10, 26 de julio, 3 y 4 de agosto de 1912.

[99] *El País*, 3 y 7 de julio de 1912; *El Imparcial*, 3, 7, 8, 9, 22 de julio, 3 de agosto de 1912.

bía extendido y consolidado. Empero, los rebeldes sufrieron duros golpes al perder a varios importantes dirigentes. En esos días murió en combate Felipe Vaquero y fueron capturados Joaquín Miranda, otra vez Abraham Martínez, jefe del estado mayor de Zapata, Gildardo Magaña, principal contacto del movimiento rebelde en la capital del país, y Luis Méndez, sastre, periodista y destacado militante en las organizaciones de trabajadores citadinos, quien tenía por entonces tendencias socializantes. Así, pues, la que quizás era la principal red de información y abastecimiento de armas y cuadros de los rebeldes en la ciudad de México quedó prácticamente desmantelada.[100]

Transcurridos seis meses, la política de mano dura de Madero mediante la guerra a sangre y fuego desatada por Juvencio Robles no sólo no había logrado acabar con el movimiento rebelde y desarraigarlo de sus zonas de influencia, sino que, por el contrario, los alzados se habían fortalecido; su radio de acción y la violencia de sus ataques se habían incrementado. La conciencia de esta situación llevó al régimen maderista a dar nuevamente un viraje e intentar, por primera vez, una solución política al conflicto.[101] En el aspecto militar, esto implicó la salida de Juvencio Robles y su relevo por Felipe Ángeles, y en el terreno político, el cambio de gobernador de Morelos y una apertura, al poner al frente de la entidad a Patricio Leyva, el hijo del viejo caudillo opositor, quien, tres años después del fraude electoral que lo había hecho a un lado, regresaba por sus fueros, en otras condiciones, a tratar de llevar adelante su proyecto modernizador como abanderado de Madero y con la tarea de tratar de contener la insurrección campesina que estaba en marcha, comandada por los que habían sido sus aliados y subordinados. También entró en escena una nueva legislatura local, que funcionaría sólo dos meses para tratar de influir, mediante la legislación sobre algunas de las materias que, se consideraba, habían

[100] *El País*, 7, 10, 12 y 13 de julio de 1912; *El Imparcial*, 16, 17, 18, 19 y 24 de julio de 1912; *Nueva Era*, 7, 10, 13, 24 y 31 de julio de 1912. El juicio de Abraham Martínez se convirtió en una de las principales noticias en la prensa capitalina de esos días. Su primo Luis Cabrera se negó a defenderlo, argumentando exceso de trabajo, aunque más bien su actitud era un claro deslinde respecto de la violencia zapatista, con la que no comulgaba a pesar de su posición en favor del reparto agrario. En el juicio, Martínez expresó que el gobierno se había equivocado al querer apagar el movimiento zapatista con las armas, cuando en realidad se trataba de un problema político que para resolverse requería el reparto agrario. El principal motivo de queja, según él, era que los arriendos que pagaba la gente sin tierras a las haciendas se habían duplicado en los últimos años y no podía pagarlos más. Como Zapata les había ofrecido el reparto de tierras, lo seguían ciegamente.

[101] Sánchez Azcona, en carta a un empresario, reconoció que si bien el gobierno había hecho todo lo posible para acabar con el "bandolerismo [...] desgraciadamente poco se ha logrado hasta ahora" (Azcona a Manuel Álvarez, México, 27 de julio de 1912, AGN, FFM, c. 54, exp. 13, f. 277).

generado el conflicto en el estado. Estos cambios hicieron que la batalla que se estaba librando en el territorio morelense y zonas contiguas adquiriera otros matices.

Aires de apertura

El 3 de agosto, Felipe Ángeles fue nombrado jefe de la campaña militar en Morelos. General de carrera con una brillante trayectoria académica en el Colegio Militar, dejó su puesto como director de la escuela que lo formó —donde lo había colocado Madero— para hacerse cargo de un problema que el régimen no conseguía resolver. Desde su llegada mostró una actitud diferente de la de sus predecesores: no habría de emplear la táctica de arrasar las tierras, desaparecer poblados y reconcentrar a sus habitantes. En sus primeras declaraciones habló de establecer pactos con los alzados. Veinte días después, cuando ya había experimentado lo que era enfrentar la rebelión —después del aparatoso descarrilamiento de un tren en Ticumán, en el que perecieron más de treinta civiles, entre ellos varios reporteros de *El País* y *El Imparcial*—, declaró que la agitación en Morelos la causaban "gavillas de bandoleros cuyo único fin" era "el robo", y criticó la táctica equivocada de quienes le antecedieron, pues se daba cuenta de la existencia de un divorcio entre la población civil y el ejército que hacía que los pueblos, después de la destrucción de sus casas, consideraran a la institución armada como su principal enemigo. Señaló también la separación del ejército y las autoridades civiles, por haber acusado de zapatistas a todas ellas, incluido el gobernador. Él también ya había sido tildado de lo mismo por andar sin escolta en los caminos y "aceptar tomar café en los pueblos erróneamente considerados zapatistas". Ángeles fue criticado por el gobernador del Estado de México Medina Garduño, un mes después, por no querer emplear mano dura contra los zapatistas, a lo que argumentó que simplemente no consideraba necesario utilizar la artillería.[102]

Patricio Leyva, entretanto, continuó su gira electoral como candidato a gobernador y, una vez más, empleó un lenguaje populista que, en el contexto en que se expresaba, en medio de una extendida rebelión agraria, tenía por objeto reconocer en parte la legitimidad de las protestas, pero, sobre todo, obtener para sí el apoyo de la gente de pueblos, villas y rancherías que directa o indirectamente habían sostenido a los alzados. El 3 de agosto escribió a Madero:

[102] Nombramiento de Felipe Ángeles, 3 agosto de 1912, AGN, Fondo Gobernación Periodo Revolucionario (FGPR), c. 98, exp. 69; *Nueva Era*, 7 y 25 de agosto de 1912; *El País*, 1 de septiembre de 1912.

> En mi gira política por todos los distritos, se me ha recibido por la clase del pueblo con entera aceptación y no podré corresponder de otra manera sino procurando [...] impartir toda la protección debida a esta sufrida clase social, que por falta de instrumentos ha sido oprimida y engañada, así como también explotada, por un grupo de personas que siempre han obtenido dominar la situación política del estado.

Luego de reconocer en los hacendados la fuente de los disturbios dirigió sus críticas contra las autoridades locales, a las que acusó de estar al servicio de aquéllos, agraviando a la población, que se había desquitado de esas autoridades aun más que de los hacendados, quienes habían logrado salvar sus propiedades mediante la compra de protección. En el fondo era también una velada crítica al maderismo y un intento para enderezar una política que los llevaba a la perdición:

> El pueblo ve con decepción que los mismos que lo atropellaron en las elecciones pasadas ocupan los puestos de autoridad y de ahí su decepción y profundo disgusto contra el gobierno que los apoya y los ha puesto en esos puestos [...] esta clase de política provoca profundo desagrado en el pueblo, que se ve sin garantías, y muchos, acosados y desesperados, van a engrosar las filas del zapatismo como único refugio para poder defenderse.[103]

Por esos días entró en funciones un gobernador interino —Aniceto Villamar— y una nueva legislatura local, transitoria, compuesta por gente de las clases medias urbanas de la entidad, entre quienes destacaba Eugenio Morales, veterano leyvista. Esa legislatura, a la que Womack denomina "los revolucionarios legales", propuso leves reformas políticas que comprendían la abolición de las prefecturas y elecciones directas, propuestas que fueron aprobadas. Sobre la cuestión agraria, empero, su moderación fue mayor, con tres tibias disposiciones: incrementar en 10% los impuestos a las haciendas, que pasaran a dominio público los terrenos de los mercados de esas propiedades, y la creación de una escuela de agricultura. Esas limitadas propuestas, que estaban lejos de constituir una reforma agraria, ni siquiera llegaron a ser aprobadas, pues terminaron los dos meses de la legislatura y entró una nueva, todavía más conservadora, que las desechó.[104]

[103] P. Leyva a Madero, Cuautla, 3 de agosto de 1912, AGN, FFM, c. 9., exp. 213-3, ff. 6196-6199.

[104] Womack, *op. cit.*, pp. 142-151. La nueva legislatura, que entró en funciones a mediados de septiembre, no sólo fue contraria a cualquier tipo de reforma social, sino que entendió como su principal función procurar el restablecimiento del orden, pidiendo más ayuda militar contra la revuelta y negándose a establecer negociaciones con los rebeldes. Quedaron atrás los llamados al diálogo y la amnistía ofrecida en agosto. En cambio, votaron por pagar una indemnización a los propietarios afectados por la revolución de 1910-1911.

Entre tanto, pasadas las lluvias, los rebeldes zapatistas reanudaron sus acciones guerrilleras. En ese mes de agosto atacaron las ciudades de Jojutla, Tlaltizapán y Yautepec, así como la hacienda de San Carlos y el pueblo de Ticumán. La principal acción militar fue el sabotaje al tren que iba a Puente de Ixtla, en Ticumán, el día 12. El ataque, dirigido por Amador Salazar, desató otra vez un alud de críticas y protestas airadas de la prensa capitalina, que sufrió la pérdida de dos reporteros, e incluso se organizó una manifestación de protesta en el D.F. El Consejo de Ministros fue convocado para analizar la situación. Además del reforzamiento militar se discutió la posibilidad de negociar con algunos hacendados la venta voluntaria de sus propiedades, sin llegar a algún acuerdo.[105]

En septiembre se reportaron veinticinco acciones de armas en Morelos, la mayoría de ellas emboscadas a rurales y al ejército y tomas de pequeñas poblaciones. Ante el control del ejército sobre las ciudades más importantes, los zapatistas optaron por concentrarse en los territorios aledaños. Al Estado de México se desplazaron Pacheco y De la O, quien estableció su cuartel en Malinalco, desde donde pudo hacer que el centro de gravedad de la rebelión se desplazara temporalmente hacia allá. En esa entidad ocurrieron 36 enfrentamientos en los distritos de Tenango, Tenancingo, Sultepec, y por el otro lado volvieron a incursionar hasta Amecameca y Chalco. El ejército tuvo que desplazarse hacia Toluca y reforzar su defensa. A pesar de las intenciones de Ángeles, en Toluca el ejército y los rurales volvieron a fusilar prisioneros, en cumplimiento de la Ley de Suspensión de Garantías.

En Morelos, mientras tanto, Zapata encabezó un ataque sobre Cuautla y fue asaltado el tren civil en las inmediaciones de Cuernavaca, acción en la que pereció el administrador de la hacienda de San Vicente. Los maquinistas se negaron una vez más a dar servicio en la entidad. En el informe que rindió el 16 de septiembre, Madero descalificó una vez más la revuelta. La revolución, dijo, fue la de 1910. Lo que estaba ocurriendo ahora era otra cosa: acciones cometidas por malos mexicanos para satisfacer sus pasiones y trastornar el orden.[106]

En octubre, el Estado de México continuó siendo el principal teatro de operaciones. Zapata se desplazó hacia allá, donde Ángeles, al frente de tropas federales, intentó detener las incursiones. Tuvieron lugar cuarenta acciones; buena parte de ellas, pequeños enfrentamientos. La batalla principal se dio en Valle de Bravo; los alzados lograron tomar la población,

[105] *Nueva Era*, 2, 10, 13, 14, 17, 18, 23 y 28 de agosto de 1912. Después del atentado en Ticumán, el día 16 fue asaltado otro tren en Cuautla, y De la O intentó destruir la vía en Jajalpa, Estado de México.

[106] *Nueva Era*, 1, 5, 6, 7, 10, 11 y 13 de septiembre de 1912; *El Imparcial*, 1, 2, 5, 8, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 24, 26 y 27 de septiembre de 1912.

incendiando el hospital y casas particulares. Ángeles nuevamente fusiló a prisioneros zapatistas. El jefe de armas de Toluca indicó que, desde mediados de agosto, sus fuerzas habían tenido 53 encuentros con rebeldes. El Consejo de Ministros decidió enviar más tropas; los alzados tomaron luego Tenango y Almoloya del Río, destrozaron la estación de Salazar y recuperaron temporalmente Valle de Bravo.[107]

Aunque el Estado de México estaba convulsionado, la política de Ángeles parecía estar dando mejores resultados en Morelos. Los principales líderes habían sido desalojados y cesaron los ataques a la población civil. En Tlaltenango, vecinos del pueblo de Santa María, que había sido quemado, tuvieron una junta para reconstruir la población; el representante de Ángeles les dio garantías para hacerlo. Como reconocieron después Zapata y De la O, la táctica empleada por Ángeles y el desgaste ocasionado por la guerra restaron fuerza y base social a los alzados, lo cual hizo de ésa la etapa más difícil de la insurrección. Zapata dirigió una circular a las haciendas para exigir una contribución forzosa de 3 000 pesos mensuales. Pequeñas partidas continuaron una persistente labor de desgaste de las fuerzas del orden. En octubre ocurrieron dieciecho eventos de armas en Morelos; los principales fueron los ataques a Cuautla, Yecapixtla y Tlaltizapán, y al ferrocarril en El Mango y Jiutepec.[108]

En Puebla, mientras tanto, Eufemio Zapata y *el Tuerto* Morales mantuvieron sus ataques en los distritos donde habían echado raíces. En septiembre tuvieron lugar dieciocho enfrentamientos y tomas de poblaciones en Atlixco, Izúcar y Acatlán, así como el corte de la vía del tren en Tepeaca. En octubre, ocurrieron veintidós hechos de armas, entre los que destacan la voladura del puente del ferrocarril en La Esperanza, realizada por Higinio Aguilar, y la liberación de presos en Cholula. En Guerrero, durante septiembre, tuvieron lugar nueve enfrentamientos menores, uno de ellos en Tlapa, encabezado por Eufemio Zapata y *el Tuerto* Morales, y once en octubre, cuando Salgado y Almazán comandaron acciones en las cercanías de Chilpancingo.[109]

Durante noviembre, algunos de los jefes zapatistas pudieron regresar a Morelos y reemprendieron su campaña con numerosas acciones. En ese mes tuvieron lugar 42 enfrentamientos, tomas de pueblos y ataques a haciendas. Los combates más intensos corrieron a cargo de Genovevo de la O, quien amenazó con tomar Cuernavaca, asentándose en Huitzilac y

[107] *El Imparcial*, 3, 11, 12, 13, 14, 22 23, 25, 26, 27, 30 y 31 de octubre de 1912; informe del general Manuel Velázquez, Toluca, 18 de octubre de 1912, AGN, FFM, c. 46, exp. 1264, ff. 35055-35057.

[108] *El Imparcial*, 6, 7 y 10 de octubre de 1912.

[109] *Nueva Era*, 9, 20, 26 y 28 de septiembre de 1912; *El Imparcial*, 7 de septiembre, 2, 16 y 20 de octubre de 1912.

Santa María, posiciones defendidas por Ángeles y Blanquet, en la primera semana de noviembre, y luego, otra vez, en la tercera. Hubo cuatro ataques a estaciones de ferrocarril: uno en Parrés, en el Ajusco, donde los rebeldes asaltaron y quemaron el tren; otro en García, cerca de Cuautla, y tres tomas de haciendas. Una de éstas, Atlihuayán, propiedad de Pablo Escandón, fue tomada poco después de que éste fuera detenido por el gobierno y acusado de pagar una protección semanal a los alzados para que respetaran su predio.[110]

El primero de diciembre de 1912, Patricio Leyva tomó posesión como gobernador constitucional de Morelos. En la ceremonia, Felipe Ángeles se refirió al movimiento zapatista que, dijo, tenía por causas "el odio acumulado desde hace siglos del pobre para el rico y la falta de cultura en el pueblo bajo". El remedio: "el cariño y la convicción, evitando incendiar sus casas y asesinar inocentes e instruir al pueblo bajo". Leyva compartía la convicción de que era necesario remediar la situación de guerra y la inconformidad que se habían desarrollado en la entidad y señaló que tenía que hacerse un estudio para resolver la cuestión agraria, una de las fuentes del problema. Respecto de las causas políticas, añadió que si bien se habían suprimido ya las jefaturas, sus funciones fueron simplemente transferidas a los municipios, sin haberse definido con claridad los modos de operación y la reglamentación de las mismas.

La atención a las causas de la revuelta comenzó a permear otros frentes. Luis Cabrera empezó a alcanzar notoriedad tras denunciar en la Cámara de Diputados la situación de opresión ancestral que habían sufrido los pueblos a manos de los hacendados y proponer la restitución de los ejidos. Esta postura y el hecho ineludible de que la rebelión zapatista, a pesar de los flujos y reflujos, no había podido ser extirpada llevaron al nuevo secretario de Gobernación Rafael Martínez, hombre conservador, familiar de Madero y persona muy cercana a él, a reconocer que existían pueblos que habían perdido sus ejidos por invasión de latifundistas, por venta o por denuncio de acaparadores, y que Morelos era un lugar donde los pueblos

[110] *Nueva Era*, 2, 6, 10, 11, 15, 16, 17 y 23 de noviembre de 1912; *El Imparcial*, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 y 19 de noviembre de 1912. El 1º de noviembre, Zapata y sus principales jefes dirigieron un decreto a los dueños de las haciendas imponiendo una contribución semanal; quien no pagara, vería sus campos incendiados. Véase Womack, *op. cit.*, pp. 153 y 154. En el juicio, Escandón, quien fue detenido después del arresto de Enrique Villa, secretario de Zapata, reconoció haber dado entre 400 y 1 000 pesos semanales. *El Imparcial* y *Nueva Era* justificaron esos pagos, considerando que eran "un sacrificio mínimo para salvar parte no pequeña de la riqueza agrícola nacional". Poco después fue detenido el exgobernador porfirista Mucio Martínez, bajo el mismo cargo: pagar protección y proporcionar armas a los alzados. Escandón y Martínez fueron liberados poco después, tras la intervención del gabinete de Madero, pues se consideró que no había existido colaboración con la revuelta, sino un esfuerzo mal orientado para proteger sus propiedades.

habían perdido todo y donde los precios de la tierra eran más caros. Sin embargo, no era posible realizar expropiaciones, por lo que debía estudiarse la manera de obtener algunos terrenos, restituir los ejidos y venderlos a los pueblos sin alterar la estructura de la propiedad.[111]

Otra vez la fuerza

La consigna seguía siendo, no obstante, acabar militarmente con la rebelión. Blanquet fue nombrado jefe de la campaña en el Estado de México y del norte arribaron mil hombres más de refuerzo. La Secretaría de Guerra convocó a Ángeles y Blanquet para coordinar acciones en contra de los alzados, en las que debía darse prioridad a los estados de México y Morelos. En esta última entidad, incluso, se intentó armar a los peones de las haciendas y, para ello, la Secretaría de Gobernación solicitó la cooperación de los propietarios. Entretanto, los alzados efectuaron veintidós acciones de armas en Morelos: los incendios de las estaciones de Cuautlixco y Yecapixtla, y los ataques a Jonacatepec, Tepalcingo y Tres Marías. En la entidad mexiquense, la actividad de la fuerte columna militar de Blanquet logró mitigar la intensidad de la rebelión de los meses anteriores. Sólo se presentaron catorce acciones de armas; la más fuerte de ellas: los combates registrados alrededor de Temascaltepec y Sultepec, localidades que intentaron tomar las fuerzas de Eufemio Zapata y Genovevo de la O. En Puebla, también disminuyó notoriamente la actividad: durante ese mes, sólo hubo acciones en seis lugares, entre ellas, la toma del pueblo de Acatzingo por los alzados.[112]

Al comienzo de 1913, la rebelión zapatista tomó nuevos bríos. En los dos primeros meses y hasta el golpe de Estado que puso trágico fin al experimento maderista, realizaron casi sesenta hechos de armas en el territorio morelense. En esta ocasión, el objetivo primordial de los rebeldes fue la destrucción y el incendio de las haciendas azucareras: doce de las más importantes fueron incendiadas en esos días, entre ellas Tenextepango, San Nicolás Obispo, San Carlos, Atlihuayán, Santa Clara, Treinta y Temixco. Según declaración de los afectados, se perdió la mitad de la zafra de ese año. La institución hacendaria en Morelos había perdido completamente la legitimidad y sufrió un golpe del que ya no se repondría.

En el terreno militar, las principales acciones fueron realizadas por el grupo de Genovevo de la O, Amador Salazar y Felipe Neri, quienes se tras-

[111] Leyva a secretario de Gobernación, 1 y 25 de diciembre de 1912, AGN, FGPR, c. 72, exp. 91, c. 55, exp. 41; *El País*, 2 y 5 de diciembre de 1912; *Nueva Era*, 4 y 5 de diciembre de 1912.

[112] *El País*, 7, 8, 9, 16 y 25 de diciembre de 1912; *Nueva Era*, 8, 13, 21, 26 y 31 de diciembre de 1912.

ladaron desde la zona de Malinalco hasta el otro extremo, bordeando el eje volcánico, para incursionar en las faldas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Los enfrentamientos más importantes tuvieron lugar a cuatro kilómetros de Chalco, en Ayotzingo, población que fue quemada por los rebeldes, incluida parte de la fábrica de papel; las fuerzas del orden tuvieron que movilizar a los cuerpos auxiliares de las delegaciones cercanas del Distrito Federal. Después de esas acciones, el grupo de De la O, que había sido de los más activos junto con los del *Tuerto* Morales y Eufemio Zapata, se trasladó al distrito de Atlixco, atacó Tochimilco y regresó luego a Morelos para amagar Yautepec y tomar Yecapixtla. Zapata, quien había tenido poca acción militar en los últimos cuatro meses, después de los primeros días de enero en que la prensa capitalina comenzó a divulgar la versión de que estaba en negociaciones con el gobierno para rendirse, apareció de nuevo por sus dominios y atacó Villa de Ayala. Los ataques a las vías del tren y a las líneas de telégrafos volvieron a cobrar importancia.

En el Estado de México, incluidas las perpetradas por de De la O, ocurrieron veintinueve acciones durante enero y febrero, entre ellas la quema de la hacienda La Puerta, en Temascaltepec, y otras en Tenancingo. En Puebla se registraron veintiún enfrentamientos en esos dos meses; destacan los fuertes combates sostenidos en Izúcar, Tochimilco, Huejotzingo y Acatlán.[113]

La rebelión había vuelto a encenderse. Ángeles tuvo que recurrir al incendio de poblaciones, al uso de la artillería, al fusilamiento y ahorcamiento de prisioneros, amparándose en la Ley de Suspensión de Garantías; es decir, a utilizar los mismos métodos que había criticado al comenzar su campaña, aunque en menor proporción que sus antecesores. Los surianos se convirtieron una vez más en una seria amenaza para el gobierno maderista. Después de quince meses, con altibajos, la insurrección no había podido ser extirpada. Ni el prestigio regional de Leyva ni los métodos más civilizados de Ángeles habían podido contenerla, aunque detuvieron, al menos temporalmente, su expansión, provocada por las depredaciones de Huerta y Juvencio Robles. Sin embargo, la solución de las cuestiones de fondo —el problema agrario y una reforma política profunda— fue desechada por la coalición maderista gobernante. El proyecto de Madero no incluía esos puntos. La enorme inestabilidad que caracterizó a su gobierno constitucional llevó finalmente a que los sectores más conservadores y los altos mandos del ejército decidieran poner fin al experimento maderista de manera sangrienta, ante el temor de que se desbordaran todavía

[113] *El Diario*, 2, 4, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 22 y 26 de enero, 3, 5, 8, 21 y 26 de febrero de 1913; *El País*, 2, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 27 y 29 de enero, 2, 4, 20, 21, 26 de febrero de 1913; *Nueva Era*, 10, 11, 12, 15 y 17 de enero, 1, 2 y 4 de febrero de 1913.

más la agitación y movilización que habían tenido lugar en muchas regiones y sectores del país en esos meses. Sin embargo, de haber continuado Madero, muy probablemente no se habrían satisfecho las aspiraciones de los alzados surianos.

La práctica zapatista y el proyecto de transformación social que el zapatismo fue decantando apuntaban en otra dirección, lo cual tendría ocasión de probar, en los meses y años siguientes, con otros aliados y enemigos, en una nueva etapa en la que intentaría alcanzar —y estaría muy cerca de lograrlo— la hegemonía nacional. Esos meses le habían servido para definir su identidad y madurar un proyecto político propio con el que intentaría obtener el poder central. Aunque con dificultades, la práctica militar había servido a los zapatistas para construir un ejército popular —con numerosas bandas locales en la región del Sur— que había sobrevivido y enfrentado con éxito los intentos de aniquilarlo. Su fuerza regional ya no podía ser cuestionada. La nueva etapa tendría una dimensión todavía más nacional.

CAPÍTULO V. LA POBLACIÓN CIVIL ANTE LA INSURRECCIÓN ZAPATISTA

La amplia rebelión que tomó forma en el zapatismo durante el régimen maderista se alimentó de un sustrato —las aspiraciones de tierras y aguas de los pueblos que habían sido despojados de esos recursos— que desempeñó un papel determinante. El zapatismo catalizó y canalizó esas aspiraciones y obtuvo un amplio respaldo que hizo crecer su influencia en una vasta zona. En términos generales, las regiones en que se propagó compartían una problemática agraria semejante. Particularmente en las regiones poblana y guerrerense, durante el porfiriato habían tenido lugar un proceso de despojo de tierras pertenecientes a los pueblos y un endurecimiento de la política estatal, que legalizó esa desposesión y convirtió en arrendatarios o campesinos sin tierra a los antiguos poseedores y usufructuarios de esos recursos. El zapatismo fue visto por estos sectores como el adalid de las reivindicaciones agrarias; eso le dio legitimidad y facilitó la incorporación a sus filas de un número creciente de partidarios.

Sin embargo, la cuestión agraria no fue el único motivo que generó el apoyo a los rebeldes. También jugó un papel muy importante el rechazo de las prácticas depredatorias y abusivas perpetradas por el ejército federal. Su presencia, en la medida en que atacó a la población civil para cortar los apoyos a la rebelión, provocó la resistencia de estos sectores y su identificación con los rebeldes, los cuales, a su vez, les sirvieron de apoyo y les ofrecieron protección, organización y defensa. Lejos de acabar con la revuelta, la ocupación militar la extendió y radicalizó.

Empero, la insurrección no generó un apoyo unánime entre la población rural de escasos recursos a la cual pretendía representar. Menos aún entre las elites regionales y clases medias, que sufrieron la violencia de la actividad insurgente en sus familias y bienes, así como la alteración de las relaciones productivas en los lugares que se encontraban bajo la influencia rebelde. Las tropas insurgentes abusaron a menudo de la población civil y tuvieron que enfrentar también el rechazo y aun la oposición activa de amplios sectores de la misma, que se organizaron y armaron para combatirla. Esta resistencia a la actividad rebelde atravesó barreras sociales y geográficas, aunque tuvo serias dificultades para consolidarse, en virtud de la desconfianza del régimen central para permitir la constitución de focos de resistencia autónomos, es decir, independientes de las estructuras políticas y militares del sistema.

La problemática agraria de los pueblos

Desde el comienzo de su administración, el problema de la rebelión en Morelos y una amplia zona del centro-sur del país se convirtió en el principal problema político del régimen de Madero. Las proporciones que estaba alcanzando la revuelta hicieron que un grupo del régimen maderista, los individuos aglutinados en torno al *Diario del Hogar*, exacerbaran sus críticas a la táctica violenta que empleaba Madero para acabar con la rebelión. Desde la páginas de ese diario, su director, Juan Sarabia, abrió una tribuna para que los pueblos se expresaran directamente y dieran a conocer los problemas y los motivos de queja que tenían contra caciques, autoridades y hacendados. Algunas comunidades y sus representantes hicieron llegar sus puntos de vista. De entre ellos conviene citar los testimonios de los vecinos de Alcomunga y San Miguel, de la sierra de Tehuacán, quienes escribieron que, a mediados del XIX, habían tenido que pedir 140 pesos a la dueña de la finca de Buena Vista para reparar la capilla del pueblo que se había quemado, para lo cual tuvieron que empeñar los títulos de propiedad, los cuales obraban en poder de los herederos de la finca, y éstos habían convertido a los pobladores en arrendatarios. La relación habitual con la hacienda fue rota en 1881 y los pobladores vivieron esta experiencia como un rompimiento de la tradición:

> Por algún tiempo, nuestros antepasados estuvieron exentos de pagar renta, pero en 1881 quedaron sujetos a pagar un peso de renta por cada ciudadano. En 1907 compró el señor don Martín Urrutia y desde esa fecha fatal, no solamente nos hicieron rigurosamente arrendatarios pagando diez pesos cada uno, sino también a dar forzosamente cada individuo quince días de trabajo en la recientemente formada hacienda de Xonotipan, recibiendo como estipendio por los quince días de trabajo forzoso $2.00 y alguna vez $2.50; esto cuando el buen humor del administrador lo permite.

Para obligarlos a trabajar en las nuevas condiciones, la hacienda había hecho uso de la fuerza pública y de la represión. El gobierno porfirista fue identificado como cómplice de esta injusticia:

> No es esto todo, pues para imponernos la renta y costumbres aludidas vino a nuestros infortunados pueblos de Alcomunga y San Miguel un tal Federico Moreyra que en aquella época hacía de administrador, quien apoyado por la fuerza federal que concedió el gobierno pasado, fuimos obligados no solamente al pago de renta y trabajar forzosamente quince días en Xontepan, sino por medio de las armas se nos amenazó a ser despojados incendiándonos además nuestros hogares si no reconocíamos y acatábamos las nuevas costumbres de servidumbre. Otra disposición del señor Moreyra fue la de que todo arrendatario del lugar que insistiera en tener dos jacales para que vi-

vieran nuestras familias, le sería destruido en el acto o de otra manera, pagaría doble renta. Como alguno de nosotros tuviéramos dos jacales en esos momentos nos fue incendiado uno de ellos por la misma fuerza armada, sin que nuestras justas quejas tuviesen alguna significación.

Los agravios sufridos obligaron a la población a recurrir a la desobediencia, reconocida de manera velada y finalmente justificada por el trato de que habían sido objeto:

> Desde aquella época, la intransigencia reina en estos dos pueblos hermanos de una manera inexplicable; por doquier se escuchan lamentos y desesperación y entre tanto, el caciquismo más y más clava sus garras sobre nosotros, haciéndonos sufrir el hambre y la desgracia. Si cierto es que en parte alguna hemos rehusado rendir toda la obediencia que exigen los caprichos de nuestros mandatarios, también es cierto que nos han despojado de nuestro patrimonio, que con su carácter despótico, nos inducen cada día a despreciar sus ofuscados tratamientos.

Finalmente, hacia finales del porfiriato, el pueblo había sufrido una nueva represión y perdido sus cosechas; se encontraba en una situación desesperada, por lo cual la revolución maderista aparecía como una esperanza de mejora:

> Últimamente, el año próximo antepasado, entre patrón, administradores, en combinación con el célebre jefe político de Tehuacán, Javier Córdoba, mandaron fuerza rural a nuestros pueblos con el fin de amedrarnos [*sic*] de tal manera, que las pocas siembras de maíz que teníamos sembradas y que forman el único patrimonio para el sostenimiento de nuestras familias, tuvieron que perderse por falta de cultivo, porque la fuerza armada, sin distinción de persona ni sexo nos perseguían tenazmente, perdiendo con esto el tiempo más preciso de poder atender nuestras labranzas. En esta desesperante situación nos hallamos desde aquella época en que nuestros antepasados por su fatalidad, cayeron en garras de personas sin corazón que nos sumergieron en nuestra desgracia; pero sin embargo, la revolución nos ha devuelto a los esclavos y oprimidos sus [*sic*] derechos de ciudadanía [...][1]

La pérdida de sus títulos de propiedad, su conversión forzosa en arrendatarios, el pago obligatorio del arriendo, la prestación de trabajo forzoso, la ruptura del pacto de economía moral, los cambios de usos y costumbres, el trato despótico del hacendado y los administradores, el contubernio de éstos con el jefe político, y la represión habían puesto en difícil situación a los habitantes de este pueblo que, como dejan ver en su escrito, no sólo

[1] Vecinos de Alcomunga y San Miguel a Juan Sarabia, *Diario del Hogar*, 3 de enero de 1912.

no se habían cruzado de brazos sino que se habían "rehusado a rendir toda la obediencia" a las autoridades y a "despreciar sus ofuscados tratamientos". Es decir, en la mente de estos campesinos ultrajados y sus familias se había roto el mecanismo que los inducía a respetar los vínculos de dominación y obediencia con los que habían crecido y que les permitían convivir con los hacendados y las autoridades. La ruptura de ese vínculo moral, cultural y económico la realizaron los patrones, no los campesinos.

Para reparar su capilla tuvieron que pedir prestado y por ello habían perdido sus títulos de propiedad de la tierra, el derecho de sembrarla, de poseer una vivienda digna, de rentar tierras para completar sus necesidades. Se vieron obligados a ofrecer su trabajo a cambio de un salario miserable o a padecer la represión si no lo hacían. Era a todas luces una injusticia y, desesperados, adquirieron conciencia de su derecho a rebelarse para restablecer la justicia rota. Por ello concluían: "[...] la revolución nos ha devuelto a los esclavos y oprimidos [nuestros] derechos de ciudadanía". Pueblos con problemas similares eran los que alimentaban a los rebeldes, ya que sentían la atracción que ejercía la actividad desafiante de éstos y veían en la revolución una esperanza de mejora. También los vecinos de San José Ixtapa, distrito de Chalchicomula, Puebla, se quejaron del despojo de sus tierras, de su conversión en arrendatarios, de los malos tratos que recibían de quienes se apoderaron de sus tierras —comerciantes "españoles"—, de la represión que ejercía contra ellos el gobierno y del desinterés mostrado por éste ante la validez de sus reclamos:

> Desde tiempo inmemorial y por concesión del gobierno colonial que donó a los pueblos de indios terrenos para su subsistencia personal y de sus ganados, habíamos poseído la parte que nos correspondía, entregados a nuestras pacíficas labores, hasta que hace algún tiempo fuimos despojados de manera arbitraria por los hacendados colindantes que, violando el derecho de propiedad que nos asiste en todo tiempo recurrieron a medios ilegales para dar apariencia de verdad a hechos de mala fe que pretendían justificar lo que ante la razón y el derecho no podrán nunca probar.

En 1888 iniciaron un juicio contra la hacienda del Carmen para recuperar sus tierras, sin embargo, declaran: "Poco o ningún caso hicieron a nuestra demanda, poniéndonos mil trabas y dificultades, la hacienda fue vendida hace doce años más o menos, a los señores Leandro Aldama y hermano, españoles, comerciantes de Tehuacán, quienes fueron advertidos por mí de que parte de los terrenos de esa hacienda estaban en litigio".

Los nuevos dueños no tomaron en cuenta los reclamos de la gente por considerarlos "adversarios insignificantes, por ser humildes labriegos, carentes de influencia y de recursos". La situación de los campesinos se había vuelto crítica y éstos constataron al servicio de quién estaban los

recursos del gobierno: fueron convertidos en arrendatarios de sus propios terrenos y, encima de esa injusticia, sufrieron todavía más ultrajes y represión. Reclamaban justicia y la devolución de su propiedad:

> Si anteriormente nos veíamos privados de los elementos peculiares de vida, nuestros males crecieron con los nuevos dueños de la hacienda, que apoyados por el funesto Mucio Martínez que en todo puso los elementos del estado a su favor para perjudicarnos, nos causaron grandes e incalculables males.
>
> Siendo el cultivo de las tierras el único medio de vida que tenemos, sin reconocer la pretendida propiedad de los señores Aldama sobre nuestros terrenos, nos vimos precisados a pagar renta por lo que era nuestro.
>
> Mas viendo dichos señores nuestra insistencia en reclamar justicia, nos echaron los ganados de la hacienda sobre las siembras y recogieron nuestros animales para matarnos por hambre y hacernos callar; pero nosotros con fe en la llamada justicia de aquellos tiempos, seguimos acudiendo a los tribunales, sin conseguir nada.

Terminaban su escrito señalando que persistirían en su empeño, aunque hubieran perdido prácticamente la esperanza:

> Hemos sido maltratados en nuestras personas e intereses, nos han llevado a las prisiones, calumniándonos para perjudicarnos en todos sentidos. Hemos recurrido a los tribunales del estado, hemos suplicado y bajado las escaleras de los palacios de Puebla y la capital en demanda de justicia, y desgraciadamente sin esperanza de éxito.[2]

Esos "humildes labriegos, carentes de influencia y de recursos", que habían sido despojados de sus tierras y obligados a pagar renta por lo que era suyo, habían visto también romperse el pacto moral con las haciendas, las cuales habían violado "el derecho de propiedad que les asistía en todo tiempo, por medios ilegales", con "mala fe". Habían constatado también que el gobierno se ponía de parte de quienes los perjudicaban y que los tribunales no les resolvían sus problemas. Habían sufrido la represión y, a pesar de todo, no claudicaban en su derecho a recuperar su propiedad, a pesar de que no confiaban ya en los recursos legales. En el lenguaje de los campesinos que se expresaban a través de estos escritos se mostraba claramente el sentimiento de agravio por las injusticias y abusos de que fueron víctimas por parte de los poderosos y el gobierno. La revolución, sin duda, les daba el valor necesario para hacer estas denuncias. Esos pueblos eran la base social de los rebeldes zapatistas y de aquellos

[2] Vecinos de San José Ixtapa a Juan Sarabia, *Diario del Hogar*, 4 de enero de 1912.

que, ubicados a la izquierda del régimen, conminaban a Madero a escucharlos y a resolver positivamente sus peticiones.

Desde luego, el conducto natural por el que fluía la mayor parte de este tipo de reclamos, en consonancia con la añeja tradición paternalista de la nación y de los sectores rurales, era el gobierno y, de manera particular, la presidencia de la República; solicitaban, pues, a ésta su intervención, en espera de que les resolviera sus problemas. En el archivo de Francisco I. Madero se encuentran muchos de esos testimonios. Los vecinos de Tlancuilpicán, Chiautla, en el estado de Puebla, expresaron lo siguiente: "[...] nos encontramos invadidos de nuestros terrenos por las haciendas de Jaltepec, Atencingo, Tenango y Santa Ana, que fueron apoyadas por la pasada administración[,] quedando reducido el pueblo a su casco, teniendo que ser arrendatarios de nuestros propios terrenos".

En 1895 habían intentado aprovechar la Ley de Baldíos para deslindar y recuperar sus terrenos, pero los reprimieron. Las autoridades municipales que los ayudaron y sus líderes fueron apresados y torturados por órdenes del administrador español de la hacienda de Jaltepec, quien, desde entonces, continuó usurpando sus tierras. Le decían a Madero que hasta esa fecha "no habían tomado las armas para hacer reclamación alguna como muchos vecinos de nuestros pueblos", pues confiaban en que Madero les haría justicia.[3] Estos testimonios muestran diáfanamente que en esa zona poblana sí había tenido lugar un proceso de desposesión de tierras de los pueblos, al amparo de la Ley de Baldíos porfiriana, y que la resistencia a ese proceso había sido desarticulada por la represión. Varios de esos pueblos, como se señala en el escrito, habían tomado las armas para restablecer la justicia. Ésas fueron las condiciones que permitieron la extensión de la rebelión zapatista.

Los habitantes de Zumpahuacán, San Pablo y San Antonio de Tenancingo, también en Puebla, expresaron que estaban en litigio, desde 1623, contra la familia Alvear, que los había despojado de sus tierras. En 1879, el jefe político había reconocido que los terrenos en disputa pertenecían a la comunidad, pero como las Leyes de Reforma prohibían la propiedad colectiva, dio derechos de propiedad individual a más de mil vecinos. Sin embargo, poco después el gobierno autorizó la construcción de la colonia de Tlapizaco en esos terrenos y no habían podido recuperar sus tierras desde entonces.[4] Otros vecinos de Teziutlán se quejaron de que "las gentes grandes y extranjeros" de esos rumbos los habían despojado de sus

[3] Vecinos de Tlancuilpicán, Chiautla, a Madero, 15 de enero de 1912, AGN, FFM, c. 3, exp. 67-2, ff. 2022-2023.

[4] Vecinos de Zumpahuacán, San Pablo y San Antonio de Tenancingo a Madero, AGN, FFM, c. 3, exp. 78-1, ff. 2306-2314.

tierras con el apoyo del jefe político. Los vecinos de San Bartolo Teotepec, en Tehuacán, solicitaron a Madero la devolución de las tierras que les había arrebatado la familia de caciques de apellido Betanzos, y alegaron que sus títulos databan de la Colonia.[5] En Izúcar, los vecinos de los pueblos de San Diego, San Juan Piaxtla, San Juan Cuahuixtla, Santo Tomás, Los Reyes y Santiago Mazatla denunciaron que, el 11 de noviembre de 1910, la hacienda de Raboso tapó con piedras el canal del río, robándoles el agua, por lo que se encontraban en situación apremiante. Tenían títulos de propiedad de esas aguas.[6]

Al parecer, en algunos lugares seguían existiendo contratos que establecían la prestación obligatoria de servicios en favor de las haciendas, a cambio de dinero y otros beneficios. En Ahuehuetzingo, Chietla, distrito de Chiautla, los vecinos se quejaron de que en 1911 los hicieron reparar una caja de agua de la hacienda de Atencingo que había sido dañada por las fuerzas maderistas en los meses finales del porfiriato. En mayo de 1911, las tropas federales los obligaron a volver a reparar ese canal amenazándolos con fusilarlos si no lo hacían. No estaban de acuerdo en que se les exigiera, y menos con esos modos, la prestación de ese servicio, aunque reconocían la validez de ese contrato que se les había impuesto de manera arbitraria en el año de 1894. En dicho contrato, los vecinos del lugar, por conducto de sus autoridades y con la presencia del jefe político, se habían comprometido a prestar servicios a perpetuidad para permitir el uso de las aguas del río que pasaba por su pueblo y luego descendía a las tierras de la hacienda a través de una acequia; también a reparar ésta cuando fuera necesario, a cambio de que el hacendado no hiciera uso simultáneo de esas aguas en dos campos separados, de su propiedad, y entregara al pueblo cuatro panes de azúcar, ocho panes de miel y veintiséis pesos anuales.[7]

Todos estos testimonios confirman la existencia de una situación extremadamente conflictiva en la zona poblana. No es casual que esta región haya servido como plataforma para el crecimiento y arraigo de la actividad, tanto de los grupos rebeldes autóctonos como de los morelenses, quienes implantaron su dominio en esos territorios. La problemática agraria estaba en la base del carácter reivindicatorio del Plan de Ayala y explica, en buena medida, los apoyos que obtuvieron los rebeldes. Éstos eran el conducto natural de esas demandas, que no tenían cauce por las vías insti-

[5] Martín Merino y Pascual Vega a Madero, Xoloco, Teziutlán, 19 de enero de 1912, AGN, FFM, c. 3, exp. 77-2, ff. 2297-2298; *Diario del Hogar*, 28 de junio de 1912.

[6] *Diario del Hogar*, 30 de diciembre de 1911.

[7] Cristóbal Fuentes a Madero, Ahuehuetzingo, 29 de mayo de 1912, AGN, FFM, c. 42, exp. 1143-3, ff. 32010-32013.

tucionales y las cuales Madero no tuvo la capacidad ni la disposición de atender e incorporar a su proyecto de reformas.

Desde Guerrero, los vecinos de Tehuiltepec, distrito de Alarcón, escribieron a Madero diciendo que habían comprado colectivamente tierras en 1888, para dividirlas y trabajarlas individualmente, pero los principales del lugar lo impidieron y ocuparon las mejores. En 1909 reanudaron el juicio para recuperar sus tierras, sin obtener sentencia favorable. Le pedían a Madero que, en nombre de la "redentora revolución que acaudilló", les hiciera justicia, pues los archivos del juicio fueron quemados al estallar la revolución de 1910.[8] Vecinos de Ajuchitán, en ese mismo estado, informaron a Madero que tenían veintidós años peleando por las tierras de que fueron despojados por la Ley de Baldíos en favor del cacique Pedro Muñoz. Aunque, en 1894, Díaz había ordenado la nulidad del acto, el cacique impidió la restitución por la fuerza. Estallada la revolución, Ambrosio Figueroa ordenó la devolución de las tierras, pero esa orden no fue cumplida por las autoridades locales, que seguían obedeciendo a los descendientes de Muñoz. Solicitaban a Madero que "con el apoyo del Plan de San Luis" se les devolvieran sus tierras y se les pagaran los perjuicios ocasionados, los cuales calculaban en 5 000 pesos. Pedían también que las tierras recuperadas fueran "repartidas entre los trabajadores pobres" del lugar, que habían ido "a los campos de batalla a defender [sus] derechos", es decir, que se habían ido a la revolución.[9]

Los pueblos de Tonalapa del Río, Coatepec de los Costales, Tlaco y Tlapa, en el distrito de Aldama, Guerrero, denunciaron ante Madero que la hacienda de Atlixtac había obtenido de manera arbitraria, en 1910, la concesión del agua del río Tonalapa. Esa agua y su uso pertenecían desde tiempos coloniales a dichos pueblos, que con ella regaban sus terrenos de labor y sus huertos. El año anterior, siete canales del pueblo de Tonalapa habían sido destruidos por enviados de la hacienda, con el apoyo del cuerpo de rurales y del jefe político de Teloloapa. Los pueblos objetaban la concesión del agua de la hacienda de Atlixtac y reclamaban el uso del ojo de agua de Almolonga, del que también se había apoderado el dueño de esa hacienda; invocaban para ello el Plan de San Luis.[10]

Así, pues, también en Guerrero existía un patrón de conflicto agrario parecido al de Morelos: las elites locales y los caciques habían despojado a los pueblos de tierras y aguas usando las leyes de baldíos porfirianas; los

[8] Vecinos de Tehuiltepec a Madero, 31 de diciembre de 1911, AGN, FFM, c. 3, exp. 49-1, ff. 1726-1727.

[9] Vecinos de Ajuchitán, Guerrero, a Madero, 31 de diciembre de 1911, AGN, FFM, c. 2, exp. 64-1, ff. 1966-1967.

[10] Autoridades de Tonalapa, Coatepec, Tlaco y Tlapa a Madero, *Diario del Hogar*, 16 de febrero de 1912.

tribunales no impartían justicia; las autoridades y fuerzas del orden estaban coludidas con los poderosos y reprimían a los que protestaban. No era casual, por lo tanto, que varios de esos pueblos se hubieran "ido a los campos de batalla a defender sus derechos". La prensa capitalina informó que el pueblo de San Miguel Huapa, en Tepecoacuilco, Iguala, estaba engrosando las filas del rebelde Salgado, debido a los abusos que había cometido Pastrana, un cacique protegido por los Figueroa, quien había despojado al pueblo de sus tierras.

Morelos es, desde luego, el ejemplo más conocido de este tipo de problemática agraria. Vecinos de Amayuca, en Jonacatepec, Morelos, escribieron a Madero que las causas de la revuelta en esa zona eran los despojos e injusticias cometidos en contra de la comunidad por las haciendas de Santa Clara y Tenango; los dueños de éstas les habían quitado sus tierras e incluso habían asesinado a dos habitantes del lugar por haber defendido a los quejosos; otros dos habían sido deportados. El pueblo de Santa María, de donde era originario Genovevo de la O y uno de los más aguerridos en la revuelta, había luchado en los últimos dos años, sin éxito, para que se revocara la concesión de explotación de la madera y el carbón del bosque que había beneficiado al estadounidense Hapson.[11] La extensión de este tipo de agravios y demandas de carácter agrario que encontraron vías de expresión después de la caída de Díaz fue una de las vertientes principales que alimentaron la revuelta zapatista.

Éstos son sólo algunos ejemplos de los que se encuentran en los archivos que se han conservado y en los diarios que les dieron expresión. No es una muestra exhaustiva ni puede generalizarse el grado de extensión de esta problemática . Sin embargo, resulta significativo que en la zona periférica donde creció el zapatismo, en los municipios de Puebla y Guerrero colindantes con Morelos, existiera este tipo de conflictos que tenían como denominador común el despojo de tierras y aguas por los hacendados, comerciantes o caciques, la transformación súbita de los campesinos en arrendatarios, las formas de coacción para imponer pagos en dinero o trabajo, la colusión y el respaldo de las autoridades políticas y militares locales, la represión para castigar las protestas mayores, el impacto negativo de las leyes de Reforma y, particularmente, de la Ley de Baldíos para justificar el despojo de sus propiedades, la ineficacia de las instituciones y de los procedimientos legales para restituir lo que en justicia pertenecía a las comunidades y la confianza de éstas en que la revolución y las nuevas autoridades sabrían remediar esas injusticias.

El estallido de la revolución, el cambio de autoridades y la aparición

[11] *El País*, 26 de febrero de 1912; "Vecinos de Amayuca a Madero", *Diario del Hogar*, 28 de febrero de 1912; *El País*, 3 de marzo de 1912.

de grupos rebeldes que hacían suya la lucha daban una nueva dimensión a la ruptura del pacto de economía moral. Las nuevas condiciones, la debilidad del Estado, la vulnerabilidad visible de las elites, la confianza en nuevos líderes que basaban su legitimidad en el combate a las injusticias, la seguridad que proporcionaban los grupos armados representativos de esas aspiraciones daban mayor confianza a la población civil marginal para que se animara a participar y afloraran, así, los agravios contenidos. En esas zonas, para una parte creciente de los sectores populares, la legitimidad de las haciendas y de las autoridades e instituciones del régimen porfiriano se había desvanecido. Se estaba construyendo una nueva legitimidad que quedaría en manos de Madero o de los zapatistas, dependiendo de qué grupo supiera ganarse la confianza para representar tales aspiraciones y sentimientos de agravio e injusticia. Muchos de estos testimonios evidencian que esos sectores no habían roto aún con Madero o se veían obligados a aparentarlo. El nuevo régimen estaba a prueba. Si el zapatismo estaba creciendo, se debía a que había empezado a ganar la batalla para obtener el apoyo de esos grupos descontentos y sin alternativa.

El énfasis que el zapatismo ponía en resolver el problema agrario y el sinnúmero de testimonios contemporáneos que lo confirmaban son pruebas claras de que había una problemática no resuelta que pudo expresarse con la revolución maderista. Por ello, el zapatismo tuvo arraigo en ciertas zonas y entre algunos sectores, y sus reivindicaciones agrarias dieron cauce a los reclamos y demandas de las poblaciones agraviadas. Inversamente, el énfasis del zapatismo en la solución de los problemas agrarios tiene su explicación en su estrecha relación con las comunidades y los poblados que hacían ese tipo de reclamos. Al mismo tiempo, las expresiones más violentas de la rebelión zapatista en su lucha contra las haciendas, comerciantes y jefes políticos tuvieron lugar precisamente en varios municipios de Puebla y Guerrero colindantes con Morelos. Es posible, por lo tanto, establecer vínculos de causalidad entre esas formas de violencia y la práctica de despojos agrarios, agravios morales y represión política que se instrumentó en esa región.

Algunos de estos agravios fueron reconocidos por hombres notables de la zona como la causa de la incorporación y el apoyo de esas localidades a la revuelta zapatista. Por ejemplo, los hermanos Felipe y Tomás Ruiz de Velasco, administradores de las haciendas de San Juan y El Higuerón, en la zona de Jojutla y Tlaquiltenango, hacendados de mente lúcida e ideas modernizadoras, sólida preparación profesional y productores de arroz, reconocieron —sin aceptar las formas de defenderla— la raíz agraria de la protesta zapatista. En un folleto que publicó Tomás Ruiz de Velasco a mediados de 1912, expresó:

> Es muy cierto y es un hecho innegable que las tierras de riego, es decir, lo esencial de las tierras de cultivo en Morelos, son propiedad de dos decenas de personas, de las que ni una sola reside en el estado [...] Es un hecho que las poblaciones no tienen ni para pagar sus gastos, ni para dar a sus habitantes ninguna de las comodidades higiénicas más elementales [...] Es un hecho que los pueblos han sido despojados de los capitales a censo enfitéutico,* en provecho de unos cuantos y sin ninguna compensación [...] Es un hecho que la usura absorbe todo el producto del trabajo y que el interés del dinero [prestado] a los agricultores es enorme [...] Es un hecho que ha existido siempre opresión por parte de las autoridades políticas al grado de anular completamente toda vida propia del pueblo, y que hay un deseo de nueva vida [...][12]

El reconocimiento del monopolio de las tierras de riego, de la penuria de las comunidades campesinas y de la opresión política por parte de los representantes de las haciendas, que no tenían simpatía alguna por el zapatismo, confirmaba la base agraria de la revuelta y reforzaba el deseo de las comunidades de liberarse de la opresión política. Los Ruiz de Velasco se daban cuenta de que los desequilibrios producidos por el avance territorial de las haciendas y la actitud de muchos de los hacendados ante la rebelión ponían en riesgo la existencia misma del sistema hacendario, por lo cual propusieron moderar esos excesos y que, de manera voluntaria, los grandes propietarios fragmentaran una parte de sus terrenos para que los pueblos tuvieran acceso a ellos, en un proceso acotado y conducido por el gobierno. Para los Ruiz de Velasco, esa reforma agraria voluntaria, aunque limitada, era lo único que podía salvar al sistema hacendario.

Carlos Castro, profesor rural de Santa María que había salido huyendo de uno de los ataques de Genovevo de la O y había encontrado apoyo, con una oferta de trabajo, en Ernesto Madero, opinó que la única forma de acabar de raíz con el zapatismo era resolviendo el verdadero problema que lo había engendrado: la falta de tierras. Para lograr esto propuso la expropiación, por causa de utilidad pública, de las haciendas más importantes de Morelos —las de Tenango y Santa Clara (de Luis García Pimentel), las de Cuahuixtla, Treinta y Acamilpa (de Manuel Aráoz), las de San Nicolás y Zacatepec (de Juan Pagaza)—, las cuales habría que dividir y luego entregar a los pueblos, sin prestar oídos a los hacendados españoles que vivían lujosamente en Europa o en la ciudad de México.[13]

* Cesión a perpetuidad del dominio útil de bienes inmuebles; en este caso, las tierras de las comunidades a cambio de pagos anuales.

[12] Tomás Ruiz de Velasco, "Proyecto de Convención en el Estado de Morelos, trabajos que pueden emprenderse para la pacificación", en AGN, FFM, c. 49, exp. 1377, f. 37366.

[13] Carlos Castro a Madero, México, 29 de julio de 1912, AGN, FFM, c. 3, exp. 44, ff. 1592-1598.

Estas voces, que venían de las mismas elites o de sectores influidos por ellas, se sumaban a las de la oposición democrática que reclamaba cada vez con más fuerza una reforma agraria que acabara de raíz con el levantamiento zapatista.

Los agravios infligidos a la población civil

Había otros motivos, además de los agrarios, que eran causa de descontento y protestas en los sectores e individuos de las localidades de la zona por la que se extendió y enraizó la revuelta. Estos motivos explican, en parte, la actitud de apoyo y simpatía que la gente brindaba a los rebeldes y, en ocasiones, la incorporación a sus filas. Entre los más recientes y constantes motivos de protesta estuvieron los abusos cometidos por el ejército federal, por los rurales y por los distintos tipos de autoridades estatales y municipales. Así, varios individuos protestaron por la leva de sus hijos, por el encarcelamiento injustificado de familiares a los que se acusaba de apoyar a los rebeldes, por la corrupción, parcialidad y violencia de las autoridades municipales en perjuicio de la población inocente. Con el pretexto de buscar zapatistas, las fuerzas federales y rurales irrumpían violentamente en viviendas particulares, apresaban, amenazaban y golpeaban a sus moradores, sin importar edad ni sexo. Estos abusos llevaron a la población civil a esconderse ante el arribo de estas tropas y a emigrar o buscar protección, ya con el gobierno, ya con los grupos rebeldes.

Para aislar a los alzados de la población civil y cortarles sus fuentes de aprovisionamiento y reclutamiento en las zonas rurales más agrestes, en donde se refugiaban y preparaban sus incursiones, el gobierno estatal comenzó, en enero de 1912, a reconcentrar poblaciones, de las que probadamente brindaban apoyo a los alzados, en villas y rancherías alejadas de las ciudades más grandes, con el consiguiente trastocamiento de la forma habitual de manutención de esas familias, obligadas a abandonar súbitamente sus hogares y patrimonio.

Los jefes del ejército federal, ante la gran movilidad de las bandas guerrilleras y su propia incapacidad para perseguirlas y aniquilarlas, no encontraron mejor solución que reprimir, atemorizar y ejercer un fuerte control sobre la población civil de las localidades en que los rebeldes estaban más arraigados. Esta táctica demostró de inmediato su ineficacia, pues no consideraba que, dadas las características del ejército zapatista, muchos de sus jefes y militantes no eran individuos extraños a los pueblos, villas y rancherías, sino parte de ellas, por lo que los vínculos y solidaridades de parentesco, trabajo y amistad no eran fáciles de disolver. Todo lo contrario, el ataque a las localidades provocó la defensa de éstas

y una mayor identificación con los alzados. De este modo, el efecto inmediato que tuvo la represión en la población civil fue que en lugar de alejarla de los rebeldes la unió más a ellos, pues le proporcionaban defensa, protección, y una alternativa de organización para enfrentar amenazas y abusos. Así, muchos hombres que habían permanecido hasta entonces neutrales, ante la quema de pueblos enteros, cateos, fusilamientos sumarios, humillaciones y abusos cometidos por las tropas federales y rurales, no tuvieron otro recurso que sumarse a los rebeldes. De cualquier forma, el trato que recibían del ejército era el mismo que éste prodigaba a los zapatistas.

Desde luego, las principales causas de indignación y ofensa fueron el incendio de los poblados, la detención y reconcentración de ancianos, mujeres y niños de pueblos enteros, los fusilamientos, las detenciones y la leva en gran escala que el ejército practicó en esas semanas. Hay abundancia de ejemplos de los abusos contra la población civil, como en Yautepec, donde el comandante militar, sin hacer caso de las protestas de los vecinos, fusiló, a principios de febrero de 1912, a un poblador ebrio que había gritado vivas a Zapata. El presidente municipal se había negado a ejecutarlo y ése fue uno de los motivos para que el secretario de gobierno estatal, junto con el jefe figueroísta Federico Morales, lo tachara de zapatista y lo depusiera. Antes, los rurales habían aprehendido al regidor y al jefe de policía de ese poblado, junto con peones de la hacienda de Oacalco, acusándolos de zapatistas e, incluso, mecatearon al administrador de la hacienda que testificó diciendo que eran pacíficos.[14] El nuevo presidente de Yautepec, un capitán del ejército, a la semana siguiente fusiló a catorce personas, entre ellas diez peones de la hacienda de San Carlos, a pesar de que el administrador abogó por ellos; fueron descuartizados y sus restos repartidos entre sus familiares. Periodistas capitalinos constataron que la población, descontenta, se había incorporado a las filas zapatistas.[15]

Durante el mes de febrero de 1912 ocurrió también un gran número de abusos. En Ticumán, Morelos, soldados federales asesinaron brutalmente a un anciano luego de haber sido emboscados por una partida de rebeldes. En Chamilpa, rurales del 11º regimiento quitaron a los habitantes 700 pacas de zacate para alimentar a sus cabalgaduras. En Colucan, del distrito de Izúcar, el administrador de la hacienda de San Nicolás hizo que los rurales fusilaran a tres jóvenes que habían proferido gritos subver-

[14] Tras detener al presidente municipal y catear su casa, el secretario de gobierno del estado le dijo que, como 95% de la población era zapatista y había votado por él en las elecciones, entonces también él era zapatista. El presidente depuesto Julio Morales señaló que sólo le habían encontrado una pistola vieja y correspondencia con liberales californianos de 1895 (*El País*, 12 de febrero de 1912; *Diario del Hogar*, 12 y 28 de febrero de 1912).

[15] *Diario del Hogar*, 15 y 17 de noviembre de 1912.

sivos. En Jojutla, los vecinos se quejaron de haber sido agredidos y ofendidos por un destacamento de soldados ebrios que no quisieron pagar en una cantina lo que habían ingerido. En Tetecala, el jefe militar fusiló a varios individuos injustificadamente. En Ahuetepan e Ixtlahuacan, en Guerrero, los federales apresaron y se llevaron a veinticinco habitantes pacíficos, por lo que el pueblo decidió sublevarse contra el gobierno. En Xochimancas, Morelos, los federales incendiaron varias casas, violaron a mujeres y robaron a la población. En Ocotepec quemaron los pastos, varias casas particulares y apresaron a seis vecinos pacíficos. El 26 de febrero de 1912, a los habitantes de Ahuatepec, Ocotepec y Chamilpa se les dieron 72 horas para desalojar sus pueblos, al cabo de las cuales éstos fueron quemados, por simpatizar con los zapatistas. Cuarenta y cinco individuos, incluidos varios ancianos y dos niños de los pueblos de Tlacotepec y San Juan Tilapa, en Morelos, fueron apresados por tropas federales, acusados de incendiar el monte; sus mujeres acudieron a solicitar su liberación diciendo que habían ido a cortar leña. En la hacienda de Vicencio, el jefe rural Gabriel Hernández fusiló a varios peones, por supuesta complicidad con los rebeldes, a pesar de que los dueños de esa propiedad alegaron que eran inocentes.[16]

La brutalidad contra la población civil no fue ejercida solamente por el ejército. También las fuerzas rurales de los Figueroa, compuestas en su mayor parte por individuos de Guerrero, mostraron a menudo un comportamiento abusivo contra la gente común de los lugares que ocupaban. Tanto el ejército federal como estos cuerpos rurales eran fuerzas de ocupación, ajenas a las comunidades de la zona, sin vínculos ni intereses que atenuaran su conducta para combatir a los guerrilleros zapatistas y aislarlos de la población civil. Así, pues, uno de los mayores motivos de descontento fue precisamente el de los abusos cometidos por los figueroístas, conocidos como "colorados" o "pintos" por el color de su vestimenta. A principios de noviembre de 1911, en Santa Catarina y Tepoztlán incendiaron las casas de varios vecinos, tras acusarlos de ser zapatistas; el jefe figueroísta que guarnecía la plaza mató luego a un anciano al que, según los habitantes, vinculó sin razón con los zapatistas. Federico Morales, el segundo de Figueroa, capturó a varios habitantes de Xoxocotla, después de una incursión zapatista a ese poblado, y los fusiló, a pesar de los testimonios de la gente en el sentido de que no habían participado en esas acciones. Habitantes de Tlaltizapán denunciaron que soldados rurales habían despojado de sus caballos a varios pobladores y que ahí mismo los vendieron a cuatro y cinco pesos.

[16] *El País*, 2, 9, 13, 16, 18 y 26 de febrero de 1912; *Diario del Hogar*, 4, 9, 12, 18, 24 y 28 de febrero de 1912; *El Imparcial*, 8 y 28 de marzo de 1912.

En Puente de Ixtla, hombres de Figueroa fusilaron a un comerciante de puercos al menudeo en presencia de su esposa. En Yautepec, el oficial de rurales Ramón Carazo instaló su cuartel en el atrio de la iglesia, a donde entraba a cualquier hora su querida, a pesar de las protestas del cura y de la gente. Ese mismo jefe arrestó a una joven de las familias adineradas de la localidad porque llevaba un retrato de Zapata. Tuvo que dejarla libre ante las protestas de la gente, pero la multó con cincuenta pesos. En Huajintlán, distrito de Tetecala, los rurales apresaron a varios vecinos, acusándolos de zapatistas, sin oír las protestas y reclamos de los pobladores. Las tropas de Guerrero fusilaron a dos individuos en las afueras de Cuernavaca y a otros dos en Tlaltenango en la víspera de Navidad de ese año, sin tomarse siquiera la molestia de un juicio sumario. Varios presidentes municipales acusados de complicidad con los zapatistas fueron depuestos, encarcelados o perseguidos por Figueroa; así ocurrió con los presidentes de Yautepec, Tlaltizapán y Cuautla. La represión de las fuerzas de Figueroa alcanzó incluso a periodistas que lo criticaban, como Santiago Orozco, del diario *Vesper* —que dirigía Juana B. de Mendoza, simpatizante zapatista—, quien fue apresado arbitrariamente en noviembre de 1911, por lo que el Club Político Femenil Amigas del Pueblo, del Distrito Federal, solicitó la intervención de Madero.[17]

La censura a la prensa, determinada por el gobierno maderista y las autoridades militares, hizo que este tipo de denuncias disminuyera en los meses posteriores. No obstante, siguieron apareciendo algunas en los diarios. El 1º de marzo de 1912, los federales saquearon el pueblo de Amaltepec, en Morelos. Ese día, otro destacamento federal, después de tomar el pueblo de Santa Catarina, aprehendió a todas las mujeres, a un niño y a un anciano y los llevó a Cuernavaca. El 4 de abril, vecinos de Chalco, Estado de México, se quejaban del comportamiento de las tropas federales estacionadas ahí, pues se emborrachaban y abusaban de los pacíficos habitantes. El 8 de abril, los rurales ocuparon la hacienda de San Vicente y el pueblo de San Francisco, en Morelos, y obligaron a la población a derribar las bardas y tecorrales antes de mediodía; al que no lo hiciera, le quemarían su casa; un anciano que no pudo terminar fue aprehendido y conducido al cementerio para su fusilamiento; lo salvó la providencial intercesión del administrador de la hacienda.

En el rancho de Temaxcalapa, en Chietla, el inspector denunció que el jefe rural Mariano García fusilaba a gente pacífica y que el pueblo había abandonado sus hogares. En Cholula, un enviado de Madero informó

[17] *Diario del Hogar*, 9 y 10 de noviembre, 4, 7, 8, 13, 20, 27 y 28 de diciembre de 1911; Club Político Femenil a Madero, México, D.F., 22 de noviembre de 1911, AGN, FFM, c. 22, exp. 558, ff. 16792-16793.

que los abusos del jefe político Miguel Mora en contra de los indígenas hacían previsible un levantamiento de la población. La misma fuente consideró que las arbitrariedades y torpezas del jefe político de Tepeji produjeron que la población se uniera a los zapatistas que tomaron la plaza. Los vecinos de Topilejo, en el Distrito Federal, denunciaron que el jefe de policía y el comisario de ese pueblo arrestaron injustificadamente a veinticuatro individuos, acusándolos de zapatistas y enrolándolos en el ejército. El pueblo protestó porque varios de ellos, por el contrario, habían participado en la defensa del sitio cuando fue atacado por los rebeldes. El prefecto de Milpa Alta fue acusado por los pobladores de cobrarles multas arbitrarias, arrestarlos y amenazarlos pistola en mano. En Atlixco, a su vez, varias poblaciones se quejaron de que las autoridades habían fusilado a varios vecinos que, por la fuerza, habían tenido que dar dinero a los zapatistas cuando éstos ocuparon sus localidades. En Teziutlán, a fines de febrero, el jefe de rurales fusiló a dos rebeldes zapatistas en el atrio de la iglesia, sin juicio, lo que causó gran indignación entre la población.

En mayo, vecinos del pueblo de Santiago, en Amecameca, Estado de México, denunciaron que el oficial Juan Pérez, del 19º cuerpo de rurales, después de perseguir a una partida de zapatistas apresó a decenas de pacíficos habitantes del pueblo y destruyó tres chozas en donde se encontraban niños enfermos de viruela; uno de sus soldados violó a una niña de doce años y a la madre de ésta, a la que dio doce pesos en compensación; para liberar a los detenidos, Pérez les exigió veinte pesos. Eduardo Vélez, propietario de la hacienda de Guadalupe Xaltlico, en Puebla, denunció que los rurales, con el pretexto de perseguir zapatistas, habían saqueado su hacienda, lo que, al decir del corresponsal de *El País*, era una práctica muy extendida. El 11 de junio, en Tianguistengo, Estado de México, el jefe de rurales fusiló a un zapatista y obligó a cuatro de sus compañeros presos a presenciar la ejecución. Con el recrudecimiento de la guerra, Juvencio Robles, el sanguinario general en jefe de la campaña contra los zapatistas que sustituyó a Casso López, recurrió a menudo a esta práctica de terror para dejar testimonio de que no mostraría misericordia con los alzados. Los numerosos cadáveres de zapatistas que colgaban de los postes del telégrafo a lo largo del camino de la ciudad de México a Cuernavaca eran el testimonio macabro de ese propósito.[18]

El resultado de la violencia ejercida por el ejército y los cuerpos rurales fue que la rebelión zapatista, en lugar de debilitarse, se extendió y consolidó, incorporando a sus fuerzas a estos sectores agredidos y amenazados

[18] *El País*, 2 y 5 de marzo, 4 y 13 de abril, 13 y 15 de mayo, 1 y 18 de junio de 1912; *El Imparcial*, 12 y 15 de junio de 1912. AGN, FFM: B. Alatriste a Madero, Puebla, 14 de abril, c. 6, exp. 4095, f. 4095; Vicente Arerenchú a Sánchez Azcona, Chiautla, 12 de abril de 1912, c. 53, exp.7, f. 485.

por la represión oficial, que encontraron en los rebeldes una vía para defenderse.[19]

Otro tipo de descontento fue de carácter más bien político y estuvo dirigido contra las autoridades locales: algunas poblaciones protestaron porque se les había reprimido por organizarse para elegir libremente a sus autoridades, como sucedió en Tejupilco, o porque después de haber efectuado elecciones libres, como en Atlixco, el jefe político y los caciques querían anularlas e impedir la toma de posesión de los ciudadanos electos. Este jefe político fue denunciado además por extorsionar a la población civil —después de haberla acusado de ser zapatista—, apoderarse del dinero de las multas, permitir que se ejerciera la prostitución en pulquerías, descuidar la educación en las escuelas y aprovechar el cargo para ejecutar venganzas personales. Otros más protestaron por la inadecuada designación de autoridades luego de la victoria maderista —así sucedió en Otumba: el jefe político nombrado en noviembre de 1911 había sido siempre un acaparador de carne que sacaba ventaja de las necesidades de la población— o porque la revolución no eliminaba a la vieja clase política regional —como en Cuautla, donde los jefes políticos intentaban reelegirse e imponían como candidatos a los puestos de elección popular a gente comprometida con el régimen de Díaz. Un habitante de San Nicolás Totolapan escribió a su hermano lo que muy bien podía ser la síntesis de una percepción compartida por un amplio espectro de familias y grupos de la zona en que se extendía la rebelión: "Dicen los vecinos de este pueblo que ya no quieren más caciquismo, no quieren que una sola persona gobierne el pueblo, ni tampoco que sean los mismos, ni pongan jueces de los mismos de su partido, ni de los agregados, de sus adictos"; y agregaba que los habitantes del pueblo querían otros gobernantes "que no los [tuvieran] debajo de la planta del pie".[20] Es decir, la gente quería un cambio efectivo, caras nuevas, otro compromiso, otro pacto, otro trato.

[19] Como se observa en algunos de los ejemplos citados, la violencia gubernamental no estuvo dirigida solamente contra los sectores rurales bajos y medios, que eran el principal soporte de los alzados, sino que tocó también, aunque en menor proporción, a sectores acomodados. De igual modo, hubo hacendados, administradores de haciendas y autoridades locales que tomaron una actitud decidida en defensa de trabajadores y vecinos, desafiando la respuesta oficial.

[20] AGN, FFM: María M. a Madero, México, 1 de noviembre de 1911, c. 7, exp. 159-1, ff. 4608-4610; Miguel Merino a Madero, Cuicatlán, Oaxaca, 21 de noviembre de 1911, c. 11, exp. 263, f. 7838; Carlota viuda de Viñas a Madero, Teziutlán, 16 de enero de 1912, c. 2, exp. 24-2, f. 845; vecinos de Tehuacán a Madero, 26 de diciembre de 1911, c. 4, exp. 94-1, ff. 2770-2771; Ignacio Mendoza y otros individuos a Madero, Tejupilco, Estado de México, 28 de noviembre de 1911, c. 2, exp. 41-1, f. 1504; vecinos de Atlixco a Madero, 8 de enero de 1912, c. 3, exp. 69-1, ff. 2069-2083; Rafaela viuda de Cárdenas a Madero, Cuernavaca, 30 de diciembre de 1911, c. 2, exp. 34, f. 1311; Enrique Aguilar a Madero, Atlixco, 5 de junio de 1912, c. 7, exp. 165-1, ff. 4775-4776. Denuncias de habitantes de Tláhuac, Distrito Federal y Barranca del Cuarto, hacien-

Otras quejas eran un reflejo de las energías existentes, dirigidas a propiciar cambios políticos efectivos, y de la resistencia de las viejas estructuras políticas regionales, que seguían conservando mucha de su fuerza. El 26 de junio de 1912, varios vecinos de San Baltasar Atlimalaya, municipio de Tianguismanalco, en Atlixco, Puebla, escribieron a Madero que los caciques Higinio López, Luis Zamorano, Herculano Jiménez y David Paredes, que "dominaban al pueblo en la pasada tiranía", fueron derrotados por la población del lugar, que eligió a nuevas autoridades en febrero de 1912. Sin embargo, la elección fue desconocida por el jefe político Manuel Vital y por el jefe de la fuerza militar Oblester Alcázar, quienes nombraron a los dirigentes de la nueva Junta Auxiliar. Se convocó a nuevas elecciones y el pueblo volvió a derrotarlos. El jefe militar fue nombrado luego jefe político de Atlixco; como además era dueño de la hacienda de Tenentitla, colindante con el pueblo, aprovechó el poder recién adquirido para intentar quitar el agua a los habitantes del lugar, "con el pretexto de que [eran] zapatistas", después de amenazarlos con incendiar sus propiedades. El ejército apresó a más de veinte vecinos, incorporándolos a la milicia o deportándolos a Quintana Roo, y fusiló a dos de las autoridades electas, por lo que los quejosos pidieron garantías y que cesaran las persecuciones en su contra.[21]

Así, pues, la incapacidad del ejército y de las fuerzas rurales para acabar con una rebelión de carácter guerrillero, camuflada, móvil, extensa, fragmentada, difícil de localizar y con apoyo popular provocó, como en otras regiones y épocas, que se empleara contra ella una táctica de contrainsurgencia, de guerra sucia contra la población civil. En seguimiento de esa lógica, el régimen intentaba derrotar indirectamente a los rebeldes, eliminando sus fuentes de aprovisionamiento y apoyo mediante el amedrentamiento y el terror de los sectores civiles que apoyaban a los guerrilleros. En esa dinámica, los abusos infligidos a la población eran considerables, pues la impotencia de las fuerzas del orden para cumplir su cometido, las derrotas, el alcohol, la lujuria, los instintos de agresividad ante la debilidad de la población desarmada, el desarraigo del lugar, la ideología castrense de desprecio al enemigo, la disciplina y el espectro de valores de casta de los oficiales del ejército durante el porfiriato produjeron numerosos hechos de sangre que tuvieron el efecto de debilitar o des-

---

da de Cuahuixtla y mujeres de Tetecala, en Morelos, aparecidas en el *Diario del Hogar*, 24 de noviembre y 8 de diciembre de 1911, 5, 24 y 31 de enero de 1912. Gregorio Amaya a Filomeno Amaya, San Nicolás Totolapan, AGN, FGO, c. 1, exp. 2, ff. 3-4.

[21] Julián Flores, Félix Rodríguez y otros a Madero, 26 de junio de 1912, AGN, FGPR, c. 1, exp. 38. Aunque la Secretaría de Gobernación informó a los quejosos que había tomado cartas en el asunto y que el jefe político Oblester había sido destituido después, el gobierno no pudo ofrecer las garantías solicitadas, pues los denunciantes abandonaron el lugar.

mantelar la economía y la vida cotidiana de los pueblos, rancherías y ciudades, y de provocar un enorme daño moral por los abusos, los ultrajes y el terror que les infundieron. La población tenía miedo del ejército y, para defenderse, se incorporaba a las filas de los rebeldes, pues éstos le ofrecían apoyo, resistencia y una forma de identidad.

Los agravios perpetrados en contra de la población civil durante la rebelión no fueron responsabilidad única de las fuerzas represivas. También contribuyó la actitud desafiante de las elites y autoridades regionales que se empeñaron en mantener las cosas como estaban, en reprimir y castigar a los promotores del cambio y en utilizar la fuerza como último recurso. Con el ímpetu que había alcanzado la rebelión, esas conductas no hicieron sino alimentarla y radicalizarla.

El apoyo de la población a los rebeldes

La violencia oficial hizo que la población buscara la protección de los zapatistas y que la influencia de éstos aumentara. Zapata mismo reconoció ante la prensa que la Ley de Suspensión de Garantías, que promulgó el gobierno de Madero para combatir la rebelión, había hecho crecer sus fuerzas.[22] El apoyo que la población dio a los rebeldes se realizó en diversas formas. Agustín del Pozo, hacendado e industrial poblano, participante en la insurrección maderista y jefe de armas del estado, escribió a Madero que, como el desarme de los grupos revolucionarios se hizo en julio de 1911, quienes tenían tierras no alcanzaron a sembrar y los que carecían de ellas no pudieron contratarse como mano de obra por haber concluido la temporada de siembra; esto había llevado a la miseria a muchos de ellos y se habían incorporado a los rebeldes para sobrevivir.[23] El propietario Mario Martínez, de Morelos, declaró a la prensa que 75% de la población del estado apoyaba a los zapatistas y estaba en contra de los federales y rurales, a los que negaban los alimentos. Las actividades productivas se encontraban seriamente afectadas por la incorporación de la población, sobre todo indígena, a las filas rebeldes. El diario capitalino *El País*, no obstante su posición conservadora y su decidida militancia en contra de los rebeldes, reconocía también que la mayor parte de la población morelense era zapatista y que, salvo los hacendados, sus administradores y algunos grupos selectos, el resto simpatizaba con los alzados, por lo cual éstos contaban con un perfecto sistema de espionaje, formado por cam-

[22] *Diario del Hogar*, 1 de febrero de 1912.

[23] A. del Pozo a Madero, Puebla, 13 de febrero de 1912, AGN, FFM, c. 7, exp. 179, ff. 5116-5118.

pesinos, carboneros, arrieros y habitantes de los pueblos, que les informaban de los movimientos de las tropas del gobierno. En Tepeaca, Puebla, un colaborador de Madero constató que cuando los zapatistas tomaron la población, en marzo de 1912, los habitantes echaron las campanas a vuelo y les arrojaron flores a su paso.[24]

En ocasiones, después de una acción victoriosa, los insurrectos conseguían adhesiones masivas; así ocurrió a las tropas de José Trinidad Ruiz, después del ataque a Milpa Alta, en octubre de 1911, cuando parte de los vecinos se les unieron y conminaron a la población a que las ayudara, participando en el incendio de la prefectura; y en la planta de Necaxa, en donde se les incorporaron los operarios, en febrero de 1912; también en la fábrica de Metepec, en Atlixco, cuando simpatizantes de los rebeldes se enfrentaron a soldados del 34º batallón con vivas a Zapata y Vázquez Gómez. En Tlaltizapán y en Buenavista de Cuéllar, parte de la población decidió unirse a los alzados luego de un ataque de éstos; en Teloloapan, Guerrero, la población ayudó activamente a Salgado a cercar, poner fuego y derrotar a la guarnición rural. La colaboración de la población con los alzados y la incorporación a sus filas eran muestras de la coincidencia de objetivos y de la conveniencia de una alianza más estrecha.

Otro fenómeno que ocurrió en esos meses fue la deserción de cuerpos rurales que decidieron unirse a las fuerzas rebeldes que anteriormente combatían. Los motivos probables: temor, protesta por malos tratos y abusos de sus superiores, oportunismo y conveniencia de varios de sus jefes que prefirieron el camino de la sublevación. De este modo, en los primeros meses de 1912 se registraron deserciones en Teziutlán, Zacapoaxtla, San Juan de los Llanos, Tlatlauquitepec, Tepeji, Tetela y Huachinango, en Puebla, donde rurales al mando de excombatientes maderistas se sublevaron y le declararon la guerra al gobierno en febrero de ese año. Lo mismo ocurrió en Mojalcac, distrito de Tehuacán, y en Huamantla a principios de marzo. En Acatlán, cuarenta rurales del 11º cuerpo se rebelaron ante el mal trato de su jefe. En Chila, Guerrero, cincuenta hombres del 16º cuerpo rural se sublevaron y se incorporaron a las fuerzas de Eufemio Zapata. En Huehuetlán e Igualapa, en Oaxaca, los cien rurales que defendían la guarnición y la población en pleno se pasaron a las filas de los rebeldes que atacaron la plaza el 13 de marzo.[25]

[24] *El País*, 1, 15 y 18 de febrero de 1912; B. Alatriste a Madero, Puebla, 14 de abril de 1912, AGN, FFM, c. 6, exp. 140-1, f. 4095.

[25] AGN, FFM: A. del Pozo a Madero, Puebla, 16 de febrero de 1912, c. 7, exp. 179, ff. 5119-5121; Baraquiel Alatriste a Madero, Puebla, 20 de febrero de 1912, c. 6, exp. 140-1, f. 4123; Guillermo García Aragón a Francisco I. Madero, México, 20 de febrero de 1912, c. 10, exp. 256, ff. 7688-7690; Nicolás Meléndez a Madero, Puebla, 22 de febrero de 1912, c. 3, exp. 77, ff. 2280-2281; B. Alatriste a Madero, Puebla, 8 de marzo y 14 de abril, c. 6, exp. 140-1, ff. 4124-

La atracción que ejercían las tropas sublevadas afectó también a los cuadros militares, como ocurrió con Nicolás Vázquez, sargento federal que desertó y se unió a Zapata, convirtiéndose en un importante apoyo para la causa por sus conocimientos de artillería, y con Rutilio Espinosa, quien había sido jefe de armas maderista en Tlaxcala y dirigido ataques contra varias haciendas de la región poblana, antes de ser detenido y fusilado el 29 de marzo; también con Carlos Ledezma, quien había sido inspector de policía en Petlalcingo, el pueblo del *Tuerto* Morales, y luego se sumó a las filas del famoso guerrillero. En julio de 1912, en el ataque y voladura del tren civil, acciones dirigidas por Genovevo de la O, fue herido y detenido Elías Bretón, exsoldado federal que se había pasado al zapatismo y a quien apodaban *el Pelón*, precisamente por su pasado militar. A mediados de julio fue detenido, en Juchitepec, Joaquín Miranda, quien se había convertido en un importante jefe zapatista después de haber pertenecido al ejército federal. Lo mismo ocurrió con Luis Portugal, capturado en Cuernavaca, que había sido cabo de rurales. A fines de ese mismo mes fue detenido Julián Colín, que había pertenecido al tercer regimiento de artillería, antes de desertar y unirse a los rebeldes.[26]

Tales deserciones e incorporaciones eran también una demostración de la fuerza y el poder de atracción o el grado de temor que había llegado a inspirar la rebelión entre sus oponentes directos. También eran el reflejo de la debilidad que padecía el sistema de reclutamiento de las fuerzas del orden, basado en la leva y en la coerción. El zapatismo adquirió mayor destreza operativa con esos cuadros de formación militar, que fueron un apoyo efectivo y comprometieron su suerte con la de los alzados. Esto no excluye, desde luego, otro tipo de incorporaciones realizadas por mero oportunismo, sin compromiso ideológico, que igualmente ocurrieron.

Hubo también incorporaciones de gente vinculada a la religión, como la de Benigno Zenteno, pastor protestante de Tepetixtla, Puebla, quien se unió a los rebeldes junto con su hijo y se convirtió pronto en un importante líder local por el rumbo de Santa María Texmelucan. La prensa reportó también la incorporación de varios religiosos católicos; entre ellos, Amado Ramírez, cura de Petlalcingo, quien se unió a las fuerzas del *Tuerto* Morales antes de ser detenido por las fuerzas gubernamentales; con Amador Salazar, por otra parte, militaba también el cura de Tepoztlán. La actitud de la Iglesia católica ante la rebelión tuvo una amplia gama de posiciones

---

4125 y 4095. *Diario del Hogar*, 8 de noviembre de 1911; *El Imparcial*, 1, 12 y 14 de marzo de 1912; *El País*, 2, 4 y 13 de mayo de 1912.

[26] *El País*, 25 de febrero, 5, 6, 11 y 21 de marzo, 3 y 10 de abril de 1912. El pastor protestante Zenteno tenía simpatías por Vázquez Gómez y no le importó enfrentarse al cura de Tlahuapan, a quien amenazó y quitó tres caballos a principios de abril (*El Imparcial*, 4, 7, 22 y 31 de marzo, 13 y 15 de julio, 2 de agosto de 1912; *El País*, 11 de julio de 1912).

que oscilaron entre la colaboración de algunos curas rurales, la tolerancia o la impotencia. Dada la fuerte presencia de esta institución religiosa en la zona de conflicto, conocida por su acendrada religiosidad, hace falta un estudio detallado de la relación que tuvo ésta con los alzados y con la población. Por lo poco que se sabe, si bien la alta jerarquía eclesiástica fue contraria al movimiento zapatista, al parecer no lo enfrentó o al menos no hubo tantos choques con los líderes rebeldes —salvo casos esporádicos—, como ocurrió en el centro y norte del país con las fuerzas constitucionalistas, en parte debido al marcado respeto que la mayoría de los dirigentes zapatistas mostró ante el culto y los representantes eclesiásticos.

La fuerza de la rebelión alcanzó también a las estructuras de autoridad más vinculadas a las comunidades: las presidencias, los comisariados y los juzgados auxiliares de los municipios. Varias de esas autoridades fueron acusadas de colaborar con los zapatistas, como el presidente de Yautepec o los presidentes de Cuautla y San Vicente, quienes tuvieron que huir. El presidente de Miacatlán fue arrestado, junto con otras personas, acusado de ayudar a los zapatistas en el ataque a la hacienda del mismo nombre. A fines de julio de 1912, todo el ayuntamiento de Zautla, distrito de San Juan de los Llanos, en Puebla, fue detenido por zapatista. Ireneo Contreras, comisario del pueblo de San Bartolito, en San Ángel, fue capturado luego de haber organizado varias incursiones rebeldes en la zona y de intentar tomar el pueblo de San Ángel. El presidente auxiliar de San Sebastián Tepetlaxco, en Tepeaca, Puebla, fue acusado de encabezar el ataque que realizó una partida zapatista a dicho pueblo en noviembre de 1912.[27]

Todavía más: incluso algunos representantes de haciendas fueron acusados del mismo cargo: Antonio Barrios, apoderado legal de la hacienda de San Vicente, y el administrador Miguel Chavarría corrieron esa suerte. Lo mismo pasó con Antonio Posadas, administrador de Temixco, y con Alberto Sánchez, de Chiconcuac. A todos ellos se les acusó de proporcionar armas a los rebeldes. Se defendieron argumentando que eran armas para las haciendas, aunque Antonio Barrios declaró que, meses atrás, había pagado protección a Eufemio Zapata para que respetara la propiedad de la que era responsable. Los hermanos Aldama y Martínez Arauni, dueños de las haciendas de Tilapa y Ayotla, respectivamente, fueron acusados de dar dinero al rebelde Manuel Oceguera a cambio de protección; otras haciendas poblanas fueron denunciadas por lo mismo. El administrador de Temilpa, propiedad de la viuda del exgobernador Manuel Alarcón, fue acusado de sostener pláticas con Zapata y por

[27] *Diario del Hogar*, 27 de febrero de 1912; *El País*, 28 de febrero de 1912; *El Imparcial*, 13 de mayo, 27 y 31 de julio de 1912; L. Morales y A. Sánchez a secretario de Gobernación, 14 de noviembre de 1912, AGN, FGPR, c. 97, exp. 14.

sospecha de que esa hacienda había sido respetada por los rebeldes en pago de viejos favores, al decir de la prensa citadina. José Sánchez y Rafael Carmina, administradores de las haciendas de Atlihuayán, San Carlos y Oacalco, fueron arrestados también por las autoridades militares de Yautepec, acusados de tener considerables cantidades de armas y parque y no haber podido demostrar que eran para ls defensa de las haciendas. Así, pues, la actitud pragmática de algunas haciendas de comprar protección, conceder préstamos forzosos a los rebeldes o acopiar armas fue interpretada por el régimen como connivencia con la revuelta y, en consecuencia, castigada.

Había elementos que mostraban la colaboración y el trato especial que brindaban esos administradores y empleados a los líderes rebeldes y los trabajadores de las haciendas, obligados por la necesidad de salvar las propiedades de los asaltos y las depredaciones que los amenazaban. Sin embargo, eso no significa que una parte de la elite propietaria apoyara o financiara la revuelta. Era una actitud de conveniencia. La venta de protección beneficiaba por igual a los líderes rebeldes que la ofrecían y a los hacendados que la aceptaban, aunque el pragmatismo de éstos evidenciaba también una debilidad ideológica.[28]

Para consolidarse, el desafío zapatista necesitaba imperiosamente asegurar el abastecimiento de armas y parque. Aunque la cercanía de la ciudad de México constituía una ventaja y daba importancia estratégica a sus acciones, su alejamiento de las costas y de las fronteras dificultaron el abasto de esas mercancías, que tenían que conseguirse en el mercado negro, para lo cual se necesitaba una red civil de contactos y espías y una cadena de colaboradores que hicieran posible el flujo de las mismas. La policía política y sus informantes alertaron al gobierno del tráfico de armas que hacía llegar esa preciada mercancía de la ciudad de México a la zona de los alzados. La Secretaría de Gobernación reforzó la vigilancia

[28] Juvencio Robles, al detener a varios hacendados morelenses acusados de ayudar a los zapatistas, quiso poner un castigo ejemplar para que cesara cualquier acercamiento de los hacendados, administradores y empleados con los rebeldes. Aunque accedió a que el administrador de la hacienda de San Vicente no fuera fusilado, pidió para él una condena fuerte. Esas detenciones hicieron que varios hacendados y administradores se acercaran a los líderes maderistas para pedir indulgencia con los detenidos. Sánchez Azcona consideró que había que aprovechar esa coyuntura para hacerlos cortar cualquier apoyo a los rebeldes y para que apoyaran con más energía al gobierno. Véase AGN, FFM: Sánchez Azcona a Jesús Flores Magón, México, 4 de marzo de 1912, c. 53. exp. 5, f. 246; Alberto Jiménez a Sánchez Azcona, Cuernavaca, 12 de marzo, c. 53, exp. 6, f. 78. Chavarría, Posadas y Sánchez fueron condenados a seis meses de prisión. *El País*, 1, 12, 25 y 26 de febrero de 1912; *El Imparcial*, 1 y 6 de marzo, 5 de junio, 2 y 3 de agosto de 1912; *El País*, 27 de mayo, 15 y 21 de junio de 1912. B. Balderas a Madero, Tehuacán, 4 de mayo de 1912, AGN, FFM, c. 2, exp. 26, f. 903; A. del Pozo a Madero, Puebla, 24 de mayo de 1912, AGN, FFM, c. 7, exp. 179, ff. 5138-5140.

en la frontera sur el país, en los puertos de ambas costas, en los ferrocarriles y, de manera especial, en los caminos que atravesaban Morelos, para impedir que las armas llegaran a los rebeldes. Mediante la delación y el espionaje fueron descubiertos en el Distrito Federal varios individuos que abastecían de armas y parque a los insurrectos y que se los hacían llegar por tierra. Además, el gobierno puso bajo vigilancia especial a los trabajadores de telégrafos e incluso destituyó a algunos de ellos, pues sospechaba que colaboraban con los rebeldes, avisándoles con anticipación de los movimientos de las tropas del gobierno.[29]

Los rebeldes de Morelos compraban armas en el mercado negro de la ciudad de México y, en menor medida, en Cuernavaca y Cuautla, ciudades más pequeñas y mucho más vigiladas. Comerciantes ambiciosos vendían armas y parque a los agentes de la causa rebelde, quienes, para el transporte, utilizaban diversos medios de camuflaje, como cajas de mercancías enviadas por ferrocarril, en coches o, incluso, en recuas de mulas que llevaban carbón, azúcar y pastura. La policía capitalina y el ejército federal pusieron especial empeño en combatir este tráfico y detuvieron a numerosos comerciantes de armas y correos urbanos, arrieros y transportistas rurales. En ocasiones, para dar una muestra de escarmiento, llegaron a fusilar a los que sorprendían *in fraganti*. Así ocurrió con un vendedor de pastura de Cuernavaca, a quien se descubrió transportando armas en una carreta de forraje y fue fusilado en el acto. La principal fuente de abastecimiento de los alzados, empero, siguió siendo el armamento y el parque que quitaban a los federales y rurales en emboscadas.

En el crecimiento de la fuerza y el arraigo de los rebeldes también influyó de manera decisiva que, a pesar del clima de violencia y militarización, algunos pueblos pudieran recuperar sus tierras y ratificaran el compromiso y aval de los jefes rebeldes en este empeño. Tal cosa ocurrió en el pueblo de Ixcamilpa, en donde Zapata y sus principales generales, Eufemio Zapata, Otilio Montaño, Francisco Mendoza, *el Tuerto* Morales y Próculo Capistrán, suscribieron un acta que legitimaba la posesión de las tierras que le habían sido usurpadas a dicho pueblo, cuyos títulos, que fueron presentados, databan de la época virreinal.[30] Otros pueblos y localidades reavivaron sus aspiraciones para recuperar u obtener tierras y aguas. La fama del zapatismo como adalid de la causa agraria comenzó a extenderse con ayuda de la prensa nacional que difundía su postura y

[29] AGN, FFM: Sánchez Azcona a Vito Alessio Robles, inspector general de Policía, México, 16 de febrero de 1912, c. 53-4, exp. 488; Sánchez Azcona a secretario de Comunicaciones, México, 29 de febrero de 1912, c. 53-5, exp. 115. *El País*, 8 de febrero, 17 de marzo, 14 de abril, 2 de mayo, 6 y 15 de junio; *El Imparcial*, 19 y 25 de julio, 2 y 4 de agosto de 1912.

[30] Acta de restitución, en Fabela, *op. cit.*, p. 66.

también debido a las críticas y recriminaciones que, de esta actitud, hacían el gobierno, los hacendados, políticos y periodistas.

La combinación de todos esos factores —que además incluía el descontento por los abusos de las tropas federales y rurales, el desprestigio de las autoridades locales, la ruptura del pacto de economía moral con las elites regionales, el prestigio y la legitimidad que obtuvieron los rebeldes por defender esas poblaciones y conseguir éxitos militares que reforzaron su popularidad, y el respaldo a las reivindicaciones agrarias— hizo que la revuelta encontrara arraigo y se extendiera. Las adhesiones masivas o individuales, que provocaban actitudes tan diversas como el pragmatismo, la conveniencia personal, la convicción y la coincidencia de objetivos, reflejaban que la actividad sostenida y creciente de los rebeldes se convertía, día tras día, en un polo de atracción y en un riesgo grave para la consolidación del régimen maderista. Los surianos fueron un factor central de la escena política nacional de esos días.

Descontento de la población civil con los rebeldes

El recrudecimiento de las acciones violentas emprendidas por la insurrección y el proceso de militarización de la región generaron un clima anormal de inseguridad y desestabilización que afectó las actividades cotidianas de la población de todos los estratos. No todos los habitantes de la amplia zona en la que actuaban los rebeldes mostraron simpatía por éstos ni veían con malos ojos al ejército y a los rurales. Hubo distintos sectores, no solamente de conservadores y moderados, tanto del estado de Morelos como de otras regiones, que no sólo no estuvieron de acuerdo con la revuelta, sino que actuaron en su contra. En primer lugar, desde luego, las clases acomodadas y las elites afectadas directamente por las actividades guerrilleras. Pero, en algunos de los archivos que se han conservado, se presenta un fenómeno que llama la atención: la abundancia de testimonios de sectores de clases medias y bajas de la zona centro-sur del país —incluida la ciudad de México— que expresaron opiniones adversas a la rebelión y que ofrecieron sus servicios para combatirla. Esos sectores criticaban la alteración de la paz y el orden, el ataque al gobierno y las instituciones y condenaban la violencia ejercida en contra de las propiedades y las familias, actividades dadas a conocer profusamente por la prensa nacional.

Muchos de los que escribieron a Madero para darle consejos de cómo combatir a los alzados lo hicieron no solamente porque tenían intereses que fueron afectados por la rebelión, sino porque compartían el punto de vista y los valores institucionales. La posición de estos sectores, aunque

en muchos casos no se materializó en apoyos concretos, aumentó la posibilidad de que el gobierno maderista continuara aplicando la política de mano dura contra los alzados. Entre los que ofrecieron sus servicios contra la revuelta había una gama que abarcaba desde individuos que habían sufrido la pérdida de familiares y propiedades y estaban convencidos de que su deber era contribuir activamente a acabar con los rebeldes, hasta desempleados urbanos que no podían encontrar trabajo y que veían en su enlistamiento —en el ejército, en los cuerpos de rurales o en comisiones especiales— una oportunidad de trabajo, o bien mercenarios, arribistas y sicarios sin escrúpulos que ofrecían planes para acabar con los líderes radicales. Todos estos sectores fueron contrarios a la rebelión desde el principio.

En las propias zonas de la rebelión y entre los sectores influidos por ella hubo dificultades que mermaron el apoyo a los alzados. En varias de las comunidades que apoyaron de diversas formas la revuelta, los pleitos y disputas entre pueblos, villas y rancherías por límites y utilización de tierras, aguas, montes y bosques no se vieron alterados por la guerra y, en ocasiones, produjeron en las filas rebeldes liderazgos encontrados que se valieron del clima anormal de enfrentamientos para ejercer venganzas y favorecer sus intereses. De manera significativa ocurrieron también abusos perpetrados por los grupos alzados contra propiedades e intereses de particulares que no pertenecían únicamente a las clases acomodadas. Estos desmanes provocaron el rechazo de los sectores afectados, su hostilidad y, a veces, la colaboración de los mismos con el ejército y los rurales y, en último extremo, su alistamiento en estas fuerzas para combatir el zapatismo. La relación de los rebeldes con la población rural de Morelos y zonas aledañas fue muy conflictiva y varió en las diversas etapas de la revuelta, dependiendo del comportamiento de las tropas alzadas, de la actitud de sus jefes con la población civil y, también, de la táctica y la conducta que emplearon el gobierno y el ejército para enfrentarla.

Zapata y sus jefes eran conscientes de que, a menudo, no podían controlar los desmanes de la tropa a pesar de sus esfuerzos, pero también de que, en medio del desquiciamiento de las actividades normales que la rebelión provocaba, había proliferado el bandidaje y muchas gavillas cometían sus tropelías en nombre del zapatismo, alimentando con ello la imagen negativa que de éste había propagado la mayor parte de la prensa capitalina. Varias instrucciones giradas a sus jefes y oficiales dan testimonio de estos intentos para controlar el comportamiento de las tropas surianas, castigar los excesos que cometían y deslindarse de los bandidos. El jefe zapatista José Trinidad Ruiz, durante una incursión de sus fuerzas a la fábrica de Miraflores, arengó a los trabajadores para que no temieran a los zapatistas, sino a los bandidos que, en nombre de Zapata, saqueaban

pueblos enteros y conminó a la población a rechazarlos. Una diputa entre jefes zapatistas que causó grandes problemas en esa primera etapa y que está bien documentada fue la que ocurrió entre Genovevo de la O, de Santa María, y Francisco Pacheco, de Huitzilac, pueblos que habían tenido enfrentamientos por tierras y límites desde tiempo atrás y que, estallada la revuelta, produjeron liderazgos que acentuaron su rivalidad. En diversas ocasiones hubo enfrentamientos entre soldados de uno y otro jefe, y Zapata tuvo que tomar cartas en el asunto, llamando al orden a ambos; finalmente encomendó a un fuereño, el oaxaqueño Ángel Barrios, que mediara entre ellos, pero su intervención no tuvo éxito.[31]

Así, hubo quejas del comportamiento de jefes y soldados rebeldes que imponían préstamos forzosos y cuotas de víveres a toda la población de las localidades, como denunciaron habitantes de Tehuitzingo, Puebla, que hacía *el Tuerto* Morales. Éste exigía maíz, zacate, tortillas, armas, ropa, monturas, caballos y dinero en las poblaciones a las que entraba y quemaba las casas de los que no accedían a ello, según el decir de los quejosos. Por ello pedían armas al gobierno para defenderse de los atacantes. En Huehuetlán el Grande y Tepeji, en ese mismo estado, los pobladores se quejaron de ese sistema de contribuciones forzosas que, decían, quitaba más a los pobres que a los ricos y de que los que no colaboraran eran acusados de gobiernistas. De Tlaltizapán salieron huyendo 76 mujeres porque, dijeron, los hombres de Felipe Neri imponían contribuciones forzosas y fusilaban a los que se negaban a cooperar.

En la zona fría donde operaba De la O, el juez de Tlaxipehualco se quejó con el propio Genovevo de que los habitantes del lugar daban maíz, tortillas, zacate y dinero a los alzados a pesar de su pobreza, pero que, con todo y esto, las tropas rebeldes les exigían demasiado y, además, abusaban de ellos y les infundían miedo. El presidente municipal de Ocuituco se quejó de que los zapatistas perjudicaban a los pueblos de la región exigiéndoles préstamos forzosos y forrajes y saqueando las casas varias veces. En esa misma zona, vecinos de Buenavista del Monte se quejaron de que la cuota que había impuesto De la O se pagaba desigualmente: los vecinos pobres no alcanzaban a cubrirla con regularidad, situación que aprovecharon los más pudientes, que sí estaban al corriente, para negarse a pagar hasta que no se regularizaran los atrasados. En Ocotepec, el ayudante municipal Atilano García, quien colaboraba activamente con De la O, le

[31] Véase "Manifiesto a todos los pueblos en general", diciembre de 1911, en Fabela, *op. cit.*, vol. VII, pp. 58-59; *Diario del Hogar*, 8 de noviembre de 1911. Entre los numerosos testimonios de la rivalidad entre Genovevo de la O y Pacheco, véanse los siguientes en AGN, FGO: Emerenciana Machuca a De la O, Malinalco, febrero de 1912, c. 1, exp. 2, f. 8; Luis Pichardo a De la O, San Juan Atzingo, 25 de febrero de 1912, c. 1, exp. 2, f. 11; Gregorio Pichardo a De la O, Santa María, 19 de junio de 1912, c. 1, exp. 2, f. 82; Gregorio Jiménez a De la O, s/l, s/f, c. 1, exp. 2, ff. 83-86.

informó en varias ocasiones que le costaba trabajo juntar la contribución diaria que tenía que recaudar entre la población; dicha autoridad se quejó en varias ocasiones del comportamiento de soldados zapatistas que alteraban la paz pública.

Crispín de la Serna, de Ocuilan, en la misma zona boscosa, se quejó de no poder juntar las tres cargas de maíz que le exigía De la O e informó a éste que tenía que consultarlo con los vecinos; poco después le mandó solamente una carga, diciéndole que no había pedido ayuda a los vecinos, por vergüenza. Esa persona, que era el ayudante municipal de Ocuilan, se quejó en varias ocasiones del comportamiento de los soldados zapatistas que, decía, deshonraban la causa con sus desmanes, por lo que la población se negaba a colaborar con los alzados; a él mismo le quitaron un caballo. Julio Hernández, en Chalma, se quejó de las continuas contribuciones que exigían los zapatistas y de la dificultad para conseguirlas, sobre todo entre las gentes más pobres; a eso añadía que varias partidas procedían con malos modos y amenazaban a la población, por lo que ésta había abandonado el lugar. En Huitzilac, veintiocho vecinos de ese pueblo protestaron por la detención de Fortino González que hicieron soldados de De la O, arguyendo que siempre había defendido los intereses del pueblo. Eugenio Núñez, profesor y exsecretario municipal de Ocuilan, se quejó de que en abril de ese año los rebeldes le quemaron su casa, semillas y animales por venganzas personales, alegando en su favor que no era traidor al pueblo y que si había obrado contra algunos, lo había hecho en cumplimiento de su cargo y por presiones del gobierno porfirista.

Así, pues, la ayuda de los pueblos, aun de aquellos claramente identificados con los rebeldes, en muchas ocasiones no era voluntaria, ni siquiera cuando los líderes eran de esos lugares. Esa especie de cuota forzosa, indiscriminada, a menudo no era bien vista o las familias, al margen de sus simpatías por la revuelta, no podían cumplir con ella. Naturalmente, la población rural de esos lugares era en su mayoría pobre, tenía grandes necesidades y los recursos eran todavía más escasos, puesto que la guerra había trastocado la economía de la región. Colaborar en la manutención de los guerrilleros, además de los riesgos que implicaba, no era una tarea sencilla. Sin embargo, lo que más molestaba a la población civil era la forma en que se pedía su colaboración, forma que a menudo era inicua, arbitraria, con malos modos.

También estaba el miedo que los sectores populares tenían a los rebeldes. Vecinos de Atlautla, en Chalco, cuyo pueblo había sido atacado por los zapatistas en diversas ocasiones, temían que éste fuera quemado por el ejército por encubrir a los zapatistas. Para evitarlo, declararon que si bien sufrían los ataques de los rebeldes, los callaban con resignación por miedo de que los mataran si los delataban ("estando tan aislados e indefensos de

seguro que[,] además de [los] abusos que sus chusmas cometerían sin piedad en nuestros intereses y familias, nos privarían de la vida", escribieron). Pidieron ayuda y seguridad al gobierno y ofrecieron colaborar con las autoridades y fuerzas rurales o militares en la persecución de los "trastornadores del orden público". El presidente de la Junta Auxiliar de San Sebastián Villanueva, en Acatzingo, Puebla, pidió ayuda militar al gobierno para defenderse de las depredaciones de los zapatistas, diciendo que, por temor, varias familias tenían que salir en las noches a dormir al campo, y que los habitantes de Chicontepec habían abandonado el pueblo por el mismo motivo; las autoridades locales, luego que escribieron esa petición, abandonaron también el pueblo.[32]

La revuelta había provocado la quiebra de muchos propietarios. Los afectados optaron por una oposición más o menos activa en contra de los alzados, se aliaron al régimen y promovieron la lucha antizapatista. De ello hay muchos ejemplos en las fuentes. En Jantetelco, el 17 de enero de 1912, Hesiquio Bravo fue herido y asaltado por las fuerzas del coronel zapatista Francisco Mendoza, pero logró escapar. No estaba de acuerdo con las demandas de los zapatistas porque consideraba que todavía no era tiempo de cumplirlas, y menos a mano armada, por lo que se ponía a disposición de Madero. Trinidad Barajas, de Cuautla, cayó preso en el combate de Los Hornos y dijo que los zapatistas lo habían tenido durante ocho días en ropa interior y descalzo. Rodolfo Medina, extrabajador de la Compañía de Luz y Fuerza y dueño de un rancho en Santa Cruz Texquiacac, Morelos, perdió todo su patrimonio con la incursión zapatista al lugar, a principios de febrero de 1912. Lo mismo le sucedió a José Espinosa, presidente municipal de Tenango del Aire, Chalco, Estado de México, quien sufrió la pérdida de todo su patrimonio en la incursión zapatista a Juchitepec y Tenango, ocurrida semanas antes. José de la Luz Jiménez, empleado acomodado de la hacienda de Acamilpa, en Morelos, y parti-

[32] *El País*, 5 de marzo de 1912; *El Imparcial*, 18 de mayo de 1912. Según el testimonio de los vecinos de Tehuilcingo, las cuotas eran de cinco a diez pesos, dos docenas de tortillas, treinta manojos de zacate y cuatro litros de maíz para los pobres y sólo de uno a tres pesos para los ricos. AGN, FGO: Pantaleón Guadarrama a Genovevo de la O, Tlaxipehualco, 15 de febrero de 1912, c. 1, exp. 2, f. 4; presidente municipal de Ocuituco a secretario de Gobernación, 1 de julio de 1912, c. 1, exp. 2, f. 4; Manuel Ramírez a De la O, Buenavista, 21 de mayo de 1912, c.1, exp. 2, f. 68; Atilano García a De la O, Ocotepec, 22 de mayo, 12 y 26 de julio de 1912, c. 1, exp. 2, f. 69, exp. 3, ff. 1-5; Crispín de la Serna a De la O, Ocuilan, 24 de julio, 1 y 22 de agosto, 3 y 19 de septiembre de 1912, c. 1, exp. 3, ff. 12-13, 29, 33, 47 y 51; Flavio Estanza a De la O, s/l, 26 de abril de 1912, c. 1, exp. 2, f. 16; vecinos de Huitzilac a De la O, 4 de mayo de 1912, c. 1, exp. 2, ff. 47-48; Zapata a De la O, cuartel general, 22 de mayo de 1912, c. 11, exp. 10, f. 7; Julio Hernández, auxiliar de Chalma, a De la O, 6 de septiembre de 1912, c. 1, exp. 3, f. 48; E. Núñez a De la O, c. 1, exp. 3, ff. 14-15 y c. 94, exp. 6; Lorenzo Ruiz a secretario de Gobernación, Acatzingo, Tepeaca, 26 de julio de 1912, c. 45, exp. 38.

dario de Madero, declaró haber perdido todo su patrimonio en los ataques de los rebeldes a dicha hacienda. Valentín Martínez, persona acomodada de Cuautla y arrendatario de tierras pertenecientes a la hacienda de Santa Inés en las que sembraba 2000 hectáreas de arroz y empleaba a 300 braceros, quedó en la ruina porque Zapata destruyó las siembras. Hipólito Herrera, propietario de las haciendas El Jagüey y Atenxoxola, en Chilapa, Guerrero, manifestó que había que guarecer a la región contra los bandoleros que habían malinterpretado el Plan de San Luis y que se sentían atraídos por "las ideas de comunismo que predica Zapata", cuyo ideal era "despojar a todos los propietarios".

No sólo los sectores rurales acomodados habían visto afectado su patrimonio, también los empresarios urbanos, empleados, comerciantes y artesanos perdieron todas sus pertenencias o parte de ellas y, de manera similar, se convirtieron en férreos opositores de la rebelión. En los combates de abril de 1912, Medardo Eraza, comerciante de Huitzilac, perdió todas sus mercancías y, al igual que sus vecinos, sufrió el incendio de su casa a manos de los hombres de Genovevo de la O, quienes, además, cortaron el suministro de agua potable del pueblo. La familia de Antonio Sedano, destacado dirigente leyvista y presidente del Club Liberal Morelos de Cuernavaca, fue molestada y amenazada por zapatistas en represalia por sus actividades proselitistas en favor de Leyva. Ángel Castro, comerciante de Cuernavaca, perdió su pequeño capital en el ataque que sufrió el tren que iba a esa ciudad, a fines de mayo de 1912. Consideraba injusta la revolución y ofreció sus servicios a Madero para trabajar como agente secreto con el fin de asestar un golpe a los rebeldes. Aristeo Limón, también comerciante cuernavaquense, relató a Madero los pormenores del asalto perpetrado por tropas zapatistas, las cuales saquearon su casa y se llevaron incluso la ropa que tenía. En junio, en el ataque al pueblo de Achichipilco, cerca de Cuautla, los rebeldes mataron al anciano Inocente Martínez, dueño de una tienda de licor, lo que causó indignación entre los vecinos.[33]

En una situación de guerra, este tipo de acontecimientos son inevitables; también el descontento y el rechazo de quienes los sufren, sin im-

[33] AGN, FFM: H. Bravo a Madero, 11 de febrero de 1912, c. 2, exp. 27, f. 934; T. Barajas a Madero, Cuautla, 22 de mayo de 1912, c. 52, exp. 1482-1, f. 39560; Ramón Salazar a Madero, Tlamacazapan, Guerrero, 17 de febrero, c. 37, exp. 1006-1, f. 28979; José Espinosa a Madero, México, 23 de marzo de 1912, c. 3, exp. 61, ff. 1898-1899; J.L. Jiménez a Madero, México, 30 de diciembre de 1911, c. 9, exp. 212, ff. 6115-6116; Valentín Martínez a Madero, Puebla, 24 de enero y 26 de julio de 1912, c. 6, exp. 135, ff. 3894-3895 y 3914; Hipólito Herrera a Madero, Chilapa, 6 de enero de 1912, c. 36, exp. 974, ff. 29307-29308; Medardo Eraza a Madero, Cuernavaca, 8 de junio de 1912, c. 38, exp. 1037-2, f. 29505; Sedano a Madero, México, 19 de abril de 1912, c. 48, exp. 1318-3, f. 36076; Ángel Castro a Madero, México, 12 de junio de 1912, c. 8, exp. 198-2, f. 5652; Aristeo Limón a Madero, México, 15 de junio de 1912, c. 6, exp. 133, f. 3849.

portar su condición social ni su ideología. Fausto Beltrán, originario de Teloloapan, Guerrero, coronel retirado del ejército, se había negado a participar en la campaña contra Salgado, coterráneo suyo, argumentando que no era correcto combatir contra individuos "del mismo terruño, que a lo mejor resultan emparentados"; sin embargo, cambió radicalmente de opinión cuando Salgado, en una incursión, asesinó a su anciano padre, tras lo cual Beltrán no dudó en ponerse a las órdenes de Madero. Adalberto Salgado y Miguel Huerta, de Tlachapa y Huetamo, Guerrero, denunciaron que Salgado había asaltado y perseguido a familias enteras de Coyuca, Tlapa, Cutzamala y Ajuchitlán, saqueando y quemando muchas casas. El ministro de España se quejó de la actitud de Salgado, quien había exigido préstamos forzosos a propietarios de Guerrero, perjudicando con ello a sus compatriotas. Isaías Alzate, de Zirándiro, en Mina, Guerrero, declaró que los salgadistas robaban y saqueaban comercios y casas particulares, obligando a las familias a huir hacia las barrancas y los montes, ante la falta de ayuda militar del gobierno. Angélica Gómez denunció que su esposo, jefe de rurales y excombatiente maderista en Huamuxtitlán, había fallecido en la defensa de esta plaza contra los zapatistas, quienes saquearon su casa y se llevaron todo lo que tenía, dejándola en la ruina. El ayudante municipal de Tlamacazapan, en Alarcón, Guerrero, se quejó de que los zapatistas robaban el carbón y los bueyes de esa población, que no podía defenderse por ser muy pequeña.

Mariano Pineda, propietario de tierras en Tlapa, había sufrido la invasión de los habitantes de varios pueblos aledaños durante la revuelta maderista, quienes le quemaron sus títulos y lo apresaron; luego le permitieron arrendar una parte de sus antiguas propiedades, pero, en marzo de 1912, una partida zapatista le quemó y le robó lo que tenía, dejándolo en la miseria. Ana V. viuda de Rivadeneyra, dueña de una hacienda cerealera ubicada a cinco kilómetros de Atlixco, perdió todas sus propiedades en un ataque zapatista. Inocencio Quintana, comerciante español de la hacienda de San José Teruel, en Puebla, pidió ayuda al gobierno pues había perdido 14 000 pesos en mercancías a causa de las incursiones rebeldes, y la embajada española no le había solucionado nada. Jesús Poblete, de Malinalco, Estado de México, sufrió el asalto de su casa cuando los zapatistas tomaron la población y quemaron el palacio municipal en abril de 1912. En Tenango del Valle, combatientes zapatistas violaron a dos jovencitas del lugar; en castigo y para que sirviera de escarmiento, su jefe, Modesto Rangel, fusiló a dos de ellos.[34] Algunos individuos que militaban

[34] AGN, FFM: F. Beltrán a Madero, México, 7 de mayo de 1912, c. 9, exp. 213-2, ff. 6180-6181; A. Gómez viuda de Castro a Madero, México, 17 de mayo de 1912, c. 8, exp. 196-2, ff. 5551-5552; Isaías Alzate a Madero, Zirándiro, Guerrero, 28 de abril de 1912, c. 49, exp. 1375-2, f. 37308; Mariano Pineda a Madero, Coycoyán, Oaxaca, 15 de julio de 1912, c. 45, exp.

a las órdenes de Zapata se licenciaron y luego se incorporaron a las fuerzas enemigas, como los Figueroa o los rurales, y ofrecieron a Madero sus servicios y conocimientos adquiridos con los rebeldes para intentar ultimar a Zapata.[35]

La oposición de los sectores de las clases altas, medias y bajas a la revuelta zapatista fue motivada por la afectación directa de sus intereses y la pérdida de familiares y propiedades en las incursiones guerrilleras, así como por la actitud de jefes y tropas insurgentes que agraviaron a la población con su conducta. El comportamiento de los alzados fue a veces depredatorio y despótico, no sólo contra las clases acomodadas, sino también contra los de abajo. Hubo actos de violencia innecesaria y actitudes que demostraban patologías o conductas delictivas y sanguinarias en algunos jefes y soldados surianos, por lo que las agresiones contra los pueblos y familias comunes no fueron patrimonio exclusivo del ejército o de los rurales. Cabe subrayar, sin embargo, que, en comparación, fueron notablemente menos numerosas aquéllas que éstas. Las condiciones atípicas de la guerra, la ausencia de controles efectivos, la posesión de armas, la debilidad del Estado, la pérdida de legitimidad de instituciones y autoridades facilitaban la manifestación exaltada de estados de ánimo y energías destructivas en una zona que se había caracterizado, desde tiempo atrás, por la violencia endémica.

Hubo también otro tipo de rechazo, por motivos de carácter ideológico, de individuos que desaprobaban la revuelta por ser contraria a sus valores y consideraban necesario oponerse a ella. Un ejemplo significativo fue el de Ezequiel Labastida, morelense de cincuenta años, excombatiente maderista y dueño de una pequeña tienda en Tepoztlán, que había tomado parte en combates contra las fuerzas de Porfirio Díaz como integrante de las filas del figueroísta Asúnsolo, y fue licenciado en agosto de 1911. Este individuo, según escribió a Madero, se negó a militar con los zapatistas a pesar de que Zapata le ofreció el grado de general en noviembre de 1911, porque sus

ideas no estaban ni están en consonancia con las de él [Zapata], que encie-

---

1232, ff. 34243-34244; Ana D. a Madero, Atlixco, 7 de julio de 1912, c. 20, exp. 496-3, f. 15552; I. Quintana a Madero, s/l, 14 de febrero de 1912, c. 33, exp., f. 24908; J. Poblete a Madero, Malinalco, 19 de mayo de 1912, c. 8, exp. 203-2, f. 5892; vecinos de Tlalámac, Atlautla, Chalco, a secretario de Gobernación, 25 de julio de 1912, c. 45, exp. 35. *El País*, 9 de mayo y 29 de junio de 1912; *El Imparcial*, 1 y 13 de junio de 1912.

[35] AGN, FFM: Rodolfo Mercado a Madero, Azcapotzalco, D.F., 15 de mayo de 1912, c. 21, exp. 544-2, f. 16581; Francisco García Díaz a Madero, México, 7 de junio de 1912, , c. 4, exp. 85, ff. 2573-2577; José Escudero a Madero, Oaxaca, 29 de junio, 9 de agosto de 1912, c. 8, exp. 203-1, ff. 5852-5855.

> rran degradante festinación anárquica y que la tan trillada cuestión agraria y devolución de terrenos afectos al despojo que algunos terratenientes consumaron [...] se ha de resolver con el soberano derecho demarcado en la ley y nunca obtenerlo a la fuerza [...] ni mucho menos declararse en rebelión contra el gobierno que dignamente rige con tino a la República.

Ante el acoso de los zapatistas, que asaltaron tres veces su tienda, tuvo que refugiarse en la ciudad de México. Otros excombatientes maderistas vieron en el levantamiento zapatista la oportunidad para regresar a filas, combatiéndolo; ése fue el caso del excoronel Gregorio González, de la ciudad de México, quien se quejó de que algunos maestros de primaria eran antigobiernistas e instaban a sus pupilos a no confiar en Madero. Ignacio Gómez, excapitán de rurales en el Estado de México, ofreció sus servicios para acabar con la anarquía y extirpar el zapatismo; Ricardo Rojas, antiguo compañero de Aquiles Serdán durante el antirreeleccionismo, consideraba a los rebeldes como "hordas vandálicas que han estado cometiendo atropellos y haciendo víctimas a pacíficos vecinos"; Lázaro Reyes, de Tacubaya, no obstante haber quedado sordo militando en las filas maderistas, quiso alistarse para combatir a los zapatistas no en los pueblos, ranchos y haciendas, como hacía el ejército, sino en el monte, donde realmente estaban los guerrilleros, según su decir. José Busquets, exmayor maderista de Puebla, manifestó su disposición para formar cuerpos de voluntarios que se dedicaran a perseguir a los bandidos, pero el gobernador le respondió que no podía solventarle los gastos necesarios. Al capitán Luis Fitzmaurice, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quien quería venir a combatir a los zapatistas, Sánchez Azcona le dijo que era una situación bajo control y que hacía más falta en su estado. Andrés Muñiz, capitán exmaderista en Puebla, se ofreció para combatir el zapatismo que, según su apreciación, había crecido desde la salida de Huerta y contagiado a muchos sectores, incluso a gente que había estado bajo sus órdenes y que ahora formaba parte de las filas rebeldes. Contrariamente, los hermanos Ángel y Nemesio Páez, que habían sido obligados a enrolarse en el ejército por ser sospechosos de colaborar con los zapatistas, escribieron al secretario de Gobernación para informarle que estaban a gusto en el ejército, que no querían que los dejaran libres y que hiciera caso omiso de la solicitud de sus esposas para que los pusieran en libertad.[36]

[36] AGN, FFM: Ezequiel Labastida a Madero, México, 25 de julio de 1912, c. 40, exp. 1096-2, ff. 30965-30973; Gregorio González a Madero, México, 2 de enero de 1912, c. 34, f. 25925; Ignacio Gómez a Madero, hacienda de Tejapan, 3 de enero, c. 35, exp. 937, f. 26904; Ricardo Rojas a Madero, Puebla, 12 de enero, c. 36, exp. 959-1, f. 27880; Lázaro Reyes a Madero, Tacubaya, 16 de enero, c. 47, exp. 1294, ff. 35669-35670; Crispín Arce a Madero, Cuautla, 27 de febrero y 7 de junio de 1912, c. 50, exp. 1415-1, ff. 38087-38092; J. Busquets a Madero, 7 de

Para muchos de los antiguos maderistas la revuelta suriana no tenía sentido, aunque simpatizaran con las reformas sociales. Reprobaban la violencia que atentaba contra el régimen legítimo de Madero y ponía en riesgo los objetivos de transformación, haciéndole el juego a sus enemigos. Sin ser partidarios del antiguo régimen, se convirtieron en críticos del alzamiento.

La revuelta no sólo polarizó las posturas ideológicas de la gente de los distintos estratos; también fue vista por individuos desempleados o arribistas como un medio para obtener trabajo y buscar favores, a cambio de servicios militares o de espionaje. En el archivo de Madero se encuentran testimonios de personas que pidieron ayuda para enrolarse en el ejército, en los cuerpos de rurales o combatir por su propia cuenta, con cargo al erario público, como fue el caso de Manuel Sotomayor, de la ciudad de México, o de Gabriel Sánchez, quien consideraba su "deber como mexicano" combatir el zapatismo porque representaba una calamidad para el país. Pedro Orozco, de Uruapan, quería impedir que el zapatismo llegara a su estado y decía contar con varios amigos conocedores del terreno para impedirlo. C. Aranda, de Toluca, aconsejó a Madero que debía actuar como lo había hecho Porfirio Díaz: poner precio a la cabeza de cada uno de los jefes zapatistas y colgar de los árboles a los presos con un letrero que dijera "por zapatista". Emilio Solís, de Puebla, dijo haberse enterado por *El País* de las depredaciones realizadas por las antipatriotas hordas zapatistas, por lo cual había decidido prestar su ayuda para acabar con ellas. Rodolfo Salazar, quien por su cuenta se había mezclado con la "gente baja de Morelos" y entrevistado con varios de los líderes zapatistas, llegó a la conclusión de que la revuelta tenía gran apoyo de la clase baja y de la mayor parte de la clase media, y de que el objetivo del zapatismo era llevar a la presidencia a Vázquez Gómez, por lo que la única manera de acabar con él era eliminar a Vázquez Gómez en San Antonio, Texas, y pedía ayuda para llevarlo a cabo.

José Sotelo, maderero de Santa María y vendedor de bienes raíces en la ciudad de México, dijo haber logrado que habitantes de los pueblos del Ajusco, de Ocotepec, Chamilpa, Ahuatepec, Cuajomulco, que trabajaban para él, se abstuvieran de ayudar al zapatismo y sólo había fracasado con Santa María. Sotelo estuvo haciendo gestiones para que Genovevo de la O se amnistiara, sin conseguirlo. Conocía a varios de los líderes zapatistas y presenció la forma en que se organizaban y operaban en los combates,

---

marzo de 1912, c. 34, exp. 929-2, f. 26569; Sánchez Azcona a L. Fitzmaurice, México, 6 de marzo de 1912, c. 53, exp. 5, f. 366; Andrés Muñiz a Madero, Acatlán, 17 de mayo de 1912, c. 37. exp. 986, f. 28537. A. y N. Páez a secretario de Gobernación, 10 de julio de 1912, AGN, FGPR, c. 54, exp. 87.

por lo que fue a informar de esos detalles al gobernador y al jefe de armas de Cuernavaca. Se disculpó diciendo: "[...] me es penoso tener que hacer el papel de denunciante, pero veo que es necesario para el bien del país y más cuando estoy convencido de que los zapatistas no son ni revolucionarios sino verdaderos bandidos". Comisionado por el gobierno estatal, Sotelo se dedicó a organizar el regreso de los pobladores a Santa María, cuyos hogares habían sido quemados, para que trabajaran en su negocio de corte de madera y para formar cuerpos de voluntarios. José Rovelo, de Morelos, expresó que había sido traicionado por los zapatistas y, en venganza, ofreció a Madero delatarlos. Aventureros en busca de recompensa ofrecieron también sus servicios para matar a Zapata, como Cleofas Sánchez, de Guanajuato, quien ideó infiltrarse en el ejército suriano y envenenarlo, o Francisco Parada, quien pretendía capturarlo por medio de la amiga de una querida de Zapata.[37]

Hubo también desempleados para quienes combatir a los rebeldes era un medio que les facilitaba el ingreso a la burocracia o, en el caso de convictos, la obtención de su libertad, como en los siguientes casos: Lázaro Cervantes, preso en Toluca por peculado; Leandro Aguirre, de la cárcel de Belén, detenido por un lío de faldas; A. Tijerina, preso común en Oaxaca, y Rómulo Ortiz, en Yautepec. Los funcionarios maderistas agradecieron estos ofrecimientos, pero dieron prioridad al cumplimiento de la ley y no los liberaron.[38]

[37] AGN, FFM: Manuel Sotomayor a Madero, México, 26 de enero de 1912, c. 41, exp. 1116-1, f. 31402; Gabriel Sánchez a Madero, México, 30 de enero, c. 37, exp. 995-1, f. 28715; C. Aranda a Madero, Toluca, 30 de enero, c. 50, exp. 1425-1, f. 38185; Agustín Villavicencio a Madero, Tenancingo, 7 de febrero de 1912, c. 47, exp. 1291-1, f. 35518; Emilio Solís a Madero, Puebla, 26 de febrero, c. 41, exp. 1108-1, f. 31263; Rodolfo Salazar a Madero, México, 9 de febrero, c. 37, exp. 1006-1, f. 28974-28978. Llama la atención que los asesores maderistas hayan prestado oídos a las propuestas de ese individuo y que Sánchez Azcona lo haya enviado con Federico González Garza, subsecretario de Gobernación, indicándole que Madero le había confiado una comisión privada, primero en Morelos y luego en San Antonio, por lo que debía proporcionarle fondos, y que haya girado instrucciones a la Secretaría de Comunicaciones para que vigilaran a varias personas de Morelos y comprobaran si recibían correspondencia de San Antonio; véanse, en el mismo archivo, Sánchez Azcona a Federico González Garza, México, 16 de febrero, cc. 53-54, exp. 483; Azcona a Manuel Urquidi, 16 de febrero, cc. 53-54, exp. 487; José Sotelo a Madero, Cuernavaca, 11 de marzo, 25 de abril, 30 de julio, 7, 19 de agosto de 1912, c. 41, exp. 1114-1, ff. 31367-31374; J. Rovelo a Madero, Morelos, 1 de mayo de 1912, c. 46, exp. 1279-2, f. 35346; C. Sánchez a Madero, Guanajuato, 4 y 29 de abril de 1912, c. 37, exp. 994-1, ff. 28674-28675; F. Parada a Madero, México, 16 de marzo de 1912, c. 35, exp. 934-2, f. 26701.

[38] AGN, FFM: Lázaro Cervantes a Madero, 31 de enero de 1912, c. 35, exp. 941-1, f. 27036; Leandro Aguirre a Madero, cárcel de Belén, 11 de febrero de 1912, c. 49, exp. 1353-1, f. 36850; A. Tijerina a Madero, San Jerónimo, Oaxaca, 13 de febrero, c. 44, exp. 1199-1, ff. 33509-33512; Sánchez Azcona a Leandro Aguirre, México, 1 de marzo de 1912, c. 53, exp. 5, f. 161; Sánchez Azcona a Rómulo Ortiz, México, 14 de marzo de 1912, c. 53-6, exp. 156.

Hubo manifestaciones de apoyo al gobierno que tenían por objetivo proteger a la población de los ataques del ejército y obtener la benevolencia del régimen. En Santa Catarina, Morelos, después de que el pueblo fuera quemado, 141 individuos, encabezados por el maestro de la escuela de ese lugar, se presentaron ante Juvencio Robles para declarar que no eran zapatistas sino partidarios del gobierno, por lo que éste les dio salvoconductos para que pudieran ir a traer víveres a sus hogares.[39] En ocasiones, y de manera más clara aún que en este último caso, la adhesión al gobierno que manifestaban algunos grupos tenía el interés de proteger a sus poblados y familias de las quemas y represalias del ejército federal. Así ocurrió con algunos habitantes de Santa María y de Tepoztlán que trataron de convencer a las autoridades militares de que no quemaran sus casas, o con los de Tizapotla, que pidieron la intercesión del obispo de Cuernavaca para que diera constancia de su adhesión al gobierno y disminuyera el rigor de la campaña.[40]

La guerra, pues, polarizó a los grupos y clases directamente involucrados en el problema y a sectores e individuos que estaban más alejados del mismo, y dividió a la opinión pública. En la zona de conflicto, los abusos cometidos por los rebeldes fueron una fuente de tensión permanente. Por ello, no resulta sorprendente que muchos pueblos no vieran con simpatía a los alzados y aun que prefirieran y solicitaran la intervención de las fuerzas del orden. Los grupos y sectores de la región que se opusieron a la rebelión fueron numerosos, aunque no tan abundantes como los que la apoyaron. La gama de posiciones opositoras a la revuelta iba desde los que habían sufrido la pérdida de familiares y bienes hasta los que la rechazaban por motivos ideológicos u oportunistas, y su actitud oscilaba entre la aceptación pasiva de la táctica contrainsurgente gubernamental y la colaboración con los cuerpos de defensa del régimen. El espectro de clases e intereses contrarios a la insurrección fue muy amplio.

Oposición a la revuelta: la formación de cuerpos de voluntarios

El fenómeno que muestra de manera más clara la organización de sectores civiles contrarios a la insurrección es la formación de cuerpos denominados "voluntarios", milicias locales paralelas al ejército y a los rurales que se constituyeron en las zonas rurales a donde no llegaba o en donde no era efectiva la actividad contrainsurgente de las fuerzas del orden. Sus ante-

[39] *El País*, 9, 23 y 25 de febrero, 6, 11 y 13 de marzo, 17 de abril de 1912; Benjamín Balderas a Madero, Tehuacán, 27 de febrero, 12 y 23 de marzo de 1912, AGN, FFM, c. 2, exp. 26, ff. 905, 906, 918.

[40] *El País*, 24 y 25 de febrero, 4 de marzo de 1912; *El Imparcial*, 3, 5 y 6 de marzo de 1912.

cedentes se remontaban a los últimos meses del gobierno porfirista, que recurrió a esa táctica para tratar de contener la insurrección maderista. Desde entonces, el aliciente para su constitución era la paga que se ofrecía, con cargo al erario público, federal o estatal, y con la colaboración económica de las elites locales. En la mayoría de los casos, tales cuerpos no eran de "voluntarios", pues generalmente había involucrada una fuerte dosis de presión e, incluso, de coacción sobre la población local para que aceptara enlistarse en ellos, así como para sufragar sus gastos. Hubo muchos intentos para constituir esos cuerpos, los cuales resultaron infructuosos en numerosas ocasiones. Sin embargo, en muchas localidades sí cuajaron. Su existencia y su actividad influyeron en los resultados y en los límites de la revuelta, y polarizaron aún más a los distintos estratos locales en torno de la rebelión.

Esas milicias se armaron y abastecieron principalmente con recursos propios, aunque de manera constante solicitaron ayuda, para equiparse y operar, a los gobiernos federal y estatal. Sin embargo, tanto Madero como las secretarías de Guerra y Gobernación, así como los gobernadores de las zonas afectadas por la revuelta, tuvieron muchas reservas y desconfianza para armar a grupos locales sobre los cuales no tenían ningún control —dudaban, además, de su eficacia—, y prefirieron intensificar el reclutamiento de los cuerpos oficiales, aunque esto significara abandonar a su suerte a muchas de las zonas rurales más aisladas e inhóspitas, que fueron presa fácil de la multitud de bandas rebeldes y bandidos que proliferaron.

Entre los organizadores de grupos de voluntarios hubo en primer lugar individuos notables que se opusieron a la revuelta, ya porque había perjudicado o podía perjudicar sus intereses, ya porque no le veían sentido o porque la mayor seguridad para ellos consistía en seguir apoyando al gobierno, a las instituciones y a las autoridades. Tal fue el caso de José de la Macorra, gerente general de las fábricas de papel San Rafael, cuyas propiedades sufrieron varios ataques y asaltos de los zapatistas, quienes quemaron, en abril de 1912, la hacienda de Santa Catalina y partes de la fábrica de papel, secuestraron a varios empleados e impusieron préstamos forzosos. De la Macorra había organizado un cuerpo de voluntarios para defender sus propiedades y se quejó de que el gobierno no le prestaba apoyo. Hubo también personajes notables de la región, como Baraquiel Alatriste, miembro de una familia influyente de la zona de Atlixco, quien se dedicó a organizar el reclutamiento de voluntarios para combatir a los zapatistas y decía haber encontrado el apoyo necesario en Acatlán, o como Domingo Velázquez, propietario de la hacienda de San José Atotonilco, en Puebla, quien armó a sus trabajadores para que la defendieran de los ataques —infructuosamente, como él mismo relató—, o en Axutla, municipio de Acatlán, donde parte de la población se defendió del ataque

perpetrado por *el Tuerto* Morales, quien consiguió vencerlos, tras lo cual saqueó e incendió varias casas.

Otro fenómeno que ocurrió entonces fue la toma de partido en favor del gobierno y la solicitud de armas y equipo para combatir la rebelión, por parte de la gente de los pueblos, rancherías y haciendas. En Huajuapan, la población celebró una misa en honor del Señor de los Milagros por haber conseguido derrotar a las tropas zapatistas el 17 de enero de 1912. Vecinos de Hueypoxtla, en Zumpango, Estado de México, solicitaron al gobierno armas e instructores para defenderse de los rebeldes, que en días anteriores habían asaltado la hacienda de Tezontlapa. Dependientes de la casa comercial de Juan Martínez, en Tláhuac, Distrito Federal, ayudaron a su patrón a rechazar con éxito el ataque de que fueron objeto a principios de marzo de ese año. En Zacapoaxtla, Puebla, los principales vecinos manifestaron su disposición de ayudar al gobierno a combatir a los zapatistas, al igual que en Huachinantla, Teutla y Santa Ana Jalalpa, en ese mismo estado, en donde expresaron ser partidarios del gobierno y enemigos de los zapatistas. Lo mismo hicieron habitantes de Tehuacán, Puebla.

Luis Navarro informó que los hacendados de Tecamachalco, Tlacotepec y Tepeaca habían formado cuerpos de voluntarios, pero que les faltaban armas y quien los dirigiera. Gonzalo Ramírez, administrador de una hacienda en Tepeaca, formó también uno y pidió armas a Madero. Eucaria Apreza, cacique de Chilapa, Guerrero, ofreció pagar de su peculio a los jefes que le propuso Madero para combatir a los rebeldes, a quienes consideraba "indígenas engañados con promesas de dádivas de terrenos". Entre quienes tuvieron mayor éxito en formar cuerpos de voluntarios estaba Óscar Braniff, cuyos considerables recursos le permitieron conformar un cuerpo de 600 hombres "muy bien organizados", los cuales habían sido reclutados en la capital del país. En mayo de 1912, este cuerpo fue enviado por Madero a combatir a los zapatistas.[41]

Ante el avance de la revuelta, las autoridades políticas estatales y locales, junto con las familias pudientes, incrementaron el reclutamiento de voluntarios. En la hacienda de Santa Clara, en Morelos, se organizó un

[41] AGN, FFM: J. de la Macorra a Madero, México, 27 de diciembre de 1911, 9 de enero de 1912, 18 de abril de 1912, c. 39, exp. 1067-1, ff. 30115-30116 y c. 45, exp. 1232-2, ff. 34268-34269; Baraquiel Alatriste a Madero, Puebla, 28 de enero de 1912, c. 6, exp. 140-1, ff. 4135-4138, en donde Alatriste mismo reconocía que el zapatismo tenía apoyo en el distrito de Tecali por haber un gran descontento contra el jefe político y el juez; Luis Navarro a Madero, Puebla, 23 de marzo de 1912, c. 44, exp. 1192, f. 33349; G. Ramírez a Madero, hacienda de Buenavista, 23 de marzo de 1912, c. 49, exp. 1360, f. 36995; Madero a Juvencio Robles, México, 22 de mayo de 1912, c. 47, exp. 1292, ff. 35578-35582; Eucaria Apreza a Madero, Chilapa, 9 de julio de 1912, c. 47, exp. 1312-2, ff. 35980-35982. *Diario del Hogar*, 6 de enero de 1912; *El País*, 22 de enero de 1912.

grupo a fines de enero de 1912. Puebla, al parecer, fue la región en donde mayor éxito tuvieron esos esfuerzos. El gobernador Rafael Cañete informó que desde noviembre de 1911 se habían constituido varios de esos cuerpos en el distrito de Atlixco. Agustín del Pozo mantenía uno de dieciocho hombres en su hacienda; sin embargo, no fue suficiente para repeler el ataque comandado por *el Tuerto* Morales a mediados de marzo de 1912. En Cholula, los vecinos promovieron la formación de un cuerpo de voluntarios tras obtener 300 rifles de parte del gobernador. En la ciudad de Puebla, banqueros, comerciantes y hacendados formaron un fondo para constituir un cuerpo que defendería esa ciudad de los ataques rebeldes; para ello, el gobierno les entregó cien armas y parque. En Atlixco, el jefe político promovió la formación de otro, al que se incorporaron jóvenes que acudieron luego de los ataques y las amenzas que había sufrido ese lugar. En Tecamachalco, el hacendado Modesto Tamáriz pidió ayuda al gobernador con el mismo propósito.

En Tehuacán, Benjamín Balderas se ofreció para reclutar voluntarios en los pueblos vecinos y, con ello en mente, pidió ayuda a Madero; José Hernández informó a Madero que había encontrado buena respuesta entre antiguos combatientes maderistas, los cuales querían que la dirección de esos cuerpos volviera a quedar en manos de sus antiguos jefes. En la planta eléctrica de Necaxa, la compañía formó un cuerpo de cien voluntarios a los que se les pagaba cinco pesos diarios, cantidad muy superior al salario rural de la zona. En Huixquilucan, las autoridades lograron armar un cuerpo de treinta individuos. En Acatlán, el cuerpo de voluntarios se formó por iniciativa de la colonia española, y aunque éste tuvo dificultades porque los comerciantes no aportaron todos los fondos a que se habían comprometido, logró rechazar ataques del *Tuerto* Morales y Eufemio Zapata a principios de marzo de 1912. A mediados de abril, Baraquiel Alatriste informó a Madero que disponía de cien voluntarios en Acatlán. Miguel Manzano, dueño de una fábrica de alcohol en Zapotlán de Méndez, en Tetela, formó un cuerpo de veintisiete voluntarios e indicó que, si bien ahí mismo existían otros cuerpos similares, hasta entonces no habían recibido ayuda del gobierno. Incluso Jenaro Amezcua, comerciante de Tehuacán, maderista que luego se haría zapatista y jugaría un papel importante en el cuerpo de asesores, el 3 de mayo escribió a Madero que estaba colaborando con el Ministerio de Guerra en la organización de voluntarios en Tehuacán.[42]

[42] Rafael Cañete a Madero, Puebla, 16 de noviembre de 1911, en Fabela, *op. cit.*, pp. 31-33. A. del Pozo a Madero, Puebla, 2 y 13 de febrero de 1912, AGN, FFM, c. 7, exp. 179, ff. 5113-5118; a los hombres que cuidaban su hacienda de posibles ataques del *Tuerto* Morales les había dado animales, semillas y tierras de riego, pero no tenía dinero, por lo que amenazaban con abandonarlo; Nicolás Meléndez, gobernador de Puebla, a Madero, Puebla, 6 de febrero de 1912,

Así, pues, la organización para la defensa de las poblaciones en contra de los rebeldes parecía tener amplia extensión en la entidad poblana y abarcar una abigarrada mezcla de clases y sectores, desde las elites hasta los trabajadores. La principal dificultad de los cuerpos así constituidos fue la falta de recursos y de cuadros que los capacitaran en el arte de las armas y en la adquisición de disciplina.

Sin embargo, las autoridades y las elites poblanas no siempre tuvieron éxito en tales propósitos, pues en Izúcar de Matamoros la población se negó a integrar un cuerpo de voluntarios, como pretendía el prefecto, y la mayoría se opuso a cooperar para comprar cincuenta armas. El propio gobernador de Puebla era reacio a autorizar la formación de estos cuerpos, pues consideraba que podían ser un instrumento de los poderosos locales para, sin la autorización del centro, armar bandas paramilitares con fines particulares, que funcionaran de manera autónoma y cometieran abusos contra las localidades. El gobierno federal quitó las armas que había dado a los vecinos de Acatlán para defenderse, ante el temor de una sublevación, aunque luego tuvo que regresárselas; mientras tanto, el jefe político de Zacatlán arrestó y multó a un grupo de voluntarios de esa localidad, alegando que no tenían permiso para portar armas.[43]

En el Distrito Federal y el Estado de México se organizaron cuerpos de defensa similares. En San Ángel, los dueños del restaurante San Ángel Inn informaron haber formado un grupo de cien hombres; en Mixcoac se formó otro de cuatrocientos; en Coyoacán, uno más de cincuenta; en Atizapán se formó otro. Galdino Vallejo, de la ciudad de México, que consideraba a Zapata un traidor, se incorporó a las filas de voluntarios de Braniff y obligó a su hijo a que hiciera lo mismo. En San Juan Azingo, distrito de Tenango, Estado de México, el cuerpo de voluntarios se preciaba de estar bien organizado y armado, y de haber ayudado a rechazar los ataques rebeldes. En Tlalnepantla, el notario Raymundo Cárdenas pidió ayuda a Madero para organizar a cien voluntarios a principios de marzo, con el objetivo de "dar tranquilidad a los vecinos y garantías a la propiedad".

---

c. 3, exp. 77, f. 2289; Delfino Villanueva a Madero, México, 2 de febrero, c. 47, exp. 1300-1, f. 35806; Benigno Vélez a Madero, Acatlán, 14 de mayo de 1912, c. 49, exp. 1366-2, f. 37072; B. Balderas a Madero, Tehuacán, 4 de marzo de 1912, c. 2, exp. 26, ff. 913-914; J. Hernández a Madero, Tehuacán, 12 de marzo de 1912, c. 4, exp. 105, ff. 2981-2982; Luis García Nájera, jefe político de Acatlán, a B. Alatriste, c. 6, exp. 140-1, ff. 4104-4106; B. Alatriste a Madero, Puebla, 14 de abril de 1912, c. 6. exp. 140-1, f. 4099; M. Manzano a Madero, Zapotlán de Méndez, Tetela, 12 de mayo de 1912, c. 8, exp. 191-3, ff. 5384-5385; J. Amezcua a Madero, Tehuacán, 3 de mayo de 1912, c. 10, exp. 256, f. 7693. *El País*, 1, 26, 27 y 28 de febrero, 4, 5, 16, 18 y 27 de marzo, 13 de abril de 1912; *El Imparcial*, 6, 9, 25 y 28 de marzo de 1912.

[43] *El País*, 19 de marzo y 20 de junio de 1912; *Diario del Hogar*, 8 de junio de 1912; *El Imparcial*, 17 de junio de 1912.

En el poblado de Tlalmanalco, en las faldas del Iztaccíhuatl, los habitantes dijeron contar con trescientos individuos dispuestos a alistarse, algunos de los cuales tenían armas; pidieron a Madero personal para que los capacitara sin salir de su territorio, dada su pobreza. En el distrito de Chalco, Francisco Mier ofreció a Madero la formación de un cuerpo de voluntarios para ayudar a las tropas federales y rurales a combatir el movimiento armado. En Amaltepec, distrito de Sultepec, los voluntarios lograron rechazar la incursión de salgadistas encabezados por Martín Hernández, el 12 de abril de 1912.[44]

La participación en esas milicias fue vista por algunos individuos como un medio de empleo y promoción; así sucedió en el caso de José Espinosa, quien, por considerarlos unos bandidos, delató a una persona que colaboraba con los zapatistas en el Distrito Federal y ofreció sus servicios a Madero para reclutar voluntarios durante 1912. A pesar de que se entrevistó con el ministro de Gobernación y éste le ofreció dos pesos por cada persona que reclutara, nunca pudo obtener ese apoyo. Venancio González, de Puebla, ofreció sus servicios si le daban el cargo de capitán de rurales, aunque reconoció que no tenía mucha disciplina, pero sí práctica para perseguir a "esa plaga".[45]

En Guerrero y Oaxaca también se formaron estos grupos de defensa. En Ometepec defendieron la población del ataque de los zapatistas, derrotándolos en abril de 1912. El presidente de Tlacotepec armó a diez ciudadanos para oponerse a las depredaciones de Salgado. En Huamuxtitlán, el presidente municipal promovió la formación de un cuerpo de doscientos voluntarios después de que los rebeldes saquearon "casas de españoles". En Coahuayutla se constituyó otro grupo de doscientos hombres. En Coyuca de Catalán, Octaviano Albarrán se ofreció para formar otro más. En Zacualpan, el prefecto político de Taxco pidió cien armas para defenderse de los rebeldes que habían asaltado un pueblo adicto al gobierno. En Acapulco, Ignacio Tapia organizó a cuarenta hombres para combatir a los alzados.[46] En Oaxaca, el gobernador Benito Juárez informó

[44] *El País*, 14, 15 y 17 de marzo de 1912; *El Imparcial*, 23 de junio de 1912. AGN, FFM: R. Cárdenas a Madero, México, 4 de marzo de 1912, c. 2, exp. 34, f. 1307; Eduardo Fuentes a Madero, México, 16 de marzo de 1912, c. 3, exp. 65, f. 1976; José Larios a Madero, Atizapán, 26 de marzo, c. 40, exp. 1099-2, f. 31022; G. Vallejo a Madero, D.F., 14 de junio de 1912, c. 45, exp. 1232-1, ff. 34251-34252; F. Mier a Madero, México, 10 de abril de 1912, c. 24, exp. 630-1, ff. 18005-18007; J. de la Macorra a Madero, México, abril de 1912, c. 45, exp. 1232-2, ff. 34268-34269.

[45] AGN, FFM: J. Espinosa a Madero, México, 17 de marzo, 3 y 22 de abril, 29 de mayo, 25 de julio, 6 de agosto de 1912, c. 3, exp. 61, ff. 1865, 1868, 1886-1887, 1892-1893, 1895-1896; V. González a Madero, Puebla, 28 de julio de 1912, c. 34, exp. 934, ff. 26189-26193.

[46] AGN, FFM: Carlos Miller a Madero, Puebla, 25 de marzo de 1913, c. 41, exp. 1103, f. 31107; Alberto Rodríguez a Madero, Tlacotepec, 28 de enero de 1912, c. 33, exp. 935, f. 25448;

que se había logrado conformar muchas fuerzas auxiliares en cada uno de los distritos, no obstante lo cual consideraba insuficientes los recursos con que contaban. Rubén Morales informó a Madero que en una junta en que participaron hacendados y oficiales federales se había decidido formar cuerpos de voluntarios con los peones de las haciendas, a los que sostendrían tanto los propietarios como el gobierno; para evitar que los reclutados se coaligaran con los alzados, procurarían mandarlos a distritos diferentes de sus lugares de origen y, de manera particular, a defender la línea del ferrocarril entre Etla y Cuicatlán.[47]

Los ferrocarrileros, uno de los gremios que más resintió y más expuesto estuvo a los rigores de la guerra, organizaron también un cuerpo de defensa. Eso tuvo consecuencias negativas para ellos, pues varios fueron muertos por los rebeldes y los demás sufrieron amenazas constantes; esto provocó la división dentro del gremio e incluso algunos, por temor, pidieron que cesara la organización de esos cuerpos.[48]

Todos estos ejemplos son una muestra de las acciones que se organizaron en una amplia zona para enfrentar el embate de los grupos rebeldes. En varias ocasiones, esa organización demostró su efectividad y logró rechazar y mantener a raya la actividad de esos grupos. No obstante, la mayor parte de las zonas en que pudieron constituirse esos cuerpos de defensa fueron lugares que registraban una gran actividad de los rebeldes, lugares relativamente alejados, aislados y que no contaban con la defensa permanente del ejército ni de los cuerpos rurales. En varias de esas zonas ocurrieron los más graves y numerosos hechos de violencia, por lo cual los resultados de la autodefensa fueron limitados. Estos grupos tuvieron, además, dificultades considerables para su organización, adiestramiento, abastecimiento de armas, provisiones y movilidad, que redujeron su eficiencia. Sus propósitos no eran aniquilar y desarticular a las bandas alzadas, sino exclusivamente mantener a salvo las haciendas y poblaciones en donde se habían organizado, por lo cual no perseguían a los zapatistas ni colaboraban en el auxilio a otras poblaciones que sufrieran sus ataques.

Además, la actitud del gobierno central y de los gobernadores de las entidades afectadas a menudo fue ambigua a la hora de impulsar la formación de estos grupos en mayor escala —a pesar de la necesidad que tenían de ellos para garantizar la seguridad de las zonas rurales alejadas,

---

Albarrán a Madero, Coyuca, 13 de abril de 1912, c. 6, exp. 148-2, f. 4329; Francisco Soto a Madero, Zacualpan, 5 de mayo de 1912, c. 41, exp. 1190-1, f. 31694; I. Tapia a Madero, Acapulco, 4 de junio de 1912, c. 42, exp. 1149-3, f. 32148. *El País*, 10 de abril de 1912.

[47] AGN, FFM: B. Juárez a Madero, Oaxaca, 11 de febrero de 1912, c. 9, exp. 121-1, ff. 6447-6449; R. Morales a Madero, Oaxaca, 6 de marzo de 1912, c. 22. exp. 557-2, ff. 16787-16790.

[48] Rosendo Adame a Madero, México, 3 de marzo de 1912, AGN, FFM, c. 48, exp. 1332-1, f. 36467; *El Imparcial*, 8 y 18 de junio de 1912.

situación que los rebasaba. La falta de recursos financieros proporcionados por el gobierno central y los gobiernos locales, aunada al celo del ejército y de los jefes rurales, a menudo fue un obstáculo para la formación de milicias locales sobre las que no tenían control. El gobernador de Oaxaca Benito Juárez expresó claramente los temores de la federación ante estas iniciativas. En una carta a Madero le dijo que los cuerpos de voluntarios que se habían formado le inspiraban poca confianza, pues consideraba que tenían escasa movilidad fuera de sus territorios locales, que existían fuertes vínculos de parentesco entre ellos, que tenían tendencia a no obedecer órdenes del centro y a convertirse en factor de disputa entre los propios pueblos porque carecían de disciplina; también porque, de manera directa, fortalecían el poder de los hacendados en contra del centro. Por ello prefería la utilización de fuerzas federales. Madero le contestó que estaba de acuerdo con sus apreciaciones y que prefería la formación de nuevos contingentes del ejército.

Cuando le informaron que irían voluntarios a reforzarlo, el jefe político de Tuxtepec expresó que prefería a las fuerzas federales. Además, en las propias localidades la incorporación a esos cuerpos no era tan voluntaria, ya que obedecía a presiones ejercidas por los jefes políticos, autoridades y caciques, y los habitantes se mostraban reticentes. En Tetela de Ocampo, el capitán federal Bruno Trejo informó que la gente del lugar no quería enrolarse, pues pensaba que esto sería por tiempo indefinido y que la mayoría sólo estaba dispuesta a prestar sus servicios durante quince días o un mes para luego regresar a sus trabajos.[49]

Así, pues, en buena medida, la formación y el financiamiento de estas fuerzas descansó en los recursos de las familias pudientes de las localidades y ciudades afectadas que pudieron organizarse autónomamente y en la iniciativa de individuos y familias de clases medias y de sectores de menos recursos que estuvieron dispuestos a defender a sus comunidades de los rebeldes, y sólo marginalmente en los recursos aportados por la federación o los gobiernos estatales.

La federación y aun los gobiernos estatales no vieron con buenos ojos a estos cuerpos de defensa local y no comprendieron que eran el resultado de una necesidad insatisfecha de contener los ataques de la revuelta, particularmente en aquellas regiones más agrestes y de menor relevancia económica o política de la provincia que no podían ser atendidas por las fuerzas del orden. La formación de esas milicias era el tácito reconocimiento de la debilidad del poder central para mantener el orden y dar

[49] AGN, FFM: B. Juárez a Madero, Oaxaca, 27 de febrero y 9 de marzo de 1912, c. 9, exp. 121-1, ff. 6452-6455 y 6463; Sebastián Ortiz a Madero, Soyultepec, 11 de marzo de 1912, c. 44, exp. 1197-2, f. 33457.

seguridad a todos los sectores. Era una situación paradójica: el centro no podía permitir la constitución de poderes autónomos, aunque estuvieran de su parte y complementaran sus recursos. El gobierno temía que pudieran salirse de control y fortalecieran a los poderes caciquiles regionales. De nuevo se presentaba la tragedia del maderismo: no estaba demostrando capacidad para someter a una insurrección campesina regional, pero tampoco podía confiar en las milicias creadas por sus aliados regionales. Por lo demás, armar a las clases bajas rurales era motivo de desconfianza y temor entre las propias elites, pues nada les impediría en cualquier momento unirse a los rebeldes, como pasó efectivamente en algunos casos. Las soluciones que se intentaron, como la de que los integrantes de esos cuerpos de defensa no combatieran en su propio lugar de origen, quitaron sentido y efectividad a lo que era su necesidad de fondo: la defensa de sus propias comunidades. Así, pues, todos los intentos puestos en práctica por el maderismo para acabar con la rebelión campesina zapatista fracasaron. Ésta enraizó fuertemente y se convirtió en el problema político que tornó más evidentes las contradicciones y la incapacidad del gobierno de Madero para resolver una demanda que estaba en el origen de la insurrección de 1910: el problema de la tierra. Pronto, la imposibilidad del maderismo para liquidar al movimiento suriano condujo a las elites políticas y militares a considerar que ya era tiempo de terminar con el experimento maderista. El golpe de Estado de Huerta fue la culminación de esa decisión. El maderismo llegó a su fin y el zapatismo entró en una nueva etapa de lucha que seguiría otros siete años más.

CONCLUSIONES

La rebelión que se inició y desarrolló en el campo morelense en los meses finales del porfiriato estuvo compuesta por sectores populares y grupos agrarios marginados. Las causas que la explican son profundas. En primer lugar, la problemática agraria de larga duración que existía en la zona, derivada de la lucha ancestral entre las clases subalternas y las elites económicas por la posesión y el usufructo de los recursos naturales —tierras, aguas y bosques. Esa disputa arrojó resultados desiguales, favoreciendo, desde la época colonial, a las haciendas e ingenios azucareros que se apropiaron, temprana y paulatinamente, de los principales recursos productivos de la zona, provocando con ello pleitos y tensiones que atraviesan la historia secular. En ocasiones, algunos pueblos lograron conservar el control sobre tierras y aguas de manera localizada. También hubo disputas horizontales, entre las propias comunidades, por la posesión y el control de tales recursos.

Esos conflictos, endémicos, atravesaron la larga historia agraria colonial y continuaron siendo fuente de descontento durante la Reforma, el Imperio, la República Restaurada y el porfiriato, y permanecieron como focos de tensión que se manifestaron abiertamente con el estallido de la revolución contra Díaz. El énfasis y la persistencia que el zapatismo puso en la búsqueda de una solución para el problema agrario se explican como una manifestación y una consecuencia directa de ese sentimiento reivindicatorio de los grupos marginales agrarios que los impulsaba a recuperar el control de las tierras, los bosques y las aguas que, en términos globales, habían perdido en el transcurso de los años a manos de la clase dominante en la región, los hacendados azucareros.

El resultado de esta larga batalla se diferenció regionalmente. En los fértiles valles centrales morelenses de Cuautla y Cuernavaca —la cuna del zapatismo—, los grupos agrarios marginales habían perdido sustancialmente la batalla durante el siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Las haciendas e ingenios azucareros concentraban, ya en el porfiriato, la mayor parte de las mejores tierras y controlaban el uso del agua para sus empresas comerciales. Los pueblos, villas y rancherías, aunque conservaron una parte de esos recursos, tuvieron que depender de las haciendas e ingenios para completar la satisfacción de sus necesidades, bien fuera empleándose asalariadamente de manera estacional, o bien arrendando tierras a las mismas haciendas para cultivar productos básicos, hortalizas y frutas,

tanto para el autoconsumo como para los mercados regionales cercanos, entre ellos la ciudad de México.

En los valles centrales morelenses, el proceso de desposesión y de subordinación económica de los pueblos, villas y rancherías ante las haciendas e ingenios azucareros estaba concluido al mediar el siglo XIX y, por lo tanto, la ofensiva liberal contra las tierras que pertenecían a las comunidades, tanto en la Reforma como en el porfiriato, tuvo efectos menores que en otras regiones del centro del país, en donde los pueblos campesinos habían conservado en su poder mayores recursos. De cualquier modo, una relativamente alta tensión permaneció durante los cincuenta años anteriores al estallido de la rebelión contra Díaz. Los pueblos de los valles centrales morelenses se movilizaron y efectuaron motines y rebeliones locales en contra de las haciendas y casas comerciales, sobre todo durante el periodo de mayor influencia regional de Juan Álvarez, hacia mediados del XIX. Esa época fue un antecedente directo de lo que luego sería la rebelión zapatista.

En la tierras altas, boscosas y frías de Morelos, así como en las regiones periféricas de Puebla y Guerrero, en donde pronto se implantó el zapatismo, existía una problemática agraria diferente. Los pueblos habían conservado un control relativamente mayor de sus recursos naturales, menos productivos en términos de la agricultura comercial. Estas comunidades sufrieron en mayor grado los efectos de la ofensiva liberal por el control de esos recursos durante la segunda mitad del XIX y los comienzos del XX. Este proceso produjo también resistencias y luchas agudas de los pueblos, que querían conservar sus recursos; y aunque lograron extenderse y contar con el apoyo de las zonas centrales, en términos generales estas luchas fueron derrotadas por las oligarquías terratenientes regionales y por la represión estatal. En esas regiones periféricas, el resentimiento de los grupos campesinos tradicionales, pequeños agricultores y rancheros alimentó de manera decisiva la rebelión agraria que se desató en la zona, primero bajo la bandera del Plan de San Luis maderista y después en los tempranos planteamientos agrarios del zapatismo, constituyendo esas zonas una de sus principales bases de apoyo.

Durante el porfiriato, en la zona central cañera morelense ocurrió una notable modernización productiva que alteró el equilibrio existente entre los distintos sectores y grupos sociales en relación con el uso de los recursos naturales. Así, el incremento sustancial de la productividad, debido a mejoras tecnológicas y al uso intensivo de la tierra y el agua, elevó el volumen de producción de azúcar y sus derivados, masificó su consumo y creó una demanda nacional que condujo, a su vez, a una mayor utilización de tierras y aguas. Este proceso, intensificado aún más por la revolución en el transporte que constituyó la introducción del ferrocarril,

abarató los costos de esos productos en los mercados de consumo. Esa modernización se tradujo en una mayor presión ejercida por los ingenios y las haciendas sobre los grupos subordinados que dependían de éstos para complementar su ingreso cotidiano.

Las haciendas y los ingenios fijaron su atención en un sector particular: las tierras que arrendaban a diversos grupos campesinos; así, éstos súbitamente fueron desplazados de su principal fuente de sustento, el cultivo de la tierra, dado que el ingreso que obtenían del trabajo asalariado en las haciendas era solamente complementario y estacional. El mayor requerimiento de mano de obra por parte de las haciendas y los ingenios, en virtud de la mayor demanda de productos, no alcanzó a compensar al sector arrendatario de los daños sufridos por ese desplazamiento. Los sectores desplazados de las tierras centrales morelenses fueron el grupo que dio soporte y apoyo al zapatismo original. No era un sector campesino tradicional, sino un grupo híbrido, en transición, que pagaba por trabajar la tierra y se empleaba estacionalmente, de manera asalariada, en las haciendas.

Tanto en los grupos agrarios tradicionales de la zona periférica de los valles centrales morelenses, que sufrieron la expropiación de sus tierras a manos de las oligarquías terratenientes durante la Reforma y el porfiriato, como en los sectores agrarios, más modernos, de arrendatarios y asalariados de las haciendas, que fueron privados de su derecho a trabajar las tierras que habían perdido y ahora arrendaban —pero que seguían considerando legítimamente suyas—, se produjo una actitud de oposición y resistencia ante lo que consideraron la ruptura del pacto moral que tenían con las haciendas y los ingenios. En uno y otro caso, pensaban que tal ruptura se debía al comportamiento de las oligarquías, las elites económicas regionales y la clase política. Los grupos subalternos, entonces, fueron privados súbitamente de lo que para ellos era un derecho natural: trabajar la tierra y emplear el agua y los demás recursos para vivir, independientemente de su condición de propietarios o arrendatarios y de la posesión o la carencia de títulos legales.

El descontento y los conflictos relacionados con el agro fueron la muestra visible de lo que significó la ruptura del pacto de economía moral existente entre la oligarquía terrateniente y los grupos agrarios subordinados: una interrupción del funcionamiento de las reglas tradicionales que permitían la convivencia entre estos sectores, reglas que se establecían a partir del reconocimiento de la diferencia de *status* y de obligaciones y derechos recíprocos. Dicha ruptura estuvo en la base de la reacción social que encontró su cauce en la rebelión zapatista.

Ese descontento, aunque con otros actores, no era nuevo. La zona en la que arraigó y se extendió el zapatismo había sido fuente endémica de

ese tipo de conflictos agrarios, los cuales, aunque en ocasiones habían producido motines y revueltas, no habían pasado del ámbito local y fueron sofocados, con menor o mayor dificultad, por los gobiernos locales; cuando el desafío había alcanzado mayores proporciones, el Estado se encargó de reprimirlo. Tanto en la guerra de Independencia como en los agitados días de las luchas entre liberales y conservadores se habían gestado movilizaciones, motines y revueltas de los grupos subordinados en contra de las oligarquías terrateniente y comercial regionales, el gobierno central y las autoridades locales. En ocasiones, la explosión de rencores, odios y agravios acumulados se había extendido a otras localidades y provocado hechos de sangre que pudieron ser reprimidos con la intervención de las fuerzas rurales, de las federales o de ambas. Sin embargo, después de vencer las resistencias locales y de someter a los caudillos regionales que competían con el gobierno federal, el régimen de Díaz fue capaz de establecer una relativa paz en la región de Morelos y zonas aledañas, interrumpida sólo por eventos de carácter muy local que estuvieron lejos de alcanzar la magnitud de las décadas anteriores.

No obstante, lo que confirió un carácter y una dimensión inéditos a la rebelión morelense de 1911 fue que surgió alentada por —y se combinó con— una situación nacional también inédita hacia el final del porfiriato. Se produjo una fractura en las clases dominantes, y un sector de ellas, encabezado por Francisco I. Madero, puso en marcha una exitosa campaña electoral de oposición al régimen porfiriano que, ante el cierre de los canales institucionales y la represión oficial, llamaba a la insurrección. La fractura de las elites en todo el país permitió que la rebelión local morelense tuviera una dimensión distinta y pudiera trascender, en la medida en que la pugna que las clases dominates mantenían entre sí no fue resuelta y provocó una situación insurreccional en varias regiones del país.

Los individuos morelenses que planearon, organizaron e iniciaron la revuelta contra el régimen de Díaz se incorporaron a una rebelión que ya estaba en marcha, que se extendía y que mostraba la debilidad del régimen porfiriano, lo que les daba una mayor certidumbre de tener éxito y contar con aliados. Se levantaron, con sus propios recursos, tres meses después de que estalló la rebelión en el norte, e intentaron, desde el principio, obtener el reconocimiento y la legitimidad de los líderes maderistas de la revuelta. La suriana fue una rebelión que, en sus orígenes, se reivindicaba a sí misma como maderista, que seguía los postulados del maderismo y aceptaba subordinarse a Madero. Sus organizadores tuvieron algunas características comunes. Varios de ellos eran parte de los grupos agrarios subalternos, pertenecientes a las clases medias y bajas de la zona central morelense, aunque ninguno tenía una situación personal de carencias materiales apremiante; varios gozaban de reconocimiento y prestigio previos

en sus comunidades, como representantes de los órganos tradicionales de gobierno, y algunos se habían destacado por encabezar las protestas de sus pueblos en contra de las haciendas y las autoridades locales ante acciones que los habían perjudicado.

Pero, además —y esto quizá fue el factor decisivo—, todos ellos eran individuos perseguidos por la justicia, proscritos por haber participado, en 1909, en el movimiento leyvista morelense de oposición legal al porfiriato, el cual aglutinó un amplio espectro de clases medias y rurales en la entidad en torno del clan de la familia Leyva y en contra de Pablo Escandón, candidato oficial a la gubernatura del estado. El leyvismo fue reprimido, la imposición consumada y el régimen terminó desmantelando la incipiente organización de los grupos opositores urbanos y rurales. Los líderes de la rebelión morelense de 1911 tuvieron, con el leyvismo, su primera experiencia política y vieron cómo se cerraban los canales de expresión legal del sistema político porfiriano; peor aún: sufrieron en carne propia las consecuencias de su actividad opositora, al convertirse en perseguidos políticos sin contactos ni protección, como los que amparaban a otros notables y líderes de las elites y las clases medias urbanas. El llamado maderista a la insurrección se presentó como una posibilidad de luchar —junto con otros aliados más fuertes— contra el régimen que los perseguía, como una oportunidad para resolver los problemas agrarios que aquejaban a sus pueblos y para obtener mejoras personales.

Fue la conjunción de estos factores —el descontento provocado por la modificación de los equilibrios productivos y sociales; la ruptura del pacto moral con las elites, el surgimiento de líderes locales nuevos, provenientes de las clases bajas rurales; su carácter de proscritos y perseguidos por el régimen, y una coyuntura nacional provocada por la rebelión maderista, que parecía ofrecer oportunidades de mejora— lo que posibilitó la organización y el éxito de la rebelión local. Ésta, si bien subordinada formalmente al maderismo, se llevó a cabo con recursos locales y sin la participación de notables de las elites regional y nacional. La rebelión prendió en el campo morelense y consiguió, en tres meses —aprovechando el colapso del régimen porfiriano, incapaz de apaciguar la rebelión en el norte—, controlar la mayor parte del territorio de la entidad, derrotando a las fuerzas rurales y a los destacamentos del ejército federal que defendían las principales ciudades.

La rebelión morelense tuvo, desde el principio, rasgos de violencia social de clase, de masas, que estaba dirigida contra algunos de los representantes más visibles, desprestigiados y débiles del sistema de dominación local: presidentes, jueces y policías municipales, comerciantes pueblerinos y notables locales sin protección ni legitimidad. La rebelión sirvió a los grupos marginados para dar libre cauce a sus odios y rencores y para

vengar agravios, ejerciendo a menudo justicia por su propia mano, ante el vacío de autoridad y la virtual desaparición del Estado como garante último —por el monopolio de la violencia— de la dominación. Esa violencia luego se dirigió, a medida que la rebelión popular cobraba fuerza, contra otros símbolos y representantes más sólidos de la dominación, los jefes políticos y militares, y pronto alcanzó, en una segunda etapa, a las haciendas, que habían sido hasta entonces la institución dominante en la región. La revuelta se convirtió más adelante en revolución, al madurar ideológicamente y darse un proyecto político propio que golpeó los pilares de la dominación de clase, que buscó obtener la hegemonía en el proceso revolucionario y que desafió al Estado nacional, enfrentándose de manera persistente al ejército federal y a la vasta coalición de las clases dominantes que se le opuso.

La rebelión que tomó forma en el zapatismo no se redujo únicamente al problema agrario, aunque, sin duda, éste fue el motivo principal y el eje articulador de su actividad y de sus propuestas de organización social. Junto con el problema del control de los recursos naturales apareció también una dimensión política, moral, cultural, por los agravios sufridos. La exclusión y la injusticia que padecieron los grupos subalternos morelenses, los abusos y las actitudes insensibles de parte de las elites locales y de los representantes de la dominación, y particularmente la ruptura del pacto entre los notables y los grupos de abajo, que había permitido la convivencia y el orden hasta entonces mediante un contrato tácito de obligaciones y derechos recíprocos, desiguales, pero aceptados, fueron el motor de esta insurrección. La rebelión tuvo el carácter de un restablecimiento de la justicia rota. Los líderes de la insurgencia se revistieron con la legitimidad de ese sentimiento justiciero y reivindicatorio.

Una vez que se rompió el pacto, que estalló la revuelta y se consolidó un nuevo liderazgo local, plebeyo, cobraron fuerza también las demandas políticas, los reclamos de autonomía de los pueblos, villas y rancherías en contra de la intervención del nuevo centro maderista y de los clanes regionales de Guerrero, que quisieron capitalizar la rebelión. Asimismo, ocuparon un lugar central las reivindicaciones de poder para el grupo de líderes rebeldes morelenses que reclamaron su derecho a participar en la organización de los poderes locales.

Posteriormente, cuando el nuevo grupo zapatista desconoció a Madero y estallaron las hostilidades, la rebelión morelense se extendió como un mecanismo de autodefensa ante la irrupción y la brutalidad del ejército federal, que ocupó y militarizó la zona y obligó a una buena parte de la población civil a defenderse e incorporarse a los rebeldes.

El liderazgo de la rebelión zapatista, en correspondencia con la tradición del Sur en el XIX, surgió de abajo, con un carácter plebeyo y, a di-

ferencia de los movimientos similares anteriores, no contó con la presencia de notables de las clases medias y altas, regionales o locales. Esto se explica en parte porque ninguno de los dirigentes del movimiento leyvista de 1909 participó luego en la insurrección maderista de 1910-1911, y porque el maderismo no dio importancia al estado de Morelos en sus planes de insurrección. Así, los nuevos líderes actuaron con sus propios medios y recursos y tuvieron, desde el principio, una relativamente alta autonomía e independencia. El movimiento se consolidó como una alianza o confederación de liderazgos locales, con líderes de tipo tradicional, carismático, alimentada por fuertes vínculos de parentesco, compadrazgo, amistad y clientelismo.

Ese liderazgo fue efectivo y encontró fuerte arraigo en el ámbito local. Sin embargo, más allá del indiscutible y supremo liderazgo de Zapata, no tuvo la misma eficacia y ocasionó endémicas rivalidades y disputas en cuanto la actividad de las bandas guerrilleras salía de su entorno inmediato e incursionaba en terrenos que estaban bajo el dominio de otros jefes zapatistas o de sus enemigos. En la práctica, el zapatismo fue una confederación de grupos locales con liderazgos autóctonos, dotados de gran autonomía, coordinados por Zapata y por la dirección política institucional del movimiento, el Cuartel General del Sur. El único caudillo que alcanzó reconocimiento extrarregional, que consiguió la subordinación del resto de los jefes y que, por lo mismo, se convirtió en la pieza maestra de todo el sistema de lealtades y apoyos del zapatismo y de las comunidades que lo seguían fue Emiliano Zapata.

Este liderazgo natural se reforzó y enriqueció con la incorporación de intelectuales foráneos provenientes de las clases medias urbanas. Sin embargo, ni en la etapa inicial ni durante el proceso de definición de una identidad propia del movimiento rebelde —en la ruptura con Madero y la formulación del Plan de Ayala— hubo alguna participación relevante de los intelectuales fuereños, los cuales ocuparon un papel más importante en la siguiente etapa: la de definición de la hegemonía nacional entre las distintas facciones, después de 1914.

La definición de la identidad zapatista se dio mediante un proceso relativamente acelerado, en el que tuvieron un papel decisivo los siguientes factores: *a)* los intentos del centro maderista para hacer a un lado a los líderes rebeldes morelenses y pactar una transición excluyente con los representantes del viejo *statu quo* porfiriano; *b)* la intervención del clan rival de los hermanos Figueroa, guerrerenses que se aliaron con la oligarquía terrateniente morelense y con los dirigentes maderistas para cerrar el paso a los alzados capitaneados por Zapata; *c)* la actitud vacilante y contradictoria de Madero en las negociaciones para el desarme y su incapacidad para controlar las provocaciones de las viejas elites porfirianas en contra

de la negociación; *d)* la intervención abrupta del ejército federal, que militarizó el territorio morelense y trató de aniquilar a los zapatistas que se encontraban negociando e interpretaron esa acción como una traición de Madero.

La ruptura con Madero fue una reacción en buena medida defensiva y tuvo un fuerte componente de agravio moral, de enojo por la traición de la que se sintieron víctimas. Ocurrida la ruptura y el desconocimiento de Madero, los líderes zapatistas tuvieron que dar legitimidad y justificación ideológica a su actitud, y formularon un plan político en el que plasmaron su visión en forma positiva y trataron de expresar, de manera general, como programa, la experiencia que habían tenido en los meses anteriores.

El Plan de Ayala fue el acto fundacional del zapatismo: con él quedó definida su identidad y en él, los líderes naturales del zapatismo, de manera endógena, generalizaron y racionalizaron la experiencia de la insurrección contra Díaz y las negociaciones con el maderismo durante el gobierno de León de la Barra. Las tempranas demandas agrarias sirvieron para articular y dar sentido a las diferencias que se manifestaron entre los líderes zapatistas y el maderismo. Empero, el rasgo definitorio del Plan de Ayala fue que representó el programa político de un movimiento campesino que, mediante él, aclaró su identidad, logró coherencia ideológica y lo utilizó como propuesta política no sólo para desconocer al régimen maderista sino para proponer una nueva forma de organización del poder central. Esto permitió la maduración y radicalización de los líderes zapatistas de manera básicamente endógena.

Durante el gobierno de Madero, el zapatismo consolidó su desafío, se radicalizó y se convirtió en un movimiento que incorporó a sus filas y logró el apoyo de una buena parte de los grupos agrarios medios y bajos de la zona conocida como el Sur, región que comprendía desde las tierras calientes de Guerrero hasta las sierras de Puebla y Oaxaca. Esta misma zona había sido el escenario en el que se desarrollaron amplias movilizaciones populares durante la Independencia y las décadas posteriores. En ellas, con el liderazgo de caudillos populares como Morelos, Guerrero y Álvarez, los grupos rurales más empobrecidos adquirieron experiencia para desafiar a las elites regionales y al Estado nacional que, finalmente, los derrotaron. Empero, persistió, a pesar de la consolidación del régimen de Díaz —que acabó con ese tipo de liderazgos regionales—, una tradición de protesta y movilización, de experiencias organizativas de resistencia popular a la dominación y a los intentos centralizadores del Estado nacional, que sirvió de antecedente para la rebelión que tuvo lugar a fines del porfiriato. En cuanto al carácter plebeyo de la movilización, de liderazgo autónomo, de desafío a las elites regionales y al Estado nacional, de dis-

curso antihacendado y antiespañol de los rebeldes, hubo una marcada continuidad con las experiencias desarrolladas por esos mismos grupos en el siglo XIX.

Cuando la rebelión zapatista se convirtió en un movimiento que extendió su influencia más allá del ámbito regional, empezó a ejercer una importante atracción sobre algunos grupos urbanos y de intelectuales radicalizados que formaban parte del ala izquierda del maderismo y que se convirtieron en críticos cada vez más acervos de Madero. Algunos se incorporaron más tarde al zapatismo y ayudaron a darle una formulación ideológica más precisa, radical, con influencias liberales, del socialismo cristiano y del anarcosindicalismo. Ese proceso alcanzó mayor amplitud después del golpe de Estado huertista. Durante el gobierno de Madero, el zapatismo echó raíces en las regiones colindantes con Morelos y se convirtió en una tenaz rebelión agraria, dueña de una dinámica y un ímpetu que ya no fue posible detener, a pesar de los numerosos esfuerzos y cuantiosos recursos que las elites regionales y el gobierno federal emplearon para aplastarla. La violencia de masas que se había manifestado durante la etapa de la insurrección contra Díaz reapareció ampliada y se dirigió contra los principales bastiones de la dominación: las clases dominantes, las instituciones y autoridades del régimen en todos los niveles, las haciendas y los ingenios, la mayoría de los caciques regionales y el ejército federal. Con altibajos, ciclos de ascenso y reflujo determinados por la efectividad de las tácticas empleadas en su contra y por las necesidades económicas, la marea de la rebelión campesina zapatista no pudo ser contenida por el régimen maderista.

El gobierno de Madero empleó contra la rebelión diversas tácticas; entre ellas, la apertura política hacia un sector de clases medias y altas regionales, con el objetivo de consolidar un proyecto de modernización y democratización que canalizara por los conductos legales algunas de las demandas que estaban en la base de la rebelión. Sin embargo, no ofreció ninguna reforma social de fondo, por temor a las elites y por su identificación de clase con esos intereses, con lo cual cortó la comunicación con sus bases populares de apoyo. Al mismo tiempo llevó a cabo una abierta política represiva que alcanzó su clímax con la táctica de contrainsurgencia: reconcentración de la población en aldeas vigiladas por el ejército, quema y arrasamiento de tierras de los pueblos abiertamente zapatistas y ataques indiscriminados contra la población civil para aislar a los rebeldes de sus bases de apoyo. Los resultados de estas tácticas combinadas fueron diversos: a medida que la represión se tornó más violenta y sanguinaria, la rebelión creció, se extendió y enraizó, haciendo más fuertes los vínculos entre los rebeldes y la población civil, gran parte de la cual engrosó las filas de los zapatistas. Cuando la táctica represiva bajó de intensidad y se

promovió una política de apertura, incluyente, de apoyo material a los pueblos, la fuerza de los zapatistas disminuyó.

Sin embargo, a Madero se le acabó el tiempo. Su incapacidad para contener la rebelión zapatista, para ofrecer una solución de fondo a las aspiraciones populares de reforma y para resolver la ola de huelgas nacionales encabezadas por los trabajadores textiles y las rebeliones regionales que tuvieron lugar durante sus quince meses de gobierno, además de su incompetencia para conseguir el apoyo pleno de las oligarquías, elites e instituciones del régimen porfiriano, pusieron en evidencia la debilidad del Estado nacional, representado por el régimen constitucional de Madero, y permitieron que afloraran diversos movimientos y caudillismos regionales que llenaron los espacios anteriormente ocupados por el poder central. La culminación de esta debilidad del Estado nacional encabezado por Madero fue la organización y el asalto al poder de los grupos conservadores que efectuaron el golpe de Estado huertista. La insurrección zapatista contribuyó a minar el prestigio, la legitimidad y la base social del régimen maderista, así como el apoyo político que éste recibía de diversos sectores de la sociedad.

La actitud de los diferentes estratos, clases y grupos sociales ante el zapatismo fue diferenciada y llena de matices, aunque pueden esbozarse algunos comportamientos de carácter general. La inmensa mayoría de las clases dominantes nacionales y regionales, con el Estado y sus aparatos represivos a su servicio, enfrentó encarnizadamente al zapatismo, con una actitud que demostraba su alarma y la decisión de acabar con él de tajo, al precio que fuera necesario. Las clases medias urbanas, influidas en buena medida por los medios formadores de opinión pública que estuvieron mayoritariamente en contra de la violencia zapatista, fueron en general críticas y contrarias a la insurrección, salvo un pequeño sector de intelectuales radicales agrupados en torno del *Diario del Hogar*, que fue el único medio impreso nacional que simpatizaba con la rebelión, junto con organizaciones y líderes de trabajadores y artesanos de las ciudades.

Las clases bajas, por su parte, también tuvieron una actitud heterogénea. Los obreros y artesanos del país permanecieron en su mayoría ajenos al conflicto, incluso los más activos, mejor organizados y más politizados, como los trabajadores textiles, quienes se mantuvieron en movilización constante por sus propias demandas durante el interinato y la mayor parte del gobierno de Madero. Sin embargo, salvo adhesiones particulares y localizadas, no hubo contacto de ese sector con los zapatistas ni apoyo del mismo para la causa rebelde. Entre las clases y grupos agrarios hubo también actitudes diversas. En la región zapatista, los rebeldes contaron con amplio apoyo de la población rural de bajos recursos, y éste fue el factor fundamental que dio arraigo y permanencia a la revuelta. El za-

patismo se convirtió en el canal por el cual fluyeron las aspiraciones de carácter agrario de los grupos excluidos que demandaban tierras y aguas, así como las reivindicaciones políticas de autonomía municipal y libertad de elegir autoridades comprometidas con los sectores populares; también fue el brazo protector de la población civil ante las prácticas depredatorias del ejército federal y de los cuerpos rurales que, en su afán de acabar con los rebeldes, se lanzaron contra el común de la gente.

Empero, incluso en esa misma zona que fue el corazón de la revuelta, y sobre todo en regiones aledañas a las cuales alcanzó la rebelión, la actitud de una parte de la población rural más pobre no fue de simpatía hacia los zapatistas. Así, en el rechazo a la revuelta en esas zonas estuvieron no sólo las elites y las clases medias regionales, sino también gente de los estratos bajos. El rechazo a la rebelión y a los abusos de los jefes zapatistas abarcó una amplia gama de comportamientos y actitudes: desde la sorda resistencia individual hasta la formación de cuerpos armados que la combatieron activamente, por su cuenta, al margen del ejército y de los rurales, particularmente en el ámbito local.

La rebelión zapatista tuvo una marcada diferenciación regional. Los valles centrales morelenses, donde se originó el movimiento, fueron el asiento básico en el que se implantó y se alimentó. Empero, las distintas tácticas del gobierno federal y del ejército y las características de las fuerzas zapatistas determinaron la existencia de momentos de ascensos y descenso de la rebelión. Los distritos poblanos de Izúcar, Atlixco, Chietla y Acatlán fueron la segunda zona de importancia en la que arraigó el zapatismo y se convirtieron en centros de protección y abastecimiento y de segunda línea del movimiento. La tercera región en la que se extendió incluía los distritos mexiquenses de Tenancigo, Tenango, y las faldas del Popo y el Izta y los distritos guerrerenses colindantes con Morelos. En conjunto, fueron esos lugares los que constituyeron el corazón del movimiento zapatista entre 1911 y principios de 1913. En ellos, el zapatismo morelense arraigó fuertemente, sus líderes encontraron legitimidad y apoyo, tanto de la población local como de líderes autóctonos locales. Más allá de esos lugares, el zapatismo fue un fenómeno extraño y débil que, cuando quiso incursionar fuera de su área de influencia, se encontró con la decidida oposición de la población local y la fuerte competencia y rivalidad de otros caudillos regionales.

FUENTES

ARCHIVOS

Archivo Francisco I. Madero (AFIM), Biblioteca Nacional de México.
Archivo Francisco Mendoza (AFM), colección particular de Valentín Gama.
Archivo General de la Nación (AGN), fondos: Genovevo de la O (FGO), Francisco I. Madero (FFM), Alfredo Robles Domínguez (FARD), Gobernación Periodo Revolucionario (FGPR).
Archivo Histórico de Condumex (AHC), Fondo Jenaro Amezcua (FJA).
Archivo Histórico de la Universidad (CESU-UNAM), Fondo Gildardo Magaña (FGM).
Colección Porfirio Díaz (CPD), Universidad Iberoamericana.

PERIÓDICOS

El Diario.
El Diario del Hogar.
El Imparcial.
El País.
México Nuevo.
Nueva Era.
Semanario Oficial del Estado de Morelos.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR, José Ángel
1987 *La revolución en el Estado de México*, México, Ediciones del Gobierno del Estado de México, 504 pp.
ANAYA PÉREZ, Marco Antonio
1997 *Rebelión y revolución en Chalco-Amecameca, Estado de México*, México, INEHRM/Universidad Autónoma de Chapingo, 2 vols.
ANDERSON, Rodney
1971 *Outcasts in Their Own Land. Mexican Industrial Workers, 1906-1911*, Dekalb, Illinois, Northern Illinois Press.

ARENAS GUZMÁN, Diego
1974 *Alfredo Robles Domínguez en las jornadas culminantes de la revolución,* México, INEHRM, 194 pp.
AUTORES VARIOS
1985 *Así fue la Revolución mexicana,* México, Senado de la República/SEP, 8 vols.
ÁVILA PALAFOX, Ricardo
1988 *¿Revolución en el Estado de México?*, MÉXICO, INAH/Gobierno del Estado de México, 300 pp.
BARRET, Ward
1977 *La hacienda azucarera de los marqueses del Valle, 1533-1910,* México, Siglo XXI, 286 pp.
BATAILLON, Claude
1971 *Villes et campagnes dans la région de Mexique*, París, Antropos, 442 pp.
BENJAMIN, Thomas y William MCMELLIE (eds.)
1984 *Other Mexicos: Essays on Regional Mexican History*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 320 pp.
BETHELL, Leslie (ed.)
1992 *Historia de América Latina*, vol. 9: *México, América Latina y el Caribe, c. 187-1930*, Barcelona, Crítica, 348 pp.
BORAH, W. y S. COOK
1958 *The Aboriginal Population of Central Mexico on the Eve of the Spanish Conquest*, Iberoamerican, 158 pp.
1980 *Ensayos sobre historia de la población*, México, Siglo XXI, 420 pp.
1989 *El pasado de México: aspectos sociodemográficos*, México, FCE, 488 pp.
BRADING, David A.
1988 *Los orígenes del nacionalismo mexicano*, México, ERA, 224 pp.
1988 "Liberal Patriotism and the Mexican Reform", *Journal of Latin American Studies*, núm. 20, pp. 27-48.
BRADING, David A. (comp.)
1985 *Caudillos y campesinos en la revolución mexicana*, México, FCE, 336 pp.
BRUNK, Samuel Frederick
1992 *Zapata: Revolution and Betrayal in Mexico*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 360 pp.
1993 "Zapata and the City Boys: In Search of a Piece of Revolution", *Hispanic American Historical Review*, vol. 73, núm. 1, febrero, pp. 33-65.
CARRASCO, Pedro
1971 "Social Organization of Ancient Mexico", en *Handbook of Middle*

American Indians, Austin, University of Texas Press, vol. 10, pp. 349-375.

1971 "The Peoples of Central Mexico and Their Historical Traditions", en *Handbook of Middle American Indians*, Austin, University of Texas Press, vol. 11, pp. 459-473.

CARRASCO, Pedro, *et al.*

1976 *Estratificación social en la Mesoamérica prehispánica*, México, INAH, 300 pp., ils.

1987 "La sociedad mexicana antes de la Conquista", en *Historia general de México*, México, El Colegio de México, vol. 1, pp. 165-288.

1996 *Estructura político-territorial del imperio tenochca. La triple alianza de Tenochtitlan, Tezcoco y Tlacopan*, México, El Colegio de México/FCE/Fideicomiso para las Américas.

COATSWORTH, John

1990 "Patrones de rebelión rural en América Latina: México en una perspectiva comparativa", en Friedrich Katz (comp.), *Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al XX*, México, ERA, 2 vols.

COSÍO VILLEGAS, Daniel

1980 *Historia moderna de México*, vols. 8 y 9: *El porfiriato, vida política interior*, México, Hermes.

CRESPO, Horacio

1981 "La diferenciación social del campesinado. Una perspectiva teórica", Facultad de Filosofía y Letras-UNAM (tesis de maestría en estudios latinoamericanos).

1984 "El azúcar en el mercado de la ciudad de México,1885-1910", en Horacio Crespo (coord.), *Morelos, cinco siglos de historia regional*, México, CEHAM-UAEM.

1986 *Tierra y hacienda en el porfiriato*, México, CEHAM, 3 vols.

1996 "La hacienda azucarera del estado de Morelos: modernización y conflicto", Facultad de Filosofía y Letras-UNAM (tesis de doctorado en estudios latinoamericanos).

CRESPO, Horacio (coord.)

1984 *Morelos, cinco siglos de historia regional*, México, CEHAM-Universidad Autónoma del Estado de México.

CRESPO, Horacio (dir.)

1988 *Historia del azúcar en México*, México, FCE, 3 vols.

CRESPO, Horacio y David FREY

1982 "La diferenciación social del campesinado como problema de la teoría y de la historia; hipótesis generales para el caso de Morelos", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 44, pp. 285-313.

CUMBERLAND, Charles
1984 *Madero y la Revolución Mexicana*, México, Siglo XXI (3a. ed.), 318 pp.
DENEVAN, William
1976 *The Native Population of the Americas in 1492*, Chicago, The University of Chicago Press, 354 pp., ils.
DICCIONARIO HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
1991-1994 *Diccionario histórico y biográfico de la Revolución mexicana*, México, INEHRM, 8 vols.
DÍEZ, Domingo
1938 *Bosquejo histórico-geográfico del estado de Morelos*, México, Tlahuica.
ENGLISH MARTIN, Cheryl
1982 "Haciendas and Villages in Late Colonial Morelos", *Hispanic American Historical Review*, vol. 62, núm. 3, pp. 402-427.
1985 *Rural Society in Colonial Morelos*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 226 pp.
ESPEJEL, Laura
1981 "El movimiento campesino en el oriente del Estado de México: el caso de Juchitepec", *Cuicuilco* (México).
1985 "El Cuartel General, órgano rector de la revolución zapatista", México, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM (tesis de licenciatura en historia).
ESPEJEL, Laura, Alicia OLIVERA, y Salvador RUEDA
1981 "El programa político zapatista", en *IV Jornadas de Historia de Occidente*, Jiquilpan, Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas, pp. 57-78.
ESPEJEL, Laura y Salvador RUEDA
1985 "La génesis del zapatismo", en varios autores, *Así fué la Revolución mexicana*, México, INEHRM, vol. 2, pp. 291-303.
"El Plan de Ayala y la autonomía zapatista", en varios autores, *Así fué la Revolución mexicana*, México, INEHRM, vol. 3, pp. 347-358.
"El zapatismo continúa en lucha", en varios autores, *Así fué la Revolución mexicana*, México, INEHRM, vol. 4, pp. 531-537.
"El zapatismo se extiende", en varios autores, *Así fué la Revolución mexicana*, México, INEHRM, vol. 4, pp. 581-587.
"El zapatismo estrecha el cerco", en varios autores, *Así fué la Revolución mexicana*, México, INEHRM, vol. 4, pp. 711-715.
"Los ejércitos populares y la construcción de un ejército nacional", en autores varios, *Así fué la Revolución mexicana*, México, INEHRM, vol. 5, pp. 857-865.

1994 "El desencanto pofiriano. Las elecciones de 1909 en Morelos", *Desdeldiez*, Boletín del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas (Jiquilpan), noviembre, pp. 5-27.

FABELA, Isidro (ed.)

1965 *Documentos históricos de la Revolución mexicana*, vol. VII: *Revolución y régimen maderista*, México, Jus.

1970 *Documentos históricos de la Revolución mexicana*, vol. XXI: *Emiliano Zapata, el Plan de Ayala y su política agraria*, México, Jus.

FALCÓN, Romana

1992 "Jefes políticos y rebeliones campesinas: uso y abuso del poder en el Estado de México", en Jaime Rodríguez (ed.), *Patterns of Contention in Mexican History*, University of California Press, pp. 243-273.

1995 "Descontento campesino e hispanofobia. La Tierra Caliente a mediados del siglo XIX", *Historia Mexicana* (México), vol. XLIV, núm. 3, pp. 461-498.

1999 *Las naciones de una república. La cuestión indígena en las leyes y el Congreso mexicanos, 1867-1876*, México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión-Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas/Manuel Porrúa, LVII Legislatura, serie V, vol. I, t. I.

FLORESCANO, Enrique

1976 *Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México*, México, ERA, 158 pp.

GARCÍA MARTÍNEZ, Bernardo

1969 *El marquesado del Valle. Tres siglos de régimen señorial en Nueva España*, México, El Colegio de México, 176 pp.

GERHARD, Peter

1986 *Geografía histórica de la Nueva España*, México, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 440 pp.

GIBSON, Charles

1980 *Los aztecas bajo el dominio español*, México, Siglo XXI (5a. ed.), 540 pp.

GILLY, Adolfo

1972 *La revolución interrumpida*, México, El Caballito, 402 pp.

1979 "La guerra de clases en la Revolución Mexicana (revolución permanente y autoorganización de las masas)", en Adolfo Gilly *et al.*, *Interpretaciones de la Revolución Mexicana*, México, Nueva Imagen/UNAM, pp. 21-54.

1981 "La historia como crítica o como discurso de poder", en Adolfo Gilly *et al.*, *Historia para qué*, México, Siglo XXI, pp. 195-226.

1995 *Discusión sobre la historia*, México, Taurus.

GÓMEZ, Marte R.
1986 *Las comisiones agrarias del Sur*, México, CEHAM, 86 pp.
GONZÁLEZ HERRERA, Carlos y Arnulfo AMBRIZ OSORIO
1984 "La reforma agraria y la desaparición del latifundio en el estado de Morelos, 1916-1927", en Horacio Crespo, *Morelos, cinco siglos de historia regional*, México, CEHAM-UAEM.
GONZÁLEZ RAMIREZ, Manuel
s.f. *Planes políticos y otros documentos*, s.p.i.
GUERRA, François Xavier
1988 *México, del Antiguo Régimen a la Revolución*, México, FCE, 2 vols.
GUARDINO, Peter F.
1996 *Peasants, Politics and the Formation of Mexico's National State. Guerrero, 1800-1857*, Stanford, Stanford University Press, 320 pp.
HALE, Charles
1986 *El liberalismo mexicano en la época de Mora*, México, Siglo XXI (8a. ed.), 348 pp.
1989 *The Transformation of Liberalism in Late Nineteenth-Century Mexico*, Princeton, Princeton University Press, 294 pp.
HAMNETT, Brian R.
1986 *Roots of Insurgency: Mexican Regions, 1750-1824*, Cambridge, Cambridge University Press, 376 pp.
1994 "Faccionalismo, constitución y poder personal en la política mexicana, 1821-1854: un ensayo interpretativo", en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), *La fundación del Estado mexicano*, México, Nueva Imagen, pp. 75-109.
1994 *Juárez,* Nueva York, Longman.
1996 "Liberalism Divided: Regional Politics and the National Proyect During the Mexican Restored Republic, 1867-1876", *Hispanic American Historical Review*, vol. 76, núm. 4, 1996, pp. 659-689.
HART, John M.
1987 *Revolutionary Mexico: The Coming and Process of the Mexican Revolution,* Berkeley, University of California Press, 478 pp.
HERNÁNDEZ CHÁVEZ, Alicia
1973 "Haciendas y pueblos en el estado de Morelos, 1535-1810", CEH-El Colegio de México (tesis de maestría en historia), 152 pp.
1991 *Anenecuilco, memoria y vida de un pueblo*, México, El Colegio de México, 262 pp.
HERREJÓN PEREDO, Carlos
1985 *Historia del Estado de México*, México, Universidad Autónoma del Estado de México, 358 pp., ils.
1990 "La guerra de los campesinos del sureste mexicano en los años

1840: conflicto en una sociedad transicional", en F. Katz (comp.), *Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX*, México, ERA, pp. 225-241.

HUERTA, María Teresa

1984 "Formación del grupo de hacendados morelenses", en Horacio Crespo (coord.), *Morelos, cinco siglos de historia regional*, México, CEHAM-UAEM, pp. 149-163.

1986 "Los hacendados de Morelos y el poder", *Historias* (México, INAH), núm. 14, julio-septiembre, pp. 83-93.

INEHRM

s.f. *Últimos días de Porfirio Díaz en el poder. Antología documental*, México, INEHRM.

JACOBS, Ian

1985 "Rancheros de Guerrero, los hermanos Figueroa y la Revolución", en David A. Brading (comp.), *Caudillos y campesinos en la Revolución Mexicana*, México, FCE, pp. 106-124.

1990 *La revolución mexicana en Guerrero. Una revuelta de los rancheros*, México, ERA, 258 pp.

JARQUÍN, María Teresa y Carlos HERREJÓN PEREDO

1995 *Breve historia del Estado de México*, México, FCE.

JOSEPH, Gilbert M. y Daniel NUGENT (eds.)

1994 *Everyday Forms of State Formation. Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico*, Durham, Duke University Press.

KATZ, Friedrich

1983 *La guerra secreta en México*, México, ERA (4a. ed.), 2 vols.

1984 *La servidumbre agraria en México en la época porfiriana*, México, ERA.

KATZ, Friedrich (comp.)

1990 *Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX*, México, ERA, 2 vols.

KNIGHT, Alan

1985 "El liberalismo mexicano desde la Reforma hasta la Revolución (una interpretación)", *Historia Mexicana*, vol. 35, núm. 1, pp. 59-91.

1986 *The Mexican Revolution*, Lincoln y Londres, University of Nebraska Press, 2 vols.

1991 "Land and Society in Revolutionary Mexico: The Destruction of the Great Haciendas", *Mexican Studies*, vol. 7, núm. 1, pp. 73-104.

1994 "Weapons and Arches in the Mexican Revolutionary Landscape", en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (eds.), *Everyday Forms of*

State Formation. Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico, Durham, Duke University Press, pp. 24-66.

LA FRANCE, David G.

1989 *The Mexican Revolution in Puebla. The Maderista Movement and the Failure of Liberal Reform*, Wilmington, Scholarly Resources Imprint. [Ed. en español: *Francisco I. Madero y la revolución mexicana en Puebla*, México, Universidad Autónoma de Puebla, 1987, 248 pp.]

LANDÁZURI BENÍTEZ, Gisela y Verónica VÁZQUEZ MANTECÓN

1988 *Azúcar y Estado (1750-1880)*, México, CFE-SEMIP, 356 pp.

LANGLE RAMÍREZ, Arturo

1984 *Huerta contra Zapata: una campaña desigual*, México, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM (2a. ed.), 116 pp.

MAGAÑA, Gildardo

1979 *Emiliano Zapata y el agrarismo en México*, México, INEHRM, 5 vols.

MALLON, Florencia E.

1989 "Los campesinos y la formación del Estado en el México del siglo XIX: Morelos, 1848-1858", *Secuencia* (México, Instituto Mora), núm. 15, septiembre-diciembre, pp. 47-96.

1994 "Reflections of the Ruins: Everyday Forms of State Formation in Nineteenth-Century Mexico", en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (eds.), *Everyday Forms of State Formation. Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico*, Durham, Duke University Press, pp. 19-106.

1995 *Peasant and Nation. The Making of Postcolonial Mexico and Peru*, Berkeley, University of California Press, 472 pp.

MENTZ, Brígida von

1984 "La región morelense en la primera mitad del siglo XIX", en Horacio Crespo (coord.), *Morelos, cinco siglos de historia regional*, México, CEHAM-UAEM, pp. 131-147.

1988 *Pueblos de indios, mulatos y mestizos, 1770-1870: los campesinos y las transformaciones protoindustriales en el poniente de Morelos*, México, CIESAS, 190 pp.

MEYER, Jean

1973 *Problemas campesinos y revueltas agrarias, 1821-1910*, México, SEP (Sepsetentas), 236 pp.

MOORE, Barrington

1989 *Injusticia, las bases sociales de la obediencia y la rebelión*, México, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, 482 pp.

MUÑOZ PÉREZ, Daniel
1959 *El general don Juan Álvarez: ensayo biográfico y selección de documentos,* México, Editorial Academia Mexicana, 520 pp., ils.
NICKEL, Herbert (ed.)
1989 *Paternalismo y economía moral en las haciendas mexicanas del Porfiriato,* México, Universidad Iberoamericana, 218 pp.
NIEMEYER, Víctor
1966 *El general Bernardo Reyes,* México, Gobierno del Estado de Nuevo León/Universidad Autónoma de Nuevo León, 262 pp.
NUGENT, Daniel (ed.)
1998 *Rural Revolt in Mexico. U.S. Intervention and the Domain of Subalterns Politics,* San Diego, Duke University Press.
PANI, Erika
1998 "¿Verdaderas figuras de Cooper o 'pobres inditos infelices'?", *Historia Mexicana,* núm. 187, pp. 571-604.
PINEDA, Francisco
1997 *La irrupción zapatista, 1911,* México, ERA, 248 pp.
PORTILLA, Santiago
1995 *Una sociedad en armas: insurrección antirreeleccionista en México, 1910-1911,* México, El Colegio de México, 654 pp.
POWELL, T.G.
1974 *El liberalismo y el campesinado en el centro de México, 1850-1876,* México, SEP (Sepsetentas), 192 pp.
1977 "Priests and Pesants in Central Mexico: Social Conflict During 'La Reforma'", *Hispanic American Historical Review,* vol. 57, núm. 2.
RAMÍREZ RANCAÑO, Mario
1984 *La revolución en los volcanes,* México, UNAM.
RAVELO LECUONA, Renato
1990 *La revolución zapatista en Guerrero,* t. I: *De la insurrección a la toma de Chilpancingo, 1910-1914,* México, Universidad Autónoma de Guerrero.
REINA, Leticia
1980 *Las rebeliones campesinas en México (1819-1906),* México, Siglo XXI, 438 pp.
RICARD, Robert
1986 *La conquista espiritual de México,* México, FCE, 492 pp.
RODRÍGUEZ GARCÍA, Martha
1978 "Genovevo de la O, un general zapatista", México, Universidad Iberoamericana (tesis de licenciatura en historia), 86 pp.
RODRÍGUEZ LAZCANO, Catalina
1984 "Los pueblos del área de Cuautla en el siglo XVIII", en Horacio

Crespo (coord.), *Morelos, cinco siglos de historia regional*, México, CEHAM-UAEM, pp. 95-105.

RODRÍGUEZ O., Jaime E. (ed.)

1989 *The Independence of Mexico and the Creation of the New Nation*, Los Ángeles, University of California Press, 374 pp.

1990 *The Revolutionary Process in Mexico. Essays on Political and Social Change, 1880-1940*, Los Ángeles, UCLA, 332 pp.

1992 *Patterns of Contention in Mexican History*, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources, 394 pp.

ROMERO IBARRA, María Eugenia

1998 *Manuel Medina Garduño: entre el Porfiriato y la Revolución en el Estado de México, 1852-1913*, México, INEHRM, 222 pp., ils.

ROSENBLAT, Ángel

1954 *La población indígena y el mestizaje en América Latina*, Buenos Aires, Nova, 2 vols.

1967 *La población de América en 1492: viejos y nuevos cálculos*, México, El Colegio de México, 100 pp.

RUEDA, Salvador

1981 "La zona armada de Genovevo de la O", *Cuicuilco* (México), vol. 2, núm. 3, pp. 38-43.

1983 "Oposición y subversión: testimonios zapatistas", *Historias* (México, DEH-INAH), núm. 3, pp. 3-32.

1984 "La dinámica interna del zapatismo. Consideraciones para el estudio de la cotidianidad campesina", en Horacio Crespo, *Morelos, cinco siglos de historia regional*, México, CEHAM-UAEM, pp. 225-249.

1986 "Las causas del movimiento zapatista en Morelos: desniveles históricos en el origen de un conflicto agrario", en *Memorias: la revolución en las regiones*, Universidad de Guadalajara, pp. 261-288.

"Administración política y utopía hacendada: la lucha por el poder en el estado de Morelos (1869-1913)", *Historias* (México, DEH-INAH), núm. 13, abril-junio, pp. 95-103.

1998 *El paraíso de la caña. Historia de una construcción imaginaria*, México, INAH, 234 pp.

RUEDA, Salvador y Jane Dale LLOYD

1985 "El discurso legal campesino y el orden político revolucionario", *Historias* (México, INAH), núm. 13, pp. 51-59.

SCOTT, James C.

1976 *The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistance in Southeast Asia*, Connecticut, Yale University Press.

1985 *Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance*, Connecticut, Yale University Press.
1990 *Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts*, Connecticut, Yale University Press.

SOTELO INCLÁN, Jesús
1970 *Raíz y razón de Zapata*, México, FCE, 592 pp.

TARACENA, Alfonso
1960 *La verdadera revolución mexicana. Primera etapa (1901-1913)*, México, Jus, 390 pp.

TAYLOR, William B.
1985 *Testimonios del proceso revolucionario de México*, México, INEHRM.
1987 *Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas*, México, FCE, 296 pp.
1990 "Bandolerismo e insurrección: agitación rural en el centro de Jalisco, 1790-1816", en Friedrich Katz (comp.), *Revuelta, rebelión y revolución...*, México, ERA, vol. 1, pp. 187-222.

TOBLER, Hans Werner
1994 *La revolución mexicana. Transformación social y cambio político, 1876-1940*, México, Alianza Editorial/Editorial Patria, 730 pp.

THOMSON, Guy P.C.
1990 "Bulkwarks of Patriotic Liberalism: The National Guard, Philarmonic Corps and Patriotic Juntas in Mexico, 1847-1888", *Journal of Latin American Studies*, vol. 22, núm. 1, pp. 31-68.
1991 "Popular Aspects of Liberalism in Mexico, 1848-1888", *Bulletin of Latin American Research*, vol. 10, núm. 2, pp. 265-292.

TUTINO, John
1987 "Peasants and Politics in Nineteenth-Century Mexico", *Latin American Research Review*, vol. 22, núm. 3, pp. 237-244.
1990 *De la insurrección a la revolución en México*, México, ERA, 372 pp.
"Cambio social agrario y revolución campesina en el México decimonónico: el caso de Chalco", en F. Katz (comp.), *Revuelta, rebelión y revolución...*, México, ERA, vol. 1, pp. 101-106.

VALVERDE, Sergio
1933 *Apuntes para la historia de la revolución y la política en el estado de Morelos, desde la muerte del gobernador Alarcón...*, México, 450 pp., ils.

VANDERWOOD, Paul
1982 *Los rurales mexicanos*, México, FCE, 246 pp.

VAN YOUNG, Eric
1983 "Mexican Rural History since Chevalier: The Historiography of

the Colonial Hacienda", *Latin American Research Review*, núm. 18, pp. 5-61.

1990 "To See Someone Not Seeing: Historical Studies of Peasants and Politics in Mexico", *Mexican Studies*, núm.6, pp. 135-169.
"Hacia la insurrección: orígenes agrarios de la rebelión de Hidalgo en la región de Guadalajara", en Friedrich Katz (comp.), *Revuelta, rebelión y revolución...*, México, ERA, vol. 1, pp. 164-186.

1992 *La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares en la Nueva España, 1700-1821*, México, Alianza Editorial, 516 pp.

VÁZQUEZ GÓMEZ, Francisco

1982 *Memorias políticas (1909-1913)*, México, Universidad Iberoamericana/El Caballito, 616 pp.

WARMAN, Arturo

1978 *Y venimos a contradecir. Los campesinos de Morelos y el Estado nacional*, México, CIESAS/Ediciones de la Casa Chata, 352 pp.

1990 "El proyecto político zapatista", en F. Katz (comp.), *Revuelta, rebelión y revolución...*, México, ERA, vol. 1.

WOLF, Eric R.

1966 *Peasants*, Englewood Cliffs, Prentice Hall. [Ed. en español: *Los campesinos*, Barcelona, Labor (3a. ed.), 1978, 150 pp.]

1982 *Las luchas campesinas del siglo XX*, México, Siglo XXI (7a. ed.), 438 pp.

WOMACK Jr., John

1970 *Zapata and the Mexican Revolution*, Nueva York, Alfred A. Knopf, 436 pp.

ÍNDICE ONOMÁSTICO*

Acevedo, Amador: *110*
Adame, Rosendo: *296*
Adorno, Apolinar: 242
Aguilar, Enrique: *271*
Aguilar, Higinio: 249
Aguilar, José Ángel: 311
Aguirre, Leandro: 289
Alarcón, Francisco: 109
Alarcón, Manuel: 70, 72, 89, 106, 276
Alatriste, Baraquiel: *237*, *270*, *274*, 291, *292*, 293, *294*
Albarrán, Octaviano: *295*, *296*
Alcázar, Oblester: 272, *272*
Aldama, hermanos: 276
Almanza, Rafael: *233*
Alonso, Vicente: 72
Alonso, viuda de Vicente: 70
Álvarez, Juan: 13, 22, 29, 31, 61-64, *65*, 66, *67*, 86, 300, 306, 319
Álvarez, Manuel: *245*
Alvear, familia: 260
Alzate, Isaías: 285, *285*
Amaya, Filomeno: *272*
Amaya, Gregorio: *272*
Ambriz Osorio, Arnulfo: *70*, 316
Amezcua, Jenaro: 28, 29, *156*, 229, *230*, 293, *294*, 311
Amor, Manuel: 70
Anaya Pérez, Marco Antonio: 311
Anderson, Rodney: *120*, 311
Andonegui, J.: *110*, *112*, 114, 115
Andrade, Daniel: 242
Andrew Almazán, Juan: 27, 118, 122, 123, 128, *146*, *149*, *156*, 183, 188, 249
Ángeles, Felipe: 245, 246, *246*, 248-252
Añorve, Enrique: 122
Apreza, Eucaria: *242*, 292, *292*
Aranda, C.: 288, *289*
Aráoz, Joaquín: 150
Aráoz, Manuel: 70, 77, *150*, 225, 265
Arce, Crispín: *287*
Arena, Mauricio de la: 72
Arena, viuda de Benito: 70
Arenas Guzmán, Diego: *144*, 312
Arerenchú, Vicente: *270*
Argumedo, Heinz: *117*
Asúnsolo, Manuel: 125, *130*, 131, *131*, *143*, *144*, *146*
Asúnsulo, Miguel: 122
Ávila Palafox, Ricardo: 312
Ayala, Francisco: 58
Ayaquica, Fortino: 106, 116, 118
Azueta, A.M.: *156*

B. de Mendoza, Juana: 269
Balderas, Benjamín: *230*, *237*, *238*, *277*, *290*, 293 *294*
Barajas, Trinidad: 283, *284*
Baranda, Pedro: 86
Barra, Francisco León de la: *véase* León de la Barra, Francisco
Barret, Ward: *46*, *49*, 312
Barrios, Ángel: *205*, 281
Barrios, Antonio: *168*, 276

* Los números de folio que figuran en cursiva corresponden a las referencias que aparecen en las notas al pie de la página.

Bataillon, Claude: *43*, *44*, 312
Beltrán, Fausto: 285, *285*
Benjamin, Thomas: 312
Berlanga, Tomás: *217*
Bethell, Leslie: 312
Blanquet, Aureliano: 118, *153*, *164*, 168, 170, 172, 215, *223*, 250, 251
Bonilla, Enrique: *164*
Borah, W.: *45*, 312
Brading, David A.: *122*, 312, 317
Braniff, Óscar: 225, 292
Bravo, Hesiquio: 283, *284*
Bretón, Elías: 275
Brunk, Samuel Frederick: 20, *20*, *29*, *110*, *114*, *117*, *118*, *126*, *148*, *150*, *235*, 312
Busquets, José: 287, *287*

Cabrera, Luis: 27, 124, 128, *155*, *175*, *245*, 250
Calderón, Aristeo: *128*
Calero, Manuel: *99*, 202
Cañete, Rafael: *151*, *154*, *188*, *189*, *192*, 216, *216*, 293, *293*
Cañete, Raúl: *185*
Capistrán, Jesús: *104*, 106, 109
Capistrán, Próculo: 103, 278
Carazo, Ramón: 269
Cárcoba, Lorenzo: 216
Cárdenas, Rafaela viuda de: *271*
Cárdenas, Raymundo: *239*, 294, *295*
Carmina, Rafael: 277
Carrasco, Antonio: *213*
Carrasco, Pedro: *48*, *56*, 312, 313
Carrasco, Salustio: *234*
Carreón, Juan: 131, 144, 145, *147* 149, 153, *153*, 154, *154*, 157, 160, *161*, 162, *165*, 166, *166*, 167, *168*, 169, *169*, *173*, 190, *190*, *235*
Casso López: *169*, 173, *185*, 190, *191*, 192, 203, 215, 217, 230, *234*, 270
Castrejón, Ernesto: *187*
Castro, Ángel: 284, *284*
Castro, Carlos: 265, *265*
Centeno, Benigno: 116, 244, 275, *275*
Cervantes, Lázaro: 289, *289*
Chavarría, Miguel: 276, *277*
Chávez, Matías: 122, *130*, 143, *143*
Chevalier: 321
Coatsworth, John: *138*, 313
Colín, Julián: 275
Contreras, Ireneo: 276
Cook, S.: *44*, *45*, 312
Cooper: 319
Córdoba, Javier: 257
Córdoba, Juan: *204*
Corona, R.: *147*
Corral, Ramón: 99, 117, 118
Cortés, Francisco: 215
Cortés, Hernán: 44, 45, 48
Cosío Robelo, Francisco: *99*, 143, *147*
Cosío Villegas, Daniel: *90*, 313
Crespo, Horacio: *43*, *44*, *46*, *49*, *53*, *57*, *59*, *67*, *68-71*, *76*, *77*, 79, 80, *80*, 81, *81*, *83*, 313, 316-320
Cumberland, Charles: *155*, 314

D., Ana: *286*
Denevan, William: *45*, 314
Díaz hijo, P.: *112*
Díaz Lombardo, Miguel: *169*
Díaz Marquí, Alfonso: *145*
Díaz Soto y Gama, Antonio: 28, 29, 124, *155*, *164*, *175*, 218, 228, *229*
Díaz, Ángel: 112
Díaz, Crescencio: *191*
Díaz, Félix: *174*

Díaz, Heliodoro: *187*
Díaz, J.: *147*
Díaz, Porfirio: 12, 16, 22, 27, 31, *67*, 72, 73, 77, 83, 84, 88, 89, *89*, 90, 91, *91-93*, 97-100, 105, 109, *110*, *112*, 113, *113*, *114*, 115, *115*, *116*, 117, *117*, 118, 119, *119*, 120, *120*, 125, *125*, *126*, 127, *127*, *128*, 132, 138, 141, 143, 159, 164, 177, 178, 179, 195, 203, 205, 263, 271, 286, 288, 299, 300, 302, 306, 307, 311, 317
Díez, Domingo: *44*, 314
Domínguez, Ezequiel: *188*

English Martin, Cheryl: *44*, *48*, *51*, *53-55*, *58*, *59*, 314
Eraza, Medardo: 284, *284*
Escandón, Antonio: 70
Escandón, Pablo: 72, 89, 91-93, *93*, 94, 95, 103, *110*, 112, *112*, 113, *113-115*, *119*, 250, *250*, 303
Escudero, José: *286*
Espejel, Laura: *89*, *91*, *93*, *133*, 314
Espinosa, José: 283, *284*, *295*
Espinosa, Rutilio: *275*
Esquivel Obregón, Toribio: *99*
Estanza, Flavio: *283*
Estrada, Ramón: *143*
Estrada, Roque: 143

Fabela, Isidro: *145*, *174*, *200*, *210*, *217*, *223*, *224*, *234*, *235*, *239*, *278*, *281*, *293*, 315
Falcón, Romana: 16, *60*, 61, *61*, 63, *63*, *66*, 315
Figueroa, Ambrosio: 121, *125*, *128*, *144*, 145, 149, *160*, *161*, 170, 173, *173*, *185*, *187*, *188*, 190, *190*, *191*, 192, *192-194*, 200, *203*, *212*, 214, *214*, 216, *217*, 221, 222, *222*, *223*, 224, *224*, *234*, 239, *239*, 244, 262, 268, 269
Figueroa, Francisco: 121, *128*, *130*, 145, *145*, *185*, *187*
Figueroa, hermanos: 98, 116, 121, 122, *122*, 123, *123*, 125, 127, 128, *128*, 129, 130, 132, 141, 142, 144, 145, *145*, 148, 149, *149*, *156*, 160, 161, *161*, *173*, *181*, 182, 190, 196, 198, 199, 214, *214*, 224, 241, *242*, 263, 268, 305, 317
Figueroa, Rómulo: 121, *156*
Fitzmaurice, Luis: 287, *288*
Flores Magón, hermanos: *164*
Flores Magón, Jesús: *155*, 218, *277*
Flores Magón, Ricardo: *155*
Flores, D.: *113*, *116*
Flores, Julián: *272*
Flores, Luis: *92*
Florescano, Enrique: 315
Franco, Francisco: 94, 103, 105
Frey, David: 313
Frías, Heriberto: *169*
Fuente, A. de la : *185*
Fuentes, Cristóbal: *261*
Fuentes, Eduardo: *230*, *295*

G. de Mújica, Filomena: *151*
Galicia, María: *151*
Galis, Pioquinto: 110
Gama, Valentín: 311
García Aragón, Guillermo: *156*, *191*, *203*, *274*
García Aragón, Joaquín: *193*
García Aranda, José: 52
García Díaz, Francisco: *286*
García Granados, Alberto: 172, 174, *194*, 196
García Martínez, Bernardo: *46*, *49*, 315

García Nájera, Luis: *294*
García Naranjo, Luis: *237*
García Pimentel, familia: *202*
García Pimentel, Luis: 70, 77, 112, 150, *150*, 210, 265
García, Atilano: 281, *283*
García, Francisco: *167*
García, Mariano: *269*
Garcíadiego, Javier: 17
Gayol, Roberto: 225
Gerhard, Peter: *43*, 44, 45, *45*, *47*, *51*, 315
Gibson, Charles: *48*, 315
Gilly, Adolfo: *26*, 132, 133, *133*, 208, *208*, 315
Ginzburg, Carlo: *133*
Gómez viuda de Castro, A.: *285*
Gómez, Angélica: 285
Gómez, Ignacio: 287, *287*
Gómez, Marte R.: 316
Gómez, Santiago: *227*
Gonzalbo, Pilar: 17
González Cosío: *125*
González Garza, Federico: *126*, *289*
González Garza, Roque: *169*
González Herrera, Carlos: *70*, 316
González Ramírez, Manuel: *205*, 316
González Salas: 196
González, Fortino: 282
González, Gregorio: 287, *287*
González, J.: *143*
González, Pedro: *195*
González, Venancio: 295, *295*
Gramsci, Antonio: *22*
Guadarrama, Pantaleón: *283*
Guardino, Peter F.: 20, *20*, *58*, 316
Guedea, Virginia: 17
Guerra, François Xavier: *57*, 90, *90*, *91*, *94*, *98*, *101*, 316
Guerrero, Vicente: 13, 22, 29, 31, 62, 66, 306
Guzmán, Francisco I.: *205*

Hale, Charles: 61, *61*, 316
Hamnett, Brian R.: 316
Hapson: 263
Hart, John M.: *61*, 316
Hay, Eduardo: 157, 167, 168, 171, 175, 181
Hernández Chávez, Alicia: *54*, *58*, *70*, 316
Hernández Orive, Alicia: *véase* Hernández Chávez, Alicia
Hernández, Antonio: 225
Hernández, Gabriel: *156*, *173*, *188*, *189*, *191*, *192*, *235*, 241, 268
Hernández, Joaquín: *193*
Hernández, José: 293, *294*
Hernández, Julio: 282, *283*
Hernández, Martín: *295*
Hernández, Rafael: 202
Herrejón Peredo, Carlos: 316, 317
Herrera, Hipólito: 284
Hidalgo y Costilla, Miguel: 41, 58, 321
Huerta, María Teresa: *59*, 317
Huerta, Miguel: 285
Huerta, Victoriano: *67*, 157, *157*, 158, 160, *160*, 161, *161*, *164*, 165, *165*, 166, *166*, *167*, 168, 169, *169*, 170-172, *172*, 173, 174, *174*, *175*, 176-179, 184, *185*, 186, 187, *187-189*, 190, 191, *191*, 192, *192*, *197*, *200*, 252

Ibarra, Albino: *204*
Iglesias Calderón, Fernando: *219*
Isunza: *112*, *117*, *127*
Izunza, J.: *113*, *115*

Jacobs, Ian: *122*, *123*, *128*, *145*, 317
Jarquín, María Teresa: 317

Jáuregui, Jesús: 188
Jiménez, Alberto: *277*
Jiménez, Gregorio: *281*
Jiménez, Herculano: 272
Jiménez, José de la Luz: 283, *284*
Joseph, Gilbert M.: 317, 318
Juárez Maza, Benito: *99*, *188*, *191*, *192*, 205, *213*, *238*, 295, *296*, 297, *297*, 316

Katz, Friedrich: *26*, *58*, *61*, 135, *138*, 313, 317, 321, 322
Knight, Alan: *94*, 124, *124*, 133, *133*, *137*, *158*, *159*, 317
Krauze, Enrique: *100*

La France, David G.: 318, *102*
Labastida, Bernabé: 101, *120*
Labastida, Ezequiel: 101, 286, *287*
Lagunas, Antonio: 215
Landa y Escandón, Guillermo de: 89
Landázuri Benítez, Gisela: *50*, 318
Langle Ramírez, Arturo: *161*, 318
Larios, José: *295*
Lavín, Manuel: *149*
Ledezma, Carlos: 275
León de la Barra, Francisco: 24, 28, 139, 141, *143*, 151, 153, *153*, 154, 156, 157, *157*, *160*, 161, *161*, *162*, 165, *165*, 166, *166*, 167, *167*, 168, *168*, 169, *169*, 170, 171, *171*, 172, *172*, 173, *173*, 174, *174*, 176, *176*, 177-179, 182, *185*, 186, 187, *187*, 188, *188-195*, 197, *200*, 202, 203, 306
Lerdo de Tejada: *229*
Leyva, Alfredo: *93*
Leyva, familia: *160*, 303
Leyva, Francisco: 67, 86, 88, 91, 93, *93*, 94, 118, 119, *119*, *120*, *125*, *126*, 129, 146, *146*, 169, *169*, 224, *228*, *251*, 252, 284
Leyva, Patricio: 40, 91, 92, 92, 93, *93*, 101, 119, *119*, 154, 228, 242, 245, 246, *247*, 250
Limantour, José Yves: 117, 118, 120
Limón, Aristeo: 284, *284*
Linares, Manuel: *156*
Lloyd, Jane Dale: 320
López de Santa Anna, Antonio: 64
López, Higinio: 272
Lugo, José Inocente: 122, 123, *130*, *131*, 143, 214, *214*, 241, *242*

M., María: *271*
Machuca, Emerenciana: *281*
Macorra, José de la: *147*, 291, *292*, *295*
Madero, Ernesto: *148*, *156*, 202, 265
Madero, Francisco I.: 11, 13, 23, 34, 85, 99, 99, 100, *100*, 101, 102, 108, *108*, 109, *115*, 117, *123*, 124, *125*, 127, *128*, 129-131, 134, 137-139, 142, 143, *144*, 145, *145*, *147*, 148, *148*, 149-151, *151*, 152, *152*, 153, *153*, 154, *154*, 155, *155*, 156, *156*, 157, *157*, 158, 159, *159*, *160*, 161, *161*, *162*, 163, 164, *164*, 165, *165*, 166, *166*, 167, *167*, *168*, 169, *169*, 170, *170*, *171*, 172, *172*, 173, *173*, 174, *174*, 175, 176, 178-180, 182-184, 189, 190, 196-200, *200*, 201, *201*, 203, *203*, 204, *204*, 205, *205*, 206, 209, 210, *210*, *211*, 212, *212-214*, *217*, 218-221, *222*, 223, *223*, *224*, 225-227, *227*, 229, *229*, 230, *230*, *233-235*, *237-243*, 245, 246,

247, 250, *250*, 252, 253, 256, 260, *260*, 261, *261*, 262, *262*, *263*, 264, *265*, 269, *269*, *270-272*, 273, *273*, 274, *274*, *277*, 279, 283, 284, *284*, 285, *285*, 286, *286*, 287, *287*, 288, *288*, 289, *289*, *290*, 292, *292*, 293, *293*, *294*, 295, 296, *296*, 297, *297*, 302, 304-308, 311, 318
Madero, Gustavo A.: 202
Madero, Raúl: 157, 167, 175, *175*, 181, 200
Magaña, Gildardo: 27, 79, 81, 118, *126*, 128, *128*, *129*, *143*, 148, *148-150*, *154*, *167*, *173*, *174*, *196*, *200*, *203*, 209, *210*, 245, 311, 318
Magaña, hermanos: 205
Magaña, Octavio: 118
Magaña, Rodolfo: 27, 128
Maldonado, Ramón: *193*
Maldonado, Rubén: *188*
Mallon, Florencia E.: 20, *20*, *22*, *26*, *57*, *62-64*, *66*, 318
Manzano, Miguel: 293, *294*
Marín, Lamberto: *149*
Marmolejo, Emigdio: 103, *104*, 106, 109
Marroquín, Manuel: 225
Martínez Arauni, hermanos: 276
Martínez, Abraham: 128, *131*, *144*, *146*, *152-154*, *175*, 183, 245, *245*
Martínez, Inocente: 284
Martínez, Juan: 292
Martínez, Margarito: 109
Martínez, Mario: 273
Martínez, Mucio: 244, *250*, 259
Martínez, P.A.: *156*
Martínez, Paulino: 28, 92, 101, 183, 205, *205*
Martínez, Prisciliano: 127
Martínez, Rafael: 250
Martínez, Valentín: 284, *284*
Mata, Filomeno: *155*
Matamoros, Mariano: 58
Maximiliano de Habsburgo: 65
Maza, G.: 229, *230*
McMellie, William: 312
Medina Garduño, Manuel: *193*, 246, 320
Medina, Rodolfo: 283
Meléndez, A.: *211*
Meléndez, Nicolás: 212, *212*, *274*, *293*
Méndez, Luis: 28, 245
Mendoza López, Manuel: 28
Mendoza, Camerino: 116, 127, *151*, *156*
Mendoza, Francisco: *104*, 105, 115, 116, 149, 237, 243, 278, 283, 311
Mendoza, Ignacio: *271*
Mentz, Brígida von: *57*, 318
Mercado, Rodolfo: *286*
Merino, Martín: *261*
Merino, Miguel: *271*
Merino, Rafael: 94, 103, 105, 117
Meyer, Jean: 318
Mier, Francisco: 295, *295*
Miller, Carlos: *295*
Miranda, Joaquín: *143*, 242, 245, 275
Montaño, Otilio: 28, 94, 103, 104, 105, *143*, *175*, 207, *207*, 278
Montiel, Alberto: *239*
Moore, Barrington: 318
Mora, José María Luis: *61*
Mora, Miguel: 270
Morales, Eugenio: 242, 247
Morales, Federico: 106, *125*, 131, 149, 169, *174*, *185*, *188*, 200, *214*, 267, 268
Morales, Jesús *el Tuerto*: 106, 116, 117, 122, *170*, 183, 192, *203*,

212-214, 237-239, 243, 249, 252, 278, 281, 292, 293, *293*
Morales, Julio: *267*
Morales, L.: *276*
Morales, Rubén: 296, *296*
Morelos y Pavón, José María: 22, 29, 31, 41, 58, 306
Moreno, Lucio: *120*
Moreyra, Federico: 256
Mújica, Francisco J.: *156*
Munguía, C.: *195*
Muñiz, Andrés: 287, *288*
Muñoz Pérez, Daniel: 319
Muñoz, Pedro: 262

Naranjo, Francisco: 224, 228, *233*, *235*, *240*
Navarro, Cándido: *156*
Navarro, Luis: 292, *292*
Neri, Felipe: 106, 118, 240, 251, 281
Nickel, Herbert: 77, *77*, *137*, 319
Niemeyer, Víctor: *98*, 319
Noriega, Fernando: 72
Nugent, Daniel: 317, 318, 319
Núñez, Eugenio: 282, *283*

O, Genovevo de la: 31, 94, 101, 103, 104, 106, *106*, 108, 122, 129, *129*, 210, *210*, 211, 224, *228*, 231, 232, 235, 239, 240, 242-244, 248, *248*, 249, 251, 252, 263, 265, 275, 281, *281*, 282, *283*, 284, 288, 311, 319, 320
Ocampo, Remigio: *201*
Oceguera, Manuel: 276
Olivera, Alicia: *133*, 314
Olvera, A.: *147*
Orozco, Pascual: *119*, *161*, *174*, 206, 209, 227, 234, 235
Orozco, Pedro: 288
Orozco, Santiago: 269
Ortiz, Rómulo: 289, *289*
Ortiz, Sebastián: *297*
Pacheco, Francisco: 31, 106, 122, 191, 243, 244, 248, 281, *281*
Páez, Ángel: 287, *288*
Páez, Nemesio: *167*, 287, *288*
Pagaza, Juan: 70, 72, *115*, *151*, 265
Palacio, José de: 52
Palacios, Leopoldo: 225
Palafox, Manuel: 28, 29, *175*
Pandal, Antonio: 216
Pani, Erika: 319
Parada, Francisco: 289, *289*
Paredes, David: 272
Paredes, J.: *147*
Pasquel, Romualdo: 70, 77
Pastrana: 263
Perdomo, Catarino: 103
Pérez Taylor, Rafael: 28
Pérez, Juan: 270
Pichardo, Gregorio: *281*
Pichardo, Luis: *281*
Pimienta, Rafael: *187*
Pineda, Francisco: 319
Pineda, Mariano: 285, *285*
Pliego de Pérez, J.: 70
Poblete, Jesús: 285, *286*
Popoca, Vicente: *113-115*, *117*
Portilla, Santiago: *98*, *127*, 319
Portugal, Luis: 275
Posadas, Antonio: 276, *277*
Powell, T.G.: *63*, *65*, *66*, 319
Pozo, Agustín del: *147*, *189*, *191*, *211*, *213*, *237*, 273, *273*, *274*, *277*, 293, *293*

Quesnil, Alfredo: *176*
Quintana, I.: *286*
Quintas, Heliodoro: *239*

Ramírez Rancaño, Mario: 319
Ramírez, Amado: 275

Ramírez, Gonzalo: 292, *292*
Ramírez, Manuel: *283*
Ramos, Santos: *153*
Rangel, Encarnación: 211
Rangel, Modesto: *285*
Ravelo Lecuona, Renato: *122*, *126*, 319
Reina, Leticia: *63*, 319
Reyes, Bernardo: 98, *98*, 99, 101, 143, *156*, 157, *157*, 167, 170, 171, 173, *173*, *174*, 177-179, 319
Reyes, Lázaro: 287, *287*
Reyes, Rodolfo: 143
Ricard, Robert: *47*, 319
Riley, Michael: 44
Robles Domínguez, Alfredo: 92, *99*, 101, 102, *113*, 130, *130*, 131, *131*, 143, *143*, 144, *144*, *145*, 146, *146*, 147, *147*, 148, *148*, 149, *149*, 151, *151*, *152*, 172, 201, 229, 311, 312
Robles Domínguez, Gabriel: *99*, 101, *112*, *146*, 151, *152*, *154*, *181*, 200, 203, *203*
Robles Domínguez, hermanos: 101, 157, 202
Robles, Carlos: 225
Robles, Juvencio: 230, 231, *231*, *232*, 233, 235, 238, 240, *240*, 241, *241*, 242, 245, 252, 270, *277*, 290, *292*
Robles, Vito Alessio: *278*
Rodríguez García, Martha: *106*, *107*, 319
Rodríguez Lazcano, Catalina: *57*, 319
Rodríguez O., Jaime E.: 320
Rodríguez, Alberto: *295*
Rodríguez, Braulio: *191*
Rodríguez, Eustaquio: *191*
Rodríguez, Félix: *272*
Rodríguez, Jaime: 315
Rojas, Javier: *92*
Rojas, Ricardo: 287, *287*
Romero Ibarra, María Eugenia: 320
Rosenblat, Ángel: *45*, 320
Rovelo, José: 289, *289*
Rueda, Policarpo: *205*
Rueda, Salvador: 17, *78*, *83*, *86-89*, *91-93*, *133*, 314, 320
Ruiz de Velasco, familia: 233
Ruiz de Velasco, Felipe: *147*, *152*, *168*, *174*, *191*, 264
Ruiz de Velasco, hermanos: 231, 264, *265*
Ruiz de Velasco, Tomás: *131*, 230, *230*, 264, *265*, *265*
Ruiz Estrada, A.: *202*
Ruiz, Cándido: *168*
Ruiz, Carlos: *191*
Ruiz, José Trinidad: 118, 188, 191, 192, 204, 212, 244, 274, 280
Ruiz, Lorenzo: *283*

Sala, Miguel: *243*
Salazar, Amador: 103, *104*, 105, 183, 240, 248, 251, 275
Salazar, Narciso: *149*
Salazar, Ramón: *284*
Salazar, Rodolfo: 288, *289*
Salgado, Adalberto: 285
Salgado, Jesús H.: 122, 123, *156*, *173*, *193*, 214, *214*, 224, 239, *242*, 244, 249, 263, 274, 285, 295
Salinas, Miguel: 167
Salvador Garay, Manuel: *193*
Sánchez Azcona, Juan: 92, *99*, 101, *126*, 143, 163, *164*, 172, *172*, 202, *214*, 216, *216*, *227*, *245*, *270*, *277*, *278*, 287, *288*, *289*
Sánchez, Alberto: 276, *276*
Sánchez, Cleofas: 289, *289*
Sánchez, Delfín: 70, *277*

Sánchez, Gabriel: 288, *289*
Sánchez, José: *193*, 277, *277*
Sánchez, Timoteo: 109
Sánchez, Trinidad: *195*
Santa Anna, Antonio López de: *véase* López de Santa Anna, Antonio
Santibáñez, Felipe: *229*
Sarabia, Juan: 124, *155*, *164*, 218, 256, *257*, *259*
Sarmina, Sixto: 70
Scott, James C.: *40*, 320
Sedano, Antonio: *93*, 101, 284, *284*
Serdán, Aquiles: 102, *102*, 287
Serna, Crispín de la: 282, *283*
Simón, Antonio: 242
Solís, Emilio: 288, *289*
Sordo, Manuel: *240*
Sotelo Inclán, Jesús: 79, *94*, *107*, 321
Sotelo, José: 288, 289, *289*
Soto, Francisco: *296*
Sotomayor, Manuel: 288, *289*

T. de Fernández, Concepción: 70
Tamáriz, Modesto: 293
Tapia, Ignacio: 295, *296*
Taracena, Alfonso: 321
Taylor, William B.: *57*, *59*, 321
Tepepa, Gabriel: 94, 103-105, 109, 113, 114, 121, 125, *125*, 131, 149
Thomson, Guy P.C.: 321
Tijerina, A.: 289, *289*
Tirado, Adalberto: *193*
Tobler, Hans Werner: *91*, 321
Torre, Tomás de la: 70
Torres Burgos, Pablo: 27, 94, 101, 103-105, 113
Toscano, F.: *147*
Trejo, Bruno: 297
Tutino, John: *26*, 40, *40*, 41, *41*, *54*, *58*, *58*, *60*, *63*, 134, 321

Urquidi, Manuel: *289*
Urrutia, Martín: *256*

V. viuda de Rivadeneyra, Ana: 285
Valle, Luis: *110*, *113-117*, *127*
Vallejo, Galdino: 294, *295*
Valverde, Sergio: 321
Van Young, Eric: *59*, 321
Vanderwood, Paul: *127*, *128*, 321
Vaquero, Felipe: 243, 245
Vasconcelos, José: 127, *128*
Vázquez Gómez, Emilio: *119*, *127*, *128*, *147*, *151*, *154*, 155, *155*, *156*, *164*, *205*, 274, *275*, 288
Vázquez Gómez, Francisco: *99*, *117*, *127*, *154*, 155, *155*, *164*, 322
Vázquez Gómez, hermanos: *99*, *126*, 155, *155*, 156, *156*, *164*, 183
Vázquez Mantecón, Verónica: *50*, 318
Vázquez, Camilo: *233*
Vázquez, Josefina Zoraida: 316
Vázquez, Lorenzo: 103, *104*, 106, 109, 183, 211, 232, 234, 240
Vázquez, Nicolás: 275
Vázquez, Paulino: *233*
Vega, Pascual: *261*
Velázquez, Domingo: 291
Velázquez, Manuel: *249*
Vélez de Goribar, E.: 70
Vélez, Benigno: *294*
Vélez, Eduardo: 270
Vélez, Francisco A.: 70
Vicario, Martín: *185*, *187*, *188*
Villa, Enrique: *250*
Villa, Francisco: *119*
Villamar, Aniceto: 247
Villanueva, Delfino: *294*

Villarreal, Antonio I.: 124, *155*, *164*, *202*, 218, *229*
Villavicencio, Agustín: *289*
Viñas, Carlota viuda de: *271*
Vital, Manuel: *192*, 272

Warman, Arturo: 322
Wobeser, Gisela von: 17
Wolf, Eric R.: 20, *20*, 322
Womack Jr., John: *31*, 72, 79, 81, *82*, *84*, *89*, *89*, *94*, *95*, *101*, *103*, *106*, *107*, *114*, *118*, *122*, *126*, *128*, *129*, 205, 225, 247, *247*, *250*, 322

Yermo, Gabriel: *58*

Zaleta, R.: *167*
Zamorano, Luis: 272
Zapata, Emiliano: *passim*
Zapata, Eufemio: 106, 116, 122, *148*, 171, 173, 183, 200, 237, 238, *238*, 239, 249, 251, 252, 274, 276, 278, 293
Zaragoza, Alfonso: 241, *242*
Zavala, Lorenzo de: 66
Zenteno, Benigno: *véase* Centeno, Benigno
Zubarán, Rafael: *99*

Los orígenes del zapatismo
se terminó de imprimir en noviembre de 2001, en los talleres de
Corporación Industrial Gráfica, S.A. de C.V. Francisco
Landino 44, col. Miguel Hidalgo, 13200 México, D.F.
Se imprimieron 1 000 ejemplares más sobrantes para reposición.
Tipografía y formación: Baphomet y Cía.
La Dirección de Publicaciones de El Colegio de México
estuvo a cargo del cuidado de la edición.

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

El zapatismo, ha sido reconocido como uno de los movimientos sociales más importantes en la historia reciente de nuestro país. Dio lugar a una de las figuras mas conocidas de la Revolución Mexicana –su líder Emiliano Zapata–, y en los territorios que estuvieron bajo su dominio, los zapatistas fueron capaces de realizar uno de los experimentos más radicales de reformas sociales que haya tenido lugar en nuestra historia: fue el único de los movimientos populares revolucionarios que llevó a cabo una reforma agraria que eliminó totalmente –al menos temporalmente– a la oligarquía terrateniente y transfirió la propiedad de la tierra, aguas y bosques a los pueblos, familias e individuos para que decidieran libremente cómo trabajarla. Al mismo tiempo, estableció un gobierno y una administración en la región bajo su control en la cual se aplicó una práctica que buscó resolver las necesidades de los pueblos y restituirles sus libertades a través de un proceso impulsado, sancionado y vigilado por el Cuartel General zapatista y por instancias y disposiciones que expresaban una de las primeras muestras de un Estado benefactor, al servicio de la mayoría de la población. El proyecto zapatista, a pesar de haber sido derrotado, fue uno de los factores decisivos que explican el curso y el resultado de la Revolución Mexicana. En este libro se analizan los orígenes de ese movimiento: la conjunción de problemas agrarios de larga duración, demandas de participación política por sectores medios y populares excluidos durante el porfiriato, división entre las élites gobernantes y una tradición de lucha y resistencia de los pueblos de la región conocida como *El Sur*, factores todos que confluyeron en la rebelión zapatista que se incorporó al llamado insurreccional de Madero en 1911. Y explica también el proceso de maduración interna, de radicalización y de ruptura que tuvo con Madero en el verano de ese mismo año, a través del cual el zapatismo adquirió una identidad y un proyecto político propio –el Plan de Ayala– con el cual buscarían tomar el poder nacional y organizar al país. Describe también las diferencias y conflictos al interior del zapatismo y la compleja relación que tuvo con la población civil de los lugares que estuvieron bajo su dominio.

ISBN 968-12-1033-6

EL COLEGIO DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS